

porque la ley no ha hecho salvedad alguna al respecto, dejando que rijan los principios generales de nuestro derecho procesal, (Manual, t. 1, p. 150, t. 3, p. 346; Miranda, op. cit., p. 375). No ocurre lo propio en la legislación extranjera donde los recursos extraordinarios no tienen efecto suspensivo, (véase Borsari, op. cit., comentario al art. 32; Mattiolo, op. cit., t. 1, p. 741, núm. 823; Mortara *Manual*, t. 2, p. 594).

Si existe estipulación de multa esta será depositada hasta la decisión del recurso. Si se declarase la nulidad, será devuelta al recurrente: en caso contrario, se entregará a la otra parte (art. 794 cód. cit.). Conocerá de los recursos cuando tengan lugar, el tribunal que sea superior inmediato del juez que hubiera conocido del asunto, si no se hubiese sometido a árbitros (art. 795 cód. cit.).

Cuando se hubiese comprometido un negocio, pendiente en última instancia, el fallo de los árbitros causará ejecutoria (1) (art. 796 cód. cit.).

Contra la sentencia de los amigables componedores no se dará recurso alguno, salvo la acción de nulidad (2) proveniente

lidad no es manifiesta y debe presumirse válido, (t. 105, p. 248; t. 115, p. 274). Lo mismo puede decirse de la sentencia y sin embargo no es ejecutable si no está consentida. El distingo nos parece, pues, inadmisibile.

(1) Eso se refiere solo a los recursos ordinarios de apelación y nulidad; pero no al extraordinario de nulidad del art. 792, cód. cit.

(2) ¿Cuál es el carácter de esta acción? ¿Ante qué juez debe deducirse?

La jurisprudencia de nuestros tribunales ha declarado que se trata de una acción sometida a los trámites del juicio ordinario y que debe deducirse ante el juez de primera instancia. Se olvida para llegar a esa solución: 1.º que el empleo de las palabras «acción de nulidad» no es motivo suficiente para desnaturalizar el juicio de amigables componedores, prolongando indefinidamente su tramitación, cuando en el de árbitros se ha establecido un procedimiento rápido: 2.º que es de buena interpretación, en el silencio de la ley, recurrir a los principios que regula una situación análoga, y que lo natural sería aplicar la regla de los arts. 792, 793 cód. de proc. civ.; 3.º que existe un texto legal que prevé el caso: ley 2, tit. 26, part. 3.ª, como lo observa Castro, op. cit., p. 96; 4.º que las leyes han querido establecer el procedimiento consagrado por nuestros tribunales, se han explicado claramente al respecto, (art. 33, cód. de proc. italiano). Téngase presente que en dicho código cuando se declara la nulidad del laudo la autoridad judicial se pronuncia también sobre el fondo de la cuestión.

En el fallo que criticamos el juez, doctor Damjanovich, fundó su disidencia en forma análoga a la sostenida por nosotros, diciendo: «Aunque es cierto que los términos del art. 808 del cód. de proc. civ. que dice:

de haber fallado fuera del término o sobre puntos no comprometidos, la que podrá entablarse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se hizo saber el laudo (art. 808, cód. cit.).

La cám. civ. 1.<sup>a</sup> ha declarado erróneamente que procede la acción aún después del plazo fijado por la ley, si el laudo debe considerarse inexistente (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 30). No era necesario, en el caso, violar la ley para llegar a la solución recordada. Al pedirse la ejecución del laudo el juez habría declarado su inexistencia, (conf. Miranda, op. cit. p. 388).

---

«contra la sentencia de los amigables componedores, no se dará recurso alguno, salvo la acción de nulidad», han dado y dan en efecto lugar a dudas, haciendo creer que la palabra acción está tomada aquí en oposición a recurso, la redacción misma relaciona una y otra cosa puesto que hablando del recurso, aunque los niega agrega salvo la acción. El principal objeto del artículo ha sido consignar la regla y la excepción.

«Ahora bien, que la ley haya, si se quiere, tenido motivos especiales para llamar acción al recurso que dejaba a salvo, ¿importa necesariamente que ese término ha de tener más consecuencia que las determinadas en la misma ley, o que en la duda corresponda la interpretación extensiva, en lugar de la restrictiva, de manera que se vuelva sobre la jurisdicción arbitral ya reglamentada y sobre los recursos correspondientes que el legislador ha tenido la mente de consignar en estos casos? Será la acción de nulidad un recurso de nulidad con las especialidades establecidas y nada más.

«Desde que pueda haber otro juicio sobre la validez de la sentencia, desde que de este pueda depender la ejecutoria en el hecho, y sea cual fuere la denominación que se usara, hay un recurso. Y hasta a la nulidad para no ser confundida con los otros recursos lo dispuesto en los arts. 793 a 795 cód. cit.

«El recurso de nulidad es de una naturaleza especial y su dificultad obsta hasta cierto punto a la precisión del lenguaje, como puede observarse en los arts. 789 a 792.

«Lo esencial es no comprometer la nulidad que salva la ley y que los interesados se han reservado expresamente y en toda forma, en el compromiso de fa. 47.

«Si la voluntad de las partes tan respetable en estos casos se armoniza con los propósitos de la ley, sólo queda a decidir si la cámara debe conocer de la gestión.

«Y así lo entiende el infrascripto por las consideraciones antes expuestas, y por los precedentes, de la cámara de lo comercial, cuyas sentencias ha tenido a la vista y cuyos fundamentos acepta en general, t. 2, p. 596». (Fallos de la cám. civ., t. 5, p. 577).





**CODIGO DE PROCEDIMIENTO**  
**EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL**  
**DE LA**  
**CAPITAL DE LA REPUBLICA**





# CODIGO DE PROCEDIMIENTO

## en materia civil y comercial de la capital

Sanccionado en agosto 18 de 1880

Promulgado en agosto 20 de 1880 (a)



### TITULO PRIMERO

#### Disposiciones Generales

**Artículo 1.** La jurisdicción conferida a los tribunales de justicia de la provincia es improrrogable. Exceptuase la jurisdicción territorial que podrá ser prorrogada de conformidad de partes.

(a). *El código de procedimiento civil y comercial que publicamos, fué sancionado para la provincia de Buenos Aires por ley de agosto 20 de 1880. Más tarde, federalizada la ciudad del mismo nombre, entró a regir en ella de acuerdo con la ley del congreso núm. 1893, cuy. art. 318 preceptúa: "Los tribunales de la capital se regirán por las leyes de procedimientos civiles, comerciales y criminales que actualmente rigen para los de la provincia de Buenos Aires, en cuanto sean compatibles con la presente ley y hasta tanto se dicten por el congreso las que hayan de subrogarlas".*

*Nuestra edición ha sido cuidadosamente depurada de los errores contenidos en otras, aparecidas con anterioridad, para lo que nos hemos valido de la edición oficial. Sancionado el código de la provincia, el P. E. de la misma, designó por decreto de agosto 20 de 1880, para que revisasen y corrigiesen la edición oficial, a los doctores Antonio Bermejo y Mariano Varela, que eran a la sazón diputado y senador, respectivamente, de la legislatura. Huelga hacer presente que el doctor Bermejo había tenido una destacada actuación en la discusión de aquel cuerpo de leyes.*

*El congreso, en su carácter de legislatura local, ha dictado después de la sanción del código numerosas leyes sobre materia procesal, las que nos ha parecido útil insertar al final en un Apéndice.*

T. J.

**Art. 1.** — Los editores del cód. de proc. civ. han modificado por su cuenta esta disposición legal escribiendo "capital" donde el legislador dijo "provincia". En todas las disposiciones donde se repite lo mismo, hemos restituido la palabra que corresponde.



2. No podrá tampoco ser delegada dicha jurisdicción por unos jueces a otros. Estos deberán conocer y decidir por sí mismos las causas de su competencia sin que esto obste a que, siempre que sea necesario, puedan comisionar a los jueces de otras localidades para diligencias determinadas.

3. Toda demanda debe interponerse ante juez competente y siempre que de la exposición de los hechos resulte no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio, sin más actuaciones, mandando que el interesado ocurra ante quien corresponda.

4. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa.

Si éstas fuesen varias, el del lugar donde esté situada cualquiera de ellas, con tal que allí mismo tenga su domicilio el demandado. Y no concurriendo ambas circunstancias, el juez competente será el de la situación de la cosa de mayor valor, según las últimas evaluaciones para el pago de la contribución directa.

Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se hallen o el domicilio del demandado, a elección del demandante.

Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, y a falta de éste, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, con tal que el demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente.

El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.

5. En materia de garantía, el juez competente será el que lo sea para conocer de la demanda contra el deudor principal.

Cuando se ejerciten acciones respecto a la gestión de los tutores o curadores, el juez competente será el que lo sea para el discernimiento de la tutela o curatela, aunque los bienes administrados estén fuera del lugar que abraza su jurisdicción.

La mudanza de domicilio o residencia del menor o inca-

---

Art. 3. — Véase ley núm. 9667, art. 1 y a.; además, ley núm. 11.110, art. 39; ley núm. 1565, art. 95; ley núm. 1420, art. 22.



paz, o la de sus tutores o curadores, no altera la competencia del juez.

6. Las actuaciones judiciales deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

Son días hábiles todos los del año, menos los exceptuados por ley.

7. El juez puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere justa causa que lo exija.

Será justa causa, a los efectos del presente artículo, el riesgo de quedar ilusoria una providencia judicial, o de frustrarse por la demora alguna diligencia importante al derecho de las partes.

8. Todo litigante tiene el derecho de valerse o no de la dirección de letrado para defenderse y ejercitar en juicio sus acciones.

9. Tiene igualmente todo litigante el derecho de comparecer personalmente ante cualesquiera jueces o tribunales, u hacerse representar por cualquiera persona hábil, mayor de edad, sea o no procurador recibido.

10. Toda persona que litigue, sea por su propio derecho, sea en representación de tercero, debe constituir en el primer escrito que presente, un domicilio legal dentro del pueblo en

Art. 6. — Son días hábiles todos los del año, menos los exceptuados por la ley. Estos últimos son: 1º, los de feria anual de los tribunales, que comprende todo el mes de enero; 2º, los de la semana santa; 3º, los de carnaval 4º, los domingos; 5º, el de la ascensión del señor; el 19 de marzo, el 25 de mayo, el "corpus christi", el 29 de junio, el 9 de julio, el 15 y el 30 de agosto, el 12 de octubre, el 1 y 11 de noviembre, el 8 y 25 de diciembre; (art. 1.º de la ley de la provincia de Buenos Aires de 12 de noviembre de 1864; ley orgánica de los tribunales de la capital, art. 318; decretos del gobierno nacional de 31 de enero de 1912 y 4 de octubre de 1917 y reglamento de la cá. civil de la capital de 7 de febrero de 1882, art. 2º; canon 1247 y decretos del poder ejecutivo nacional de enero 31 de 1912 y 14 de diciembre de 1917, inserto en el "Boletín Oficial" del 24 del mismo mes y año, núm. 7172. Téngase en cuenta, sin embargo, que el 19 marzo no figura entre las fiestas de ambos preceptos establecidas por la iglesia romana, y que corpus christi fué suprimido por el canon citado en los casos en que no cayese en domingo. Sin embargo, en la capital de la república esos dos días son feriados como todos los de fiestas nacionales que decreta el poder ejecutivo, según acordada de las cámaras civiles de fecha julio 7 de 1919; véase sentencia de la cá. civ. 1.ª, de agosto 7 del citado año.

Art. 9. — Véase ley núm. 10.996, sobre ejercicio de la procuración.



que resida el juzgado, si es en la campaña, y en la capital, dentro de un radio de veinte cuadras del asiento del juzgado.

11. Los jueces exigirán de oficio el cumplimiento del requisito expresado en el artículo anterior y no darán audiencia a los contraventores. Si la diesen, al primer reclamo que se les haga la exigirán sin más trámite, perdiendo en este caso sus costas el escribano actuario.

12. El domicilio, una vez constituido, se reputará subsistente para todos los efectos legales, mientras los interesados no hayan designado otro.

13. La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que invista.

14. Los apoderados o procuradores acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la competente escritura de poder.

15. Una vez aceptado el poder por el hecho de presentarse a ejercitar el mandato, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes imponen al mandatario.

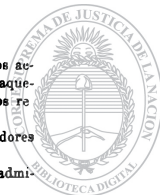
En los casos de condenación en costas, los apoderados o procuradores de la parte condenada sólo responden de las causadas en la actuación del juicio, pero no de los honorarios del abogado, peritos o procurador de la parte vencedora, a menos que expresamente se hubiesen obligado a ello.

Los apoderados y procuradores están obligados a seguir el juicio mientras no hayan cesado legalmente en el cargo.

16. Mientras continúe el apoderado o procurador en su cargo, los emplazamientos, citaciones, notificaciones que se hagan, incluso la de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hiciesen al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste.

17. El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera que sean sus términos, se entiende comprender la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias a que haya lugar.

Se entenderá también que comprende la facultad de inter-



venir en los incidentes de lo principal y ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos para los cuales la ley requiera facultad especial, o los reservados expresamente en el poder.

18. La representación de los apoderados o procuradores cesa:

- 1° Por revocación expresa del poder, luego que sea admitida judicialmente;
- 2° Por renuncia;
- 3° Por haber terminado la personalidad con que litigaba el poderdante;
- 4° Por haber concluido el pleito para el que se le dió el poder;
- 5° Por muerte o inhabilidad del poderdante o del apoderado.

19. En caso de revocación hecha por el poderdante, deberá éste constituir otro apoderado o comparecer por sí mismo sin necesidad de citación. No haciéndolo así, la otra parte podrá pedir, y el juez deberá mandar, que el juicio se continúe en su rebeldía.

20. En caso de renuncia del apoderado, deberá continuar sus gestiones hasta que haya vencido el término señalado al poderdante para reemplazarlo, bajo pena de daños y perjuicios.

Si al vencimiento del término señalado no compareciere el poderdante, por sí o por medio de otro apoderado, el juicio continuará en su rebeldía en la forma del artículo anterior.

21. De toda petición o escrito de que deba darse traslado, así como de los documentos con que se instruya, deberá el que los presente acompañar en papel simple y bajo su firma tantas copias cuantas sean las personas con quienes litigue.

Esas copias se entregarán a la otra parte al notificarle la providencia que recaiga. Si no se exhibiesen las copias, el secretario no recibirá el escrito, produciendo el efecto de no presentado y autorizando en su caso el procedimiento en rebeldía.

22. Si la providencia de traslado no estuviese prescripta en las disposiciones que esta ley de enjuiciamiento establece para

Art. 22. — El último apartado supone la existencia de secretarios a costas, que no existen en la capital de la república, y se refiere a pesos de la antigua moneda de la provincia de Buenos Aires, en que un peso equivale a cuatro centavos.



la substanciación de los juicios, la parte que hubiese presentado el escrito, de que el juez o tribunal corra traslado, deberá presentar dicha copia en secretaría dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación. Pasado este plazo se sacará por el secretario a costa del que haya presentado el escrito, quien deberá pagar cinco pesos por llana.

**23.** Las copias a que se refiere el art. 21, deberán ser entregadas bajo constancia escrita en el acto de notificarse la providencia de traslado; pero cuando la notificación se hubiese hecho por medio de cédula fijada en el domicilio del emplazado, éste podrá reclamar la copia cuando lo creyere conveniente, sin perjuicio de correr el término desde la notificación.

**24.** Todo traslado que no tenga un término especialmente fijado por esta ley, deberá evacuarse en el plazo de seis días.

**25.** Cuando un escrito o diligencia sea suscrito a ruego del interesado, el escribano o secretario deberá certificar que el firmante, cuyo nombre expresará, ha sido autorizado para ello a su presencia.

**26.** Los autos originales no se entregarán a los litigantes; cuando éstos quieran examinarlos, podrán hacerlo en la oficina del actuario.

**27.** Los jueces permitirán, sin embargo, que los autos sean sacados de la oficina, bajo la responsabilidad de los abogados y sin necesidad de petición escrita en los casos siguientes:

1° Para alegar de bien probado;

2° Cuando se trate de operaciones de contabilidad muy complicadas, quedando la calificación al arbitrio del juez sin más recurso;

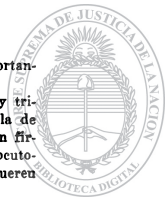
3° En los juicios testamentarios, cuando se trate de hacer la cuenta de división o partición.

**28.** En el caso del primer inciso del artículo anterior, se observará lo dispuesto en el art. 213.

Ocurriendo algunos de los que se mencionan en los incisos 2° y 3°, el juez designará el término por el cual deben ser

---

Art. 24. — Véase en el Apéndice la ley núm. 4128 sobre reformas al código de procedimientos en lo civil de 3 de octubre de 1907, art. 5.



entregados los autos, atendiendo a la mayor o menor importancia de las operaciones a practicar.

29. Las providencias serán dictadas por los jueces y tribunales, y autorizadas por sus secretarios con la fórmula de "ante mí". En los juzgados inferiores serán firmadas con firma entera, si fuesen sentencias definitivas o autos interlocutorios con fuerza de definitivos y con media firma, si fueren providencias de mera substanciación.

En la suprema corte y cámaras de apelación, las sentencias definitivas serán firmadas por todos los jueces con firma entera: los autos interlocutorios con fuerza de definitivos con media firma, y las demás providencias con media firma de sólo el presidente.

30. No será necesaria la asistencia de los secretarios a las audiencias en que las partes informen "in voce", debiendo llamárseles solamente en el caso de ser necesario consignar algún hecho importante para la resolución de la causa.

31. Las notificaciones de las providencias, salvo las que se expresarán, deberán hacerse en la secretaría del juzgado o tribunal. A este efecto el juez designará dos días de la semana que no sean consecutivos, en los que todo litigante estará obligado a concurrir a la secretaría.

A los efectos de este artículo, cada secretario estará obligado a llevar un libro que colocará en lugar visible y en el que las partes podrán asentar su firma con indicación de fecha, para acreditar en cualquier tiempo su comparecencia en la oficina.

32. Toda providencia se considerará notificada desde el primero de los días designados subsiguiente a aquel en que fué dictada, debiendo el secretario sentar nota comprobativa de la asistencia o inasistencia del interesado y corriendo el expediente en su estado.

33. Serán notificadas en el domicilio de los litigantes:

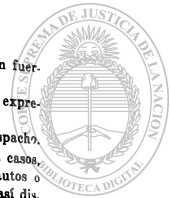
1º La providencia de emplazamiento de la demanda;

2º La que ordene absolución de posiciones;

3º El auto de prueba;

Art. 29. — Se refiere a la suprema corte de la provincia de Buenos Aires y no a la corte federal. Es aplicable lo dicho a todos los casos análogos.





4° Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales;

5° Las demás providencias de que se haga mención expresa en esta ley.

Los funcionarios judiciales serán notificados en su despacho.

34. Las notificaciones deben ser practicadas en estos casos, dentro de veinticuatro horas después de dictados los autos o providencias o antes, si el juez lo ordenare, o estuviere así dispuesto para casos determinados.

35. En la suprema corte y cámaras de apelación, las notificaciones serán diligenciadas por los ujieres.

36. Cuando las notificaciones se hiciesen en la oficina se extenderán en el expediente, pudiendo la persona a quien se hagan sacar copia de la providencia.

37. La notificación será firmada por el actuario y por el interesado. Si éste no supiere o no pudiese firmar, lo hará a su ruego un testigo. Si no quisiese firmar, lo harán dos testigos requeridos al efecto por el actuario, no pudiendo servirse nunca para ello de los dependientes de su oficina.

38. Si la notificación se hiciere en el domicilio del litigante, el actuario llevará por duplicado una cédula en que esté transcrito el auto que va a notificar, y después de leerla íntegra al interesado, le entregará una de las copias y al pie de la otra, que se agregará al expediente, pondrá constancia de todo con expresión del día, hora y lugar en que se hubiese practicado la diligencia, observando respecto de la firma, lo prescrito en el artículo precedente.

39. Cuando el actuario no encuentre a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a cualquiera persona de la casa empezando por las más caracterizadas, y a falta de ellas a cualquier vecino que sepa leer, prefiriendo los más inmediatos, y procediendo en todos los casos en la misma forma del artículo anterior. Si el vecino requerido se negase a recibir la cédula, será ésta fijada por el actuario en la puerta del domicilio constituido por el litigante.

---

Art. 25. — Véase nota al art. 29.

Art. 38. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 1 y 2.

Art. 39. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 2.



40. Toda notificación que se hiciere en contravención a lo que queda prescripto será nula, y el actuario que la practicase, a más de responder de los perjuicios que cause a las partes, incurrirá en una multa de 500 pesos por la primera vez, de 1000 por la segunda, perdiendo el empleo en caso de nueva reincidencia.

Sin embargo, siempre que resulte de autos haber tenido la parte noticia de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviera legítimamente hecha, sin que por esto quede relevado el escribano de la responsabilidad establecida en la primera parte de este artículo.

41. Los términos judiciales empezarán a correr desde el emplazamiento, citación o notificación. Si fuesen comunes, desde la última notificación. No se contará en ellos el día en que se practiquen esas diligencias.

Tampoco se contarán los días inhábiles.

42. Serán prorrogables los términos que no estén expresamente declarados perentorios o fatales.

43. Para otorgar la prórroga es necesario:

1° Que se pida antes de vencer el término;

2° Que se alegue justa causa a juicio del juez, contra cuya apreciación no se dará recurso alguno.

44. Las prórrogas que se concedan en ningún caso podrán exceder del término prorrogado.

45. Transcurridos los términos legales y sus prórrogas, a la primera rebeldía se declarará, sin más substanciación, perdido el derecho que hubiese dejado de usar la parte interesada, continuándose la tramitación del juicio según su estado.

Si el término fuese de los declarados perentorios, se tendrá por decaído el derecho por su solo transcurso.

La rebeldía podrá acusarse verbalmente ante el actuario, quien asentará en los autos la nota correspondiente, firmándola junto con el interesado.

46. Serán perentorios los términos señalados:

1° Para oponer excepciones dilatorias;

Art. 40. — Véase nota al art. 22 y ley núm. 4128 citada, art. 2.

Art. 42. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 3.

Art. 44. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 3.

Art. 45. — Véase la ley número 4128 citada, art. 3.



2° Para interponer cualquier recurso de las providencias y resoluciones judiciales;

3° Para pedir aclaración de alguna sentencia o que se cumplan las omisiones que en ella se hubiesen cometido;

4° Cualesquiera otros que por expresa disposición de la ley tengan el carácter de improrrogables o perentorios.

47. Las apelaciones de las providencias judiciales podrán concederse en ambos efectos, devolutivo y suspensivo o sólo en el devolutivo y también libremente o en relación.

48. Procederán en ambos efectos en todos los casos en que no esté expresamente prevenido que se admitan en uno solo, y procederán libremente, siempre que no esté prevenido que se otorguen en relación.

49. Los pleitos se verán y decidirán en lo posible por el orden en que se hayan puesto en estado.

Sólo se dará preferencia a los negocios urgentes y que por derecho deban tenerla.

50. Los jueces superiores e inferiores verán por sí mismos los autos. Las audiencias serán siempre públicas.

51. Los jueces y cámaras de apelación pasarán mensualmente a la suprema corte para su publicación una estadística detallada, indicando el número de causas pendientes y el de las sentencias definitivas e interlocutorias que hayan dictado, con expresión del nombre de las partes y de la naturaleza de la causa.

52. Los jueces y tribunales tienen el deber de mantener el decoro y buen orden en los juicios, pudiendo imponer al efecto, correcciones disciplinarias a los litigantes, abogados y funcionarios que intervienen en aquellos, por las faltas que cometieren, ya sea contra su dignidad en las audiencias o alegatos, ya sea contra su autoridad, obstruyendo el curso de la justicia en daño de las partes.

53. Se entenderá corrección disciplinaria:

1° El apercibimiento o prevención;

2° La reprensión;

---

Art. 51. — Se refiere a la suprema corte de la provincia de Buenos Aires, y, por consiguiente, no es aplicable en la capital de la república. Lo mismo cada vez que en este código se habla de corte.



3º La multa, que no podrá exceder de 5000 pesos o la de suspensión hasta diez días, en caso de no ser satisfecha;

4º La suspensión por un término que no podrá pasar de un mes.

54. La multa o detención se impondrán con sujeción a lo dispuesto en los respectivos reglamentos de los juzgados y tribunales.

55. Si el interesado reclamase, se le oirá breve y sumariamente con apelación para ante el superior inmediato, y sin recurso alguno, cuando la corrección sea impuesta por la suprema corte.

56. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, los tribunales mandaràn testar o inutilizar toda frase o escrito concedido en términos indecorosos u ofensivos.

57. Los jueces y tribunales podrán para mejor proveer:

1º Decretar que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes;

2º Exigir confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión y no resulten probados o cualesquiera explicaciones que juzguen conducentes;

3º Ordenar cualquier reconocimiento, avalúo u otra diligencia pericial que reputen necesaria;

4º Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito, hallándose en estado.

58. No es permitido a los jueces negarse a administrar justicia, ni retardarla, ni separarse del orden que la ley establece, siendo responsables, hacia los individuos, de toda transgresión a ese respecto.

59. El juez debe siempre resolver según la ley. Nunca le es permitido juzgar del valor intrínseco o de la equidad de la ley.

Las primeras leyes que debe observar y aplicar, son las constituciones de la nación y de la provincia.

---

Art. 59. — El orden de aplicación de las leyes está establecido por el art. 31 de la constitución nacional. La constitución de la provincia de Buenos Aires sólo será aplicable en el raro caso, en que pueda serlo otra ley del mismo origen que regula una relación privada.



60. El juez debe interpretar la ley según su ciencia y conciencia, con relación al caso que debe decidir.

61. El juez que se niegue a fallar, so pretexto de silencio, obscuridad o deficiencia de la ley, incurre en la responsabilidad del artículo 58.

62. Cuando ocurra negocio que no pueda resolverse ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se acudirá a los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de estos, a los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

63. Toda resolución definitiva o interlocutoria que decida un artículo, deberá ser fundada con arreglo a las disposiciones precedentes, bajo pena de nulidad.

64. Los jueces deberán procurar, en cuanto sea compatible con el ejercicio de sus atribuciones, que los litigantes pongan término a sus diferencias por medio de avenimientos amigables, y a ese efecto tendrán la facultad de convocarlos a su presencia en cualquier estado del juicio, siempre que crean posible conseguir aquel objeto.

65. Queda abolido absolutamente, en materia de procedimientos, el beneficio de restitución "in integrum".

## TITULO II

### Del juicio ordinario

#### SECCION I

##### Disposiciones preliminares

66. Todas las contiendas judiciales entre partes, que no tengan señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario.

67. El juicio ordinario podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar:

1° Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada sobre algún hecho relativo a

---

Art. 66. — Véase ley núm. 1565, art. 96; y ley núm. 8875, art. 20.



su personalidad, sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en juicio;

2° La exhibición de la cosa mueble que haya de pedirse por acción real y su secuestro en los casos establecidos por la ley;

3° La exhibición de un testamento cuando el solicitante sea crea heredero, coheredero o legatario;

4° Que el vendedor o el comprador, en caso de evicción, exhiba los títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida;

5° Que el socio o comunero presente los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad que tuviera en su poder.

68. También podrá pedirse por los que sean o vayan a ser parte en un juicio, que se tome declaración de algún testigo de muy avanzada edad o que se halle gravemente enfermo o próximo a ausentarse de la provincia.

69. El juez accederá a estas pretensiones, si estima justa la causa en que se funden, repeliéndolas de oficio en caso contrario. En el primer caso procederá al examen en la forma prescripta para el de testigos.

70. Fuera de los casos expresados en los artículos anteriores, no podrá pedir el demandante, absolución de posiciones, información de testigos, ni otras diligencias de prueba antes de entablar la demanda.

## SECCION II

### De la demanda

71. La demanda será deducida por escrito, y contendrá:

1° El nombre y domicilio del demandante;

2° El nombre y domicilio del demandado;

3° La cosa demandada, designándola con toda exactitud;

4° Los hechos en que se funde explicados claramente;

5° El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias;

6° La petición en términos claros y positivos.

72. El actor deberá acompañar con la demanda las escrituras y documentos en que se funde su derecho. Si no los tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad po-



nible, expresando lo que de ellos resulte, y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales.

73. Después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, o anteriores, bajo juramento de no haber antes tenido conocimiento de ellos.

74. Puede el demandante acumular todas las acciones que tenga contra una misma parte con tal: 1º, que no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra; 2º, que correspondan a la jurisdicción del mismo juez; 3º, que puedan subsanciarse por los mismos trámites.

75. Los jueces podrán repeler de oficio las demandas que no se acomoden a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan; y si no resultare claramente de ellas que son de su competencia, mandarán que el actor exprese lo necesario a este respecto.

76. Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez conferirá traslado de ella al demandado y lo hará citar y emplazar para que comparezca a contestarla dentro de nueve días.

### SECCION III

#### De la citación y emplazamiento

77. La citación se hará por medio de cédula, que se entregará al demandado, si fuere habido, juntamente con las copias de que habla el art. 21.

Si no se le encontrare, se le dejará aviso para que espere el día siguiente y si tampoco entonces se le encontrare, se procederá en todo según se prescribe en los arts. 31 a 40, respecto de las notificaciones en general.

Si el domicilio asignado al demandado por el actor fuese falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante.

78. Cuando la persona que ha de ser emplazada no se encuentre en el lugar en que se le demanda, el emplazamiento se hará por medio de orden o exhorto a la autoridad judicial del pueblo o partido en que se halle.

79. En los casos del artículo anterior, el plazo de nueve

---

Art. 70. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 4.

Art. 79. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 4.



días se ampliará según la distancia, a razón de un día por cada cuatro leguas.

Si el demandado residiese fuera de la provincia o en país extranjero, el juez fijará el plazo en que haya de comparecer, atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

80. La citación a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore, se hará por edictos publicados por quince veces en dos periódicos que el juez designará.

Esa diligencia se acreditará en el expediente con un ejemplar de cada periódico y el recibo de la imprenta respectiva.

Si vencido el término de los edictos no compareciere el citado, se le nombrará defensor que lo represente en el juicio.

81. Si los demandados fuesen varios y se hallasen en diferentes lugares, el término del emplazamiento sólo se reputará vencido a los efectos legales con respecto a todos, cuando venza para el que se encuentre a mayor distancia.

82. Si el emplazamiento se hiciere en contravención a lo prescripto en los artículos que preceden, será nulo y se aplicará lo dispuesto en el art. 40.

## SECCION IV

### De las excepciones dilatorias

83. Dentro del mismo término de nueve días en que debe ser contestada la demanda, podrá el demandado deducir excepciones dilatorias promoviendo artículo que será siempre de previo pronunciamiento.

84. Sólo son admisibles como excepciones dilatorias:

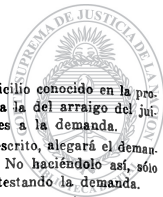
- 1.º La incompetencia de jurisdicción;
- 2.º La falta de personalidad en el demandante, en el demandado o en sus procuradores o apoderados;
- 3.º La litispendencia en otro juzgado o tribunal competente;
- 4.º Defecto legal en el modo de proponer la demanda.

---

Art. 80. — Véase la ley núm. 5062, art. 20.

Art. 83. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 4.





**85.** Si el demandante no tiene domicilio conocido en la provincia, será también excepción dilatoria la del arraigo del juicio por las responsabilidades inherentes a la demanda.

**86.** A un tiempo, y en un mismo escrito, alegará el demandado todas las excepciones dilatorias. No haciéndolo así, sólo podrá usar de las que no alegase contestando la demanda.

**87.** En cuanto a la excepción de incompetencia, sólo podrá oponerse en el tiempo y forma que las demás dilatorias.

Los jueces, al recibir la causa a prueba en las cuestiones de hecho o al correr el segundo traslado en las de derecho, se pronunciarán expresamente sobre si la causa es o no de su competencia.

Consentida esta providencia, no podrá en adelante deducirse incompetencia por las partes, ni de oficio por los jueces inferiores o superiores.

**88.** Del escrito en que se propongan las excepciones, se dará traslado por seis días al actor.

**89.** Si el juez lo estimare necesario, recibirá a prueba el artículo por el término que considere suficiente, no pudiendo exceder de la mitad del término señalado en el art. 111.

**90.** Vencido que sea el término, se pondrán en la oficina del actuario las pruebas producidas, haciéndolo saber a las partes para que dentro de dos días puedan examinarlas.

**91.** Vencido el término de los dos días o cuando no hubiese habido prueba, dada la contestación por el actor, el juez mandará poner los autos al despacho, pudiendo para mejor proveer correr un nuevo traslado por su orden.

**92.** La resolución será dictada dentro de diez días a contar desde la notificación de la providencia en que se mande poner los autos al despacho.

**93.** El juez resolverá previamente sobre la declinatoria y la litispendencia, si se hubieren propuesto estas excepciones. En caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás excepciones dilatorias.

**94.** El auto que recaiga será apelable en relación.

## SECCION V

Excepciones perentorias deducidas en forma de artículo. (a)

95. Antes de contestarse la demanda podrán oponerse previamente las siguientes excepciones:

- 1º Cosa juzgada;
- 2º Transacción;
- 3º Prescripción de treinta años.

96. El procedimiento para el trámite de estas excepciones, será el mismo que se ha establecido en la sección anterior para las dilatorias, con las siguientes modificaciones:

El término de prueba será de treinta días;

El procedimiento será escrito, como en el juicio ordinario.

97. Opuesta cualquiera de estas excepciones en forma de artículo previo, no podrá oponerse nuevamente en la contestación a la demanda, a no ser que se hubiere retirado antes de abierto el término probatorio, en cuyo caso serán a cargo del demandado las costas de la articulación.

## SECCION VI

### De la contestación

98. El demandado deberá contestar a la demanda dentro del término del emplazamiento, con la ampliación a que haya habido lugar en razón de la distancia. Si se hubiesen propuesto excepciones previas, dentro de nueve días después de terminado el artículo.

99. En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones perentorias y dilatorias, que no hubiesen sido deducidas o sometidas a prueba en artículo previo.

100. El demandado deberá además:

1º Confesar o negar categóricamente los hechos establecidos en la demanda, pudiendo su silencio o sus respuestas evasivas estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieran;

(a) Los editores corrigieron el título, agregando la palabra "previo".  
Art. 99. — Véase la ley número 4128 citada, art. 7.



2º Especificar con claridad los hechos que alegue por su parte como fundamento de sus excepciones;

3º Observar en la contestación las formas prescriptas para la demanda;

4º Presentar con el escrito de contestación las escrituras y documentos que hagan a su derecho, bajo las reglas establecidas en el art. 72 con respecto al actor.

101. En el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir la reconvencción, si se creyese con derecho a proponerla.

No haciéndolo entonces, le será prohibido deducirla después, salvo su derecho que podrá ejercitar en otro juicio.

102. Propuesta la reconvencción, o presentándose documentos por el demandado, se dará traslado al demandante, con término de nueve días.

Las excepciones y la reconvencción se substanciarán simultáneamente y en la misma forma que el asunto principal.

103. Con el escrito de contestación a la demanda, o a la reconvencción en su caso, el pleito quedará concluso para prueba, si la cuestión fuere de hecho o mixta. Si fuere de puro derecho, se correrá un nuevo traslado por su orden, con lo que quedará concluso para definitiva.

## SECCION VII

### De la prueba.

104. Siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la causa a prueba.

106. Si alguna de las partes se opusiese dentro de tercer día, el juez mandará que comparezcan ambas a la audiencia que señale, a fin de oírlas sobre el recibimiento a prueba. De lo que expongan se extenderá acta, y dentro de tres días resolverá el juez lo que crea justo.

Art. 102. — El término es de 15 días, ley núm. 4128 citada, art. 4 y fallo de las cámaras en pleno, publicado en *Jurisprudencia Argentina*, t. 5, p. 18.

Art. 104. — Véase ley núm. 3983 (Convención con Italia); y ley núm. 3192 (Tratado de Montevideo), art. 2, tratado 4.



106. De la resolución que se dicte, podrá apelarse en relación dentro de 24 horas.

107. Si las partes estuviesen conformes en que se falle la causa sin recibirse a prueba, el juez dejará sin efecto la providencia reclamada y se substanciará la causa como de puro derecho.

108. No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. Las que se refieran a hechos no articulados, serán irremisiblemente desechadas al pronunciar la sentencia definitiva.

109. Cuando con posterioridad a la contestación ocurriese o llegase al conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta tres días después del auto de prueba.

Del escrito en que se alegue se dará traslado por tres días a la otra parte, quien dentro de esos tres días podrá también alegar otros hechos en contraposición de los nuevamente alegados, si lo creyere conveniente; quedando en este caso suspendido el término de prueba hasta la ejecutoria de la providencia que los admita o deniegue.

110. Las pruebas, en el caso del artículo anterior, podrán recaer también sobre los hechos nuevamente aducidos.

111. El término ordinario de prueba no excederá de cuarenta días, si hubiere de darse dentro del municipio o pueblo donde tenga su asiento el juzgado, y se aumentará un día más por cada cuatro leguas, si hubiera de darse fuera del municipio respectivo, pero dentro de la provincia.

112. Este término podrá ser reducido, según las circunstancias del caso, pero no ampliado.

113. Cuando la prueba haya de producirse fuera de la provincia, el juez señalará el término extraordinario que considere suficiente, atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

114. Para que pueda otorgarse el término extraordinario, se requiere:

Art. 109 — Véase la ley núm. 4128 citada. art. 8.

Art. 113. — Los editores se olvidaron aquí de escribir capital, como en los arts. 68, 79, 85 y 138.



1° Que se solicite dentro de los diez primeros días después de recibido el pleito a prueba;

2° Que se expresen el nombre o la residencia de los testigos que han de ser examinados, o solamente la residencia si los hechos hubieran tenido lugar fuera de la provincia.

3° Que se expresen los documentos que hayan de testimoniarse, indicando los archivos o registros donde se encuentren.

115. Del escrito en que se pida el término extraordinario, se dará traslado a la otra parte por tres días improrrogables, transcurridos los cuales se resolverá el artículo.

Esta resolución es apelable en relación.

116. El término extraordinario correrá juntamente con el ordinario, y ni uno ni otro podrán suspenderse, sino mediante alguna causa que haga imposible la ejecución de la prueba propuesta.

117. Cuando ambos litigantes hayan solicitado el término extraordinario, las costas serán satisfechas en la misma forma que las demás del pleito. Pero si se hubiese concedido a uno sólo y éste no ejecutare la prueba que hubiese propuesto, abonará todas las costas, incluso los gastos en que incurriese la otra parte para hacerse representar, donde hubiesen de practicarse las diligencias.

Podrá también ser condenado a pagar a su colitigante una multa de cinco a diez mil pesos, salvo que apareciese no haber procedido maliciosamente.

118. Las diligencias de prueba deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del término. A los interesados incumbe urgir para que sean practicadas oportunamente; pero si no lo fueren por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados exigir que se practiquen antes de los alegatos.

119. Las diligencias de prueba deberán notificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al decreto en que se ordenen.

120. Las diferentes actuaciones de prueba se practicarán en audiencia pública, salvo cuando la publicidad sea peligrosa para

---

Art. 115. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 10.

Art. 118. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 11.

Art. 120. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 9.



las buenas costumbres, en cuyo caso el juez o tribunal deberá declararlo así por medio de un auto.

**121.** El juez asistirá siempre a las que deban practicarse fuera del juzgado, pero dentro de la ciudad donde tenga su asiento.

Exceptúase la prueba testimonial en asuntos cuya importancia no exceda de treinta mil pesos m/c., en los que será recibida por el secretario del juzgado o tribunal.

En las cuestiones por cantidad indeterminada, el juez sólo recibirá personalmente las declaraciones de testigos cuando alguna de las partes lo pidiere.

**122.** Cuando la prueba haya de practicarse fuera de la ciudad y el juez no crea necesario asistir en persona, se encargará a los jueces de las respectivas localidades, los cuales procederán con arreglo a las disposiciones de esta ley, concernientes a las pruebas.

**123.** Tanto en el caso del artículo precedente como en los de los art. 111 y 113, las órdenes o exhortos serán librados dentro del tercero día a más tardar.

**124.** Para toda diligencia de prueba se señalará el día en que deba tener lugar, y se citará a la parte contraria con un día a lo menos de anticipación.

## SECCION VIII

### De los medios de prueba

#### Capítulo I

##### De la confesión en juicio y fuera de juicio

**125.** Después de contestada la demanda hasta la citación para sentencia, podrá cada parte exigir que la contraria absuelva, con juramento, posiciones concernientes a la cuestión que se ventila.

**126.** Si antes de la contestación se promoviese algún artículo previo, podrán ponerse posiciones sobre lo que sea objeto del artículo, estando éste contestado.

---

Art. 125. — Véase la ley núm. 8172, art. 16, y ley núm. 5093,



127. El que haya de declarar será citado por cédula con un día de intervalo, bajo apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso.

128. La parte que pusiese las posiciones podrá reservárselas hasta la audiencia en que haya de tener lugar el interrogatorio, limitándose a pedir la citación del que deba declarar.

En la audiencia señalada, el interesado las manifestará y el juez hará sobre ellas el examen.

Si la parte que pidió las posiciones no compareciese sin justa causa a la audiencia señalada, y compareciese el citado, se dará por decaído el derecho de presentarlas.

En la suprema corte y cámaras de apelación, las posiciones serán recibidas por los presidentes, pero en presencia del tribunal.

129. El interrogado responderá por sí mismo de palabra, sin valerse de consejo ni de borrador alguno de respuesta, a presencia del contrario, si asistiese.

130. Las contestaciones serán afirmativas o negativas, pudiendo agregar el que las dé las explicaciones que estime necesarias.

Si la parte juzgare impertinente una pregunta, podrá negarse a contestarla, en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al sentenciar la juzgare pertinente.

131. Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzguen convenientes, con permiso y por intermedio del juez. Este podrá también interrogarlas de oficio, sobre todas las circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad.

132. Las declaraciones serán extendidas por el secretario a medida que se presten, conservando en cuanto sea posible el lenguaje de los que hayan declarado. Terminado el acto, el juez las hará leer, preguntando a las partes si tienen algo que agregar o rectificar.

133. Si agregaren o rectificaren algo se extenderá a continuación, firmando todas las partes con el juez y el secretario, y debiendo expresarse cuando ocurra, la circunstancia de no haber querido o podido firmar.

Si el citado no compareciese a declarar, o si habiendo comparecido rehusase responder o respondiere de una manera eva-



siva, a pesar del aperecibimiento que se se haga, el juez, al sentenciar, lo tendrá por confeso, si el interesado lo pidiere.

134. En caso de enfermedad del que deba declarar, el juez o uno de los vocales de la corte o de las cámaras, que sea comisionado al efecto, se trasladará, acompañado del secretario a su domicilio, donde se verificará la absolución a presencia de la otra parte, si asistiere, o del apoderado, según aconsejen las circunstancias.

135. Si al trasladarse a la casa de la parte, averiguase el juez que ha podido comparecer, diferirá el interrogatorio para la próxima audiencia, intimándole que comparezca sin más citación. En este caso, el que haya alegado falso impedimento será condenado a pagar una multa que no exceda de mil pesos.

136. Si el interesado estuviese fuera del lugar en que se sigue el juicio, las posiciones serán absueltas por su apoderado, si estuviese facultado para ello y consintiese la parte contraria.

No siendo esto posible, por cualquier circunstancia, se dará comisión al juez del pueblo o lugar donde se encuentre. Hallándose fuera del territorio de la provincia, se librará exhorto a las autoridades correspondientes.

La parte que dirige las posiciones tiene en todo caso el derecho de asistir por sí o por apoderado a la absolución.

137. No será permitido usar de este medio probatorio más de dos veces en la primera instancia y una en la segunda, a no ser que después de absueltas las primeras posiciones, se aleguen de contrario hechos o documentos nuevos, en cuyo caso se podrán poner otra vez con referencia a los hechos o documentos nuevamente aducidos.

138. La confesión extrajudicial tendrá la misma fuerza probatoria que la prestada en juicio, siempre que sea acreditada por los medios de prueba establecidos en esta ley.

No se admitirá, sin embargo, la prueba testimonial para justificar la confesión extrajudicial, sino mediando principio de prueba por escrito.

---

Art. 134. — Véase nota al art. 51.

Art. 135. — Véase nota al art. 22; los mil pesos equivalen a 40 pesos.



## Capítulo II

### De la prueba instrumental



**139.** La fuerza probatoria de las escrituras o instrumentos públicos o privados, será regida por las disposiciones de los códigos civil y de comercio, con las ampliaciones y restricciones o modificaciones establecidas en la presente ley.

**140.** Todo aquel contra quien se presente en juicio un documento privado que se le atribuya, está obligado a declarar si es o no suya la firma.

**141.** Los sucesores del firmante pueden limitarse a declarar que ignoran si la firma es o no de su causante.

**142.** Si el que fuere citado para reconocer el documento no compareciere, será citado por segunda vez con el mismo objeto, bajo apercibimiento, y no compareciendo a esta segunda citación el juez dará por reconocido el documento.

**143.** Si negase la firma que se le atribuye o declarase no conocer la que se atribuye a otra persona, deberá procederse a la comprobación del documento.

**144.** Sin perjuicio de los demás medios de prueba, podrá pedirse para la comprobación el cotejo o comparación de letras.

**145.** Pedido el cotejo, el juez convocará las partes a fin de que conengan en los documentos que deban servir para la comparación, y nombren los peritos que hayan de concurrir a la diligencia.

**146.** Los interesados deben asistir en persona, y en caso de ausencia o impedimento grave, por medio de apoderado con poder especial.

No compareciendo serán citados nuevamente, con el mismo objeto y bajo apercibimiento, y si tampoco comparecieren a esta segunda citación, el juez desechará el documento, si la falta de asistencia procede del interesado en la comprobación, o lo dará por reconocido, si procediese de la contraparte.

**147.** Si los interesados no pudieren ponerse de acuerdo en la designación de documentos para el cotejo, sólo tendrá el juez como indubitados:

1° Las firmas consignadas en documentos auténticos;



2º Los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya el que se trate de comprobar;

3º El impugnado, en la parte en que haya sido reconocido como cierto por el litigante a quien perjudique.

148. En la misma audiencia a que se refiere el artículo anterior, se hará constar el estado material en que se encuentre el documento de cuya comprobación se trate, expresando en el acta las enmiendas, entre renglonaduras o cualesquiera otras particularidades que en él se advierta. Las partes nombrarán también en ese acto los peritos que deban asistir a la audiencia en que se verifique el cotejo de documentos.

149. Convenidos o designados los documentos de cotejo, el juez señalará día para la audiencia en que deba practicarse, citando a las partes, a los peritos y a los tenedores o depositarios de dichos documentos, para que los pongan de manifiesto.

150. El juez hará por sí mismo el cotejo, después de oír las observaciones de las partes, si estuvieren presentes, y el dictamen de los peritos.

151. A falta o en caso de ser insuficientes los documentos de cotejo, podrá ordenar el juez que la persona a quien se atribuya la letra, forme un cuerpo de escritura, que en el acto le dictarán los peritos. Si se negase a hacerlo, después de reiterársele la orden bajo apercibimiento, se tendrá por reconocido el documento denegado.

152. Habrá lugar también a la comprobación en la forma prevenida, siempre que un documento público o privado, conducente a la cuestión, sea arguido de falso.

153. En tal caso serán convocadas las partes en persona, con arreglo y bajo la pena del art. 148.

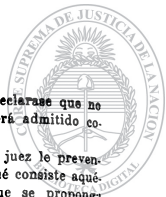
154. Reunidos los litigantes el día señalado, el juez intimará al que hubiese presentado el documento redarguido, que declare si insiste o no en servirse de él.

Si rehusase responder o dijese que no trata de hacer valer el documento, éste será desechado del proceso.

Si declarase que quiere servirse del documento, el juez interpelará a la otra parte para que declare si persiste en sostener que es falso.

---

Art. 153. — En la edición oficial se cita por error el art. 148, pues



155. Si esta parte rebusase responder o declarase que no insiste en oponer la falsedad, el documento será admitido como auténtico.

Si declarase que insiste en la falsedad, el juez le prevenirá que, dentro de tercero día, manifieste en qué consiste aquélla y exprese los hechos y circunstancias que se proponga probar.

156. De todo lo ocurrido en esta audiencia se extenderá acta, haciendo constar el estado del documento impugnado, conforme a lo dispuesto en el art. 148.

157. Del escrito que el impugnante presente, en el segundo caso del art. 155, se correrá traslado por tres días a la otra parte, que deberá evacuarlo, exponiendo también los hechos que haya de probar.

158. En seguida se mandarán recibir las pruebas ofrecidas; y si pidiese cotejo, nombrará el juez de oficio los peritos y se procederá en todo lo demás, según queda prevenido, con respecto a los documentos denegados o no reconocidos.

159. Si del documento impugnado existiere protocolo o registro, el juez podrá disponer sea traído a la vista, citando al efecto al escribano o funcionario en cuya oficina se encuentre.

160. Si de las diligencias de comprobación resultaren indicios de falsedad de sus autores, se pasarán los antecedentes necesarios al juzgado del crimen, para la conveniente investigación y castigo del delito.

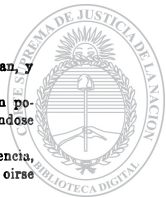
### CAPITULO III

#### De la prueba de peritos

161. Cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, se procederá al nombramiento de peritos.

162. Cada parte nombrará uno y el juez un tercero, a no ser que los interesados se pusieren de acuerdo respecto al nombramiento de uno solo.

Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán uno los que sostengan unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan. Si en este último caso los interesados no pudieren



ponerse de acuerdo, el juez insaculará los que se propongan, y el que designe la suerte se tendrá por nombrado.

163. Si los litigantes no comparecieren o no pudieren ponerse de acuerdo para la elección, la hará el juez, limitándose a un solo perito si se tratase de un objeto de poco valor.

164. Los peritos deberán tener título de tales en la ciencia, arte o industria a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su juicio, si la profesión o arte estuviese reglamentada.

165. Si la profesión o arte no estuviesen reglamentados o si estándolo, no hubiere peritos de ellos en el lugar del juicio, podrán ser nombrados cualesquiera personas entendidas, aun cuando no tengan títulos.

166. Los peritos nombrados de oficio pueden ser recusados por causas justas, hasta tres días después del nombramiento.

Los nombrados por las partes, sólo serán recusables por causas posteriores a la elección.

167. Serán causas legales de recusación las mismas por que pueden ser recusados los jueces. También serán recusados por incompetencia en la materia de que se trate, cuando los nombrados no tuviesen título.

168. Si la recusación fuese contradicha, el juez fallará proveyendo sumariamente, y de su resolución no habrá recurso; pero esta circunstancia puede considerarse por el superior al resolver sobre lo principal.

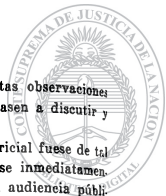
169. En caso de ser admitida la recusación, se procederá a reemplazar al perito o peritos recusados, en la forma establecida para el nombramiento.

Si fuere rechazada, todos los gastos del incidente serán a cargo del recusante.

170. Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento; y para ello, caso de no ser presentados por las partes, se les citará en la forma que esta ley establece para la citación de los testigos.

171. Si algún perito no compareciere, o si, después de haber aceptado, rehusase dar su dictamen, se procederá a nombrar otro en su lugar; y en el último caso, será condenado por el mismo juez que le hubiere conferido el cargo, a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes si éstas los reclamasen.

172. Los peritos practicarán unidos la diligencia, y las



partes podrán asistir a ella y hacerles cuantas observaciones quieran, debiendo retirarse cuando aquellos pasen a discutir y deliberar.

173. Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal naturaleza que permita a los peritos expedirse inmediatamente, podrán dar su dictamen acto continuo en audiencia pública, observándose el orden prescripto para el examen de los testigos.

174. Si fuese necesario el reconocimiento de lugares, la práctica de operaciones facultativas, u otro examen que requiera detenimiento y estudio, otorgará el juez a los peritos el tiempo que conceptúe suficiente.

175. El dictamen contendrá la opinión fundada de los peritos.

Los que estén conformes, lo extenderán en una sola declaración firmada por todos. Los disidentes lo pondrán por separado.

176. Dentro del término señalado, los peritos deberán hacer entrega del dictamen en la escribanía del actuario, quien lo hará constar expresando la fecha en diligencia, que firmará con el que haga la entrega.

177. Las partes podrán enterarse del dictamen en la oficina; y a instancia de cualquiera de ellas o de oficio, podrá el juez mandar que comparezcan los peritos a dar las explicaciones que se crean convenientes.

De la providencia del juez a este respecto, no habrá recurso alguno.

178. Siempre que los peritos nombrados tuviesen título y sus conclusiones fuesen terminantemente asertivas, tendrán éstas fuerza de prueba legal. En los demás casos podrá el

## CAPITULO IV

### De la prueba de testigos

179. Puede ser testigo toda persona mayor de catorce años, no tenga algunas de las tachas enumeradas en los artículos 206 y 207.

180. La prueba de testigos sólo se admitirá en los contras, cuyo valor no exceda de cinco mil pesos moneda corriente, o el caso en que existiere un principio de prueba por escrito. Se considera principio de prueba por escrito, todo documento o manifestación constatada en juicio, que emane del demandante, de sus antecesores o de parte interesada en la controversia, o que tuviera interés si viviera, y que haga verosímil el hecho litigioso.

181. Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, presentarán una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio, y el interrogatorio a cuyo tenor han de ser examinados.

El interrogatorio podrá reservarse por las partes, hasta la audiencia en que deban presentarse los testigos a examen.

182. Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el juez mandará recibirla, señalando, con un día a lo menos de anticipación, la audiencia pública en que haya de tener lugar el examen de los testigos, y citando a éstos por cédula en papel sellado, en la que transcribirá este artículo.

No compareciendo, el juez de oficio los condenará a pagar multa de quinientos a mil pesos moneda corriente, sin admitir excusa alguna que no haya sido alegada antes de la hora de la audiencia.

Si citados nuevamente no comparecieren, sin alegar impedimento bastante a juicio del juez, antes de la hora de la audiencia, incurrirán en el duplo de la multa y el juez podrá ordenar que permanezcan arrestados hasta que presten declaración, la que deberá ser tomada en el día o dentro de veinticuatro horas a más tardar.

Art. 180. — Véase nota al art. 22.

Art. 181. — Véase la ley número 4123 citada, art. 11.

Art. 182. — Véase nota al art. 22.





183. En caso de alegarse excusas, podrá el juez ordenar justificación breve y sumariamente, en incidente por separado. No justificándose, el testigo será condenado a pagar el valor de la multa y las costas causadas.

184. Tres días antes del señalado, se pondrá de manifiesto y se escribirá la lista de los testigos, y cada parte podrá oponerse a que se examinen los que no estén incluidos o elaborente designados en aquella.

185. Además de las causas de excusación libradas a la competencia judicial, lo serán las siguientes:

1° Si la citación fuera nula;

2° Si la cédula no hubiese sido hecha con arreglo al artículo 182;

3° Si el testigo hubiese sido citado con intervalo menor que el prescrito en el mismo, salvo lo dispuesto en el art. 187.

186. No podrán ser presentados como testigos contra una de las partes sus consanguíneos o afines en línea directa, ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente.

187. En los asuntos en que haya urgencia calificada por el juez, podrán abreviarse los términos establecidos en los artículos precedentes.

188. El día señalado se abrirá la audiencia sin la presencia de los testigos, leyendo el actuario el escrito en que se ofrezca la prueba, y el auto que la admita.

Si las partes estuviesen presentes, el juez o secretario en su caso, podrá pedirles sobre los hechos las explicaciones que sean necesarias.

189. Los testigos estarán en lugar de donde no puedan oír sus declaraciones; y serán llamados a declarar separada y sucesivamente en el orden en que vinieren inscriptos en las listas, comenzando por los del actor; salvo los casos en que el juez, en causas especiales, determine alterar aquel orden.

190. Antes de declarar los testigos prestarán juramento en la forma acostumbrada.

191. Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán interrogados:

1° Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio;

2° Si es pariente por consanguinidad o afinidad de algunas



- 3º Si tiene interés directo o indirecto en el pleito;
- 4º Si es amigo íntimo o enemigo;
- 5º Si es doméstico, dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos.

192. En el examen de los testigos se observarán las disposiciones de los arts. 131, 132 y 133.

193. Los testigos deberán dar siempre la razón de su dicho; si no la dieren el juez la exigirá. Si alguno de los litigantes interrumpiese el testigo en su declaración, podrá ser condenado en una multa que no exceda de doscientos pesos. En caso de reincidencia, incurrirá en doble multa, y podrá ser expulsado de la audiencia.

194. Los testigos, después que presten su declaración, permanecerán en la sala del juzgado hasta que se concluya la audiencia, a no ser que el juez dispusiese otra cosa, por motivos atendibles.

195. Los testigos cuyas declaraciones sean contradictorias, podrán ser careados entre sí.

196. Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de falso testimonio o de soborno, el juez podrá decretar acto continuo la prisión de los presuntos culpables, remitiéndolos a la inspección del juez del crimen, con testimonio de la parte de prueba referente a los indicios.

197. Cuando no puedan examinarse todos los testigos el día señalado, se suspenderá el acto para continuarlo en los siguientes sin necesidad de nueva citación, expresándolo así en el acta que se extienda.

198. Si la inspección de algún sitio contribuyese a la claridad del testimonio, podrá hacerse en él el examen de los testigos.

199. Si alguno de los testigos se hallase imposibilitado de comparecer al juzgado o tuviera alguna otra razón atendible a juicio del juez para no hacerlo, será examinado en su casa, ante el secretario, presentes o no las partes, según las circunstancias.

200. En la corte y cámaras de apelación, será comisionado para recibir la declaración uno de sus vocales.

201. Si la diligencia hubiese de hacerse fuera del lugar del juicio, las partes podrán designar personas que las representen ante el juez a quien se encarguen.





Tendrán también derecho a dirigir repreguntas a los testigos, y en tal caso podrán insertarse en las órdenes o despachos rogatorios que se libren.

202. Exceptuase de la obligación de comparecer a prestar declaración: los primeros magistrados de la nación y de la provincia, los ministros, los prelados, los individuos del senado del clero, los del congreso nacional y cámaras provinciales, los de los tribunales superiores, los jueces, los jefes militares desde coronel inclusive, y los jefes de oficina de la administración pública, los cuales prestarán sus declaraciones por medio de informe.

203. Las declaraciones en que no se hubiesen observado las prescripciones de la presente ley, no tendrán valor alguno.

204. Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos.

## CAPITULO V

### De las tachas

205. Cada parte puede tachar por justas causas los testigos presentados por la parte contraria.

206. Son tachas legales absolutas:

- 1° La enajenación mental;
- 2° La ebriedad consuetudinaria;
- 3° La falta de industria o profesión honesta conocida;
- 4° La calificación de quebrado fraudulento;
- 5° Haber sido condenado por delito que tenga pena corporal;
- 6° Haber sido convencido de falso testimonio.

207. Son tachas legales relativas:

- 1° Ser el testigo pariente por consanguinidad dentro del cuarto grado civil, o por afinidad dentro del segundo grado, del litigante que lo haya presentado;
- 2° Ser, al prestar declaración, dependiente o sirviente del que lo haya presentado;

---

Art. 204. — Véase ley núm. 3192 (Tratado de Montevideo), art. 2.º tratado 4.



3º Tener el testigo, o sus parientes, por consanguinidad dentro del cuarto grado civil, o por afinidad dentro del segundo, interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante;

4º Tener el testigo o los mismos parientes, comunidad o sociedad con la parte que lo presente, excepto si la sociedad fuese anónima;

5º Ser acreedor o deudor del litigante;

6º Haber recibido de él beneficios de importancia, o después de trabado el litigio, dádivas u obsequios aunque sean de poco valor;

7º Haber dado recomendaciones sobre la causa, antes o después de comenzada;

8º Ser amigo íntimo o enemigo manifiesto de uno de los litigantes, o mediar entre ellos odio o resentimiento por hechos conocidos;

9º Haber estado ebrio en el momento de verificarse el hecho sobre que depone.

208. Las tachas serán alegadas dentro del término señalado para lo principal, y la prueba respecto de ellas se producirá hasta diez días después de vencido ese término. Si se dedujeren contra testigos que hubieren de examinarse fuera del lugar del juicio, ofreciendo probarlas donde la diligencia tenga lugar, podrán insertarse en las órdenes o despachos los interrogatorios correspondientes.

209. La prueba de las tachas será considerada en la sentencia juntamente con la principal, apreciándola con arreglo a lo prescripto en el art. 204.

## CAPITULO VI

### De la inspección ocular

210. Cuando el juez crea necesaria la inspección ocular en algún sitio, podrá ordenarla a instancia de las partes o de oficio.

En la providencia que la decrete, designará el día en que deba tener lugar.

211. Las partes o sus apoderados serán especialmente cita-



dos, con la anticipación conveniente, y podrán asistir con sus letrados, y hacer al juez las observaciones que crean oportunas, debiendo extenderse acta de cuanto ocurra en ese acto.

## SECCION IX

### De la conclusión de la causa para definitiva

**212.** Cuando no hubiese mérito para recibir la causa a prueba, quedará concluída para definitiva con la contestación a la demanda o la reconvencción, a menos que la cuestión fuere de puro derecho, en cuyo caso deberá procederse con arreglo a lo prevenido en el art. 103.

**213.** Si se hubiesen producido pruebas dentro del segundo día después de vencido el término señalado al efecto, el actuario dará cuenta al juez, y éste, sin necesidad de gestión alguna de los interesados, o sin substanciarla si se hiciere, mandará agregar las pruebas a los autos y poner éstos en la oficina.

El secretario hará la agregación, con certificado de las que se hayan producido, y entregará los autos a los letrados por su orden y por el término de seis días, con el fin de que presenten, si les conviene, un escrito alegando sobre su mérito. Transcurrido el término sin devolver los autos a la oficina, la parte que los retuviere perderá el derecho de alegar sobre la prueba.

Si no hubiese intervenido abogado en la substanciación del juicio, la parte interesada presentará escrito designando el letrado bajo cuya responsabilidad serán sacados los autos.

**214.** Substanciado el pleito en el caso del art. 212, o transcurrido el término de seis días de que habla el artículo precedente, el actuario pondrá el expediente al despacho, agregando los alegatos si se hubiesen presentado; y el juez, acto continuo, llamará autos para sentencia.

**215.** Desde entonces quedará cerrada toda discusión, y no podrá presentarse más escrito, ni producirse más pruebas, salvo lo que el juez creyese oportuno para mejor proveer.

Los jueces pronunciarán sentencia dentro de los cuarenta días, contados desde la providencia de autos.

Si se ordenare alguna diligencia para mejor proveer, no se contarán en el término señalado los días que se empleen en el cumplimiento de esa diligencia.

## SECCION X

### De la sentencia

**216.** La sentencia definitiva debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a las acciones deducidas en el juicio, declarando el derecho de los litigantes, y condenando o absolviendo de la demanda en el todo o en parte.

**217.** Al redactar la sentencia, el juez hará relación de la causa que va a fallar, designando las partes litigantes y el objeto del pleito; consignará separadamente lo que resulte respecto de los hechos alegados por las partes, y hará mérito de cada uno de los puntos pertinentes de derecho fijados en la discusión. La sentencia deberá fundarse en el texto expreso de la ley, y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso; ella, por último, formulará la decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

**218.** Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

**219.** Cuando la sentencia contenga condenación de frutos, intereses, daños o perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación.

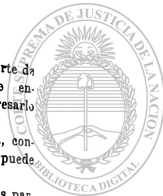
Si por no haber las partes hecho estimación de los frutos, intereses, daños o perjuicios, no fuese posible lo uno ni lo otro, se reservarán sus derechos para que en otro juicio se fije su importancia.

**220.** La sentencia deferirá al juramento del actor la fijación del importe del crédito o perjuicios reclamados, siempre que su existencia estuviese legalmente comprobada, y no resultase justificando ese importe. En tal caso, la sentencia determinará la cantidad dentro de la cual se prestará el juramento estimatorio.

**221.** La parte que fuese vencida en el juicio, deberá pagar todos los gastos de la contraria, si ésta lo solicitare.

Art. 221. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 24; art. 6 de la ley núm. 4560, y ley de la prov. de Buenos Aires, de octubre 31 de 1878, en la p. del Apéndice.





El juez, sin embargo, podrá eximir en el todo o en parte de esta responsabilidad al litigante vencido siempre que encuentre mérito para ello, pero en este caso deberá expresarlo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

222. Una vez pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdicción del juez respecto del pleito, y no puede hacer en ella variación o modificación alguna.

Puede, sin embargo, si se le pidiere por alguna de las partes dentro del día siguiente a la notificación, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión, y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

Puede también resolver sobre las peticiones de que trata el art. 448.

### **TITULO III**

#### **De los recursos.**

#### **SECCION I**

##### **Del recurso de reposición**

223. El recurso de reposición tiene lugar contra las providencias interlocutorias, a efecto de que el mismo juez que las haya dictado, las revoque por contrario imperio.

224. Debe interponerse este recurso dentro de tercero día, resolviendo el juez en seguida, previa audiencia de la otra parte.

225. La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso de reposición fuese acompañado del de apelación en subsidio y la providencia reclamada reuniera las condiciones establecidas en el artículo siguiente, para que la interlocutoria sea apelable.

#### **SECCION II**

##### **Del recurso de apelación**

226. El recurso de apelación sólo se otorgará de las sentencias definitivas y de las interlocutorias que decidan algún artículo o causen gravamen irreparable



227. La apelación se interpondrá por escrito ante el juez que hubiese dictado la sentencia. El escrito deberá limitarse a la mera interposición del recurso, y si esta regla fuese infringida, se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario pondrá en autos, determinando el recurso y la fecha de su interposición.

El juez proveerá lo que corresponda sin más substanciación.

228. El término para apelar, no habiendo disposiciones en contrario para casos especiales, será de cinco días .

229. La apelación de sentencia definitiva se otorgará libremente, y en ambos efectos, a no ser que el interesado pida que se conceda sólo en relación.

Exceptúanse los casos en que la ley disponga lo contrario.

230. La de autos interlocutorios se concederá también en ambos efectos, pero sólo en relación, a excepción de los casos en que, por disposición de esta ley, deba otorgarse en un solo efecto.

231. Cuando se otorgue el recurso en ambos efectos, por la misma providencia se mandará remitir los autos originales a la cámara de apelaciones respectiva.

232. Si sólo se concediese la apelación en el efecto devolutivo, se mandará sacar testimonio en papel común de lo que el apelante señalare de los autos, con las adiciones que el colitigante hiciere, y el juez estimare necesarias, y ese testimonio será remitido al superior.

Pero si estuviese ejecutado el auto apelado, o no hubiese que practicar diligencia alguna para su cumplimiento, se remitirán los autos originales.

233. La remisión se efectuará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última notificación, pasando el actuario el expediente al secretario de la cámara a quien corresponda conocer del recurso según el orden de turno, o al de la que corresponda en el caso de que alguna de ellas hubiere prevenido en el conocimiento de la causa.

Cuando hubiere de tomarse compulsa, el juez señalará el término que para ello creyese necesario.

234. Si el juez denegase la apelación, la parte que se sintiese agraviada podrá ocurrir directamente en queja al supe-



rior, pidiendo que se le otorgue la apelación denegada y se ordene la remisión de los autos.

**235.** Esta queja deberá interponerse dentro de tres días después de notificada la denegación.

**236.** Transcurridos los términos expresados sin interponerse la apelación, quedarán consentidas de derecho las sentencias, sin necesidad de declaración alguna.

### SECCION III

#### Del recurso de nulidad

**237.** El recurso de nulidad tendrá lugar contra las sentencias pronunciadas con violación de la forma y solemnidad que prescriben las leyes, o en virtud de un procedimiento en que se hayan omitido las formas substanciales del juicio, o incurrido en algún defecto de los que por expresa disposición de derecho anulen las actuaciones.

**238.** Sólo podrá deducirse el recurso de nulidad contra los autos o sentencias de que pueda interponerse apelación.

No habiendo lugar al recurso de apelación, no lo habrá tampoco al de nulidad.

**239.** El recurso de nulidad se interpondrá juntamente y en el mismo término que el de apelación.

**240.** La nulidad por defectos de procedimiento, quedará subsanada, siempre que no se reclame la reparación de aquéllos en la misma instancia en que se hayan cometido.

Si el procedimiento estuviese arreglado a derecho y la nulidad consistiese en las formas de la sentencia, el tribunal declarará ésta por nula, y mandará pasar los autos a otro juez de primera instancia para que sentencie.

Si la nulidad procediese de vicio en el procedimiento, se declarará por nulo todo lo obrado desde la actuación que dá motivo a ella, y se pasarán igualmente los autos a otro juez para que conozca.

En uno y otro caso las costas serán a cargo del juez.

## TITULO IV

### Del procedimiento ordinario en segunda instancia

241. Cuando el recurso se hubiese concedido libremente, en el mismo día en que los autos lleguen al tribunal, el secretario dará cuenta y se ordenará sean puestos en la oficina para que el apelante exprese agravios dentro de nueve días. En la misma providencia se designarán los días de la semana en que las partes deben comparecer a la oficina del ujier para ser notificadas.

Del escrito de expresión de agravios se dará traslado por igual término al apelado.

242. Si el apelante no compareciese o no expresase agravios en el término competente, acusada la rebeldía, se declarará desierto el recurso y se devolverán los autos.

243. Si el apelado no compareciese o no contestase al escrito de agravios dentro del término señalado, no podrá hacerlo en adelante, y previa nota del secretario, la instancia seguirá su curso.

244. Con los escritos indicados en los párrafos precedentes, quedará concluida la instancia y se llamará autos para sentencia.

245. Con los dichos escritos, o a más tardar antes de notificarse la providencia de autos, podrán las partes presentar los documentos de que juren no haber tenido hasta entonces conocimiento, o no haber podido proporcionárselos en tiempo oportuno.

De los que cada parte presente, se correrá traslado a la contraria.

246. Podrán también las partes, hasta la citación para sentencia, exigirse confesión judicial, con tal que sea sobre hechos que no hayan sido objeto de otras exigidas en primera instancia, y con sujeción a lo dispuesto en el art. 127 y siguientes.

247. Podrán igualmente pedir que se reciba la causa a prueba, en los casos siguientes:

1º Cuando se alegue algún hecho nuevo conducente al pleito, ignorado antes, o posterior al término de prueba de la primera instancia;

2º Cuando algunos hechos, sin embargo de ser pertinentes,







no hubiesen sido admitidos a prueba en la primera instancia; o por motivos no imputables al solicitante, no se hubiese practicado la prueba por él ofrecida.

**248.** En cuanto al término de prueba, medios probatorios de que pueda usarse, formalidades con que han de hacerse las probanzas, alegatos y conclusión de la causa, regirán las mismas disposiciones establecidas para la primera instancia.

**249.** En todos los actos de prueba que hubieren de practicarse ante el tribunal, llevará la palabra el presidente, pero los demás vocales, con su venia, podrán hacer las preguntas que estimen oportunas.

**250.** Cuando alguna diligencia de prueba hubiere de practicarse fuera de la sala del tribunal, si éste no considerase necesario asistir a ella en cuerpo, podrá comisionar al efecto a uno de sus miembros.

Si fuese fuera de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal, la comisión podrá ser conferida a la autoridad judicial de la localidad.

**251.** Luego que la instancia de la causa esté concluida con el pronunciamiento de la providencia de autos, pasará a secretaría.

**252.** Dentro de tercero día, contado desde la notificación de la providencia de autos, o al practicarse esta notificación y en la misma diligencia, manifestarán las partes si van a informar "in voce"; si no lo verifican, se podrá resolver sin dichos informes.

**253.** Los miembros de la cámara se instruirán cada uno privadamente de los expedientes, antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia, y sólo podrán tener en su poder aquéllos durante el término que el presidente señale a cada uno, dentro del fijado por la ley para pronunciar sentencia.

**254.** En los casos en que deban producirse informes orales, no se fijará la audiencia pública para ese acto, mientras que los miembros de las cámaras no estén instruidos del expediente. Podrán informar los interesados o sus defensores, hablando en primer lugar el apelante y en segundo el apelado. No les será permitido tomar la palabra segunda vez sino con la venia del



presidente, y sólo para hacer rectificaciones y restablecer los hechos que hayan podido ser presentados con inexactitud.

255. Los acuerdos se celebrarán el día que el presidente señale, teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos anteriores.

256. Dicho acto se verificará en presencia de todos los vocales y del secretario respectivo, debiendo establecerse primero las cuestiones de hecho y en seguida las de derecho sometidas a su decisión, y votándose separadamente cada una de ellas en el mismo orden. El voto en cada una de las cuestiones de hecho o de derecho será fundado, y la votación principiará por el miembro del tribunal que resulte de la insaculación que al efecto debe practicarse.

257. Concluido que sea el acuerdo, será redactado en el libro correspondiente, y subscripto con media firma de los vocales y autorizado por el secretario con firma entera. Permanecerá reservado mientras no sea publicada la sentencia.

258. Inmediatamente se pronunciará ésta, redactándose en los autos, precedida de copia íntegra del acuerdo, debiendo ella ser autorizada por el secretario.

259. Las sentencias serán publicadas por el secretario en la sala de audiencia, quedando constancia del acto y firmando los litigantes presentes, a menos que la publicidad sea peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso deberá declararse así por medio de un auto y omitirse la publicación.

260. Para este acto, el secretario citará a las partes por medio de cédula, designando día y hora.

261. Cuando ni las partes ni persona alguna concurriese al acto de la publicación de la sentencia, se omitirá ésta en la forma establecida, haciéndolo constar por nota el secretario y procediendo a su notificación.

262. Una copia íntegra de la sentencia será insertada en el libro, a continuación del acuerdo, firmada y autorizada en la misma forma.

263. Las resoluciones de las cámaras serán pronunciadas a mayoría absoluta de votos.

Art. 263. — La ley orgánica de los tribunales establece que: Las cámaras formarán tribunal con el presidente y dos vocales para la decisión de los recursos interpuestos contra las resoluciones interlocu-



no hubiesen sido admitidos a prueba en la primera instancia; o por motivos no imputables al solicitante, no se hubiese practicado la prueba por él ofrecida.

248. En cuanto al término de prueba, medios probatorios de que pueda usarse, formalidades con que han de hacerse las probanzas, alegatos y conclusión de la causa, regirán las mismas disposiciones establecidas para la primera instancia.

249. En todos los actos de prueba que hubieren de practicarse ante el tribunal, llevará la palabra el presidente, pero los demás vocales, con su venia, podrán hacer las preguntas que estimen oportunas.

250. Cuando alguna diligencia de prueba hubiere de practicarse fuera de la sala del tribunal, si éste no considerase necesario asistir a ella en cuerpo, podrá comisionar al efecto a uno de sus miembros.

Si fuese fuera de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal, la comisión podrá ser conferida a la autoridad judicial de la localidad.

251. Luego que la instancia de la causa esté concluída con el pronunciamiento de la providencia de autos, pasará a secretaría.

252. Dentro de tercero día, contado desde la notificación de la providencia de autos, o al practicarse esta notificación y en la misma diligencia, manifestarán las partes si van a informar "in voce"; si no lo verifican, se podrá resolver sin dichos informes.

253. Los miembros de la cámara se instruirán cada uno privadamente de los expedientes, antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia, y sólo podrán tener en su poder aquéllos durante el término que el presidente señale a cada uno, dentro del fijado por la ley para pronunciar sentencia.

254. En los casos en que deban producirse informes orales, no se fijará la audiencia pública para ese acto, mientras que los miembros de las cámaras no estén instruidos del expediente. Podrán informar los interesados o sus defensores, hablando en primer lugar el apelante y en segundo el apelado. No les será permitido tomar la palabra segunda vez sino con la venia del



presidente, y sólo para hacer rectificaciones y restablecer los hechos que hayan podido ser presentados con inexactitud.

255. Los acuerdos se celebrarán el día que el presidente señale, teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos anteriores.

256. Dicho acto se verificará en presencia de todos los vocales y del secretario respectivo, debiendo establecerse primero las cuestiones de hecho y en seguida las de derecho sometidas a su decisión, y votándose separadamente cada una de ellas en el mismo orden. El voto en cada una de las cuestiones de hecho o de derecho será fundado, y la votación principiará por el miembro del tribunal que resulte de la insaculación que al efecto debe practicarse.

257. Concluido que sea el acuerdo, será redactado en el libro correspondiente, y subscripto con media firma de los vocales y autorizado por el secretario con firma entera. Permanecerá reservado mientras no sea publicada la sentencia.

258. Inmediatamente se pronunciará ésta, redactándose en los autos, precedida de copia íntegra del acuerdo, debiendo ella ser autorizada por el secretario.

259. Las sentencias serán publicadas por el secretario en la sala de audiencia, quedando constancia del acto y firmando los litigantes presentes, a menos que la publicidad sea peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso deberá declararse así por medio de un auto y omitirse la publicación.

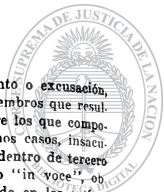
260. Para este acto, el secretario citará a las partes por medio de cédula, designando día y hora.

261. Cuando ni las partes ni persona alguna concurriese al acto de la publicación de la sentencia, se omitirá ésta en la forma establecida, haciéndolo constar por nota el secretario y procediendo a su notificación.

262. Una copia íntegra de la sentencia será insertada en el libro, a continuación del acuerdo, firmada y autorizada en la misma forma.

263. Las resoluciones de las cámaras serán pronunciadas a mayoría absoluta de votos.

Art. 263. — La ley orgánica de los tribunales establece que: Las cámaras formarán tribunal con el presidente y dos vocales para la decisión de los recursos interpuestos contra las resoluciones interlocu-



**264.** En los casos de discordia, impedimento o excusación, las cámaras de la capital se integrarán con miembros que resulten del sorteo que al efecto se practicará entre los que componen las demás cámaras de apelación. En dichos casos, insaculado el conjuer, se ordenará a las partes que dentro de tercero día manifiesten si quieren informar de nuevo "in voce", observándose en todo el procedimiento establecido en los artículos precedentes.

**265.** En iguales casos que sobrevengan en las cámaras de los departamentos de campaña, la integración se hará en el orden siguiente: jueces de primera instancia del departamento, agente fiscal y asesor de menores.

**266.** Las cámaras dictarán sentencia dentro de sesenta días desde que el expediente se halle en estado.

**267.** El tribunal no podrá fallar en segunda instancia sobre ningún capítulo que no se hubiese propuesto a la decisión del inferior, salvo intereses, daños y perjuicios, y cualesquiera otras prestaciones accesorias posteriores a la definitiva de primera instancia.

**268.** Cuando el recurso se conceda en relación se llamará autos inmediatamente, pasando el expediente a secretaría. Las partes manifestarán en el término y en la forma del art. 252, si van a informar "in voce", siendo entendido que si no lo verifican, se resolverá sin dichos informes.

**269.** No será permitido a las partes presentar escritos alegando en contra ni en favor de la resolución apelada.

**270.** Si el apelante pretendiese que el recurso ha debido

---

torias y las definitivas en juicios sumarios y sus resoluciones serán a simple mayoría, (art. 83). A los efectos del artículo precedente los vocales de cada cámara se turnarán mensualmente y en caso de recusación o impedimento del presidente o vocales en turno, se subrogarán con los otros. (art. 84). Para juzgar en definitiva en juicio ordinario, las cámaras procederán con el número íntegro de sus miembros, pero podrán también hacerlo con tres o cuatro miembros en caso de impedimento o de recusación, siempre que las partes no pidiesen integración o el tribunal no lo ordenase, (art. 86).

Art. 264. — Modificado por el art. 5º de la ley número 7055.

Art. 265. — Inaplicable en la capital de la república, que obedece a otra organización judicial que la que se ha dado la provincia de Buenos Aires.

Art. 266. — Véase la ley número 4128 citada, art. 14.

Art. 269. — Véase la ley número 4128 citada, art. 14.



otorgársele libremente, podrá solicitar dentro de tercero día de notificado de la providencia de autos, que así se declare y se le dé término para expresar agravios; el tribunal resolverá sobre esta petición, sin tramitación alguna accediendo o negando: en el primer caso, se substanciará el recurso, según queda prevenido, para el de apelación libremente concedido.

271. En caso de ocurrir directamente alguno de los litigantes, interponiendo queja ante el tribunal por apelación denegada, se pedirá informe al juez de la causa, y evacuado éste, se resolverá la queja sin substanciación alguna.

Si el juez “a quo” no acompañare los autos al informe, y el tribunal creyese necesaria su vista para la resolución, podrá mandarlos pedir a efecto de mejor proveer.

272. Si el recurso de apelación se hubiese unido al de nulidad, el tribunal conocerá de ambos al mismo tiempo y por los mismos trámites.

273. Las providencias meramente interlocutorias que se dicten en el curso de la instancia de apelación, sólo serán recurribles en la forma, y bajo las reglas establecidas por los arts. 224 y 225.

274. Siendo la sentencia confirmatoria en todas sus partes de la de primera instancia, las costas del recurso serán a cargo del apelante.

## **TITULO V**

### **Del recurso de queja por denegación o retardo de justicia**

275. Cuando transcurridos los términos legales para pro nunciar sentencia en primera o segunda instancia, el juez o cámara de apelaciones no la hubiese expedido, podrá ser requerido mediante el respectivo pedimento, por cualquiera de los interesados en el juicio.

276. Si pasados diez días desde la interpelación, aquéllos no se hubiesen expedido, el litigante podrá ocurrir en queja ante la suprema corte, acompañando una copia en papel común del escrito de interpelación.

---

Art. 276. — Véase nota al art. 51.



**277.** Presentada la queja, la corte dispondrá, por medio de o, que el inferior administre justicia dentro del término de días, cuyo término empezará a contarse desde la entrega de dicho oficio, lo que hará constar bajo recibo, que se agregará a la causa.

**278.** En caso que el juez o cámara de apelaciones desobedezca la orden o no manifestase justa causa que impidiese el cumplimiento, incurrirán en una multa de tres mil pesos jueces de primera instancia, y de nueve mil pesos las salas de apelación, a favor de la parte que haya hecho la interposición, entendiéndose que sólo es justa causa la imposibilidad física de los jueces, o el recargo de trabajo acreditado en forma del art. 51.

**279.** La declaración de haberse incurrido en multa, da lugar a la presente acción personal ejecutiva para perseguirla.

**280.** Si por la repetición de esta clase de quejas contra un juez o magistrado o contra un tribunal colegiado, la suprema corte llegase a entender que éstos faltan habitualmente a sus deberes, dejando el despacho de las causas, lo pondrá en conocimiento del presidente del jurí calificado, a los efectos que haya lugar con arreglo a la ley especial que reglamenta las facultades y forma de procedimiento de este tribunal.

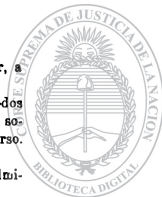
## TITULO VI

### Recurso por inaplicabilidad de ley o doctrina legal (a)

**281.** Este recurso se da contra las sentencias definitivas de las salas de apelación.

**282.** Se entiende sentencia definitiva, para los efectos de la interposición anterior, la que aun cuando haya recaído sobre un recurso, termine el pleito y haga imposible su continuación.

También se entiende sentencia definitiva, para los mismos



os, la en que se declare haber, o no haber lugar a oír, a litigante condenado en rebeldía.

**283.** En los pleitos posesorios, en los ejecutivos y en todos demás, después de los cuales puede seguirse otro juicio, solo mismo que haya sido objeto de ellos, no se da este recurso.

**284.** El recurso puede fundarse:

1° En que la sentencia haya violado ley o doctrina admitida por la jurisprudencia de los tribunales;

2° En que la sentencia haya aplicado falsa o erróneamente ley o doctrina.

**285.** El conocimiento de este recurso corresponde a la superior corte de justicia.

**286.** El recurso deberá interponerse ante la cámara de apelaciones que haya dictado la sentencia contra la cual se intente.

**287.** El plazo para su interposición es el de diez días, contados desde la notificación de aquella sentencia.

**288.** El procurador o apoderado no necesitan poder especial para interponer este recurso.

**289.** El escrito en que el recurso se deduzca deberá contener términos claros y concretos, la cita de la ley o de la sentencia violadas, o aplicadas falsa o erróneamente en la sentencia.

**290.** Cuando el recurso se interponga de sentencia confirmatoria, el recurrente, al interponerle, acompañará un recibo bancario de la provincia o de la sucursal respectiva de este establecimiento, por el que conste haber depositado a disposición de la cámara una cantidad equivalente al cuatro por ciento del valor del pleito, no pudiendo en ningún caso bajar de cinco mil pesos ni exceder de cincuenta mil, entendiéndose cuando se trata de bienes raíces el valor del pleito se fijará por la última evaluación para el pago de la contribución catastral.

Si el valor del pleito fuese indeterminado, el depósito será de cinco mil pesos.

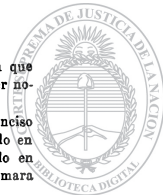
Si el recurrente ha litigado por pobre, prestará caución juratoria.

El depósito se devolverá al recurrente si el éxito del recurso.

**Art. 290.**— Se trata de pesos moneda corriente, en que cada mil equivalen cuarenta de la actual moneda nacional.







En la misma se designarán los días de la semana en que las partes deben comparecer a la oficina del ujier, para ser notificadas.

297. Vencido el término de diez días, señalado en el inciso 2º del art. 293, sin haberse apersonado el apelante, acusado en rebeldía, se declarará desierto el recurso; condenándolo en costas y devolviéndose los autos a sus expensas, a la cámara de que procedan.

298. Si transcurriera el mismo término sin haberse apersonado el apelado, se continuará la substanciación del recurso, dándose por notificada la providencia de "autos", en diligencia que el ujier sentará en el expediente.

Las demás providencias que recayeren, se tendrán por notificadas en la forma del art. 32.

299. Si el apelado se apersonara durante la substanciación, recibirá la causa en el estado en que la encuentre.

300. En cualquier estado del recurso, puede desistir el apelante, siendo de su cargo las costas causadas.

301. Dentro del término de diez días contados desde la notificación de la providencia de "autos", cada parte podrá presentar una memoria sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la ley o doctrina en el caso "sub judice". No verificándolo, podrá resolverse la causa sin dicha memoria.

302. Antes de la audiencia pública, los miembros de la corte se instruirán del expediente, pudiendo tenerlo en su poder el término que el presidente señale a cada uno, dentro del que se fijará para pronunciar sentencia.

303. No puede permitirse a las partes la presentación de documentos.

304. La sentencia será dictada dentro de ochenta días, que empezarán a correr desde que el expediente se encuentre en estado.

305. El presidente, teniendo en consideración lo dispuesto en los arts. 301 y 302, señalará con la anticipación conveniente el día en que deban celebrarse los acuerdos para pronunciar sentencia.

306. Toda vez que por un motivo cualquiera queden separados dos de los miembros de la corte, los tres restantes conocerán del recurso; pero si se inhabilitase mayor número, se in-



tegrará el de tres, no debiendo completarse el de cinco, sino cuando los interesados lo pidan a su costa.

307. Las cuestiones sobre el punto de aplicabilidad de la ley o doctrina, serán establecidas previamente.

308. La votación empezará por el miembro de la corte que resulte de la insaculación que al efecto debe practicarse.

309. El voto será fundado, y se emitirá separadamente sobre cada una de las cuestiones sometidas a decisión y en el mismo orden en que, con arreglo al art. 307, hayan sido establecidas.

310. La sentencia que se acuerde deberá reunir mayoría absoluta de votos.

311. Si ocurriere discordia en el acto del acuerdo, se llamará para dirimirla mayor número de jueces, insaculándolos en la forma prescripta en el título octavo.

312. Terminado el acuerdo, será redactado por el secretario en el libro de "acuerdos y sentencias", permaneciendo reservado mientras que no sea publicada la resolución.

313. Inmediatamente se pronunciará ésta, de completa conformidad al voto de la mayoría de jueces, resultante del acuerdo, y se redactará en los autos, precedida de copia íntegra de aquél.

314. Cuando la suprema corte estimare que la sentencia apelada ha violado o aplicado falsa o erróneamente la ley o doctrina, deberá comprender los puntos siguientes:

1° Declaración de la violación, falsa o errónea aplicación de la ley o doctrina;

2° Declaración de la ley o doctrina aplicables al caso;

3° Resolución de éste, con arreglo a la ley o doctrina, cuya aplicación se declara.

315. Cuando la corte estimare que no ha existido violación, ni falsa o errónea aplicación de la ley o doctrina, lo declarará así, desechando el recurso y condenando al apelante en las costas causadas por él.

316. La sentencia será publicada por el secretario en la sala de audiencia pública de la corte, a cuyo efecto se pasará a las partes cédula de aviso, con designación de día y hora, anotándolo en autos.

Los litigantes presentes al acto de la publicación, firmarán



la diligencia que debe levantarse, teniéndose desde luego por notificados.

317. Cuando ni las partes ni persona alguna concurriesen al acto de la publicación de la sentencia, se omitirá ésta, haciéndolo constar por nota el secretario, y procediéndose en seguida a su notificación por el ujier, en el domicilio legal de los litigantes.

318. No se dará publicidad a la sentencia en la sala de audiencias, cuando, a juicio de la suprema corte, sea aquélla peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso, debe declararlo así en la misma sentencia.

319. Una copia íntegra de ésta será insertada a continuación del acuerdo, en el libro a que se refiere el art. 312.

320. Las providencias interlocutorias que la corte dicte durante la substanciación del recurso sólo serán recurribles en la forma establecida en la sección I del título tercero.

321. Notificada la sentencia, e insertada la copia del artículo 319, se devolverán los autos a la cámara de apelaciones respectiva, previo pago de costas.

La devolución se hará a cargo de los que hayan traído los autos, siendo por el correo cuando procedan de las cámaras de campaña, y teniéndose presente lo dispuesto en el art. 295.

322. Las providencias en que las cámaras de apelación denieguen la admisión del recurso de aplicabilidad de ley o de doctrina, serán apelables ante ellas mismas y para ante la suprema corte, dentro de tres días contados desde su notificación.

323. Interpuesta en tiempo la apelación se remitirá el expediente al presidente de la suprema corte, a costa del apelante, citando y emplazando a las partes o sus apoderados a los efectos del art. 293, inciso 2°.

324. Se observará el procedimiento establecido en los ar.



de la corte, para su pronunciamiento, siempre que las partes no solicitaran la integración de aquella, lo que deberán hacer al ser notificadas de la providencia de "autos".

**328.** La sentencia establecerá previamente, con los detalles necesarios, la cuestión sobre admisión o denegación del recurso por aplicabilidad de ley o doctrina, único punto a decidir, y será fundada.

**329.** Cuando la suprema corte estime que la denegación del recurso hecha por las cámaras de apelaciones, procede, según los términos de esta ley, confirmará la providencia apelada con condenación en costas al recurrente.

**330.** En el caso contrario, la revocará, y declarando legítimamente deducido el recurso, se procederá a su substanciación en la forma que queda prevenida.

**331.** La sentencia será publicada y notificada según los arts. 316 y 317.

**332.** En el caso de ser confirmatoria la sentencia, insertada la copia en el libro de acuerdos, se devolverán los autos a las cámaras de su procedencia, con arreglo al art. 321.

**333.** Si ocurriera discordia, se llamará para dirimirla a los otros dos miembros de la corte, o se insacurarán conjucees, con arreglo al art. 311, según el caso de intervenir número de tres o íntegro.

**334.** Integrada la corte, y puesto el expediente a despacho con la nota respectiva, se pronunciará sentencia dentro de veinte días, contados desde la fecha de aquélla.

**335.** La secretaría de la corte organizará una publicación en que se insertarán los acuerdos y sentencias sobre estos recursos, con excepción de las que expresa el art. 318.

## **TITULO VII**

### **Queja y recurso sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad (b)**

**336.** Esta queja y recurso se dan cuando la constitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos, que estatuyan sobre ma-

---

(b) Véase nota (a) que precede al art. 281.



teria regida por la constitución, sea contradicha por parte interesada.

337. La suprema corte es juez competente para su conocimiento y resolución.

338. La jurisdicción de la corte puede ejercerse originariamente o en virtud de apelación.

339. Procede del primer modo:

En todos los casos en que los poderes legislativo y ejecutivos, municipales, corporaciones u otras autoridades públicas dicten leyes, decretos o reglamentos, y las partes interesadas comprendidas en sus disposiciones y a quienes deban aplicarse, se consideren agraviadas por ser contrarios a derechos, exenciones o garantías que estén acordadas por alguna cláusula de la constitución.

340. Procede del segundo modo:

1° Cuando en un litigio se haya cuestionado la validez de una ley, decreto o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la constitución, en el caso que forme la materia de aquel y la decisión de los tribunales en última instancia sea en favor de la ley, decreto o reglamento;

2° Cuando en litigio se haya puesto en cuestión la inteligencia de alguna cláusula de la constitución, y la resolución de los tribunales en última instancia sea contraria a la validez del título, derecho, garantía, o exención, que fuere materia del caso, y que se funde en dicha cláusula;

3° Cuando las resoluciones pronunciadas por los tribunales lo hayan sido con violación de la forma y solemnidades prescritas por la constitución.

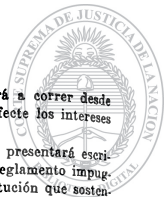
341. Este recurso puede interponerse, sea confirmatoria o sea revocatoria la decisión del tribunal en última instancia, sobre el punto controvertido.

342. Cuando se trata del caso del inciso 3.º del art. 340, debe deducirse previamente recurso de nulidad ante el superior respectivo, siempre que la violación pretendida sea de resolución pronunciada en primera instancia.

343. El plazo para la interposición de la queja en los casos

---

Art. 340, inc. 3º — Hemos salvado el error de impresión de otros poniendo "violación" que es lo correcto, en vez de "violencia", que carece de sentido. "



del art. 339 será el de un mes, que empezará a correr desde el día en que la ley, decreto o reglamento afecte los intereses del querellante.

**344.** La parte que se considere agraviada presentará escrito a la corte, mencionando la ley, decreto o reglamento impugnados; citará además la cláusula de la constitución que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición.

**345.** El presidente de la suprema corte substanciará la queja oyendo al fiscal de gobierno cuando se trate de actos provenientes de los poderes legislativo y ejecutivo: a los representantes legales de las municipalidades o corporaciones, y a los funcionarios que ejerzan la autoridad pública, o apoderados que deberán constituir, citándolos y emplazándolos, para que se apersonen a responder.

**346.** El término para comparecer y contestar será de nueve días, ampliándose en la forma del inciso 1.º, art. 79, y dirigiéndose cartas de citación cuando fuese necesario.

**347.** Las disposiciones de esta ley sobre constitución de domicilio legal, formas de las notificaciones y rebeldía, regirán en la substanciación, con la única excepción de que el fiscal de gobierno será notificado en su despacho y no fijará domicilio legal.

**348.** El procurador general de la corte será oído en esta gestión.

**349.** En seguida se dictará la providencia de "autos", observándose lo dispuesto en los arts 297 a 313 inclusive del



**354.** El recurso de apelación, en los casos del art. 340, deberá deducirse ante el juez o tribunal que en última instancia haya decidido el punto controvertido.

**355.** El plazo en que deberá deducirse, es el de cinco días, contados desde la notificación de la resolución.

**356.** El recurso se fundará en alguna de las causas del art. 340, que únicamente pueden darle origen.

**357.** El juez o tribunal, sin substanciación, examinará las circunstancias siguientes:

1° Si el caso se encuentra comprendido en alguno de los incisos del art. 340;

2° Si se ha cumplido la disposición del art. 342 cuando sea procedente;

3° Si se ha interpuesto en tiempo.

En seguida otorgará o denegará el recurso.

**358.** Las reglas de procedimiento de los arts. 297 a 313 inclusive, regirán en este recurso, con la única excepción de que el procurador general será oído.

**359.** Cuando la suprema corte estimare que la resolución apelada en los casos 1.° y 2.°, del art. 340 ha infringido o dado una inteligencia errónea, o contraria a la cláusula o cláusulas de la constitución que han sido controvertidas, deberá declararlo así en la sentencia que pronuncie, decidiendo el punto disputado, con arreglo a los términos o a la genuina inteligencia que debe darse a aquella.

**360.** En el caso del inc. 3°, art. 340, declarará nula la resolución apelada, mandando devolver la causa a otro juez o tribunal, para que sea nuevamente juzgada.

**361.** Las costas serán de cargo del juez o tribunal siempre que, a juicio de la corte, se hubiese cometido una manifiesta infracción del precepto constitucional.

**362.** Cuando la suprema corte estimare que no ha existido infracción, ni inteligencia errónea o contraria a la constitución, lo declarará así, desechando el recurso, con condenación al apelante en las costas causadas por el recurso.

**363.** Lo dispuesto en los arts. 316 y siguientes hasta el 334 inclusive, será obligatorio igualmente en este recurso, con declaración de que lo prescripto para las cámaras de apelación,





regirá también respecto del juez que conozca en última instancia del asunto.

**364.** Cuando ocurra el caso de existir a la vez los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de la ley, o doctrina legal, deberán deducirse conjuntamente y dentro del plazo de diez días.

**365.** Los acuerdos y sentencias, tanto sobre la queja cuanto sobre el recurso, serán insertados en la publicación a que se refiere el art. 335, título precedente.

## TITULO VIII

### De las recusaciones

#### SECCION I

##### De las recusaciones de los jueces

**366.** Los jueces inferiores sólo pueden ser recusados sin causa por el actor, al entablar la demanda; y por el demandado, antes o al tiempo de contestarla.

De este derecho no podrá hacerse uso sino una vez en cada caso.

Esta recusación producirá el efecto de atribuir el conocimiento del asunto al juez que corresponda en el orden del turno.

**367.** También puede ser recusado sin causa un miembro de la suprema corte, o de las cámaras de apelaciones, dentro de las 24 horas del llamamiento de "autos".

Fuera de estos casos, todos los jueces, tanto superiores como inferiores, sólo pueden ser recusados con causa legal.

**368.** Son causas legales de recusación:

Art. 368. — Modificado por el art. 1º, de la ley número 5106, que establece que: Desde la promulgación de esta ley y hasta tanto el honorable congreso reglamente el derecho de acusar en juicio político a los miembros de la corte suprema y demás tribunales inferiores de la nación, modifícase el inc. 7 del art. 368 del código de procedimientos en materia civil y comercial de la capital en la forma siguiente: a) ser o haber sido denunciador o acusador del recusante ante los tribunales ordinarios, o denunciado, o acusado por este ante los mismos tribunales b) Ser o haber sido el juez denunciado o acusado en juicio político por el recusante ante la honorable cámara de diputados de la nación siempre que la comisión respectiva de la cámara hubiera aconsejado haber lugar a la formación de causa, de conformidad con el art. 45 de la constitución nacional.



1º El parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del grado civil, con alguno de los litigantes, o con su le-  
o;

2º Tener el juez o sus consanguíneos o afines, dentro de  
mismos grados del número anterior, directa participación  
cualquiera sociedad o corporación que litigue;

3º Tener los mismos sociedad o comunidad con algunos  
os litigantes, excepto si la sociedad fuese anónima;

4º Tener interés en el pleito o en otro semejante;

5º Tener pleito pendiente con el litigante que recuse;

6º Ser acreedores, deudores o fiadores de alguna de las  
es;

7º Haber sido denunciador o acusador del recusante, o  
nunciado o acusado por el mismo;

8º Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes,  
tido opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del  
to, antes o después de comenzado;

9º Haber recibido el juez beneficio de importancia de algu-  
de las partes en cualquier tiempo; o después de iniciado el  
to, presentes o dádivas, aunque sean de poco valor;

10. Tener el juez con alguno de los litigantes amistad, que  
manifieste por una grande familiaridad o frecuencia de trato;

11. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimien-  
que se manifieste por hechos conocidos.

369. La recusación deberá ser deducida por cualesquiera de  
partes al presentar su primer escrito, salvo que la causa sea  
reviniente; o cuando conocida recién por la parte la dedu-  
dentro del tercero día de saberla, y con el juramento de  
er llegado a su conocimiento recién, en cuyo caso podrá  
ablarla hasta la citación para sentencia.

En la suprema corte y cámaras de apelación, la recusación  
erá deducirse en los tres días siguientes a la providencia de  
itos<sup>17</sup>.

370. Cuando se recuse a uno o más miembros de las cáma-  
de apelación, conocerán los que queden hábiles, integrada  
cámara con el que resulte o resulten del sorteo.

El mismo procedimiento regirá para la corte, pero la inte-  
cción sólo tendrá lugar cuando el número de los que queden  
alcance a tres, y hasta completar éste, salvo que la parte



pidiese mayor número hasta cinco, siendo entonces a su costa el honorario de los que excedan al número que constituye tribunal para este incidente.

**371.** De la recusación de los jueces letrados de primera instancia, conocerá la cámara de apelaciones respectiva.

**372.** La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante la suprema corte o cámara de apelación respectiva, cuando lo fuese de uno de sus miembros.

**373.** En el escrito en que se deduzca, se expresarán necesariamente las causas de la recusación; se nombrarán los testigos que hayan de declarar con expresión de su residencia, y se acompañarán o mencionarán los documentos de que el recusante intente valerse.

**374.** Si en dicho escrito no se alegase determinadamente alguna de las causas contenidas en el art. 368, o si se presentase fuera de la oportunidad designada en el art. 369, será desechado sin darle curso por el tribunal competente para conocer de la recusación.

**375.** Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese uno de los jueces de la suprema corte o cámaras de apelación, se le comunicará aquella, a fin de que manifieste categóricamente si son o no ciertos los hechos alegados.

**376.** Si reconociere ser ciertos los hechos, se le dará por se parado de la causa sin más ulterioridad.

Si los negase, con lo que exponga, se procederá a substanciar el incidente.

**377.** La suprema corte o cámara de apelaciones respectiva, integrada ésta al efecto, recibirán el incidente a prueba por el término improrrogable de diez días, si la prueba hubiera de producirse dentro de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal, ampliándose a razón de un día más por cada cuatro leguas, cuando la prueba hubiese de producirse en otro lugar.

**378.** Los testigos que se presenten no podrán ser más de seis, ni el recusante podrá valerse de otros que los indicados en el escrito de recusación.

**379.** Vencido el término de prueba, se agregarán las produ-

---

Art. 375. — Véase nota al art. 51 y ley número 4128 citada, art. 16.  
Art. 377. — Véase nota al art. 51.



s, y llamando "autos", se resolverá el artículo dentro de tres días.

380. Cuando el recusado sea un juez letrado de primera instancia, elevará los autos a la cámara que ha de conocer, un informe detallado y categórico respecto a las causas que se hayan alegado.

Ese informe deberá expedirlo dentro de tercero día.

381. Pasados los antecedentes, si la recusación estuviese decidida en tiempo y con causa legal, la cámara de apelaciones, o pre que del informe elevado por el juez resultare la exactitud de los hechos, lo dará por separado de la causa.

Si los negare, se recibirá el incidente a prueba, y se seguirá a dictar sentencia el procedimiento prevenido en los artículos 377, 378 y 379.

382. Si la recusación fuese desechada, se devolverán los autos al juez recusado.

Si fuese admitida, se pasarán al juez que debe entrar a conocer, avisándolo al juez recusado.

Cuando el recusado sea uno de los miembros de las cámaras de apelación, o de la suprema corte, admitida la acusación, se irá conociendo el conjuer, que de acuerdo con el art. 264, la podrá resolver ese incidente.

383. En todos los casos, de la resolución que recaiga no habrá recurso; y siempre que la recusación sea desestimada, el recusante será condenado en todas las costas del incidente.

384. Todo juez que se halle en alguno de los casos de legítima excusación, se inhibirá, manifestando la causa.

No será nunca motivo de excusación el parentesco de otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.

## SECCION II

### De la recusación de los secretarios y ujieres

385. Los secretarios de la suprema corte y cámaras de apelación no son recusables. Pero deberán manifestar toda causa

Art. 380. — Véase la ley núm. 4128 citada, art. 15.

Art. 382. — Véase nota al art. 51.

Art. 383. — Véase ley núm. 4128 citada, art. 19.

Art. 384. — Véase ley núm. 4128 citada, art. 20.

Art. 385. — Véase ley núm. 4128 citada, art. 21.



de impedimento que tuvierén, para que, tomada en consideración por la corte o cámara que conozca del pleito, provenga lo que correspondiera.

336. Los ujieres y los secretarios de los juzgados de primera instancia pueden ser recusados por cualquiera de las causas expresadas en el art. 368.

337. De hecha la recusación, el juez o tribunal averiguará sumariamente el hecho en que se funda, y sin más trámite resolverá el artículo.

La resolución que se diere será apelable.

338. En los juzgados que tengan varios secretarios de actuario, los interesados en el juicio pueden recusar uno sin causa, cuando todos concurren a la recusación.

Esto también puede ejercerse también por cualquiera de los interesados en el juicio, pero en este caso el recusante tiene la obligación de pagar inmediatamente todas las costas que se imponen al secretario recusado, sin perjuicio de poder reembolsarse lo que en el pago correspondiere a los demás interesados.

339. El secretario así recusado, queda absolutamente separado de toda intervención en el asunto.

### SECCION III

De la recusación de los representantes del ministerio público

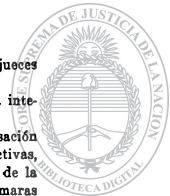
360. En caso que los representantes del ministerio público tuviesen algún motivo de legítimo impedimento, deberán justificarlo, y el tribunal o juez de la causa podrá darlos por separados, pasando el asunto a quien deba subrogarlo.

### SECCION IV

Del modo de reemplazar a los jueces y demás funcionarios recusados o impedidos

391. La suprema corte formará cada año una lista de treinta abogados de la matrícula, entre los que se sortearán los que deban suplir en los casos de recusación sin causa, a los miembros

Art. 391. — Modificado por el art. 5º de la ley número 7050.



bros de la suprema corte, cámaras de apelación y a los jueces de primera instancia de la capital.

302. En la suprema corte y cámaras de apelación, la integración se hará en la forma siguiente:

En los casos de excusación, impedimento y de recusación con causa, la suprema corte y cámaras de apelación respectivas, serán integradas con aquel de los camaristas que resulte de la insaculación que al efecto debe practicarse entre las cámaras restantes.

En las recusaciones sin causa, la integración se hará a costa del recusante, con aquel de los abogados que resulte insaculado de la lista determinada en el art. 391.

Si en el término de seis días, contados desde que se notifique la regulación, el recusante no pagara el honorario del conjuce, se habrá por desistido de la recusación a petición de la parte contraria.

303. En los departamentos de campaña, la integración de la cámara se hará con los jueces de primera instancia de la localidad, agente fiscal y asesor de menores; sin perjuicio de que, cuando se establezca foro suficiente en uno o más departamentos, y la corte lo considere oportuno, forme una lista de abogados en los mismos términos que la de la capital, pero cuyo número no baje de diez ni exceda de veinte.

304. El sorteo sobre las listas de conjueces se hará por el tribunal que haya de integrarse, en audiencia pública y a presencia de las partes, si quisiesen asistir, pudiendo cada una de las personalidades que constituyan la parte actora o demandada, recusar sin causa, antes de la insaculación, hasta tres abogados de la lista.

Este derecho se pierde por inasistencia al acto.

305. En caso que sea parte o tenga interés en el pleito alguno de los vocales de la suprema corte o de una de las cámaras, sólo éste deberá separarse, integrándose según queda prevenido.

306. Los jueces letrados de lo civil y los de lo comercial de

Art. 191. — Véase nota al art. 51.

Art. 302. — Modificado por el art. 5 de la ley núm. 7055.

Art. 303. — Inaplicable en la capital de la república.

Art. 304. — Inaplicable en la capital de la república.

Art. 306. — El último apartado es inaplicable en la capital de la república.



plazarán recíprocamente por orden de turno impedidos, entrarán a suplir los del crime abogado de la matrícula, sorteado por la e n la forma prevenida en el art. 391, y cunado por el erario público.

a, los jueces de cada departamento se sup y por impedimento de ambos pasará la cau prefiriendo los del fuero de la causa, y p caso como si la causa fuera correspondien le la capital.

rador general de la corte, será reemplaza s cámaras de apelación, y éste por los age :apital.

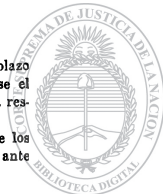
tes fiscales se suplirán unos a otros, y en : sesores de los defensores de menores que : tados.

asesores de pobres y de menores, se nombra ibunal, ante quien pende el asunto, un letre s funciones, y cuyo honorario será fijado p por el tesoro público.

ario de la suprema corte, será reemplaza cretarios de las cámaras de apelación que signe.

s de las cámaras de apelación en el depa ital, se suplirán entre sí, designando el sub que admita el impedimento. En los depart ia, lo serán por el agente fiscal y asesor

res de la corte y cámaras de apelación d la capital, se suplirán entre sí; en los depa aña, el ujier será reemplazado por un secr dos de primera instancia. En ambos casos ombrado por el tribunal respectivo. cenarios de primera instancia serán reemplaz ombren los jueces. al admitir la recusación



402. Toda dificultad que ocurra con motivo de reemplazo algún juez, será resuelta por la corte; y si no tuviese el carácter de contienda oficial de competencia, por la cámara respectiva, sin más recurso en uno y otro caso.

Si la dificultad ocurriese con motivo del reemplazo de los más funcionarios, resolverá sin recurso el juez o tribunal ante quien penda el asunto.

## TITULO IX

### De los incidentes

403. Los incidentes, para que puedan ser calificados de tales, deben tener relación más o menos inmediata, con el objeto principal del pleito en que se promuevan.

404. Los incidentes que impidan la prosecución de la demanda principal, se substanciarán en la misma pieza de autos quedando entre tanto en suspenso el curso de aquélla.

405. Se entiende que impide la prosecución de la demanda, do incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible, de hecho o de derecho, continuar substanciándola.

406. Los incidentes que no obstan a la prosecución de la demanda principal, se substanciarán en pieza separada, sin suspenderse el curso de aquélla.

407. Dicha pieza se formará con los insertos que ambas partes señalen y el juez crea necesario; y a costa del que haya promovido el incidente, salvo lo que se determine en la sentencia.

408. Promovido el incidente y formada en su caso la pieza separada, se substanciará por los trámites establecidos para las recepciones dilatorias.

409. Todos los incidentes cuyas causas existan simultáneamente, deberán ser promovidos a la vez.

## TITULO X

### De las cuestiones de competencia

410. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por declinatoria o por inhibitoria.

Art. 402. — Véase nota al art. 51.





La declinatoria se propondrá ante el juez que haya empesado a conocer, pidiéndole se separe del conocimiento del negocio, con igual remisión de autos al tenido por competente.

La inhibitoria se intentará ante el juez que la parte crea competente, pidiéndole que dirija oficio al que estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos.

411. Cuando los jueces ejerzan una misma clase de jurisdicción, se empleará exclusivamente el primer medio.

412. Cuando los jueces ejerzan diferentes clase de jurisdicción, podrá usarse de cualquiera de los dos medios.

El litigante que hubiere optado por uno de estos dos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro.

Tampoco se podrán emplear sucesivamente, debiendo pasar-se por el resultado de aquel a que se haya dado la preferencia.

413. En caso de elegirse el primero, se observará el procedimiento establecido para las excepciones dilatorias en general, con intervención del ministerio fiscal.

414. Las cuestiones de competencia, sólo podrán promoverse antes de estar trabado el pleito por demanda y contestación.

415. Entablada la inhibitoria, el juez, previa vista fiscal, mandará librar oficio inhibitorio o declarará no haber lugar.

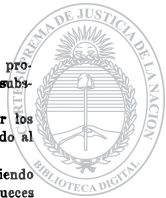
416. La providencia en que se denegare será apelable en relación.

417. Al oficio de inhibición que se libre, acompañará testimonio del escrito en que se haya pedido, de lo expuesto por el fiscal en su caso, del auto que hubiere recaído y demás que el juez estime necesario para fundar su competencia.

418. Si el juez requerido accediere a la inhibición, podrá apelarse en relación, y consentida o ejecutoriada la sentencia, remitirá los autos al juez que crea competente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho.

419. Si el juez requerido no accediere a la reclamación, oficiará al juez requirente, manifestando los fundamentos en que apoya su competencia y requiriéndole para que, dando por formada la contienda de competencia, remita los antecedentes a la suprema corte.

420. Durante la contienda, uno y otro juez suspenderán sus procedimientos sobre la principal.



**421.** Pasados los antecedentes, la suprema corte oír al procurador general y en seguida llamará "autos" y sin más subyanciación, pronunciará sentencia.

**422.** Pronunciada la sentencia, se mandarán devolver los antecedentes al juez que sea declarado competente, avisando al otro por oficio.

**423.** No obstante lo dispuesto en el art. 413, si procediendo de oficio en asunto en que esto pueda tener lugar, dos jueces que ejerzan una misma clase de jurisdicción, pretendieren ser competentes, cualquiera de ellos puede reclamar el conocimiento del asunto, debiendo proceder en la forma establecida en los artículos precedentes.

**424.** En caso de ocurrir conflicto negativo, declarándose dos jueces incompetentes para conocer de un asunto, se observará el mismo procedimiento que en las contiendas positivas.

## **TITULO XI**

### **Del juicio de jactancia**

**425.** La acción de jactancia es acordada contra toda persona capaz de ser demandada y que, fuera de juicio, se hubiera atribuido derechos propios a bienes que constituyen el patrimonio de un tercero.

**426.** El escrito en que se deduzca la acción de jactancia, debe contener:

1º El nombre y domicilio del actor;

2º El nombre y domicilio de aquel contra quien se dirige;

3º La enunciación de la jactancia, con expresión indispensable de su época y lugar, como de los medios por los que ha llegado a su conocimiento;

4º La petición para que el jactancioso manifieste o niegue la exactitud del hecho imputado.

**427.** El juez competente que reciba el pedido, ordenará que aquel contra quien se dirige, manifieste si es o no cierta la exposición, aceptando la verdad de lo expuesto en sus puntos prin-



cipales, o bien negando, bajo juramento, la versión que se le atribuye.

El secretario que reciba esa manifestación, sentará por escrito la diligencia, firmándola con el que la hace o dos testigos si no lo supiere o pudiere hacer, y autorizándola en uno y otro caso.

**428.** Si aquel contra quien se dirige la jactancia se negare a hacer la manifestación, la hiciere ambigüamente o reconociere la verdad de lo expuesto, el juez ordenará que dentro de diez días entable la acción que surge de los hechos expuestos, bajo apercibimiento que de no hacerlo, caducará todo el derecho pretendido y será condenado en las costas.

Vencidos los diez días sin haberse deducido la acción, la parte podrá pedir la efectividad del apercibimiento.

**429.** Si se hubiese negado bajo juramento la jactancia atribuida, se mandará entregar las actuaciones al que las ha iniciado, sin otra tramitación.

**430.** Las declaraciones sobre jactancia no comprenden, ni los hechos que no han sido materia del procedimiento, ni los que posteriormente hubiesen llegado al conocimiento del que ha sufrido la acción.

**431.** La acción de jactancia no enerva ni afecta las acciones legítimas que se tuvieren, por perjuicios, u otras análogas.

**432.** La jactancia no puede deducirse pasados seis meses desde la época en que tuvieron lugar los dichos o hechos que la constituyen.

## TITULO XII

### Del juicio ordinario en rebeldía

**433.** Cuando un litigante citado con arreglo a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes, no comparezca dentro del término del emplazamiento, o abandone el juicio después de haber comparecido, será declarado en rebeldía, pidiéndolo la otra parte.

Esta providencia se notificará por cédula, y no siendo posible, se hará saber por edictos que se publicarán durante cinco días en dos periódicos, que el secretario agregará a los autos para constancia de la publicación.



Las providencias sucesivas se darán por notificadas al rebelde, con sólo la nota del secretario, de no haber comparecido por la oficina.

434. Declarado en rebeldía el demandado, el actor obtendrá lo que pidiere, siendo justo.

Declarado el actor, el demandado será absuelto también si fuere justo.

En un y otro caso, deberá el rebelde pagar las costas causadas por su rebeldía.

435. Si el juez lo creyese necesario, podrá recibir el pleito a prueba, o mandar practicar, para mejor proveer, cualquiera de las diligencias que determina el art. 57.

436. El auto de prueba y la sentencia se hará saber al rebelde en la forma prescripta para la notificación del auto en que se declara la rebeldía.

437. Desde el momento en que un litigante haya sido declarado en rebeldía, puede decretarse, si la otra parte lo pidiere, el embargo de sus bienes en cuanto sea necesario, para estimar asegurado lo que sea objeto del juicio.

El embargo se hará en la misma forma que en el juicio ejecutivo.

438. Si el litigante rebelde compareciere, cualquiera que sea el estado del juicio, será admitido como parte, y cesando el procedimiento en rebeldía, se entenderá con él la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradar.

439. El embargo de bienes que se hubiese practicado, continuará, no obstante, hasta el fin del juicio, a no ser que el interesado justifique cumplidamente haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.

440. La solicitud que sobre el alzamiento del embargo se dedujere, se substanciará en pieza separada, sin detenerse la prosecución de la demanda principal.

441. Si compareciere el rebelde después del término probatorio, en caso de haberse abierto, y la sentencia fuese apelada, se recibirá el pleito a prueba en la segunda instancia, si aquel lo pide y concurre alguna de las circunstancias designadas en el art. 247.

442. Ejecutoriada la sentencia que se dicte en rebeldía, no se dará audiencia, ni se admitirá recurso alguno contra ella.



### TITULO XIII

#### De los embargos preventivos

**443.** Podrá pedir embargo preventivo el acreedor que se halla en alguna de las condiciones siguientes:

1° Que el deudor no tenga domicilio en la provincia;  
2° Que la existencia del crédito esté acreditada con instrumento público o un documento simple atribuido al deudor, abonada la firma por información sumaria de dos testigos a lo menos, tratándose de una suma mayor de cinco mil pesos moneda corriente, y por simple información cuando la deuda fuere inferior;

3° Que fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique la existencia de éste en la misma forma del inciso anterior, debiendo en este caso justificarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor, o si éste ofreciere cumplirlo, o su obligación fuese a plazo (art. 65, "contratos en general", código civil);

4° Que la deuda esté justificada por los libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resultase de boleto de corredor conforme con sus libros, y en los casos en que estos puedan servir de prueba;

5° Que estando la deuda sujeta a condición, suspensión o pendiente de plazo, el actor justifique sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar, transportar sus bienes, o siempre que justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido notablemente la responsabilidad de su deudor, después de contraída la obligación.

**444.** El embargo preventivo, en los casos expresados en el artículo anterior, sólo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que lo solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar en caso de haberlo pedido sin derecho. Si el actor fuese reconocidamente abonado, el juez podrá decretar el embargo bajo su responsabilidad.

**445.** El propietario y locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento, pueden pe-

Art. 443 — Véase ley núm. 7062, art. 9. Algún editor ha cobrado los cinco mil pesos m. c. en igual cantidad de moneda nacional.



dir el embargo preventivo de las cosas afectadas a los privilegios que les reconoce el código civil, acompañando a su petición el título de la propiedad, o el contrato de locación, o exigiendo al locatario que haga las manifestaciones necesarias en el acto de la notificación.

**446.** Las personas a quienes las leyes generales reconocen privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles, podrán pedir el embargo preventivo de éstos, siempre que el crédito se justificare en la forma que previene el art. 443, inc. 2°.

**447.** Podrá igualmente pedirse el embargo preventivo de la cosa mueble o inmueble que haya de ser demandada por acción reivindicatoria, mientras dure el juicio respectivo.

**448.** Durante un juicio ordinario podrá pedirse el embargo preventivo, a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que por confesión expresa o ficta resulten probados hechos que hagan presumir verosimilmente el derecho alegado, o siempre que el que lo solicite hubiere obtenido una sentencia favorable.

**449.** En los casos previstos en los cuatro artículos precedentes, el embargo preventivo se decretará bajo la responsabilidad y caución juratoria del solicitante.

**450.** Las informaciones que se ofrecieran en casos de embargos preventivos, se admitirán sin más trámite, y a solicitud de parte se habilitarán los días feriados, pudiendo el juez cometerla a los secretarios.

La información podrá ofrecerse firmando los testigos el escrito en que se solicite y ratificándose en sus firmas.

**451.** En cuanto a la forma de practicarse el embargo se observará lo dispuesto en el art. 471 del juicio ejecutivo.

**452.** El embargo, en todos los casos, se hará saber al embargado dentro de los tres días siguientes a la traba, y éste podrá apelar dentro de los tres días al solo efecto devolutivo.

**453.** El auto en que no se hiciere lugar al embargo preventivo, será apelable dentro de tres días.

En todos los casos en que el embargo preventivo no recaiga sobre cosas afectadas a un privilegio reconocido por las leyes generales, podrá el demandado pedir que se deje éste sin efecto, depositando a la orden del juez una cantidad suficiente, o dando caución para responder de las sumas que se reclamen y de las costas.



**454.** La caución podrá ser de cualquiera de las clases conocidas en derecho. El juez la calificará por sí solo, y en encontrándola bastante, mandará que se extienda la escritura correspondiente, quedando terminado el incidente.

**455.** En los casos en que deba efectuarse el embargo, se trabajará en el orden y forma prescriptos para el juicio ejecutivo, y se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclame y las costas.

**456.** Sólo en caso de consignar el embargado la suma que deberá expresar siempre el mandamiento de embargo, podrán suspender su ejecución los funcionarios encargados de ella, siendo responsables de toda omisión.

**457.** En el mandamiento se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia.

**458.** Si los bienes embargados fuesen muebles, serán siempre depositados a la orden judicial; pero si fueran los muebles de la habitación del embargado, podrá él mismo ser constituido en depositario y guardián de los muebles.

**459.** El depositario de objetos embargados a la orden judicial, estará obligado a presentarlos dentro de veinticuatro horas de cualquier intimación judicial, pudiendo ser compelido a ello con arresto personal.

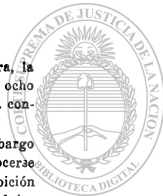
---

Art. 458. — La ley núm. 4531 que organizó el Banco municipal de préstamos, establece: El Banco municipal de préstamos tendrá a su cargo, en la capital de la república, la custodia y conservación de los bienes muebles que deban ser embargados o secuestrados o comisos por orden judicial o por ministerio de la ley.

Exceptuánse de este depósito:

1.º) El dinero efectivo;

2.º) Los semovientes que en los casos indicados podrán ser ce



460. Si el dueño de los bienes embargados lo exigiera, la demanda deberá ser deducida en el preciso término de ocho días; y no haciéndolo, se alzará el embargo y el actor será condenado, a más de las costas, en los daños y perjuicios.

461. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo preventivo éste no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes al deudor, podrá solicitarse contra él la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se deberá dejar sin efecto tan luego como presentase a embargo bienes, o diere caución bastante.

462. El embargo preventivo podrá también ser dictado por los jueces de paz en asuntos que por su cuantía corresponda conocer a los jueces de primera instancia en los partidos que disten más de diez leguas del punto donde se hallen situados los tribunales competentes, y en tal caso el juez de paz remitirá las actuaciones al de primera instancia, inmediatamente después de trabado el embargo. La apelación de los embargos dados por los jueces de paz en estos casos, deberá deducirse ante él, y para ante la cámara respectiva.

463. Los jueces deberán excusarse de oficio de decretar embargos preventivos en asuntos en que el conocimiento de la causa no fuera de su competencia; pero en caso de decretarse el embargo preventivo por un juez incompetente, será válido siempre que haya sido dictado con arreglo a las disposiciones de este título, y sin que esto importe prórroga de su jurisdicción para entender en el juicio que deba iniciarse en adelante.

---

tos, o cuando los interesados no se pongan de acuerdo en la designación de rematador o el nombramiento se haga de oficio, (art. 8.º).

Los tribunales determinarán la comisión que en cada caso corresponda al banco, tomando en cuenta la naturaleza de los servicios prestados, los gastos que haya ocasionado y la importancia del asunto, (art. 9.º).

El acarreo de los objetos será por cuenta del acreedor ejecutante, sin perjuicio de su acción contra el ejecutado, (art. 10).

Toda vez que el monto de los derechos adeudados ascendiera aproximadamente, a juicio del directorio, a la tercera parte del valor de los objetos en depósito, o que la conservación de éstos fuese poligrosa o difícil, el directorio solicitará del juez la autorización necesaria para proceder a su venta, (art. 11).

Art. 462. — Inaplicable en la capital de la república.



## TITULO XIV

### De las ejecuciones:

#### SECCION I

##### Del juicio ejecutivo



**464.** Se procederá ejecutivamente, siempre que se demande cantidad de dinero en virtud de un título que traiga aparejada ejecución.

**465.** Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes:

1° Los instrumentos públicos presentados en forma;

2° Los documentos privados, subscriptos por el obligado, sean reconocidos en juicio;

3° La confesión de deuda líquida y exigible hecha ante competente;

4° Las cuentas aprobadas o reconocidas en juicio;

5° El juramento decisorio;

6° Las letras de cambio, vales o pagarés protestados con arreglo a las prescripciones del código de comercio, o en defecto de protesto, reconocidos en juicio;

7° Los créditos por arrendamientos de predios rústicos o urbanos.

**466.** Puede prepararse la acción ejecutiva, pidiendo presente que sean reconocidos los documentos que por sí solos traen aparejada ejecución.

En la ejecución por alquileres se pedirá que el demandado exhiba previamente si es locatario, y en caso afirmativo exhiba el último recibo.

**467.** Reconocida la firma de un documento de obligación, estará preparada la acción ejecutiva, aunque se niegue su contenido.

**468.** La citación del demandado para efectuar el recono-

Art. 464. — Véase ley núm. 5062 sobre cobro de impuestos, art. 16; ley núm. 6875, art. 2; ley núm. 2637, art. 673 y a., y ley núm. 9689.  
Art. 465. — Véase ley núm. 562, art. 18; además, ley núm. 9689.



cimiento se hará en la forma prescripta en los arts. 77 y siguientes, y bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer, se tendrá por reconocido el documento.

No compareciendo, ni mostrando justo motivo para ello, se hará efectivo inexcusablemente el apercibimiento, y se procederá como si el documento hubiera sido reconocido por el deudor en persona.

469. Si el documento no fuese reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en el competente juicio ordinario.

470. Si los documentos fuesen firmados por autorización del que aparece obligado, se deberá acompañar el instrumento probatorio con que ha procedido el firmante, o indicarse el registro en que se encuentre.

471. El juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la acción, y si hallare que es de los comprendidos en el art. 465, librará mandamiento de embargo, el que será entregado al ejecutante.

Con él se requerirá al deudor, por el ejecutor comisionado al efecto; y no verificando el pago en el acto, se procederá a embargar bienes suficientes para cubrir la cantidad demandada y las costas, depositándolos judicialmente.

El embargo se practicará aun cuando el deudor no se halle presente.

En este caso, se le hará saber dentro de los tres días siguientes al de la traba; y en caso de ignorarse su domicilio, se le nombrará defensor, previa citación por edictos durante tres días.

472. Si el juez denegare la ejecución, podrá apelarse en relación dentro de tercero día.

473. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en bienes inmuebles, bastará su anotación en el registro de hipotecas y gravámenes.

Si lo fuere de bienes que se hallen en poder de un tercero, se notificará a éste en el día, en persona o por cédula.

474. No conociéndole bienes al deudor, podrá solicitarse contra él inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que quedará sin efecto tan luego como presentare bienes a embargo o diere caución bastante.

475. La ejecución no puede despacharse sino por cantidad



líquida. Si del título ejecutivo resultase deuda de cantidad líquida y otra que fuese indeterminada o ilíquida, se despachará ejecución por la líquida, reservando la repetición de lo demás para otro juicio.

476. El embargo de bienes se hará en el orden siguiente:

- 1° Dinero efectivo;
- 2° Alhajas, piedras o metales preciosos;
- 3° Bienes muebles o semovientes;
- 4° Bienes raíces;
- 5° Créditos o acciones;
- 6° Sueldos, salarios y pensiones.

477. El orden fijado en el artículo anterior se entiende establecido en favor del acreedor. Sin embargo, si los muebles constituyeran un establecimiento comercial o industrial, o fueran los del uso de la casa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo, presentando otros bienes de entre los enumerados que estén libres, o que, aun cuando estuviesen gravados, bastasen manifiestamente a cubrir el crédito reclamado.

478. Si el mandamiento de ejecución no designase bienes para el embargo, se embargarán los que ofrezca el deudor, estando conforme el ejecutante; y si no, los que éste señale, si estuviese en posesión de ellos el deudor, salvo lo dispuesto en el artículo precedente.

479. Si hubiese bienes dados en prenda o hipoteca, se procederá contra ellos antes que contra ningunos otros.

480. No se trabará nunca embargo en el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.

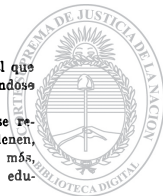
Ningunos otros bienes se considerarán exceptuados.

481. En el caso de procederse contra los sueldos, salarios y pensiones, sólo se embargará la cuarta parte.

482. Trabado embargo en bienes raíces, el secretario lo hará saber, dentro de veinticuatro horas, al encargado del

---

Art. 480. — Véase art. 12 de la ley núm. 4128; arts. 347, 337 y 2340 del cód. civil; art. 2 de la ley núm. 10.284; art. 18 de la ley núm. 9327; art. 1.º de la ley núm. 3942; arts. 1.º y 2.º de la ley núm. 9511; art. 13 de la ley núm. 9688; art. 14 de la ley núm. 10.650.



registro de hipotecas, quien lo anotará en un libro especial que llevará al efecto en la forma de los demás registros, poniéndose constancia en los autos.

Las anotaciones en el registro a que este artículo se refiere, así como todas las demás que judicialmente se ordenen, deben ser hechas dentro de cuarenta y ocho horas a lo más, so pena de quinientos pesos de multa, a beneficio de la educación común.

483. Aunque pague el deudor dentro de las veinticuatro horas posteriores al requerimiento, y aun en el acto de éste, serán de su cargo las costas causadas en el juicio.

484. Si durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse sentencia, venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se proceda, puede, si lo pidiere el actor, ampliarla la ejecución por su importe, sin necesidad de retroceder, y considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido.

485. Hecho el embargo, se citará de remate al deudor, haciéndosle saber que si dentro de tres días perentorios no se opone, deduciendo excepción legítima, se llevará la ejecución adelante.

La notificación de este auto se hará por medio de cédula.

486. No oponiéndose dentro de dicho término, el juez pronunciará la sentencia de remate.

487. Si se opusiere, deberá hacerlo determinando con precisión las excepciones que tuviere, y no se le admitirán en este juicio sino las que entonces hubiere manifestado.

488. Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo, son:

- 1° Incompetencia de jurisdicción;
- 2° Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus procuradores o apoderados;
- 3° Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente;
- 4° Falsedad o inhabilidad del título con que se pide la ejecución;
- 5° Prescripción;
- 6° Fuerza o miedo de los que, con arreglo a la ley, hacen nulo el consentimiento;
- 7° Pago;



8ª Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución;

9ª Quita, espera o remisión;

10 Novación;

11 Transacción o compromiso.

489. Podrá también el deudor alegar de nulidad de la ejecución, por violación de las formas que para ella quedan establecidas.

490. Opuestas las excepciones, se dará traslado, con calidad de autos, al actor, quien deberá contestar dentro de tres días.

Antes de contestar, puede exigir que el demandado especifique detalladamente, si no lo hubiese hecho, las excepciones opuestas y los hechos en que se funden, lo que deberá verificarse dentro de segundo día.

En seguida se recibirá la causa a prueba por diez días si las excepciones fuesen admisibles.

491. Si se declarase que las excepciones opuestas no son admisibles, podrá apelarse en relación.

492. El término de prueba será común, y podrá usarse en él de los mismos medios probatorios y en la misma forma que en el juicio ordinario.

493. El término de prueba no podrá suspenderse ni prorrogarse, sino de conformidad de ambos litigantes.

494. Todas las notificaciones, durante dicho término, se harán en el día.

495. Vencido el término probatorio, las pruebas producidas se pondrán de manifiesto en la escribanía durante dos días, para que las partes puedan imponerse de ellas.

496. Enteradas las partes de las pruebas o vencido el término sin haberse producido, de lo que dará cuenta el actuario, el juez llamará autos para sentencia, pudiendo para mejor proveer, correr un nuevo traslado que será evacuado dentro de seis días comunes a las partes.

497. El juez pronunciará sentencia de remate dentro de seis días contados desde la expiración del término para el traslado de que habla el artículo anterior, o en su defecto desde la providencia de "autos".

498. La sentencia de remate sólo podrá determinar una de estas dos cosas:



Llevar la ejecución adelante;  
No hacer lugar a la ejecución.

499. Cuando el deudor no haya comparecido, la sentencia se notificará por edictos en dos diarios durante tres días consecutivos.

500. Cualquiera que sea la sentencia en el juicio ejecutivo, quedará, tanto al actor como al ejecutado, su derecho a salvo para promover el ordinario.

501. La sentencia de remate será apelable, cuando se hayan opuesto excepciones e intentado probarlas.

Esa apelación se concederá sólo en el efecto devolutivo si en caso de ser condenatoria, el ejecutante diese fianza de responder de lo que perciba, si la sentencia fuese revocada por el superior.

Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce el derecho, con tal que baste para su objeto, y la clasificará el juez exclusivamente.

502. Si no se presentase la fianza dentro de los seis días siguientes a la concesión del recurso, se elevarán los autos al superior con citación de las partes.

503. Si se diese la fianza, se remitirán también los autos, dejando testimonio de lo necesario para que se prosiga la ejecución.

504. Esta fianza sólo será extensiva al resultado del juicio ordinario, cuando así lo solicite el ejecutado, con arreglo a los arts. 501, 502 y 503. En los demás casos quedará de derecho cancelada, confirmada que sea la sentencia por el superior.

505. Fuera de la sentencia de remate, sólo son apelables en el juicio ejecutivo, los autos que se declaren tales en el presente título.

El término para apelar será en todos los casos de tres días perentorios: y el recurso se otorgará siempre en relación, procediéndose con arreglo a lo dispuesto para esta clase de recursos en el juicio ordinario.

506. No se admitirá ante el superior escrito alguno de alegato, ni más pruebas que las que consistan en documentos públicos.

507. Las costas del juicio ejecutivo serán todas a cargo de la parte que sea vencida en último grado, con excepción de

correspondientes a cualquiera pretensión de la otra parte, si no ha sido desestimada.

## SECCION II

### Del cumplimiento de la sentencia de remate

508. Consentida la sentencia de remate, confirmada por el juez, o dada la fianza en caso de pedirse su ejecución, no antes de la apelación, se hará pago inmediatamente al acreedor del capital, intereses y costas, previa tasación de éstas, si embargo fuese dinero, sueldos, pensiones o créditos reales en el acto.

509. Si los bienes embargados fuesen muebles o alhajas, se procederá a su venta en remate, por un martillero público, previa tasación.

El remate se anunciará en la forma de costumbre por tres días a discreción del juez, según la importancia de los bienes, y durante la publicación, se expondrán al examen del público las alhajas y objetos de plata u oro, en el lugar que en nuncios se designe.

510. Si fuesen bienes raíces se procederá a su justiprecio por peritos que nombren las partes; y en caso de discordia, la decidirá un tercero nombrado por el juez.

511. Practicadas las tasaciones, se hará saber a las partes, que dentro del término de cuatro días perentorios y comunes a ambas, manifiesten su conformidad o disconformidad, no pudiendo fundarse ésta en el importe de la avaluación.

Durante dicho término, los autos permanecerán en la oficina a disposición de los interesados y una vez vencido, el juez resolverá sin más trámites, aprobando o desaprobando las tasaciones.

512. Si se aprobasen, se ordenará la venta de los bienes por el martillero que las partes propongan. No estando éstas conformes con el martillero que deba practicar la venta, deberá nombrarse otro por el juez.

513. El remate se anunciará por un término que no baje





de quince días, ni exceda de treinta, fijándose edictos a las puertas de la escribanía y en los demás sitios públicos de costumbre. Se anunciará igualmente en dos diarios, por diez veces a lo menos.

Si los bienes estuvieren situados fuera del pueblo donde esté el juzgado, se fijará también un ejemplar de los edictos en el juzgado de paz del partido correspondiente, ampliándose en este caso el término, según las distancias.

514. Lo dispuesto en el artículo anterior, se entiende sin perjuicio de cualesquiera otros medios de publicidad que los interesados quieran emplear de su cuenta, a cuyo efecto el actuario les dará copia de los edictos, si la pidieren.

515. No se admitirá en los remates de bienes raíces posturas que no alcancen a las dos terceras partes de la tasación.

516. No habiendo posturas, quedará al arbitrio del actor pedir:

O un nuevo remate, previa reducción de la tasación en un veinticinco por ciento.

O que se le adjudiquen los bienes por las dos terceras partes de la tasación.

517. Si no obstante la reducción de que habla el artículo anterior, no se presentasen postores, se ordenará la venta sin limitación de precio.

518. Si hecha y aprobada la tasación del bien raíz embargado en el caso del art. 479, resultase que su valor no alcanza a cubrir el crédito reclamado, el actor u otro acreedor prenda-rio o hipotecario que estuviere en segundo término, podrá pedir se amplíe el embargo trabado o se trabe nuevo embargo en alguno de los bienes enumerados en el art. 476.

519. Si por culpa del postor a quien se hubiese adjudicado los bienes, dejase de tener efecto la venta, se procederá a un nuevo remate en la forma que queda establecida, siendo el mismo postor responsable de la disminución de precio del segundo remate, de los intereses acrecidos y las costas causadas con este motivo, al pago de todo lo cual será compelido ejecutivamente, a petición de parte.

520. Aprobado el remate, si los bienes fuesen muebles o alhajas, serán entregados al comprador, previa consignación y



las correspondientes a cualquiera pretensión de la otra parte que haya sido desestimada.

## SECCION II

### Del cumplimiento de la sentencia de remate

**508.** Consentida la sentencia de remate, confirmada por el superior, o dada la fianza en caso de pedirse su ejecución, no obstante la apelación, se hará pago inmediatamente al acreedor del capital, intereses y costas, previa tasación de éstas, si lo embargado fuese dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto.

**509.** Si los bienes embargados fuesen muebles o alhajas, se procederá a su venta en remate, por un martillero público, sin necesidad de tasación.

El remate se anunciará en la forma de costumbre por tres a ocho días a discreción del juez, según la importancia de los bienes, y durante la publicación, se expondrán al examen del público las alhajas y objetos de plata u oro, en el lugar que en los anuncios se designe.

**510.** Si fuesen bienes raíces se procederá a su justiprecio por peritos que nombren las partes; y en caso de discordia, la dirimirá un tercero nombrado por el juez.

**511.** Practicadas las tasaciones, se hará saber a las partes, para que dentro del término de cuatro días perentorios y comunes a ambas, manifiesten su conformidad o disconformidad, no pudiendo fundarse ésta en el importe de la avaluación.

Durante dicho término, los autos permanecerán en la oficina a disposición de los interesados y una vez vencido, el juez resolverá sin más trámites, aprobando o desaprobando las tasaciones.

**512.** Si se aprobasen, se ordenará la venta de los bienes por el martillero que las partes propongan. No estando éstas conformes con el martillero que deba practicar la venta, deberá ser nombrado por el juez.

**513.** El remate se anunciará por un término que no baje





de quince días, ni exceda de treinta, fijándose edictos a las puertas de la escribanía y en los demás sitios públicos de costumbre. Se anunciará igualmente en dos diarios, por diez veces a lo menos.

Si los bienes estuvieren situados fuera del pueblo donde esté el juzgado, se fijará también un ejemplar de los edictos en el juzgado de paz del partido correspondiente, ampliándose en este caso el término, según las distancias.

514. Lo dispuesto en el artículo anterior, se entiende sin perjuicio de cualesquiera otros medios de publicidad que los interesados quieran emplear de su cuenta, a cuyo efecto el actuario les dará copia de los edictos, si la pidieren.

515. No se admitirá en los remates de bienes raíces posturas que no alcancen a las dos terceras partes de la tasación.

516. No habiendo posturas, quedará al arbitrio del actor pedir:

O un nuevo remate, previa reducción de la tasación en un veinticinco por ciento.

O que se le adjudiquen los bienes por las dos terceras partes de la tasación.

517. Si no obstante la reducción de que habla el artículo anterior, no se presentasen postores, se ordenará la venta sin limitación de precio.

518. Si hecha y aprobada la tasación del bien raíz embargado en el caso del art. 479, resultase que su valor no alcanza a cubrir el crédito reclamado, el actor u otro acreedor prendario o hipotecario que estuviere en segundo término, podrá pedir se amplíe el embargo trabado o se trabe nuevo embargo en alguno de los bienes enumerados en el art. 476.

519. Si por culpa del postor a quien se hubiese adjudicado los bienes, dejase de tener efecto la venta, se procederá a un nuevo remate en la forma que queda establecida, siendo el mismo postor responsable de la disminución de precio del segundo remate, de los intereses acrecidos y las costas causadas con este motivo, al pago de todo lo cual será compelido ejecutivamente, a petición de parte.

520. Aprobado el remate, si los bienes fuesen muebles o alhajas, serán entregados al comprador, previa consignación y



depósito del preso en el establecimiento público destinado al efecto.

Si fieren prisiones, se otorgará la competente escritura por el ejecutado, y en su defecto por el juez, debiendo también consignarse previamente el preso.

521. Antes de hacerse la exhibición, podrá el comprador pedir que se exhiban los títulos de propiedad para examinarlos, y el juez o el letrado al promotor lo que se pongan de manifiesto en la exhibición del inmueble en tres días preteritos.

522. Si los títulos adolecen de algún vicio que no pueda subsanarse en la exhibición, el comprador deberá optar entre el depósito en la cámara, sin responsabilidad alguna, o la retención de ellos con los defectos de que adolezcan los títulos.

523. Hecha la exhibición del preso, se mandará hacer la liquidación del crédito, intereses y costas del juicio. Prescrita esta obligación, se podrá saber a los interesados, quienes en el acto lo harán, o dentro de ella expresare su conformidad o disconformidad, en el último caso las razones en que la funden.

524. En señal de el juez, sin más trámite, aprobará o mandará reformar la liquidación.

525. Al otorgar la liquidación, deberá el pago de su importe, efectuada por el ejecutado, si el ejecutado lo pidiere a la exhibición del inmueble como puede promover el último. A los efectos es aplicable la disposición al final del art. 501.

526. Si dentro de treinta días el ejecutado no promoviere el juicio ejecutivo, el Juez "quodam iure" chancelada.

527. Si no se ha otorgado cumplimiento el ejecutado, no podrá pedir que se cumpla las sumas realizadas a otros objetos, a menos que sea para las costas de la ejecución o para pago de otro crédito que haya sido declarado preferente por ejecutoria.

528. Los gastos hechos por el deudor para su defensa, no tendrán carácter de crédito preferente, a menos que haya sido hecha por un defensor nombrado de oficio.

## SECCION III

### De las tercerías



**529.** Las tercerías que se deduzcan en los juicios ejecutivos, deben fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero tenga de ser pagado con preferencia al ejecutante.

Unas y otras deben substanciarse en expediente por separado y en el juicio ordinario correspondiente.

**530.** Si la tercería deducida fuese de dominio, consentida ejecutoriada que sea la sentencia de remate, se suspenderán los procedimientos del juicio ejecutivo hasta que se decida.

**531.** Si la tercería fuese de mejor derecho, seguirá el juicio ejecutivo hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta que se decida quién tiene mejor derecho.

**532.** Las tercerías se substanciarán con el ejecutante y el ejecutado.

**533.** La deducción de cualquiera tercería será bastante fundamento para que se amplíe y mejore el embargo, si el actor lo solicitare.

**534.** Cuando resulte probada la connivencia del tercer opositor con el ejecutado, el juez podrá aplicar la pena de detención, por el término de tres a seis meses, sin perjuicio de las acciones criminales a que hubiere lugar.

## TITULO XV

### De la ejecución de las sentencias

**535.** Consentida o ejecutoriada la sentencia, sea de los tribunales ordinarios, arbitrales o de amigables componedores, y si la misma sentencia hubiere fijado plazo para su cumplimiento, transcurrido que él sea, se procederá a ejecutarla a instancia de la parte interesada, bajo las reglas que se expresan en los artículos siguientes.



depósito del precio en el establecimiento público destinado al efecto.

Si fuesen raíces, se otorgará la competente escritura por el ejecutado, y en su defecto por el juez, debiendo también consignarse previamente el precio.

**521.** Antes de hacerse la oblación, podrá el comprador pedir que se exhiban los títulos de propiedad para examinarlos, y el juez así lo proveerá, mandando que se pongan de manifiesto en la escribanía del actuario por tres días perentorios.

**522.** Si los títulos adoleciesen de algún vicio que no pueda subsanarse en breve tiempo, el comprador deberá optar entre el desistimiento de la compra, sin responsabilidad alguna, o la realización de ella con los defectos de que adolezcan los títulos.

**523.** Hecha la oblación del precio, se mandará hacer la liquidación del capital, intereses y costas del juicio. Practicada que sea, se hará saber a los interesados, quienes en el acto de la notificación deberán expresar su conformidad o disconformidad, indicando en el último caso las razones en que la funden.

**524.** En seguida el juez, sin más trámite, aprobará o mandará reformar la liquidación.

**525.** Aprobada la liquidación, se hará el pago de su importe, prestando fianza el ejecutante, si el ejecutado lo pidiera a las resultas del juicio ordinario que puede promover el último. A esta fianza es aplicable lo dispuesto al final del art. 501.

**526.** Si dentro de treinta días el ejecutado no promoviere el juicio ordinario, la fianza quedará "ipso jure" cancelada.

**527.** Sin estar reintegrado completamente el ejecutante, no podrán aplicarse las sumas realizadas a otros objetos, a menos que sea para las costas de la ejecución o para pago de otro acreedor que haya sido declarado preferente por ejecutoria.

**528.** Los gastos causados por el deudor para su defensa, no tendrán en ningún caso prelación, a menos que haya sido hecha por un defensor nombrado de oficio.

### SECCION III

#### De las tercerías



**529.** Las tercerías que se deduzcan en los juicios ejecutivos, deben fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero tenga de ser pagado con preferencia al ejecutante.

Unas y otras deben substanciararse en expediente por separado y en el juicio ordinario correspondiente.

**530.** Si la tercería deducida fuese de dominio, consentida o ejecutoriada que sea la sentencia de remate, se suspenderán los procedimientos del juicio ejecutivo hasta que se decida.

**531.** Si la tercería fuese de mejor derecho, seguirá el juicio ejecutivo hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta que se decida quién tiene mejor derecho.

**532.** Las tercerías se substanciarán con el ejecutante y el ejecutado.

**533.** La deducción de cualquiera tercería será bastante fundamento para que se amplíe y mejore el embargo, si el actor lo solicitare.

**534.** Cuando resulte probada la connivencia del tercer opositor con el ejecutado, el juez podrá aplicar la pena de detención, por el término de tres a seis meses, sin perjuicio de las acciones criminales a que hubiere lugar.

### TITULO XV

#### De la ejecución de las sentencias

**535.** Consentida o ejecutoriada la sentencia, sea de los tribunales ordinarios, arbitrales o de amigables componedores, y si la misma sentencia hubiere fijado plazo para su cumplimiento, transcurrido que él sea, se procederá a ejecutarla a instancia de la parte interesada, bajo las reglas que se expresan en los artículos siguientes.



**536.** Si la sentencia contuviese condena al pago de cantidad líquida y determinada, se procederá siempre, a instancia de parte, al embargo de bienes en la forma y orden prevenidos para el juicio ejecutivo.

**537.** A los efectos de la disposición contenida en el artículo anterior, se entenderá que hay condenación al pago de cantidad líquida, siempre que de la sentencia misma se infiera el monto de la liquidación, aun cuando éste no estuviese expresado numéricamente.

**538.** Hecho el embargo en la forma prevenida para el juicio ejecutivo, se citará al deudor para la venta de los bienes embargados, si dentro de tercero día no opusiere y probare excepción legítima contra la ejecución.

**539.** Sólo se consideran legítimas las siguientes excepciones:

Falsedad de la ejecutoria;

Prescripción de la misma;

Pago;

Quita, espera o remisión.

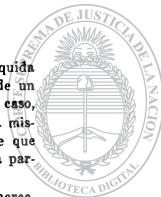
La prueba de las excepciones mencionadas en los tres últimos incisos del artículo anterior, se hará precisamente por documentos que se acompañarán al deducir la excepción, con exclusión de todo otro medio probatorio. Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin más recurso.

**540.** Vencidos los tres días si no se hubiese deducido oposición, se mandará continuar la ejecución, sin recurso de ningún género.

Si se hubiese deducido oposición, se agregarán las pruebas producidas, y el juez, en su vista, mandará continuar la ejecución o declarando probada la excepción opuesta, mandará levantar el embargo.

De esta resolución habrá los mismos recursos y en la misma forma que de la sentencia de remate en el juicio ejecutivo.

**541.** Consentida y ejecutoriada la providencia que mande llevar adelante la ejecución, se procederá en todo según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor; pudiendo exigirse fianza a las resultas del juicio ordinario, que en tales casos puede promover el deudor.



**542.** Si la sentencia condenase al pago de cantidad líquida procedente de frutos, se intimará al deudor que dentro de un término que señale el juez, según las circunstancias del caso, presente su liquidación con arreglo a las bases que en la misma sentencia se hubiesen fijado; bajo apercibimiento de que no haciéndolo, estará y pasará por lo que presente la otra parte en todo lo que él no pruebe ser inexacto.

**543.** Presentada la liquidación, el juez dará vista al acreedor por el término de seis días.

**544.** Estando éste conforme con ella, se procederá a hacer efectiva la suma que resulte, en la forma prescripta para cuando se trate de cantidad líquida.

**545.** No habiendo conformidad, el juez recibirá la causa a prueba por un término que no excederá de treinta días.

**546.** Vencido el término de prueba, el juez mandará que se agreguen a los autos las que se hayan producido, pudiendo para mejor proveer correr un nuevo traslado por su orden.

**547.** La sentencia que se dicte será apelable en relación, debiendo observarse lo dispuesto en los arts. 501 a 503.

**548.** Si el deudor no presentase la liquidación en el término que se le señalare al efecto, podrá la otra parte presentarla, a fin de que se haga efectivo el apercibimiento (Art. 542).

**549.** Presentada la liquidación por el acreedor, se procederá con arreglo al art. 543.

**550.** Si el deudor prestase su conformidad, será aprobada por el juez, procediéndose a la ejecución por la suma que de ella resulte.

La sentencia aprobatoria en este caso, será inapelable.

**551.** Si el deudor se opusiese, se procederá con arreglo a lo prevenido en los arts. 545 a 547.

En la sentencia que se pronuncie se aprobará la liquidación presentada por el acreedor en todo lo que el deudor no probase ser inexacta, siendo conforme a las bases fijadas en la sentencia para hacerla.

**552.** Si la sentencia que haya de ejecutarse condenase al pago de cantidad líquida procedente de perjuicios, el acreedor presentará relación de ellos, al pedir el cumplimiento de la ejecutoria.





En seguida se observará el procedimiento establecido en los arts. 543 a 547.

553. Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin esperar que se liquide la segunda.

554. En caso que la sentencia contuviese condena de hacer alguna cosa, si el condenado no cumplierse con lo que se le ordena para la ejecución de la sentencia dentro del plazo que el juez le señale, se hará a su costa, o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inexecución, a elección del acreedor.

Para hacer efectiva la indemnización, se aplicarán las reglas establecidas, según que la sentencia haya fijado o no la importancia de los perjuicios para el caso de inexecución.

555. Si la sentencia condenase a no hacer alguna cosa, y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción a pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnicen los daños y perjuicios conforme a lo prescripto en el artículo anterior.

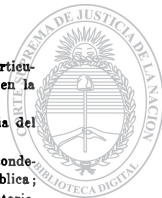
556. Cuando la condena sea de entregar alguna cosa, se librará el correspondiente mandamiento para desapoderar de ella al obligado; y caso que esto no pudiese verificarse, se le obligará a la entrega del precio, previa la evaluación necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

557. Siempre que las liquidaciones o cuentas a que haya de procederse sean muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requieran conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos, amigables componedores.

## TÍTULO XVI

### De la ejecución de las sentencias dictadas en países extranjeros

558. Las sentencias pronunciadas en países extranjeros, tendrán en la provincia la fuerza que establezcan los tratados



**559.** En defecto de tratados que estatuyan sobre el particular, las ejecutorias de países extranjeros tendrán fuerza en la provincia, si reúnen las circunstancias siguientes:

1° Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal;

2° Que no haya sido dictada en rebeldía de la parte condenada, siempre que ésta haya tenido domicilio en la república;

3° Que la obligación que haya dado lugar a la ejecutoria, sea válida según nuestras leyes;

4° Que la ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como tal y los que las leyes argentinas requieren para que hagan fe en la república.

**560.** La ejecución de las sentencias dictadas en naciones extranjeras, se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda. Este, previa la traducción de la ejecutoria, sino estuviera redactada en idioma patrio, y después de oír a la parte contra quien se dirige y al agente fiscal, declarará si debe o no dársele cumplimiento.

**561.** De la resolución que se dicte podrá apelarse en relación para ante la cámara respectiva.

**562.** Consentida o ejecutoriada la resolución que deniegue el cumplimiento de la ejecutoria, ésta se devolverá al que la haya presentado.

En el caso de que la resolución fuese otorgando el cumplimiento de la ejecutoria, se procederá en la forma establecida en esta ley para la ejecución de las sentencias.

## **TITULO XVII**

### **De los interdictos**

**563.** Los interdictos sólo pueden intentarse:

1° Para adquirir la posesión;

2° Para retenerla;

3° Para recobrarla;

4° Para impedir una obra nueva.

## SECCION I

### Del interdicto de adquirir

**564.** Para que proceda el interdicto de adquirir, son requisitos indispensables:

1° Que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho, entendiéndose por tal, todo documento o prueba, sino completa para acreditar el dominio, por lo menos suficiente para acreditar la presunción de que la cosa que se intenta poseer corresponde al que solicita la posesión

2° Que nadie posea, a título de dueño o de usufructuario, los bienes cuya posesión se pide.

**565.** Si alguno los poseyere, no podrá ser privado de su posesión, sin ser oído y vencido en juicio.

**566.** Intentado el interdicto, el juez examinará el título en que se funde, y si no lo hallare suficiente, negará la posesión.

**567.** De este auto podrá pedirse revocatoria o apelación en subsidio, dentro de tercero día.

**568.** Si el juez hallare suficiente el título, y los bienes no estuviesen detentados, mandará llamar, por el término de treinta días, a los que se consideren con derecho a la misma posesión, por edictos, en que se designen claramente los bienes, y se exprese la acción intentada.

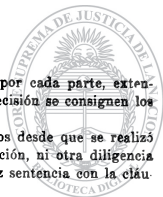
Estos edictos se publicarán en dos diarios durante quince días; y si los bienes estuvieran situados fuera del pueblo en que resida el juzgado, se fijará un ejemplar en el juzgado de paz del partido correspondiente.

**569.** No presentándose persona alguna en el término de los edictos, se dará la posesión al demandante sin perjuicio de mejor derecho.

**570.** Si compareciese alguna persona en virtud de los edictos, o cuando la demanda sea dirigida contra el detentador de los bienes, después de ser éste notificado, el juez citará a juicio verbal, con intervalo de tres días, pasándose a los emplazados copia de la demanda y documentos con que ésta se hubiese instruido.

**571.** En este juicio verbal oír a las partes o sus defensores, recibirá los documentos y testigos que se presenten,





los cuales no podrán ser más de cinco por cada parte, extendiéndose nota en que con claridad y precisión se consignen los alegatos y las pruebas producidas.

**572.** Dentro de los tres días contados desde que se realizó el juicio verbal, y sin necesidad de citación, ni otra diligencia de prueba o trámite, pronunciará el juez sentencia con la cláusula: sin perjuicio de mejor derecho.

**573.** Esta sentencia será apelable en relación para ante el superior, el que deberá resolver sin más trámite, dentro de los quince días siguientes al llamamiento de autos.

## SECCION II

### Del interdicto de retener

**574.** Para que tenga lugar el interdicto de retener, se requiere:

1º Que el que lo intente se halle en actual posesión;

2º Que se haya tratado de inquietarlo en ella, por actos materiales que se expresarán en la demanda.

**575.** Deducido el interdicto, el juez convocará a juicio verbal, con intervalo de tres días, al actor y al que éste pretenda que lo inquieta en la posesión.

**576.** Oídas las partes y extendida acta como en el interdicto de adquirir, el juez pronunciará sentencia dentro de los tres días siguientes.

**577.** En este juicio sólo se admitirán las pruebas que tengan por objeto acreditar el hecho de la posesión o no posesión, del que haya promovido el interdicto, y la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al demandado.

**578.** La sentencia deberá limitarse a amparar en la posesión al que así lo haya solicitado, o declarar que no ha lugar al interdicto.

En el primer caso, se condenará en costas al demandado; en el segundo, al actor.

**579.** Cualquiera que sea la sentencia, se entenderá siempre sin perjuicio de las acciones de posesión o de dominio que puedan corresponder al vencido con arreglo a derecho.

**580.** La sentencia será apelable en relación, debiendo procederse ante el superior, en la forma prevenida en el art. 573.



## SECCION III

### Del interdicto de recobrar

**581.** Para que tenga lugar el interdicto de recobrar o de despojo, se requiere:

1° Que el que lo intente, o su causante, haya estado en posesión o tenencia de la cosa demandada;

2° Que hayan sido despojados con violencia o clandestinamente de esa posesión.

**582.** Presentada la demanda, se procederá a oír las partes en la misma forma que en los interdictos de adquirir y de retener.

**583.** Dentro de los tres días siguientes, el juez dictará sentencia, no haciendo lugar al interdicto o mandando restituir la posesión al despojado. En el primer caso, se condenará en costas al actor. En el segundo, se condenará al despojante en costas, daños y perjuicios.

**584.** La sentencia será apelable en los términos y forma del art. 573.

## SECCION IV

### Del interdicto de obra nueva

**585.** Presentada una demanda para la suspensión de cualquiera obra nueva, el juez la decretará provisionalmente, y procederá según lo dispuesto por los arts. 31 y 32, tít. 3°, lib. 3°, cód. civil, en la forma establecida para los interdictos de retener o para el de recobrar la posesión, según los casos.

## TITULO XVIII

### Del juicio de desalojo

**586.** Interpuesta la demanda por el propietario, el juez decretará un comparendo en el que se oír a las partes lo que expongan sobre la existencia o inexistencia de contrato u otras circunstancias, levantándose de todo un acta detallada.



587. Si el demandado no asistiera al comparendo mencionado, se decretará éste por segunda vez, previniéndole que tendrá lugar con la presencia del compareciente y que se pasará por lo que él exponga; prevención que se hará efectiva llegado el caso.

588. No existiendo contrato, se dará para el desalojo el término que acuerda el cód. civil, teniendo en consideración la naturaleza del predio arrendado. Vencido ese término, se decretará el lanzamiento inmediato por intermedio de la fuerza pública.

589. Si existiese contrato, pero de término ya vencido, se decretará el lanzamiento en la misma forma, pudiendo el juez en este caso, según las circunstancias, acordar un plazo que nunca podrá exceder de diez días.

590. Si en el comparendo de que habla el art. 586, el demandado exhibiese contrato que fuese tachado de falso por el propietario, se recibirá la causa a prueba en juicio ordinario.

Probada la falsedad del contrato, el juez al sentenciar, pondrá la persona del condenado a disposición del juez del crimen, enviándole los antecedentes necesarios para la formación de la causa.

591. Pedido el desalojo por la falta de pago a dos o más períodos consecutivos de alquileres o renta, se procederá en la forma determinada en los cuatro primeros artículos, observándose respecto al término lo dispuesto en el art. 589.

592. Sólo será apelable en el presente juicio, el auto que se dictare en el caso del art. 590.

## **TITULO XIX**

### **Declaratoria de pobreza**

593. Para obtener la declaratoria de pobreza, el que la solicita deberá presentarse al juez de primera instancia de lo civil en turno, ofreciendo información, para que, dada y en su mérito, se acuerde la declaratoria y se expida el certificado correspondiente: deberá expresarse el asunto y persona con quien haya de litigar.

Art. 593. — Véase ley núm. 1420, art. 62; y ley núm. 10.505, art. 24.



594. Se acompañará en el escrito de presentación el interrogatorio al tenor del cual han de ser examinados los testigos, cuya nómina se acompañará, y que no podrán ser menos de tres.

595. Los extremos a justificar son: la pobreza, la imposibilidad de obtener recursos y la necesidad; siendo entendido que no obstará a la declaratoria de pobreza, la circunstancia de que una persona tenga apenas cómo procurarse la subsistencia.

596. El juez ordenará se reciba la información, con citación de la parte contraria, quien podrá asistir a ella.

597. Producida la información, se dará traslado al que la ha solicitado y a la parte contraria y vista al fiscal, después de la cual el juez pronunciará su auto, el cual será apelable en relación por ambas partes.

598. El auto lleva implícita la condición de servir, mientras permanezca el interesado sin mejorar de fortuna.

599. El certificado que de él se expida por el secretario, bastará para ocurrir al juez a quien compete conocer del asunto.

600. Cuando la parte que ha obtenido declaratoria de pobreza para litigar con una persona, se halle en el caso de hacerlo con otra, para que surta igual efecto relativamente a ésta, se hará nueva solicitud al mismo juez, pidiendo que la declaratoria anteriormente obtenida, se haga extensiva al nuevo o diferente negocio.

En este caso, oído este otro interesado, con lo que él y el agente fiscal expongan, se resolverá en el mismo sentido, si no hubiese mérito para lo contrario o para revocar la primera declaratoria.

601. El declarado pobre, no tendrá responsabilidad efectiva para el pago de honorarios, derechos, depósitos, etc., dando sólo caución juratoria de pagar, si llegase a mejor fortuna.

## **TITULO XX**

### **Del juicio de alimentos provisorios y litis expensas**

602. Todos aquéllos que por la ley tengan derecho a pedir alimentos, deberán presentarse al juez con los recaudos siguientes:



1ª Justificación del título en cuya virtud los pidan;  
2ª Justificación, aproximadamente por lo menos, del causal del que deba darlos.

603. Estas dos justificaciones pueden hacerse por medio de documentos, por información sumaria de testigos sin citación ni otra solemnidad, o bien por posiciones que se pidan a la persona a quien se pretenda obligar a suministrar alimentos.

604. Si en vista de dichas pruebas estimase el juez que la solicitud es procedente, debe acceder a ella, señalando la cantidad que crea justa y equitativa, atendiendo a las circunstancias del caso, y mandándola abonar siempre por meses anticipados.

605. Si la pretensión fuera denegada, procederá la apelación en ambos efectos, e interpuesta, se remitirá el expediente al superior, con citación sólo del que lo haya promovido; pero si, por el contrario, se conceden los alimentos, no se admitirá dicho recurso más que en un solo efecto, e interpuesto, se sacará testimonio de la sentencia, reservándose en el juzgado para su ejecución, y remitiéndose en seguida los autos al tribunal con citación de ambas partes.

606. Contra la sentencia dictada en segunda instancia no se admitirá más recurso, por quedar expedito el camino para el juicio ordinario.

607. No se admitirá en el juicio sumario sobre alimentos, discusión alguna sobre el derecho a percibirlos, ni sobre su entidad. Cualquiera reclamación sobre el particular deberá ventilarse en juicio ordinario, debiendo entre tanto suministrarse los alimentos provisorios señalados.

608. La reclamación sobre litis expensas en los casos en que haya derecho a exigirlos, se substanciará por los mismos trámites.

## **TÍTULO XXI**

### **Del juicio de mensura, deslinde y amojonamiento**

609. Es juez competente para conocer de la mensura, deslinde y amojonamiento de los terrenos pertenecientes al dominio

Art. 609. — La palabra "departamento" debe entenderse como lugar de la situación de la cosa.





privado, el juez ordinario del departamento en que estén situados.

**610.** El que promueva el juicio de deslinde y amojonamiento deberá presentar los títulos auténticos que acrediten su dominio, y expresar los linderos actuales del terreno en todos sus rumbos.

No presentando títulos en forma, el juez repelerá de oficio **611.** Deducida la pretensión con los requisitos necesarios, la solicitud.

el juez mandará practicar la operación de deslinde por el perito que el interesado proponga, debiendo dicho perito citar para ella a todos los propietarios de los terrenos colindantes.

**612.** Cuando el juicio tenga por causa la acción de deslinde por confusión de linderos (cód. civil, título “Del condominio”) si los colindantes no pudiesen ponerse de acuerdo en el nombramiento de un solo perito, cada uno deberá proponer el suyo, siendo de su cuenta el honorario que le corresponda.

**613.** Si hubiese algún terreno de propiedad fiscal o municipal contiguo, se citará también al agente fiscal, o al presidente de la municipalidad de distrito donde deba practicarse la mensura.

**614.** La citación se hará por medio de una circular en la que el agrimensor expresará la situación del terreno que se va a deslindar, la persona que solicite el deslinde, el juez que conoce del asunto y la oficina de actuación; debiendo serle aquella devuelta para constancia, con la firma de los linderos citados.

Si alguno de los linderos se negase a firmar la circular, el agrimensor lo hará constar en ella, ante dos testigos que firmarán con él.

A falta del dueño del terreno, esta citación se hará a los mayordomos, capataces, arrendatarios u otros ocupantes cualesquiera, si estuviesen autorizados por aquél al efecto.

**615.** En dos diarios que el juez designará, y con una anticipación cuando menos de cinco días, se publicarán además edictos con las mismas enunciaciones por el término de tres días, haciendo saber la diligencia que se va a practicar a todos los que puedan tener interés en ella.

**616.** En el día señalado, se procederá a la operación, con



asistencia de los dueños de los terrenos colindantes que se presentaren, o de sus apoderados, quienes podrán ir acompañados con perito de su elección.

617. Los concurrentes a la diligencia exhibirán en ella los títulos de sus propiedades, siempre que fuere necesario, y podrán hacer las reclamaciones que crean procedentes.

Si no exhibieren sus títulos, sin causa justificada, serán de su cargo las costas del juicio que llegaren a promover contra la mensura, cualquiera que fuese su resultado.

El agrimensor estará obligado a poner su firma al margen de los títulos que le fueren presentados.

618. Si hubiera conformidad en la diligencia, se extenderá acta firmada por todos los concurrentes.

El agrimensor extenderá además la diligencia de la operación que haya practicado, y levantará un plano figurativo de la misma, con arreglo a las instrucciones generales a que debe sujetarse.

619. El acta y la diligencia con el plano serán presentados por el agrimensor al departamento de ingenieros, antes de vencido un año desde la fecha en que recibió el expediente, y éste los pasará al juez respectivo, informando a continuación acerca de su mérito facultativo, dentro del término de treinta días.

La falta de cumplimiento por el agrimensor en el término que queda señalado, anulará su operación facultativa y lo hará responsable de los perjuicios causados, salvo el caso de fuerza mayor debidamente probado.

620. Con todo a la vista, y no resultando inconveniente, el juez dará su auto aprobatorio y mandará archivar el expediente, si hay en él más de un interesado o se ha deducido oposición por alguno de los linderos, que resulte fundada según la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada; ordenándose su entrega a la parte en caso contrario.

621. Si por alguno de los colindantes se dedujera oposición al tiempo de practicarse la diligencia, ésta se llevará a efecto, sin embargo, expresando en el acta las razones alegadas por los opositores y agregando las protestas escritas que pre-

Art. 619. — En la capital de la república corresponde oír a la Dirección de geodesia que desempeña funciones análogas a las del extinguido Departamento de ingenieros de la provincia de Buenos Aires.



sentaren. El agrimensor deberá además consignar en la diligencia de mensura los fundamentos de su proceder.

**622.** La operación no afectará en nada los derechos que los opositores puedan tener, tanto a la posesión, como a la propiedad del terreno.

**623.** Terminada la diligencia se pasará todo al juez letrado, conforme a lo prescripto en el art. 619.

**624.** El juez en seguida procederá a oír a los interesados, y a substanciar y decidir, por los trámites del juicio ordinario correspondiente, las pretensiones que deduzcan. Y siempre que sea conducente por la naturaleza de las cuestiones suscitadas, oírá antes de fallar al departamento de ingenieros, fijando los puntos sobre que debe recaer el informe.

**625.** Siempre que sea necesario regular los honorarios de los agrimensores, la estimación se hará por el departamento de ingenieros, sin más recurso.

## **TITULO XXII**

### **De las testamentarias**

#### **SECCION I**

##### **Disposiciones generales**

**626.** Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 14 y siguientes del título "De la división de la herencia" del código civil, el juicio testamentario tendrá lugar:

1° Cuando haya menores, aunque estén emancipados, o in capaces, o ausentes, cuya existencia sea incierta, que tengan interés en la sucesión;

2° Cuando terceros, fundándose en un interés jurídico, se opongan a que se haga la partición privada;

3° Cuando los herederos mayores y presentes, no se acuerden en hacer la división privadamente.

**627.** Son parte legítima para promover el juicio de testamentaria, los herederos, sus acreedores y todos los que tengan



en la sucesión algún derecho declarado por las leyes, no obstan-  
de cualquier prohibición del testador o convención en contrario.

628. Los tutores y curadores interesados en la sucesión,  
los padres por sus hijos, el marido por la mujer, y la mujer  
misma, con autorización de su marido o del juez, pueden pedir  
y admitir la partición pedida por otros.

629. Si el tutor o curador lo es de varios incapaces, que  
tienen intereses opuestos en la partición, se les debe dar a  
cada uno de ellos un tutor o curador especial que los represente.

Lo mismo sucederá si los intereses del tutor o curador estu-  
viesen en oposición con los del menor o incapacitado.

630. A los menores emancipados se les nombrará un cura-  
dor, sea para promover la demanda de partición, sea para res-  
ponder a la que se entable contra ellos.

631. Si hay coherederos ausentes con presunción de falle-  
cimiento, la acción de partición corresponde a los parientes a  
quienes se ha dado la posesión de los bienes del ausente. Si la  
ausencia no fuese sino presunta, no habiendo el ausente con-  
stituido un representante, cuando no fuese posible citarlo per-  
sonalmente, el juez nombrará un defensor que lo represente.

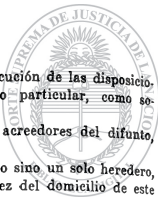
632. Los herederos bajo condición, no pueden pedir la par-  
tición de la herencia hasta que la condición se cumpla; pero  
pueden pedirla los otros coherederos, asegurando el derecho  
del heredero condicional. Hasta no saber si ha faltado o no  
la condición, la partición se entenderá provisional.

633. Si antes de hacerse la partición muere uno de los cohe-  
rederos, dejando varios herederos, bastará que uno de éstos  
pida la partición; pero si todos ellos lo hicieran o quisieran in-  
tervenir en la división de la herencia, deberán obrar bajo una  
sola representación.

634. Es juez competente para conocer del juicio de testa-  
mentaria, el del último domicilio del difunto. Ante él deben en-  
tablarse:

1º Las demandas concernientes a los bienes hereditarios,  
hasta la partición inclusive, cuando ellas sean deducidas por  
alguno de los sucesores universales contra sus coherederos;

2º Las demandas relativas a las garantías de los lotes  
entre los copartícipes, y las que tiendan a la reforma o nulidad  
de la partición:



3° Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, aunque sean a título particular, como sobre la entrega de los legados;

4° Las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia.

635. Si el difunto no hubiese dejado sino un solo heredero, las acciones deben dirigirse ante el juez del domicilio de este heredero, después que hubiese aceptado la herencia.

636. El que promueva el juicio de testamentaria debe justificar el fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, o su muerte presunta en los casos previstos por la ley y presentar su testamento, si lo tuviese, o determinar su existencia, para que sea agregado.

637. Agregado el testamento y acreditado que es parte legítima quien haga la solicitud, el juez abrirá el juicio de testamentaria y citará para él, en forma, a todos los interesados.

638. Si hubiere herederos menores o incapacitados que tengan tutor o curador, mandará citar a éstos.

Si no los tuviesen se les proveerá de ellos con arreglo a derecho.

639. Cuando la incapacidad proviniese de la ausencia, y fuese necesario el nombramiento de un defensor con arreglo a lo prevenido en el art. 631, deberá preceder el llamamiento por edictos durante treinta días, que se fijarán y se publicarán en la forma de costumbre, y con su resultado negativo tendrá lugar aquel.

640. Estando ausentes los herederos o alguno de ellos, y sabiéndose su residencia, la citación se hará por medio de exhorto u oficio en la forma ordinaria. Si se ignorase la residencia, se procederá al llamamiento por edictos y nombramiento de defensor en la forma prevenida por el art. 639.

641. Si alguno de los interesados lo solicitare, o si hubiese herederos menores o incapacitados, el juez dictará las medidas que considere necesarias para la seguridad de los bienes y papeles del difunto.

642. Al mismo tiempo convocará a junta a todos los interesados, y en su caso al defensor de menores, para que se pongan de acuerdo sobre la custodia y administración del caudal.

643. Si no pudiesen ponerse de acuerdo, determinará el



juez lo que corresponda según las circunstancias, con sujeción a las reglas siguientes:

1° El dinero efectivo se depositará en el establecimiento público destinado al efecto;

2° Se nombrará administrador al cónyuge sobreviviente o al heredero que, en concepto del juez, sea más apto para el ejercicio del cargo.

Sólo habiendo motivos especiales que hagan inconveniente el nombramiento de estas personas, podrá el juez nombrar un extraño.

644. En la misma junta se acordará todo lo necesario para las operaciones del inventario de los bienes y su avalúo.

645. Las operaciones de inventario y avalúo se practicarán simultáneamente, siempre que no fuere imposible por la naturaleza de los bienes.

646. No interviniendo el ministerio de menores, los interesados pueden, en cualquier estado del juicio, separarse de su prosecución y adoptar los acuerdos que crean convenientes.

647. Cuando lo solicitaren, deberá el juez sobreseer en el juicio, y poner los bienes a disposición de los herederos.

## SECCION II

### Del inventario y avalúo

648. Para hacer el inventario judicialmente, se dará comisión al escribano actuario, u otro en su lugar, con asistencia de dos testigos sin perjuicio de concurrir el juez a su formación en todo o en parte, si lo considerase conveniente.

649. Deben ser citados para la formación del inventario: el cónyuge, los herederos o sus representantes legales, y los acreedores y legatarios que se hubieren presentado.

650. Hechas las citaciones, se procederá con los que concurran a hacer la descripción de los bienes, especificándolos con la claridad y precisión convenientes.

651. Con la misma precisión se hará un inventario especial de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren.

652. Si hubiesen bienes fuera del lugar del juicio, se dará



comisión para inventariarlos al juez de la localidad en que se encuentren.

653. La diligencia o diligencias de inventarios, serán firmadas por todos los concurrentes, y en ellas se expresará cualquier disconformidad que se manifestase, designando los bienes sobre cuya inclusión o exclusión recayere.

654. Serán avaluados todos los bienes inventariados.

655. El avalúo deberá hacerse por peritos, que nombrarán los interesados de común acuerdo, en la junta que previene el art. 642.

656. Si los interesados no se pusiesen de acuerdo para la elección de los peritos, el nombramiento será hecho por el juez, debiendo limitar su número a los indispensables.

657. Serán aplicables a la recusación de los avaluadores, las disposiciones de esta ley referentes a la recusación de los peritos en general.

658. Hecho el avalúo, se mandará unir a los autos y se pondrá de manifiesto en la secretaría juntamente con el inventario, por un término de tres a diez días, para que los interesados puedan examinarlo.

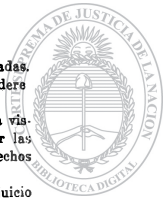
659. Si transcurriese dicho término sin haberse hecho oposición, se pondrán los autos al despacho, y el juez aprobará sin más trámite el inventario y avalúo, mandando proceder a la división.

660. Si se dedujeren reclamaciones sobre el inventario, se substanciarán en piezas separadas y en el juicio contradictorio que corresponda, sin suspender la continuación del juicio testamentario.

661. Si dentro del término señalado se dedujese oposición respecto de algunas evaluaciones, el juez convocará a junta a los interesados y a los peritos que las hubiesen practicado, para que discutan la cuestión promovida.

662. Esta junta se verificará con los que concurran, y en el acta que se extienda, se expresarán con precisión los hechos y las opiniones que sobre ellos manifiesten los interesados.

Si los que hicieron la oposición no asistiesen a la junta, se



les dará por desistidos, siendo a su cargo las costas causadas. En caso de inasistencia de los peritos, perderán éstos el derecho a honorarios por los trabajos que hayan practicado.

663. Terminada la junta, llamará el juez los autos a la vista y dictará sentencia, procediendo previamente a recibir las pruebas necesarias, si hubiere contradicción respecto a hechos pertinentes.

A estas pruebas se procederá por los trámites del juicio que corresponda, y resultando infundada la reclamación, todas las costas serán a cargo del que la deduzca.

664. La sentencia que recaiga será apelable en relación.

665. Si apareciere motivo fundado para creer que ha habido cohecho o fraude de parte de los peritos, el juez los remitirá inmediatamente a disposición del juez del crimen, con testimonio de lo que contra ellos resulte.

666. Aprobados el inventario y avalúo de los bienes y terminados los pleitos a que uno y otro hayan dado lugar, se procederá a la liquidación y división de la herencia.

667. Si hubiesen pleitos aun pendientes sobre inclusión o exclusión de bienes del inventario, se procederá a la división de la parte del caudal a que no se refieran los pleitos, si los interesados no determinan lo contrario.

### SECCION III

#### De la división

668. Por el mismo auto en que se mande proceder a la liquidación y división, serán convocadas las partes a junta, con el objeto de nombrar contador.

Si los interesados estuviesen conformes, podrán hacer el nombramiento en un solo escrito firmado por todos, sin esperar el día de la junta.

Si en ésta no pudiesen ponerse de acuerdo o no asistiesen al juicio, el nombramiento será hecho por el juez.

669. El nombramiento de contador puede recaer en cualquiera de la confianza de los que lo elijan, y se observarán, para él y para las recusaciones, las reglas establecidas con respecto a los peritos tasadores.





**670.** Elegido el contador y aceptado el cargo se le entregarán los autos, y bajo inventario, los papeles y documentos relativos al caudal, para que proceda a formar la liquidación.

**671.** Para hacer las adjudicaciones, el contador cuidará de oír a los interesados, a fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que estén de acuerdo, o de conciliar en lo posible sus pretensiones.

**672.** Concluida la liquidación y división, el contador la presentará en papel común, y el juez la mandará poner de manifiesto en la escribanía por cinco a quince días, con noticia de los interesados, para que la examinen, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 27.

**673.** Pasado el término sin hacerse oposición, el juez aprobará la cuenta mandando agregarla a los autos, con reposición del papel sellado correspondiente.

**674.** Si dentro del término se hiciere oposición, el juez convocará a junta a los interesados y al contador para que discutan y acuerden lo que más convenga.

**675.** Si todos los interesados llegasen a estar de acuerdo respecto de las cuestiones promovidas, se ejecutará lo acordado y el contador hará en la cuenta las reformas convenidas.

**676.** En caso de no haber conformidad, se consignarán en el acta las razones que se aduzcan y las explicaciones del contador; y en seguida se substanciará la oposición, considerándola como una demanda, por los trámites del juicio que corresponda.

**677.** Si los que hubiesen impugnado la cuenta particionaria dejaren de concurrir a la primera junta de que habla el art. 674, se les dará por desistidos, siendo a su cargo las costas causadas. En caso de inasistencia de los peritos, perderán éstos el derecho a los honorarios de su trabajo.

**678.** Aprobadas definitivamente las reparticiones, se procederá a ejecutarlas, entregando a cada interesado lo que le haya sido adjudicado, con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos por el escribano constancia de la adjudicación.

**679.** El honorario de los contadores podrá ser fijado con-



venionalmente, aun cuando haya interesados menores o incapacitados, con intervención del ministerio respectivo.

No habiendo convenio escrito, se hará la regulación por el juez de la causa, pudiendo apelarse en relación para ante el superior.

#### SECCION IV

##### De la administración de las testamentarias

680. De todo lo relativo a la administración de la testamentaria, se formará expediente por separado.

681. Nombrado el administrador, se le pondrá en posesión del cargo, dándolo a conocer a las personas con quienes deba entenderse.

682. El administrador estará obligado a rendir cuentas siempre que se le exija.

Estas cuentas se unirán a los autos y se pondrán de manifiesto en la secretaría, a disposición de todos los que sean partes en el juicio, durante el término de diez días.

Vencido este término, no será admisible reclamación alguna. Si se hiciere en oportunidad, el juez la oír y determinará en juicio verbal, mandando depositar el saldo que resultare.

683. Por toda remuneración, el administrador tendrá derecho a un tanto por ciento de comisión sobre el monto de los valores percibidos o realizados, en razón de la administración.

Dicha comisión será fijada por el juez, según las circunstancias de cada caso, no pudiendo exceder del cinco por ciento.

684. Si hubiere reclamaciones a este respecto, el juez las decidirá oyendo a los interesados en juicio verbal.

La resolución que diete será apelable en relación.

#### TITULO XXIII

##### Del juicio de ab-intestato y de herencia vacante

685. Para que pueda iniciarse de oficio el juicio de ab-intestato y de herencia vacante, se requiere:

1° Que no conste la existencia de disposición testamentaria;

Art. 685. — Véase ley núm. 163, sobre intervención en las sucesiones de los cónsules extranjeros.



**7** Que no deje el finado descendientes, ascendientes, conyugue o parientes colaterales dentro del sexto grado.

**686.** Si existiesen parientes de los expresados en el artículo anterior, que estén ausentes, se limitará el juez a adoptar las medidas más indispensables para la seguridad de los bienes del difunto, y a hacer saber inmediatamente a los interesados la muerte de la persona a cuya sucesión se les cree llamados.

Compareciendo los interesados, sólo tendrá lugar la intervención judicial en los casos y con arreglo a lo que se prescribe para el juicio de testamentaria.

**687.** Si el juez tuviese noticia de no haber hecho el finado disposición testamentaria, ni dejado parientes de los que se expresan en el art. 685, asegurará los bienes, libros y papeles de la sucesión, y anunciará por edictos la muerte del intestado, llamando a los que se crean con derecho a heredarle, para que dentro de treinta días comparezcan con los justificativos de su parentesco.

Estos edictos se fijarán en el pueblo donde hubiese ocurrido el fallecimiento y en el del juicio, y se insertarán en dos diarios de dichos lugares, si los hubiese, y en los de la capital, si el juez lo considera conveniente.

**688.** Si ningún pretendiente se presentase después de vencido el término de los edictos, o después de pasado el término para hacer inventario o deliberar, o cuando el heredero repudiase la herencia, la sucesión se reputará vacante.

**689.** Todos los que tengan reclamos que hacer contra la sucesión, podrán solicitar entonces que se nombre un curador de la herencia, y el juez podrá también nombrarlo de oficio o a solicitud del ministerio fiscal.

**690.** El curador deberá hacer inventario de la herencia ante el actuario y dos testigos, procediendo a esa operación y a la del avalúo en la forma determinada para los juicios de testamentaria, y practicándolas simultáneamente siempre que fuere posible.

**691.** El curador ejercerá activa y pasivamente los dere-



chos hereditarios, y sus facultades y deberes serán los del heredero que ha aceptado la herencia bajo beneficio de inventario; pero no podrá recibir pagos, ni el precio de las cosas que se vendiesen. Todo dinero correspondiente a la herencia deberá ponerse en depósito, a la orden del juez de la sucesión, en el banco de la provincia o en la sucursal más inmediata.

692. Establecido el curador de la sucesión, los que después vengan a reclamarla, están obligados a tomar las cosas en el estado en que ellas se encuentren, por efecto de las operaciones regulares del curador.

693. Cuando no hubiera acreedores a la herencia y se hubieren vendido los bienes hereditarios, el juez de la sucesión, de oficio o a solicitud fiscal, debe declarar vacante la herencia y satisfacer todas las costas y el honorario del curador, pasar al gobierno de la provincia la suma de dinero que existiese depositada, a los efectos de la disposición contenida en el inc. 4º, art. 62, de la ley de educación común.

694. Todas las diligencias se practicarán con citación del agente fiscal, que será parte en este juicio en representación de los que puedan tener derecho a la herencia, siendo de su obligación promover cuanto considere oportuno para la seguridad y buena administración de los bienes.

695. Si transcurrido el término de los edictos se hubiesen presentado algunos de los pretendientes y justificado su derecho, el juez hará la declaración que corresponde, previa vista fiscal.

696. Si el agente fiscal se opusiese, se substanciará en juicio ordinario el pleito a que la oposición diere lugar.

697. Los agentes fiscales seguirán interviniendo hasta que haya un heredero reconocido y declarado por ejecutoria.

Desde que lo hubiere, terminará su intervención, y todas las cuestiones pendientes o que se promuevan, se entenderán y substanciarán con el declarado heredero.

698. Terminados estos pleitos, se estará a lo dispuesto para los juicios de testamentaria.

Art. 693. — Los editores escribieron "gobierno nacional" donde la ley dijo "gobierno de la provincia".

Art. 695. — Véase ley núm. 8890, art. 15.



699. De las solicitudes de los que se presenten alegando derechos a la herencia, se formará un incidente por separado.

700. El juez del lugar del fallecimiento y cualquier otro en cuya jurisdicción existan bienes pertenecientes a la sucesión, adoptarán las medidas necesarias para el entierro del difunto y para la seguridad de dichos bienes.

701. En la campaña practicará el juez de paz las diligencias prevenidas, aun cuando el valor de los bienes exceda los límites de su competencia.

702. Asegurados los bienes, todos los jueces dejarán expedida la jurisdicción del que sea competente, remitiéndoles las diligencias que hayan practicado.

703. El juez de la sucesión ab-intestato será el único competente para conocer de las demandas que se deduzcan contra los bienes del difunto, después de promovido el juicio, y de las que hubiese pendientes en primera instancia contra el mismo.

Los autos en que estas últimas se sigan, se agregarán a los del juicio universal.

## **TITULO XXIV**

### **De la apertura de testamentos cerrados**

704. Luego que ante juez competente se presente para su apertura un testamento cerrado, hará que, a presencia suya y del interesado, se extienda por el actuario diligencia en que se exprese cómo se encuentra la cubierta y sus sellos, y demás circunstancias que caractericen su estado actual.

Esta diligencia será suscripta por el juez y por el que haga la presentación, y autorizada por el secretario.

705. Si el testamento no se hallase en poder de quien solicite la apertura, pedirá que lo exhiba el que lo tenga, manifestando quien sea; y a presencia de éste se extenderá en tal caso la diligencia prescripta en el artículo anterior.

706. Extendida dicha diligencia, dispondrá el juez que se cite, para el día y hora que determine, al escribano y testigos firmados en la cubierta, a fin de hacer ante ellos la solemne apertura del pliego.



**707.** Se citará igualmente a los herederos ab-intestato que se hallen presentes. Si hubiese entre éstos, menores o incapacitados, al defensor de menores y a sus representantes legales si los tuvieren; y no habiendo herederos ab-intestato, al agente fiscal.

**708.** Reunidos los testigos y el escribano el día designado, el juez hará que reconozcan las firmas, expresando bajo juramento si son de su puño y letra o puestas a su ruego.

Expresarán también con igual solemnidad si vieron poner todas las firmas, y si tienen por auténticas las de los que hayan fallecido o estén ausentes.

Permitiéndoles que examinen el pliego, expresarán igualmente si lo encuentran en el mismo estado en que se hallaba cuando firmaron la cubierta; si es el mismo que el testador entregó al escribano, diciendo que era su última voluntad; si aquél se encontraba en el uso perfecto de su razón, y si la entrega y las firmas de la cubierta se verificaron estando todos reunidos en un solo acto.

**709.** Si no pueden comparecer todos los testigos, por muerte o ausencia fuera de la provincia bastará el reconocimiento de la mayor parte de ellos y del escribano.

**710.** Si por iguales causas no pudiesen comparecer el escribano, el mayor número de los testigos o todos ellos, el juez lo hará constar así, y admitirá la prueba por cotejo de letra.

**711.** Hecho todo lo que queda prevenido, el juez rubricará el principio y fin de cada página, y se leerá por el actuario el testamento que contenga.

**712.** Verificada la lectura, se dictará providencia, mandando protocolizar el testamento y archivar el expediente, dando a los interesados los testimonios que pidieren.

La protocolización se hará otorgando el juez escritura relacionada, con transcripción solamente de la carátula, del contenido del pliego, del acta de apertura y del auto definitivo.

**713.** Si por parte interesada se dedujere alguna reclamación, se substanciará en juicio ordinario.

---

Art. 709. — Los editores pusieron "fuera de la capital federal" donde la ley dijo "fuera de la provincia".

## **TITULO XXV**

### **De la protocolización de testamentos ológrafos**

**714.** El testamento ológrafo deberá presentarse tal cual se halle, al juez a quien corresponda el conocimiento del juicio testamentario.

**715.** Presentado el testamento, designará aquél día y hora para el examen de testigos, que reconozcan la letra y firma del testador.

Si el testamento estuviese cerrado, será abierto por el juez, en presencia del actuario y de los herederos que comparecieren, a cuyo efecto serán citados previamente.

**716.** Si los testigos reconociesen la identidad de la letra y firma, rubricará el juez el principio y fin de cada una de sus páginas.

**717.** Practicadas esas diligencias, el juez las mandará protocolizar en el registro que designe, ordenando al mismo tiempo que se den a los interesados los testimonios que pidieren.

## **TITULO XXVI**

### **Del concurso civil de acreedores (c)**

#### **SECCION I**

##### **Disposiciones generales**

**718.** El deudor, no comerciante, podrá hacer cesión de bienes en favor de sus acreedores, presentándose por escrito ante el juez de lo civil de su domicilio.

**719.** Podrá también ser compelido a hacer la cesión de bienes, a instancia de acreedor legítimo, con tal que se acrediten las condiciones siguientes:

1ª Que el crédito en virtud del cual procede el acreedor sea quirografario;

2ª Que todos o la mayor parte de los bienes del deudor se hallen embargados a consecuencia de ejecuciones iniciadas en virtud de créditos quirografarios.

c) Véase ley núm. 11.077, sobre extinción de las obligaciones del deudor en los concursos civiles.

**720.** Declarado el concurso, se notificará al deudor y se oficiará a los jueces que conozcan de los demás pleitos, a fin de que los sometan para su acumulación al juicio universal.

**721.** Cuando el concurso hubiese sido declarado a solicitud de algún acreedor, el deudor podrá oponerse dentro de los tres días siguientes a aquel en que esa declaración le haya sido notificada.

Pasados los tres días sin que se deduzca oposición, se estimará consentida la declaración.

**722.** Si el deudor formalizare oposición, se substanciará ésta con el acreedor a cuya instancia se haya hecho la declaración de concurso.

Unidos al deudor, bajo una misma dirección y representados por el mismo procurador, litigarán los acreedores que se opusieren como él a la formación del concurso.

En los propios términos litigarán unidos al acreedor o acreedores a cuya instancia se haya hecho la declaración, los demás que quieran sostenerla.

**723.** Mientras se substancia y decide la oposición, continuarán ejecutándose las medidas adoptadas para el embargo y depósito de los bienes, ocupación de libros y papeles.

**724.** La substanciación de la oposición a la declaración de concurso, se ajustará a los trámites establecidos para el juicio ordinario, con las siguientes modificaciones:

1ª Los traslados serán por tres días improrrogables;

2ª Sólo habrá prueba por conformidad de los interesados, o en su defecto, cuando el juez lo considere necesario;

3ª El término de prueba será de diez días improrrogables;

4ª Pasado el término probatorio, se dictará sentencia sin alegatos ni vista pública;

5ª Si se interpusiere apelación, se concederá en ambos efectos y sólo en relación.

**725.** Si se revocase el auto de declaración de concurso, se alzarla la intervención, y se hará entrega al deudor por el síndico, y el escribano, de los fondos, bienes, libros y papeles retenidos.

El mismo síndico, si hubiere desempeñado actos de administración, rendirá cuentas al deudor.

**726.** Al escrito en que el deudor se presentase haciendo





cesión de bienes, deberá acompañar un estado de su activo y pasivo, con expresión de los nombres y domicilio de sus acreedores y deudores y con todas las explicaciones necesarias para la determinación de sus deberes y obligaciones. Igual estado deberá presentar dentro de los tres días de consentido el auto en que se ordene la formación del concurso.

**727.** En el auto en que el juzgado declare el concurso, se nombrará un síndico, con quien deben entenderse todas las operaciones ulteriores del concurso y las cuestiones que el deudor tuviese pendientes o las que hubieren de iniciarse.

Debe ordenar la ocupación de todas las pertenencias del deudor y de los libros y papeles relativos a sus negocios.

Fijará además un término, que no sea menor de quince días ni mayor de sesenta, para que los acreedores presenten al síndico los títulos justificativos de sus créditos.

**728.** La formación del concurso y la citación a los acreedores, se harán saber por edictos que se publicarán en dos periódicos que designará el juez, y en el lugar donde tuviese su residencia el deudor.

**729.** Si el deudor no hubiese presentado el estado que determina el artículo 726, el síndico deberá hacerlo teniendo en vista los antecedentes, libros y papeles que se le hubiesen entregado y los datos que directamente pudiese obtener del deudor.

**730.** En el acto del inventario se hará entrega al síndico de los bienes, libros y papeles del concurso. El dinero continuará depositado a la orden del juez del concurso.

## SECCION II

### De la administración

**731.** El síndico rendirá cuenta mensualmente del estado de la administración, previo depósito en la forma establecida, de las cantidades de dinero que recibiese por cuenta del concurso, acompañando los recibos que acrediten ese depósito.

**732.** El expediente permanecerá en la escribanía a disposición de los acreedores que quieran examinarlo.

**733.** El juez podrá por sí, o a instancia de los acreedores



del deudor, corregir cualquier abuso, adoptando cuantas medidas considere necesarias al efecto, incluso la de destituir al síndico que lo haya cometido.

734. El juez podrá dejar en poder del síndico la suma que se juzgue necesaria para los gastos del concurso, mandando en caso necesario extraerlas del depósito.

735. En el expediente de administración se actuará todo lo relativo a la enajenación de los bienes del concurso, a la cual se procederá inmediatamente, si la mayoría de acreedores no acordase lo contrario.

736. Para el remate de los bienes del concurso, su aprobación y otorgamiento de las escrituras de venta, en los casos que corresponda, se observarán las formalidades prescriptas para el juicio ejecutivo.

737. El síndico no podrá deducir demandas a nombre del concurso sin la autorización de la mayoría de acreedores verificados. Si contra la voluntad de la mayoría algún acreedor quisiere seguir o iniciar alguna demanda, podrá hacerlo a su costa, debiendo ante todo indemnizársele de los gastos, hasta concurrencia de la suma con que hubiere beneficiado al concurso.

738. La adjudicación se hará por las dos terceras partes del último avalúo, a no convenir otra cosa los acreedores y el deudor.

739. Terminada su administración, el síndico rendirá una cuenta general, que estará de manifiesto en la oficina actuaria durante quince días, a disposición del deudor y de todos los acreedores.

740. Transcurridos los quince días sin hacerse oposición, el juez aprobará la cuenta.

741. Las reclamaciones que se hicieren contra la cuenta se subsanciarán en vía ordinaria con el síndico.

En este juicio, los que sostengan la misma causa litigarán unidos y bajo la misma dirección.

742. Aprobada la cuenta del síndico del concurso o rectificada en su caso, se hará entrega al deudor de los bienes que hubieren quedado, después de pagar los créditos, y de sus libros y papeles.

743. Si no hubieren sido pagados por entero los créditos,



se conservarán en la escribanía los libros y papeles unidos a los autos, a los efectos ulteriores.

**744.** El resultado definitivo del concurso se notificará a los acreedores reconocidos, por medio de cédula, que se dejará en sus habitaciones respectivas, e insertará en los periódicos en que se haya publicado la declaración del concurso.

**745.** En el auto en que se ordene la publicación del resultado definitivo del concurso, se declarará la rehabilitación del concursado, sin necesidad de instancia suya, ni de audiencia de ningún género, en el caso de haber sido pagados por entero los créditos.

**746.** El expediente de administración podrá subdividirse en tantos incidentes por separado, cuantos sean necesarios para la claridad y mejor dirección del concurso.

### SECCION III

#### De la verificación de créditos

**747.** El síndico presentará al tribunal un estado general de los créditos a cargo del concurso que se hayan presentado a la toma de razón, refiriéndose en cada artículo por orden de números a los documentos presentados por los respectivos interesados.

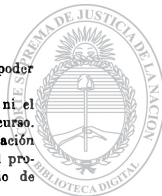
**748.** El juzgado decretará una junta general de acreedores, conocidos o desconocidos, privilegiados o personales, para proceder a la verificación de créditos.

La convocación se hará por edictos que se fijarán en el pueblo donde resida el deudor, y se insertarán en los periódicos.

Se prevendrá en los edictos, que los acreedores que no asistiesen a la junta, se entenderá que se adhieren a las resoluciones que se tomen por la mayoría de los acreedores comparecientes.

**749.** Los acreedores cuyos créditos no resulten del balance y los libros del deudor, serán admitidos a la junta, siempre que antes de la celebración de ésta, presenten al síndico los documentos justificativos de sus créditos.

**750.** No será admitida en la junta persona alguna en re



presentación ajena, a no ser que se halle autorizada con poder bastante, que presentará en el acto al juzgado.

Nadie podrá ser apoderado de más de un acreedor, ni el poder podrá ser tampoco conferido a un acreedor del concurso.

751. El deudor será citado para la junta de verificación de créditos y las demás que tengan lugar en el curso del procedimiento. Podrá concurrir personalmente o por medio de apoderado.

752. El día señalado se reunirá la junta bajo la presidencia del juez, y en presencia del síndico.

Se dará lectura del estado general de los créditos, de los documentos respectivos de comprobación, y del informe del síndico sobre cada uno de ellos.

753. Cada uno de los acreedores será sucesivamente llamado, leyéndose la partida respectiva y los documentos e informes de su referencia. Todos los acreedores presentes y el deudor por sí, o por medio de apoderado, podrán hacer sobre cada partida las observaciones que juzguen convenientes. El interesado en el crédito o quien lo represente, responderá en la forma que considere oportuno.

754. Si el crédito no es objetado por el síndico, por el concursado o por alguno de los acreedores presentes, se tendrá por verificado y se inscribirá en la lista de créditos reconocidos.

Esa lista contendrá los nombres de los acreedores, y la naturaleza e importe de cada crédito.

755. Si uno o más de los créditos admitidos por la mayoría de acreedores, fuesen objetados por el deudor, por el síndico o por alguno de los acreedores, se tendrán por verificados provisoriamente, sin perjuicio de que en juicio ordinario pueda seguirse la cuestión sobre legitimidad del crédito.

Si los objetantes fuesen acreedores, ellos deberán seguir el juicio, a su costa, sin perjuicio de ser indemnizados por la masa hasta la concurrencia de la suma en que su gestión hubiese enriquecido al concurso.

756. Los acreedores que no presentasen los documentos justificativos de sus créditos, no serán admitidos a la masa sin que preceda la verificación de sus créditos, que se hará judicialmente a su costa, con citación y audiencia del síndico.

Sólo tomarán parte en los dividendos que estuviesen aun



por hacerse, al deducir su reclamación, sin que se les admita en ningún caso a reclamar su parte en los dividendos anteriores.

Si cuando se presenten los acreedores morosos a reclamar sus derechos, estuviese ya repartido el haber del concurso, no serán oídos, salvo su acción personal contra el deudor.

## SECCION IV

### De la graduación de créditos y distribuciones

**757.** Dentro de los quince días siguientes a la verificación, el síndico formará el estado de la graduación de créditos, con arreglo a lo dispuesto en el título “De la preferencia de los créditos”, del cód. civil.

**758.** El estado de graduación con los antecedentes de su referencia, quedará depositado en la oficina del actuario, por el término de quince días, para que puedan inspeccionarlo los acreedores.

Se anunciará en los periódicos que el juez designe el depósito del estado, y el término por el que estará a disposición de los acreedores.

Ese término empezará a correr desde la fecha de la inserción del aviso en los diarios.

**759.** No mediando oposición en el término señalado en el artículo precedente, el estado de graduación será definitivamente cerrado por el juez, y no podrá ser objeto de oposición alguna ulterior.

Si mediase oposición, ésta debe deducirse por escrito ante el juez del concurso y con expresión de las causas que la motiven, y se suspenderá la clausura del estado de graduación, hasta que haya pasado en autoridad de cosa juzgada la sentencia que se pronuncie sobre las dificultades suscitadas.

**760.** Si el juzgado no lograse avenir a los interesados, en audiencia verbal, llamará autos para dictar la sentencia que corresponda.

Todos los acreedores cuyos créditos hayan sido verificados, tienen derecho a presentarse, a su costa, para ser oídos sobre las dificultades suscitadas.

Esas dificultades, en cuanto sea posible, serán resueltas en



una sola sentencia. oído el dictamen del síndico y precediendo las conclusiones del ministerio público.

Las costas no serán pagadas por la masa, sino por el acreedor que resultase vencido.

761. El producto de los bienes del concurso, se distribuirá a prorrata entre los acreedores, a no ser que haya causas legítimas de preferencia.

Las causas legítimas de preferencia, son los privilegios y las hipotecas.

762. Si al hacerse la distribución de los fondos hubiesen acreedores verificados provisoriamente, sus dividendos quedarán depositados en el banco de la provincia, hasta la resolución definitiva, sin que en ningún caso estos fondos puedan destinarse al pago de otras obligaciones que a aquellas a que hubiese dado lugar la verificación provisoria.

Lo mismo se procederá respecto a los acreedores que hubieren sido objetados por el síndico, por el deudor o por algún acreedor para el caso en que el fallo les fuese favorable.

763. Los acreedores hipotecarios y aquellos que tengan privilegio especial respecto de los cuales no haya habido oposición, o que hayan obtenido sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no estarán obligados a esperar los resultados del concurso general y serán pagados con el producto de los bienes afectados al privilegio o hipoteca, sin perjuicio de obligarles a dar caución de acreedores de mejor derecho. El sobrante, si lo hubiere, entrará a la masa, y por lo que faltare del capital concurrirán a prorrata con los acreedores personales.

764. Si antes de liquidado definitivamente el derecho de preferencia de algún acreedor privilegiado o hipotecario, llega la ocasión de dar un dividendo, se le considerará en la calidad de acreedor personal, y la cuota que le tocasse quedará en reserva para recibir el destino que le corresponda, según la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

765. En cualquier estado del juicio, los acreedores quirografarios podrán, previo pago de las costas causídicas y de los créditos privilegiados, pedir la adjudicación de los bienes del deudor, y en tal caso los bienes les serán adjudicados en condominio, pudiendo conservarlos o dividirlos en la forma que determina el céd. civil. en el título "Del condominio".



**766.** El dendor gozará del beneficio de competencia en los términos y bajo las condiciones establecidas en el cap. IX. título "Del pago", cód. civil, quedando siempre a salvo a los acreedores las acciones por dolo o fraude que puedan intentar.

## **TITULO XXVII**

### **Del juicio de árbitros**

**767.** Toda contestación entre partes, antes o después de deducida en juicio, y cualquiera que sea el estado de éste, puede someterse a la decisión de jueces árbitros.

**768.** No pueden comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad:

1° Las cuestiones que versen sobre el estado civil y capacidad de las personas;

2° Las referentes a bienes públicos o municipales;

3° Las que por cualquiera causa requieran la intervención fiscal;

4° Las que tengan por objeto la validez o nulidad de las disposiciones de última voluntad;

5° Y en general, todas aquellas respecto de las cuales exista una prohibición especial, o en las que esté interesada la moral y buenas costumbres.

**769.** Las personas que no tienen aptitud legal para obligarse, no pueden comprometer en árbitros.

**770.** El compromiso ha de formalizarse en escritura pública o si hubiese juicio pendiente, en acta extendida ante el juez y el secretario. Será nulo en cualquier otra forma que se contraiga.

**771.** El compromiso ha de contener precisamente:

1° Los nombres de los otorgantes;

2° Los nombres de los árbitros;

3° La cuestión o cuestiones que se sometan al fallo arbitral, con expresión de sus circunstancias;

4° La estipulación de una multa que deberá pagar la parte que deje de cumplir con los actos indispensables para la realización del compromiso;

5° La fecha del otorgamiento.



**772.** El compromiso en que falte cualquiera de las circunstancias expresadas en el artículo anterior, será nulo.

**773.** Puede además estipularse en el compromiso:

1º El plazo en que los árbitros han de pronunciar la sentencia;

2º Otra multa, que el que se alce del fallo deberá pagar al que se conforme con él, para poder ser oído, si no hubiese la renuncia a que se refiere el inciso 4º;

3º La forma en que hayan de proceder los árbitros como igualmente el lugar en que hayan de conocer y fallar. A falta de esta última designación, el lugar será aquel en que haya sido otorgado el compromiso;

4º La renuncia del recurso de apelación y del de nulidad salvo los casos determinados en el art. 792.

**774.** Los árbitros serán nombrados por las partes, pudiendo designarse el tercero por ellas, o por los mismos árbitros, si estuviesen facultados.

No poniéndose de acuerdo, el nombramiento será hecho por el juez o tribunal competente.

**775.** El nombramiento no puede recaer sino en personas mayores de edad, y que estén en el pleno ejercicio de los derechos civiles.

**776.** Otorgado el compromiso, se presentará a los árbitros para su aceptación bajo juramento.

De la aceptación o de la negativa se extenderá a continuación diligencia que firmarán los árbitros y el secretario o escribano.

**777.** Si alguno de los árbitros no aceptare, se procederá a reemplazarlo con sujeción a lo dispuesto para el nombramiento.

**778.** La aceptación de los árbitros da derecho a las partes para compelerlos a que cumplan con su encargo, bajo pena de responder por los daños y perjuicios.

**779.** Los árbitros sólo son recusables por causas que hayan sobrevenido después del compromiso, o que se ignorasen al tiempo de nombrarlos.

Son causas legales las mismas que para la recusación de los jueces.

En los casos en que el nombramiento sea hecho por el juez,





la recusación por causas anteriores podrá interponerse dentro de seis días después de la notificación.

**780.** La recusación debe deducirse ante los mismos árbitros; y conocerá de ella en la forma establecida en el título VIII, el juez a quien competiera el conocimiento del asunto, si no se hubiere celebrado compromiso.

**781.** El compromiso cesa en sus efectos:

1° Por la voluntad unánime de los que lo contrajeron;

2° Por el transcurso del término señalado en el compromiso, o del legal en su defecto, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños e intereses, si por su culpa hubiesen transcurrido inútilmente dichos términos, o del pago de la multa de que habla el inciso 4° del art. 771, si la culpa fuese de alguna de las partes.

**782.** Toda la substanciación del juicio arbitral se hará ante escribano público, debiendo ser éste nombrado por los árbitros.

**783.** Si en el compromiso no se hubiese acordado la forma en que los árbitros han de conocer y fallar el asunto, lo harán siempre formando tribunal.

**784.** Si el compromiso no contuviese estipulaciones especiales sobre el procedimiento, se observará el del juicio ordinario.

**785.** Los árbitros pronunciarán su fallo sobre todos los puntos sometidos a su decisión, dentro del plazo señalado en el compromiso, con las prórrogas en que hubieren convenido los interesados.

Cuando en el compromiso se hubiese fijado el término dentro del cual deban laudar los árbitros sin determinarse desde cuándo ha de empezar a correr ese término, se contará desde la última aceptación.

**786.** Si no se hubiere señalado plazo, lo pronunciarán dentro de un mes a contar desde la última aceptación, si el negocio comprometido fuese de los que por su importancia corresponde a la jurisdicción de los jueces de paz, y dentro de tres meses si fuese de mayor cuantía.

**787.** La sentencia de los árbitros debe ser conforme a derecho y a lo alegado y probado.



**788.** Si no hubiese disconformidad entre los árbitros, el voto de la mayoría hará sentencia.

Los disidentes podrán salvar su voto consignándolo a continuación.

Cuando no pudiese formarse esa mayoría por discordia de opiniones, se procederá al nombramiento de otro árbitro para que dirima. Este nombramiento lo harán las partes y en caso de no ponerse de acuerdo, el juez o tribunal competente.

**789.** Contra la sentencia arbitral se darán los mismos recursos que contra la sentencia de los jueces ordinarios si no hubiesen sido renunciados en el compromiso.

Exceptúanse los casos de arbitraje forzoso, en los que se observará lo dispuesto en el art. 791.

**790.** Los recursos se interpondrán ante los mismos árbitros en el término de cinco días.

**791.** Si los recursos hubiesen sido renunciados, se denegarán irremisiblemente quedando ejecutoriada la sentencia.

**792.** La renuncia de los recursos, sin embargo, no obsta a la interposición del de nulidad, fundado en haber fallado los árbitros fuera del término, o sobre puntos no comprometidos, o por falta esencial en el procedimiento.

**793.** Este recurso se resolverá sin alegatos ni pruebas de ningún género, con la sola vista de los autos.

En caso de duda, se reputará comprometido todo punto que haya sido objeto de discusión durante el juicio.

**794.** Si se hubiese estipulado la multa indicada en el 2º inciso del art. 773, no se admitirá recurso alguno, sin que el que lo interponga haya satisfecho su importe.

Pero si el recurso interpuesto fuese el de nulidad por las causas expresadas en el art. 792, el valor de la multa será depositado hasta la decisión del recurso. Si se declarase la nulidad, será devuelto al recurrente: en caso contrario, se entregará a la otra parte.

---

Art. 788. Debe leerse «conformidad», que es lo único que tiene sentido, como lo trae *Dominguez* en su proyecto, (art. 544); la ley de enjuiciamiento de 1878, (art. 598); y la ley española de 1881, (art. 817). El error de tipografía, deslizado en la edición oficial, se ha repetido en todas las posteriores.



**795.** Conocerá de los recursos, cuando tengan lugar, el tribunal que sea superior inmediato del juez que hubiera conocido del asunto, si no se hubiere sometido a árbitros.

**796.** Si se hubiere comprometido un negocio pendiente en última instancia, el fallo de los árbitros causará ejecutoria.

**797.** Los litigantes no pueden constituir en árbitros a los jueces y tribunales ante quienes penda el pleito.

## **TÍTULO XXVIII**

### **Del juicio de amigables componedores**

**798.** Pueden someterse a la decisión de arbitradores o amigables componedores, las mismas cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros.

**799.** Regirá respecto de los amigables componedores lo prescripto para los árbitros:

1° Sobre la capacidad de los contrayentes;

2° Sobre la calidad que deben tener los arbitradores;

3° Sobre la aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitradores después de haber aceptado aquél;

4° Sobre el modo de reemplazarlos en caso de no aceptación o de recusación;

5° Sobre el modo de acordar y dictar el fallo.

**800.** Respecto del nombramiento de los arbitradores, los interesados podrán hacer las convenciones que estimaren convenientes y en defecto de éstas, se aplicará lo dispuesto en el art. 774.

**801** El compromiso será otorgado en documento público o privado, y contendrá, bajo pena de nulidad, las cláusulas determinadas en el art. 771.

Pero todo defecto del compromiso quedará subsanado, si las partes lo ponen en ejecución ante los arbitradores, sin atacarlos antes que éstos dicten sentencia.

**802.** Los amigables componedores procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes o documentos que las partes les presentasen, a pedirles las explicaciones oportunas, y a dictar sentencia según su saber y entender.



803. Regirá también para los árbitros y arbitradores lo prescripto para los árbitros en el art. 788.

804. Si las partes no hubiesen prefijado término, los amigables componedores deberán fallar dentro de tres meses.

Las sentencias serán autorizadas por el escribano, en la forma establecida para el juicio ordinario.

805. Los amigables componedores no pueden ser recusados sino por causas que hayan sobrevenido después del nombramiento, o que no fueren conocidas al hacerlo.

806. Sólo son causas legales de recusación:

1º Tener interés directo o indirecto en el asunto;

2º Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad;

3º Enemistad manifiesta por hechos determinados.

807. En el incidente de recusación se procederá según queda prescripto para el de los árbitros.

808. Contra la sentencia de los amigables componedores no se dará recurso alguno, salvo la acción de nulidad proveniente de haber fallado fuera del término o sobre puntos no comprometidos, la que podrá entablarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se hizo saber el laudo.

809. Si el arbitraje fuese forzoso, y alguna de las partes requeridas al efecto, no compareciese a otorgar el compromiso, lo otorgará el juez en su rebeldía.

810. Los litigantes pueden constituir en amigables componedores a los jueces y tribunales ante quienes penda el pleito.

## TITULO XXIX

### Disposiciones transitorias

811. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables desde el mes siguiente a su promulgación, a todos los asuntos que sucesivamente se promuevan.

Serán también aplicables a los negocios pendientes desde la estación o período en que se encuentren, excepto los trámi-



tes o diligencias que hayan empezado a ejecutarse, los cuales se regirán por las leyes anteriores.

**812.** La prohibición relativa a la entrega de los autos a los litigantes, sólo comprende los que se promuevan desde la promulgación de esta ley.

**813.** Mientras no se dicte una ley especial de enjuiciamiento, para las causas sobre negocios mercantiles se observarán en ella las disposiciones de esta ley, en cuanto no se opongan a las prescripciones del código de comercio.

**814.** Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones anteriores relativas al enjuiciamiento civil y comercial, en todo lo que sean contrarias a la presente.

**815.** A los efectos de esta ley, el departamento de ingenieros formará una planilla de las distancias de la ciudad cabeza de cada departamento judicial, a los diversos partidos que lo constituyan.

**816.** Comuníquese al poder ejecutivo.

---

# APENDICE





# APÉNDICE

(Leyes complementarias o modificatorias del cód. de proc. civ.  
de la capital)

## LEY N.º 44 (a)

### Autenticación de los actos públicos y procedimientos judiciales de cada provincia.

Sancionada en Buenos Aires, en agosto 12 de 1863.

Promulgada en agosto 26 de 1863.

Art. 1.º— Serán tenidos por auténticos los actos y leyes de las legislaturas y los actos y decretos de los poderes ejecutivos provinciales, siempre que se hayan publicado o comunicado en la forma que cada provincia hubiere adoptado para su promulgación y ejecución.

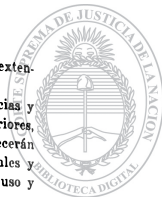
Art. 2.º— Serán igualmente tenidos por auténticos los actos procedimientos judiciales, sentencias y testimonios de cualquiera de ellas, con la atestación del escribano del tribunal superior de la provincia, el certificado del presidente del mismo asegurando que la atestación está en debida forma y con el sello del tribunal.

Art. 3.º— Los instrumentos públicos y todo certificado, copia o documento que proceda de las corporaciones u oficinas que no pertenezcan al orden judicial, serán tenidos por auténticos, siendo firmados por el jefe de la corporación u oficina, y con atestación además del escribano del superior tribunal de la pro-

(a) Véase en este Apéndice leyes números 3192, 3983, 4329, 5133, 10.080, 10.081 y decretos del poder ejecutivo nacional de 11 de octubre de 1872 y 24 de julio de 1918. En los territorios nacionales se hace la legalización por el juez letrado y a falta de éste por el gobernador, según decreto de mayo 17 de 1892.







vincia, certificado del presidente del mismo de hallarse extendida la atestación en debida forma y el sello del tribunal.

Art. 4.º— Los actos públicos, procedimientos, sentencias y demás documentos de que se habla en los artículos anteriores, autenticados en la forma que en ellos se determina, merecerán tal fe y crédito y surtirán tales efectos ante los tribunales y autoridades dentro del territorio de la nación, como por uso y ley les corresponda ante los tribunales y autoridades de la provincia de donde procedan.

### LEY N.º 163

#### **Intervención de los cónsules extranjeros en las sucesiones ab intestado de sus connacionales**

**Sancionada en Buenos Aires en septiembre 29 de 1865**

**Promulgada en septiembre 30 de 1865**

Art. 1. — Falleciendo ab intestado algún extranjero sin dejar descendientes, ascendientes ni cónyuge legítimos, públicamente reconocidos como tales, residentes en el país, o con testamento, si fueren extranjeros los herederos y estuviesen ausentes y ausente también el albacea testamentario, el cónsul de su nación podrá intervenir en su testamentaria.

Art. 2. — No tendrá lugar la intervención de los cónsules, cuando algún argentino, reconocido notoriamente por tal, fuese heredero descendiente o ascendiente.

Art. 3. — Esta intervención se limitará:

1.º A sellar los bienes muebles y papeles del finado, haciéndolo saber antes a la autoridad local, siempre que la muerte sucediese en el lugar de la residencia del cónsul;

2.º A nombrar albaceas dativos.

Art. 4. — Los cónsules comunicarán directamente al juez de la testamentaria el nombramiento de albaceas.

Art. 5.º — La autoridad local pondrá su sello sobre los muebles y papeles del finado, y tomará las medidas necesarias para su seguridad.

Art. 6.º — El doble sello no podrá levantarse para hacer inventario por el juez, sin la citación previa de los albaceas.

Art. 7.º — No habiendo cónsules en el lugar del fallecimiento del intestado, el inventario se hará con arreglo a las leyes vigentes, con asistencia de dos testigos de la misma nacionalidad del finado, o de otra nación, si no los hubiese, debiendo darse aviso del hecho al cónsul más inmediato, por la autoridad que haga el inventario.

Art. 8.º — Los albaceas ejercerán su cargo, sujetándose a las leyes del país.

Art. 9.º — Si hubiere herederos legítimos colaterales en el país, tendrán el derecho de pedir al juez de la causa, nombramiento de albaceas, quedando entonces los nombrados por el cónsul, reducidos al carácter de representantes de los herederos ausentes que no hubieren nombrado apoderados especiales.

Art. 10. — No habiendo herederos ningunos en el país, y existiendo reclamos por créditos sobre el derecho a la sucesión, serán decididos por el juez de la causa, con intervención de los albaceas.

Art. 11. — No podrá entregarse cosa alguna a los herederos ausentes, hasta después de pasado un año de la muerte del intestado y cuando estén pagadas todas las deudas contraídas en el territorio del estado.

Art. 12. — Si no hubiere herederos ab intestato según las leyes del país, los bienes de la testamentaria serán entregados al cónsul.

Art. 13. — Los derechos que por esta ley se reconocen, serán acordados a las naciones que concedan iguales derechos a los cónsules y ciudadanos argentinos.

Art. 14. — Las naciones que reclamasen el cumplimiento de lo no incluido en esta ley y que pudiera estarlo en alguno de los tratados celebrados, sólo podrán obtener lo estrictamente pactado en el tratado.



**LEY N.º 1.420**

**De educación común**

**Sancionada en Buenos Aires, en junio 26 de 1884**

**Promulgada en julio 8 de 1884**



Art. 22. — Las penas pecuniarias establecidas en los artículos anteriores se harán efectivas contra los maestros, por la autoridad escolar respectiva; y contra los particulares por vía de apremio, ante el juez respectivo del demandado, sirviendo de título el certificado del director o comisión de distrito de no haberse cumplido la prescripción legal.

Art. 62. — Las actuaciones públicas que el concejo nacional de educación o sus empleados oficiales tuviesen necesidad de producir ante cualquier autoridad para fines de la dirección y administración de las escuelas, serán libres de costas y se extenderán en papel común.

Art. 76. — Los jueces darán participación al concejo nacional de educación en todo asunto, que por cualquier motivo afectase al tesoro de las escuelas. A los efectos de esta prescripción y de la probable necesidad de gestionar ante los jueces o funcionarios administrativos, los intereses de las escuelas el concejo nacional de educación podrá nombrar procuradores y abogados pagados del tesoro de las escuelas por mes o por año.

---

**LEY N.º 1.565**

**Estableciendo el registro civil en la capital y territorios nacionales**

**Sancionada en Buenos Aires en octubre 26 de 1884**

**Promulgada en octubre 31 de 1884**

Art. 95. — El juez competente para la aplicación de las penas, es el letrado de 1.ª Instancia en lo civil, y en su defecto, el de paz del domicilio de los infractores.

Art. 96. — El juicio no tendrá otra substanciación que una audiencia verbal y un término de prueba si fuese necesario

que no pase de 8 días, y será promovido por el agente fiscal, o en su defecto, por el jefe de la oficina del registro.

Art. 97. — De la sentencia que recayere no habrá recurso alguno.

---

### LEY N.º 1893

#### De organización de los tribunales de la capital

Sanccionada en noviembre 2 de 1886

Promulgada en noviembre 12 de 1886

Art. 318. Los tribunales de la capital se regirán por las leyes de procedimientos civiles, comerciales y criminales que actualmente rigen para los de la provincia de Buenos Aires, en cuanto sean compatibles con la presente ley y hasta tanto se dicten por el congreso las que hayan de subrogarlas.

Art. 323. Habrá un diario con el título «Boletín judicial», en el cual se publicarán, bajo pena de nulidad:

1º Las citaciones por edictos.

2º Los avisos de remates judiciales.

3º En general, todos los actos o documentos de origen judicial que exijan publicidad.

---

### LEY N.º 2637

#### Código de comercio

Sanccionada en Buenos Aires, en octubre 5 de 1889

Promulgada en octubre 9 de 1889

Art. 673. — Las letras de cambio producen acción ejecutiva para exigir en sus casos respectivos del librador, aceptantes o endosantes el pago, reembolso, depósito o afianzamiento de su importe.

Art. 674. — En las letras de plaza imperfectas por no te-



ner sino una firma, el tenedor de ellas tiene la acción ejecutiva, de que habla el artículo anterior, contra el aceptante.

Art. 676. — Contra la acción ejecutiva de las letras de cambio, no se admitirá más excepción que la de falsedad, pago, compensación de crédito líquido y exigible, prescripción o caducidad de la letra y espera o quita concedida por el mandante, que se pruebe por escritura pública o por documento privado, judicialmente reconocido.

Cualquiera otra excepción, sea de la naturaleza que fuese, no obstará al progreso del juicio ejecutivo.

---

### **LEY N.º 2841.**

**Autorizando la creación de un banco bajo el nombre de Banco de la Nación Argentina.**

**Sanccionada en Buenos Aires, en 15 de octubre de 1891.**

**Promulgada en 16 de octubre de 1891.**

Art. 22.— Instalado el Banco de la nación argentina, quedarán a su cargo todas las operaciones encomendadas al actual Banco nacional sobre servicios de empréstitos nacionales; se depositarán en sus cajas las rentas fiscales, depósitos judiciales y depósitos de administraciones públicas.

---

### **LEY N.º 3192**

**Tratado de derecho procesal de Montevideo (a)**

**Sanccionada en Buenos Aires, en diciembre 6 de 1894**

**Promulgada en diciembre 11 de 1894**

Art. 1º Los juicios y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán con arreglo a la ley de procedimientos de la nación, en cuyo territorio se promuevan.

---

(a) Este tratado fué celebrado entre las repúblicas Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Oriental del Uruguay.

Art. 2° Las pruebas se admitirán y apreciarán según la ley a que esté sujeto el acto jurídico, materia del proceso.

Se exceptúa el género de pruebas que por su naturaleza no autorice la ley del lugar en que se sigue el juicio.

Art. 3° Las sentencias o laudos homologados expedidos en asuntos civiles y comerciales, las escrituras públicas y demás documentos auténticos otorgados por los funcionarios de un estado, y los exhortos y cartas rogatorias, surtirán sus efectos en los otros estados signatarios, con arreglo a lo estipulado en este estado, siempre que estén debidamente legalizados.

Art. 4° La legalización se considera hecha en debida forma, cuando se practica con arreglo a las leyes del país de donde el documento precede, y éste se halle autenticado por el agente diplomático o consular que en dicho país o en la localidad tenga acreditado el gobierno del estado en cuyo territorio se pide la ejecución.

## LEY N.° 3192

### Tratado de derecho civil (a)

Sancionada en Buenos Aires, en diciembre 6 de 1894

Promulgada en diciembre 11 de 1894

Art. 56. — Las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio.

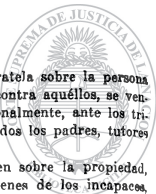
Podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado.

Art. 57. — La declaración de ausencia debe solicitarse ante el juez del último domicilio del presunto ausente.

Art. 58. — El juicio sobre capacidad o incapacidad de las personas para el ejercicio de los derechos civiles, debe seguirse ante el juez de su domicilio.

Art. 59. — Las acciones que procedan del ejercicio de

(a) Este tratado fué celebrado entre la república Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Oriental del Uruguay.



la patria potestad y de la tutela y curatela sobre la persona de los menores e incapaces y de éstos contra aquéllos, se ventilarán, en todo lo que les afecte personalmente, ante los tribunales del país en que estén domiciliados los padres, tutores o curadores.

Art. 60. — Las acciones que versen sobre la propiedad, enajenación o actos que afecten los bienes de los incapaces, deben ser deducidas ante los jueces del lugar en que esos bienes se hallan situados.

Art. 61. — Los jueces del lugar en el cual fué discernido el cargo de tutor o curador, son competentes para conocer del juicio de rendición de cuentas.

Art. 62. — El juicio sobre nulidad del matrimonio, divorcio, disolución y en general todas las cuestiones que afecten las relaciones personales de los esposos, se iniciarán ante los jueces del domicilio conyugal.

Art. 63. — Serán competentes para resolver las cuestiones que surjan entre esposos, sobre enajenación u otros actos que afecten los bienes matrimoniales, los jueces del lugar en que estén ubicados esos bienes.

Art. 64. — Los jueces del lugar de la residencia de las personas, son competentes para conocer de las medidas a que se refiere el art. 24. (1)

Art. 65. — Los juicios relativos a la existencia y disolución de cualquiera sociedad civil, deben seguirse ante los jueces del lugar de su domicilio.

Art. 66. — Los juicios a que dé lugar la sucesión por causa de muerte se seguirán ante los jueces de los lugares en que se hallan situados los bienes hereditarios.

Art. 67. — Las acciones reales y las denominadas mixtas, deben ser deducidas ante los jueces del lugar en el cual exista la cosa sobre que la acción recaiga.

Si comprendieren cosas situadas en distintos lugares, el juicio debe ser promovido ante los jueces del lugar de cada una de ellas.

---

(1) El art. citado establece que: «Las medidas urgentes que conciernen a las relaciones personales entre cónyuges, al ejercicio de la patria potestad y a la tutela y curatela, se rigen por la ley del lugar en que residen los cónyuges, padres de familia, tutores y curadores».

**LEY N.º 3192**

**Tratado de derecho comercial (a)**

**Sancionada en Buenos Aires, en diciembre 6 de 1894.**

**Promulgada en 11 de diciembre de 1894.**



**Art. 7.** — Los jueces del país en que la sociedad tiene su domicilio legal, son competentes para conocer de los litigios que surjan entre los socios o que inicien los terceros contra la sociedad.

Sin embargo, si una sociedad, domiciliada en un estado realiza operaciones en otro, que den mérito a controversias judiciales, podrá ser demandada ante los tribunales del último.

**Art. 10.** — Son competentes para conocer de las reclamaciones que se deduzcan contra las sociedades de seguros, los tribunales del país en que dichas sociedades tienen su domicilio legal.

Si esas sociedades tienen constituidas sucursales en otros estados, regirá lo dispuesto en el art. 6.º (1).

**Art. 12.** — Si los choques y abordajes tienen lugar en aguas no jurisdiccionales, la ley aplicable será la de la nación de su matrícula.

Si los buques estuviesen matriculados en distintas naciones, regirá la ley del estado más favorable al demandado.

En el caso previsto en el inciso anterior, el conocimiento de la causa corresponderá a los tribunales del país a que primero arriben.

Si los buques arriban a puertos situados en distintos países, prevalecerá la competencia de las autoridades que prevengan en el conocimiento del asunto.

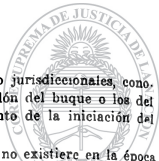
**Art. 13.** — En los casos de naufragio serán competentes las autoridades del territorio marítimo en que tiene lugar el siniestro.

---

(a) Este tratado fué celebrado entre la república Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Oriental del Uruguay.

(1) El art. citado establece que: «Las sucursales o agencias constituidas en un estado por una sociedad radicada en otro, se considerarán domiciliadas en el lugar en que funcionan y sujetas a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que practiquen.





Si el naufragio ocurre en aguas no jurisdiccionales, conocerán los tribunales del país del pabellón del buque o los del domicilio del demandado, en el momento de la iniciación del juicio, a elección del demandante.

Art. 15. — Si la agencia marítima no existiere en la época en que se inicie el litigio, el fletador podrá deducir sus acciones ante los tribunales del domicilio de cualquiera de los interesados o representante de aquellos.

Si el actor fuese fletante, podrá entablar su demanda ante los tribunales del estado en que se encuentre domiciliado el fletador.

Art. 18. — Las cuestiones que se susciten entre el dador y el tomador serán sometidas a la jurisdicción de los tribunales donde se encuentren los bienes sobre los cuales se ha realizado el préstamo.

En el caso en que el prestamista no pudiese hacer efectivo el cobro de las cantidades prestadas en los bienes afectos al pago, podrá ejercitar su acción ante los tribunales del lugar del contrato o del domicilio del demandado.

Art. 23. — Son competentes para conocer en los juicios de averías comunes, los jueces del país del puerto en que termina el viaje.

Art. 24. — Los juicios de averías particulares se radicarán ante los tribunales del país en que se entregue la carga.

Art. 25. — Si el viaje se revoca antes de la partida del buque, o si después de su salida se viere obligado a volver al puerto de la carga, conocerán del juicio de averías los jueces del país a que dicho puerto pertenece.

Art. 34. — Las cuestiones que surjan entre las personas que han intervenido en la negociación de una letra de cambio, se ventilarán ante los jueces del domicilio de los demandados en la fecha en que se obligaron, o del que tengan en el momento de la demanda.

Art. 35. — Son jueces competentes para conocer de los juicios de quiebra, los del domicilio comercial del fallido, aun cuando la persona declarada en quiebra practique accidentalmente actos de comercio en otra nación, o mantenga en ella agencias o sucursales que obren por cuenta y responsabilidad de la casa principal

Art. 36. — Si el fallido tiene dos o más casas comerciales independientes en distintos territorios, serán competentes para conocer del juicio de quiebra de cada una de ellas, los tribunales de sus respectivos domicilios.

Art. 38. — Una vez cumplidas las medidas preventivas por medio de las respectivas cartas rogatorias, el juez exhortado hará publicar, por el término de 60 días, avisos en que se a conocer el hecho de la declaración de quiebra y las medidas preventivas que se han dictado.

Art. 43. — Aun cuando exista un solo juicio de quiebra, los acreedores hipotecarios anteriores a la declaración de la misma, podrán ejercer sus derechos ante los tribunales del país en que están radicados los bienes hipotecados o dados en prenda.

### **LEY N.º 3367.**

#### **Representación del fisco en los asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa.**

**Sancionada en Buenos Aires, en julio 1 de 1896.**

**Promulgada en 8 de julio de 1896.**

Art. 3.º— A los tribunales y jueces federales, a los de la capital de la República y territorios nacionales, les es prohibido aceptar nombramientos de árbitros juris, arbitradores o amigables componedores, bajo pena de nulidad absoluta, a excepción de los casos en que sean designados en tal carácter por el gobierno de la nación o los gobiernos de provincia.

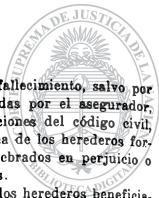
### **LEY N.º 3942**

#### **Seguros de vida**

**Sancionada en Buenos Aires, en agosto 4 de 1900**

**Promulgada en agosto 11 de 1900**

Art. 1. — El seguro de vida constituido en favor de un tercero, es un bien de la exclusiva propiedad de éste, y no responde en ningún caso al pago de las obligaciones que adeu-



dase el constituyente a la época de su fallecimiento, salvo por lo que respecta a las cantidades recibidas por el asegurador, las que quedarán sujetas a las disposiciones del código civil, relacionadas con la colación y la legítima de los herederos forzosos y a la revocación de los actos celebrados en perjuicio o fraude de los derechos de los acreedores.

Art. 2. — El cobro del seguro por los herederos beneficiarios, no obstará a que puedan repudiar la herencia del causante constituyente del seguro, o aceptarla con beneficio de inventario.

---

### **LEY N.º 3952.**

#### **Acciones civiles contra la Nación y su procedimiento.**

**Sanccionada en Buenos Aires, en 27 de septiembre de 1900.**

**Promulgada en 6 de octubre de 1900.**

Art. 7.º—Las decisiones que se pronuncien en estos juicios cuando sean condenatorios contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda.

---

### **LEY N.º 4124**

#### **Redención de capellanías**

**Sanccionada en Buenos Aires en septiembre 24 de 1902**

**Promulgada en octubre 1 de 1902**

Art. 6. — El concejo nacional de educación será parte legítima: 1.º En todo juicio sucesorio de jurisdicción nacional donde no intervengan herederos reconocidos o declarados por sentencia ejecutoria, o en que hayan bienes vacantes, correspondiendo al apoderado del concejo la curatela de la herencia. 2.º En todos los expedientes y gestiones que sobre redención de capellanías se tramiten en la capital federal.

**LEY N.º 4128.**

**Modificación a la ley de procedimiento en lo civil.**

**Sancionada en Buenos Aires en septiembre 28 de 1902**

**Promulgada en octubre 3 de 1902**



**Art. 1. —** En la notificación por cédula de toda sentencia, se transcribirá solamente la parte dispositiva del fallo.

**Art. 2. —** La notificación de las providencias dictadas por los jueces de primera instancia y que deba serlo por cédula, se hará por el secretario o por el empleado que el juez designe en cada caso.

**Art. 3. —** Son improrrogables todos los términos señalados por la ley de enjuiciamiento civil.

**Art. 4. —** El término para contestar la demanda será de quince días hábiles, pero las excepciones de previo y especial pronunciamiento deberán ser opuestas dentro de los primeros nueve días. Dichos términos correrán aun cuando el demandado haga uso del derecho de recusación su causa.

**Art. 5. —** Todo traslado en primera instancia será dictado con calidad de autos.

**Art. 6. —** Los artículos precedentes rigen en todo para los representantes del ministerio fiscal y pupilar.

**Art. 7. —** Las excepciones dilatorias de incompetencia en los casos en que es posible la prórroga de jurisdicción y la de defecto legal en el modo de proponer la demanda, solo podrán alegarse en forma de artículo previo.

**Art. 8. —** Es inapelable toda providencia que ordene diligencia de prueba dentro del término respectivo.

**Art. 9. —** Las audiencias de prueba y juicios verbales deberán empezar a la hora designada, no teniendo los citados obligación de esperar sino media hora.

La asistencia se acreditará por medio de un libro especial en el que hará el secretario, o su reemplazante legal, la anotación respectiva, testimoniándola en los autos.

**Art. 10. —** Del auto que conceda el término extraordinario de prueba solo podrá apelarse en el efecto devolutivo.

Art. 11. — La prueba de testigos deberá ofrecerse dentro de la primera mitad del término ordinario, y los testigos no podrán ser examinados sino dentro de la segunda, salvo lo dispuesto por el artículo ciento diez y ocho del código de procedimientos.

Art. 12. — No serán ejecutables los sepulcros, salvo que se reclame su precio de compra o construcción.

Art. 13. — Cuando se ocurra directamente al superior por apelación denegada no se suspende la tramitación del juicio, mientras aquel no conceda la apelación y ordene en consecuencia la remisión del expediente. En todos los casos, no se admitirá este recurso sin acompañar copia simple de la providencia recurrida, autorizada por el secretario, y de los recaudos necesarios.

Art. 14. — En las cámaras de apelaciones de la capital, solo podrán informar *in voce* los litigantes o sus abogados, en caso de apelación de sentencia definitiva del pleito, cuando se hubiere producido prueba en esa instancia. En las demás apelaciones, cuando no se haya entablado el recurso de reposición podrán presentar un escrito, en el término perentorio de tres días, desde la notificación de la providencia de autos hagan o no uso del derecho de recusación.

Art. 15. — Producida una recusación con causa, el juez elevará al superior el incidente respectivo y pasará los autos al juez que siga en el orden de turno, para que continúe los procedimientos. Se hará lo mismo en caso de nuevas recusaciones.

Art. 16. — En las cámaras de apelaciones se integrará el tribunal inmediatamente, corriendo por cuerda separada el incidente de recusación.

Art. 17. — En los casos de excusación, si el juez que siga en el orden de turno entendiese que aquella es improcedente; se formará incidente, que será pasado, sin más trámite, al superior, sin que esto paralice la substanciación de la causa.

Art. 18. — Aceptada la excusación o recusación, los autos quedan radicados en el juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparezcan las causas que originaron la excusación o recusación.

Art. 19. — Desestimada una recusación con causa, se apli-

carán las costas y una multa de cien pesos por cada recusación a beneficio de la otra parte, si la recusación es calificada de maliciosa por el fallo desestimatorio.

Art. 20. — El juez o vocal de cámara a quien se pruebe que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas dicte en él resolución que no sea de mero trámite, será penado con una multa de quinientos pesos, a beneficio del consejo nacional de educación. La tolerancia de la providencia de mero trámite, no será admisible después de contestada la demanda de maliciosa por el fallo desestimatorio.

Art. 21. — Esta falta será castigada, en los secretarios, con suspensión por quince días, en la primera vez, y pérdida del empleo, en la segunda.

Art. 22. — En las secretarías de la cámara de apelación se llevará un libro que podrá ser examinado por los litigantes y los abogados que los patrocinen, en el cual se hará constar la fecha del sorteo de las causas, la remisión de los expedientes a los cararistas y la en que éstos los devuelvan estudiados.

Art. 23. — Todo auto que ordene reposición del sellado deberá ser cumplido dentro del tercero día. Transcurrido ese término, se aplicará como multa el décuplo contra el litigante que no reponga los sellos que le corresponda, librándose sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo. En este caso, si el apelante no repusiese el sellado, se reclamará además el desistimiento del recurso.

Art. 24. — Las costas de todo incidente se impondrán al vencido.

Art. 25. — (Parte 2.<sup>a</sup> del doscientos cuarenta del código de procedimientos en lo civil). Si el procedimiento estuviese arreglado a derecho y la nulidad consistiera en la forma de la sentencia, el tribunal, al declararla nula, resolverá también sobre el fondo del litigio.

Art. 26. — (Artículo 178 del código de procedimientos en lo civil). La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana ló-

gica, y las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.

Art. 27. — Esta ley se aplicará en los tribunales de la capital, treinta días después de su promulgación, quedando derogado todo precepto contrario a la misma.

---

### **LEY N.º 4329**

#### **Legalización de firmas en los exhortos entre la Argentina y el Uruguay.**

Sancionada en Buenos Aires, en julio 12 de 1904

Promulgada en agosto 25 de 1904

Art. 1º Las comisiones rogatorias en materia civil o criminal, dirigidas por los tribunales de la República Argentina a los de la República Oriental del Uruguay, o por los de la República Oriental del Uruguay a los de la República Argentina, no necesitarán de la legalización de las firmas para hacer fe cuando sean cursadas por intermedio de los agentes diplomáticos, y, a falta de éstos, por los consulares.

Art. 2º Si las comisiones rogatorias fueren libradas a petición de parte interesada, se indicará en las mismas la persona que ante las autoridades del país a que se dirijan se encargará de su diligenciamiento y abonará los gastos que éste ocasionare.

Art. 3º Cuando las comisiones rogatorias fueran dirigidas de oficio, los gastos que ocasione su diligenciamiento, serán a cargo del gobierno del país que las reciba.

---

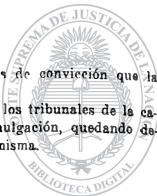
### **LEY N.º 4550**

#### **Perención de instancia**

Sancionada en Buenos Aires, en mayo 31 de 1905

Promulgada en junio 9 de 1905

Art. 1. Se tendrán por abandonadas las instancias en materia civil y comercial de fuero común o federal de la nación, si no se insta su curso:



- a) Dentro de dos años cuando el litigio se encuentre en primera o única instancia;
- b) De un año cuando estuviere en segunda o tercera instancia por apelación o nulidad;
- c) De seis meses si estuviere pendiente de un recurso de revisión y en los juicios ante la justicia de paz y alcaldes.

En las acciones que deban ser deducidas por las leyes generales, en un término menor del fijado en este artículo la caducidad de la instancia se producirá en el mismo término en que se opera la prescripción de esas acciones.

El término para la caducidad de la instancia empezará a contarse desde la última notificación, motivada por petición o diligencia practicada que tuviere por objeto activar el procedimiento.

Art. 2. La perención de la instancia se producirá contra el estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso contra los administradores y representantes.

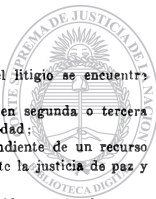
Art. 3. La perención de la instancia se operará de pleno derecho.

Los litigantes podrán pedir su declaratoria por vía de acción o de excepción antes de consentir en ningún trámite del procedimiento. Esta gestión se substanciará con las reglas y con los recursos establecidos para los incidentes.

Art. 4. La perención en primera y única instancia anula todos los procedimientos, pero no extingue la acción, que podrá ejercitarse en el juicio correspondiente entablando nueva demanda. En las demás instancias o en revisión, la perención dará fuerza de cosa juzgada a la sentencia recurrida.

Art. 5. No obstante la perención de la instancia, las partes podrán utilizar en el nuevo juicio que promovieran los instrumentos públicos o privados, la confesión, las declaraciones de testigos y demás pruebas producidas, sin que ninguna de todas ellas tenga el efecto de interrumpir la prescripción de la acción o el derecho principal.

Art. 6. Las costas causadas en el juicio que es objeto de la perención, serán a cargo del actor.





Art. 7. Las disposiciones de esta ley no son aplicables respecto de las actuaciones para la ejecución de las sentencias firmes, las que podrán proseguirse hasta establecer el procedimiento de la ejecutoria aunque hayan quedado sin curso durante los términos señalados en el art. 1°.

Art. 8. Notificada la sentencia, el incidente de perención deberá promoverse ante el tribunal de apelación rigiéndose por las disposiciones relativas a la perención de segunda y tercera instancia.

Art. 9. en los pleitos que actualmente se encuentran paralizados, los términos para la caducidad de la instancia se contarán desde el día de la promulgación de esta ley.

## LEY N.º 5062

### Contribución territorial

Sanccionada en Buenos Aires, en enero 26 de 1907

Promulgada en febrero 5 de 1907

Art. 1. El cobro por apremio se hará con arreglo a los procedimientos establecidos en el título xxv de la ley número 50 de 14 de Septiembre de 1863, por los cobradores fiscales dependientes de la administración del ramo, los que tendrán como remuneración el cincuenta por ciento de las multas percibidas.

Los cobradores no estarán obligados a acompañarse de letrado en sus gestiones judiciales.

En este juicio no serán admitidas otras excepciones que las de:

Falta de personería;

Falsedad del título;

Pago;

Prescripción.



**Art. 17.** La personería de estos cobradores será acreditada ante los jueces, acompañando copia de su nombramiento, expedida por la administración general.

**Art. 18.** Bastará como título para el apremio la constancia de la falta de pago, expedida por el jefe de la oficina que corresponda. La constancia expedida en la capital será visada por el administrador general de contribución territorial, patentes y sellos, y la expedida en los territorios nacionales por los gobernadores, receptores o colectores.

**Art. 20.** Para el cobro por apremio de la contribución territorial de los terrenos cuyos propietarios sean desconocidos, es decir, cuyos nombres no figuren en los libros registros de la administración, se llamarán por edictos publicados de oficio en el Boletín judicial y Boletín oficial por dos veces durante quince días y con intervalo de tres meses, a los propietarios o poseedores para que concurran a abonar el impuesto y multa correspondiente, bajo apercibimiento de que en caso de no comparecer, se sustanciará el juicio con el defensor de ausentes de los tribunales de 1.ª instancia. Con la certificación del secretario del juzgado de no haber comparecido el propietario o poseedor, se hará efectivo el apercibimiento, siguiéndose el procedimiento en la forma establecida en los artículos anteriores.

**Art. 21.** El cobro apremio del impuesto adeudado en los territorios nacionales se hará en la misma forma de los artículos 16 al 20 en la capital federal, salvo el caso en que el propietario tuviera su domicilio en el mismo territorio en que está situada la propiedad, caso en el cual los gobernadores nombrarán personas encargadas de esas gestiones, las que recibirán como compensación la mitad de las multas que hagan ingresar.

**Art. 22.** En los casos de apremio a que esta ley se refiere, no será de aplicación la fianza prescripta por el artículo 325 de la ley citada en el art. 16; ni tampoco se detendrán los procedimientos por falta de reposición de sellos.

**LEY N.º 5098.**

**Reformas a la ley orgánica de la municipalidad.**

**Sancionada en Buenos Aires, en julio 24 de 1907.**

**Promulgada en 29 de julio de 1907.**

Art. 15.— Los escribanos no podrán autorizar escrituras por las que se transfiera o modifique el dominio sobre bienes raíces o negocios y establecimientos industriales, sin que se acredite estar pagados los impuestos municipales, bajo pena de una multa igual al décuplo del importe de la deuda.

---

**LEY N.º 5133.**

**Modificando la ley núm. 1863 de autenticación de los actos públicos.**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 12 de 1907**

**Promulgada en septiembre 19 de 1907.**

Art. 1.º—Modifícanse los artículos 2.º y 3.º de la ley de 26 de agosto de 1863 sobre autenticación de los actos públicos y procedimientos judiciales de cada provincia, en la siguiente forma:

Art. 2.º — Serán igualmente tenidos por auténticos los autos, procedimientos judiciales, sentencias y testimonios de cualquiera de ellos con la atestación del escribano secretario del tribunal superior o de cualquiera de las cámaras de apelación de la provincia, el certificado del presidente respectivo, asegurando que la atestación está en debida forma, y con el sello del tribunal o cámaras.

Art. 3.º— Los instrumentos públicos y todo certificado, copia o todo documento que proceda de las corporaciones u oficinas que no pertenezcan al orden judicial serán tenidos por auténticos, siendo firmados por el jefe de la corporación u oficina, con la atestación, además del escribano secretario del tribunal



superior o de cualquiera de las cámaras de apelaciones de la provincia, certificado del presidente respectivo de hallarse entendido la atestación en debida forma, y el sello del tribunal o cámara.



### **LEY N.º 7055.**

#### **Reorganización de los tribunales de justicia de la capital.**

**Sancionada en Buenos Aires, en agosto 16 de 1910.**

**Promulgada en agosto 17 de 1910.**

**Art. 5.º—** En caso de impedimento o recusación de alguno de los miembros de una de las cámaras en lo civil, será reemplazado por uno de la otra cámara en lo civil; si todos los miembros de ésta estuvieran igualmente impedidos, su reemplazado será también por sorteo con los miembros de la Cámara Comercial y de lo criminal y correccional sucesivamente. En caso de impedimento o recusación de miembro de la cámara de lo comercial, serán reemplazados, siguiendo las mismas reglas, por miembros de las cámaras en lo civil y en lo criminal y correccional, sucesivamente. Si el impedimento o recusación afectara a miembros de la cámara en lo criminal y correccional, el reemplazo se hará comenzando con los miembros de la Cámara en lo comercial y siguiendo por los de las cámaras primera y segunda en lo civil.

**Art. 6.º—** En caso de producirse contienda de competencia entre dos cámaras, el presidente de la que primero hubiese conocido, las reunirá en tribunal y la decidirán por mayoría de votos. Si hubiese empate se dará intervención a un miembro de las otras cámaras elegido a la suerte.

Igual procedimiento se observará en los casos en que al celebrarse al acuerdo para dictar sentencia definitiva, cualquiera de las cámaras entendiera que en cuanto al punto en debate, es conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable.



Las contiendas de competencia que se susciten entre los jueces de diversas jurisdicción serán resueltas en últimas instancia por la cámara de que dependa el juez que primero hubiere conocido. Si se tratara de jueces en lo civil entenderá la cámara a la que corresponda el turno mensual.

---

**LEY N.º 7092**

**Reconociendo la propiedad científica, literaria y artística para las obras publicadas o editadas en la república**

**Sancionada en Buenos Aires en septiembre 16 de 1910**

**Promulgada en septiembre 23 de 1910**

Art. 9. — La publicación ilícita en el texto original o en traducción de una obra literaria: la representación de una obra dramática o lírica; la ejecución pública de una composición musical, así como la reproducción de cualquier obra artística, sin el consentimiento de sus autores, dará lugar a la acción civil por daños y perjuicios que el damnificado puede intentar ante la justicia ordinaria. Además, a solicitud del autor o derecho-habiente, y bajo su responsabilidad, el juez podrá ordenar el secuestro de la edición o de los elementos de la reproducción fraudulenta, y, en el caso de una obra teatral, la suspensión de su representación ilícita.

---

**LEY N.º 8172.**

**Banco hipotecario nacional.**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 2 de 1911**

**Promulgada en septiembre 7 de 1911**

Art. 16. — El presidente del Banco no estará obligado a absolver posiciones en los juicios, debiendo solo informar por escrito a pedido de los jueces.

## LEY N.º 8.875

### Debentures

Sancionada en Buenos Aires, en febrero 23 de 1912

Promulgada en febrero 23 de 1912



Art. 2. — Los títulos de debentures que se emitan de acuerdo con las disposiciones de esta ley, tendrán fuerza ejecutiva y como fecha cierta la de la inscripción del contrato a que se refiere el art. 3.

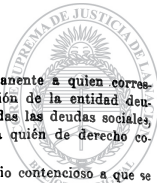
Art. 19. — En caso de debentures emitidos con garantía especial, las facultades del fideicomisario se limitarán a ejecutar la garantía especial en caso de mora en el pago de los intereses o de la amortización.

Art. 20. — En los casos del inc. c), del art. 18, el juez ordenará a pedido de los fideicomisarios sin más trámite la suspensión de la o de las personas que ejerzan la administración y del directorio, y nombrará en su reemplazo al o a los fideicomisarios, quienes recibirán los negocios y bienes sociales, bajo inventario sin perjuicio de que los administradores o el directorio suspendidos prueben en juicio contencioso la inexactitud de los fundamentos alegados por los fideicomisarios.

Art. 22. — Si los debentures emitidos fuesen con garantía flotante, los fideicomisarios procederán en caso de haber resuelto la liquidación, a realizar los bienes que constituyen la garantía, repartiendo su producido entre los tenedores de las obligaciones para la amortización del capital adeudado e intereses de acuerdo con el art. 26, debiendo pagar previamente los créditos con mejor privilegio, de acuerdo con los arts. 10 y 11 de esta ley.

Una vez satisfecha la deuda por capital e intereses relativa a los debentures garantidos, deberán entregar el remanente de los bienes a la sociedad deudora y a falta de persona con personería suficiente para recibir la entrega, el juez designará a petición de los fideicomisarios la persona a la que deba hacerse.

Si en cambio se hubiese resuelto la continuación del giro de los negocios, los beneficios anuales se destinarán al pago de los créditos pendientes y de los intereses y amortizaciones



de los debentures, entregándose el remanente a quien corresponda. Una vez regularizada la situación de la entidad deudora y hallándose al día el pago de todas las deudas sociales, la administración pasará nuevamente a quien de derecho corresponda.

Art. 24. — Si se promoviese el juicio contencioso a que se refiere el art. 20 dentro del plazo de diez días desde que se decreta la suspensión, los fideicomisarios no podrán resolver la liquidación hasta tanto no se halle resuelto en definitiva este juicio, debiendo limitarse entre tanto a los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes del deudor.

En este juicio solo se podrá alegar la inexactitud de los hechos alegados por los fideicomisarios de acuerdo con el inciso c), del art. 18, y la sentencia de primera instancia causaría ejecutoria.

Vencidos los diez días desde que se decretó la suspensión, sin que se hubiera promovido el juicio, no podrá recurrirse en adelante contra ella.

Art. 27. — Los fideicomisarios no podrán renunciar su cargo sin causa justificada a juicio del juez.

Podrán ser removidos a pedido de uno o varios tenedores de debentures, por causas graves que apreciará el juez libremente. Podrán igualmente ser removidos sin causa por resolución de la mayoría de capital de una asamblea de tenedores de debentures igualmente constituida.

Cuando hubiera necesidad de reemplazar a un fideicomisario o cuando se tratase de la remoción sin causa de un fideicomisario, el juez a pedido de uno de los fideicomisarios o de un número de tenedores que representen la vigésima parte del capital emitido de debentures, convocará a los tenedores de debentures a una asamblea a la que serán aplicables los arts. 349 al 351 del cód. de comercio, nombrándose el reemplazante por mayoría de capital presente en la asamblea.

En la primera convocatoria el quórum exigido será de la mitad del capital emitido en debentures. De la misma manera se convocará la asamblea de tenedores de debentures cada vez que se requiera una resolución de los tenedores de debentures, aplicándose a sus resoluciones todas las disposiciones que rigen a las asambleas de las sociedades anónimas.

**LEY N. 8.890**

**Impuestos a los actos judiciales y notariales sobre transmisión de bienes**

**Sancionada en Buenos Aires, en julio 18 de 1912**

**Promulgada en julio 24 de 1912**



**Art. 15. —** Los jueces no harán declaración de herederos, ni ordenarán transferencia de fondos pertenecientes a una sucesión iniciada dentro o fuera de la jurisdicción nacional, sin que previamente se haya garantido o abonado el impuesto sucesorio en la forma establecida, incurriendo el funcionario que así lo hiciere en la multa de diez veces el valor del impuesto correspondiente.

El actuario o el escribano no expedirá copia de la declaratoria de herederos, de las hijuelas y de las escrituras de donación, sin que previamente se haya satisfecho el impuesto, incurriendo en la misma pena si lo hiciere.

**Art. 20. —** La percepción del impuesto establecido en la presente ley, se efectuará por el concejo nacional de educación. Este ejercerá, sin perjuicio de la intervención que compete a los agentes fiscales, el control, cobro y aplicación del impuesto por intermedio de sus abogados y procuradores oficiales, en ejercicio de la intervención que deberán darle los jueces y demás autoridades, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 76 de la ley de educación común y conforme a la reglamentación de sus funciones que dicte el concejo.

**Art. 21. —** Además de esa intervención, el concejo nacional de educación podrán hacer inspeccionar por sus mismos abogados y procuradores todas las oficinas o establecimientos en que deba usarse el papel sellado a que se refiere esta ley, y en caso de obstrucción o resistencia, podrá asimismo requerir del juez civil en turno la correspondiente autorización para realizar la inspección con el auxilio del a fuerza pública.



**LEY N.º 9511.**

**Inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones.**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 29 de 1914.**

**Promulgada en octubre 2 de 1914.**



Art. 1.º— No son susceptibles de embargo, ni pueden ser embargados, ni afectados a terceros, por derecho alguno, los sueldos, jubilaciones y pensiones que no excedan de cien pesos mensuales.

Art. 2.º— Los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones excedan de cien pesos, sólo podrán embargarse en la proporción que establece la siguiente escala, aun en el caso de que compruebe transferencia o constitución de derechos de sueldo íntegro:

- a) De 101 a 150 \$, hasta el 5 % del importe mensual.
- b) De 151 a 200 \$, hasta el 10 % del importe mensual.
- c) De 201 a 300 \$, hasta el 15 % del importe mensual.
- d) De 301 a 500 \$, hasta el 20 % del importe mensual.
- e) De más de 500 \$, el 25 % del importe mensual.

Art. 4.º— No son aplicables los arts. 1 y 2 de esta ley a los casos relativos a créditos por pensiones alimenticias, «litis consensu» y a los que provengan de la Caja nacional de jubilaciones y pensiones.

---

**LEY N.º 9513.**

**Pavimentación de varias calles de la capital.**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 29 de 1914.**

**Promulgada en octubre 7 de 1914.**

Art. 4.º— Declárase afectada la propiedad con el impuesto de pavimentación. Los escribanos no otorgarán escrituras de transferencia de dominio o constitución de derechos reales,



sin un certificado expedido por la oficina de Contribución directa, que acredite haberse pagados las cuotas vencidas. El certificado se expedirá gratuitamente dentro de las 48 horas de haber sido solicitado.

Art. 5.º— El cobro del impuesto se hará por la repartición indicada en el artículo precedente, siendo obligación del contribuyente abonarlo en la oficina. Esta llevará la contabilidad respectiva, a fin de hacer constar las cuotas que adeuden los contribuyentes, los pagos que efectúan y los cargos que corresponda formularles por los servicios, por concepto de intereses y multas en que hubieran incurrido.

---

#### LEY N.º 9527

##### Caja nacional de ahorro postal.

Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 29 de 1914

Promulgada en octubre 6 de 1914

Art. 18. — Las sumas depositadas no podrán embargar-se ni transferirse, ni las libretas darse en prenda, sin que se admita reclamación alguna a este respecto.

---

#### LEY N.º 9643.

##### Warrants y certificados de depósitos.

Sancionada en Buenos Aires 30 de septiembre de 1914.

Promulgada en octubre 15 de 1914.

Art. 16.— Si el «warrant» no fuere pagado al vencimiento de la obligación, el acreedor, tendrá la acción que reglamenta esta ley para el cobro de su crédito, y para hacer efectivo su privilegio sobre los efectos a que se refiere el «warrant» y, en su caso, sobre las sumas del seguro.

**Art. 17.—** El acreedor del «warrant» deberá pedir, dentro de diez días de la fecha de su vencimiento, la venta en público remate de la mercadería afectada al mismo; cuando no hubiere endoso, podrá usar de éste derecho dentro del mismo término. El pedido de venta se hará ante el administrador del depósito, quien, una vez comprobada la autenticidad del «warrant», por su conformidad con las constancias del registro, ordenará el remate por intermedio del Mercado de cereales o bolsa de comercio donde existan, y donde no los hubiere por martilleros especiales designados por orden de nombramiento, dentro de una nómina que anualmente formarán los tribunales superiores de comercio de la jurisdicción respectiva. Esta resolución será comunicada al deudor y a los endosantes, cuyos domicilios consten en el registro, por carta certificada con recibo de retorno.

La comunicación se hará dentro del segundo día, si los interesados estuviesen domiciliados en el lugar del depósito y por el segundo correo si tuviesen el domicilio en otro punto.

El remate tendrá lugar en la plaza comercial donde estuviese situado el depósito, y, en su defecto, en una de las inmediatas, y se anunciará, durante diez días a lo menos, en dos periódicos del lugar donde debe efectuarse el remate o de la plaza comercial más próxima, debiendo especificarse en los avisos los productos materia de la venta, la fecha de la constitución y primera negociación del «warrant» y el nombre de su dueño primitivo.

Para los casos en que las ventas de las mercaderías deba realizarse por un «warrant» del que sea tenedor o endosante la misma empresa de depósitos, el poder ejecutivo determinará quien debe desempeñar las funciones que éste artículo encomienda al administrador del depósito.

**Art. 18.—** La venta de los efectos por falta de pago del «warrant» no se suspenderá por quiebra, incapacidad o muerte del deudor, ni por otra causa que no sea orden judicial, previa consignación del importe de la deuda, sus intereses y gastos calculados.

**Art. 19.**— El producido del remate será distribuido por el administrador del depósito respectivo, siempre que no mediare oposición dentro de tercero día.

En caso contrario, lo depositará a la orden del juez correspondiente, para su distribución dentro del orden de preferencias consignadas en el art. 22.

El sobrante, si lo hubiere, quedará a disposición del dueño del certificado de depósito respectivo.

**Art. 20.**— Por el saldo que resultare, el acreedor del «warrant» tendrá acción ejecutiva contra los endosantes del mismo, siempre que se hubiese solicitado la venta de las mercaderías afectadas al mismo en los plazos con anterioridad establecidos y que la enajenación de aquellos se hubiere realizado, ajustándose a los procedimientos prescriptos por el art. 17.

---

## **LEY N.º 9644.**

### **Prenda agraria**

**Sancionada en Buenos Aires en septiembre 30 de 1914.**

**Promulgada en octubre 19 de 1914.**

**Art. 21.**— No se admitirán tercerías de dominio ni de mejor derecho sobre los bienes afectados al contrato, con excepción de las que correspondan al privilegio consignado en el art. 6.º.

**Art. 22.**— La acción ejecutiva del certificado de prenda agraria y la venta de los bienes dados en prenda o embargados será sumarísima, verbal y actuada, no admitiéndose otra excepción que la de pago comprobado por escrito, y no se suspenderá por quiebra, muerte o incapacidad del deudor, ni por otra causa que no sea orden escrita de juez competente, dictada previa consignación del valor certificado, sus intereses y costas calculados.

En los casos de muerte, incapacidad, ausencia o concurso del deudor, la acción se iniciará o continuará con los respecti-

vos representantes legales, y si éstos no se presentaren en el juicio después de ocho días de citados, el juez procederá sin más trámites, a designar un defensor «ad hoc».



---

**LEY N.º 9653.**

**Creación de la caja de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios.**

**Sancionada en Buenos Aires, en junio 21 de 1915.**

**Promulgada en junio 30 de 1915.**

Art. 11.— Los empleados u obreros que voluntariamente abandonen sus servicios o los presten de modo que se interrumpa o perturbe la continuidad y regularidad de la marcha de los ferrocarriles, serán considerados como separados del servicio y deberán ser substituidos, perdiendo todo el derecho que hubieran adquirido a las jubilaciones, pensiones o retiro a que esta ley se refiere y a los aportes que hubiesen hecho, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que hubieran incurrido. Los empleados u obreros afectados por esta disposición tendrán derecho de reclamar ante la junta creada por el art. 7.º. Esta junta, constituida en tribunal resolverá en definitiva, en cada caso y tendrá facultad para eximir total o parcialmente de las sanciones establecidas en el párrafo anterior si a su juicio el abandono del servicio hubiere sido producido por fuerza mayor o causa justificada.

---

**LEY N.º 9667**

**Extracción de fondos correspondientes a depósitos judiciales**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 18 de 1915**

**Promulgada en septiembre 29 de 1915**

Art. 1. Los fondos depositados judicialmente, solo pueden ser removidos por extracciones, embargos o transferen-



cias, mediante orden del juez a cuyo nombre estén consignados, o la de su reemplazante legal.

Art. 2. Las extracciones de fondos depositados, fuera de la jurisdicción del juez o tribunal que la ordene, no podrán efectuarse por medio de exhortos u oficios, siendo necesaria la previa transferencia a la sucursal del Banco de la Nación de su jurisdicción.

Art. 3. Consentido el auto que ordene extracciones, de los depósitos judiciales, el actuario presentará al juez un giro o formulario de libramiento que aquel firmará y sellará, con firma entera. Dicho giro será endosado por la persona interesada o por un tercero a su ruego si éste no supiera o no pudiera firmar, en presencia del actuario, quien dará fe de dicho acto.

El banco a la vista de ese documento, hará la entrega que corresponda.

Art. 4. Los giros a que se refiere el artículo anterior, serán iguales para todos los tribunales, impresos con arreglo al formulario siguiente:

Número .....	Número .....0000
Fecha .....	Buenos Aires .....
Sr. Presidente del banco de la nación argentina:	
Nombre .....	Sírvase Ud. pagar a D .....
Suma .....	la suma de .....
Fojas .....	en virtud de la mandado a f...
Autos .....	de los autos .....
	los fondos depositados a la or-
	den de este juzgado y como per-
Causa .....	tenecientes .....

Dios guarde a Vd.

Los talonarios respectivos deberán ser también firmados por el juez pero sólo con media firma.

Art. 5. De todo perjuicio que resultare a los interesados o a terceras personas con motivo de órdenes de extracción expedidas con violación de la presente ley, será directamente responsable en los términos del art. 1112 del cód. civil, el juez que las subscribiere, sin perjuicio de las acciones que correspondiesen, contra el verdadero responsable del daño.



Art. 6. Todo giro que se expida en virtud de la presente ley, llevará como impuesto una estampilla del valor del sello de la actuación judicial correspondiente.

Art. 7. Las disposiciones de esta ley regirán para todos los tribunales federales y ordinarios de la capital y territorios nacionales.

### LEY N.º 9677.

#### Comisión nacional de casas baratas.

Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 27 de 1915.

Promulgada en octubre 5 de 1915.

Art. 9.º— El adquirente recibirá su boleto provisorio, en que conste la declaración de la venta y la escritura definitiva le será otorgada una vez que haya satisfecho la última cuota del precio.

La inscripción de la venta en el registro de la propiedad se hará gratuitamente, estando exonerada del impuesto de sellos.

Art. 15. — El registro de la propiedad llevará en una sección aparte la nómina de las casas comprendidas en los beneficios de la presente ley.

Cuando para fomentar la construcción de casas baratas dentro de las condiciones de la presente ley se acuerden préstamos con garantías hipotecarias sobre las mismas casas, la inscripción de la hipoteca subsistirá por todo el tiempo necesario para la extinción de la deuda mediante su amortización acumulativa.

Art. 19.— En caso de fallecimiento del adquirente el cónyuge sobreviviente no podrá ser obligado a la división de la propiedad por los otros herederos.

**LEY N.º 9688**

**Accidentes del trabajo**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 29 de 1915**

**Promulgada en octubre 11 de 1915**



**Art. 13.** — La indemnización por accidente del trabajo no puede ser objeto de embargo, cesión, transacción o renuncia, y goza de todas las franquicias y privilegios acordados por las leyes civiles y comerciales al crédito por alimentos.

**Art. 15.** — En la capital y en los territorios nacionales será juez competente para conocer de la acción de indemnización por accidentes del trabajo, el juez del lugar del hecho o del domicilio del demandado, a elección del actor siguiéndose el procedimiento sumario.

**Art. 16.** — El representante del ministerio público de incapaces, tendrá personería para ejecutar y percibir en su respectiva jurisdicción los valores destinados a ingresar en la "caja de garantía", constituida de acuerdo con la presente ley, a cuyo efecto, las autoridades pondrán en su conocimiento los accidentes que a tal efecto reclamen su intervención.

**Art. 17.** — Los obreros y empleados a que se refiere esta ley, podrán optar entre la acción de indemnización especial que les confiere la misma, o las que pudieran corresponderles según el derecho común, por causa de dolo o negligencia del patrón. Sin embargo, ambas son excluyentes, y la iniciación de una de ellas o la percepción de cualquier valor por su concepto, importa la renuncia ipso facto de los derechos que en ejercicio de la otra pudiera corresponderle.

---

**LEY N.º 9689**

**Modificando el art. 675 del código de comercio**

**Sancionada en Buenos Aires en septiembre 29 de 1915**

**Promulgada en octubre 16 de 1915**

**Art. 1.º** — La ejecución de las letras de cambio se despachará con vista de la letra y protestos.



Art. 2.º — Derógase el art. 675 del código de comercio, y en la primera edición oficial que se haga del mismo, se incluirá en su reemplazo el artículo anterior.

---

**LEY N.º 10.080.**

**Cartas rogatorias con el Perú.**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 27 de 1916.**

**Promulgada en octubre 5 de 1916.**

Art. 1.º— Las comisiones rogatorias en materia civil o criminal, dirigidas por los tribunales de la Rep. Argentina, a los de la Rep. del Perú, o por los de la Rep. del Perú a los de la Rep. Argentina, no necesitarán de la legalización de las firmas para hacer fé, cuando sean cursadas por intermedio de los agentes diplomáticos, y a falta de estos, por los consulares.

Art. 2.º— Si las comisiones rogatorias fuesen libradas a petición de parte interesada, se indicará en las mismas la persona que ante las autoridades del país a que se dirijan se encargará de su diligenciamiento y abonará los gastos que este ocasionare.

Art. 3.º — Cuando las comisiones rogatorias fueran dirigidas de oficio, los gastos que ocasione su diligenciamiento serán a cargo del gobierno del país que lo reciba.

Art. 4.º— La presente convención tendrá una duración indefinida; pero podrá ser revocada por cualquiera de las altas partes contratantes, denunciándola con un año de anticipación.

---

**LEY N.º 10.081.**

**Cartas rogatorias con el Paraguay.**

**Sancionada en Buenos Aires en septiembre 27 de 1916.**

**Promulgada en octubre 5 de 1916.**

Art. 1.º— A falta de la legislación establecida en el tratado de Montevideo para autenticar las comisiones rogatorias





en materia civil o criminal que se dirijan entre sí los tribunales de los países contratantes, bastará que ellas sean cursadas por intermedio de los agentes diplomáticos o en su defecto, por los cónsules.

Art. 2.º— Las comisiones rogatorias libradas a petición de parte interesada, expresarán el nombre de la persona encargada de su diligenciamiento ante las autoridades a que se dirijan, y que deberá abonar los gastos que él demande. Los que ocasionen las diligencias de oficio serán a cargo del gobierno exhortado.

Art. 3.º— Esta convención podrá ser revocada por cualquiera de las partes contratantes, previa denuncia hecha con un año de anticipación.

---

### **LEY N.º 10.273.**

**Reformas de la sec. 1, tit. IX del cód. de minería.**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 24 de 1917.**

**Promulgada en noviembre 12 de 1917.**

Art. 18. — Los jueces y las autoridades administrativas en tales casos y mientras no se sancione la reforma general del cód., aplicarán las disposiciones del actual, teniendo en cuenta la supresión del pueble por trabajo y el denuncia por despueble; y en los casos de silencio u obscuridad insustituibles se guiarán por los principios generales de esta legislación por los del cód. civ. y por los de leyes análogas. (286 del c. de m.)

---

### **LEY N.º 10.284.**

**Hogar, (fomento y amparo de la familia argentina).**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 25 de 1917.**

**Promulgada en noviembre 28 de 1917.**

Art. 2.º — Los lotes de hogar son propiedad de la familia y no podrán ser embargados, vendidos ni cedidos salvo a otra



familia y con permiso del P. E. La donación caduca por falta de ocupación o abandono del lote y este quedará disponible y podrá ser solicitado por otros vecinos, si la superficie del de éste unida a aquel no sobrepasa el máximo que fija esta ley. Los frutos y productos de cada año podrán ser embargados y vendidos únicamente hasta la mitad para pagar las deudas contraídas, de acuerdo con las preferencias establecidas por el cód. civ.

Art. 3.º — Todo ciudadano o padre de familia, o todo extranjero en la misma condición que se obligase a hacerse ciudadano o pudiese serlo legalmente dentro de un plazo que la reglamentación de esta ley determinará, y toda mujer soltera o viuda, mayor de 22 años, tendrán derecho a pedir en tierras vacantes del estado, previa información sumaria de buenos antecedentes, un lote de 20 a 200 hectáreas, siempre que no fuesen propietarios de otros lotes, en el momento de su solicitud y establecimiento. En caso de muerte del padre de familia, esta continuará con todos sus derechos. Al llegar a la mayor edad los hijos casados, como todo otro ciudadano, pueden solicitar un nuevo lote de hogar en territorio fiscal de ese u otro distrito. La falta de cumplimiento a la promesa de nacionalización determinará la caducidad del lote del hogar.

Art. 4.º — Mientras queden en la familia menores o mujeres solteras, tendrán derecho al lote del hogar. Cuando todos lleguen a la mayor edad el lote del hogar podrá dividirse con arreglo al derecho común.

---

### LEY N.º 10364.

#### Modificaciones a la ley de contribución territorial.

Sancionada en Buenos Aires, en marzo 19 de 1918.

Promulgada en marzo 21 de 1918.

Art. 6.º — Los jueces no aprobarán cuentas particionarias ni ordenarán se expidan testimonios de hijuela sin que previamente se justifique el pago del impuesto de contribución territorial.

**LEY N.º 10.366.**

**Patentes a los ramos de comercio e industria y profesiones  
varias para 1918.**

**Sancionada en Buenos Aires, en marzo 14 de 1918.**

**Promulgada en Marzo 27 de 1918.**



Art. 41.— El cobro judicial se hará por el procedimiento establecido en el título XXV, de la ley núm. 50 de 14 de septiembre de 1863, siendo título hábil la boleta certificada por la administración general de contribución territorial, patentes y sellos y no serán admisibles otras excepciones que las de:

- 1.º Falta de personería;
- 2.º Falsedad de título o boleta con que se ejecuta;
- 3.º Prescripción;
- 4.º Pago.

Las excepciones de falsedad de título no se entenderá de la causa u origen de dicho título.

Si el resultado del diligenciamiento del auto de solvendo fuese negativo por no pagar, ni dar bienes suficientes a embargo el deudor comerciante, el fisco con su crédito por el impuesto de patente, está habilitado para pedir la quiebra.

Art. 51.— Los escribanos públicos no podrán autorizar contrato alguno, celebrado por un contribuyente, que se refiera a asuntos de su comercio, industria o profesión, sin que acredite por certificado de la administración del ramo el pago del impuesto hasta el año de la operación inclusive. Los que falten a esta prescripción, serán penados con una multa igual al décuplo de la deuda.

Los escribanos públicos que hubieren incurrido en la pena anterior y apremiados judicialmente, no abonarán el importe de la multa, serán suspendidos por el ministerio de justicia e instrucción pública en el ejercicio de sus funciones y exonerados si no regularizan su situación.

Art. 52. — Ningún juez podrá ordenar el pago de comisión de remates, honorarios de médicos, ingenieros, agrimensores y demás profesiones gravadas por esta ley sin que previamente exhiban la patente correspondiente.

Los jueces y secretarios serán responsables de las omisiones en que se incurra, quedando sujetos a las mismas penas decididas en el artículo anterior.

---

**LEY N.º 10.505**

**Trabajo a domicilio.**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 27 de 1918**

**Promulgada en octubre 8 de 1918**

Art. 23. — De las contestaciones que nazcan de la aplicación de la presente ley sobre el pago de los salarios fijados las comisiones de salarios, entenderán los jueces de paz las localidades respectivas, cuando la suma reclamada excediera de quinientos pesos nacionales, y los jueces de paz civil cuando excedieran de esa suma. Las sentencias de jueces de paz serán apeladas ante los jueces de lo civil; los autos de estos en los juicios de su competencia ante las cámaras de apelaciones.

Los juicios serán sumarios, verbales y actuados.

Art. 24. — En todas las actuaciones en que los patronos obreros deban intervenir ante las autoridades, en petición, demanda o defensa de sus derechos reconocidos por esta ley, no se les exigirá sellos, ni comisión, ni remuneración, ni forma alguna de compensación por servicios que directa o indirectamente deban prestar los funcionarios respectivos y cualquiera de ellos que contraviniese esta disposición será condenado a pagar una multa del décuplo del valor de lo que le fuere cobrado.

---

**LEY N.º 10.650**

**«Caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios» (creación de la)**

**Sancionada en Buenos Aires, en abril 24 de 1919**

**Promulgada en abril 30 de 1919**

Art. 14. — Los bienes que corresponden a esta ley son inembargables.



**LEY N.º 11.027.**

**Presupuesto de la administración. (a)**

**Sancionada en Buenos Aires, en julio 12 de 1920.**

**Promulgada en julio 12 de 1920.**



Art. 39. — Los peritos y profesionales de cualquier categoría, que desempeñen empleos a sueldo de la nación, no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramiento de oficio o en los que el fisco sea parte.

Art. 47. — Las multas por infracción a la ley de papel sellado ante la justicia de paz y alcaldías se gestionarán por intermedio de los cobradores fiscales, encargados de la percepción de los impuestos de contribución territorial y patentes, los que tendrán como remuneración el 50 o/o de las multas que hicieren ingresar; debiendo, observar para ello el procedimiento de premio que establece la ley núm. 50 de 14 de setiembre de 1863.

Art. 48. — Las cámaras de apelación remitirán mensualmente a la oficina del boletín judicial y publicación de los fallos de los tribunales de la nación, copias de las sentencias y sumarios de jurisprudencia a efectos de su publicación.

---

**LEY N.º 11.077.**

**Extinción de las obligaciones del deudor en los concursos civiles.**

**Sancionada en Buenos Aires en septiembre 30 de 1920.**

**Promulgada en octubre 16 de 1920.**

Art. 1.º — En los concursos civiles se extinguen todas las obligaciones del deudor y el juez a petición del mismo, mandará

---

(a) Con razón se ha llamado a la ley de presupuesto la ley de las leyes, pues en ella se reforman códigos con una facilidad pasmosa. Recordamos al pasar que en Francia se intentó suprimir la pena de muerte, no votando los fondos con que se retribuía al verdugo. *Jorge Vidal*. «Cours de droit criminel», p. 622, 4.ª edic.»

levantar su inhabilitación personal y le otorgará carta de pago, siempre que no existiesen causas que lo sometan al fuero criminal:

- a) Dictado el auto aprobatorio de la adjudicación de bienes;
- b) Tres años después de iniciado el concurso;
- c) Si hubiese dolo o fraude, cinco años después de cumplida la sentencia condenatoria.

Art. 2.º — La carta de pago se otorgará por el juzgado del concurso con intervención del síndico y del ministerio público en el caso del inc. c) del art. 1.

Art. 3.º — Incorporáanse las disposiciones de la presente ley al título correspondiente del cód. civ. «Extinción de las obligaciones» quedando derogadas todas las que a ellas se opongan.

### LEY N.º 11.116

#### Creando la caja nacional de jubilaciones, pensiones y subsidios para el personal de empresas particulares

Sancionada en Buenos Aires, en enero 28 de 1921

Promulgada en febrero 11 de 1921

Art. 39. — Las pensiones serán acordadas por el directorio de la caja ante el cual deberán solicitarse, acompañando los recaudos necesarios para justificar que el postulante está en las condiciones de esta ley. El directorio acordará o desechará en definitiva la solicitud, pero sus resoluciones podrán ser apeladas en la forma y a los efectos establecidos en el art. 62.

Art. 62. — Las jubilaciones, retiros, pensiones y subsidios serán acordados por la mayoría de los miembros que componen el directorio de la caja ante el cual deberán solicitarse.

En caso de disconformidad del interesado, la resolución del directorio será apelada ante el juez civil en turno, quien con las constancias del expediente administrativo u otras que.

Art. 3. — La facultad para dictar la ley de bancarrotas corresponde al congreso, art. 67, inc. 11 de la const. Sin embargo, incluimos esta ley, porque las provincias han legislado sobre concursos civiles, cuando del derecho transitorio que les acuerda el art. 108 de la const. fed.

de oficio y para mejor proveer, solicite de las autoridades de la caja, resolverá sobre la correcta o incorrecta aplicación de la



## **LEY N.º 11.122.**

### **Procedimientos en los juicios de desalojo.**

**Sancionada en Buenos Aires, en Abril 29 de 1921.**

**Promulgada en mayo 9 de 1921.**

**Art. 1.º** — En los juicios de desalojo relativos a fincas urbanas en la Capital federal y territorios nacionales, el actor y demandado deberán manifestar si en la casa, pieza o departamento locado existen o no sub-inquilinos. En el primer supuesto, el juez de oficio dará a éstos conocimiento por cédula de la demanda entablada al inquilino principal dentro del término de cuarenta y ocho horas de interpuesta, sin que ello importe tenerlos por parte en el juicio.

La sentencia de desalojo se hará conocer a los sub-inquilinos por cédula y el término acordado para el desalojo al inquilino principal, empezará a contarse para todos desde el día siguiente de la notificación a los sub-inquilinos.

**Art. 2.º** — Las demandas de desalojo basadas en la falta de pago del arrendamiento, que estuvieran pendientes en el momento de la promulgación de la presente ley, quedarán sin efecto en cualquier estado del juicio si el demandado abonare dentro de los quince días subsiguientes en la capital federal y de treinta en los territorios nacionales, el importe de lo adeudado, más los intereses respectivos y la suma que el juzgado estime para los gastos causídicos.

**Art. 3.º** — Se declaran incorporadas al código de procedimiento y a la ley de justicia de paz, las disposiciones de carácter general contenidas en la presente



**LEY N.º 11.137.**

**Modificación a la caja nacional de ahorro postal.**

**Sancionada en Buenos Aires, en agosto 2 de 1921.**

**Promulgada en agosto 4 de 1921.**



Art. 1.º — Se modifica el art. 18 de la ley 9527 en los términos siguientes:

Art. 18. — Las sumas depositadas hasta la cantidad de 5.000 \$ no podrán embargarse ni transferirse ni darse en prenda las libretas, sin que se admita reclamación alguna a este respecto. Será igualmente inembargable la propiedad urbana o rural que se adquiriera por un valor no superior a \$ 10.000 con las cantidades depositadas en la Caja, que goce de ese privilegio, siempre que la cuenta tenga un minimum de dos años de antigüedad, y que dos tercios, al menos del importe a aplicarse se encuentre depositado 6 meses antes de la operación de la compra. El privilegio de la inembargabilidad subsistirá mientras la propiedad permanezca en poder del adquirente, su esposa e hijos menores.

---

**LEY N.º 11.170**

**Arrendamientos agrícolas.**

**Sancionada en Buenos Aires, en septiembre 28 de 1921**

**Promulgada en octubre 7 de 1921**

Art. 10. — Se declaran inembargables y no podrán ser objeto del derecho de retención los muebles, ropas y útiles domésticos del agricultor, un arado, una rastra, una máquina sembradora, una cortadora, un sulky con los arneses correa pendientes, un carro chata con los arneses para siete caballos, 15 caballos o tres yuntas de bueyes y los arneses indispensables para atarlos al arado, 2 vacas y sus crías, tres cerdos, los animales menores y aves para el consumo de la familia durante un año, y la semilla de la cosecha anual próxima en una can-

tividad que no exceda de lo necesario para el cultivo de la chacra que arriende y hasta un máximo de ochenta hectáreas. El beneficio que este artículo acuerda no podrá invocarse contra del vendedor en su reclamación del precio de las cosas que se declaran inembargables.



---

**LEY N.º 11.173.**

**Modificaciones a la ley de jubilaciones de ferroviarios.**

**Sanccionada en Buenos Aires, en Septiembre 29 de 1921.**

**Promulgada en octubre 13 de 1921.**

Art. 14. — Los bienes que corresponden a esta ley son inembargables, y asimismo, las casas objeto de los préstamos expresados durante la vida del prestatario, su esposa e hijos menores. Estas no podrán enajenarse, gravarse, arrendarse o cederse sin consentimiento del directorio, hasta la cancelación del préstamo.

---

**LEY N.º 11.202.**

**Prorrogación del término para el vencimiento de contratos de locación.**

**Sanccionada en Buenos Aires, en abril 18 de 1923.**

**Promulgada en abril 21 de 1923.**

Art. 1.º — Prorrógase hasta el 30 de setiembre 1923 el término para el vencimiento de los contratos de locación de casas, piezas y departamentos destinados a habitación, que establece el art. 1.º, inc. b de la ley núm. 11.156, los que quedarán sometidos a las mismas condiciones, excepciones y caducidades que dicha ley prevé.

Art. 2.º — Los juicios pendientes por desalojo, iniciados por haber vencido el plazo de año y medio que fija el art. 1, inc. c de la ley 11.156 para la locación de casas, piezas y departamentos destinados a habitación, quedarán sin efecto una vez promulgada la presente ley.



**Decreto sobre tramitación de exhortos librados por autoridades judiciales de la república a las del extranjero y vice versa, de 11 de octubre de 1872**

Art. 1. — Que las autoridades de la república que ordenan diligencias judiciales que han de practicarse en el extranjero, se entiendan directamente con los agentes diplomáticos de la nación, o con los cónsules, en los países donde no haya funcionario de esa clase.

Art. 2. — Que los señores ministros extranjeros, o cónsules de las naciones que no estén representadas diplomáticamente en la república, pueden dirigir los exhortos que hasta hoy se remiten a este ministerio, directamente a los presidentes de los tribunales de justicia, o a los jueces federales, según correspondan.

---

**Decreto sobre procedimiento para la legalización de documentos extranjeros que deban valer en la república, de julio 24 de 1918**

Art. 1. — Todo documento emanado o pasado por una autoridad extranjera que deba hacer fé en el territorio de la república, deberá ser legalizado en primer término, por el agente consular argentino acreditado en la jurisdicción de la autoridad extranjera de que el documento proviene o que lo ha certificado.

Art. 2. — En el caso de falta o ausencia de agente consular argentino, el documento deberá ser legalizado por la legación, y a falta de ésta, por el agente diplomático o consular de una nación amiga.

Art. 3. — La legalización consular o diplomática en la forma dispuesta en los artículos anteriores no podrá en ningún caso ser suplida por la del agente diplomático o consular acreditado en la república por la nación de que el documento emana.

Art. 4. — La firma del agente consular, o en su caso diplomático que legalice el documento extranjero, deberá a su



vez ser legalizada en la república por el ministerio de relaciones exteriores y culto.

Art. 5. — El presente decreto empezará a regir desde el día 1.º de noviembre del presente año, y a partir de esa fecha, el ministerio de relaciones exteriores y culto, así como las demás autoridades públicas argentinas, no legalizarán ningún documento extranjero que no llene las condiciones impuestas en los artículos anteriores, salvo aquellos documentos que por disposiciones expresas de convenios internacionales vigentes estén exentos de esas formalidades.

#### **Ley sobre regulación de honorarios. (a)**

Art. 57. En toda clase de juicios, el actuario formará la correspondiente planilla de costas, en que cargue a cada parte las que haya causado, y las comunes a prorrata, con estricta sujeción a arancel.

Art. 58. Los peritos no sujetos a arancel, estimarán ellos mismos sus honorarios, anotándolos al pie del informe o escrito en que se expidan, o en minuta que entregarán al actuario cuando se expidan de palabra.

Art. 59. Formada la liquidación, se mandará hacer saber a las partes, poniéndose de manifiesto en la oficina durante tres días.

Art. 60. Si alguna de las partes objetare la liquidación, el juez oirá en juicio verbal al que hiciere la objeción y al funcionario a quien ella interese.

En seguida resolverá sin más trámite.

Art. 61. La resolución de los jueces inferiores, a este respecto, será apelable.

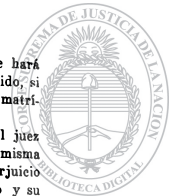
Elevados los autos al superior inmediato, este resolverá dentro de seis días, sin substanciación de ningún género y sin más recurso.

Si el incidente ocurriese ante la suprema corte o las cámaras de apelación, la resolución que se dicte será inapelable.

---

(a) Esta ley sancionada en la provincia de Buenos Aires el 31 de octubre de 1878, rige en la capital de la República.

Véase ley núm. 1102, art. 39.



Art. 62. Cuando haya condenación en costas, no se hará cargo alguno por la defensa del litigante que haya vencido, si sus escritos no estuviesen firmados por abogados de la matrícula.

Art. 63. Si estuviesen firmados por abogados, el juez o tribunal que haga la condenación, expresará en la misma sentencia lo que haya de abonarse por honorarios, sin perjuicio de lo que pueda haberse convenido entre el abogado y su cliente.

La misma determinación deberá hacerse respecto de los honorarios de los procuradores, mandatarios, contadores y demás peritos, no sujetos a arancel.

Art. 64. Cuando sea necesario nombrar algún conjuez para integrar el tribunal, su honorario será regulado por el vocal a quien corresponda en turno, sin que haya lugar a reclamación alguna.

Art. 65. Siempre que ocurra cuestión sobre honorarios entre un abogado y el litigante a quien defienda, será decidida por el juez de la causa, brevemente y sin forma de juicio.

Art. 66. Si hubiese convenio escrito que fije el monto de los honorarios, se estará a lo que de él resulte, no siendo contrario a las leyes que reglan los contratos.

Será, sin embargo, nulo y sin ningún efecto, todo pacto por el cual el abogado venga a hacerse partícipe o a tener interés directo en el resultado del pleito.

Art. 67. No habiendo convenio escrito el mismo abogado hará la estimación de su honorario, y en caso de no conformarse con ella el litigante, el juez decidirá en la forma prevenida en el artículo 65.

Art. 68. En todos los casos la resolución que recaiga será apelable con arreglo a lo prevenido en el artículo 61.

Art. 69. Cuando entre los interesados hubiere menores, incapacitados o ausentes, el juez o tribunal de la causa, hecha la regulación por el abogado, resolverá sin substanciación alguna, sobre su mérito, pudiéndose apelar con arreglo al artículo 61.

Art. 70. Respecto de los honorarios de los procuradores, mandatarios y contadores, regirán las reglas establecidas en

# INDICES





# ÍNDICE ANALÍTICO DE MATERIAS

## TOMO I.

### PRIMERA PARTE

#### I

#### PRINCIPIOS GENERALES

##### La justicia

La justicia y el estado moderno. — 2.° Propósitos de la constitución nacional sobre justicia. — 3.° Garantías consagradas en la misma: a) juez natural; b) igualdad; c) inviolabilidad de la defensa. — 4.° El poder central y los gobiernos de provincia. — 5.° Derecho procesal: a) definición, objeto y contenido; b) su necesidad; c) caracteres; d) uniformidad; e) importancia y relación con las leyes de fondo; f) la regla «locus regit actum»; g) ¿son leyes de orden público?; h) ¿son leyes de derecho público?; i) retroactividad. — 6.° Condiciones de una buena ley de procedimiento: a) principios a que debe obedecer; b) número de instancias; c) casos de instancia única en el país, anteriores y posteriores a la independencia; d) limitación de los recursos; e) sistema de pruebas; f) flexibilidad y rapidez en los trámites; g) el sistema escrito y el sistema oral; legislación comparada. 5

#### II

#### FUENTES DEL DERECHO PROCESAL. — JUSTICIA COLONIAL — LA CODIFICACION

Fuentes del derecho procesal: a) la doctrina; b) la historia; c) la jurisprudencia; d) la legislación nacional y comparada. — 2.° Fuentes históricas del derecho procesal argentino: a) fuentes mediatas; el derecho romano; idea general del procedimiento; b) fuentes inmediatas; la legislación española. — 3.° Organización de la justicia colonial argentina: alcaides ordinarios, gobernadores, tenientes de gobernador y cabildos; las audiencias; el consulado. — 4.° La codificación; antecedentes, preparación y sanción de las leyes que rigen el procedimiento en la justicia nacional y ordinaria de la capital . . . . . 49

#### III

#### ORGANIZACION DE LA JUSTICIA ARGENTINA

La justicia argentina y sus órganos: a) justicia federal; b) justicia ordinaria de la capital; discusión sobre su carácter; c) justicia de los territorios nacionales; d) jurado; e) justicia militar; f) justicia provincial. . . . . 59





IV

LA JUSTICIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES —  
RELACIONES ENTRE LA JUSTICIA PROVINCIAL Y LA  
NACIONAL

La justicia provincial. — 2.º La suprema corte de la provincia de Buenos Aires. — 3.º Facultades de la misma como juez de lo constitucional: demanda y recurso. — 4.º Diferencias entre las atribuciones de la corte federal y la corte provincial: a) amplitud del campo de acción de esta última; b) su jurisdicción constitucional originaria; c) forma diversa de plantear los casos, según se trate de uno u otro tribunal. — 5.º Recurso de inaplicabilidad de ley: a) sus propósitos; b) no abre una nueva instancia y no pueden en él discutirse los hechos; c) alcance de las palabras inaplicabilidad de ley. — 6.º Diferencia entre el recurso de inaplicabilidad de ley y el de casación. — 7.º La corte como tribunal de conflictos. — 8.º Diferencia entre la demanda de inconstitucionalidad y la demanda contencioso-administrativa. — 9.º Recursos en materia penal. — 10. Puntos de contacto de la justicia provincial con la justicia nacional: leyes de 1858, 1862, 1863, 1878 y 1902. — 11. Recursos de los artículos 14 de la ley núm. 48 y 6.º de la ley 4055. . . . .

V

JUSTICIA DE PAZ

Justicia de paz: organización en la capital. — 2.º Jueces y alcaldes. — 3.º Nombramiento. — 4.º Condiciones mínimas para desempeñar el cargo. — 5.º Examen crítico. — 6.º Reforma del sistema actual. — 7.º ¿Cómo debe hacerse? . . . . .

VI

MAGISTRATURA

La tarea de juzgar. — 2.º Condiciones mínimas para ejercer el cargo de juez: a) en la suprema corte y cámaras federales de apelación; b) en los juzgados de sección; c) en los tribunales ordinarios de la capital; d) en los juzgados letrados de los territorios nacionales; e) en las provincias; f) en la justicia de paz. — 3.º Diversos sistemas en la designación y ascenso de los jueces: a) sistema argentino; b) legislación extranjera . . . . .

VII

MAGISTRATURA (Continuación)

Juramento previo e incompatibilidades. — 2.º Sanciones contra los jueces: a) políticas; b) penales; c) civiles; d) disciplinarias; e) de la opinión pública. — 3.º Garantías en favor de los jueces: inamovilidad, compensación, jubilación, retiro y pensión. — 4.º El juez no procede de oficio. — 5.º Aplicación de la ley: a) orden de su aplicación; b) leyes inconstitucionales; c) leyes supletorias; d) leyes extranjeras. . . . .



VIII

MINISTERIO PUBLICO — AGENTES AUXILIARES

- 1.º Ministerio público fiscal: origen y objeto. — 2.º ¿A quién representa? — 3.º Organización y facultades. — 4.º Caracteres: independencia, inamovilidad, unidad, jerarquía. — 5.º Crítica a su organización. — 6.º Ministerio pupilar: su organización. — 7.º Asesores y defensores de menores. — 8.º Facultades y deberes. — 9.º Otros auxiliares de la administración de justicia: a) secretarios y ujieres; b) abogados; c) procuradores. — 10. Libertad de defensa y de representación. . . . . 212

IX

EL TIEMPO EN EL DERECHO PROCESAL — NOTIFICACIONES

- 1.º Principios generales. — 2.º Leyes que rigen los términos judiciales. — 3.º Términos perentorios, no perentorios, prorrogables e improrrogables. — 4.º Suspensión de los términos; a) conformidad de partes; b) fuerza mayor; c) otras causas. — 5.º Formas de llevar a conocimiento de las partes las resoluciones judiciales: a) notificación en el domicilio y en la oficina; b) por nota; c) por edictos; d) por correo. — 6.º Subsanación de la falta de notificación. — 7.º Formas y solemnidades de las notificaciones. — 8.º Domicilio en que debe hacerse la notificación: real, legal y contractual. — 9.º Pérdida de los derechos por el transcurso del tiempo; a) perención; b) rebeldía y decaimiento; c) deserción. — 10. Habilitación de días y horas. . . . . 249

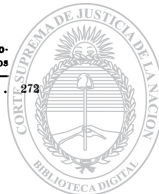
X

JURISDICCION Y COMPETENCIA

- 1.º Principios generales sobre la jurisdicción y la competencia: a) la jurisdicción tanto puede corresponder al poder ejecutivo como al poder judicial; b) la jurisdicción administrativa y sus limitaciones en el país. — 2.º Contralor del poder judicial sobre la administración: a) demandas contra la nación, en el doble carácter, y a que ésta puede actuar y crítica a esa clasificación; b) rendición de cuentas de fondos del tesoro nacional; c) impuestos internos; d) resoluciones de carácter municipal; e) jurisdicción de la dirección general de ferrocarriles, etc. — 3.º Lo contencioso-administrativo en la provincia de Buenos Aires y sus características. — 4.º Fraccionamiento de la jurisdicción ejercida por el poder judicial: a) federal y ordinario; b) civil; c) comercial; d) penal. — 5.º Competencia «ratione materiae» y «ratione personae» y peculiaridades de una y otra. — 6.º Epoca en que debe determinarse la competencia del juez. — 7.º Jurisprudencia. — 8.º Incompetencia y exceso de poder: a) tribunal de conflictos en Francia e Italia; b) la corte de la provincia de Buenos Aires. — 9.º Modos diversos de plantear y



resolver las cuestiones de competencia. — 10. De la inhibitoria. — 11. Cuestiones positivas y negativas. — 12. Diversos casos. — 13. Tribunal competente para resolver cada caso. — 14. Necesidad de una ley uniforme. . . . . 273



## XI

### JURISDICCION Y COMPETENCIA

(Continuación)

- 1.º La competencia territorial y su extensión. — 2.º Juicio sobre faltas. — 3.º Principios generales que rigen la competencia en las acciones personales y reales. — 4.º Competencia por valor. — 5.º Turno para la iniciación de los juicios. — 6.º Cuestiones conexas: a) acumulación de acciones; b) acumulación de autos; c) incidentes; d) cobro de honorarios y costas; e) ejecución de sentencia; f) juicio ordinario como consecuencia del ejecutivo; g) acciones solidarias. — 7.º Obligaciones accesorias: a) fianza; b) hipoteca. — 8.º Acciones referentes a la familia o a las personas: a) disenso; b) acciones de divorcio y nulidad de matrimonio; c) tenencia de hijos; d) filiación; e) tutela y curatela; f) patria potestad; g) venia a la mujer casada; h) separación de bienes; i) habilitación de edad para ejercer el comercio; j) ausencia con presunción de fallecimiento. — 9.º Acciones personales relativas a inmuebles: a) interdictos y acciones posesorias; b) desalojo; c) mensura; d) medianería; e) jactancia; f) impuestos nacionales; g) impuestos provinciales; h) impuestos municipales; i) cobro de afirmados; j) división de condominio; k) acciones reales. — 10. Juicio sucesorio. — 11. Convocatoria de acreedores y quiebras. — 12. Concurso civil de acreedores. — 13.º Otras acciones: a) de rendición de cuentas; b) pro socio; c) delitos y cuasi-delitos; d) demandas contra la nación; e) id. contra estados extranjeros; f) id. contra reparticiones públicas; g) id. contra ministros y cónsules extranjeros; h) id. contra las provincias; i) id. contra empleados públicos. — 14.º Transporte. — 15.º Competencia por grado. — 16. Competencia del juez exhortado. — 17. Extradición. — 18. Diversas clases. — 19. Procedimiento que debe observarse en los juicios de extradición: a) cuando es pedida por una nación extranjera; b) cuando es solicitada por la república. — 20. Prisión preventiva del acusado. — 21.º Fianza. — 22. Extradición interprovincial. . . . . 305

## XII

### JURISDICCION Y COMPETENCIA

(Continuación)

#### Acciones reales

- 1.º De la regla *forum rei sitae*. — 2.º Acciones reivindicatoria, confesoria y negatoria. — 3.º Acciones de carácter mixto.

— 4.º Acción hipotecaria. — 5.º Acciones de nulidad, rescisión, revocación o resolución de actos constitutivos de derechos reales. . . . .



364

### XIII

#### COMPETENCIA FEDERAL

- 1.º Características de la justicia federal. — 2.º Causas que versan sobre puntos regidos por la constitución. — 3.º Id., id., por las leyes de la nación. — 4.º Id., id., por los tratados con las naciones extranjeras. — 5.º Causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. — 6.º Causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. — 7.º Asuntos en que la nación sea parte. — 8.º Causas que se susciten entre dos o más provincias. — 9.º Id., id., entre una provincia y los vecinos de otra. — 10. Id., id., entre los vecinos de diferentes provincias. 11. — Id., id., entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero. — 12. Competencia en los lugares donde la nación ejerce jurisdicción exclusiva. — 13. Prórroga de la competencia federal. — 14. Competencia en los juicios sucesorios y de concursos. — 15. Excepciones a la competencia de los jueces federales y locales. — 16. Competencia accidental de los jueces de provincia en asuntos federales. — 17. Competencia originaria y apelada de la suprema corte. — 18. Competencia de las cámaras de apelación . . . . .

372

### TOMO II.

#### SEGUNDA PARTE

### XIV

#### PROCEDIMIENTO PENAL

##### Principios generales

- 1.º Procedimiento penal: a) definición; b) importancia; c) relación con las revoluciones políticas y los sistemas; d) fin. — 2.º Sistema acusatorio, inquisitivo y mixto. — 3.º Principios fundamentales: a) publicidad; b) sistema probatorio; c) igualdad entre los derechos de la acusación y de la defensa; d) continuidad y otras garantías; e) intervención del pueblo en la justicia; f) principios procesales contenidos en la constitución. — 4.º Nuestro código de procedimiento: a) origen y sanción; b) crítica . . . . .

5

### XIV bis

#### EL ACUSADO, Etc.

- 1.º Incomunicación del acusado. — 2.º Fundamentos que se aducen para justificarla. — 3.º Análisis de los mismos. — 4.º Derecho comparado. — 5.º Disposiciones de nuestro código. — 6.º Idea-



tividad y circunstancias personales del acusado. — 7.º Rebeldía: a) del acusado; b) en los delitos de acción privada; c) del querellante particular. — 8.º Organización de la defensa. — 9.º Embargo preventivo de bienes: a) su objeto; b) oportunidad en que se decreta. — 10. Reglas sobre la traba del embargo, administración de los bienes y venta de los mismos. — 11. Notificaciones. . . . .

## XV

### ACCIONES

1.º Acciones que nacen del delito. — 2.º Acción pública: a) diversos sistemas para su ejercicio; b) la acción pertenece a la sociedad. — 3.º Casos en que es necesario un requisito previo para poner en movimiento la acción: a) delitos contra la honestidad; b) desafuero de diputados o senadores; c) juicio previo a ciertos funcionarios; d) causas contra ministros extranjeros. — 4.º Las cuestiones prejudiciales y su división: a) prejudiciales a la acción; b) prejudiciales a la sentencia. — 5.º Cuestiones previas. — 6.º Ejercicio de la acción pública por el ofendido. — 7.º Ejercicio de la acción pública por cualquiera del pueblo. — 8.º Acción privada. — 9.º Acción civil . . . . . 47

## XVI

### EXTINCION DE LAS ACCIONES

1.º Extinción de los acciones. — 2.º Causas de extinción aplicables a las acciones públicas y privadas: a) muerte del acusado; b) amnistía; c) indulto; d) matrimonio subsiguiente en ciertos delitos contra la honestidad. — 3.º Causas de extinción que sólo proceden en la acción privada: a) perdón del ofendido; b) retractación. — 4.º Causas de extinción de la acción civil: a) renuncia de la acción; b) transacción. — 5.º Causas de extinción comunes a las tres acciones: a) cosa juzgada; b) prescripción. . 61

## XVII

### LA INSTRUCCION DE LOS JUICIOS

1.º La instrucción en la legislación comparada. — 2.º Caracteres de la instrucción en nuestro código. — 3.º Formas de iniciar el sumario: a) de oficio; b) por denuncia; c) por querella; d) por prevención. — 4.º Deberes y atribuciones del juez de instrucción. — 5.º Influencia de los sistemas probatorios en la instrucción. . 73

## XVIII

### PRUEBA

1.º Medios de prueba. — 2.º Cuerpo del delito. — 3.º Visitas domiciliarias o pesquisas en lugares cerrados. — 4.º Declaración inda-

gatoria. — 5.º Confesión. — 6.º Divisibilidad e indivisibilidad de la confesión. — 7.º Retracción . . . . .



# XVIII bis

## PRUEBA (Continuación)

1.º Testigos. — 2.º Garantías de veracidad. — 3.º Clasificación de los testigos: a) hábiles; b) sospechosos; c) incapaces. — 4.º Crítica de Mittermaier. — 5.º Apreciación del testimonio: a) con relación al sujeto; b) con relación a la forma; c) con relación al contenido. — 6.º Obligación de declarar. — 7.º Oportunidad en que se aprecia la prueba testimonial. — 8.º Sana crítica. — 9.º Careos. — 10. Caracteres de la prueba pericial. — 11. Su importancia. — 12. Casos en que procede. — 13. Garantías de esta clase de pruebas: a) número de los peritos; b) competencia de los mismos; c) imparcialidad. — 14. Valor de la prueba pericial. — 15. Documentos; definición de esta clase de prueba. — 16. Previsiones anglo americanas sobre la misma. — 17. Falta de método de nuestro código. — 18. Cartas substraídas del correo. — 19. Valor de la prueba instrumental. — 20. Presunciones, su definición. — 21. Las presunciones y la prueba incompleta. — 22. Fundamentos de la prueba de presunciones. — 23. Requisitos de forma y fondo. — 24. Ejemplos de indicios . . . . . 105

# XVIII ter.

## JUICIOS ESPECIALES E INCIDENTES

1.º Sobreseimiento. — 2.º Defensas previas. — 3.º Enumeración de las que son admisibles. — 4.º Manera de substanciarlas. — 5.º Examen de cada una de las excepciones: a) falta de jurisdicción; b) falta de personalidad en el acusador o sus representantes; c) falta de acción en el mismo; d) cosa juzgada sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento; e) amnistía e indulto; f) litis pendens; g) condonación o perdón del ofendido en los delitos que no dan lugar a la acción pública; h) prescripción de la acción o de la pena. — 6.º Juicios correccionales y sobre faltas. — 7.º Los juicios correccionales en Francia. — 8.º Disposiciones de nuestro código sobre los delitos correccionales. — 9.º Diferencia entre los juicios criminales y los correccionales. — 10. Procedimiento en los delitos de calumnia e injuria. — 11. Quién ejerce la acción. — 12. Sólo pueden iniciarse por acusación. — 13. Desistimiento del querrelante. — 14. Injurias cometidas en juicio. — 15. Procedimiento a seguirse después del juicio de conciliación. — 16. Prisión preventiva y retractación . . . . . 143

XIX

PLENARIO

- 1.° Plenario. — 2.° Caracteres del mismo. Diferencias entre el plenario del derecho argentino y al juicio previo de las legislaciones extranjeras. — 3.° Prueba. — 4.° Clausura del término de prueba, alegatos y fallo . . . . . 159

XX

LIBERTAD PROVISORIA Y HABEAS CORPUS

- 1.° Libertad provisoria del acusado: excarcelación y exención de prisión. — 2.° Reglas del código de procedimiento, comparadas con los legislaciones extranjeras. — 3.° Habeas corpus. — 4.° Antecedentes ingleses: a) la carta magna; ley de 1679 y sus principales disposiciones; b) ley de 1816. — 5.° Como funciona el habeas corpus en Inglaterra: a) protección de las garantías individuales; b) celeridad de los juicios; c) extradición; d) otros casos. — 6.° Antecedentes norteamericanos. — 7.° La ley de amparo de Méjico. — 8.° El habeas corpus en el Brasil. — 9.° Ley de la república de Chile. — 10. Disposiciones de nuestros códigos. — 11. El recurso de habeas corpus en la provincia de Buenos Aires . . . . . 166

XXI

JUSTICIA MILITAR, FALTAS, Etc.

- 1.° Justicia militar. — 2.° Su diferencia con los tribunales especiales. — 3.° Organización. — 4.° Procedimiento. — 5.° Procedimiento sobre faltas: a) municipales; b) aduaneras; c) de impuestos internos; d) policiales. — 6.° Crítica al sistema . . . . . 199

XXI bis

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

1.°

Antecedentes

- 1.° Decreto del P. E. encargando la redacción de un proyecto de código de procedimiento criminal. — 2.° Ampliación del decreto anterior. — 3.° Resolución comunicándolo al doctor Obarrio. — 4.° Nota del doctor Obarrio elevando el proyecto. — 5.° Decreto del P. E. relativo a la nota anterior. — 6.° Nota del doctor Obarrio explicando las bases del proyecto. — 7.° Resolución referente a la nota anterior. — 8.° Decreto del P. E. nombrando una comisión encargada de revisar el proyecto de código. — 9.° Nota elevada por la comisión anteriormente nombrada. — 10. Decreto del P. E. ordenando elevar al Congreso el proyecto de código revisado. — 11. Nota elevando al congreso el proyecto de código revisado.



— 12. Proyecto de ley poniendo en vigor el proyecto de código.—  
13. Despacho de la comisión de códigos de la cámara de diputados.— 14. Discusión en el congreso.— 15. Ley núm. 2372 sancionando el código de procedimientos en lo criminal.— 16. Decreto del P. E. sobre la edición oficial . . . . . 215



## CODIGO DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL

Texto del mismo . . . . . 287

### TOMO III.

(Segunda Parte).

#### XXII

#### TEORIA DE LAS ACCIONES

- 1.º Fundamento y definición de las acciones; interés de su estudio. —
- 2.º Las acciones en el derecho romano. — 3.º Identificación de la acción. — 4.º Influencia del ejercicio de la acción sobre el derecho. — 5.º Necesidad de la concurrencia de ciertos requisitos de forma para que el juez pueda dictar un pronunciamiento válido sobre la acción. — 6.º Naturaleza de las acciones. — 7.º División de las acciones: a) personales, reales, mixtas y de estado; b) mobiliarias e inmobiliarias; c) transmisibles y no transmisibles; perpetuas y temporarias; d) principales y accesorias. — 8.º Requisitos de la acción. — 9.º Condiciones requeridas para el ejercicio de la acción. — 10. Concurrencia y acumulación de acciones . . . . . 5

#### XXIII

#### EXCEPCIONES

- 1.º Excepciones: definición. — 2.º Origen y desenvolvimiento de las excepciones. — 3.º Excepciones previas al juzgamiento de la acción que la afectan sin extinguirla: a) beneficio de competencia y de excusión; b) juicio criminal pendiente en las acciones de daños y perjuicios; c) juicio pendiente en los casos de interdicto y falta de pago de las condenaciones impuestas en el mismo; d) beneficio de inventario; e) interpolación en los casos de fianza, sociedades, hipoteca. — 4.º Excepciones dilatorias que se pueden oponer por vía de artículo de previo y especial pronunciamiento: a) incompetencia de jurisdicción; b) falta de personería; c) litispendencia; d) defecto legal en el modo de proponer la demanda; e) arraigo; f) citación de evicción. — 5.º Procedimiento común para el trámite de las excepciones dilatorias. — 6.º Tiempo y forma de oponerlas. — 7.º Incompetencia de jurisdicción. — 8.º Litispendencia. Sus elementos y relaciones con la cosa juzgada. ¿Es de orden público? — 9.º Arraigo. Diferencia con la legislación federal. — 10. «Cautio iudicatum solvi». Diferencia con el arraigo. Convención de La Haya. — 11. Excepciones perentorias: su carácter. — 12. Extinción de las excepciones. . . . . 45





## XXIV

### DEMANDA Y CONTESTACION

- 1.º Demanda: definición e importancia. — 2.º Sus efectos jurídicos antes y después de la notificación. — 3.º Forma de la demanda. — 4.º Documentos que deben acompañarse. — 5.º Sanción para el caso de no presentación de los documentos. — 6.º Acumulación de demandas y de autos. — 7.º Citación y emplazamiento del demandado. — 8.º Contestación. — 9.º Efectos de la contestación. — 10. La litis contestatio en el derecho romano, español y nacional. — 11. Reconvenção y compensación. — 12. Efectos de la falta de contestación. — 13. Rebeldía del demandado: sus efectos. 65

## XXV

### CONSTITUCION DEL PROCESO

- 1.º La constitución del proceso (relación procesal) y sus requisitos indispensables: el juez, las partes y las formas legales. — 2.º Diversidad de procedimiento: a) juicio ordinario; b) juicio especial. — 3.º Reglas comunes y especiales. — 4.º Facultad de las partes para modificar las formas procesales: a) arbitraje y contratos; b) silencio; c) conformidad tácita dentro del juicio. — 5.º Renuncia al derecho de apelar . . . . . 93

## XXVI

### LAS PARTES EN EL JUICIO

- 1.º No hay juicio sin partes. — 2.º Concepto e importancia de las mismas. — 3.º Capacidad para ser parte. — 4.º Capacidad para figurar en el juicio. — 5.º Substitución procesal. — 6.º Citación en garantía. — 7.º Litis consortes. — 8.º Deberes del mandatario. — 9.º Poderes del mismo: a) escritura pública; b) empleados públicos y representantes del fisco; c) mandatarios de gobiernos extranjeros; d) documentos habilitantes; e) poderes conferidos en el extranjero; f) representantes de los incapaces. — 10. Cesación del mandato. — 11. Ratificación y sus efectos. — 12. Libre defensa. — 13. Patrocinio de abogados. — 14. «Cautio de rato et grato» . . . . . 99

## XXVII

### PRUEBA EN GENERAL

- 1.º Prueba: a) pruebas morales y legales; b) id. preconstituídas y simples; c) id. orales y escritas. — 2.º Prueba de los hechos y de los contratos. — 3.º Pruebas que admite el código civil. — 4.º Id. id. el código de procedimiento. — 5.º ¿A quién corresponde la prueba? — 6.º Hechos negativos. — 7.º ¿Cuándo debe producirse la prueba? — 8.º Deber del juez en ausencia de prueba. — 9.º Término de prueba y producción de la misma . . . . . 113

XXVIII

CONFESION

- 1.° Confesión y sus diversas clases. — 2.° Su importancia. — 3.° Confesión simple y calificada. — 4.° Revocación . . . . . 133

XXIX

PRUEBA TESTIMONIAL

- 1.° Prueba testimonial: su importancia y evolución. — 2.° Reglas para su admisión: hechos y contratos. — 3.° Excepciones en cuanto a los contratos. — 4.° Testigos. — 5.° Obligación de declarar. — 6.° Obligación de comparecer. — 7.° Testigos exclusivos. — 8.° Número de testigos. — 9.° Tiempo y forma de recibir la prueba de testigos. 10. Apreciación del testimonio y tachas legales . . . . 143

XXX

PRUEBA INSTRUMENTAL

- 1.° Prueba instrumental: sus caracteres o importancia. — 2.° Prueba material y literal. — 3.° Instrumentos públicos: diversas clases. — 4.° Condiciones intrínsecas y extrínsecas. — 5.° Fuerza obligatoria y probatoria. — 6.° Instrumentos privados: división. — 7.° Fuerza obligatoria y probatoria. — 8.° Fecha cierta. — 9.° Cartas misivas. — 10. Libros de comercio. Libros de sociedades civiles. Su fuerza probatoria. — 11. Producción de la prueba instrumental: reglas procesales. — 12. Medios de comprobación. — 13. Redargución de falsedad civil y criminal . . . . . 181

XXXI

PRUEBA DE PERITOS, DE PRESUNCIONES etc.

- 1.° Prueba pericial: su importancia. — 2.° Diferencias con el testigo y con el árbitro. — 3.° Designación de los peritos: necesidad de que recaiga la conformidad de todas las partes sobre cada perito. — 4.° Recusación. — 5.° Obligación de aceptar y de expedirse. — 6.° Modo de desempeñar el cargo. — 7.° Fuerza probatoria del dictamen pericial. — 7.° bis. Honorarios de los peritos. — 8.° Presunciones y sus diversas clases. — 9.° Presunciones simples o de hombre. — 10. Prueba de presunciones y prueba incompleta en materia penal. — 11. Juramento: sus diversas clases y efectos. — 12. Inspección ocular . . . . . 211

XXXI bis

CONCLUSION DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA

- 1.° Procedimiento en las cuestiones de puro derecho. — 2.° Id. en las cuestiones de hecho. — 3.° Alegatos. — 4.° Diligencias para mejor proveer, prescripción, etc. — 5.° Término para fallar . . . . 235



# XXXII

## DESISTIMIENTO Y PERENCION DE INSTANCIA

- 1.° Desistimiento. — 2.° Definición. — 3.° Desistimiento antes y después de contestada la demanda. — 4.° Capacidad para desistir. — 5.° Efectos jurídicos del desistimiento de la acción y del derecho. — 6.° Imposición de costas. — 7.° Perención de instancia: definición. — 8.° Relaciones y diferencias con la prescripción. — 9.° Situación anterior a la ley núm. 4550. — 10. Acciones y personas a que se aplica. — 11. Términos de la perención. — 12. Efectos de la perención. — 13. Modos de declararse la perención. Sistema francés, español e italiano. — 14. Sistema de la ley núm. 4550. 239

# XXXIII

## LA SENTENCIA

- 1.° Caracteres de la sentencia. — 2.° Su objeto. — 3.° Diversas clases: a) sentencias definitivas; b) sentencias interlocutorias que causan gravamen irreparable o deciden artículo; c) providencias interlocutorias. — 4.° Formas de la sentencia: a) sentencia definitiva de primera instancia; b) sentencias de las cámaras del fuero ordinario de la capital de la república y de los tribunales de provincia; c) sentencias de las cámaras federales y de la suprema corte. — 5.° Formas de las sentencias interlocutorias. — 6.° Requisitos para que haya sentencia. — 7.° Motivación de la sentencia. — 8.° Condenaciones accesorias . . . . . 257

# XXXIV

## LA SENTENCIA

(Continuación)

- 1.° Conformidad de la sentencia con la demanda: a) con relación a las personas; b) con relación a las cosas; c) con relación a la causa. — 2.° Efectos jurídicos de la sentencia: a) retroactividad; b) competencia del juez; c) embargo y sus semejanzas con la hipoteca judicial; d) novación; e) «actio iudicatis»; f) desaparición de los efectos de la demanda. — 3.° Cosa juzgada. — 4.° Caracteres y elementos en el derecho romano. — 5.° Identidad: a) de partes; b) de cosa; c) de causa. — 6.° Su discusión y crítica. — 7.° La identidad de causa en las acciones de nulidad. — 8.° Sentencias que llevan la autoridad de la cosa juzgada. — 9.° Motivos del fallo y parte dispositiva. — 10. ¿A quiénes afecta la autoridad de la cosa juzgada? Sucesores universales y particulares; codeudores y coacreedores solidarios; cuosiones de estado, etc. — 11. Influencia en lo civil de la cosa juzgada en lo criminal: a) acciones que nacen del delito; b) sobreseimiento definitivo; c) sentencia absolutoria. — 12. Teoría de Merlin y de Toullier. — 13. Cuestiones perjudiciales . . . . . 285



# XXXV

## RECURSOS

- 1.º Recurso contra las resoluciones judiciales. — 2.º Recursos ordinarios y extraordinarios y sus caracteres típicos. — 3.º Recurso de reposición. — 4.º Recurso de apelación: a) carácter de las decisiones recurribles por apelación; b) capacidad y personería; c) interés. — 5.º Forma en que proceden las apelaciones: a) efecto devolutivo; b) efecto suspensivo; c) casos en que procede la apelación en ambos efectos o en uno solo. — 6.º Recursos en relación y libremente. — 7.º Facultad de los tribunales superiores para examinar la forma en que se han concedido los recursos y examen del aforismo «tantum apelatum quantum devolutum». — 8.º Remisión de los autos al superior. — 9.º Reclamación de las partes sobre la forma en que se ha concedido el recurso. — 10. Recurso de nulidad: legislación comparada. — 11. Recurso de queja. — 12. Recursos de revisión y de rescisión. — 13. Recurso de los terceros contra el fallo . . . . . 335

## TOMO IV

# XXXVI

## TRIBUNALES SUPERIORES

- 1.º Doble grado de jurisdicción. — 2.º Principios que lo rigen. — 3.º Tribunal de recursos extraordinarios. — 5.º Substanciación ante la cámara: a) recurso en relación; b) recurso libre. — 6.º Condiciones para que la causa pueda ser fallada en segunda instancia. — 7.º Formas de la sentencia. — 8.º Mayoría: a) sistema argentino; b) id francés; c) id italiano. — 9.º Avocación. — 10. Puntos que puede decidir la sentencia . . . . . 5

# XXXVII

## EJECUCION PROCESAL FORZADA

- 1.º Principios generales. — 2.º La relación procesal en el juicio de ejecución. — 3.º El patrimonio del deudor y su afectación. — 4.º Bienes exceptuados. — 5.º Sólo el congreso puede establecer cuales bienes son inembargables. — 6.º Limitación de la acción del acreedor por contrato. — 7.º Personas ejecutables. — 8.º Influencia de la obligación sobre los medios de ejecución: a) condena a cantidad líquida; b) id al pago de cantidad ilíquida procedente de frutos; c) id a resarcir daños y perjuicios; d) id o dar cosa cierta; e) id a hacer; f) id a no hacer. — 9.º Medios coercitivos contra el deudor. — 10. Cumplimiento de sentencias extranjeras. 15.



XXXVIII

JUICIO EJECUTIVO

1.° Derecho comparado y principios generales. — 2.° Requisitos de la relación jurídica procesal: a) obligación de dar cantidad líquida de dinero; b) título hábil; c) concurrencia de las condiciones de la acción; d) limitación de la materia a decidir. — 3.° Títulos que traen aparejada ejecución: a) instrumentos públicos; b) documentos privados; c) actos judiciales. — 4.° Mandamiento y embargo. — 5.° Bienes embargables. — 6.° Discusión. — 7.° Excepciones articulables: a) incompetencia de jurisdicción; b) falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus procuradores o apoderados; c) litispendencia en otro juzgado o tribunal competente; d) falsedad e inhabilidad del título con que se pide la ejecución; e) prescripción; f) fuerza o miedo de los que, con arreglo a la ley hacen nulo el consentimiento; g) pago; h) compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución; i) quita; j) espera o remisión; k) novación; l) transacción; ll) compromiso; n) nulidad. — 8.° Tramitación de las excepciones y prueba de las mismas. — 9.° Sentencia de remate. — 10. Recursos procedentes en el juicio ejecutivo. — 11. La sentencia en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada. — 12. Cumplimiento de la sentencia de remate: a) bienes muebles; b) bienes inmuebles. — 13. — Liquidación del crédito ejecutado . . . 48

XXXVIII bis.

EMBARGOS PREVENTIVOS

1.° Principios generales. — 2.° Juez competente. — 3.° Casos en que procede el embargo: a) Crédito justificado con documento público o privado; b) Contrato bilateral; c) Libros de comercio; d) Acreedor privilegiado; e) Acción reivindicatoria; f) Confesión en juicio; g) Sentencia favorable; h) Propiedad literaria y artística; i) Acción de separación de bienes; j) Locación; k) Rebeldía; l) Otros casos. — 4.° Forma de justificar el crédito. — 5.° No es necesario que exista cantidad líquida para decretar el embargo. — 6.° Obligaciones de hacer. — 7.° Formalidades de la traba del embargo. — 8.° Responsabilidad del embargante. — 9.° Inhibición. — 10. Extinción del embargo preventivo: a) Por falta de deducción; b) Por prescripción; c) Por haberse hecho la traba on bienes de terceros. . . . . 78

XXXVIII ter

(Conclusión)

TERCERIAS

1.° Principios generales en materia de tercerías. — 2.° Distintas clases de tercerías: a) de dominio; b) de mejor derecho. — 3.° Reglas comunes a las dos clases de tercerías . . . . . 87



XXXIX

DESALOJO

- 1.° Cosas que pueden ser materia del juicio. — 2.° Personas a quienes se acuerda la acción de desalojo. — 3.° Juez competente para conocer en la misma. — 4.° Procedimiento . . . . . 97

XXXIX bis

(Continuación)

JUICIO DE JACTANCIA

- 1.° Principios generales. — 2.° Requisitos de la acción: a) alabanza fuera de juicio; b) cosas sobre que recae la acción; c) capacidad del autor del hecho; d) término para deducir la acción. — 3.° Competencia. — 4.° Requisitos formales de la demanda. — 5.° Procedimiento. — 6.° Acciones excluidas . . . . . 98

XXXIX ter

(Continuación)

ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS

- 1.° Principios generales. — 2.° Competencia. — 3.° Requisitos de la acción. — 4.° Sentencia y recursos — 5.° Juicio ordinario para reverter lo decidido en el sumario. — 6.° Litis expensa . . . . . 104

XXXIX quater

(Conclusión)

INTERDICCION

- 1.° Reglas a aplicar. — 2.° Juez competente. — 3.° Personas que puedan solicitar la declaración de demencia. — 4.° Curador provisorio. — 5.° Examen del denunciado como insano. — 6.° Sentencia . . . . . 109

XL

ACCIONES POSESORIAS E INTERDICTOS

- 1.° Principios generales. — 2.° Acciones posesorias: a) de manutención; b) de restitución. — 3.° Acción de despojo. — 4.° Acción de obra nueva: a) en inmuebles que no sean del poseedor; b) en inmuebles del poseedor. — 5.° Competencia. — 6.° Capacidad para ejercer las acciones. — 7.° Personas contra quien se acuerda. — 8.° Cosas susceptibles de las acciones posesorias. — 9.° Proce-





dimiento. — 10. Relaciones entre el juicio posesorio y el petitorio: a) prohibición de acumular el petitorio al posesorio; b) no puede iniciarse el petitorio pendiente el posesorio; c) condenaciones del posesorio. — 11. Acciones que pueden deducirse después de las posesorias, y de despojo. — 12. La acción de despojo contra las resoluciones judiciales. — 13. Interdicto de adquirir. — 14. Interdicto de obra vieja. — 15. Acciones personales y penales . .

114

## XLI

### CONCURSO CIVIL DE ACREEDORES

- 1.° Principios generales. — 2.° Personas que pueden ser concursadas. — 3.° Competencia. — 4.° Efecto del concurso: a) capacidad del concursado; b) relación de los acreedores con el concursado; c) intereses de los créditos; d) exigibilidad de las obligaciones; e) embargos anteriores. — 5.° Notificación a las partes. — 6.° Designación de síndico. — 7.° Llamamiento a los acreedores y ocupación de los bienes. — 8.° Verificación de créditos. — 9.° Realización del activo. — 10. Graduación de créditos. — 11. Solución del concurso: a) perención de instancia; b) desistimiento; c) distribución del activo; d) adjudicación de bienes; e) prescripción. — 12. Administración de los bienes de la masa. — 13. Beneficio de competencia y pensión alimenticia . . . . .

135

## XLII

### SUCESIONES

- 1.° Principios generales. — 2.° Comprobación del fallecimiento. — 3.° Personería para iniciar el juicio y continuarlo. — 4.° Competencia para conocer en el mismo y fuero de atracción. — 5.° Aseguramiento de los bienes. — 6.° Forma de citar a los herederos en el juicio testamentario. — 7.° Id. en el abintestato. — 8.° Justificación del carácter hereditario. — 9.° Vacancia de la sucesión. — 10. Administración del caudal. — 11. Inventario y tasación de los bienes. — 12. Liquidación y partición. — 13. Ejecución de la partición . . . . .

164

## XLIII

### JUICIO DE MENSURA Y DESLINDE

- 1.° Principios generales. — 2.° La acción de deslinde no se da para dividir predios urbanos. — 3.° Juez competente. — 4.° Formas de solicitar y reglas a que debe someterse el agrimensur. — 5.° Las partes y la forma en que se las debe citar. — 6.° Procedimiento de la operación. — 7.° Reglas a observar después de hecha la mensura . . . . .

171

XLIV

JUICIO ARBITRAL

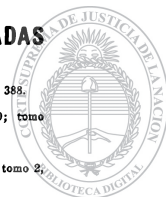
- 1.° Principios generales. — 2.° Nombramiento de los árbitros. — 3.° Reglas comunes y especiales al juicio de árbitros y de amigables componedores. — 4.° Cláusula compromisoria. — 5.° Arbitraje forzoso. — 6.° Compromiso. — 7.° Aceptación de los árbitros. — 8.° Recusación y excusación de los mismos. — 9.° Procedimiento en el juicio arbitral, según sea su naturaleza. — 10. Término para laudar y formas del mismo. — 11. Recursos y acciones contra el laudo . . . . .







# ÍNDICE DE LEYES CITADAS O COMENTADAS



## Constitución nacional

- |         |   |         |  |
|---------|---|---------|--|
| Art. 4  | Tomo 1, pág. 214, 381.  | Art. 32 | Tomo 1, pág. 382, 383.   |
| Art. 5  | Tomo 1, pág. 118.   | Art. 34 | Tomo 1, pág. 179.  |
| Art. 6  | Tomo 1, pág. 381.   | Art. 45 | Tomo 1, pág. 180; tomo 2, pág. 53.   |
| Art. 7  | Tomo 1, pág. 15, 18, 19, 145, 150, 299, 349, 352, 353, 362, 381; tomo 3, pág. 181.                                | Art. 47 | Tomo 1, pág. 170.  |
| Art. 8  | Tomo 1, pág. 349, 362.  | Art. 51 | Tomo 1, pág. 181.  |
| Art. 9  | Tomo 1, pág. 212, 213, 214, 381.  | Art. 52 | Tomo 1, pág. 181; tomo 2, pág. 53.   |
| Art. 10 | Tomo 1, pág. 212, 213, 214, 215.  | Art. 57 | Tomo 1, pág. 398.  |
| Art. 11 | Tomo 1, pág. 215.   | Art. 61 | Tomo 2, pág. 52.   |
| Art. 14 | Tomo 1, pág. 8, 213, 216, 394; tomo 4, pág. 151.  | Art. 62 | Tomo 2, pág. 52.   |
| Art. 16 | Tomo 1, pág. 9, 13, 14, 16, 169, 213, 394; tomo 2, pág. 202.  | Art. 67 | Tomo 1, pág. 381.  |
| Art. 17 | Tomo 1, pág. 8, 31, 210, 214, 379, 381; tomo 4, pág. 28, 151.   | Art. 67 | inc. 1.ª, Tomo 1, pág. 214.  |
| Art. 18 | Tomo 1, pág. 9, 17, 18, 31, 214, 253, 353; tomo 2, pág. 62, 82, 94, 99, 166, 203, 204; tomo 3, pág. 20, 315, 360. | Art. 67 | inc. 11. Tomo 1, pág. 15, 25, 96, 119, 150, 151, 329, 375, 380, 381, 394, 402; tomo 3, pág. 59, 122, 171, 230; tomo 4, pág. 117, 151, 185. |
| Art. 19 | Tomo 1, pág. 8; tomo 2, pág. 157.   | Art. 67 | inc. 12. Tomo 1, pág. 214, 345.  |
| Art. 20 | Tomo 1, pág. 214, 387.  | Art. 67 | inc. 14. Tomo 1, pág. 91, 215, 382, 392, 398.  |
| Art. 23 | Tomo 2, pág. 178.   | Art. 67 | inc. 17. Tomo 2, pág. 62.  |
| Art. 24 | Tomo 1, pág. 96.  | Art. 67 | inc. 23. Tomo 2, pág. 199, 202.  |
| Art. 26 | Tomo 1, pág. 345.   | Art. 67 | inc. 24. Tomo 2, pág. 199.   |
| Art. 27 | Tomo 1, pág. 382.   | Art. 67 | inc. 27. Tomo 1, pág. 90, 91, 215, 380, 397, 398; tomo 3, pág. 230.  |
| Art. 28 | Tomo 1, pág. 394.   | Art. 71 | Tomo 1, pág. 20, 210.  |
| Art. 3. | Tomo 1, pág. 15, 145, 150, 199, 202, 203, 207; tomo 3, pág. 265; tomo 4, pág. 117.                                | Art. 79 | inc. 9.ª. Tomo 1, pág. 345.  |
|         |   | Art. 86 | Tomo 3, pág. 107.  |
|         |   | Art. 86 | inc. 1.ª. Tomo 1, pág. 283.  |
|         |   | Art. 86 | inc. 6.ª. Tomo 2, pág. 64.   |
|         |   | Art. 86 | inc. 15. Tomo 2, pág. 204.   |
|         |   | Art. 86 | inc. 19. Tomo 1, pág. 209; tomo 2, pág. 179.   |

- Art. 96 Tomo 1, pág. 95, 188, 189, 192.
- Art. 97 Tomo 1, pág. 169.
- Art. 98 Tomo 1, pág. 178.
- Art. 99 Tomo 1, pág. 198.
- Art. 100 Tomo 1, pág. 15, 20, 275, 289, 327, 338, 346, 374, 380, 385, 389, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 401, 402, 405; tomo 2, pág. 53; tomo 3, pág. 312.
- Art. 101 Tomo 1, pág. 20, 40, 130, 264, 275, 289, 322, 336, 346, 374, 376, 387, 401; tomo 3, pág. 312.
- Art. 102 Tomo 1, pág. 96, 343; tomo 2, pág. 52.
- Art. 103 Tomo 1, pág. 380.
- Art. 104 Tomo 1, pág. 118; tomo 3, pág. 122.
- Art. 105 Tomo 1, pág. 18, 118, 150, 329, 337; tomo 3, pág. 58, 312.
- Art. 108 Tomo 1, pág. 214, 345.

**Ley número 27, sobre organización de los tribunales federales.**

- Art. ... Tomo 1, pág. 89.
- Art. 2 Tomo 1, pág. 29, 194.
- Art. 3 Tomo 1, pág. 199.
- Art. 6 Tomo 1, pág. 88.
- Art. 7 Tomo 3, pág. 336, 352.
- Art. 11 Tomo 1, pág. 198.
- Art. 13 Tomo 1, pág. 88.
- Art. 17 Tomo 1, pág. 170, 178.
- Art. 23 Tomo 1, pág. 147.

**Ley número 48, sobre jurisdicción y competencia de los tribunales federales**

- Art. ... Tomo 1, pág. 128, 150, 162.
- Art. 1 Tomo 1, pág. 20, 130, 401; tomo 3, pág. 312.
- Art. 1 inc. 2.º Tomo 1, pág. 394.
- Art. 1 inc. 3.º Tomo 1, pág. 388; tomo 2, pág. 53.
- Art. 1 inc. 4.º Tomo 1, pág. 388.
- Art. 2 inc. 1.º Tomo 1, pág. 379, 386.
- Art. 2 inc. 2.º Tomo 1, pág. 338, 395.

- Art. 2 inc. 3.º Tomo 1, pág. 389.
- Art. 2 inc. 4.º Tomo 1, pág. 275, 383.
- Art. 2 inc. 5.º Tomo 1, pág. 383.
- Art. 2 inc. 6.º Tomo 1, pág. 383.
- Art. 2 inc. 7.º Tomo 1, pág. 389.
- Art. 2 inc. 8.º Tomo 1, pág. 389.
- Art. 2 inc. 9.º Tomo 1, pág. 389.
- Art. 2 inc. 10. Tomo 1, pág. 389, 390.
- Art. 3 Tomo 1, pág. 382, 399.
- Art. 3 inc. 1.º Tomo 1, pág. 344.
- Art. 3 inc. 2.º Tomo 1, pág. 341, 345, 382.
- Art. 4 Tomo 1, pág. 399.
- Art. 8 Tomo 1, pág. 395.
- Art. 10 Tomo 1, pág. 396.
- Art. 12 Tomo 1, pág. 29.
- Art. 12 inc. 2.º Tomo 1, pág. 403.
- Art. 12 inc. 4.º Tomo 1, pág. 395, 400.
- Art. 13 Tomo 1, pág. 170, 224.
- Art. 14 Tomo 1, pág. 20, 21, 132, 133, 147, 148, 149, 150, 151, 264, 265, 280, 400, 401, 404, 405; tomo 3, pág. 264, 265, 301, 311, 336, 344, 362; tomo 4, página 8.
- Art. 14 inc. 3.º Tomo 1, pág. 385, 386.
- Art. 16 Tomo 1, pág. 148, 338, 362.
- Art. 18 Tomo 1, p. 198.
- Art. 20 Tomo 1, pág. 375; tomo 2, pág. 18, 180, 190.
- Art. 21 Tomo 1, pág. 199, 213, 338.
- Art. 22 Tomo 1, pág. 198.
- Ley número 4058, de reformas a la justicia federal**
- Art. ... Tomo 1, pág. 88, 150.
- Art. 2 Tomo 1, pág. 404; tomo 3, pág. 336.
- Art. 3 Tomo 1, pág. 20, 404, 405; tomo 3, pág. 312, 340.
- Art. 3 inc. 2.º Tomo 1, pág. 383.
- Art. 4 Tomo 3, pág. 354.
- Art. 5 Tomo 3, pág. 336.
- Art. 6 Tomo 1, pág. 20, 148, 150, 264, 386, 404, 405; tomo 3, pág. 264, 312, 336, 341.
- Art. 7 Tomo 3, pág. 13, 301.
- Art. 8 Tomo 1, pág. 262.
- Art. 9 Tomo 1, pág. 149.
- Art. 10 Tomo 1, pág. 184, 198.





Art. 11 Tomo 1, pág. 198.  
 Art. 13 Tomo 1, pág. 170, 224.  
 Art. 14 Tomo 1, pág. 179.  
 Art. 17 Tomo 1, pág. 405; tomo 3, pág. 340.  
 Art. 17 inc. 1.ª Tomo 1, pág. 167, 314.  
 Art. 18 Tomo 1, pág. 404.  
 Art. 19 Tomo 1, pág. 304.  
 Art. 22 Tomo 1, pág. 198.  
 Art. 22 Tomo 1, pág. 198.  
 Art. 25 Tomo 1, pág. 178.  
 Art. 26 Tomo 1, pág. 229.  
 Art. 27 Tomo 1, pág. 382.

**Ley número 50 de procedimiento federal**

Art. ... Tomo 1, pág. 81, 83, 269, 304, 381; tomo 3, pág. 203; tomo 4, pág. 23, 117.  
 Art. 1 Tomo 1, pág. 377.  
 Art. 2 Tomo 1, pág. 377.  
 Art. 3 Tomo 1, pág. 377.  
 Art. 6 Tomo 3, pág. 68.  
 Art. 12 Tomo 1, pág. 268.  
 Art. 13 Tomo 3, pág. 270, 278.  
 Art. 15 Tomo 3, pág. 71; tomo 4, pág. 33.  
 Art. 20 Tomo 3, pág. 131.  
 Art. 23 Tomo 1, pág. 242; tomo 3, pág. 277.  
 Art. 45 Tomo 1, pág. 275, 304.  
 Art. 55 inc. 3.ª Tomo 3, pág. 53.  
 Art. 57 Tomo 3, pág. 71, 72.  
 Art. 57 inc. 3.ª Tomo 3, pág. 53, 70.  
 Art. 57 inc. 4.ª Tomo 3, pág. 70.  
 Art. 66 Tomo 3, pág. 78.  
 Art. 69 Tomo 3, pág. 78.  
 Art. 73 Tomo 1, pág. 275.  
 Art. 74 Tomo 3, pág. 53.  
 Art. 80 Tomo 3, pág. 135.  
 Art. 85 Tomo 3, pág. 115.  
 Art. 87 Tomo 3, pág. 134.  
 Art. 88 Tomo 3, pág. 134.  
 Art. 89 Tomo 3, pág. 115.  
 Art. 92 Tomo 1, pág. 251; tomo 3, pág. 128.  
 Art. 93 Tomo 3, pág. 120.  
 Art. 95 inc. 2.ª Tomo 3, pág. 128.  
 Art. 98 Tomo 3, pág. 128.  
 Art. 119 Tomo 3, pág. 154.  
 Art. 124 Tomo 3, pág. 164.  
 Art. 125 Tomo 3, pág. 154.

Art. 142 Tomo 3, pág. 214.  
 Art. 143 Tomo 3, pág. 217.  
 Art. 148 Tomo 3, pág. 219.  
 Art. 176 Tomo 3, pág. 207.  
 Art. 177 Tomo 1, pág. 251.  
 Art. 185 Tomo 3, pág. 90.  
 Art. 191 Tomo 3, pág. 290, 301, 336, 359.  
 Art. 192 Tomo 3, pág. 359.  
 Art. 197 Tomo 3, pág. 359.  
 Art. 198 Tomo 3, pág. 297, 301, 359.  
 Art. 199 Tomo 3, pág. 301, 359.  
 Art. 200 Tomo 3, pág. 359.  
 Art. 201 Tomo 3, pág. 359.  
 Art. 202 Tomo 3, pág. 359.  
 Art. 206 Tomo 3, pág. 266.  
 Art. 213 Tomo 1, pág. 270.  
 Art. 214 Tomo 3, pág. 243.  
 Art. 215 Tomo 4, pág. 10.  
 Art. 216 Tomo 3, pág. 307, 341.  
 Art. 223 Tomo 3, pág. 98; tomo 4, pág. 13.  
 Art. 225 Tomo 3, pág. 345.  
 Art. 232 Tomo 3, pág. 289, 352.  
 Art. 233 Tomo 3, pág. 359.  
 Art. 241 Tomo 3, pág. 301, 336, 352.  
 Art. 241 inc. 2.ª Tomo 3, pág. 353.  
 Art. 241 inc. 3.ª Tomo 3, pág. 315.  
 Art. 241 inc. 4.ª Tomo 3, pág. 315.  
 Art. 242 Tomo 3, pág. 352.  
 Art. 243 Tomo 3, pág. 354.  
 Art. 244 Tomo 3, pág. 354.  
 Art. 246 Tomo 3, pág. 354.  
 Art. 247 Tomo 3, pág. 301.  
 Art. 308 Tomo 1, pág. 284; tomo 4, pág. 19, 50.  
 Art. 309 Tomo 4, pág. 33.  
 Art. 311 Tomo 4, pág. 33.  
 Art. 313 Tomo 4, pág. 18.  
 Art. 315 Tomo 1, pág. 284.  
 Art. 319 Tomo 1, pág. 284.  
 Art. 321 Tomo 1, pág. 284.  
 Art. 332 Tomo 4, pág. 126.  
 Art. 333 Tomo 4, pág. 126.  
 Art. 335 Tomo 3, pág. 344.  
 Art. 342 Tomo 3, pág. 344.  
 Art. 343 Tomo 1, pág. 276.  
 Art. 374 Tomo 1, pág. 213, 345; tomo 3 pág. 173.

**Ley número 1893, sobre organización de los tribunales de la capital.**

Art. ... Tomo 1, pág. 89, 158.  
 Art. 6 Tomo 1, pág. 89.



Art. 33 Tomo 3, pág. 271.  
Art. 47 Tomo 1, pág. 265.  
Art. 48 Tomo 1, pág. 89, 286.  
Art. 50 Tomo 1, pág. 286.  
Art. 60 Tomo 1, pág. 89, 291, 366.  
Art. 62 Tomo 1, pág. 89, 291.  
Art. 64 Tomo 1, pág. 89, 296; tomo 2, pág. 153.  
Art. 67 Tomo 2, pág. 153.  
Art. 68 Tomo 1, pág. 296.  
Art. 69 Tomo 1, pág. 188.  
Art. 70 Tomo 1, pág. 170.  
Art. 71 Tomo 1, pág. 178.  
Art. 75 Tomo 1, pág. 197.  
Art. 85 Tomo 3, pág. 277.  
Art. 86 Tomo 3, pág. 271, 277.  
Art. 94 Tomo 1, pág. 170.  
Art. 95 Tomo 1, pág. 178.  
Art. 100 Tomo 1, pág. 179.  
Art. 106 Tomo 1, pág. 188.  
Art. 107 Tomo 1, pág. 197, 241.  
Art. 108 Tomo 1, pág. 249.  
Art. 111 Tomo 1, pág. 399.  
Art. 111 inc. 2.ª Tomo 1, pág. 338.  
Art. 111 inc. 5.ª Tomo 1, pág. 397.  
Art. 111 inc. 11. Tomo 1, pág. 382.  
Art. 112 Tomo 1, pág. 399.  
Art. 117 inc. 2.ª Tomo 2, pág. 50.  
Art. 118 Tomo 1, pág. 222.  
Art. 118 inc. 3.ª Tomo 2, pág. 50.  
Art. 119 Tomo 1, pág. 222.  
Art. 120 Tomo 1, pág. 223.  
Art. 123 Tomo 1, pág. 224.  
Art. 128 Tomo 1, pág. 228.  
Art. 129 inc. 4.ª Tomo 1, pág. 228.  
Art. 131 Tomo 1, pág. 228.  
Art. 132 Tomo 1, pág. 228.  
Art. 134 Tomo 1, pág. 228.  
Art. 140 Tomo 2, pág. 43.  
Art. 141 Tomo 2, pág. 43.  
Art. 146 Tomo 1, pág. 229.  
Art. 148 Tomo 1, pág. 332.  
Art. 162 Tomo 1, pág. 229.  
Art. 163 Tomo 1, pág. 231.  
Art. 166 Tomo 1, pág. 231.  
Art. 167 Tomo 1, pág. 229.  
Art. 168 Tomo 1, pág. 229.  
Art. 169 Tomo 1, pág. 231; tomo 3, pág. 186.  
Art. 174 Tomo 3, pág. 186.  
Art. 181 Tomo 1, pág. 229.  
Art. 183 Tomo 1, pág. 229.  
Art. 184 Tomo 1, pág. 229.  
Art. 187 Tomo 1, pág. 229.  
Art. 226 Tomo 3, pág. 292.

Art. 228 Tomo 4, pág. 18.  
Art. 247 inc. 1.ª Tomo 3, pág. 67.  
Art. 249 Tomo 3, pág. 292.  
Art. 256 Tomo 4, pág. 18.  
Art. 318 Tomo 1, pág. 82, 242, 271.  
Art. 323 Tomo 4, pág. 162, 167.  
**Código de procedimiento civil de la capital. (Ley número 1893).**  
Art. 1 Tomo 1, pág. 275, 297; tomo 3, pág. 95.  
Art. 2 Tomo 1, pág. 349.  
Art. 3 Tomo 1, pág. 194, 195, 297; tomo 3, pág. 21, 66, 75.  
Art. 4 Tomo 1, pág. 275, 308, 309, 310, 311, 327, 345, 364, 365, 387; tomo 3, pág. 26, 67.  
Art. 5 Tomo 1, pág. 275, 327, 328.  
Art. 6 Tomo 1, pág. 249; tomo 3, pág. 95, 268, 348.  
Art. 7 Tomo 1, pág. 270.  
Art. 8 Tomo 1, pág. 243; tomo 3, pág. 95, 109.  
Art. 9 Tomo 3, pág. 95, 134.  
Art. 10 Tomo 3, pág. 68, 95.  
Art. 11 Tomo 1, pág. 194; tomo 3, pág. 95.  
Art. 12 Tomo 3, pág. 95.  
Art. 13 Tomo 3, pág. 68, 74, 95, 102.  
Art. 14 Tomo 3, pág. 69, 95, 102, 343.  
Art. 15 Tomo 3, pág. 95, 105, 281, 342.  
Art. 16 Tomo 3, pág. 95, 105.  
Art. 17 Tomo 3, pág. 95, 106, 343.  
Art. 18 Tomo 3, pág. 95, 108, 342.  
Art. 19 Tomo 3, pág. 95, 108.  
Art. 20 Tomo 3, pág. 95, 108, 342.  
Art. 21 Tomo 3, pág. 76, 337.  
Art. 27 Tomo 4, pág. 169.  
Art. 29 Tomo 1, pág. 232; tomo 3, pág. 95, 262, 267, 276.  
Art. 31 Tomo 1, pág. 255; tomo 3, pág. 95.  
Art. 32 Tomo 1, pág. 255; tomo 3, pág. 95, 341.  
Art. 33 Tomo 1, pág. 228, 254; tomo 3, pág. 68, 95, 341.  
Art. 34 Tomo 3, pág. 95.  
Art. 35 Tomo 3, pág. 95.  
Art. 36 Tomo 3, pág. 95.  
Art. 37 Tomo 1, pág. 254; tomo 3, pág. 95.



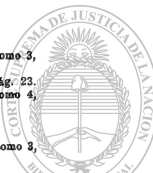
- Art. 38 Tomo 1, pág. 253, 254; tomo 3, pág. 95, 262, 268.
- Art. 39 Tomo 3, pág. 95.
- Art. 40 Tomo 1, pág. 28, 257; tomo 3, pág. 22, 95, 266, 279, 342, 349.
- Art. 41 Tomo 3, pág. 341.
- Art. 46 Tomo 1, pág. 250.
- Art. 46 inc. 1.º Tomo 1, pág. 249.
- Art. 47 Tomo 3, pág. 95, 343.
- Art. 48 Tomo 3, pág. 344.
- Art. 51 Tomo 1, pág. 45.
- Art. 52 Tomo 1, pág. 197, 241, 325; tomo 3, pág. 95.
- Art. 53 Tomo 1, pág. 197; tomo 3, 279, 342.
- Art. 56 Tomo 1, pág. 197.
- Art. 57 Tomo 1, pág. 194, 196, 325; tomo 3, pág. 340.
- Art. 57 inc. 3.º Tomo 3, pág. 212.
- Art. 58 Tomo 1, pág. 217; tomo 3, pág. 66, 94.
- Art. 59 Tomo 1, pág. 199; tomo 3, pág. 42.
- Art. 59 inc. 1.º Tomo 3, pág. 99.
- Art. 60 Tomo 3, pág. 66.
- Art. 61 Tomo 1, pág. 217; tomo 3, pág. 94.
- Art. 62 Tomo 1, pág. 26, 194; tomo 3, pág. 138, 241, 268.
- Art. 63 Tomo 3, pág. 262, 348.
- Art. 64 Tomo 4, pág. 204.
- Art. 66 Tomo 1, pág. 43; tomo 3, pág. 94, 362.
- Art. 67 inc. 5.º Tomo 3, pág. 192.
- Art. 68 Tomo 4, pág. 98.
- Art. 71 Tomo 3, pág. 74, 86, 94, 320.
- Art. 71 inc. 4.º Tomo 3, pág. 287, 319.
- Art. 72 Tomo 3, pág. 72, 94, 203.
- Art. 73 Tomo 3, pág. 74.
- Art. 74 Tomo 1, pág. 312, 320, 321; tomo 3, pág. 74.
- Art. 75 Tomo 1, pág. 194; tomo 3, pág. 22, 66, 74.
- Art. 76 Tomo 3, pág. 76, 78, 86.
- Art. 77 Tomo 3, pág. 94, 349; tomo 4, pág. 58.
- Art. 78 Tomo 1, pág. 349.
- Art. 79 Tomo 3, pág. 78, 80, 81.
- Art. 80 Tomo 1, pág. 256; tomo 3, pág. 80, 81.
- Art. 81 Tomo 3, pág. 79.
- Art. 82 Tomo 3, pág. 349.
- Art. 83 Tomo 3, pág. 51, 78.
- Art. 84 Tomo 1, pág. 324; tomo 3, pág. 20, 53; tomo 4, pág. 90.
- Art. 84 inc. 1.º Tomo 1, pág. 275, 322, 324; tomo 3, pág. 20.
- Art. 54 inc. 2.º Tomo 3, pág. 20, 47, 74; tomo 4, pág. 90.
- Art. 84 inc. 3.º Tomo 1, pág. 322; tomo 3, pág. 20, 47, 99.
- Art. 85 Tomo 3, pág. 53.
- Art. 86 Tomo 3, pág. 51, 56.
- Art. 87 Tomo 1, pág. 297, 403; tomo 2, pág. 181; tomo 3, pág. 21, 66.
- Art. 88 Tomo 3, pág. 56.
- Art. 89 Tomo 3, pág. 56, 266; tomo 4, pág. 167, 170.
- Art. 90 Tomo 3, pág. 56.
- Art. 91 Tomo 3, pág. 56.
- Art. 92 Tomo 3, pág. 56.
- Art. 94 Tomo 3, pág. 56, 338.
- Art. 96 Tomo 3, pág. 56, 266, 338.
- Art. 97 Tomo 3, pág. 62, 266.
- Art. 98 Tomo 3, pág. 79, 86.
- Art. 99 Tomo 3, pág. 47, 81, 86.
- Art. 100 Tomo 3, pág. 81, 88, 201.
- Art. 100 inc. 1.º Tomo 3, pág. 89, 114, 133, 134.
- Art. 100 inc. 4.º Tomo 3, pág. 203.
- Art. 103 Tomo 3, pág. 264.
- Art. 104 Tomo 3, pág. 95.
- Art. 108 Tomo 3, pág. 46.
- Art. 109 Tomo 3, pág. 17.
- Art. 111 Tomo 1, pág. 250, 251; tomo 3, pág. 56, 126, 127, 148; tomo 4, pág. 167, 170.
- Art. 113 Tomo 1, pág. 349; tomo 3, pág. 127.
- Art. 114 Tomo 3, pág. 127.
- Art. 115 Tomo 3, pág. 127.
- Art. 116 Tomo 3, pág. 127.
- Art. 117 Tomo 3, pág. 128.
- Art. 118 Tomo 1, pág. 249; tomo 3, pág. 129, 148.
- Art. 122 Tomo 3, pág. 232.
- Art. 125 Tomo 3, pág. 103, 134, 135.
- Art. 126 Tomo 3, pág. 134.
- Art. 130 Tomo 3, pág. 201; tomo 4, pág. 59.
- Art. 131 Tomo 1, pág. 194; tomo 3, pág. 156.
- Art. 132 Tomo 3, pág. 156.



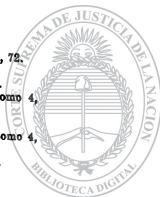
- Art. 133 Tomo 3, pág. 89, 97, 116, 156, 201.  
Art. 135 Tomo 3, pág. 279, 342.  
Art. 136 Tomo 1, pág. 349; tomo 3, pág. 135.  
Art. 137 Tomo 3, pág. 135.  
Art. 138 Tomo 3, pág. 136.  
Art. 139 Tomo 3, pág. 181, 189.  
Art. 140 Tomo 3, pág. 149, 203, 205, 207.  
Art. 141 Tomo 3, pág. 203, 205.  
Art. 142 Tomo 3, pág. 90, 203, 205.  
Art. 143 Tomo 3, pág. 149, 204, 205.  
Art. 144 Tomo 3, pág. 204, 205.  
Art. 145 Tomo 3, pág. 149, 204, 205.  
Art. 146 Tomo 3, pág. 149, 201, 204, 205.  
Art. 147 Tomo 3, pág. 204, 205.  
Art. 148 Tomo 3, pág. 204, 205, 208.  
Art. 149 Tomo 3, pág. 204, 205.  
Art. 150 Tomo 3, pág. 204, 205, 231.  
Art. 151 Tomo 3, pág. 201, 205.  
Art. 152 Tomo 3, pág. 116, 205.  
Art. 154 Tomo 3, pág. 208.  
Art. 155 Tomo 3, pág. 116, 208.  
Art. 156 Tomo 3, pág. 208.  
Art. 157 Tomo 3, pág. 208.  
Art. 158 Tomo 3, pág. 208.  
Art. 160 Tomo 3, pág. 205.  
Art. 161 Tomo 3, pág. 212, 213.  
Art. 162 Tomo 3, pág. 205, 208, 214, 215.  
Art. 163 Tomo 3, pág. 214, 215, 216.  
Art. 164 Tomo 3, pág. 213.  
Art. 165 Tomo 3, pág. 213; tomo 4, pág. 168.  
Art. 166 Tomo 3, pág. 216, 217.  
Art. 167 Tomo 3, pág. 213.  
Art. 168 Tomo 3, pág. 339.  
Art. 170 Tomo 3, pág. 213; tomo 4, pág. 168.  
Art. 171 Tomo 3, pág. 218, 281.  
Art. 173 Tomo 3, pág. 218.  
Art. 175 Tomo 3, pág. 219.  
Art. 176 Tomo 3, pág. 219.  
Art. 177 Tomo 3, pág. 219.  
Art. 179 Tomo 3, pág. 146, 148, 149, 158, 176, 178.  
Art. 180 Tomo 3, pág. 144, 171.  
Art. 181 Tomo 3, pág. 148, 152.  
Art. 182 Tomo 3, pág. 94, 103, 148, 152, 153, 171, 199, 200, 279, 349.  
Art. 183 Tomo 3, pág. 153, 280, 281, 342.  
Art. 185 Tomo 3, pág. 153.  
Art. 186 Tomo 3, pág. 146, 149, 168.  
Art. 187 Tomo 3, pág. 153.  
Art. 188 Tomo 3, pág. 154.  
Art. 189 Tomo 3, pág. 154, 171.  
Art. 190 Tomo 3, pág. 154, 171.  
Art. 191 Tomo 3, pág. 154.  
Art. 192 Tomo 3, pág. 156.  
Art. 193 Tomo 3, pág. 156.  
Art. 194 Tomo 3, pág. 156.  
Art. 195 Tomo 3, pág. 156.  
Art. 196 Tomo 3, pág. 156, 165.  
Art. 198 Tomo 3, pág. 156, 231.  
Art. 199 Tomo 3, pág. 156.  
Art. 201 Tomo 3, pág. 150, 151, 152, 156.  
Art. 202 Tomo 3, pág. 146, 171.  
Art. 203 Tomo 3, pág. 171, 277.  
Art. 204 Tomo 3, pág. 116, 157, 162, 173, 176.  
Art. 205 Tomo 3, pág. 147, 162.  
Art. 206 Tomo 3, pág. 148, 149, 158, 167, 177, 178.  
Art. 206 inc. 4.º Tomo 3, pág. 167.  
Art. 206 inc. 5.º Tomo 3, pág. 167.  
Art. 206 inc. 6.º Tomo 3, pág. 167.  
Art. 206 inc. 8.º Tomo 3, pág. 167.  
Art. 207 Tomo 3, pág. 149, 158, 177, 178.  
Art. 209 Tomo 3, pág. 162; tomo 4, pág. 59.  
Art. 210 Tomo 3, pág. 231, 232.  
Art. 211 Tomo 3, pág. 231.  
Art. 213 Tomo 1, pág. 194, 251; tomo 3, pág. 95, 236.  
Art. 214 Tomo 3, pág. 74, 95, 237.  
Art. 215 Tomo 1, pág. 249; tomo 3, pág. 74, 95, 135, 237, 238, 268.  
Art. 216 Tomo 1, pág. 194; tomo 3, pág. 18, 68, 86, 95, 99, 230, 261, 262, 264, 267, 274, 281, 285, 301, 321, 348.  
Art. 217 Tomo 3, pág. 75, 267, 279, 348.  
Art. 217 inc. 2.º Tomo 3, pág. 274.  
Art. 219 Tomo 3, pág. 28, 70; tomo 4, pág. 32.  
Art. 220 Tomo 3, pág. 95, 116, 228, 230.  
Art. 221 Tomo 3, pág. 99, 103, 263, 267, 274, 280, 281, 348.  
Art. 222 Tomo 3, pág. 290, 321, 336.  
Art. 223 Tomo 3, pág. 262, 336, 337; tomo 4, pág. 10.

Art. 224 Tomo 3, pág. 266, 337; to-  
mo 4, pág. 10.  
Art. 225 Tomo 3, pág. 99, 337.  
Art. 226 Tomo 3, pág. 95, 262, 266,  
336, 337, 339.  
Art. 228 Tomo 3, pág. 341.  
Art. 229 Tomo 3, pág. 266, 345.  
Art. 230 Tomo 3, pág. 266, 345.  
Art. 231 Tomo 3, pág. 346.  
Art. 232 Tomo 3, pág. 346.  
Art. 233 Tomo 3, pág. 346.  
Art. 234 Tomo 3, pág. 351.  
Art. 236 Tomo 1, pág. 249, 266.  
Art. 237 Tomo 3, pág. 95, 301, 310,  
336, 347.  
Art. 238 Tomo 3, pág. 350.  
Art. 239 Tomo 3, pág. 94, 347.  
Art. 240 Tomo 1, pág. 28; tomo 3,  
pág. 350; tomo 4, pág. 14.  
Art. 241 Tomo 3, pág. 95; tomo 4,  
pág. 10.  
Art. 242 Tomo 1, pág. 267; tomo 3,  
pág. 243; tomo 4, pág. 10.  
Art. 245 Tomo 4, pág. 10.  
Art. 247 Tomo 3, pág. 17, 18.  
Art. 248 Tomo 4, pág. 11.  
Art. 249 Tomo 4, pág. 11.  
Art. 250 Tomo 4, pág. 11.  
Art. 251 Tomo 4, pág. 11.  
Art. 252 Tomo 4, pág. 11.  
Art. 255 Tomo 3, pág. 270.  
Art. 256 Tomo 3, pág. 270, 272, 278.  
Art. 257 Tomo 3, pág. 272.  
Art. 258 Tomo 3, pág. 270, 272.  
Art. 259 Tomo 3, pág. 272.  
Art. 260 Tomo 3, pág. 272.  
Art. 261 Tomo 3, pág. 272.  
Art. 262 Tomo 3, pág. 272.  
Art. 263 Tomo 4, pág. 11.  
Art. 264 Tomo 3, pág. 277.  
Art. 266 Tomo 3, pág. 17.  
Art. 267 Tomo 3, pág. 17, 309.  
Art. 268 Tomo 1, pág. 249.  
Art. 270 Tomo 3, pág. 346.  
Art. 271 Tomo 3, pág. 336.  
Art. 273 Tomo 3, pág. 337.  
Art. 274 Tomo 3, pág. 280.  
Art. 275 Tomo 3, pág. 336; tomo 4,  
pág. 125.  
Art. 276 inc. 2.ª Tomo 3, pág. 178.  
Art. 278 Tomo 3, pág. 147, 279.  
Art. 325 Tomo 4, pág. 18.  
Art. 366 Tomo 3, pág. 67.  
Art. 367 Tomo 4, pág. 9.

Art. 368 Tomo 1, pág. 179; tomo 3,  
pág. 22, 90, 103.  
Art. 368 inc. 8.ª Tomo 3, pág. 23.  
Art. 369 Tomo 3, pág. 67; tomo 4,  
pág. 205.  
Art. 370 Tomo 3, pág. 310.  
Art. 379 Tomo 3, pág. 266.  
Art. 384 Tomo 1, pág. 179; tomo 3,  
pág. 20, 22.  
Art. 391 Tomo 1, pág. 242.  
Art. 403 Tomo 1, pág. 327; tomo 4,  
pág. 167, 170.  
Art. 408 Tomo 3, pág. 338; tomo 4,  
pág. 167, 170.  
Art. 410 Tomo 1, pág. 300, 301, 304.  
Art. 415 Tomo 1, pág. 302.  
Art. 417 Tomo 1, pág. 303.  
Art. 418 Tomo 1, pág. 303.  
Art. 419 Tomo 1, pág. 303.  
Art. 423 Tomo 1, pág. 301.  
Art. 424 Tomo 1, pág. 301, 303.  
Art. 425 Tomo 3, pág. 8, 95; to-  
mo 4, pág. 98, 99.  
Art. 426 Tomo 4, pág. 102.  
Art. 427 Tomo 3, pág. 8; tomo 4,  
pág. 103.  
Art. 428 Tomo 3, pág. 65, 201; to-  
mo 4, pág. 99, 100, 103.  
Art. 429 Tomo 4, pág. 103.  
Art. 430 Tomo 4, pág. 103.  
Art. 431 Tomo 4, pág. 103.  
Art. 432 Tomo 4, pág. 101.  
Art. 433 Tomo 1, pág. 256, 266.  
Art. 434 Tomo 1, pág. 267; tomo 3,  
pág. 90, 201.  
Art. 436 Tomo 1, pág. 256, 266.  
Art. 437 Tomo 1, pág. 267; tomo 3,  
pág. 91.  
Art. 439 Tomo 1, pág. 267.  
Art. 443 Tomo 3, pág. 66, 192, 297;  
tomo 4, pág. 78, 79.  
Art. 444 Tomo 4, pág. 77, 82, 85.  
Art. 445 Tomo 4, pág. 81.  
Art. 446 Tomo 4, pág. 80.  
Art. 447 Tomo 3, pág. 66, 67, 261,  
297; tomo 4, pág. 80.  
Art. 448 Tomo 3, pág. 291; tomo 4,  
pág. 80.  
Art. 449 Tomo 4, pág. 82, 85.  
Art. 450 Tomo 4, pág. 82.  
Art. 451 Tomo 4, pág. 89.  
Art. 452 Tomo 4, pág. 84, 85 n.  
Art. 453 Tomo 3, pág. 341; tomo 4,  
pág. 83.







- Art. 454 Tomo 4, pág. 85.  
 Art. 455 Tomo 3, pág. 291; tomo 4, pág. 84.  
 Art. 456 Tomo 4, pág. 84.  
 Art. 457 Tomo 4, pág. 84.  
 Art. 459 Tomo 3, pág. 292.  
 Art. 460 Tomo 3, pág. 8, 66.  
 Art. 461 Tomo 4, pág. 85.  
 Art. 462 Tomo 4, pág. 78.  
 Art. 463 Tomo 4, pág. 78.  
 Art. 464 Tomo 3, pág. 95.  
 Art. 465 Tomo 3, pág. 95, 250; tomo 4, pág. 56, 59, 65.  
 Art. 466 Tomo 3, pág. 95; tomo 4, pág. 58, 59, 66, 96.  
 Art. 467 Tomo 4, pág. 66.  
 Art. 468 Tomo 4, pág. 58.  
 Art. 469 Tomo 4, pág. 58.  
 Art. 471 Tomo 4, pág. 57, 60, 61, 83 n.  
 Art. 472 Tomo 3, pág. 341.  
 Art. 474 Tomo 4, pág. 61.  
 Art. 475 Tomo 4, pág. 83 n.  
 Art. 476 Tomo 3, pág. 291; tomo 4, pág. 61.  
 Art. 477 Tomo 4, pág. 61.  
 Art. 478 Tomo 4, pág. 61, 89.  
 Art. 479 Tomo 4, pág. 61.  
 Art. 480 Tomo 4, pág. 23.  
 Art. 484 Tomo 3, pág. 17.  
 Art. 488 Tomo 3, pág. 17, 96; tomo 4, pág. 56, 58, 62, 63.  
 Art. 489 Tomo 4, pág. 62, 66.  
 Art. 490 Tomo 3, pág. 126; tomo 4, pág. 69.  
 Art. 491 Tomo 4, pág. 67.  
 Art. 492 Tomo 4, pág. 67.  
 Art. 493 Tomo 4, pág. 58, 67.  
 Art. 494 Tomo 4, pág. 67.  
 Art. 495 Tomo 4, pág. 68.  
 Art. 496 Tomo 4, pág. 68.  
 Art. 497 Tomo 4, pág. 68.  
 Art. 498 Tomo 3, pág. 12; tomo 4, pág. 68.  
 Art. 499 Tomo 4, pág. 68.  
 Art. 500 Tomo 3, pág. 13, 96; tomo 4, pág. 69.  
 Art. 501 Tomo 3, pág. 297, 339, 344; tomo 4, pág. 66, 72.  
 Art. 502 Tomo 4, pág. 69.  
 Art. 503 Tomo 3, pág. 297; tomo 4, pág. 69.  
 Art. 504 Tomo 3, pág. 261, 297; tomo 4, pág. 69.  
 Art. 505 Tomo 3, pág. 262, 338, 339, 341; tomo 4, pág. 69, 72.  
 Art. 506 Tomo 4, pág. 69.  
 Art. 507 Tomo 4, pág. 68, 74.  
 Art. 508 Tomo 3, pág. 13; tomo 4, pág. 72.  
 Art. 509 Tomo 4, pág. 72.  
 Art. 510 Tomo 3, pág. 216; tomo 4, pág. 73.  
 Art. 511 Tomo 4, pág. 72, 73.  
 Art. 512 Tomo 4, pág. 73.  
 Art. 513 Tomo 4, pág. 73.  
 Art. 514 Tomo 4, pág. 73.  
 Art. 515 Tomo 4, pág. 73.  
 Art. 516 Tomo 4, pág. 72, 73.  
 Art. 517 Tomo 4, pág. 74.  
 Art. 518 Tomo 4, pág. 27.  
 Art. 519 Tomo 4, pág. 74.  
 Art. 520 Tomo 4, pág. 74.  
 Art. 522 Tomo 4, pág. 74.  
 Art. 523 Tomo 4, pág. 75.  
 Art. 524 Tomo 4, pág. 75.  
 Art. 525 Tomo 4, pág. 75.  
 Art. 526 Tomo 4, pág. 75.  
 Art. 527 Tomo 3, pág. 293; tomo 4, pág. 75.  
 Art. 528 Tomo 3, pág. 220; tomo 4, pág. 74.  
 Art. 532 Tomo 4, pág. 90, 91.  
 Art. 533 Tomo 4, pág. 91.  
 Art. 534 Tomo 4, pág. 91.  
 Art. 535 Tomo 3, pág. 259, 297, 302; tomo 4, pág. 209.  
 Art. 536 Tomo 4, pág. 188.  
 Art. 538 Tomo 4, pág. 29.  
 Art. 539 Tomo 3, pág. 47, 295; tomo 4, pág. 29, 30, 47.  
 Art. 540 Tomo 3, pág. 344; tomo 4, pág. 31.  
 Art. 541 Tomo 4, pág. 31, 32.  
 Art. 542 Tomo 4, pág. 32.  
 Art. 543 Tomo 4, pág. 34.  
 Art. 544 Tomo 4, pág. 34.  
 Art. 545 Tomo 4, pág. 34.  
 Art. 547 Tomo 3, pág. 345.  
 Art. 548 Tomo 4, pág. 34.  
 Art. 550 Tomo 4, pág. 34.  
 Art. 551 Tomo 4, pág. 34.  
 Art. 555 Tomo 4, pág. 35.  
 Art. 557 Tomo 4, pág. 35.  
 Art. 558 Tomo 1, pág. 20, 349; tomo 4, pág. 40.  
 Art. 559 Tomo 4, pág. 46.  
 Art. 559 inc. 1.ª. Tomo 4, pág. 44.  
 Art. 559 inc. 2.ª. Tomo 4, pág. 45.

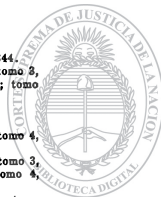
Art. 559 inc. 3.º. Tomo 4, pág. 45.  
 Art. 560 Tomo 4, pág. 46, 47.  
 Art. 561 Tomo 3, pág. 345.  
 Art. 562 Tomo 4, pág. 47.  
 Art. 563 Tomo 3, pág. 95, 96; to-  
 mo 4, pág. 115, 132.  
 Art. 564 Tomo 4, pág. 125, 131.  
 Art. 565 Tomo 3, pág. 362.  
 Art. 567 Tomo 4, pág. 132.  
 Art. 568 Tomo 1, pág. 257; tomo 4,  
 pág. 132.  
 Art. 570 Tomo 4, pág. 132.  
 Art. 571 Tomo 3, pág. 126, 147; to-  
 mo 4, pág. 126, 127.  
 Art. 573 Tomo 3, pág. 345; tomo 4,  
 pág. 127.  
 Art. 574 Tomo 4, pág. 116, 118.  
 Art. 576 Tomo 3, pág. 126; tomo 4,  
 pág. 125, 127.  
 Art. 577 Tomo 3, pág. 96; tomo 4,  
 pág. 126.  
 Art. 578 Tomo 4, pág. 127.  
 Art. 579 Tomo 3, pág. 96; tomo 4,  
 pág. 129.  
 Art. 580 Tomo 3, pág. 345; tomo 4,  
 pág. 127.  
 Art. 581 Tomo 4, pág. 116.  
 Art. 582 Tomo 3, pág. 126; tomo 4,  
 pág. 125, 126.  
 Art. 583 Tomo 4, pág. 127.  
 Art. 584 Tomo 3, pág. 345; tomo 4,  
 pág. 127.  
 Art. 585 Tomo 3, pág. 126, 345; to-  
 mo 4, pág. 116, 123, 123a,  
 126, 127.  
 Art. 586 Tomo 3, pág. 95, 96; to-  
 mo 4, pág. 92 u., 94.  
 Art. 587 Tomo 4, pág. 94.  
 Art. 588 Tomo 3, pág. 302; tomo 4,  
 pág. 92, 95.  
 Art. 589 Tomo 3, pág. 302; tomo 4,  
 pág. 92, 95.  
 Art. 590 Tomo 3, pág. 339; tomo 4,  
 pág. 96.  
 Art. 591 Tomo 4, pág. 96.  
 Art. 592 Tomo 4, pág. 97.  
 Art. 598 Tomo 3, pág. 303.  
 Art. 602 Tomo 3, pág. 95, 303; to-  
 mo 4, pág. 105, 106.  
 Art. 603 Tomo 4, pág. 108.  
 Art. 604 Tomo 4, pág. 107.  
 Art. 605 Tomo 4, pág. 107.  
 Art. 607 Tomo 4, pág. 106.  
 Art. 609 Tomo 1, pág. 334, 335; to-  
 mo 3, pág. 95; tomo 4,

pág. 173.  
 Art. 610 Tomo 4, pág. 173.  
 Art. 611 Tomo 4, pág. 173.  
 Art. 612 Tomo 4, pág. 178.  
 Art. 613 Tomo 4, pág. 178.  
 Art. 614 Tomo 4, pág. 176.  
 Art. 615 Tomo 1, pág. 257.  
 Art. 616 Tomo 4, pág. 180.  
 Art. 617 Tomo 4, pág. 181, 182.  
 Art. 618 Tomo 3, pág. 215; tomo 4,  
 pág. 182.  
 Art. 619 Tomo 3, pág. 218; tomo 4,  
 pág. 182.  
 Art. 620 Tomo 3, pág. 262; tomo 4,  
 pág. 183.  
 Art. 621 Tomo 4, pág. 182.  
 Art. 623 Tomo 4, pág. 158.  
 Art. 624 Tomo 4, pág. 183, 186.  
 Art. 626 Tomo 3, pág. 95; tomo 4,  
 pág. 55.  
 Art. 627 Tomo 4, pág. 156.  
 Art. 628 Tomo 4, pág. 159.  
 Art. 631 Tomo 4, pág. 161.  
 Art. 633 Tomo 4, pág. 159.  
 Art. 634 Tomo 1, pág. 339.  
 Art. 636 Tomo 4, pág. 156.  
 Art. 639 Tomo 1, pág. 257.  
 Art. 642 Tomo 1, pág. 228; tomo 4,  
 pág. 160, 166.  
 Art. 648 Tomo 3, pág. 168, 231.  
 Art. 648 Tomo 3, pág. 165, 168, 231.  
 Art. 650 Tomo 4, pág. 165, 166.  
 Art. 651 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 652 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 653 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 654 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 655 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 656 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 657 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 658 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 659 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 661 Tomo 4, pág. 167.  
 Art. 662 Tomo 4, pág. 167.  
 Art. 663 Tomo 4, pág. 167, 170.  
 Art. 664 Tomo 3, pág. 345; tomo 4,  
 pág. 167.  
 Art. 665 Tomo 4, pág. 165.  
 Art. 668 Tomo 4, pág. 168.  
 Art. 671 Tomo 4, pág. 169.  
 Art. 672 Tomo 4, pág. 169.  
 Art. 673 Tomo 4, pág. 169.  
 Art. 674 Tomo 4, pág. 169, 170.  
 Art. 677 Tomo 3, pág. 279, 342; to-  
 mo 4, pág. 170.





- Art. 678 Tomo 4, pág. 162, 170.  
 Art. 680 Tomo 4, pág. 164.  
 Art. 684 Tomo 3, pág. 165, 345.  
 Art. 685 Tomo 4, pág. 155.  
 Art. 686 Tomo 4, pág. 161.  
 Art. 687 Tomo 1, pág. 257.  
 Art. 688 Tomo 4, pág. 163.  
 Art. 689 Tomo 4, pág. 164.  
 Art. 690 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 691 Tomo 4, pág. 164.  
 Art. 692 Tomo 4, pág. 164.  
 Art. 693 Tomo 4, pág. 166.  
 Art. 695 Tomo 4, pág. 162.  
 Art. 698 Tomo 4, pág. 155, 163, 166.  
 Art. 700 Tomo 4, pág. 160.  
 Art. 707 Tomo 1, pág. 228.  
 Art. 718 Tomo 1, pág. 341; tomo 4, pág. 137, 138, 143.  
 Art. 719 Tomo 3, pág. 293; tomo 4, pág. 137, 143.  
 Art. 720 Tomo 4, pág. 142, 145.  
 Art. 721 Tomo 3, pág. 338; tomo 4, pág. 143.  
 Art. 722 Tomo 3, pág. 105; tomo 4, pág. 143.  
 Art. 723 Tomo 4, pág. 138.  
 Art. 724 Tomo 4, pág. 142.  
 Art. 724 inc. 5.ª Tomo 3, pág. 338, 345; tomo 4, pág. 143.  
 Art. 725 Tomo 4, pág. 138.  
 Art. 726 Tomo 4, pág. 137, 143, 145.  
 Art. 727 Tomo 4, pág. 144.  
 Art. 728 Tomo 1, pág. 257; tomo 4, pág. 142.  
 Art. 729 Tomo 4, pág. 145.  
 Art. 730 Tomo 4, pág. 143.  
 Art. 731 Tomo 4, pág. 137, 142, 152.  
 Art. 732 Tomo 4, pág. 142, 152.  
 Art. 733 Tomo 4, pág. 143.  
 Art. 734 Tomo 4, pág. 138, 152.  
 Art. 735 Tomo 4, pág. 143, 147, 152.  
 Art. 736 Tomo 4, pág. 147.  
 Art. 737 Tomo 4, pág. 137, 142, 143.  
 Art. 738 Tomo 4, pág. 143, 147.  
 Art. 739 Tomo 4, pág. 137, 142, 143, 152.  
 Art. 740 Tomo 4, pág. 143, 152.  
 Art. 741 Tomo 4, pág. 143, 152.  
 Art. 742 Tomo 4, pág. 143.  
 Art. 744 Tomo 3, pág. 96; tomo 4, pág. 143.  
 Art. 746 Tomo 4, pág. 152.  
 Art. 747 Tomo 4, pág. 145.  
 Art. 748 Tomo 1, pág. 257; tomo 4, pág. 143, 145.  
 Art. 749 Tomo 4, pág. 144, 145.  
 Art. 750 Tomo 4, pág. 145.  
 Art. 751 Tomo 4, pág. 142, 143, 145.  
 Art. 752 Tomo 4, pág. 145.  
 Art. 753 Tomo 4, pág. 143, 146.  
 Art. 755 Tomo 4, pág. 143, 146, 150.  
 Art. 756 Tomo 4, pág. 143, 146, 150.  
 Art. 757 Tomo 4, pág. 147.  
 Art. 758 Tomo 1, pág. 257; tomo 4, pág. 143, 147.  
 Art. 759 Tomo 4, pág. 148.  
 Art. 760 Tomo 4, pág. 143, 148.  
 Art. 761 Tomo 4, pág. 147, 149.  
 Art. 762 Tomo 4, pág. 149.  
 Art. 763 Tomo 4, pág. 149.  
 Art. 764 Tomo 4, pág. 149.  
 Art. 765 Tomo 4, pág. 143, 147.  
 Art. 766 Tomo 4, pág. 143.  
 Art. 767 Tomo 1, pág. 28; tomo 3, pág. 96; tomo 4, pág. 188, 198.  
 Art. 768 Tomo 3, pág. 96; tomo 4, pág. 198.  
 Art. 769 Tomo 4, pág. 198.  
 Art. 770 Tomo 4, pág. 203.  
 Art. 771 Tomo 3, pág. 196, 259; tomo 4, pág. 194, 203.  
 Art. 772 Tomo 4, pág. 203.  
 Art. 773 inc. 2.ª Tomo 4, pág. 209.  
 Art. 773 inc. 4.ª Tomo 3, pág. 98.  
 Art. 773 inc. 4.ª Tomo 4, pág. 98.  
 Art. 773 inc. 5.ª Tomo 1, pág. 28.  
 Art. 774 Tomo 4, pág. 197, 204.  
 Art. 775 Tomo 4, pág. 196, 197.  
 Art. 776 Tomo 4, pág. 197, 205.  
 Art. 777 Tomo 4, pág. 205.  
 Art. 778 Tomo 1, pág. 28; tomo 4, pág. 205.  
 Art. 780 Tomo 4, pág. 205.  
 Art. 781 Tomo 1, pág. 265; tomo 4, pág. 203.  
 Art. 782 Tomo 4, pág. 206.  
 Art. 783 Tomo 3, pág. 96; tomo 4, pág. 195, 206.  
 Art. 784 Tomo 4, pág. 105, 206.  
 Art. 785 Tomo 4, pág. 207.  
 Art. 786 Tomo 4, pág. 207.  
 Art. 787 Tomo 4, pág. 195, 208.  
 Art. 788 Tomo 4, pág. 195, 209.  
 Art. 789 Tomo 4, pág. 195, 209, 211.  
 Art. 790 Tomo 4, pág. 209, 211.  
 Art. 791 Tomo 4, pág. 200, 211.  
 Art. 792 Tomo 4, pág. 110, 209, 211.  
 Art. 793 Tomo 4, pág. 111, 209, 210.



- Art. 794 Tomo 4, pág. 210.  
 Art. 795 Tomo 4, pág. 210, 211.  
 Art. 796 Tomo 4, pág. 210.  
 Art. 797 Tomo 4, pág. 196.  
 Art. 798 Tomo 1, pág. 28; tomo 4, pág. 198.  
 Art. 799 Tomo 4, pág. 206.  
 Art. 799 inc. 1.ª Tomo 4, pág. 198.  
 Art. 799 inc. 2.ª Tomo 4, pág. 196, 197.  
 Art. 799 inc. 4.ª Tomo 1, pág. 28.  
 Art. 799 inc. 5.ª Tomo 1, pág. 28.  
 Art. 801 Tomo 4, pág. 204.  
 Art. 802 Tomo 3, pág. 259; tomo 4, pág. 195, 206.  
 Art. 804 Tomo 1, pág. 265; tomo 3, pág. 259; tomo 4, pág. 197, 206, 208.  
 Art. 805 Tomo 4, pág. 205.  
 Art. 806 Tomo 4, pág. 205.  
 Art. 807 Tomo 4, pág. 205.  
 Art. 808 Tomo 3, pág. 347; tomo 4, pág. 195, 210, 211.  
 Art. 809 Tomo 4, pág. 205.  
 Art. 811 Tomo 1, pág. 32.  
 Art. 812 Tomo 1, pág. 32.  
 Art. 814 Tomo 1, pág. 213; tomo 3, pág. 241.

**Apéndice al código de procedimiento civil de la capital. Ley de 31 de octubre de 1878 (de la provincia de Buenos Aires), vigente en la capital.**

- Art. 58 Tomo 3, pág. 220.  
 Art. 61 Tomo 1, pág. 238.  
 Art. 65 Tomo 1, pág. 238.  
 Art. 66 Tomo 1, pág. 238.  
 Art. 67 Tomo 1, pág. 326.  
 Art. 68 Tomo 1, pág. 238.

**Ley número 4128, de modificaciones de la de procedimiento en lo civil de la capital**

- ..... Tomo 1, pág. 250; tomo 3, pág. 150, 270; tomo 4, pág. 14 n. 1.  
 Art. 2 Tomo 1, pág. 231, 254.  
 Art. 3 Tomo 1, pág. 251.  
 Art. 4 Tomo 3, pág. 50, 76, 78, 79, 84.  
 Art. 7 Tomo 3, pág. 47, 51.  
 Art. 8 Tomo 3, pág. 338, 340.  
 Art. 9 Tomo 3, pág. 130.

- Art. 10 Tomo 3, pág. 127, 344.  
 Art. 11 Tomo 1, pág. 266; tomo 3, pág. 131, 148, 161; tomo 4, pág. 67.  
 Art. 12 Tomo 4, pág. 24.  
 Art. 13 Tomo 3, pág. 351.  
 Art. 14 Tomo 3, pág. 344; tomo 4, pág. 11.  
 Art. 24 Tomo 1, pág. 264; tomo 3, pág. 263, 279; tomo 4, pág. 9.  
 Art. 25 Tomo 3, pág. 349; tomo 4, pág. 14.  
 Art. 26 Tomo 3, pág. 116, 230.

**Ley número 4550 de caducidad de instancia**

- ..... Tomo 1, pág. 260, 262, 263, 264, 265; tomo 3, pág. 247, 248.  
 Art. 1 Tomo 1, pág. 260, 261; tomo 3, pág. 96, 251.  
 Art. 2 Tomo 1, pág. 262.  
 Art. 3 Tomo 1, pág. 264; tomo 3, pág. 255.  
 Art. 4 Tomo 1, pág. 260; tomo 3, pág. 254.  
 Art. 6 Tomo 1, pág. 263, 265; tomo 3, pág. 250.  
 Art. 7 Tomo 1, pág. 260.  
 Art. 8 Tomo 1, pág. 262.  
 Art. 15 Tomo 1, pág. 260.

**Leves de estilo**

- Ley 1, Tomo 1, pág. 77.  
 Ley 9, Tomo 1, pág. 77.  
 Ley 235, Tomo 3, pág. 57.

**Fusro juzgo**

- Libro 2, tit. 1, ley 23, Tomo 3, pág. 57.

**Fuero real**

- Libro 1, tit. 11, ley 3, Tomo 3, pág. 57.  
 Libro 2, tit. 3, ley 4, Tomo 2, pág. 46.  
 Libro 2, tit. 13, ley 5, Tomo 3, pág. 262.

**Ordenamiento de Alcalá**

- Tít. 7, ley 1.ª Tomo 3, pág. 57.  
 Tít. 12, ley 1.ª Tomo 3, pág. 57.

**Ordenanzas reales de Castilla**

Libro 3, tit. 1.<sup>a</sup> ley 3, Tomo 1, página 259.

**Leyes de Partida**

.... Tomo 1 pág. 215.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 1, ley 24, Tomo 4, pág. 197.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 2, ley 15, Tomo 3, pág. 314.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 2, ley 24, Tomo 3, pág. 314.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 2, ley 32, Tomo 1, pág. 310.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 2, ley 40, Tomo 3, pág. 71.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 3, ley 4, Tomo 1, pág. 309.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 3, ley 5, Tomo 3, pág. 77.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 3, ley 8, Tomo 3, pág. 138.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 4, ley 23, Tomo 4, pág. 188.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 4, ley 30, Tomo 4, págs. 195, 205.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 4, ley 27, Tomo 4, pág. 207.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 4, ley 32, Tomo 4, pág. 208.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 5, ley 23, Tomo 3, pág. 108.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 5, ley 64, Tomo 3, pág. 37.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 6, ley 13, Tomo 1, pág. 17.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 7, ley 13, Tomo 3, pág. 239.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 10, ley 3, Tomo 3, pág. 82, 85.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 10, ley 7, Tomo 1, pág. 319, 321.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 13, ley 1, Tomo 3, pág. 134.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 13, ley 2, Tomo 3, pág. 141.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 13, ley 5, Tomo 3, pág. 141.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 14, ley 1, Tomo 3, pág. 123, 125.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 14, ley 2, Tomo 3, pág. 125.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 14, ley 20, Tomo 3, pág. 87.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 2, Tomo 2, pág. 46.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 3, Tomo 2, pág. 46.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 7, Tomo 3, pág. 57, 315.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 8, Tomo 2, pág. 10; Tomo 3, pág. 167, 179.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 9, Tomo 2, pág. 111.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 10, Tomo 2, pág. 112.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 18, Tomo 3, pág. 144.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 19, Tomo 3, pág. 168.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 20, Tomo 3, pág. 168.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 22, Tomo 2, pág. 108.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 23, Tomo 3, pág. 153.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 26, Tomo 3, pág. 155.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 30, Tomo 3, pág. 155.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 32, Tomo 3, pág. 172.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 37, Tomo 3, pág. 163.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 16, ley 41, Tomo 3, pág. 174.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 18, ley 1.<sup>a</sup>, Tomo 3, pág. 143.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 18, ley 118, Tomo 2, pág. 112.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 18, ley 144, Tomo 3, pág. 206.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 22, ley 1, Tomo 3, pág. 257.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 22, ley 2, Tomo 3, pág. 261, 302.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 22, ley 9, Tomo 3, pág. 241.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 22, ley 13, Tomo 3, pág. 315.

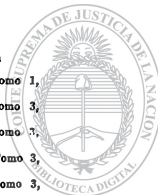
P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 22, ley 16, Tomo 3, pág. 85, 286.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 22, ley 19, Tomo 3, pág. 57.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 22, ley 20, Tomo 3, pág. 20, 57, 286, 315, 326.

P.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup>, tit. 23, ley 4, Tomo 3, pág. 339.





P. 3.ª tit. 23, ley 13, Tomo 3, pág. 98.  
 P. 3.ª, tit. 24, ley 27, Tomo 2, pág. 62.  
 P. 3.ª, tit. 29, ley 29, Tomo 3, pág. 298.  
 P. 6.ª, tit. 6, ley 9, Tomo 1, pág. 259; Tomo 3, pág. 248.  
 P. 6.ª, tit. 15, ley 2, Tomo 3, pág. 24.  
 P. 6.ª, tit. 15, ley 10, Tomo 3, pág. 24.  
 P. 6.ª, tit. 19, ley 6, Tomo 3, pág. 229.  
 P. 7.ª, tit. 1.ª, ley 23, Tomo 2, pág. 62.  
 P. 7.ª, tit. 10, ley 15, Tomo 1, pág. 343.  
 P. 7.ª, tit. 15, ley 3, Tomo 1, pág. 344, 346.  
 P. 7.ª, tit. 26, ley 9, Tomo 3, pág. 248.  
 P. 7.ª, tit. 29, ley 1, Tomo 1, pág. 343.

#### Recopilación de Indias

Libro 2, tit. 1, ley 2, Tomo 1, pág. 216.  
 Libro 2, tit. 22, ley 4, Tomo 3, pág. 345.  
 Libro 5, tit. 8, ley 22, Tomo 3, pág. 345.  
 Libro 5, tit. 15, Tomo 1, pág. 182.

#### Recopilación castellana

Libro 2, tit. 7, ley 15, Tomo 2, pág. 27, 164.  
 Libro 2, tit. 17, ley 2, Tomo 3, pág. 345.  
 Libro 2, tit. 22, ley 11, Tomo 3, pág. 147.  
 Libro 3, tit. 16, ley 3, Tomo 3, pág. 248.  
 Libro 4, tit. 17, ley 2, Tomo 3, pág. 347.  
 Libro 4, tit. 20, ley 15, Tomo 4, pág. 17.  
 Libro 4, tit. 21, ley 2, Tomo 4, pág. 69.  
 Libro 5, tit. 16, ley 13, Tomo 3, pág. 226.  
 Libro 8, tit. 16, ley 3, Tomo 1, pág. 309, 343.

#### Novísima recopilación

Libro 4, tit. 20, ley 18, Tomo 1, pág. 26.  
 Libro 11, tit. 6, ley 3, Tomo 3, pág. 90.  
 Libro 11, tit. 12, ley 1, Tomo 7, pág. 90.  
 Libro 11, tit. 12, ley 1.ª, Tomo 3, pág. 163.  
 Libro 11, tit. 15, ley 3, Tomo 3, pág. 236.  
 Libro 11, tit. 48, ley 17, Tomo 4, p. 89.  
 Libro 12, tit. 30, ley 2, Tomo 3, pág. 179.

#### Código de procedimiento penal de la capital (Ley núm. 2372)

Art. 14 Tomo 1, pág. 283.  
 Art. 19 Tomo 1, pág. 275.  
 Art. 21 Tomo 1, pág. 387, 388.  
 Art. 23 Tomo 1, pág. 399.  
 Art. 25 Tomo 1, pág. 399.  
 Art. 25 inc. 3.ª, Tomo 1, pág. 397.  
 Art. 28 Tomo 1, pág. 307.  
 Art. 35 Tomo 1, pág. 343, 344.  
 Art. 43 Tomo 1, pág. 275, 304.  
 Art. 45 Tomo 1, pág. 300, 301.  
 Art. 46 Tomo 1, pág. 301.  
 Art. 47 Tomo 1, pág. 304.  
 Art. 54 Tomo 1, pág. 303.  
 Art. 55 Tomo 1, pág. 303.  
 Art. 66 Tomo 1, pág. 303.  
 Art. 69 Tomo 1, pág. 249.  
 Art. 150 Tomo 1, pág. 18.  
 Art. 151 Tomo 1, pág. 18.  
 Art. 170 Tomo 3, pág. 59.  
 Art. 178 inc. 4.ª, Tomo 1, pág. 29ª.  
 Art. 203 inc. 6.ª, Tomo 3, pág. 292.  
 Art. 204 Tomo 3, pág. 292.  
 Art. 205 Tomo 1, pág. 349.  
 Art. 249 Tomo 3, pág. 213.  
 Art. 252 Tomo 3, pág. 213.  
 Art. 276 inc. 14, Tomo 3, pág. 174.  
 Art. 278 Tomo 3, pág. 328.  
 Art. 282 Tomo 3, pág. 328.  
 Art. 286 Tomo 3, pág. 213.  
 Art. 293 Tomo 3, pág. 213.  
 Art. 319 Tomo 3, pág. 141.  
 Art. 322 Tomo 3, pág. 213.  
 Art. 323, Tomo 4, pág. 10.  
 Art. 324 Tomo 3, pág. 213; tomo 4, pág. 10.

Art. 325	Tomo 3, pág. 213.
Art. 326	Tomo 3, pág. 213.
Art. 333	Tomo 3, pág. 213.
Art. 358	Tomo 3, pág. 225.
Art. 411	Tomo 1, pág. 294.
Art. 435	Tomo 3, pág. 332.
Art. 436	Tomo 3, pág. 304, 329.
Art. 461	Tomo 1, pág. 224.
Art. 494	Tomo 1, pág. 249.
Art. 495	inc. 5.º Tomo 3, pág. 323.
Art. 509	Tomo 3, pág. 249.
Art. 465	inc. 1.º, Tomo 1, pág. 294.
Art. 509	Tomo 3, pág. 249.
Art. 519	Tomo 4, pág. 10.
Art. 522	Tomo 4, pág. 10.
Art. 537	Tomo 1, pág. 249.
Art. 538	Tomo 4, pág. 10.
Art. 551	Tomo 1, pág. 404; tomo 4, pág. 354, 355.
Art. 551	inc. 1.º, Tomo 3, pág. 357.
Art. 551	inc. 2.º, Tomo 3, pág. 358.
Art. 551	inc. 3.º, Tomo 3, pág. 358.
Art. 551	inc. 4.º, Tomo 3, pág. 358.
Art. 552	Tomo 3, pág. 356.
Art. 553	Tomo 3, pág. 336, 357; tomo 4, pág. 17.
Art. 554	Tomo 3, pág. 358.
Art. 555	Tomo 3, pág. 358.
Art. 556	Tomo 3, pág. 358.
Art. 565	Tomo 4, pág. 56.
Art. 585	Tomo 1, pág. 307.
Art. 646	Tomo 1, pág. 349, 357.
Art. 647	Tomo 1, pág. 361.
Art. 648	Tomo 1, pág. 350.
Art. 649	Tomo 1, pág. 361.
Art. 650	Tomo 1, pág. 361.
Art. 651	Tomo 1, pág. 361.
Art. 652	Tomo 1, pág. 359.
Art. 653	Tomo 1, pág. 359.
Art. 655	Tomo 1, pág. 359.
Art. 656	Tomo 1, pág. 359.
Art. 660	Tomo 1, pág. 360.
Art. 662	Tomo 1, pág. 360.
Art. 666	Tomo 1, pág. 360.
Art. 667	Tomo 1, pág. 360.
Art. 668	Tomo 1, pág. 360.
Art. 669	Tomo 1, pág. 359.
Art. 670	Tomo 1, pág. 360.
Art. 671	Tomo 1, pág. 362.
Art. 672	Tomo 1, pág. 362.
Art. 675	Tomo 1, pág. 363.
Art. 676	Tomo 1, pág. 363.

## Tratado sobre derecho procesal de Montevideo

(Ley núm. 3192)

Art. 1	Tomo 1, pág. 27.
Art. 4	Tomo 1, pág. 27.
Art. 5	letra a), Tomo 4, pág. 44.
Art. 9	Tomo 1, pág. 349, 350.
Art. 10	Tomo 1, pág. 349, 350.
Art. 11	Tomo 1, pág. 350.
Art. 21	Tomo 1, pág. 357.
Art. 22	1, pág. 357.

## Código civil

(Ley número 340)

Art. 1	Tomo 3, pág. 223.
Art. 3	Tomo 1, pág. 32.
Art. 7	Tomo 1, pág. 27.
Art. 8	Tomo 1, pág. 27.
Art. 10	Tomo 1, pág. 334; tomo 4, pág. 159.
Art. 12	Tomo 1, pág. 26; tomo 3, pág. 107.
Art. 13	Tomo 1, pág. 217; tomo 3, pág. 107, 115.
Art. 14	Tomo 1, pág. 217; tomo 4, pág. 45.
Art. 15	Tomo 3, pág. 107.
Art. 19	Tomo 1, pág. 27, 29.
Art. 21	Tomo 1, pág. 27, 29.
Art. 27	Tomo 1, pág. 231.
Art. 29	Tomo 1, pág. 231, 250.
Art. 30	Tomo 3, pág. 100.
Art. 31	Tomo 3, pág. 100.
Art. 34	Tomo 1, pág. 397.
Art. 41	Tomo 3, pág. 101.
Art. 42	Tomo 3, pág. 101; tomo 4, pág. 28.
Art. 51	Tomo 3, pág. 100.
Art. 52	Tomo 3, pág. 101.
Art. 54	Tomo 1, pág. 228; tomo 3, pág. 52, 101.
Art. 54	inc. 3.º, Tomo 3, pág. 167.
Art. 55	Tomo 1, pág. 228; tomo 3, pág. 52, 101.
Art. 55	inc. 2.º, Tomo 1, pág. 332.
Art. 56	Tomo 3, pág. 101.
Art. 57	Tomo 3, pág. 342.
Art. 60	Tomo 1, pág. 228; tomo 3, pág. 102.
Art. 75	Tomo 3, pág. 221.
Art. 77	Tomo 3, pág. 222.
Art. 79	Tomo 3, pág. 118.





- Art. 87 Tomo 3, pág. 118.  
 Art. 88 Tomo 3, pág. 222.  
 Art. 89 Tomo 1, pág. 339.  
 Art. 90 Tomo 3, pág. 223.  
 Art. 90 inc. 3.º, Tomo 1, pág. 343.  
 Art. 90 inc. 4.º, Tomo 1, pág. 343.  
 Art. 90 inc. 6.º, Tomo 1, pág. 331, 332.  
 Art. 93 Tomo 1, pág. 339.  
 Art. 100 Tomo 1, pág. 275, 309.  
 Art. 101 Tomo 1, pág. 308.  
 Art. 102 Tomo 1, pág. 308; tomo 3, pág. 96.  
 Art. 104 Tomo 3, pág. 118; tomo 4, pág. 156.  
 Art. 105 Tomo 3, pág. 118.  
 Art. 106 Tomo 3, pág. 118.  
 Art. 107 Tomo 3, pág. 118.  
 Art. 108 Tomo 3, pág. 118.  
 Art. 109 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 110 Tomo 1, pág. 333; tomo 4, pág. 156.  
 Art. 113 Tomo 1, pág. 333.  
 Art. 118 Tomo 4, pág. 22.  
 Art. 135 Tomo 3, pág. 102, 342, tomo 4, pág. 124.  
 Art. 136 Tomo 4, pág. 124.  
 Art. 138 Tomo 1, pág. 27.  
 Art. 139 Tomo 1, pág. 27.  
 Art. 142 Tomo 4, pág. 111.  
 Art. 145 Tomo 4, pág. 113.  
 Art. 146 Tomo 4, pág. 113.  
 Art. 148 Tomo 4, pág. 113.  
 Art. 151 Tomo 3, pág. 57, 313; tomo 4, pág. 113.  
 Art. 152 Tomo 3, pág. 313.  
 Art. 179 Tomo 3, pág. 119.  
 Art. 199 Tomo 4, pág. 199.  
 Art. 200 Tomo 3, pág. 169.  
 Art. 207 Tomo 3, pág. 137.  
 Art. 218 Tomo 3, pág. 222.  
 Art. 240 Tomo 3, pág. 222.  
 Art. 252 Tomo 3, pág. 137.  
 Art. 254 Tomo 3, pág. 137.  
 Art. 258 Tomo 3, pág. 19, 67.  
 Art. 276 Tomo 4, pág. 37.  
 Art. 281 Tomo 1, pág. 331.  
 Art. 282 Tomo 1, pág. 331.  
 Art. 284 Tomo 1, pág. 332.  
 Art. 285 Tomo 1, pág. 331.  
 Art. 292 Tomo 4, pág. 27.  
 Art. 297 Tomo 1, pág. 332; tomo 3, pág. 136.  
 Art. 298 Tomo 1, pág. 332; tomo 3, pág. 136.  
 Art. 299 Tomo 3, pág. 136.  
 Art. 325 Tomo 4, pág. 98.  
 Art. 328 Tomo 3, pág. 46.  
 Art. 341 Tomo 3, pág. 46, 137.  
 Art. 347 Tomo 4, pág. 26.  
 Art. 363 Tomo 4, pág. 104.  
 Art. 367 Tomo 4, pág. 104.  
 Art. 368 Tomo 4, pág. 104.  
 Art. 369 Tomo 4, pág. 104.  
 Art. 370 Tomo 4, pág. 106.  
 Art. 372 Tomo 4, pág. 105.  
 Art. 374 Tomo 4, pág. 105, 139.  
 Art. 375 Tomo 1, pág. 22.  
 Art. 376 Tomo 1, pág. 22; tomo 3, pág. 334; tomo 4, pág. 107.  
 Art. 399 Tomo 1, pág. 331.  
 Art. 400 Tomo 1, pág. 331.  
 Art. 401 Tomo 1, pág. 331.  
 Art. 404 Tomo 1, pág. 331.  
 Art. 411 Tomo 4, pág. 124.  
 Art. 443 Tomo 3, pág. 136; tomo 4, pág. 159.  
 Art. 461 Tomo 3, pág. 230.  
 Art. 471 Tomo 4, pág. 113.  
 Art. 472 Tomo 3, pág. 289.  
 Art. 475 Tomo 1, pág. 331.  
 Art. 493 Tomo 1, pág. 228.  
 Art. 498 Tomo 3, pág. 28.  
 Art. 499 Tomo 3, pág. 25, 276, 320.  
 Art. 505 Tomo 1, pág. 16, 21; tomo 4, pág. 35.  
 Art. 506 Tomo 3, pág. 25.  
 Art. 508 Tomo 3, pág. 25, 288.  
 Art. 509 Tomo 3, pág. 34, 35, 36, 186, 239, 288.  
 Art. 511 Tomo 3, pág. 25.  
 Art. 512 Tomo 3, pág. 25.  
 Art. 515 Tomo 3, pág. 29, 301.  
 Art. 523 Tomo 3, pág. 276.  
 Art. 526 Tomo 3, pág. 276.  
 Art. 527 Tomo 1, pág. 228.  
 Art. 572 Tomo 4, pág. 142.  
 Art. 623 Tomo 3, pág. 288.  
 Art. 633 Tomo 4, pág. 35.  
 Art. 634 Tomo 4, pág. 35.  
 Art. 676 Tomo 3, pág. 49.  
 Art. 686 Tomo 1, pág. 328; tomo 3, pág. 318.  
 Art. 689 Tomo 3, pág. 33.  
 Art. 691 Tomo 3, pág. 282.





- Art. 699 Tomo 1, pág. 328.  
 Art. 700 Tomo 3, pág. 283.  
 Art. 701 Tomo 3, pág. 283.  
 Art. 705 Tomo 1, pág. 328; tomo 3, pág. 32, 318.  
 Art. 713 Tomo 3, pág. 32.  
 Art. 715 Tomo 3, pág. 45.  
 Art. 717 Tomo 3, pág. 33.  
 Art. 736 Tomo 1, pág. 239; tomo 3, pág. 291.  
 Art. 747 Tomo 1, pág. 309, 370, 386, 387.  
 Art. 748 Tomo 1, pág. 386, 387.  
 Art. 757 inc. 5.ª Tomo 3, pág. 291.  
 Art. 759 Tomo 3, pág. 289.  
 Art. 760 Tomo 3, pág. 281.  
 Art. 767 Tomo 1, pág. 337.  
 Art. 773 Tomo 4, pág. 77.  
 Art. 799 Tomo 3, pág. 48; tomo 4, pág. 153.  
 Art. 800 Tomo 4, pág. 147, 153.  
 Art. 801 Tomo 3, pág. 296.  
 Art. 818 Tomo 3, pág. 87; tomo 4, pág. 30.  
 Art. 842 Tomo 2, pág. 67.  
 Art. 850 Tomo 3, pág. 259, 313.  
 Art. 833 Tomo 4, pág. 199.  
 Art. 839 Tomo 4, pág. 199.  
 Art. 840 Tomo 4, pág. 199.  
 Art. 841 Tomo 4, pág. 199.  
 Art. 868 Tomo 2, pág. 67; tomo 3, pág. 243.  
 Art. 869 Tomo 2, pág. 67.  
 Art. 878 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 887 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 880 Tomo 3, pág. 39, 40.  
 Art. 915 Tomo 3, pág. 187.  
 Art. 917 Tomo 3, pág. 187.  
 Art. 918 Tomo 3, pág. 187.  
 Art. 931 Tomo 3, pág. 141.  
 Art. 936 Tomo 3, pág. 141.  
 Art. 937 Tomo 3, pág. 141.  
 Art. 944 Tomo 2, pág. 127; tomo 3, pág. 184, 187; tomo 4, pág. 150.  
 Art. 950 Tomo 1, pág. 26; tomo 3, pág. 107.  
 Art. 951 Tomo 4, pág. 150.  
 Art. 955 Tomo 3, pág. 206.  
 Art. 960 Tomo 3, pág. 48.  
 Art. 969 Tomo 3, pág. 228.  
 Art. 973 Tomo 3, pág. 107.  
 Art. 975 inc. 5.ª Tomo 1, pág. 205.  
 Art. 979 Tomo 2, pág. 127; tomo 3, pág. 117, 122, 181, 183, 184, 193, 276.  
 Art. 979 inc. 2.ª Tomo 1, pág. 281; tomo 3, pág. 192.  
 Art. 979 inc. 4.ª Tomo 3, pág. 187.  
 Art. 979 inc. 5.ª Tomo 3, pág. 183, 192.  
 Art. 980 Tomo 3, pág. 122.  
 Art. 984 Tomo 3, pág. 117.  
 Art. 989 Tomo 3, pág. 189.  
 Art. 992 Tomo 1, pág. 258; tomo 3, pág. 174.  
 Art. 993 Tomo 3, pág. 122, 190, 205, 206, 268, 276.  
 Art. 994 Tomo 3, pág. 118.  
 Art. 995 Tomo 3, pág. 190, 276.  
 Art. 997 Tomo 3, pág. 189.  
 Art. 1003 Tomo 3, pág. 107.  
 Art. 1004 Tomo 3, pág. 107.  
 Art. 1012 Tomo 3, pág. 122, 183, 189, 191.  
 Art. 1013 Tomo 3, pág. 191.  
 Art. 1014 Tomo 3, pág. 191, 205.  
 Art. 1016 Tomo 2, pág. 128.  
 Art. 1017 Tomo 3, pág. 205.  
 Art. 1026 Tomo 3, pág. 42, 190, 276.  
 Art. 1028 Tomo 3, pág. 138, 276.  
 Art. 1029 Tomo 2, pág. 128; tomo 3, pág. 138.  
 Art. 1033 Tomo 3, pág. 204.  
 Art. 1034 Tomo 3, pág. 191.  
 Art. 1036 Tomo 3, pág. 191.  
 Art. 1041 Tomo 3, pág. 206.  
 Art. 1042 Tomo 3, pág. 206.  
 Art. 1043 Tomo 3, pág. 206.  
 Art. 1044 Tomo 3, pág. 206.  
 Art. 1049 Tomo 3, pág. 181.  
 Art. 1050 Tomo 3, pág. 187.  
 Art. 1068 Tomo 4, pág. 85.  
 Art. 1072 Tomo 3, pág. 333.  
 Art. 1078 Tomo 2, pág. 59.  
 Art. 1081 Tomo 3, pág. 283.  
 Art. 1083 Tomo 3, pág. 228, 229.  
 Art. 1084 Tomo 2, pág. 59; tomo 3, pág. 60.  
 Art. 1087 Tomo 2, pág. 59.  
 Art. 1088 Tomo 2, pág. 59.  
 Art. 1091 Tomo 2, pág. 59.  
 Art. 1096 Tomo 1, pág. 204; tomo 2, pág. 49; tomo 3, pág. 334.  
 Art. 1098 Tomo 2, pág. 49, 60.



- Art. 1090 Tomo 2, pág. 49, 67; to-  
mo 3, pág. 19, 67.
- Art. 1100 Tomo 2, pág. 49, 67.
- Art. 1101 Tomo 1, pág. 295; tomo  
2, pág. 49, 62; tomo 3,  
pág. 49, 61, 327, 333.
- Art. 1102 Tomo 2, pág. 49; tomo  
3, pág. 57, 59, 60, 314,  
327, 328, 329, 330, 331,  
333.
- Art. 1103 Tomo 2, pág. 49; tomo  
3, pág. 57, 59, 60, 314,  
327, 328, 329, 330, 333.
- Art. 1104 Tomo 2, pág. 54, 55, 56.
- Art. 1106 Tomo 2, pág. 49.
- Art. 1109 Tomo 1, pág. 183; tomo  
3, pág. 228, 229.
- Art. 1112 Tomo 1, pág. 183; tomo  
3, pág. 334.
- Art. 1157 Tomo 3, pág. 40.
- Art. 1179 Tomo 3, pág. 292.
- Art. 1180 Tomo 1, pág. 26; tomo  
3, pág. 107.
- Art. 1181 Tomo 1, pág. 26.
- Art. 1182 Tomo 1, pág. 26.
- Art. 1184 Tomo 3, pág. 42, 107, 120.
- Art. 1184 inc. 7.º Tomo 3, pág. 106.
- Art. 1187 Tomo 3, pág. 40.
- Art. 1190 Tomo 3, pág. 118, 119,  
120, 182, 188, 193.
- Art. 1190 inc. 2.º Tomo 3, pág. 181.
- Art. 1191 Tomo 3, pág. 121, 191,  
226.
- Art. 1192 Tomo 3, pág. 120, 121.
- Art. 1193 Tomo 3, pág. 120.
- Art. 1196 Tomo 1, pág. 239; tomo  
3, pág. 104.
- Art. 1197 Tomo 1, pág. 28; tomo 3,  
pág. 42, 86, 102; tomo  
4, pág. 24.
- Art. 1200 Tomo 3, pág. 86.
- Art. 1204 Tomo 3, pág. 38.
- Art. 1209 Tomo 3, pág. 107.
- Art. 1212 Tomo 1, pág. 309, 370.
- Art. 1213 Tomo 1, pág. 309.
- Art. 1215 Tomo 1, pág. 309, 335.
- Art. 1216 Tomo 1, pág. 309, 335.
- Art. 1248 Tomo 3, pág. 222.
- Art. 1271 Tomo 3, pág. 222.
- Art. 1276 Tomo 3, pág. 103; tomo  
4, pág. 124.
- Art. 1280 Tomo 3, pág. 103.
- Art. 1282 Tomo 1, pág. 332.
- Art. 1292 Tomo 1, pág. 332.
- Art. 1294 Tomo 4, pág. 81.
- Art. 1295 Tomo 4, pág. 81, 107.
- Art. 1297 Tomo 3, pág. 222.
- Art. 1306 Tomo 1, pág. 332.
- Art. 1320 Tomo 3, pág. 289.
- Art. 1349 Tomo 3, pág. 259.
- Art. 1353 Tomo 3, pág. 222.
- Art. 1354 Tomo 3, pág. 222.
- Art. 1357 Tomo 4, pág. 77.
- Art. 1361 Tomo 1, pág. 179.
- Art. 1375 Tomo 3, pág. 34, 36.
- Art. 1375 inc. 1.º Tomo 3, pág. 36.
- Art. 1375 inc. 2.º Tomo 3, pág. 36.
- Art. 1375 inc. 3.º Tomo 1, pág. 320;  
tomo 3, pág. 36.
- Art. 1412 Tomo 3, pág. 34.
- Art. 1420 Tomo 1, pág. 321; tomo  
3, pág. 34.
- Art. 1435 Tomo 4, pág. 77.
- Art. 1441 Tomo 4, pág. 77.
- Art. 1442 Tomo 3, pág. 66.
- Art. 1446 Tomo 3, pág. 103.
- Art. 1449 Tomo 3, pág. 28.
- Art. 1465 Tomo 3, pág. 291.
- Art. 1469 Tomo 3, pág. 46.
- Art. 1471 Tomo 3, pág. 291.
- Art. 1480 Tomo 4, pág. 92.
- Art. 1497 Tomo 4, pág. 133.
- Art. 1504 Tomo 4, pág. 95 n.
- Art. 1509 Tomo 4, pág. 95 n.
- Art. 1510 Tomo 4, pág. 95.
- Art. 1579 Tomo 1, pág. 159.
- Art. 1583 Tomo 4, pág. 95.
- Art. 1594 Tomo 4, pág. 994.
- Art. 1606 Tomo 3, pág. 104.
- Art. 1611 Tomo 3, pág. 288.
- Art. 1616 Tomo 3, pág. 222.
- Art. 1627 Tomo 3, pág. 219, 229,  
330; tomo 4, pág. 200.
- Art. 1696 Tomo 3, pág. 194.
- Art. 1702 Tomo 3, pág. 101.
- Art. 1703 Tomo 3, pág. 101.
- Art. 1704 Tomo 3, pág. 101.
- Art. 1707 Tomo 3, pág. 101.
- Art. 1711 Tomo 3, pág. 101.
- Art. 1712 Tomo 3, pág. 100.
- Art. 1714 Tomo 3, pág. 101.
- Art. 1744 Tomo 3, pág. 100.
- Art. 1754 Tomo 4, pág. 27.
- Art. 1755 Tomo 4, pág. 27.
- Art. 1810 Tomo 3, pág. 118.
- Art. 1818 Tomo 3, pág. 222.



- Art. 1847 Tomo 3, pág. 288.  
 Art. 1870 inc. 6.º Tomo 3, pág. 106.  
 Art. 1880 Tomo 4, pág. 139.  
 Art. 1881 inc. 3.º Tomo 1, pág. 29; tomo 3, pág. 97, 343; tomo 4, pág. 199.  
 Art. 1905 Tomo 3, pág. 107.  
 Art. 2012 Tomo 3, pág. 21.  
 Art. 2014 Tomo 3, pág. 291.  
 Art. 2020 Tomo 3, pág. 317.  
 Art. 2029 Tomo 3, pág. 33.  
 Art. 2031 Tomo 3, pág. 46.  
 Art. 2047 Tomo 3, pág. 32.  
 Art. 2048 Tomo 3, pág. 32.  
 Art. 2089 Tomo 3, pág. 33.  
 Art. 2174 Tomo 3, pág. 23.  
 Art. 2175 Tomo 3, pág. 37.  
 Art. 2240 Tomo 1, pág. 368.  
 Art. 2250 Tomo 1, pág. 293.  
 Art. 2311 Tomo 4, pág. 20.  
 Art. 2312 Tomo 4, pág. 20.  
 Art. 2313 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2317 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2319 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2337 Tomo 4, pág. 24.  
 Art. 2340 Tomo 4, pág. 24.  
 Art. 2342 inc. 3.º Tomo 1, pág. 215.  
 Art. 2344 Tomo 1, pág. 215.  
 Art. 2351 Tomo 4, pág. 118.  
 Art. 2362 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 2363 Tomo 4, pág. 184.  
 Art. 2433 Tomo 3, pág. 288.  
 Art. 2443 Tomo 3, pág. 288, 289.  
 Art. 2468 Tomo 3, pág. 23; tomo 4, pág. 131.  
 Art. 2469 Tomo 3, pág. 361; tomo 4, pág. 119.  
 Art. 2470 Tomo 3, pág. 6; tomo 4, pág. 118.  
 Art. 2471 Tomo 4, pág. 127.  
 Art. 2472 Tomo 4, pág. 121, 127.  
 Art. 2473 Tomo 4, pág. 123.  
 Art. 2474 Tomo 3, pág. 47.  
 Art. 2477 Tomo 4, pág. 121.  
 Art. 2479 Tomo 4, pág. 121.  
 Art. 2480 Tomo 4, pág. 121.  
 Art. 2481 Tomo 4, pág. 121.  
 Art. 2482 Tomo 1, pág. 320; tomo 3, pág. 32; tomo 4, pág. 121, 129.  
 Art. 2484 Tomo 3, pág. 21; tomo 4, pág. 128.  
 Art. 2486 Tomo 3, pág. 21; tomo 4, pág. 128, 129.  
 Art. 2487 Tomo 4, pág. 114, 120, 124.  
 Art. 2489 Tomo 4, pág. 124.  
 Art. 2490 Tomo 4, pág. 115, 122, 123, 125.  
 Art. 2493 Tomo 4, pág. 123.  
 Art. 2496 Tomo 4, pág. 120, 126.  
 Art. 2498 Tomo 4, pág. 115, 124.  
 Art. 2499 Tomo 4, pág. 115.  
 Art. 2500 Tomo 4, pág. 123.  
 Art. 2501 Tomo 1, pág. 22; tomo 4, pág. 118.  
 Art. 2502 Tomo 1, pág. 307.  
 Art. 2503 inc. 1.º Tomo 1, pág. 338.  
 Art. 2511 Tomo 1, pág. 380.  
 Art. 2512 Tomo 1, pág. 381.  
 Art. 2519 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 2523 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 2611 Tomo 1, pág. 276.  
 Art. 2620 Tomo 3, pág. 6.  
 Art. 2639 Tomo 1, pág. 346.  
 Art. 2669 Tomo 3, pág. 288.  
 Art. 2677 Tomo 3, pág. 291.  
 Art. 2679 Tomo 1, pág. 239; tomo 3, pág. 291.  
 Art. 2718 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 2743 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 2745 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 2746 Tomo 1, pág. 338; tomo 4, pág. 178.  
 Art. 2747 Tomo 1, pág. 338.  
 Art. 2750 Tomo 4, pág. 172, 173, 179.  
 Art. 2753 Tomo 4, pág. 182, 183.  
 Art. 2754 Tomo 1, pág. 338.  
 Art. 2756 Tomo 1, pág. 368.  
 Art. 2758 Tomo 1, pág. 366; tomo 3, pág. 23.  
 Art. 2759 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2767 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2769 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2782 Tomo 3, pág. 21.  
 Art. 2795 Tomo 1, pág. 366; tomo 3, pág. 23.  
 Art. 2800 Tomo 1, pág. 366; tomo 3, pág. 23.  
 Art. 2806 Tomo 1, pág. 367.  
 Art. 2807 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2811 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2848 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 2868 Tomo 4, pág. 185.



- Art. 2876 Tomo 4, pág. 114.  
 Art. 2877 Tomo 3, pág. 57, 314.  
 Art. 2908 Tomo 3, pág. 291.  
 Art. 2950 Tomo 4, pág. 114, 124.  
 Art. 2961 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2962 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2970 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 2978 Tomo 4, pág. 119, 124.  
 Art. 3003 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 3017 Tomo 4, pág. 124.  
 Art. 3034 Tomo 4, pág. 114, 124.  
 Art. 3036 Tomo 4, pág. 124.  
 Art. 3068 Tomo 4, pág. 119.  
 Art. 3073 Tomo 4, pág. 119.  
 Art. 3078 Tomo 4, pág. 119.  
 Art. 3082 Tomo 4, pág. 119.  
 Art. 3083 Tomo 4, pág. 119.  
 Art. 3108 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 3115 Tomo 3, pág. 283.  
 Art. 3123 Tomo 3, pág. 316.  
 Art. 3128 Tomo 3, pág. 118.  
 Art. 3158 Tomo 1, pág. 368.  
 Art. 3162 Tomo 3, pág. 50.  
 Art. 3163 Tomo 3, pág. 21, 50.  
 Art. 3199 Tomo 3, pág. 314.  
 Art. 3204 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 3214 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 3239 Tomo 3, pág. 27.  
 Art. 3263 Tomo 4, pág. 20, 141.  
 Art. 3265 Tomo 4, pág. 141.  
 Art. 3268 Tomo 3, pág. 28.  
 Art. 3278 Tomo 4, pág. 156.  
 Art. 3280 Tomo 4, pág. 155.  
 Art. 3283 Tomo 4, pág. 159.  
 Art. 3284 Tomo 1, pág. 329, 339; tomo 3, pág. 23; tomo 4, pág. 159.  
 Art. 3325 Tomo 3, pág. 50.  
 Art. 3332 Tomo 3, pág. 57, 316.  
 Art. 3342 Tomo 4, pág. 20, 138.  
 Art. 3343 Tomo 4, pág. 138, 139.  
 Art. 3357 Tomo 3, pág. 21, 49; tomo 4, pág. 21.  
 Art. 3358 Tomo 3, pág. 49.  
 Art. 3363 Tomo 3, pág. 268; tomo 4, pág. 157.  
 Art. 3366 Tomo 3, pág. 49.  
 Art. 3367 Tomo 3, pág. 50.  
 Art. 3371 Tomo 4, pág. 22.  
 Art. 3377 Tomo 4, pág. 139.  
 Art. 3383 Tomo 4, pág. 109.  
 Art. 3394 Tomo 3, pág. 281.  
 Art. 3411 Tomo 4, pág. 132.  
 Art. 4313 Tomo 4, pág. 132.  
 Art. 4318 Tomo 4, pág. 114.  
 Art. 3421 Tomo 3, pág. 23.  
 Art. 3430 Tomo 3, pág. 316.  
 Art. 3451 Tomo 3, pág. 160.  
 Art. 3462 Tomo 4, pág. 155.  
 Art. 3466 Tomo 4, pág. 165.  
 Art. 3468 Tomo 4, pág. 168.  
 Art. 3469 Tomo 4, pág. 169.  
 Art. 3471 Tomo 4, pág. 169.  
 Art. 3472 Tomo 4, pág. 170.  
 Art. 3473 Tomo 4, pág. 170.  
 Art. 3474 Tomo 4, pág. 169.  
 Art. 3489 Tomo 3, pág. 291.  
 Art. 3490 Tomo 4, pág. 139.  
 Art. 3492 Tomo 4, pág. 139.  
 Art. 3495 Tomo 4, pág. 139.  
 Art. 3502 Tomo 4, pág. 168.  
 Art. 3514 Tomo 4, pág. 155.  
 Art. 3540 Tomo 4, pág. 164.  
 Art. 3542 Tomo 4, pág. 164.  
 Art. 3544 Tomo 4, pág. 164, 167.  
 Art. 3591 Tomo 4, pág. 20.  
 Art. 3598 Tomo 4, pág. 159.  
 Art. 3616 Tomo 3, pág. 118, 221.  
 Art. 3627 Tomo 3, pág. 117, 118, 181.  
 Art. 3635 Tomo 1, pág. 26.  
 Art. 3636 Tomo 1, pág. 26.  
 Art. 3639 Tomo 1, pág. 345.  
 Art. 3741 Tomo 3, pág. 222.  
 Art. 3767 Tomo 4, pág. 157.  
 Art. 3788 Tomo 3, pág. 222.  
 Art. 3824 inc. 3.ª Tomo 1, pág. 339.  
 Art. 3883 Tomo 4, pág. 28.  
 Art. 3900 Tomo 3, pág. 220.  
 Art. 3936 Tomo 4, pág. 141.  
 Art. 3937 Tomo 3, pág. 220; tomo 4, pág. 144.  
 Art. 3938 Tomo 4, pág. 139.  
 Art. 3949 Tomo 4, pág. 66.  
 Art. 3952 Tomo 4, pág. 66.  
 Art. 3962 Tomo 1, pág. 22, 133.  
 Art. 3965 Tomo 3, pág. 246.  
 Art. 3986 Tomo 3, pág. 19, 68, 239, 250, 295, 297, 298, 299.  
 Art. 3987 Tomo 1, pág. 260; tomo 3, pág. 298, 299.  
 Art. 3988 Tomo 3, pág. 295.  
 Art. 3994 Tomo 3, pág. 57, 314.  
 Art. 3996 Tomo 3, pág. 57, 314.  
 Art. 4000 Tomo 3, pág. 221.



Art. 4008 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 4009 Tomo 3, pág. 221.  
 Art. 4018 Tomo 3, pág. 137, 296.  
 Art. 4019 Tomo 3, pág. 28.  
 Art. 4021 Tomo 3, pág. 63.  
 Art. 4023 Tomo 1, pág. 367; tomo 3, pág. 295.  
 Art. 4030 Tomo 3, pág. 261.  
 Art. 4033 Tomo 1, pág. 261.  
 Art. 4037 Tomo 1, pág. 261; tomo 2, pág. 44.  
 Art. 4038 Tomo 1, pág. 261.

**Ley de matrimonio civil.**  
 (Ley número 2393.)

Art. 17 Tomo 1, pág. 329.  
 Art. 21 Tomo 1, pág. 222.  
 Art. 21 inc. 4.ª Tomo 1, pág. 228.  
 Art. 24 Tomo 3, pág. 240.  
 Art. 25 Tomo 1, pág. 216.  
 Art. 26 Tomo 1, pág. 216.  
 Art. 31 Tomo 1, pág. 329.  
 Art. 32 Tomo 1, pág. 222, 329.  
 Art. 41 Tomo 1, pág. 329.  
 Art. 53 Tomo 4, pág. 38.  
 Art. 54 Tomo 1, pág. 332.  
 Art. 68 Tomo 1, pág. 320; tomo 4, pág. 107.  
 Art. 70 Tomo 3, pág. 169, 170, 212.  
 Art. 76 Tomo 3, pág. 303.  
 Art. 85 inc. 4.ª 212.  
 Art. 88 Tomo 3, pág. 289.  
 Art. 102 Tomo 2, pág. 55.  
 Art. 104 Tomo 1, pág. 230.

**Código de comercio.**  
 (Ley número 2637.)

Art. 6 Tomo 1, pág. 291.  
 Art. 7 Tomo 1, pág. 291.  
 Art. 8 Tomo 1, pág. 291.  
 Art. 10 Tomo 1, pág. 332.  
 Art. 12 Tomo 1, pág. 332.  
 Art. 22 inc. 3.ª Tomo 1, pág. 179.  
 Art. 43 inc. 3.ª Tomo 3, pág. 192, 193, 196.  
 Art. 44 Tomo 3, pág. 192, 193, 197.  
 Art. 45 Tomo 3, pág. 192, 193, 197.  
 Art. 46 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 47 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 48 Tomo 3, pág. 192, 193.

Art. 49 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 50 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 51 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 52 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 53 Tomo 3, pág. 192, 193, 197.  
 Art. 54 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 55 Tomo 3, pág. 192, 193, 197.  
 Art. 56 Tomo 3, pág. 192, 193, 201.  
 Art. 57 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 58 Tomo 3, pág. 192, 193, 197.  
 Art. 59 Tomo 3, pág. 192, 193, 197, 199, 200.  
 Art. 60 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 61 Tomo 3, pág. 192, 193, 197.  
 Art. 62 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 63 Tomo 3, pág. 139, 192, 193, 194, 197, 200.  
 Art. 64 Tomo 3, pág. 192, 193.  
 Art. 65 Tomo 3, pág. 192, 193, 197.  
 Art. 66 Tomo 3, pág. 192.  
 Art. 67 Tomo 3, pág. 192, 202.  
 Art. 71 Tomo 3, pág. 281.  
 Art. 87 Tomo 3, pág. 193.  
 Art. 91 Tomo 3, pág. 193.  
 Art. 93 Tomo 3, pág. 200.  
 Art. 118 Tomo 3, pág. 193.  
 Art. 123 Tomo 3, pág. 193.  
 Art. 124 Tomo 3, pág. 316.  
 Art. 128 Tomo 4, pág. 200.  
 Art. 138 Tomo 3, pág. 200.  
 Art. 156 Tomo 4, pág. 200.  
 Art. 158 Tomo 4, pág. 200.  
 Art. 179 Tomo 3, pág. 230.  
 Art. 180 Tomo 3, pág. 230.  
 Art. 187 Tomo 1, pág. 384.  
 Art. 188 Tomo 1, pág. 384.  
 Art. 205 Tomo 1, pág. 348.  
 Art. 208 inc. 1.ª Tomo 3, pág. 122.  
 Art. 208 inc. 2.ª Tomo 3, pág. 122.  
 Art. 208 inc. 3.ª Tomo 3, pág. 122.  
 Art. 208 inc. 4.ª Tomo 3, pág. 122.  
 Art. 208 inc. 5.ª Tomo 3, pág. 122.  
 Art. 208 inc. 6.ª Tomo 3, pág. 122.  
 Art. 208 inc. 7.ª Tomo 3, pág. 122.  
 Art. 208 in fine Tomo 3, pág. 122.  
 Art. 216 Tomo 3, pág. 38, 39.  
 Art. 256 Tomo 4, pág. 201.



Art. 288 inc. 2.º. Tomo 3, pág. 200.  
 Art. 315 Tomo 4, pág. 27.  
 Art. 316 Tomo 4, pág. 27.  
 Art. 362 Tomo 4, pág. 27.  
 Art. 443 Tomo 3, pág. 101.  
 Art. 448 Tomo 1, pág. 343; tomo 4, pág. 196, 200.  
 Art. 450 Tomo 4, pág. 201.  
 Art. 464 Tomo 3, pág. 39.  
 Art. 467 Tomo 3, pág. 39.  
 Art. 471 Tomo 4, pág. 201.  
 Art. 476 Tomo 4, pág. 201.  
 Art. 480 Tomo 3, pág. 21.  
 Art. 488 Tomo 3, pág. 32.  
 Art. 498 Tomo 4, pág. 201.  
 Art. 491 Tomo 4, pág. 201.  
 Art. 522 Tomo 4, pág. 204.  
 Art. 585 Tomo 4, pág. 51. n.  
 Art. 606 Tomo 4, pág. 63. n.  
 Art. 669 Tomo 1, pág. 228; tomo 3, pág. 32.  
 Art. 673 Tomo 1, pág. 22; tomo 4, pág. 50.  
 Art. 674 Tomo 1, pág. 22.  
 Art. 675 Tomo 1, pág. 22.  
 Art. 676 Tomo 1, pág. 22.  
 Art. 735 Tomo 3, pág. 33.  
 Art. 736 Tomo 3, pág. 33.  
 Art. 848 inc. 1.º. Tomo 3, pág. 33.  
 Art. 848 inc. 2.º. Tomo 3, pág. 33.  
 Art. 906 inc. 2.º. Tomo 4, pág. 37.  
 Art. 922 Tomo 4, pág. 37.  
 Art. 947 Tomo 4, pág. 201.  
 Art. 961 Tomo 3, pág. 317.  
 Art. 964 Tomo 3, pág. 317.  
 Art. 982 Tomo 4, pág. 201.  
 Art. 990 Tomo 4, pág. 37.  
 Art. 1012 Tomo 3, pág. 196.  
 Art. 1194 Tomo 4, pág. 201.  
 Art. 1264 Tomo 4, pág. 201.  
 Art. 1269 Tomo 4, pág. 202.  
 Art. 1307 Tomo 4, pág. 202.  
 Art. 1309 Tomo 4, pág. 202.  
 Art. 1336 Tomo 4, pág. 202.  
 Art. 1401 Tomo 1, pág. 222.  
 Art. 1402 Tomo 1, pág. 222.  
 Art. 1406 Tomo 1, pág. 222.  
 Art. 1535 Tomo 1, pág. 222.  
 Art. 1579 Tomo 1, pág. 222.

**Ley de quiebras.**  
**(Ley número 41156).**

Art. 6 Tomo 1, pág. 341.

Art. 20 Tomo 4, pág. 31.  
 Art. 32 Tomo 3, pág. 317.  
 Art. 44 Tomo 4, pág. 37.  
 Art. 58 Tomo 1, pág. 341.  
 Art. 59 Tomo 4, pág. 37.  
 Art. 71 Tomo 3, pág. 52.  
 Art. 82 Tomo 4, pág. 141.

**Ordenanzas de aduana.**  
**(Ley número 810).**

Art. 1032 Tomo 2, pág. 211.  
 Art. 1054 Tomo 2, pág. 211.  
 Art. 1058 Tomo 3, pág. 181.  
 Art. 1063 Tomo 2, pág. 211.

**Ley de contabilidad.**  
**(Ley número 428).**

Art. 9 Tomo 3, pág. 192.  
 Art. 40 Tomo 3, pág. 192.  
 Art. 41 Tomo 3, pág. 192.  
 Art. 42 Tomo 3, pág. 192.

**Código penal (a)**  
**Tomo I**

Art. 55 Pág. 55, (derogado por el código vigente).  
 Art. 245 Pág. 241, (art. 269 del código vigente).  
 Art. 247 Pág. 241, (art. 271 del código vigente).  
 Art. 26 Ley 4189, pág. ... (art. 269 del código vigente).  
 Art. 265 Pág. 240, (art. 156 del código vigente).  
 Art. 21 inc. c) de la ley 4189, pág. 240, (art. 115 del código vigente).

(a) En las ediciones anteriores de este Manual se citó el código penal, que entonces regía; derogado éste así como la ley de reformas núm. 4189, hemos concordado aquellas disposiciones con el nuevo código, sancionado en 1922 por la ley núm. 11179. De esa manera el lector podrá encontrar el equivalente entre la disposición citada en el texto del Manual y el nuevo código. Hacemos presente, asimismo, que en el tomo 3, tercera edición, se ha citado ya el código penal actualmente en vigor.

Art. 275 inc. 3.º y 4.º, pág. 240, (art. 156 del código vigente).

### Tomo II

Art. 6 Pág. 88 (derogado por el código vigente).  
 Art. 6 Pág. 103, (derogado por el código vigente).  
 Art. 6 Pág. 104, (derogado por el código vigente).  
 Art. 49 Pág. 171, (art. 24 del código vigente).  
 Art. 55 Pág. 100, (derogado por el código vigente).  
 Art. 59 inc. 1.º, pág. 41, (art. 34, inc. 1.º, 40 y 41 del código vigente).  
 Art. 81 Pág. 132, (derogado por el código vigente).  
 Art. 81 inc. 2.º, pág. 41, (art. 36 del código vigente).  
 Art. 81 inc. 3.º, pág. 41, (derogado por el código vigente).  
 Art. 81 Pág. 147, (art. 34, del código vigente).  
 Art. 83 Pág. 41, (art. 40 y 41 del código vigente).  
 Art. 84 Pág. 56, (art. 40 y 41 del código vigente).  
 Art. 86 Pág. 150, (art. 54, 55, 56, 57 y 58 del código vigente).  
 Art. 86 Pág. 151, (art. 58 del código vigente).  
 Art. 89 Pág. 69, (art. 62 del código vigente).  
 Art. 93 Pág. 70, (derogado por el código vigente).  
 Art. 124 Pág. 48 en n. (derogado por el código vigente).  
 Art. 140 Pág. 54, 65, (art. 132 del código vigente).  
 Art. 141 Pág. 48 en n. (derogado por el código vigente).  
 Art. 141 Pág. 48, (art. 72 del código vigente).  
 Art. 141 Pág. 58, (art. 71, a. del código vigente).  
 Art. 177 Pág. 99, (art. 109 del código vigente).  
 Art. 186 Pág. 65, (art. 59, inc. 4.º del código vigente).

Art. 196 Pág. 91, (art. 181 del código vigente).  
 Art. 196 Pág. 92, (art. 181 del código vigente).  
 Art. 197 Pág. 91, (art. 181 del código vigente).  
 Art. 213 Pág. 92, (art. 186, inc. 3.º y 4.º del código vigente).  
 Art. 219 Pág. 92, (art. 183 del código vigente).  
 Art. 234 Pág. 92, (art. 237 del código vigente).  
 Art. 235 Pág. 92, (art. 347 del código vigente).  
 Art. 237 Pág. 92, (art. 239 del código vigente).  
 Art. 243 Pág. 35, (art. 248 del código vigente).  
 Art. 247 Pág. 110, (art. 156 del código vigente).  
 Art. 255 Pág. 155, (art. 281 del código vigente).  
 Art. 256 Pág. 156, (derogado por el código vigente).  
 Art. 262 Pág. 110, 115, (art. 156 del código vigente).  
 Art. 265 Pág. 110, 115, (art. 156 del código vigente).

### Tomo III

Art. 2 Pág. 357.  
 Art. 12 Pág. 52.  
 Art. 34 Pág. 352.  
 Art. 34 inc. 6.º, pág. 6.  
 Art. 34 inc. 7.º, pág. 6.  
 Art. 84 94, etc., pág. 328.  
 Art. 85 Pág. 357.  
 Art. 86 Pág. 357.  
 Art. 87 Pág. 357.  
 Art. 99 Pág. 328.  
 Art. 173 inc. 6.º, pág. 66.  
 Art. 192 Pág. 188.  
 Art. 245 Pág. 22.  
 Art. 275 Pág. 165.  
 Art. 281 Pág. 188.

### Tomo IV

Art. 21 Pág. 37.  
 Art. 62 inc. 2.º, pág. 134.  
 Art. 181 Pág. 133, 134.  
 Art. 182 Pág. 133, 134.  
 Art. 183 Pág. 133, 134.  
 Art. 184 Pág. 134.  
 Art. 186 Pág. 134.  
 Art. 269 Pág. 197.



**Ley número 4189 (a)**

- Art. 4 inc. d), equivalente al art. 49 del cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 155
- Art. 15 (equivalente al art. 41, inc. 2.º del cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 92.
- Art. 16 (equivalente al art. 63 del cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 70.
- Art. 17 cap. I, núm. 4. letra b), (equivalente al art. 81, inc. 2.º del cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 90.
- Art. 17 cap. II, inc. 4.º, (equivalente a los arts. 80 inc. 1.º; 93, cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 56.
- Art. 18 (equivalente al art. 74 del cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 54; tomo 3, pág. 21.
- Art. 20 letra a) (sin equivalente en el cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 92.
- Art. 21 inc. d), (equivalente al art. 49 del cód. penal vigente), tomo 2, pág. 156.
- Art. 21 inc. e) (equivalente al art. 115 del cód. pen. vigente), tomo 1, pág. 240; tomo 2, pág. 157.
- Art. 22 (sin equivalente en el cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 92.
- Art. 22 letra b), equivalente al art. 162 y siguientes del cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 92.
- Art. 22 letra c), (equivalente al art. 167 del cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 92.
- Art. 23 (equivalente al art. 173 y siguientes del cód. pen. vigente), tomo 3, pág. 292.
- Art. 24 (sin equivalente en el cód.

(a) La ley 4189, citada en los tomos 1 a 3 de este Manual fué derogada por el actual código penal. Para facilitar la consulta indicamos las disposiciones en vigor de la ley derogada.  
El actual cód. pen., no ha innovado sobre la ley cit., Tomo 3, pág. 22.

- pen. vigente), Tomo 2, pág. 92; tomo 3, pág. 292. (equivalente al art. 186 del cód. pen. vigente), tomo 2, pág. 92.
- Art. 26 (equivalente al art. 269 del cód. pen. vigente), tomo 1, pág. 182, 241.
- Art. 26 inc. 4.º. (equivalente al art. 248 del cód. pen. vigente), tomo 1, pág. 182.
- Art. 28 (equivalente al art. 292 del cód. pen. vigente), tomo 3, pág. 181, 188.

**Código de justicia militar.  
(Leyes número 3190 y 3679)**

- Art. 204 Tomo 1, pág. 349.
- Art. 205 Tomo 1, pág. 349.
- Art. 206 Tomo 1, pág. 349.
- Art. 259 Tomo 1, pág. 349.
- Art. 260 Tomo 1, pág. 349.

**Constitución de la provincia  
de Buenos Aires.**

- Art. 13 Tomo 2, pág. 196.
- Art. 14 Tomo 2, pág. 95, 196.
- Art. 17 Tomo 2, pág. 197.
- Art. 19 Tomo 2, pág. 171, 173.
- Art. 26 Tomo 2, pág. 34.
- Art. 27 Tomo 3, pág. 355.
- Art. 48 Tomo 1, pág. 183, 186, 207.
- Art. 69 Tomo 1, pág. 136.
- Art. 153 inc. 3.º. Tomo 1, pág. 141.
- Art. 157 Tomo 1, pág. 40, 128.
- Art. 157 inc. 1.º. Tomo 1, pág. 127, 139, 207.
- Art. 157 inc. 6.º. Tomo 1, pág. 126, 131, 135, 153.
- Art. 172 Tomo 1, pág. 113, 130, 143, 144, 145; tomo 3, pág. 271.
- Art. 173 Tomo 1, pág. 130, 134, 143, 144, 145; tomo 3, pág. 271, 275.
- Art. 175 Tomo 1, pág. 248.
- Art. 178 Tomo 1, pág. 130, 143.
- Art. 210 Tomo 1, pág. 139, 140.

**Constitución de la provincia  
de Córdoba.**

- Art. 12 Tomo 2, pág. 95.
- Art. 19 Tomo 2, pág. 95.





**Constitución de la provincia  
de Santiago del Estero.**

- Art. 30 Tomo 2, pág. 95.  
**Código de procedimiento de la  
provincia de Buenos Aires.**  
Art. 3 Tomo 1, pág. 315.  
Art. 9 Tomo 1, pág. 312.  
Art. 21 Tomo 1, pág. 132.  
Art. 54 Tomo 1, pág. 231.  
Art. 71 Tomo 3, pág. 276, 282.  
Art. 80 Tomo 1, pág. 29.  
Art. 116 Tomo 3, pág. 275, 276.  
Art. 250 inc. 3.º Tomo 1, pág. 133.  
Art. 251 Tomo 1, pág. 260, 261.  
Art. 252 Tomo 1, pág. 260.  
Art. 253 Tomo 1, pág. 260.  
Art. 254 Tomo 1, pág. 260.  
Art. 255 Tomo 1, pág. 260.  
Art. 256 Tomo 1, pág. 260.  
Art. 257 Tomo 1, pág. 260.  
Art. 258 Tomo 1, pág. 260, 262.  
Art. 267 Tomo 3, pág. 337.  
Art. 268 Tomo 3, pág. 337.  
Art. 300 Tomo 3, pág. 275.  
Art. 311 Tomo 3, pág. 276.  
Art. 321 Tomo 1, pág. 135.  
Art. 371 Tomo 1, pág. 128, 131.  
Art. 372 Tomo 1, pág. 129.  
Art. 374 Tomo 1, pág. 141.  
Art. 382 inc. 3.º Tomo 1, pág. 128.  
Art. 494 Tomo 4, pág. 26.  
Art. 539 Tomo 3, pág. 293.  
Art. 575 Tomo 3, pág. 78.  
Art. 604 Tomo 1, pág. 335.  
Art. 612 Tomo 1, pág. 15.  
Art. 742 Tomo 3, pág. 293.  
Art. 756 Tomo 3, pág. 293.  
Art. 775 Tomo 4, pág. 185.  
Art. 784 Tomo 4, pág. 109.  
Art. 785 Tomo 4, pág. 109.  
Art. 786 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 787 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 788 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 789 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 790 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 791 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 792 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 793 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 794 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 795 Tomo 4, pág. 110.  
Art. 796 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 797 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 798 Tomo 4, pág. 111.

- Art. 799 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 800 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 801 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 802 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 803 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 804 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 805 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 806 Tomo 4, pág. 111.  
Art. 928 Tomo 3, pág. 276.

**Código de procedimiento penal de la  
provincia de Buenos Aires.**

- Art. 3 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 12 Tomo 1, pág. 35; tomo 3,  
pág. 357.  
Art. 14 Tomo 1, pág. 35.  
Art. 18 Tomo 1, pág. 34, 35, 302.  
Art. 19 Tomo 1, pág. 34, 35, 302.  
Art. 20 Tomo 1, pág. 34, 35, 307.  
Art. 37 Tomo 1, pág. 34, 35.  
Art. 60 Tomo 1, pág. 34, 35.  
Art. 67 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 75 Tomo 2, pág. 116.  
Art. 76 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 77 Tomo 1, pág. 34; tomo 2,  
pág. 48.  
Art. 78 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 79 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 80 inc. 2.º Tomo 1, pág. 34.  
Art. 81 inc. 2.º Tomo 1, pág. 34.  
Art. 81 Tomo 1, pág. 34, 35.  
Art. 87 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 88 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 89 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 90 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 91 inc. 6.º Tomo 1, pág. 34.  
Art. 149 Tomo 1, pág. 45.  
Art. 154 Tomo 2, pág. 120.  
Art. 157 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 158 Tomo 1, pág. 35.  
Art. 164 Tomo 2, pág. 120.  
Art. 171 Tomo 2, pág. 173.  
Art. 172 Tomo 1, pág. 34, 35; tomo  
2, pág. 196.  
Art. 173 Tomo 1, pág. 34; tomo 2,  
pág. 196.  
Art. 176 Tomo 1, pág. 34.  
Art. 177 Tomo 1, pág. 34; tomo 2,  
pág. 197.  
Art. 179 Tomo 2, pág. 198.  
Art. 179 inc. 1.º Tomo 2, pág. 198.  
Art. 179 inc. 3.º Tomo 2, pág. 198.  
Art. 180 Tomo 1, pág. 35.





Art. 181 Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 186 Tomo 2, pág. 197.  
 Art. 190 in fine, Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 204 Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 205 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 211 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 216 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 218 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 219 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 227 Tomo 1, pág. 34, 35, 124.  
 Art. 236 Tomo 2, pág. 101.  
 Art. 267 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 271 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 278 Tomo 2, pág. 24.  
 Art. 282 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 295 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 299 Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 300 Tomo 2, pág. 51.  
 Art. 310 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 311 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 311 inc. 6.ª Tomo 2, pág. 151.  
 Art. 311 inc. 8.ª Tomo 3, pág. 357, 358.  
 Art. 314 Tomo 2, pág. 151.  
 Art. 317 Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 318 Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 340 Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 341 Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 342 Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 343 inc. 3.ª Tomo 2, pág. 25.  
 Art. 380 Tomo 1, pág. 34; tomo 2, pág. 145.  
 Art. 381 Tomo 2, pág. 146.  
 Art. 385 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 387 Tomo 2, pág. 69.  
 Art. 391 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 394 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 398 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 399 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 406 Tomo 2, pág. 46.  
 Art. 414 Tomo 2, pág. 62.  
 Art. 415 Tomo 1, pág. 34, 35; tomo 2, pág. 195, 196.  
 Art. 417 Tomo 2, pág. 196.  
 Art. 424 Tomo 2, pág. 197.  
 Art. 426 Tomo 1, pág. 34, 35.  
 Art. 427 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 432 inc. 2.ª Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 434 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 437 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 438 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 439 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 440 Tomo 1, pág. 34.

Art. 443 Tomo 2, pág. 196.  
 Art. 447 Tomo 1, pág. 35.  
 Art. 454 Tomo 1, pág. 34.  
 Art. 457 Tomo 1, pág. 34.

**Código de procedimiento de lo contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires**

Art. 1 Tomo 1, pág. 142, 290.  
 Art. 3 Tomo 1, pág. 290.  
 Art. 4 Tomo 1, pág. 290.

**Código rural de la provincia de Buenos Aires**

Art. 17 Tomo 3, pág. 182, 183.  
 Art. 184 Tomo 1, pág. 335.

**Código de procedimiento penal de la provincia de San Luis**

Art. 3 Tomo 2, pág. 32.  
 Art. 319 Tomo 2, pág. 51.  
 Art. 449 Tomo 2, pág. 62.

**Código de procedimiento penal de la provincia de Santa Fe**

Art. 286 Tomo 2, pág. 101.  
 Art. 532 Tomo 2, pág. 173.

**Código de procedimiento penal de la provincia de Entre Ríos**

Art. 569 Tomo 2, pág. 101.  
 Art. 718 Tomo 2, pág. 173.

**Código de procedimiento penal de la provincia de Corrientes**

Art. 377 Tomo 2, pág. 173.

**Código de procedimiento penal de la provincia de Córdoba**

Art. 270 Tomo 2, pág. 101.  
 Art. 322 Tomo 2, pág. 173.

**Código de procedimiento penal de la provincia de Santiago del Estero**

Art. 247 Tomo 2, pág. 101.  
 Art. 317 Tomo 2, pág. 173.  
 Art. 357 Tomo 2, pág. 147.

**Código de procedimiento penal de la  
provincia de Salta**

Art. 276 Tomo 2, pág. 101.  
Art. 334 Tomo 2, pág. 173.

**Código de procedimiento penal de la  
provincia de Jujuy**

Art. 267 Tomo 2, pág. 173.

**Código de procedimiento penal de  
la provincia de Catamarca**

Art. 451 Tomo 2, pág. 173.

**Código de procedimiento penal de  
la provincia de La Rioja**

Art. 278 Tomo 2, pág. 101.  
Art. 504 Tomo 2, pág. 173.

**Código de procedimiento penal de  
la provincia de Mendoza**

Art. 68 Tomo 2, pág. 38.  
Art. 298 Tomo 2, pág. 173.



# ÍNDICE NUMÉRICO DE LAS LEYES

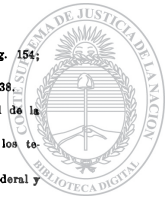
---



- Ley núm. 27** sobre organización de los tribunales federales, tomo 4, pág. 402.
- Ley núm. 43** sobre organización del personal de los tribunales de sección, tomo 1, pág. 36.
- Ley núm. 44** sobre autenticación de los actos públicos y procedimientos judiciales de cada provincia, tomo 4, pág. 335.
- Ley núm. 48** sobre jurisdicción y competencia de los tribunales federales, tomo 4, pág. 402.
- Ley núm. 50** sobre procedimiento federal tomo 4, pág. 403.
- Ley núm. 94** sobre imposición de la pena de azotes, tomo 1, pág. 383.
- Ley núm. 163** sobre participación de los cónsules extranjeros en las sucesiones intestadas de sus connacionales, tomo 4, pág. 156, 336.
- Ley núm. 189** sobre expropiación de bienes, tomo 1, pág. 381.
- Ley núm. 340** sobre código civil, tomo 4, pág. 414.
- Ley núm. 428** sobre contabilidad, tomo 1, pág. 283; tomo 4, pág. 421.
- Ley núm. 514** sobre supresión de prisión por deudas, tomo 1, pág. 30; tomo 4, pág. 23 (1)
- Ley núm. 714** sobre amnistía general, tomo 2, pág. 63.
- Ley núm. 810** sobre ordenanzas de adunana, tomo 4, pág. 421.
- Ley núm. 843** sobre amnistía general a los condenados al servicio de las armas por sedición o rebelión, tomo 2, pág. 63.
- Ley núm. 927** sobre jurisdicción y competencia de los tribunales federales, tomo 1, pág. 313, 339.
- Ley núm. 1029** sobre declaración de la capital federal de la república, tomo 1, pág. 236.

---

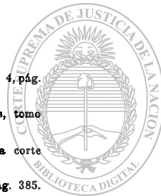
(1) En el t. 4, p. 23 por un error se cita la ley núm. 363 en lugar de la núm. 514.



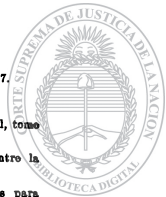
- Ley núm. 1260 sobre Municipalidad de la capital, tomo 2, pág. 154; tomo 3, pág. 193.
- Ley núm. 1420 sobre educación común, tomo 4, pág. 162, 167, 338.
- Ley núm. 1467 sobre fuero federal de los vecinos de la capital de la república, tomo 1, pág. 336, 338.
- Ley núm. 1532 sobre límites, administración y gobernación de los territorios nacionales, tomo 1, pág. 93, 171.
- Ley núm. 1565 sobre registro civil de las personas en la capital federal y territorios nacionales, tomo 4, pág. 17, 338.
- Ley núm. 1583 sobre expropiación de propiedades en el municipio para el ensanche y delimitación de las calles, tomo 1, pág. 384.
- Ley núm. 1597 sobre estatutos de las universidades nacionales, tomo 1, pág. 236. (1)
- Ley núm. 1612 sobre bases para la extradición, tomo 1, pág. 354.
- Ley núm. 1628 sobre donación de tierras a los expedicionarios al Río Negro, tomo 1, pág. 284.
- Ley núm. 1804 sobre Banco hipotecario nacional, tomo 1, pág. 386.
- Ley núm. 1893 sobre organización de los tribunales de la capital, tomo 4, pág. 339, 403.
- Ley núm. 2372 sobre cód. de proc. penal de la capital, tomo 4, pág. 413.
- Ley núm. 2393 sobre matrimonio civil, tomo 4, pág. 419.
- Ley núm. 2637 sobre código de comercio, tomo 4, pág. 339, 420.
- Ley núm. 2713 sobre amnistía general por todos los delitos políticos y militares, tomo 2, pág. 63.
- Ley núm. 2786 sobre penas por malos tratamientos a los animales, tomo 1, pág. 280.
- Ley núm. 2841 sobre creación del Banco de la nación argentina, tomo 4, pág. 340.
- Ley núm. 2860 sobre justicia de paz de la capital de la república, tomo 1, pág. 158, 315.
- Ley núm. 2873 sobre ferrocarriles para la república, tomo 1, pág. 289.
- Ley núm. 3071 sobre creación de dos fiscalías en las cámaras de apelaciones de la capital de la república, tomo 4, pág. 274.
- Ley núm. 3035 sobre tratado de extradición con Italia, tomo 1, pág. 356.

---

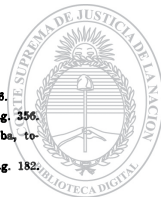
(1) Por error, en lugar citado, figura esta ley con el núm. 1579, en vez de núm. 1597.



- Ley núm. 3190 sobre código de justicia militar, tomo 4, pág. 423.
- Ley núm. 3192 sobre Tratados de derechos de Montevideo, tomo 4, pág. 42, 341 y s.; 414.
- Ley núm. 3223 sobre amnistía general para los delitos políticos, tomo 2, pág. 63.
- Ley núm. 3266 sobre recusación de los miembros de la suprema corte federal, tomo 3, pág. 278.
- Ley núm. 3313 sobre lotería de beneficencia nacional, tomo 1, pág. 385.
- Ley núm. 3367 sobre representación del fisco en los asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, tomo 4, pág. 345.
- Ley núm. 3365 sobre nombramientos de químicos o médicos por los jueces, tomo 1, pág. 284.
- Ley núm. 3375 sobre procedimientos de los tribunales nacionales, tomo 1, pág. 270; tomo 4, pág. 10.
- Ley núm. 3495 sobre tratado de extradición con los Países Bajos, tomo 1, pág. 365.
- Ley núm. 3575 sobre justicia letrada de los territorios nacionales, tomo 1, pág. 170.
- Ley núm. 3670 sobre justicia de paz de la capital, tomo 1, pág. 170.
- Ley núm. 3761 sobre alcoholes, tomo 3, pág. 192.
- Ley núm. 3764 sobre recaudación de impuestos internos, tomo 1, pág. 285.
- Ley núm. 3871 sobre emisión de moneda, tomo 1, pág. 314.
- Ley núm. 3906 sobre incorporación al territorio de la república del de Los Andes, tomo 1, pág. 92.
- Ley núm. 3942 sobre seguros de vida, tomo 4, pág. 25, 345.
- Ley núm. 3952 sobre demandas contra la la nación, tomo 1, pág. 264; tomo 4, pág. 346.
- Ley núm. 3981 sobre modificaciones a la ley de procedimiento ante los tribunales nacionales, tomo 1, pág. 194.
- Ley núm. 3983 sobre ejecución de cartas rogatorias y sentencias con Italia, tomo 4, pág. 40.
- Ley núm. 4055 sobre organización de la justicia nacional, tomo 4, pág. 402.
- Ley núm. 4074 sobre creación de dos juzgados federales, tomo 1, pág. 89.
- Ley núm. 4097 sobre prohibición de los juegos de azar, tomo 2, pág. 175.
- Ley núm. 4124 sobre redención de capellanías, tomo 4, pág. 346.
- Ley núm. 4128 sobre reformas al cód. de procedimiento en lo civil y comercial, tomo 4, pág. 347, 411.
- Ley núm. 4156 sobre bancarrotas, tomo 4, pág. 421.



- Ley núm. 4161 sobre elecciones, tomo 1, pág. 315.
- Ley núm. 4162 sobre integración de los tribunales, tomo 3, pág. 277.
- Ley núm. 4189 sobre reformas al cód. penal, tomo 4, pág. 422.
- Ley núm. 4226 sobre jubilación de los miembros del poder judicial, tomo 1, pág. 193.
- Ley núm. 4329 sobre legalización de firmas en los exhortos, entre la Argentina y el Uruguay, tomo 4, pag. 350.
- Ley núm. 4349 sobre Caja nacional de jubilaciones y pensiones para los empleados civiles, tomo 1, pág. 193.
- Ley núm. 4507 sobre carta orgánica del Banco de la nación, tomo 1, pág. 403.
- Ley núm. 4531 sobre Banco municipal de préstamos, tomo 4, pág. 282.
- Ley núm. 4550 sobre caducidad o perención de instancia, tomo 4, pág. 350, 411.
- Ley núm. 4560 sobre ejercicio de varias profesiones ante la justicia, tomo 3, pág. 214.
- Ley núm. 4707 sobre reclutamiento, tomo 1, pág. 280.
- Ley núm. 4870 sobre reformas a la ley núm. 4349, tomo 1, pág. 193.
- Ley núm. 4939 sobre amnistía general a los delitos políticos y militares, tomo 2, pág. 63.
- Ley núm. 5011 sobre creación de un juzgado federal en Entre Ríos, tomo 1, pág. 33.
- Ley núm. 5062 sobre contribución territorial, tomo 4, pág. 282.
- Ley núm. 5098 sobre reformas a la ley orgánica de la Municipalidad de la capital, tomo 1, pág. 315; tomo 3, pág. 135; tomo 4, pág. 354.
- Ley núm. 5133 sobre autenticación de los actos públicos, tomo 4, pág. 354.
- Ley núm. 5106 sobre acusaciones contra magistrados, tomo 4, pág. 268.
- Ley núm. 6007 sobre modificaciones a la ley de la caja de jubilaciones y pensiones, tomo 1, pág. 193.
- Ley núm. 7029 sobre defensa social, tomo 1, pág. 380.
- Ley núm. 7055 sobre reorganización de los tribunales de la capital, tomo 1, pág. 178; tomo 4, pág. 355.
- Ley núm. 7092 sobre propiedad científica, artística y literaria, tomo 4, pág. 356.
- Ley núm. 7065 sobre amnistía a los infractores de la ley 4707, tomo 2, pág. 63.
- Ley núm. 7099 sobre creación de una cámara federal de apelaciones en el Rosario, tomo 1, pág. 187.



- Ley núm. 7497 sobre pensiones, tomo 1, pág. 193 (1)
- Ley núm. 8130 sobre padrón electoral, tomo 2, pág. 63.
- Ley núm. 8172 sobre Banco hipotecario nacional, tomo 4, pág. 356.
- Ley núm. 8348 sobre tratado de extradición con Suiza, tomo 1, pág. 356.
- Ley núm. 8843 sobre división judicial de la provincia de Córdoba, tomo 1, pág. 89.
- Ley núm. 8871 sobre derechos y deberes del elector, tomo 1, pág. 182.
- Ley núm. 8875 sobre debentures, tomo 4, pág. 357.
- Ley núm. 8879 sobre Obras de salubridad de la nación, tomo 1, pág. 386.
- Ley núm. 8890 sobre impuestos a los actos judiciales y notariales sobre transmisión de bienes, tomo 4, pág. 162, 359.
- Ley núm. 8918 sobre Cámara criminal de la capital, (su organización), tomo 4, pág. 89; tomo 4, pág. 7.
- Ley núm. 9143 sobre corrupción de mujeres, tomo 1, pág. 5; tomo 2, pág. 48.
- Ley núm. 9502 sobre creación de un juzgado de comercio en la capital federal, tomo 1, pág. 89.
- Ley núm. 9511 sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones, tomo 4, pág. 25, 360.
- Ley núm. 9513 sobre pavimentación de varias calles de la capital, tomo 4, pág. 360.
- Ley núm. 9522 sobre amnistia a los infractores a las leyes de enrolamiento y conscripción, tomo 2, pág. 63.
- Ley núm. 9527 sobre Caja nacional de ahorro postal, tomo 4, pág. 24, 261.
- Ley núm. 9643 sobre warrants, tomo 4, pág. 51, 261.
- Ley núm. 9644 sobre prenda agraria, tomo 1, pág. 380; tomo 4, pág. 50, 159, 362.
- Ley núm. 9648 sobre presupuesto general, tomo 1, pág. 89.
- Ley núm. 9653 sobre caja de jubilaciones y pensiones de los empleados ferroviarios, tomo 4, pág. 364.
- Ley núm. 9667 sobre extracción de fondos correspondientes a depósitos judiciales, tomo 4, pág. 364.
- Ley núm. 9675 sobre cuadros y ascensos del ejército, tomo 1, pág. 172.
- Ley núm. 9677 sobre comisión nacional de casas baratas, tomo 4, pág. 366.
- Ley núm. 9688 sobre responsabilidad por accidente del trabajo, tomo 1, pág. 283; tomo 4, pág. 367.
- Ley núm. 9689 sobre modificaciones al art. 675 del cód. de com. tomo 4, pág. 367.
- Ley núm. 10080 sobre cartas rogatorias con el Perú, tomo 4, pág. 368.
- Ley núm. 10081 sobre cartas rogatorias con Paraguay, tomo 4, pág. 368

(1) En el lugar citado, por error figura esta ley bajo el núm. 4797 en vez de núm. 7497.





- Ley núm. 10273** sobre reformas de la sección 1.ª, tít. IX del cód. de minería, tomo 4, pág. 369.
- Ley núm. 10284** sobre el hogar, tomo 4, pág. 24, 369.
- Ley núm. 10389** sobre impuestos internos a los cigarros, naipes, bebidas alcohólicas, etc., tomo 1, pág. 285.
- Ley núm. 10364** sobre modificación a la ley de contribución territorial, tomo 4, pág. 370.
- Ley núm. 10366** sobre patentes a los ramos de comercio e industria y profesiones varias para 1918, tomo 4, pág. 371.
- Ley núm. 10505** sobre trabajo a domicilio, tomo 4, pág. 372.
- Ley núm. 10650** sobre creación de la caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios, tomo 4, pág. 25, 372.
- Ley núm. 10676** sobre modificaciones a la ley orgánica del Banco hipotecario nacional, tomo 4, pág. 51 en n.
- Ley núm. 10903** sobre patronato de menores, tomo 2, pág. 171; tomo 1, p. 318.
- Ley núm. 10996** sobre ejercicio de la procuración ante los tribunales nacionales, tomo 1, pág. 243; tomo 3, pág. 109, 110 y 111.
- Ley núm. 11027** sobre presupuesto general de la administración, tomo 4, pág. 373.
- Ley núm. 11077** sobre extinción de las obligaciones del deudor en los cursos civiles, tomo 4, pág. 143, 151.
- Ley núm. 11110** creando la caja nacional de jubilaciones y pensiones para los empleados de empresas particulares, t. 4, p. 374.
- Ley núm. 11122** sobre procedimientos en los juicios de desalojo, tomo 4, pág. 95 n.
- Ley núm. 11123** sobre presupuesto para 1921, tomo 4, pág. 96.
- Ley núm. 11137** sobre caja nacional de ahorro postal, tomo 4 pág. 376.
- Ley núm. 11156** sobre modificaciones al código civil, tomo 4, pág. 95 n.
- Ley núm. 11170** sobre arrendamientos agrícolas, tomo 4, pág. 25.
- Ley núm. 11173** sobre modificaciones a la ley de jubilaciones de ferroviarios, tomo 4, pág. 377.
- Ley núm. 11179** sobre código penal, tomo 4, pág. 421.
- Ley núm. 11202** sobre prorrogación del término para el vencimiento de contratos de locución, tomo 4, pág. 377.
- Ley núm. 1878** sobre regulación de honorarios, provincia de Buenos Aires, vigente en la capital de la República, t. 4, pág. 379.
- Decreto** sobre tramitación de exhortos librado por autoridades judiciales de la república a los del extranjero y vice-versa, tomo 4, pág. 378.
- Decreto** sobre procedimiento para la legalización de documentos extranjeros que deban valer en la república, tomo 4, pág. 378.

# ÍNDICE ALFABÉTICO

(Las cifras indican la página; n. nota; s. siguientes, y v. véase).

**Ab-intestato.** — V. Sucesiones.

**Abogados.** — Su historia, t. 1, p. 332. — Son responsables del atraso de nuestro procedimiento, t. 2, p. 25. — De la real audiencia, t. 1, p. 78. — De la confederación, t. 1, p. 238. — Secreto profesional, t. 1, p. 240. — Acción por injurias contra los mismos, t. 1, p. 239. — Apreheimiento (en materia penal), t. 1, p. 241. — Inviolabilidad de su estudio, t. 1, p. 241. — Como testigo, t. 1, p. 240. — Forma de intervención en la integración de tribunales, t. 1, p. 242. — Regulación de sus honorarios, t. 1, p. 238. — Honorarios, t. 1, ps. 237, 238; t. 3, p. 244. — Pacto de cuota litis prohibido, t. 1, p. 78. — Su intervención no es obligatoria sino en casos determinados, t. 3, p. 109.

**Absolución de la instancia.** — No es permitida en materia penal, t. 2, p. 382.

**Accidente del trabajo,** t. 1, p. 332. — La indemnización es inembargable, t. 4, p. 26.

**Acción civil.** — Su objeto, t. 2, p. 59; t. 3, p. 23. — Procedente de un delito, t. 3, p. 49. — V. Cuestiones prejudiciales. Querrela. Sentencia penal. Sobreseimiento.

**Acción de jactancia.** — V. Jactancia. Mensura.

**Acción de nulidad,** t. 1, p. 371. — No procede contra la sentencia; pues ese defecto se remedia por medio

de recursos legales, t. 3, p. 25, 347. V. Juicio de árbitros.

**Acción ejecutiva,** t. 3, p. 2.

**Acciones.** — Definición, t. 3, p. 2. — Su fundamento, t. 3, p. 5. — Sus diversas denominaciones, t. 3, p. 23. — No es necesario que se les dé el nombre técnico, t. 3, p. 23. — Participan de la naturaleza del derecho, t. 3, p. 23. — Sus requisitos, t. 3, p. 29; t. 4, p. 56. — En derecho romano, t. 1, p. 60, 62; t. 3, p. 14. — Reales y personales, t. 1, p. 307, 310, 338, 364, 367. — Reivindicatoria, t. 1, p. 366; t. 3, p. 27. — Confesoria, t. 1, p. 366. — Negatoria, t. 1, p. 366. — Mixtas, t. 1, p. 137, 367; t. 3, p. 26. — Entre socios, t. 1, p. 342. — Que nacen del delito, t. 2, p. 270. — Personas que pueden figurar activa y pasivamente en el proceso penal, t. 2, p. 47. — En lo correccional, t. 2, p. 49. — Extinción, t. 2, p. 61. — Mobiliarias e inmobiliarias, t. 3, p. 26. — Perjudiciales, t. 3, p. 26. — De división de condominio, t. 3, p. 27. — Transmisibles e intransmisibles, t. 3, p. 28. — Principales y accesorias, t. 3, p. 28. — Su teoría en derecho francés, t. 3, p. 29. — Regresivas, t. 3, p. 33. — Redhibitoria, t. 3, p. 37. — Quanti minoris, t. 3, p. 37. — De fraude y simulación, t. 3, p. 38. — Contra el heredero, t. 3, p. 49. — ¿Cuándo dos ac





ciones son iguales, t. 3, p. 10. — V. Querrela. Competencia. Calidad. Cosa. Persona. Causa en la acción.

**Acción hipotecaria.** — t. 1, p. 368.

**Acción popular.** — Casos en que procede, t. 2, p. 58. — Su extinción, t. 2, p. 61.

**Acciones posesorias.** t. 1, p. 333. — ¿Que son?, t. 4, p. 115. — Las acciones posesorias y los interdictos, t. 4, p. 115. — En el derecho romano, t. 4, p. 116. — En Francia, t. 4, p. 117. — En materia de fondo, t. 4, p. 118. — Por ellas se protege la posesión y la cuasi posesión, t. 4, p. 119. — Camino público, t. 4, p. 119. — Aguas, t. 4, p. 119, 120. — Acción de despojo, t. 4, p. 121, 130; de recuperar, t. 4, p. 121; de manutención, t. 4, p. 120; de obra nueva, t. 4, p. 123. — Competencia, t. 4, p. 124. — ¿Quiénes pueden ejercer la acción?, t. 4, p. 124. — ¿Contra quienes se acuerda?, t. 4, p. 124. — Cosas que pueden ser materia de ella, t. 4, p. 125. — Procedimiento y prueba, t. 4, p. 125. — Excepciones, t. 4, p. 126. — Turbaciones de derecho inadmisibles, t. 4, p. 126. — Vinculación del posesorio con el petitorio, t. 4, p. 127. — Acción plenaria, t. 4, p. 128. — Interdicto de adquirir, t. 4, p. 131; id. de obra vieja, t. 4, p. 132. — Otras acciones protectoras de la posesión y de la tenencia, t. 4, p. 133.

**Acción privada.** — Enumeración de los delitos en que procede, t. 2, p. 59.

**Acción pública.** — Su ejercicio, t. 2, p. 48, 49, 57. — V. Ministerio público.

**Acción real.** — V. Acción hipotecaria. Competencia. Reivindicación.

**Aclaratoria.** — V. Recursos.

**Acreedores.** — ¿En qué casos pueden intervenir en la causa que no siga al deudor común?, t. 3, p. 105. — Influencia de la cosa juzgada sobre ellos, t. 3, p. 317. — Ac-

ción sobre los bienes de su deudor, t. 4, p. 23, s. — Medios coercitivos, t. 4, p. 35 s. — V. Concurso civil.

**Acreedores hipotecarios.** — Casos en que puede embargar otros bienes de los que le están afectados, t. 4, p. 27. — V. Acción real. Concurso civil. Hipoteca.

**Ascensos.** — V. Magistrados judiciales.

**Actas de sesiones de las cámaras.** — ¿Son instrumentos públicos?, t. 3, p. 184.

**Acto indicata.** — V. Ejecución de sentencia.

**Acto auténtico,** t. 3, p. 184. V. Actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia.

**Actos administrativos.** t. 1, p. 383.

**Actos de comercio.** — Determina la competencia de los tribunales mercantiles, t. 1, p. 291. — Jurisprudencia sobre los mismos, t. 1, p. 291. — V. Competencia.

**Actos jurídicos.** — V. Locus regit actum.

**Actos públicos,** t. 3, p. 181.

**Actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia,** t. 3, p. 181. — Condiciones para su validez, t. 1, p. 145; t. 3, p. 311.

**Acumulación de acciones,** t. 1, p. 291, 295, 319.

**Acumulación de autos.** — Procede si se siguen al mismo tiempo dos juicios sobre la misma materia, t. 3, p. 22.

**Acusado.** — Su incomunicación, t. 2, p. 31. — Su identidad, t. 2, p. 36, 326. — Su indagatoria, t. 2, p. 97. — Su confesión, t. 2, p. 96. — Defensa del mismo, t. 2, p. 42. — Efectos de su fallecimiento, t. 2, p. 61. — V. Defensa. Rebelión.

**Administración.** — V. División de poderes. Facultades discrecionales.

**Administración de bienes sucesorios.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 313. — V. Sucesión.

**Afirmados.** — Su cobro corresponde al juez local del territorio, t. 1, p. 337, 338.



**Agricultor.** — Sus ropas, muebles y útiles sólo pueden embargarse en los términos que la ley designa, t. 4, p. 25.

**Aguas.** — V. Acciones posesorias.

**Alegatos.** t. 3, p. 235. — V. Expresión de agravios.

**Alcaldes.** — De casa y corte, t. 1, p. 64. — Ordinarios de primero y segundo voto, t. 1, p. 65, 68, n. 1, 2 y 73. — De la capital, t. 4, p. 5. — V. Cabildo. Regidores. Justicia de paz.

**Alimentos.** — Quien los debe, t. 4, p. 34. — Compensación no admisible, t. 4, p. 105. — Competencia, t. 4, p. 105. — Requisitos de la acción, t. 4, p. 105. — Procedimiento, t. 4, p. 106. — Juicio ordinario, después del sumario, t. 4, p. 107. — V. Litis-expensas.

**Almirantazgo.** — V. Competencia federal.

**Alquileres.** — V. Desalojamiento Locación.

**Allanamiento de domicilio.** — Puede decretarlo el jefe de policía en la represión de los juegos de azar, t. 2, p. 81.

**Amigables Compositores.** — Su decisión participa del carácter de la transacción, t. 3, p. 302. — V. Arbitros. Juicio de árbitros.

**Amnistía.** — Sus caracteres, t. 2, p. 92. — V. Excepciones.

**Amojonamiento.** — V. Mensura.

**Aparcería.** — V. Desalojamiento.

**Apelación.** — Renuncia anticipada a la misma, t. 3, p. 97. — Efectos en que se concede, t. 3, p. 296. — V. Acción de nulidad. Recursos. Recurso extraordinario.

**Apercibimiento.** — V. Abogado. Columnas o injurias. Correcciones disciplinarias. Magistrados.

**Apertura de testamentos.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 316.

**Apremio.** — V. Ejecución de sentencia. Procedimiento de apremio.

**Arbitros.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 326. — V. Juicio de árbitros.

**Artículos de prevo y especial pro-**

**nunciamento.** — V. Excepciones.

**Astraites.** — V. Coacción. Coerción.

**Audiencia de Buenos Aires.** — Su creación, t. 1, p. 73. — Sus ordenanzas, t. 1, p. 75. — Su reglamento, t. 1, p. 76. — Su competencia, t. 1, p. 76 y 77. — Oidores, t. 1, p. 77. — Procedimientos, t. 1, p. 78. — Funcionarios que intervienen ante la misma, t. 1, p. 78. — V. Real audiencia.

**Autenticación.** — Leyes, decretos, etc. de origen provincial, t. 1, p. 349. — V. Actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia.

**Autoridades administrativas.** — Su misión, t. 1, p. 281. — V. División de poderes. Falta.

**Autos.** — V. Acumulación de autos. Conclusión de la causa, etc. Tribunales superiores.

**Autos interlocutorios.** — V. Recursos. Sentencia.

**Auxiliares de la justicia.** — Secretarios, ugiere, escribanos, etc., t. 1, p. 228. — V. Abogados.

**Avalúo.** — Forma de practicarse en las sucesiones, t. 4, p. 166. — V. Juicio ejecutivo. Sucesiones.

**Avocación,** t. 4, p. 7, 12.

**Azotes,** t. 2, p. 10.

**Bancos.** — V. Competencia. Demanda.

**Beneficios de competencia.** — V. Concurso.

**Beneficio de inventario,** t. 3, p. 49.

**Bibliografía.** — Abogados, t. 1, p. 232. — Acciones, t. 3, p. 5. — Acciones penales por turbación de la posesión, t. 4, p. 133. — Acciones posesorias, t. 4, p. 114. — Acciones reales, t. 1, p. 364.

**Alimentos y litis expensas,** t. 4, p. 104. — Concurso civil de acreedores, t. 4, p. 135. — Confesión, t. 3, p. 133. — Derocho procesal, t. 1, p. 50. — Desalojo, t. 4, p. 92. — Ejecución procesal forzada, t. 4, p. 15. — Embargos preventivos, t. 4, p. 77. — Escribanos y secretarios, t. 1, p. 229. — Excepciones, t. 3, p. 45. — Inter-



dicción, t. 4, p. 109. — Jactancia, t. 4, p. 98. — Juicio arbitral, t. 4, p. 187. — Juicio ejecutivo, t. 4, p. 48. — Jurado, t. 1, p. 95. Jurisdicción y competencia, t. 1, p. 305. — Justicia federal, t. 1, p. 372. — Mensura y deslinde, t. 4, p. 171. — Ministerio público, t. 1, p. 220. — Perención de instancia, t. 3, p. 244. — Procedimiento penal, t. 2, p. 5. — Prueba, t. 3, p. 113. — Sentencia, t. 3, p. 257. — Sucesiones, t. 4, p. 154. — Tercerías, t. 4, p. 87. — Tribunales superiores, t. 4, p. 5.

**Bien de familia.** — V. Embargo.

**Bienes.** — Forma en que están garantidos por la sociedad, t. 3, p. 5. — V. Patrimonio.

**Bienes públicos.** — No son embargables, t. 4, p. 24.

**Bigamia.** — V. Cuestiones judiciales.

**Bill of attainder.** — ¿En qué consiste?, t. 1, p. 9.

**Cabildos,** t. 1, p. 66 s. — V. Regidores. Alcaldes. Justicia mayor.

**Caducidad de instancia.** — V. Perención de instancia.

**Caja nacional de ahorro postal.** — Los asuntos en que sea parte corresponden a la justicia federal, t. 1, p. 382. — Los depósitos hechos en la misma no son embargables, t. 4, p. 24.

**Calidad,** t. 3, p. 30. — V. Acción. Cosa. Persona.

**Calificación errónea de la acción.** — V. Acciones. Iura curia novit.

**Calumnia,** t. 2, p. 15. — V. Calumnias e injurias.

**Calumnias e injurias,** t. 2, p. 399. La complicitad en ellas se rige por reglas especiales, t. 2, p. 155. — Requisitos en caso de que hayan sido inferidas en juicio, t. 2, p. 157. — No procede la prisión preventiva, t. 2, p. 158. — Extinción de la acción, t. 2, p. 65. — V. Abogados. Magistrados.

**Cámara comercial,** t. 1, p. 89; t. 3, p. 276.

**Cámara criminal y correccional,** t. 1, p. 89.

**Cámaras civiles,** t. 1, p. 89; t. 3, p. 276. — V. Jurisprudencia.

**Cámaras de apelación.** — En la provincia de Buenos Aires, t. 1, p. 120. — Funcionan con dos vocales, t. 1, p. 120. — V. Tribunales superiores.

**Cámaras en pleno.** — V. Jurisprudencia.

**Cámaras federales.** — V. Justicia federal.

**Caminos.** — V. Acciones posesorias.

**Cancillería de Valladolid,** t. 1, p. 65.

**Capacidad.** — Del juez, t. 3, p. 20. — Para representar a otro en juicio, t. 3, p. 102. — V. Insania. Menor emancipado.

**Capital federal.** — Su justicia, t. 1, p. 89. — Las leyes dictadas exclusivamente para ella no dan lugar a un caso federal "ratione materiae", t. 1, p. 389. — V. Competencia.

**Cárceles,** t. 2, p. 418.

**Careos,** t. 2, p. 338.

**Cargo.** — En los escritos, t. 1, p. 230. — V. Términos.

**Carta magna,** t. 2, p. 18. — V. Habeas corpus.

**Cartas.** — V. Correspondencia.

**Cartas misivas,** t. 3, p. 191.

**Casación,** t. 1, p. 132. — En la legislación extranjera, t. 1, p. 135, 136.

**Caso concreto.** — V. Caso judicial. Jueces.

**Caso judicial,** t. 1, p. 130, 210, 227.

**Caso contencioso,** t. 1, p. 377.

**Casos de declaración de inconstitucionalidad pronunciados por la suprema corte nacional,** t. 1, p. 217.

**Casos contenciosos,** t. 1, p. 357, 377.

**Cautión de iudicium solvi,** t. 3, p. 53. — V. Excepciones.

**Cautión de rato et grato,** t. 3, p. 106.

**Causa en la acción,** t. 3, p. 287, 319. — V. Acciones.

**Causa de la obligación,** t. 3, p. 32.

**Causas correccionales.** — Su procedimiento, t. 2, p. 151, 396. — Sus características, t. 2, p. 154.

**Causas criminales.** — Su procedimiento, t. 2, p. 151.

**Cédula.** — V. Notificaciones.



**Cesión de bienes.** — V. Concurso civil.

**Cesión o mandato.** t. 1, p. 305. — V. Competencia federal.

**Circunstancias personales.** t. 2, p. 325. — V. Identidad del acusado.

**Citación.** — A personas cuyo nombre y domicilio se ignora, t. 3, p. 80. — V. Emplazamiento. Notificaciones.

**Ciudades argentinas.** — Sus autoridades judiciales en la colonia, t. 1, p. 66, 67.

**Clero.** — Sus fueros, t. 1, p. 65. — Su influencia en la justicia, t. 1, p. 118.

**Coacción.** t. 3, p. 8. — V. Coerción.

**Codificación.** — V. Derecho procesal.

**Código.** — ¿Que es?, t. 1, p. 380. — V. Leyes locales. Recurso extraordinario.

**Código civil.** t. 1, p. 22. — No rige los procedimientos judiciales, t. 1, p. 32. — V. Recurso extraordinario.

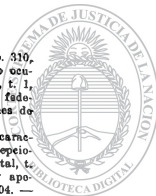
**Código de procedimiento civil de la capital.** t. 1, p. 22, 25, 81. — V. Derecho procesal.

**Código de procedimiento civil federal.** t. 1, p. 22. — V. Derecho procesal.

**Código de procedimiento civil y comercial de la capital de la república.** t. 1, p. 22, 25, 81. — Fué primero ley de la provincia de Buenos Aires, y después se adoptó para la capital de la república, por la ley núm. 1893, t. 4, p. 215. — Su texto, t. 4, p. 215 a 232. — Leyes que lo han modificando, t. 4, p. 336. — Materias de que se ocupa: Ab intestato, t. 4, p. 313. — Administración de la herencia, t. 4, p. 313. — Alimentos, t. 4, p. 302. — Amigables componedores, t. 4, p. 330. — Arbitros, t. 4, p. 326. — Avalúo, t. 4, p. 309. — Citación y emplazamiento, t. 4, p. 228. — Conclusión de la causa para definitiva, t. 4, p. 248. — Concurso civil, t. 4, p. 318: administración, t. 4, p. 320; verificación de créditos, t. 4, p. 322; graduación y

distribución de los mismos, t. 4, p. 324. — Cuestiones de competencia, t. 4, p. 275. — Cumplimiento de sentencia de remate, t. 4, p. 290. — Declaratoria de pobreza, t. 4, p. 301; demanda y contestación, t. 4, p. 227, 231. — Desalojo, t. 4, p. 300. — Disposiciones generales, t. 4, p. 215. — Disposiciones transitorias, t. 4, p. 331.

— División de herencia, t. 4, p. 311. — Ejecución de sentencia de los tribunales argentinos, t. 4, p. 293; de tribunales extranjeros, t. 4, p. 296. — Embargo preventivo, t. 4, p. 280. — Excepciones dilatorias, t. 4, p. 229. — Excepciones perentorias deducidas en forma de artículo, t. 4, p. 229. — Herencia vacante, t. 4, p. 313. — Incidentes, t. 4, p. 275. — Interdictos, t. 4, p. 297; de adquirir, t. 4, p. 298; de retener, t. 4, p. 299; de recobrar, t. 4, p. 300; de obra nueva, t. 4, p. 300. — Inventario, t. 4, p. 309. — Jactancia, t. 4, p. 276. — Juicio de árbitros, t. 4, p. 326. — Juicio ejecutivo, t. 4, p. 284. — Juicio ordinario, t. 4, p. 226. — Litis expensas, t. 4, p. 302. — Mensura, t. 4, p. 303. — Procedimiento de 2.ª instancia, t. 4, p. 253. — Prueba, t. 4, p. 232. — Prueba, (medios de): t. 4, p. 235; confesión, t. 4, p. 235; instrumental, t. 4, p. 238; peritos, t. 4, p. 240; testigos, t. 4, p. 243; inspección ocular, t. 4, p. 247. — Rebolida, t. 4, p. 278. — Recursos: apelación, t. 4, p. 258; por denegación de justicia, t. 4, p. 257; nulidad, t. 4, p. 252; queja, t. 4, p. 257; reposición, t. 4, p. 250. — Recursos extraordinarios: de inaplicabilidad, t. 4, p. 258; de inconstitucionalidad, t. 4, p. 264. — Recusaciones: de los jueces, t. 4, p. 268; de los secretarios, t. 4, p. 271; de los representantes del ministerio público, t. 4, p. 272. — Remplazo de jueces, t. 4, p. 273. — Sentencia, t. 4, p. 249. — Tachas, t. 4, p. 246. — Testamentos, t. 4, p. 306. — Testamentos,



(Apertura de), t. 4, p. 316; protocolización de los mismos, t. 4, p. 318. — V. Derecho procesal. Leyes reformativas del código de procedimiento civil de la capital.

**Código de procedimiento penal.** — Principios en que debe inspirarse, t. 2, p. 19. — De los países de América, t. 2, p. 20. — Origen y sanción del nuestro, t. 2, p. 28. — Crítica del mismo, t. 2, p. 29. — Antecedentes de su sanción, t. 2, p. 215. — Informe del doctor Obarrio al presentar su proyecto, t. 2, p. 218. — Informe de la comisión que revisó dicho proyecto, t. 2, p. 247. — Despacho de la comisión de códigos, t. 2, p. 255. — Ley núm. 2327 aprobando el proyecto, t. 2, p. 265. — Texto del código, t. 2, p. 267. — Disposiciones complementarias del mismo, t. 2, p. 421.

**Código de procedimiento civil y penal de las provincias.** t. 1, p. 22. V. Derecho procesal.

**Código de procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires.** — Sus principios fundamentales, t. 1, p. 24. — Cuestiones de competencia, forma de resolverlas en el mismo, t. 1, p. 300.

**Coerción.** — No es procedente en materia civil, sino en casos excepcionales, t. 3, p. 212. En la ejecución de sentencias, t. 4, p. 38. — V. Prisión por deudas.

**Colonato parcelario.** — V. Desalojamiento.

**Colonia.** — V. Alcaldes, Consulado. Justicia. Real audiencia.

**Competencia.** — Definición, t. 1, p. 296; t. 2, p. 271. — Extensión, t. 1, p. 306. — De derecho internacional, en la ejecución de sentencia, t. 4, p. 44. — Facultades de las partes, t. 1, p. 28, 308. — Las sentencias que la deciden no producen cosa juzgada, t. 3, p. 324. — Ratione materiae, ratione personae, t. 1, p. 30, 296. — Oportunidad para pronunciarse sobre ella, t. 1, p. 194, 297, 298, 399. —

Criterio de la corte, t. 1, p. 310. — Para conocer en el hecho ocurrido a bordo de un buque, t. 1, p. 290. — V. Competencia federal. Id. territorial. Cuestiones de competencia. Prórroga.

**Competencia federal.** — Sus caracteres, t. 1, p. 372 s. — Excepciones, t. 1, p. 402. — Incidental, t. 1, p. 402. — Originaria y apelada, t. 1, p. 387 s., 382, 404. — Concurrente, t. 1, p. 379. — Cámaras de apelación, t. 1, p. 405. — ¿Cuándo surge un caso constitucional?, t. 1, p. 379. — Casos de que deben conocer los jueces de sección, t. 1, p. 381 s. — Causas que versen sobre puntos regidos por la constitución, t. 1, p. 379 s. — Id. id. por las leyes de la nación, t. 1, p. 380 s., 383. — Id. id. por los tratados con las naciones extranjeras, t. 1, p. 384 s. — Causas concurrentes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, t. 1, p. 347, 387. — Causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, t. 1, p. 389 s., 390. — Asuntos en que la nación sea parte, t. 1, p. 391 s. — Causas que se susciten entre dos o más provincias, t. 1, p. 391 s. — Id. id. entre una provincia y los vecinos de otra, t. 1, p. 394. — Id. id. entre los vecinos de diferentes provincias, t. 1, p. 394 s. — Id. id. entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero, t. 1, p. 392, 396. — Lugares donde la nación ejerce jurisdicción exclusiva, t. 1, p. 397. — Prórroga, t. 1, p. 376, 393, 399. — Sucesiones, t. 1, p. 400. Concursos, t. 1, p. 401. — V. Acidentes del trabajo. Caso judicial. Cesión o mandato. Código. Cónsules extranjeros. Contrato de transporte. Cuestiones de competencia. Cuestiones de hecho. Cuestiones políticas. Demandas. Expropiación. Extradición. Gobernadores de provincias. Habeas corpus. Inconstitucionalidad de las



leyes. Jurisdicción marítima. Justicia federal. Ley especial. Leyes nacionales. Mensura. Ministros extranjeros. Mujer casada. Nacionalidad o vecindad. Navegación. Recurso extraordinario. Provincias. Sociedad. Sociedades anónimas. Superior tribunal de provincia. Suprema corte. Valor litigioso. Vecino.

**Competencia por grados**, t. 1, p. 348. — V. Doble instancia. Tribunales superiores.

**Competencia territorial**. — Acción de nulidad, rescisión, etc., t. 1, p. 370. — Acción pro socio, t. 1, p. 342. — Acciones personales y reales, t. 1, p. 308. — Acumulación de acciones y de autos, t. 1, p. 319. — Cesión de bienes, t. 1, p. 341. — Compra-venta, t. 1, p. 323. — Contrato de transporte, t. 1, p. 348. — Contratos que deben cumplirse en la república, t. 1, p. 309. — Convocatoria de acreedores y quiebras, t. 1, p. 341. — Coobligados, t. 1, p. 328. — Cuestiones conexas, t. 1, p. 319, 402. — Daños y perjuicios, t. 1, p. 402. — Delitos y cuasi-delitos, t. 1, p. 343, 399. — Desalojo, t. 1, p. 334, 402. — Disenso, t. 1, p. 329. — División de condominio, t. 1, p. 333. — Divorcio y nulidad de matrimonio, t. 1, p. 239. — Ejecución de sentencia, t. 1, p. 327. — Extradición, t. 1, p. 353. — Filación, t. 1, p. 330. — Habilitación para ejercer el comercio, t. 1, p. 332. — Honorarios, t. 1, p. 326. — Impuestos, t. 1, p. 336. — Interdictos, t. 1, p. 333. — Inestancia, t. 1, p. 335. — Juez exhortado, t. 1, p. 349. — Juicio ejecutivo, t. 1, p. 399. — Juicio de insanía, t. 1, p. 331. — Juicio ordinario como consecuencia del ejecutivo, t. 1, p. 328. — Litis pendencia, t. 1, p. 322. — Mensura, t. 1, p. 335. — Mujer casada, t. 1, p. 332. — Nulidad de procedimientos judiciales, t. 1, p. 399. — Pago, t. 1, p. 399. — Patria potestad, t. 1,

p. 331. — Por cantidad, t. 1, p. 311. — Presunción de fallecimiento, t. 1, p. 333. — Prórroga, t. 1, p. 310. — Querrela criminal, t. 1, p. 402. — Reconvencción, t. 1, p. 326. — Reivindicación, t. 1, p. 366. — Rendición de cuentas, t. 1, p. 342. — Sucesión, t. 1, p. 338. — Su extensión, t. 1, p. 306. — Turno, t. 1, p. 314. — Tutela, t. 1, p. 331. — Violación de correspondencia, t. 1, p. 383. — V. Competencia. Competencia federal.

**Compra-venta**, t. 3, p. 40. — V. Competencia territorial. Contrato preliminar de compra-venta. Coerción.

**Conclusión de la causa para definitiva**, t. 2, p. 379; t. 3, p. 235; t. 4, p. 9, 10, 248. — Cuestiones de derecho, t. 3, p. 235. — Cuestiones mixtas y de hecho, t. 3, p. 235. — Presentación de alegatos, t. 3, p. 235.

**Concurso civil**. — Personas que pueden ser declaradas en concurso, t. 4, p. 135. — Sus diversas clases, t. 4, p. 137. — Oposición, t. 4, p. 138. — Concurso de una sucesión, t. 4, p. 138. — Competencia, t. 4, p. 139. — Efectos de la declaración de concurso, t. 4, p. 140. — Carácter de los acreedores, t. 4, p. 141. — Intereses de los créditos, t. 4, p. 141. — Intervención de los interesados y notificaciones, t. 4, p. 142. — Síndico, t. 4, p. 143. — Estado de créditos, t. 4, p. 145. — Mayoría en las juntas, t. 4, p. 145. — Venta de los bienes, t. 4, p. 147. — Soluciones del juicio, t. 4, p. 148. — Persecución, t. 4, p. 148. — Beneficio de competencia, t. 4, p. 152. — Pensión alimenticia, t. 4, p. 153. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 318.

**Condición resolutoria**, t. 3, p. 33.

**Condonación**, t. 2, p. 65. — V. Excepciones.

**Confesión**, t. 2, p. 340; t. 3, p. 130. — Su definición, t. 2, p. 98; t. 3, p. 133. — Expresa, t. 3, p. 133. — Puede hacerla el mandatario, en





ciertos casos, t. 3, p. 133. — Oportunidad en que se puede exigir en forma de posiciones, t. 3, p. 134. — Personas que están obligadas a absolver posiciones, t. 3, p. 135. — Importancia de esta prueba, t. 3, p. 137. — Confesión simple y calificada, t. 3, p. 137. — Ante la policía, t. 2, p. 100. — Con cargo, t. 2, p. 99, 238. — En principio general es indivisible en lo penal, t. 2, p. 101, 138. — Su retractación, t. 2, p. 104. — Ficta, t. 3, p. 88. — V. Querrelantes. Tribunales superiores.

**Confesión en juicio.** — En el código de procedimiento de la capital, t. 4, p. 235. — V. Confesión.

**Confesión ficta,** t. 3, p. 88. — V. Silencio. Rebelía.

**Conflictos.** — De poderes, t. 1, p. 137. — Municipales, t. 1, p. 140.

**Conformidad tácita,** t. 3, p. 97.

**Congreso.** — No puede invadir la esfera de acción que la constitución confiere a las provincias, t. 1, p. 22. — No puede extender la competencia federal, t. 1, p. 378. — Le corresponde determinar cuales bienes no son embargables, t. 4, p. 26. — Legisla sobre acciones posesorias, t. 4, p. 117. — V. Actas de sesiones de las cámaras.

**Consejo general de educación.** — Su representante interviene en las sucesiones, t. 4, p. 163.

**Consejos de guerra.** — No son tribunales especiales, t. 2, p. 203. — V. Justicia militar. Presidente de la República.

**Constitucional.** — V. Casos de declaración. Garantías constitucionales.

**Constitución nacional.** — Sus propósitos sobre justicia, t. 1, p. 7. — Es ley suprema, t. 1, p. 15. — Forma de obtener esa supremacía, t. 1, p. 145. — Casos en que su aplicación hace surgir la competencia de la justicia federal, t. 1, p. 379 s. — Leyes declaradas inconstitucionales, t. 1, p. 212. — V. Garantías individuales. Provincias.

**Constituciones rígidas y flexibles,** t. 1, p. 200.

**Consulado,** de Buenos Aires, t. 1, p. 39 s.

**Cónsules extranjeros,** t. 1, p. 388. — V. Competencia federal. Sucesiones.

**Contador.** — Forma de nombrarlo en las sucesiones, t. 4, p. 167. — Capacidad, t. 4, p. 168.

**Contencioso-administrativo.** — En la provincia de Buenos Aires, t. 1, p. 289. — V. Demanda.

**Contestación de la demanda,** t. 3, p. 56, 81; t. 4, p. 231.

**Continuidad del procedimiento.** — Facilita la apreciación de la prueba, t. 2, p. 24. — En el código de la provincia de Buenos Aires, t. 2, p. 24.

**Contrato preliminar de compraventa,** t. 3, p. 40.

**Contrato.** — Prueba de los mismos, t. 3, p. 119.

**Contrato de transporte,** t. 1, p. 348.

**Convención de La Haya.** — Sus soluciones sobre la excepción de arraigo, t. 3, p. 55.

**Convocatoria de acreedores,** t. 1, p. 341, 401.

**Coobligados.** — V. Competencia territorial.

**Correcciones disciplinarias.** — V. Calumnias e injurias. Magistrados.

**Corregidores,** t. 1, p. 64, 71.

**Correspondencia.** — Su interceptación, t. 2, p. 351. — V. Cartas misivas.

**Cosa,** t. 3, p. 286.

**Cosa juzgada,** t. 2, p. 67; t. 3, p. 57. — Su fundamento, t. 3, p. 293.

— Impide la declaración de incompetencia, t. 1, p. 194, 399. — Es de derecho supletorio, t. 1, p. 216.

— En los juicios de jurisdicción voluntaria, t. 3, p. 302. — Autos interlocutorios, t. 3, p. 302. — El hecho nuevo, t. 3, p. 303. — El sobreseimiento provisorio, t. 3, p. 304. — ¿Qué parte de la sentencia adquiere valor de la cosa juzgada?, t. 3, p. 304. — Cuestión propuesta y no resuelta en el fa-



llo, t. 3, p. 310. — Para que pueda invocarse es necesario que concurren las tres identidades, de persona, cosa y causa, t. 3, p. 315. — Sentencias que producen cosa juzgada, t. 3, p. 323. — V. Cuestiones de estado. Excepciones. Fíndor. Insania. Preclusión. Sentencia penal.

**Costas**, t. 2, p. 176; t. 3, p. 278. — Oportunidad para solicitarlas, t. 3, p. 281. — ¿Existe solidaridad?, t. 3, p. 282. — Eximación, t. 3, p. 281.

**Crítica**. — V. Sana crítica.

**Cuasi posesión**. — V. Acciones posesorias.

**Cuenta particionaria**. — Procedimiento que debe observarse en su facción, t. 4, p. 169. — V. Contador. Sucesión.

**Cuerpo del delito**. — Forma de constatarlo, t. 2, p. 87, 262, 313.

**Cuestión de puro derecho**. — V. Alegatos.

**Cuestiones**. — V. Sentencia.

**Cuestiones de competencia**, t. 2, p. 278. — Forma de promoverlas, t. 1, p. 300. — Autoridad que debe dirimir las, t. 1, p. 149. — En la provincia de Buenos Aires, t. 1, p. 300. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 275. — V. Competencia.

**Cuestiones de estado**. — La sentencia en ellas puede oponerse erga omnes, t. 3, p. 325.

**Cuestiones de hecho y de derecho**. — Forma de plantearlas en la sentencia, t. 3, p. 268.

**Cuestiones perjudiciales**. — V. Cuestiones de estado.

**Cuestiones políticas**, t. 1, p. 209.

**Cuestiones prejudiciales**, t. 1, p. 295. — ¿Cuáles son y sus diferencias con las cuestiones previas?, t. 2, p. 54, 56; t. 3, p. 333.

**Cuestiones previas**. — V. Cuestiones perjudiciales.

**Cumplimiento de sentencia**. — V. Ejecución de sentencia.

**Cumplimiento de la sentencia de remate**. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4,

p. 290. — V. Ejecución de sentencia.

**Cuota-litis**, t. 1, p. 78. — V. Abogados. Procuradores.

**Curador**. — Procede su designación en las herencias vacantes, t. 4, p. 163.

**Dactiloscopia**. — Ventajas de la misma para la identificación de personas, t. 2, p. 38. — V. Impresiones digitales.

**Daño**. — V. Acciones posesorias.

**Daños y perjuicios**, t. 3, p. 70. — No es necesario determinarlos en la demanda en cantidad fija, t. 3, p. 60. — Forma de fijarlos, t. 3, p. 229. — V. Sentencia penal. Sobrescimiento.

**Declaración indagatoria**. — Casos en que se recibe, t. 2, p. 97, 320.

**Declaraciones abstractas**. — V. Jueces.

**Declaratoria de pobreza**. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 301.

**Declinatoria**. — V. Cuestiones de Competencia.

**Defensa, derechos de**, t. 2, p. 248. — V. Acusado.

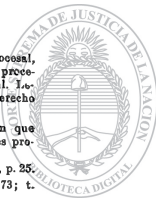
**Defensa de carácter previo**, t. 3, p. 21. — V. Cuestiones prejudiciales.

**Defensa en juicio**. — No se restringe por el hecho de acordar una sola instancia, t. 4, p. 97. — V. Libertad de defensa.

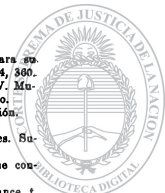
**Defraudación**, t. 1, p. 383.

**Delitos electorales**, t. 1, p. 279.

**Demandas**. — Definición, t. 3, p. 65. — Contencioso-administrativas, t. 1, p. 140, 142. — Cobro de alquileres, t. 1, p. 313. — Contra el Banco de la nación, t. 1, p. 279, 347, 383. — Contra el Banco hipotecario nacional, t. 1, p. 279, 347, 383. — Contra funcionarios públicos, t. 1, p. 277, 279, 347. — Contra estados extranjeros, t. 1, p. 346, 392. — Contra la nación, t. 1, p. 281 s., 346, 391. — Distinciones según el carácter en que ésta haya procedido, t. 1, p. 282.



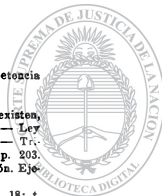
- Jurisprudencia sobre el punto, t. 1, p. 282. — Contra las municipalidades, t. 1, p. 286. — Contra las obras sanitarias de la nación, t. 1, p. 347. — Contra las provincias, t. 1, p. 347, 391, 392. — Contra reparticiones públicas, t. 1, p. 279, 347. — De inconstitucionalidad, t. 1, p. 140, 142. — Sus requisitos, t. 3, p. 53, 68. — No ha sido definida en el código, t. 3, p. 65. — Sus efectos, t. 3, p. 66, 239. — Escrituras y documentos que deben acompañarse a la misma, t. 3, p. 72.
- Demandas contra la nación.** — V. Demanda.
- Demanda nueva.** — Casos en que son permitidas, t. 3, p. 16 y 17. — V. Hecho nuevo.
- Denuncia, t. 2, p. 300.** — V. Sumaria.
- Denuncia de obra nueva.** — V. Acciones posesorias.
- Denuncia de obra vieja.** — V. Acciones posesorias.
- De oficio, t. 1, p. 324, 325.** — El juez no procede sin petición de parte, t. 1, p. 193. — Excepciones a esa regla, t. 1, p. 194. — Competencia, t. 1, p. 194, 399. — Error de la jurisprudencia, t. 1, p. 194, 297, 298, 399. — Mejor proveer, t. 1, p. 196. — Correcciones disciplinarias, t. 1, p. 195. — V. Iura curia novit. Sumario.
- Derecho.** — Adquiere nuevo vigor en la sentencia, t. 3, p. 19. — Lo aplica el juez, t. 1, p. 194. — V. Iura curia novit. Jueces. Sentencia.
- Derecho objetivo, t. 1, p. 273.**
- Derecho personal, t. 1, p. 307.**
- Derecho procesal.** — Definición, objeto, contenido, etc., t. 1, p. 21 s. — Historia, t. 1, p. 60 s. — Sus fuentes, t. 1, p. 49, 63. — Bases en que debe reposar, t. 1, p. 33, 35. — Su objeto, t. 1, p. 44. — ¿Tiene efecto retroactivo?, t. 1, p. 30 s. — ¿Cómo debe disciplinarse?, t. 1, p. 48, 118, 120, 225. — Su codificación, t. 1, p. 81 s. —
- Ideal de una buena ley procesal, t. 1, p. 33. — V. Código de procedimiento civil de la capital. Leyes reformatorias, etc. Derecho público.
- Derecho público.** — Casos en que son de tal carácter las leyes procesales, t. 1, p. 30.
- Derecho real, t. 1, p. 307; t. 3, p. 25.**
- Derecho subjetivo, t. 1, p. 273; t. 2, p. 5, 57; t. 3, p. 260.**
- Derecho supletorio.** — V. Ley.
- Derechos de los habitantes de la nación, t. 1, p. 8.** — V. Garantías individuales.
- Desalojamiento, t. 1, p. 334, 402.** — Cosas que pueden ser materia de este juicio, t. 4, p. 92. — Requisitos de la acción, t. 4, p. 93. — Contratos que se asemejan al de locación, t. 4, p. 93. — Competencia, t. 4, p. 94. — Procedimiento, t. 4, p. 94. — Casos en que la sentencia puede oponerse al subinquilino, t. 4, p. 96. — El locatario principal es substituto procesal del sub-locatario, t. 3, p. 104.
- Desalojo.** — V. Desalojamiento.
- Deserción, t. 1, p. 267.** — Del recurso en materia federal, t. 1, p. 269. — V. Rebecidia.
- Desistimiento, t. 3, p. 239.** — De los procedimientos, t. 3, p. 241. — De la acción, t. 3, p. 241. — Casos en que el mandatario necesita poder especial, t. 3, p. 242. — Expreso, t. 3, p. 243. — Tácito, t. 3, p. 243. — Las costas en el mismo t. 3, p. 243.
- Deslinda.** — V. Mensura.
- Despojo.** — Procede esta acción a favor del mero tenedor si hubo violencia, t. 4, p. 141. — Contra las resoluciones judiciales, t. 4, p. 130. — V. Acciones posesorias.
- Detención.** — V. Prisión preventiva.
- Días hábiles, t. 1, p. 271.** — V. Términos.
- Diputados.** — V. Senadores.
- Dirección general de ferrocarriles.**



- Procedimiento ante la misma, t. 1, p. 287, 347.
- Discordia.** — Casos en que se produce, t. 3, p. 277. — V. Exusación.
- Disenso,** t. 1, p. 329.
- Disposiciones generales.** — Las que rigen en materia de procedimiento civil, t. 4, p. 215.
- División de condominio,** t. 1, p. 323, 338.
- División de herencia.** — Requisitos para practicarla, t. 4, p. 167, 311.
- División de poderes.** — Historia, t. 1, p. 6. — Forma de hacerse efectiva, t. 1, p. 18, 20. — V. Congreso. Facultades discrecionales. Gobierno nacional. Intervención nacional. Provincias.
- Divorcio,** t. 1, p. 326, 329, 363, 388, n. 1; t. 3, p. 169. — V. Cuestiones prejudiciales.
- Doble instancia,** t. 1, p. 36, 120, 296; t. 3, p. 286. — Principios que la rigen, t. 4, p. 7. — Renuncia a la misma, t. 3, p. 97. — V. Instancia única. Tercera instancia. Tribunales superiores.
- Doctrina.** — Su valor, t. 1, p. 49.
- Doctrina legal,** t. 1, p. 135.
- Documentos,** t. 2, p. 348, 400. — Definición, t. 2, p. 125; t. 3, p. 182. — Sus caracteres, t. 3, p. 181. — Su limitación como medio de prueba en el derecho anglo-americano, t. 2, p. 125. — Cartas substraídas del correo, t. 2, p. 126. — Forma de producir tal prueba, t. 3, p. 72. — Valor de los instrumentos públicos, t. 2, p. 127. — Oficiales, t. 3, p. 137. — Falsificación, t. 3, p. 183. — V. Documentos públicos. Instrumento, privado. Instrumento público.
- Documentos oficiales,** t. 3, p. 187. — V. Actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia.
- Documentos públicos,** t. 3, p. 188.
- Domicilio.** — Criterio para determinarlo, t. 1, p. 395, n. 2. — Legal, t. 1, p. 258. — Su subsistencia, t. 1, p. 258. — Del demandado, t. 1, p. 311. — En el extranjero, t. 1, p. 393. — Requisitos para su allanamiento, t. 2, p. 81, 94, 360.
- Especial, t. 3, p. 96. — V. Mujer casada. Testigo. Vecino.
- Domicilio ignorado.** V. Citación.
- Duda,** t. 2, p. 269.
- Edictos.** — V. Notificaciones. Suscesión.
- Efecto devolutivo.** — En que consiste, t. 3, p. 343, 346.
- Efecto suspensivo.** — Su alcance, t. 3, p. 343, 346; t. 4, p. 17.
- Ejecución.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 284. — V. Juicio ejecutivo. Ejecución de sentencia.
- Ejecución de sentencia,** t. 1, p. 327; t. 3, p. 297. — Sentencias ejecutables, t. 4, p. 17, 258, 293. — Doheros del juez, t. 4, p. 18. — Prosupuestos procesales, t. 4, p. 18. — Personas ejecutables, t. 4, p. 28. — Modos de ejecución según la naturaleza de la obligación, t. 4, p. 28. — Excepciones articulables, t. 4, p. 28. — V. Excepciones. Procedimiento de apremio. Sentencia.
- Ejecución de sentencias dictadas en países extranjeros.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 296. — V. Ejecución de sentencia. Ejecución procesal forzada.
- Ejecución procesal forzada,** t. 4, p. 15. — V. Coerción. Ejecución de sentencia.
- Ejército.** — Su necesidad, t. 2, p. 190. — El código que lo regula es anual en Inglaterra, t. 2, p. 200.
- Embargo,** t. 1, p. 16, 29, 327; t. 2, p. 363. — Casos en que procede, t. 2, p. 43. — Bienes exceptados del mismo, t. 4, p. 23 a.
- V. — Bienes embargables en la locación de predios. Bienes públicos. Congreso. Cosa juzgada. Embargo preventivo. Jactancia. Lecho cotidiano. Lotes del hogar. Muebles. Patrimonio. Ropa. Reboldía. Salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones. Seguros de vida. Sepulcros. Sociedad. Tercería. Torceros. Traba del embargo.
- Embargo preventivo.** — Intereses



- a conciliar, t. 4, p. 76. — Forma de sustanciarlo, t. 4, p. 77. — Juez competente, t. 4, p. 77. — Requisitos para su procedencia, t. 4, p. 78. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 280. — V. Confesión ficta. Rebeldía.
- Emplazamiento**, t. 1, p. 17. — Es sinónimo de citación, t. 3, p. 77. — V. Demanda. Notificaciones.
- Empedrado**. — V. Adoquinado.
- Empleados públicos**. — V. Mandato.
- Encuesta**, t. 1, p. 162. — V. Referé.
- Error de nombre en la acción**. — V. Acciones.
- Escribano**. — V. Auxiliares de la justicia.
- Escribano público**. — Valor de su título, t. 1, p. 16.
- Español**. — V. Idioma.
- Esposa**. — V. Mujer casada. Testigo.
- Estado extranjero**, t. 1, p. 346, 392. — V. Competencia.
- Estado moderno**, t. 1, p. 5. — Sus funciones, t. 1, p. 272. — V. Juez.
- Estado de sitio**, t. 1, p. 209.
- Evicción**, t. 1, p. 267, 328, 392, n. 1, 393; t. 3, p. 55.
- Excarnelación**, t. 1, p. 62; t. 2, p. 355. — Su objeto, t. 2, p. 171. — Diversas clases de fianzas: real, personal y juratoria, t. 2, p. 175.
- Excepciones**, t. 2, p. 369; t. 3, p. 45. — Sus diversas clases, t. 2, p. 148. — Su defectuosa reglamentación, t. 2, p. 196. — Su influencia sobre el proceso, t. 2, p. 148. — Oportunidad para oponerlas, t. 3, p. 47. — Su origen, t. 3, p. 48. — Previas, t. 3, p. 21. — Enumeración de las mismas, t. 3, p. 51. — Amnistía o indulto, t. 2, p. 150. — Arraigo, t. 3, p. 153. — Caducidad, t. 4, p. 50. — Compensación, t. 4, p. 30, 50, 66. — Condonación, t. 2, p. 151. — Cosa juzgada, t. 2, p. 150. — Epepe, t. 4, p. 31, 66. — Falsedad, t. 4, p. 29, 50 n. 1, 63. — Falta de acción, t. 2, p. 150. — Falta de personalidad, t. 2, p. 149; t. 3, p. 50, 51. — Fuerza o miedo, t. 4, p. 66. — Inhabilidad de título, t. 4, p. 63. — Incompetencia, t. 2, p. 149; t. 3, p. 51; t. 4, p. 62. — Litis pendencia, t. 2, p. 150; t. 4, p. 63. — Nulidad, t. 4, p. 66. — Pago, t. 4, p. 30, 50, 66. — Prescripción, t. 2, p. 151; t. 4, p. 30, 50, 66. — Quita, t. 4, p. 31 y 66. — Remisión, t. 4, p. 31 y 66. — Procedentes en la ejecución de sentencia, t. 4, p. 29. — Forma de tramitarlas, t. 3, p. 56. — V. Convención de la Haya. Caución de iudicatum solvi. Evicción. Excepciones perentorias. Litis pendencia. Requisitos procesales.
- Excepciones dilatorias**. — Enumeración de las admisibles, t. 4, p. 229. — V. Excepciones.
- Excepciones perentorias**. — No enumeradas en el código de procedimiento, t. 3, p. 46. — Deducidas en forma de artículo previo, t. 4, p. 231. — V. Excepciones.
- Exceso de poder**, t. 1, p. 299.
- Excusación**, t. 3, p. 277. — V. Capacidad.
- Excusión**, t. 3, p. 52.
- Exhortos**, t. 1, p. 349. — V. Actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia. Competencia. Jueces.
- Experiencia personal**. — V. Inspección ocular.
- Experiencia personal del juez**. — V. Inspección ocular. Mejor proveer.
- Expresión de agravios**. — Casos en que procede y término para su presentación, t. 4, p. 10. — V. Recurso libre.
- Expropiación**, t. 1, p. 280. — Constituye materia reservada al congreso si se trata de obras nacionales, t. 1, p. 381.
- Extradición**, t. 1, p. 324, 380 s.; t. 2, p. 412.
- Extranjeros**. — Garantías de que gozan en la república, t. 1, p. 8, n. 1. — V. Competencia federal. Nacionalidad o vecindad.
- Facultades discrecionales**. — De la administración, t. 1, p. 279. — No están sometidas al control judicial, t. 1, p. 279. — V. División de poderes.



**Falsedad.** — V. Prueba. Redargución de falsedad de documentos. **Falsificación de documentos.** — V. Documentos. **Falsificación de moneda.** t. 1, p. 383. **Falso testimonio.** — De los testigos en materia civil, t. 3, p. 156, 159, 165. **Falta de acción.** — V. Excepciones. **Falta de jurisdicción.** — V. Excepciones. **Falta de personalidad.** — V. Excepciones. **Faltas.** t. 2, p. 398. — Inconstitucionalidad de la ley que atribuye su conocimiento a autoridades administrativas, t. 1, p. 307. — No existen garantías para juzgarlas, t. 2, p. 211. — No procede detención en ellas en la provincia de Buenos Aires, t. 2, p. 197. — V. Municipalidad. Ordenanzas de aduana. **Fallos.** — Diversas publicaciones, t. 1, p. 57. — V. Jurisprudencia. **Fecha cierta.** t. 3, p. 191. **Federalismo.** — Permite diversas clases de tribunales, t. 1, p. 87. — V. Provincias. **Feriado.** — V. Días hábiles. **Fiador.** — Puede ser citado en el juicio seguido entre el locador y el locatario, t. 3, p. 105. — Hasta donde le alcanza el fallo dictado contra el deudor principal, t. 3, p. 317. **Fianza.** — V. Excarcelación. **Fiesta.** — V. Días hábiles. **Firma de letrado.** t. 1, p. 17 — V. Procuradores. **Fiscal.** — Su carácter, t. 2, p. 249. — Efectos de su desistimiento, t. 2, p. 48. — V. Acciones. Ministerio público. **Fiscal de cámara.** — Su intervención en la acusación, t. 2, p. 161. **Fiscal de estado en la provincia de Buenos Aires.** t. 3, p. 106. **Formas de los actos jurídicos.** — V. Locus regit actum. **Formas de la sentencia.** — V. Sentencia. **Formas procesales.** t. 1, p. 23, 24.

— V. Derecho procesal. **Fuero federal.** — V. Competencia federal. **Fueros.** t. 1, p. 65. **Fueros personales.** — No existen, t. 1, p. 423; t. 2, p. 202. — Ley de supresión, t. 1, p. 12. — Tribunales especiales, t. 2, p. 203. **Fuerza pública.** — V. Coerción. Ejecución de sentencia. **Fuga del procesado.** t. 1, p. 18; t. 2, p. 403. **Funcionarios públicos.** — Su responsabilidad, t. 1, p. 182, 183 a. — V. Competencia. Empleados públicos. **Fundamentos.** — V. Motivación. **Ganado.** — V. Marca. **Garantías constitucionales.** — Con relación al arresto, t. 2, p. 166. — Garantías individuales, t. 2, p. 7, 8, 267. — ¿En qué consisten?, t. 1, p. 8. — Constituyen derechos absolutos, t. 1, p. 278. — Están consagradas por la constitución, t. 1, p. 8. — V. Constitución nacional. Defensa en juicio. Derechos de los habitantes de la nación. Bill of attainder. Domicilio. Estado de sitio. Faltas. Fueros personales. Habeas corpus. Igualdad ante la ley. Libertad de defensa. Juez natural. Rosas. **Garantías individuales.** — V. Garantías constitucionales. **Gobernador.** t. 1, p. 70. — De provincia, no es enjuiciable ante la justicia federal, t. 1, p. 18. **Gobierno nacional.** — Comparte la justicia con los gobiernos de provincia, t. 1, p. 18, 290. V. División de poderes. Demanda. **Gobiernos extranjeros.** — V. Competencia federal. Mandato. **Graduación de créditos.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 324. — V. Concurso civil. **Habeas corpus.** t. 1, p. 280; t. 2, p. 8, 28, 404. — Antecedentes nacionales, t. 2, p. 178, 245. — En Inglaterra, t. 2, p. 182, 186. — En Estados Unidos, t. 2, p. 189, 245. —



En Chilo, t. 2, p. 193. — Defectuosa reglamentación de nuestras leyes, t. 2, p. 193. — Liberalismo del código de la provincia de Buenos Aires, t. 2, p. 195.

**Habilitación.** — Para ejercer el comercio, t. 1, p. 332.

**Habitación de días y horas hábiles.** t. 1, p. 270. — V. **Días hábiles.**

**Habitantes.** — V. **Dedechos de los habitantes de la nación.**

**Hecho.** — V. **Sentencia.**

**Hecho ilícito.** t. 1, p. 344, 392.

**Hecho negativo.** — V. **Prueba.**

**Hecho notorio.** — V. **Prueba.**

**Hecho nuevo.** — Oportunidad de invocarlo en primera y segunda instancia, t. 3, p. 17. — Su influencia sobre la cosa juzgada, t. 3, p. 303. — V. **Demanda nueva.**

**Herencia.** — V. **Sucesiones.**

**Herencia vacante.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 313. — V. **Sucesiones.**

**Hipoteca.** — Es derecho real, t. 1, p. 368. — Juez competente, t. 1, p. 326, 328, 368. — Necesidad de intimación previa en los casos en que la cosa ha pasado a poder de un tercero, t. 3, p. 50. V. **Acciones.** **Acreedor hipotecario.** **Locación.** **Procedimiento.**

**Hipoteca judicial,** t. 3, p. 290.

**Honorarios.** — Acción, t. 1, p. 238.

Los que causan los herederos sólo son a cargo de la masa si han sido en beneficio común, t. 4, p. 169. — Competencia, t. 1, p. 326. — Forma de fijarlos, t. 1, p. 237. — V. **Abogado.** **Procurador.**

**Identidad de cosa,** t. 3, p. 318. — V. **Cosa juzgada.**

**Identidad del acusado.** — V. **Acusado.** **Circunstancias personales.** **Dactiloscopia.**

**Identidades clásicas en la cosa juzgada.** — Su crítica, t. 3, p. 322. — V. **Cosa juzgada.**

**Idioma.** — Las actuaciones judiciales deben escribirse en español, t. 3, p. 268.

**Igualdad,** t. 2, p. 24.

**Igualdad ante la ley.** — No existía en la colonia, t. 1, p. 7. — Es conquista moderna, t. 1, p. 6. — **Garantía constitucional,** t. 1, p. 13, 15. — **Aplicaciones prácticas,** t. 1, p. 14. — V. **Garantías constitucionales.** **Régimen de la ley.**

**Impresiones digitales.** — Su fuerza probatoria, t. 2, p. 40. — V. **Acusado.** **Dactiloscopia.**

**Impuestos.** — **Principios generales** por que se rigen, t. 1, p. 336 337. — **Afectan la propiedad de todos,** t. 1, p. 278. — **El poder judicial no puede reverter la tasa de los mismos,** t. 1, p. 209. — **Jurisprudencia,** t. 1, p. 336. — **Interzuz,** t. 1, p. 285; t. 2, p. 211. — **Para la capital de la república,** t. 1, p. 397. — V. **Competencia.**

**Inamovilidad.** — V. **Magistrados judiciales.**

**Incapacidad.** — V. **Insania.**

**Incendio de vagones,** t. 1, p. 383.

**Incidente de falsedad.** — V. **Re-dargución de falsedad de documentos.** **Prueba.**

**Incidentes.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 275. V. **Competencia federal.**

**Incomunicación.** — ¿En qué consiste?, t. 2, p. 31, 324. — V. **Acusado.**

**Inconstitucionalidad de las leyes.** — **Facultad de los tribunales para declararlas,** t. 1, p. 200 s. — **Reglas que deben observar,** t. 1, p. 211 s. — V. **Casos de declaración,** etc.

**Indagatoria.** — V. **Acusado.** **Confesión.** **Declaración indagatoria.**

**Indicios.** — V. **Presunciones.** **Prueba compuesta.**

**Indultos.** — ¿Quién lo acuerda?, t. 2, p. 64. — V. **Excepciones.**

**Información posesoria.** — No produce cosa juzgada, t. 3, p. 318.

**Informe in voce,** t. 4, p. 11.

**Inglaterra.** — **Liberalismo de sus leyes,** t. 2, pág. 18. — V. **Harba corpus.**

**Injuia,** t. 2, p. 15. — En los escri-



- tos. t. 1, p. 239. — A un centenario, t. 1, p. 383. — V. Calumnias e injurias.
- Innovar.** — No está permitido en los juicios, t. 3, p. 239.
- Inquisición.** — V. Santo oficio. Tormento.
- Inquisitivo.** — V. Sistemas procesales.
- Insania.** — Se rige por las reglas del cód. civil, t. 4, p. 109. — Competencia, t. 4, p. 110. — Partes que pueden promover el juicio, t. 4, p. 111. — Curador provisorio, t. 4, p. 113. — La sentencia no hace cosa juzgada en el juicio penal, t. 4, p. 113.
- Inspección ocular,** t. 2, p. 96. — En qué consiste, t. 3, p. 231. Puede delegarse, t. 3, p. 232.
- Instancia.** — El recurso extraordinario no la cubre. — V. Absolución de la.
- Instancia única.** — Ventajas e inconvenientes, t. 1, p. 36. — Antecedentes argentinos, t. 1, p. 39. — Competencia originaria de la corte, t. 1, p. 40. — Inapelabilidad (en la justicia federal), t. 1, p. 40. — V. Doble instancia. Tribunales superiores.
- Instrucción.** — En la legislación comparada, t. 2, p. 73. — En el código, t. 2, p. 73. — Influencia que en ella ejercen los sistemas probatorios, t. 2, p. 83. — La de los sumarios corresponde a los jueces, t. 2, p. 311. — V. Sumario.
- Instrumento privado,** t. 3, p. 183, 190, 191. — V. Documentos.
- Instrumento público,** t. 3, p. 183. — Sus diversas clases, t. 3, p. 189, 190. — Fuerza obligatoria y probatoria, t. 3, p. 190. — V. Actas de sesiones de las cámaras.
- Interacción.** — Forma de hacerla, t. 3, p. 277. — V. Discordia.
- Interdante municipal.** — Es juez de faltas, t. 2, p. 211. — V. Confesión.
- Interdicción.** — V. Insania.
- Interdictos,** t. 1, p. 276, 333, 379, n. 1. — De adquirir, t. 4, p. 131. — De obra vieja, t. 4, p. 132. —
- El código de procedimiento no puede legislar sobre acciones posesorias, t. 4, p. 117. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 297. V. Acciones posesorias.
- Interés,** t. 3, p. 30. — V. Acciones.
- Interlocutoria.** — V. Sentencia.
- Intervención nacional,** t. 1, p. 20. — V. División de poderes.
- Íntimas convicciones.** — V. Prueba. Pruebas morales.
- Investigación.** — V. Maternidad.
- Inviolabilidad del domicilio.** — V. Domicilio.
- Inventario.** — Forma de practicarlo en las sucesiones, t. 4, p. 165.
- Inventario y avalúo.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 309. — V. Inventario.
- Iura curia novit,** t. 1, p. 194. — V. De oficio.
- Jactancia,** t. 1, p. 335; t. 3, p. 13. — Contra quien se acuerda, t. 4, p. 98. — Requisitos de la acción, t. 4, p. 99. — La jactancia debe versar sobre el patrimonio ajeno, t. 4, p. 100. — Prescripción, t. 4, p. 101. — Competencia, t. 4, p. 101. — Procedimiento, t. 4, p. 102. — V. Mensura.
- Jefe de policía.** — Su competencia para conocer en las faltas, t. 1, p. 307. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 277. — V. Faltas. Allanamiento de domicilio.
- Jubilación.** — V. Magistrados judiciales.
- Jueces.** — Forma como deben interpretar la ley, t. 1, p. 132. — Declaraciones abstractas, t. 1, p. 137. — Suplen el derecho, t. 1, p. 109. — Naturales, t. 1, p. 8. — De lo civil, t. 1, p. 89, 291. — De comercio, t. 1, p. 291. — De lo criminal, t. 1, p. 89, 293. — De lo correccional, t. 1, p. 89. — En comisión, t. 4, p. 13. — De instrucción, t. 1, p. 89. — Especiales, t. 1, p. 9. — Exhortados, t. 1, p. 349. — De la capital, t. 1, p. 91.





— De provincia: casos en que conocen de asuntos federales, t. 1, p. 399. — De paz, t. 1, p. 89, 340. — V. Capacidad. Juez. Juez natural. Juez de paz. Magistrados judiciales. Iura curia novit.

**Juegos de azar.** — V. Allanamiento de domicilio.

**Juez.** — Sus funciones, t. 3, p. 84. — V. Capacidad. De oficio. Estado moderno. Iura curia novit. Magistrados. Jueces.

**Juez natural,** t. 4, p. 9.

**Juez de paz,** t. 4, p. 5. — V. Justicia de paz.

**Juez de instrucción.** — Procede sin contralor, t. 2, p. 159. — V. Instrucción. Sumario.

**Juicio.** — Definición, t. 4, p. 99. — V. Reglas comunes y especiales a los juicios.

**Juicio arbitral.** — V. Juicio de árbitros.

**Juicio de árbitros.** — Principios generales, t. 4, p. 187. — Forma en que debe disciplinarse, t. 4, p. 189. — Los árbitros se diferencian de los peritos, t. 4, p. 191, 200. — Forma diversa de resolver las cuestiones por árbitros, t. 4, p. 195. — Cuestiones futuras en general, t. 4, p. 198. — Controversias no susceptibles de arbitraje, t. 4, p. 198. — Arbitraje forzoso, t. 4, p. 196, 200. — Arbitraje voluntario, t. 4, p. 196. — Capacidad para desempeñar el cargo de árbitros, t. 4, p. 197 s. — Capacidad para someter a árbitros, t. 4, p. 199. — Cláusula compromisoria, t. 4, p. 199. — Compromiso, t. 4, p. 202. — Procedimiento, t. 4, p. 205. — Recusación, t. 4, p. 205, 206. — Laudo, t. 4, p. 206. — Recursos, t. 4, p. 209.

**Juicio de insanía.** — V. Insanía.

**Juicio de jactancia.** — V. Jactancia.

**Juicio ejecutivo.** — Derecho comparado, t. 4, p. 48. — Forma en que debe modificarse, t. 4, p. 51. — Renuncia de trámites, t. 1, p. 29. — Para su procedencia deben

concurrir los requisitos de la acción, t. 4, p. 58. — Títulos que deben completarse, t. 4, p. 58. — Deberes del juez en el mismo t. 4, p. 37, 60. — Forma de trabar el embargo, t. 4, p. 21, 61. — Intervención del deudor en el primer período del juicio, t. 4, p. 61. — Citación de remate, t. 4, p. 62. — Excepciones articulables, t. 4, p. 62. — Prueba, t. 4, p. 68. — Sentencia, t. 4, p. 68. — p. 72, 74.

**Costas,** t. 4, p. 68. — Recursos, t. 4, p. 68. — Cosa juzgada, t. 4, p. 69. — Ejecución de la sentencia de trance y remate, t. 4, p. 72, 74. — V. Embargo. Tasadores.

**Juicio correccional.** — V. Causas correccionales. Sobreseimiento.

**Juicio criminal.** — V. Causas criminales.

**Juicio de Alimentos.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 307. — V. Alimentos.

**Juicio de desalojo.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 300. — V. Desalojamiento.

**Juicio de jurisdicción voluntaria.** — No producen cosa juzgada las decisiones que en ellos se dictan, t. 3, p. 302.

**Juicio de mensura.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 303. — V. Mensura.

**Juicio ordinario.** — Es la regla general, t. 3, p. 94. — Como consecuencia del ejecutivo, t. 1, p. 328. — El heredero desconocido debe hacer valer en esa forma sus derechos, t. 4, p. 162.

**Juicio ordinario en rebeldía.** — En el código de procedimiento civil de la capital. — V. Rebeldía.

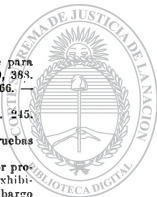
**Juicio previo.** — Personas que gozan de ese privilegio, t. 2, p. 52. — V. Garantías individuales. Senadores.

**Juicio simulado,** t. 3, p. 260.

**Juicios especiales.** — Lo es el de falsificación de documentos, t. 2,

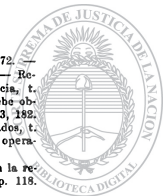


- p. 155. — Id. id. el de fuga de presos, t. 2, p. 155.
- Jurado.** — Funcionamiento en los países libres, t. 1, p. 13 s. — Es la justicia del pueblo, t. 1, p. 95. — En Francia, t. 1, p. 110. — Bibliografía sobre el mismo, t. 1, p. 95. — De imprenta, t. 1, p. 113. — Municipal, t. 1, p. 113. — V. Justicia permanente.
- Juramento,** t. 3, p. 154. — Decisorio, t. 3, p. 227. — Supletorio, t. 3, p. 228. — En la locación de servicios intelectuales, t. 3, p. 230. — Legal, t. 3, p. 230.
- Jurisdicción.** — ¿A quién corresponde?, t. 1, p. 272. — Su diferencia con la competencia, t. 1, p. 274, 275. — Contencioso-administrativa, t. 1, p. 275, 276. — Fraccionamiento, t. 1, p. 290. — Exclusiva del gobierno nacional, t. 1, p. 91, 348. — Concurrente, t. 1, p. 399. — V. Competencia. Competencia federal. Competencia territorial. Justicia civil. Id. de comercio. Id. penal. Navegación. Prórroga.
- Jurisdicción marítima.** — V. Competencia federal.
- Jurisdicción voluntaria.** — V. Juicio de jurisdicción voluntaria.
- Jurisprudencia.** — Su importancia, t. 1, p. 53. — Su influencia, t. 1, p. 85. — ¿Por qué actúa ordinariamente?, t. 1, p. 56. — Unificación, t. 1, p. 55, 293.
- Justicia.** — En la colonia, t. 1, p. 66, 67, 69, 70, 71 s. — En la república, t. 1, p. 86. — Es función del estado, t. 1, p. 5. — Defectos, t. 1, p. 116, 162. — En la provincia de Buenos Aires, t. 1, p. 123 s. — Civil, casos en que conoce, t. 1, p. 291. — Colonial argentina, su organización, t. 1, p. 63 s. — Comercial, casos en que conoce, t. 1, p. 291. — Es gratuita, t. 3, p. 278. — Correccional, t. 1, p. 295. — Penal, t. 1, p. 293. — V. Clero. Militares. Morosidad judicial.
- Justicia militar,** t. 1, p. 118. — Ventajas de su procedimiento, t. 2, p. 207. — V. Consejos de guerra. Ejército. Fueros personales. Presidente de la república.
- Justicia de la provincia de Buenos Aires,** t. 1, p. 123 s.
- Justicia de los territorios nacionales,** t. 1, p. 92 s. — V. Territorios nacionales.
- Justicia de paz.** — Su organización t. 1, p. 155 s. — Crítica, t. 1, p. 155 s. — Reformas en trámites, t. 1, p. 161 s. — V. Jueces. Jueces de paz.
- Justicia federal.** — Disposiciones constitucionales que la rigen, t. 1, p. 83, 375. — Cámaras federales, t. 1, p. 89. — Órganos en que ha sido investida, t. 1, p. 88, 372. — No pueden trabar su acción las leyes locales, t. 1, p. 373. — No puede el congreso ampliar su órbita de acción marcada por la constitución, t. 1, p. 375. — Prórroga, t. 1, p. 376. — V. Competencia. Competencia federal. Competencia territorial.
- Justicia mayor,** t. 1, p. 67, 70. — V. Cabildo.
- Justicia ordinaria de la capital.** — V. Capital federal.
- Justicia permanente.** — Es inferior al jurado, en materia penal, t. 1, p. 116. — V. Jurado.
- Justicia provincial,** t. 1, p. 102, 118, 123 s.
- Latín.** — En él no se usa la j, t. 3, p. 7.
- Laudo.** — V. Juicio de árbitros.
- Lecho cotidiano.** — No es embargable, t. 4, p. 23. — V. Embargo. Patrimonio.
- Legalización.** — De documentos extranjeros, t. 4, p. 43. — V. Actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia. Autenticación.
- Legatario.** — No son parte en el juicio testamentario, t. 4, p. 161.
- Legislación comparada,** t. 1, p. 59.
- Letra de cambio.** — V. Competencia territorial. Coobligados. Juicio ejecutivo.



**Letrados.** — V. Abogados.  
**Levantamiento del embargo.** — V. Tercería.  
**Ley.** — Orden de su aplicación, t. 1, p. 214. — Supremacía, t. 1, p. 199. — Inconstitucionalidad, t. 1, p. 209, 211. — Deberes del juez con relación a su aplicación, t. 1, p. 198. — Supletorias, t. 1, p. 213, 216. — Constitucionalidad, t. 1, p. 200. — Extranjera, t. 1, p. 217. — Especial, t. 1, p. 380 s. — De defensa social, t. 1, p. 380, 384. — De prenda agraria, t. 1, p. 380. — De quiebras, t. 1, p. 152. — Ex post facto, t. 1, p. 12, 31 s. — Mixta, t. 1, p. 383. — Procesal, t. 1, p. 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 53. — V. Derecho procesal. *Iura curia novit*. Retroactividad.  
**Ley extranjera.** — V. Prueba.  
**Ley inconstitucional.** — V. Inconstitucionalidad de las leyes.  
**Ley sentencia** — V. Bill of attainder. *Ley*. *Leyes ex post facto*. Rozas.  
**Leyes citadas en esta obra,** t. 4, p. 217 s.  
**Leyes españolas.** — V. Ley.  
**Leyes ex post facto.** — No pueden crear jueces, para conocer de juicios criminales determinados, t. 1, p. 13.  
**Leyes inconstitucionales.** — V. Casos de declaración de inconstitucionalidad. Ley inconstitucional.  
**Leyes locales.** — V. Impuestos. Recurso extraordinario. Lotería nacional.  
**Leyes nacionales.** — No comprenden los códigos, t. 1, p. 380. — V. Prueba.  
**Leyes reformativas del código de procedimiento civil de la capital,** t. 4, p. 335.  
**Leyes preexistentes.** — V. Ley.  
**Leyes supletorias.** — V. Ley.  
**Libertad de defensa.** — V. 245. — Su inviolabilidad, t. 1, p. 17, 253. — Audiencia de las partes, t. 1, p. 253. — V. Defensa en juicio.  
**Libertad de imprenta.** — La justi-

cia federal es incompetente para conocer de ella, t. 1, p. 380, 383.  
**Libertad provisoria,** t. 1, p. 166. — V. Excarcelación.  
**Libre representación,** t. 1, p. 245. — V. Procuradores.  
**Libres convicciones.** — V. Pruebas morales.  
**Libros de comercio.** — Su valor probatorio, t. 3, p. 192. — Exhibición, t. 3, p. 197. — V. Embargo preventivo.  
**Litis-consorcio.** — Casos en que se produce, t. 3, p. 104.  
**Litis-contestatio,** t. 1, p. 60. — Error de Escribano y opinión de otros autores, t. 3, p. 20. — Su concepto, t. 3, p. 81, 83, 287. — V. Relación procesal. Vinculación procesal.  
**Litis-expensas.** — Casos en que proceden, t. 4, p. 107. — V. Alimentos.  
**Litis-pendencia,** t. 1, p. 322, 323, 325; t. 3, p. 52. — V. Excepciones.  
**Locación.** — El acreedor hipotecario debe ser citado en el juicio en que se persigue la cosa que le está afectada, t. 3, p. 105.  
**Bienes embargables.** — En la locación de predios, t. 4, p. 27. — V. Desalojamiento. Juramento.  
**Locus regit actum,** t. 1, p. 25 s.  
**Lógica.** — V. Sana crítica.  
**Lotería nacional.** — La ley que la rige es de carácter local, t. 1, p. 383.  
**Lotés del hogar.** — No son embargables, t. 4, p. 24.  
**Magistrados judiciales.** — Condiciones mínimas para ejercer el cargo, t. 1, p. 169. — Designación y ascenso, t. 1, p. 173 s. — Inamovilidad, t. 1, p. 121, 188 s., 211, 285. — Incompatibilidades, t. 1, p. 179, 242. — Jubilación, t. 1, p. 192. — Juramento, t. 1, p. 178. — Jurisdicción disciplinaria, t. 1, p. 183, 198. — Pensión, t. 1, p. 193. — Responsabilidad civil, t. 1, p. 183. — Sanciones, t. 1, p. 179 s. — Son conservadores por



- temperamento, t. 2, p. 26. — V. Jueces.
- Mandatario.** — Deberes respecto de su personería, t. 3, p. 69, 102, 106. — No está obligado a declarar como testigo, t. 3, p. 103. — No puede enagenar los bienes pendientes la acción de divorcio, t. 3, p. 239. — V. Caucción de rato et grato. Procuradores.
- Mandato.** — Conferido en el extranjero, t. 3, p. 107. — ¿Cuándo termina?, t. 3, p. 107, 108.
- Marca,** t. 3, p. 182.
- Marido.** — Figura en el proceso como substituto procesal, como representante de la esposa, t. 3, p. 103. — No puede enagenar los bienes pendientes la acción de divorcio, t. 3, p. 239.
- Maternidad.** — Prohibición de su investigación, t. 3, p. 46.
- Matrimonio.** — Casos en que extingue la acción o la pena, t. 2, p. 65.
- Máxima de experiencia,** t. 3, p. 112. — V. Prueba.
- Mayoría.** — V. Tribunales superiores.
- Medianería,** t. 1, p. 335.
- Medios.** — Sus diferencias con la causa, t. 3, p. 321. — V. Cosa juzgada.
- Medios de prueba.** — Su enumeración en el código de procedimiento, t. 4, p. 235. — V. Código de procedimiento civil de la capital. Confesión. Documentos. Inspección ocular. Peritos. Presunciones. Testigos.
- Mejor proveer,** t. 1, p. 196, 325; t. 2, p. 164.
- Memoria.** — Casos en que procede su presentación, t. 4, p. 9.
- Menor emancipado.** — Su capacidad para estar en el juicio civil y penal, t. 3, p. 102.
- Menores de 14 años.** — V. Testigo.
- Mensura, deslinde, etc.,** t. 1, p. 335. — Competencia exclusiva de los tribunales locales, t. 1, p. 377. — Su objeto, t. 4, p. 270. — Cuando se hace contencioso, t. 4, p. 172. — Solo procede para los predios rurales, t. 4, p. 172.
- Competencia,** t. 4, p. 173. — Requisitos para su procedencia, t. 4, p. 173. — Reglas que debe observar el perito, t. 4, p. 173, 182. — Citación de los interesados, t. 4, p. 175. — Oposición a la operación, t. 4, p. 181, 183.
- Militares.** — Su influencia en la revolución argentina, t. 1, p. 118. — V. Justicia.
- Ministerio público.** — Origen, t. 1, p. 219. — No debe ser oído en el incidente sobre redargución de falso de un documento, t. 3, p. 209. — ¿A quién representa?, t. 1, p. 220. — Organización, t. 1, p. 221. — Atribuciones, t. 1, p. 222; t. 4, p. 162. — Unidad, t. 1, p. 224. — Deficiencias, t. 1, p. 224. — Reforma en la provincia de Buenos Aires, t. 1, p. 227. — Pupilar, t. 1, p. 227. — Defensores de menores, t. 1, p. 228.
- Ministros extranjeros,** t. 1, p. 388, 392. — No pueden ser enjuiciados, t. 2, p. 53. — V. Competencia federal.
- Mora,** t. 3, p. 34.
- Verdad judicial,** t. 1, p. 235. — Sanciones legales contra la misma, t. 2, p. 163, 263, 422.
- Motivación.** — V. Sentencia.
- Muebles.** — No se pueden embargar si son de indispensable uso, t. 4, p. 23.
- Multas.** — V. Coerción.
- Muerte.** — V. Acusado.
- Mujer casada.** — Venia, t. 1, p. 332. — Nacionalidad y domicilio, t. 1, p. 395. — Sus deberes, t. 4, p. 17, 35, 38.
- Municipalidad,** t. 1, p. 393. — Casos en que es juez de faltas, t. 2, p. 210.
- Municipalidad de la capital.** — Casos en que puede reclamarse de sus actos ante la justicia, t. 1, p. 286.
- Nacionalidad o vecindad,** t. 1, p. 330, 331, 337.
- Navegación.** — Lo referente a la misma constituye ley especial, t. 1, p. 380. — V. Competencia fo-



eral. Jurisdicción marítima.  
**Nombramiento de jueces.** — V. Magistrados judiciales.  
**Nombre de la acción.** — V. Acciones. Nota. — V. Motivación.  
**Notificaciones.** t. 1, p. 253. — Forma, solemnidades y requisitos, t. 1, p. 253, 257, 258; t. 2, p. 45, 293. — Por cédulas, t. 1, p. 253. — Por nota, t. 1, p. 255. — Personales, t. 1, p. 254; t. 4, p. 162. — Por edictos, t. 1, p. 256; t. 4, p. 162. — Por correo, t. 1, p. 257. — En el domicilio del litigante, t. 1, p. 258. — V. Resoluciones judiciales.  
**Novación.** — ¿La produce la sentencia?, t. 3, p. 293.  
**Nullidad.** — V. Recursos.  
**Nullidad de matrimonio,** t. 1, p. 329.  
**Obligaciones.** — V. Condición resolutoria. Cumplimiento de sentencia.  
**Obligaciones accesorias,** t. 1, p. 328.  
**Obligaciones indivisibles,** t. 3, p. 313.  
**Obligaciones a oro,** t. 1, p. 313.  
**Obligaciones a plazo,** t. 3, p. 29.  
**Obligaciones solidarias,** t. 3, p. 318.  
**Obra nueva.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 300. — V. Acciones posesorias.  
**Obras sanitarias de la nación.** — V. Competencia.  
**Oficio.** — V. De oficio.  
**Opinión pública.** — Eficacia de su contralor, t. 1, p. 187.  
**Oposición.** — Casos en que funciona como recurso, t. 3, p. 337.  
**Oralidad,** t. 1, p. 36, 44 s., 62, 79, 116, 166, 234, 253; t. 2, p. 22, 74.  
**Ordenanzas de aduana.** — Procedimiento que se observa en las faltas, t. 2, p. 211.  
**Orden público,** t. 1, p. 27 s., 29.  
**Oscuridad de la ley.** — V. Ley.  
**Pacto de cuota litis.** V. Abogados.  
**Pagaré a la orden,** t. 1, p. 395.  
**Pago,** t. 1, p. 387.  
**Partes.** — Concepto de las mismas, t. 3, p. 99. — Su capacidad, t. 3, p. 100, 102. — Sólo ellas pueden apelar, t. 1, p. 8. — V. Litis consorcio. Personería. — Concurso

civil. Mensura. Procedimiento. Substitución procesal. Sucesión.  
**Patentes de invención,** t. 1, p. 383.  
**Paternidad.** — Investigación de la misma, t. 3, p. 137.  
**Patrimonio.** — Su concepto, t. 4, p. 19. — Es lo único que puede ceder al acreedor, t. 4, p. 20. — Cosas inembargables, t. 4, p. 23. — Limitación de su afectación por contrato, t. 4, p. 26.  
**Pena de muerte.** — Condiciones de su aplicación, t. 2, p. 269.  
**Pensión.** — V. Magistrados judiciales. Salarios.  
**Pensión alimenticia.** — Es inembargable, t. 4, p. 26. — V. Concurso.  
**Perdón.** — V. Condonación. Excepciones.  
**Perención de instancia,** t. 1, p. 259 s. — Definición, t. 3, p. 244. — Sus fundamentos, t. 3, p. 245. — Situación anterior a la ley número 4550, t. 3, p. 248. — En los juicios de jurisdicción voluntaria, t. 3, p. 249. — Cómputo del término, t. 3, p. 250. — ¿Puede permitirse la perención?, t. 3, p. 252. — Interrupción, t. 3, p. 242. — Desde cuando empieza a correr, t. 3, p. 252. — Efectos, t. 3, p. 254. — Alcance de las palabras "de pleno derecho", usadas por la ley núm. 4550, t. 3, p. 255.  
**Periodismo.** — V. Libertad de imprenta.  
**Perito.** — V. Juicio de árbitros.  
**Perito árbitro.** — V. Juicio de árbitros.  
**Peritos,** t. 2, p. 342. — Sus diferencias con el testigo, árbitro e intérprete, t. 2, p. 118; t. 3, p. 213. Su importancia, t. 2, p. 119. — Casos en que procede su nombramiento, t. 2, p. 119; t. 3, p. 211. — En las sucesiones, t. 4, p. 166. — Número de peritos, t. 2, p. 120; t. 3, p. 217. — Deben tener título de competencia, t. 2, p. 121; t. 3, p. 213. — Juramento, t. 2, p. 121. — Fuerza de esta clase de prueba, t. 2, p. 123, 262. — Su designación, t. 3, p. 214. — Su recusación, t. 3, p. 217. — Sancio-



nes contra los mismos, t. 3, p. 218. — Forma de practicar la diligencia, t. 3, p. 218. — Fuerza probatoria de su dictamen, t. 3, p. 219. — Su honorario, t. 3, p. 219. — No están obligados a aceptar el cargo, t. 3, p. 218.

**Persona**, t. 3, p. 315.

**Personas jurídicas**. — V. Demandas contra la nación.

**Personas de domicilio ignorado**. — V. Citación.

**Personería**. — Debe justificarse en el primer escrito, t. 3, p. 69. — En el juicio de ejecución de sentencia, t. 4, p. 19.

**Piano**. — V. Embargo.

**Poder**. — V. Mandato.

**Poder público**. — V. Demandas contra la Nación.

**Poseción**. — V. Acciones posesorias.

**Porias**.

**Poseción hereditaria**. — No es necesaria para el que fué declarado heredero, t. 4, p. 162.

**Posiciones**. — V. Confesión. — Querrelante. Tribunales superiores.

**Preclusión**, t. 1, p. 249; t. 3, p. 235, 263; t. 4, p. 8. — Sus diferencias con la cosa juzgada, t. 3, p. 323. — Rige en 2.ª instancia, t. 4, p. 8.

**Proelación de las leyes**. — V. Ley.

**Prensa**, t. 2, p. 14, 15. — V. Libertad de imprenta.

**Prescripción**, t. 2, p. 69. — ¿Desde cuándo corre la que emerge de un delito?, t. 3, p. 49. — La demanda la interrumpe, t. 3, p. 298. — V. Excepciones.

**Presidente de la república**. — Su intervención en la justicia militar, t. 2, p. 104. — V. Indultos. Justicia militar.

**Presunciones**. — ¿En qué consisten?, t. 2, p. 129, 349; t. 3, p. 220. — Iuris et de iure, t. 3, p. 221, 222. — Iuris tantum, t. 3, p. 221. — De hombre, t. 3, p. 223. — Disposiciones del código civil al respecto, t. 3, p. 221. — Las legales no pertenecen a la teoría de la prueba, t. 3, p. 223. — Sus requisitos, t. 3, p. 224. — Es ad-

misible una sola presunción, t. 3, p. 225. — Forma de legislarlas, en el sistema de pruebas legales, t. 2, p. 129. — No se permite deducir una presunción de otra, t. 3, p. 225. — La prueba del fraude en los actos jurídicos, t. 3, p. 226. — Su fundamento, t. 2, p. 136. — Requisitos, t. 2, p. 138. — No es posible catalogarlas, t. 2, p. 139. — Casos resueltos por la jurisprudencia, t. 2, p. 139. — V. Prueba compuesta.

**Presupuestos procesales**. — V. Ejecución de sentencia. Excepciones. Requisitos procesales.

**Prevención**. — Formas en que procede, t. 2, p. 79. — V. Sumario.

**Prisión por deudas**. — No procede en nuestro derecho, t. 3, p. 212.

**Prisión preventiva**, t. 2, p. 352. — Sus propósitos, t. 2, p. 167. — Indemnización cuando es injusta, t. 2, p. 169.

**Procedimiento**, t. 1, p. 161. — Su reforma, t. 1, p. 162, 167, 227. — Administrativo, t. 1, p. 21. — Escrito, t. 1, p. 48, 118, 120, 225. — Romano, t. 1, p. 59. — Extraordinario, t. 1, p. 61. — Formulario, tomo 1, p. 60. — De oficio, t. 1, p. 193. — Mejor proveer, t. 1, p. 196. — Facultad de las partes para modificarlo, t. 3, p. 86. — Reglas comunes a todos los juicios y especiales para cierta clase de juicios, t. 3, p. 95. — Renuncia a ciertos trámites, t. 3, p. 96. V. Actos públicos y procedimientos judiciales, etc. Código de procedimiento civil de la capital. Continuidad del procedimiento. Publicidad.

**Procedimiento acusatorio**. — V. Sistemas procesales.

**Procedimiento correccional**. — V. Causas correccionales.

**Procedimiento de apremio**. — Casos en que procede, t. 4, p. 18. — V. Ejecución de sentencia.

**Procedimiento de oficio**. — V. De oficio.

**Procedimiento inquisitivo**. — Sistemas procesales.



**Procedimientos judiciales**, t. 3, p. 181, 187.

**Procedimiento mixto**. — V. **Sistemas procesales**.

**Procedimiento ordinario en 2.ª instancia**. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 253.

**Procedimiento penal**, t. 2, p. 5. — Definición, t. 2, p. 9. — Importancia, t. 2, p. 9. — Objeto, t. 2, p. 17. — Principios fundamentales, t. 2, p. 19. — En la colonia, t. 2, p. 10. — En los primeros tiempos de la nacionalidad, t. 2, p. 10. — Leyes posteriores a la constitución de 1853, t. 2, p. 26. — V. **Código de procedimiento**.

**Procedimiento sobre faltas**. — V. **Faltas**.

**Procesado**. — V. **Acusado**.

**Proceso**. — Constitución del mismo, t. 3, p. 93. — Se desarrolla en dos periodos, t. 4, p. 17. — V. **Relación procesal**.

**Procuradores**, t. 1, p. 27, 242. — No pueden celebrar pacto de cuota litis, t. 1, p. 244. — Ley que los rige, t. 1, p. 243. — No pueden repreguntar, t. 3, p. 155. — V. **Firma de letrado**. **Mandatario**

**Prórroga**, t. 1, p. 297, 310, 399. — V. **Términos**. **Tiempo**.

**Protesta**, t. 3, p. 185.

**Providencias interlocutorias**. — Sus caracteres, t. 3, p. 266.

**Provincias**. — Organizan su justicia, t. 1, p. 8, 120, 123. — Son demandables, t. 1, p. 392. — V. **Actos públicos**, etc. **Congreso**. **Federalismo**. **Gobernadores**.

**Prueba**. — Definición, t. 3, p. 113, 123. — Diversos sistemas, t. 3, p. 116. — Distinción entre forma y prueba, t. 3, p. 118, 120. — Preconstituida, t. 3, p. 116. — Oral, t. 3, p. 118. — Escrita, t. 3, p. 118. — Testimonial, t. 1, p. 266. — Casos en que procede, t. 2, p. 375; t. 4, p. 9. — Término para producirla, t. 2, p. 163; t. 3, p. 126. — Término extraordinario, t. 3, p. 127, 150. — Diversos medios, t. 2, p. 87; t. 3, p. 117, 118, 123.

— No es necesaria en los hechos notorios, t. 3, p. 114. — Testigos que declaran ante la policía, t. 2, p. 27. — Ley nacional, t. 3, p. 115. — Ley extranjera, t. 3, p. 115. — Hechos negativos, t. 3, p. 125. — Audiencia, t. 3, p. 129.

— Forma para empezar las audiencias, t. 3, p. 129. — No cambia con el cambio de jurisdicción, t. 3, p. 224. — Sistemas para su apreciación, t. 2, p. 84, 104; t. 3, p. 116. — Negligencia, t. 3, p. 119. — Reiteración, t. 3, p. 119. — En segunda instancia, t. 3, p. 119. — Apreciación de la misma, t. 3, p. 119. — V. **Dactiloscopia**. **Documentos**. **Contratos**. **Impresiones digitales**. **Indicios**. **Inspección ocular**. **Libres convicciones**. **Peritos**. **Presunciones**. **Prueba compuesta**. **Pruebas legales**. **Pruebas morales**. **Prueba material**. **Quipos**. **Sumario**. **Tarja**. **Testigos**. **Confesión**. **Código de procedimiento civil de la capital**.

**Prueba circunstancial**. — V. **Prueba compuesta**. **Indicios**.

**Prueba compuesta**. — Su diferencia con la prueba indiciaria, t. 2, p. 133. — Su acumulación, t. 3, p. 223.

**Prueba indiciaria**. — V. **Prueba compuesta**.

**Prueba instrumental**. — Forma de producirla, t. 3, p. 202. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 238. — Valor, t. 3, p. 204. — V. **Documentos**.

**Prueba de confesión**. — V. **Confesión**. **Prueba**.

**Prueba de inspección ocular**, t. 4, p. 247.

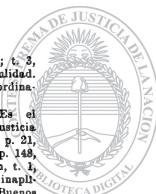
**Prueba de peritos**, t. 4, p. 240. — V. **Código de procedimiento civil de la capital**. **Prueba**.

**Pruebas de presunciones**. — V. **Presunciones**.

**Prueba de testigos**. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 243. — V. **Prueba**. **Testigos**.

**Prueba material**, t. 3, p. 139.

**Pruebas legales**, t. 1, p. 41, 116, 120, 133; t. 2, p. 23, 112, 116, 120.



**Pruebas morales**, t. 2, p. 22, 23, 112, 116, 123, 129 n. 29; t. 3, p. 157.

**Publicación de probanzas**, t. 3, p. 56. — V. Prueba.

**Publicidad**, t. 1, p. 43, 56, 166; t. 2, p. 22, 23.

**Querrela**. — Sus formas, t. 2, p. 77, 303. — V. Acciones. Sumario.

**Querrelante**. — No está obligado a absolver posiciones que tiendan a la confesión de un delito, t. 2, p. 99.

**Quebra**, t. 1, p. 27, 149, 341.

**Quipos**, t. 3, p. 182.

**Real audiencia**, t. 3, p. 273. — V. Audiencia de Buenos Aires.

**Rebeldía**, t. 1, p. 265, 267. — Se diferencia del decaimiento, t. 1, p. 266. — Casos en que el acusado o acusador pueden incurrir en ella, t. 2, p. 41 y sgs., 298. — V. Confesión ficta. Embargo preventivo. Silencio.

**Rebelión**, t. 1, p. 381.

**Reconvención**, t. 1, p. 326. — Su concepto, t. 3, p. 87.

**Recurso de queja**. — En el código de procedimiento de la capital, t. 4, p. 257.

**Recurso de inaplicabilidad de ley**. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 258.

**Recurso de inconstitucionalidad**. — En el código de procedimiento de la capital, t. 4, p. 264.

**Recurso libre**. — Tramitación en 2.ª instancia, t. 4, p. 10.

**Recurso en relación**. — Tramitación en 2.ª instancia, t. 4, p. 10.

**Recursos**. — Principios generales, t. 3, p. 335; t. 4, p. 7. — Forma de disciplinarlos, t. 1, p. 41. — De reposición, t. 2, p. 282. — De apelación, t. 2, p. 382, 421; t. 3, p. 339, 342. — De nulidad, t. 2, p. 381, 421; t. 3, p. 346. — De revisión, t. 2, p. 151, 263, 391; t. 3, p. 352. — De queja, t. 2, p. 385; t. 3, p. 351. — Límite de la competencia del tribunal de apelación, t. 3, p. 306; t. 4, p. 8. — Se puede apelar de los fundamentos del fallo, t. 3, p. 308. — Contra los fallos de los tribuna-

les superiores, t. 2, p. 391; t. 3, p. 336. — V. Acción de nulidad.

**Apelación. Recurso extraordinario**. — Es el punto de unión entre la justicia nacional y provincial, t. 1, p. 21, 145 s. — Su origen, t. 1, p. 148. — Reglas que lo gobiernan, t. 1, p. 150 s.; t. 4, p. 8. — De inaplicabilidad (provincia de Buenos Aires) t. 1, p. 131 s. — De inconstitucionalidad en materia penal (provincia de Buenos Aires), t. 1, p. 143. — V. Códigos. Leyes locales. Tribunal superior de provincia.

**Recursos varios**. — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 250 y 252. — V. Recursos.

**Recusación**, t. 2, p. 283; t. 4, p. 268. — V. Capacidad. Mandatario.

**Redargución de falsedad de documentos**, t. 3, p. 205, 208.

**Reemplazo de los jueces etc.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 272.

**Referé**, t. 1, p. 162. — V. Encuesta.

**Reformas procesales**. — V. Leyes citadas en esta obra.

**Regidores**, t. 1, p. 62 y 72. — V. Alcaldes. Cabildos.

**Régimen de la ley**, t. 1, p. 277. — V. Igualdad ante la ley.

**Reglas procesales comunes y especiales a los juicios**, t. 3, p. 95.

**Reivindicación**, t. 1, p. 366, 402. — V. Acción hipotecaria. Embargo. Competencia.

**Relación procesal**, t. 1, p. 217. — Es puramente formal, t. 3, p. 93; t. 4, p. 161. — V. Juicio ejecutivo. Litis contestatio. Mensura. Proceso.

**Remoción de causas**, t. 1, p. 146. — V. Recursos.

**Rendición de cuentas**, t. 1, p. 242.

**Remuncia**, t. 3, p. 96.

**Renuncia de trámites**. — V. Juicio ejecutivo.

**Reo**. — V. Acusado.

**Reposición**. — V. Recursos.





**Repreguntas.** t. 3, p. 150, 155. — V. Procuradores.

**Requisitos procesales.** — Su concepto, t. 3, p. 20. — Nombre en nuestro derecho, t. 3, p. 23. — En el juicio de ejecución de sentencia, t. 4, p. 18.

**Resoluciones inapelables.** t. 3, p. 340.

**Resoluciones judiciales.** — Para mejor proveer, t. 1, p. 196. — V. Notificaciones. De oficio.

**Responsabilidad.** — Fondos de propiedad de la nación, t. 1, p. 283.

**Restitución.** — V. Acción de nulidad.

**Retroactividad.** — Alcance de ella en lo que se refiere a las leyes procesales, t. 1, p. 30 s.

**Revolución de Mayo,** t. 1, p. 118. — V. Justicia.

**Revoluciones políticas.** — Su influencia en la justicia, t. 1, p. 118; t. 2, p. 10.

**Rey,** t. 1, p. 61.

**Ropa.** — Casos en que son embargables, t. 4, p. 23.

**Rosas.** — Su enjuiciamiento, t. 2, p. 27. — V. Bill of attainder. Leyes ex post facto.

**Salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones.** — No son embargables sino en cierta proporción, t. 4, p. 24, 25.

**Sana crítica.** — «En qué consiste», t. 3, p. 157, 177. — V. Pruebas legales. Pruebas morales.

**Santo oficio,** t. 1, p. 63.

**Secretario.** — V. Auxiliares de la justicia.

**Secreto,** t. 1, p. 116; t. 2, p. 23, 306. — Profesional, t. 3, p. 145. — V. Abogado. Testigo.

**Segunda instancia.** — Procedimiento ante la misma, t. 2, p. 386; t. 4, v. 9.

**Seguro de vida.** — No responde de las obligaciones del constituyente, t. 4, p. 24.

**Senado romano.** — Su jurisdicción en los delitos, t. 1, p. 61.

**Senadores.** — Sus privilegios judiciales, t. 2, p. 52.

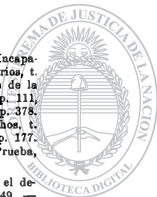
**Sentencia,** t. 1, p. 60; t. 3, p. 85. —

**Definición,** t. 3, p. 273. — Sus formas, t. 2, p. 380; t. 3, p. 267, 268. — Motivación, t. 3, p. 278. — Término para que se pronuncie, t. 3, p. 253. — Sistema seguido por la provincia de Buenos Aires al respecto, t. 3, p. 254. — Jurisdicción voluntaria: no reviste en tales juicios el carácter de tal, t. 3, p. 255. — Dictada fuera del territorio, t. 3, p. 257. — Su importancia, t. 3, p. 261. — Divergencias clases, t. 3, p. 261. — Sus caracteres, t. 3, p. 260. — Su clasificación, t. 3, p. 261, 263. — Definitivas, t. 3, p. 262, 263, 264; t. 4, p. 13. — Interlocutoria, t. 3, p. 265, 266, 274. — Interlocutorias simples, t. 3, p. 266. — Formas de la misma, t. 3, p. 15, 264, 271, 272. — Separación del hecho y del derecho, t. 3, p. 270. — De las cámaras de apelación, t. 3, p. 267; t. 4, p. 8, 13. — De las cámaras federales, t. 3, p. 269. — De los tribunales de la provincia de Buenos Aires, t. 3, p. 270. — Motivación, t. 3, p. 275. — Costas en la misma, t. 3, p. 275. — Sus efectos, t. 3, p. 283. — No puede modificarla el juez que la pronunció, t. 3, p. 22. — Laudo de los amigables compositores, t. 3, p. 259. — Resolución de particulares, t. 3, p. 256. — Su vinculación con la demanda, t. 3, p. 285. — Transacción, t. 3, p. 259. — Cuestiones que deba plantearse, t. 3, p. 268. — De países extranjeros, t. 1, p. 20; según que exista o no tratado, t. 4, p. 46. — Ejecución de las mismas, t. 2, p. 393; condena a cantidad líquida, t. 4, p. 28; id. a cantidad ilíquida procedente de frutos, t. 4, p. 32; id. a entregar una cosa, t. 4, p. 34; id. a hacer, t. 4, p. 34; id. a no hacer, t. 4, p. 35. — En el código de procedimiento de la capital, t. 4, p. 249. — V. Embargo, Coerción. Fallos. Novación.

**Sentencia de remate.** — V. Cumplimiento de la sentencia de remate.



- Ejecución de sentencia. Juicio ejecutivo.
- Sentencia penal.** — Sus efectos sobre la acción civil de daños y perjuicios, t. 3, p. 57. — V. Cosa juzgada. Insania. Sobreseimiento.
- Separación de bienes,** t. 1, p. 322. — V. Embargo preventivo.
- Sepulcros.** — No son embargables, t. 4, p. 24.
- Servidumbres.** — V. Acciones posesorias.
- Silencio,** t. 3, p. 87. — Influencia en la marcha del proceso, t. 3, p. 97. — V. Rebeldía. Confesión.
- Sistemas procesales,** t. 2, p. 17. — Procedimiento acusatorio, t. 2, p. 18, 19, 74. — Inquisitivo, t. 2, p. 18, 19, 74. — Mixto, t. 2, p. 18, 19.
- Sobreseimiento,** t. 2, p. 367. — Es una forma de terminar los juicios, t. 2, p. 143. — En qué casos puede dictarse previsorio, t. 2, p. 145. — Su influencia en la acción civil, t. 3, p. 57, 304, 329. — En cuáles definitivo, t. 2, p. 146. — V. Sentencia penal.
- Sobreseimiento provisorio.** — V. Cosa juzgada. Sobreseimiento.
- Sociedad.** — Cuestiones entre socios, t. 1, p. 396. — Embargo de sus bienes, t. 4, p. 27.
- Sociedades anónimas.** — Competencia para conocer en sus asuntos, t. 1, p. 293.
- Sociedad conyugal.** — V. Marido. Mujer casada.
- Substitución procesal,** t. 3, p. 102. — V. Marido. Desalojamiento.
- Sucesiones,** t. 3, p. 316. — Definición t. 4, p. 154. — Testamentaria, t. 4, p. 155, 161. — Abintestada, t. 4, p. 155, 161. — Vacante, t. 4, p. 155, 162, 163. — Justificación del fallecimiento, t. 4, p. 155. — Capacidad para iniciar e intervenir en el juicio, t. 4, p. 156, 161. — Procedimientos comunes, t. 4, p. 165. — Alcabala, t. 4, p. 157. — Competencia, t. 4, p. 159. — Medidas de seguridad, t. 1, p. 149, 323, 401; t. 4, p. 160. — Citación a los interesados, t. 4, p. 161. — Administración del caudal, t. 4, p. 164. — Cuentas, t. 4, p. 164. — Liquidación y división de la herencia, t. 4, p. 167. — V. Avalúo. Competencia. Consejo general de educación. Contador. Cosa juzgada. Curador. — Cuenta particionaria. División de herencia. Inventario. Honorarios. Peritos. Posesión hereditaria.
- Sueldos.** — V. Salarios.
- Sumario.** — Su objeto, t. 2, p. 73, 306. — Valor de las pruebas del mismo, t. 2, p. 73, 85. — Formas de iniciarse, t. 2, p. 75, 300. — Su conclusión, t. 2, p. 366. — V. Instrucción.
- Superior tribunal de provincia.** — ¿Qué es?, t. 1, p. 153. — V. Recurso extraordinario.
- Suprema corte.** — Sus facultades colegislativas, t. 1, p. 161. — Competencia, t. 1, p. 404 s. — Competencia extraordinaria, t. 1, p. 149. — Como juez de cuestiones de competencia, t. 1, p. 149. — Casos en que es tribunal de tercera instancia, t. 1, p. 264. — Perención de instancia ante ella, t. 1, p. 265. — V. Competencia federal. Recursos. Valor litigioso. Suprema corte de la provincia de Buenos Aires.
- Suprema corte de la provincia de Buenos Aires,** t. 1, p. 127 s., 300.
- Supremacía constitucional.** V. Ley.
- Tachas,** t. 1, p. 43; t. 2, p. 379; t. 3, p. 158, 162, 167, 168; t. 4, p. 246.
- Tachas de tachas.** — No son admisibles, t. 3, p. 165.
- Tarifa,** t. 3, p. 182.
- Tasación.** — V. Avalúo.
- Tasadores.** — En el juicio ejecutivo, t. 3, p. 216.
- Tasa legal,** t. 3, p. 119. — V. Prueba.
- Tenedor de inmueble.** — Acciones posesorias. Despojo.
- Tenencia de hijos,** t. 1, p. 329.
- Tercera instancia,** t. 1, p. 39, 133, 264, 404 s. — V. Suprema corte.



**Tercera.** — Principios generales, t. 4, p. 87. — Casos en que no es necesario deducir *tercería* para el levantamiento del embargo, t. 4, p. 89. — Condiciones de forma y fondo de las *tercerías*, t. 4, p. 88, 89. — De dominio, t. 4, p. 88, 90. — De mejor derecho, t. 4, p. 88, 90. — Competencia, t. 4, p. 88, 90. — V. *Litis consorcio*. Traba de embargo.

**Terceros.** — Casos en que procede embargo de sus bienes, t. 2, p. 366. — Sus derechos en los juicios, t. 3, p. 338. — V. *Acciones posesorias*. *Acreedores*. Embargo. *Tercerías*. Traba de embargo.

**Términos.** — Principios generales, t. 1, p. 249. — *Improrrogables*, t. 1, p. 250. — *Comunes*, t. 1, p. 251. — *Leyes* que los rigen, t. 1, p. 250. — Se suspenden en ciertos casos, t. 1, p. 252. — Para fallar, t. 3, p. 237. — V. *Cargo*. *Días hábiles*. *Tiempo*.

**Territorios nacionales.** — Su organización, t. 1, p. 92. — Carácter de su justicia, t. 1, p. 93.

**Testamentarias.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 306. V. *Sucesiones*.

**Testigo singular.** — V. *Testigos*.

**Testigos.** t. 1, p. 29; t. 2, p. 105. — Definición, t. 2, p. 104. — Sus garantías, t. 2, p. 106. — Limitaciones de esta clase de prueba, t. 3, p. 143. — Obligación de declarar, t. 2, p. 114, 329, 335; t. 3, p. 145. — Forma de citarlos, t. 2, p. 332. — Su examen, t. 2, p. 333. — Juramento, t. 2, p. 106. — Diversas clases, t. 2, p. 107, 329. — Formas en que deben declarar, t. 3, p. 153. — Secreto profesional, t. 3, p. 145. — Quiénes están excluidos de declarar, t. 3, p. 146. Número de testigos, t. 3, p. 147. — Domicilio y profesión, t. 3, p. 149. — Único, t. 3, p. 172. — *Hábiles*, t. 2, p. 107. — Sobre hechos inverosímiles, t. 3, p. 174. — Que se contradicen, t. 3, p. 174. — *Contradictorios*, t. 3, p. 175. — Razon del dicho, t. 3, p. 176. — Sos-

pechosos, t. 2, p. 108. — Incapaces, t. 2, p. 109. — Necesarios, t. 3, p. 178. — A los efectos de la indagación sumaria, t. 2, p. 111, 330. — Ratificación, t. 2, p. 378. — Apreciación de sus dichos, t. 2, p. 113, 116, 337; t. 3, p. 177. — V. *Falso testimonio*. *Prueba*. *Sana crítica*. *Tachas*.

**Tiempo.** — Su influencia en el derecho procesal, t. 1, p. 249. — Perdida o modificación de derechos por su transcurso, t. 1, p. 259. — V. *Días hábiles*. *Notificaciones*. — *Términos*.

**Título hábil.** — Enumeración de los mismos, t. 4, p. 53, 58. V. *Excepciones*.

**Tormento.** t. 2, p. 10.

**Traba de embargo.** — Requisitos de la misma, t. 4, p. 21, 61.

**Transacción.** t. 3, p. 57, 259. — V. *Acciones*.

**Transporte.** t. 3, p. 230. — V. *Contrato de transporte*.

**Traslado.** — Aceptación de la palabra, t. 3, p. 76.

**Tratados.** t. 1, p. 384 s. — Con Italia, t. 4, p. 40. — De Montevideo, t. 4, p. 42. — V. *Ejecución de sentencia*.

**Tribunales.** — De excepción, t. 1, p. 9. — V. *Bill of attainder*.

**Tribunales colegiados.** — V. *Tribunales superiores*.

**Tribunales especiales.** t. 2, p. 16. — V. *Bill of attainder*. *Rosas*.

**Tribunales militares.** — V. *Ejército*.

**Tribunales superiores.** — Su funcionamiento, t. 3, p. 276; t. 4, p. 5 s. — Su organización, t. 4, p. 6. — Fallan por mayoría, t. 4, p. 11. — Forma de constituir esa mayoría, t. 4, p. 11. — V. *Recurso en relación*. *Recurso libre*. *Recurso extraordinario*. Superior tribunal de provincia.

**Turbación.** — V. *Acciones posesorias*.

**Turno.** t. 1, p. 314.

**Tutela.** t. 1, p. 331.

**Ugier.** — V. *Auxiliares de la justicia*.

**Universidad.** — Deficiencia de su enseñanza, t. 2, p. 25.

**Usufructo.** — V. Acciones posesorias.

**Usurpación.** — V. Acciones posesorias.

**Valor litigioso,** t. 1, p. 39, 41, 311, 312. — No se toma en cuenta en los asuntos de competencia originaria de la suprema corte, t. 1, p. 377. — V. Competencia. Recursos.

**Vecino.** — De extraña provincia, t. 1, p. 149. — De la misma provin-

cia, t. 1, p. 392, 394 s. — V. Competencia. Domicilio. Nacionalidad o vecindad.

**Venta con pacto comisorio,** t. 3, p. 38.

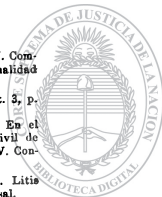
**Verificación de créditos.** — En el código de procedimiento civil de la capital, t. 4, p. 323. — V. Concurso civil.

**Vinculación procesal.** — V. Litis contestatio. Relación procesal.

**Visitas a los presos,** t. 2, p. 418.

**Visitas domiciliarias.** — V. Domicilio.

**Voluntad criminal,** t. 2, p. 132.





# ÍNDICE DEL CÓDIGO

## DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y COMERCIAL

### TOMO IV.



<b>Título</b>	<b>I. Disposiciones generales . . . . .</b>	<b>226</b>
<b>Título</b>	<b>II. Del juicio ordinario . . . . .</b>	<b>226</b>
<b>Secc.</b>	<b>I. Disposiciones preliminares . . . . .</b>	<b>226</b>
<b>Secc.</b>	<b>II. De la demanda . . . . .</b>	<b>227</b>
<b>Secc.</b>	<b>III. De la citación y emplazamiento . . . . .</b>	<b>228</b>
<b>Secc.</b>	<b>IV. De las excepciones dilatorias . . . . .</b>	<b>229</b>
<b>Secc.</b>	<b>V. Excepciones perentorias deducidas en forma de artículo . . . . .</b>	<b>231</b>
<b>Secc.</b>	<b>VI. De la contestación . . . . .</b>	<b>231</b>
<b>Secc.</b>	<b>VII. De la prueba . . . . .</b>	<b>232</b>
<b>Secc.</b>	<b>VIII. De los medios de prueba . . . . .</b>	<b>235</b>
<b>Cap.</b>	<b>I. De la confesión en juicio y fuera de juicio . . . . .</b>	<b>235</b>
<b>Cap.</b>	<b>II. De la prueba instrumental . . . . .</b>	<b>238</b>
<b>Cap.</b>	<b>III. De la prueba de peritos . . . . .</b>	<b>240</b>
<b>Cap.</b>	<b>IV. De la prueba de testigos . . . . .</b>	<b>243</b>
<b>Cap.</b>	<b>V. De las tachas . . . . .</b>	<b>246</b>
<b>Cap.</b>	<b>VI. De la inspección ocular . . . . .</b>	<b>247</b>
<b>Secc.</b>	<b>IX. De la conclusión de la causa para definitiva . . . . .</b>	<b>248</b>
<b>Secc.</b>	<b>X. De la sentencia . . . . .</b>	<b>249</b>
<b>Título</b>	<b>III. De los recursos . . . . .</b>	<b>250</b>
<b>Secc.</b>	<b>I. Del recurso de reposición . . . . .</b>	<b>250</b>
<b>Secc.</b>	<b>II. Del recurso de apelación . . . . .</b>	<b>250</b>
<b>Secc.</b>	<b>III. Del recurso de nulidad . . . . .</b>	<b>252</b>
<b>Título</b>	<b>IV. Del procedimiento ordinario en segunda instancia . . . . .</b>	<b>253</b>
<b>Título</b>	<b>V. Del recurso de queja por denegación o retardo de justicia . . . . .</b>	<b>257</b>
<b>Título</b>	<b>VI. Recurso por inaplicabilidad de ley o doctrina legal . . . . .</b>	<b>258</b>
<b>Título</b>	<b>VII. Queja y recurso sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad . . . . .</b>	<b>264</b>



Título	VIII.	De las recusaciones . . . . .	268
Secc.	I.	De la recusación de los jueces . . . . .	268
Secc.	II.	Recusación de los secretarios y ujieres . . . . .	271
Secc.	III.	De la excusación de los representantes del ministerio público . . . . .	272
Secc.	IV.	Del modo de reemplazar a los jueces y de más funcionarios recusados o impedidos . . . . .	272
Título	IX.	De los incidentes . . . . .	275
Título	X.	De las cuestiones de competencia . . . . .	275
Título	XI.	Del juicio de jactancia . . . . .	277
Título	XII.	Del juicio ordinario en rebeldía . . . . .	278
Título	XIII.	De los embargos preventivos . . . . .	280
Título	XIV.	De las ejecuciones . . . . .	284
Secc.	I.	Del juicio ejecutivo . . . . .	284
Secc.	II.	Del cumplimiento de la sentencia de remate . . . . .	290
Secc.	III.	De las tercerías . . . . .	293
Título	XV.	De la ejecución de las sentencias . . . . .	293
Título	XVI.	De la ejecución de las sentencias dictadas en países extranjeros . . . . .	296
Título	XVII.	De los interdictos . . . . .	297
Secc.	I.	Del interdicto de adquirir . . . . .	298
Secc.	II.	Del interdicto de retener . . . . .	299
Secc.	III.	Del interdicto de recobrar . . . . .	300
Secc.	IV.	Del interdicto de obra nueva . . . . .	300
Título	XVIII.	Del juicio de desalojo . . . . .	300
Título	XIX.	Declaratoria de pobreza . . . . .	301
Título	XX.	Del juicio de alimentos provisorios y de litis- expensas . . . . .	302
Título	XXI.	Del juicio de mensura, deslinde y amojona- miento . . . . .	303
Título	XXII.	De las testamentarias . . . . .	306
Secc.	I.	Disposiciones generales . . . . .	306
Secc.	II.	Del inventario y avalúo . . . . .	309
Secc.	III.	De la división . . . . .	311
Secc.	IV.	De la administración de las testamentarias . . . . .	313
Título	XXIII.	Del juicio de ab intestato y de herencia va- cante . . . . .	313
Título	XXIV.	De la apertura de testamentos cerrados . . . . .	316
Título	XXV.	De la protocolización de testamentos oló- grafos . . . . .	318
Título	XXVI.	Del concurso civil de acreedores . . . . .	318
Secc.	I.	Disposiciones generales . . . . .	318
Secc.	II.	De la administración . . . . .	320
Secc.	III.	De la verificación de créditos . . . . .	322
Secc.	IV.	De la graduación de créditos y distribuciones . . . . .	324
Título	XXVII.	Del juicio de árbitros . . . . .	326
Título	XXVIII.	Del juicio de amigables componedores . . . . .	330
Título	XXIX.	Disposiciones transitorias . . . . .	331

## OBRAS DEL MISMO AUTOR

---



*Investigación parlamentaria en los tribunales de justicia de la provincia de Buenos Aires*, I volumen, año 1907.

*Proyecto de ley de enjuiciamiento de magistrados de la provincia de Buenos Aires*, año 1908.

*Código de procedimiento en materia penal de la provincia de San Luis*, año 1909.

*Procedimiento criminal argentino*, año 1909

*Cuestiones carcelarias y penales*, año 1910.

*Proyecto de ley orgánica para la administración de justicia de la provincia de Buenos Aires*, año 1912.

*Causas instruirlas en Buenos Aires, durante los siglos XVII y XVIII*, 1 volumen, año 1913.

*Proyecto de código de procedimiento penal*, año 1914.

*Manual de procedimiento criminal*, 1 volumen, año 1914.

*Código de procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires*, año 1915.

*El nuevo código de procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires*, 2 volúmenes, año 1915.

*Justicia preventiva*, año 1916.

*Administración de justicia de la provincia de Buenos Aires (disposiciones vigentes)*, año 1916.

*Proyecto de ley orgánica, redactado por encargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires*, año 1917.

*Decreto federal y cuestiones varias*, 1 volumen, año 1917.

*Jurisprudencia Argentina* (en colaboración), 10 tomos de más de 1000 páginas cada uno, 1918-1923.

*Manual de procedimiento* (civil y penal), 2.ª edición 1919-1923, 4 tomos.

*El código penal de 1922*, 1 tomo, 1922.

*Código de procedimiento civil, con notas*, 1923.





# PROCEDIMIENTO

(CIVIL Y PENAL)

POR EL

DR. TOMAS JOFRÈ

---

TOMO IV

SEGUNDA EDICION



BUENOS AIRES

VALERIO ABELEDO, EDITOR — LIBRERIA JURIDICA

CALLE LAVALLE 1368 - 74

1923



## TRIBUNALES SUPERIORES (a)



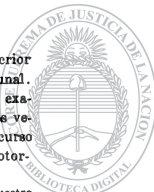
1.º *Doble grado de jurisdicción.* — 2.º *Principios que lo rigen.* — 3.º *Tribunal de recursos extraordinarios.* — 4.º *Elevación de la causa a segunda instancia.* — 5.º *Substanciación ante la cámara:* a) *recurso en relación;* b) *recurso libre.* — 6.º *Condiciones para que la causa pueda ser fallada en segunda instancia.* — 7.º *Formas de la sentencia.* — 8.º *Mayoría:* a) *sistema argentino;* b) *id francés;* c) *id italiano.* — 9.º *Avocación.* — 10. *Puntos que puede decidir la sentencia.*

1.º—El doble grado de jurisdicción vigente en nuestro país, funciona con tribunales de primera instancia unipersonales y de segunda colegiados (Manual t. 1, p. 120, 123). Resuelta una causa por el inferior (juez de lo civil (1), del crímen o de comercio) la parte afectada puede reclamar, (*blasphemare iudi-*

---

(a) Véase Caravantes, «Procedimientos judiciales», t. 4, p. 31; Castro M. A. «Prontuario de práctica forense», p. 33, 113, 2.ª edic.; Chiovenda «Dritto processuale civile», p. 805, 944 y s.; Ochoa, «Petit traite de procédure civile et commerciale», p. 586, 5.ª edic.; De la Colina, «Derecho y legislación procesal», t. 2, p. 172; Glasson, «Traité de procédure civile», t. 1, p. 523, t. 2, p. 115; Japlot E., «Traité élémentaire», t. 2, p. 377; Manresa y Navarro, «Ley de enjuiciamiento civil española de 1855» t. 4, p. 120; Ferrite Antonio, «Storia del diritto italiano», t. 6, parte 2.ª p. 265 y s.; Rodríguez A. M., «Comentarios al código de procedimientos», t. 2, p. 19.

(1) De las sentencias de los alcaldes se apela ante los jueces de paz y de las de éstos, cuando conocen en primer grado, ante los jueces letrados en lo civil o comercial, (Manual, t. 1, p. 158).



cium) para que se discuta y falle nuevamente por un superior jerárquico (1) de segundo grado, cámara o superior tribunal. La reclamación se hace ante el mismo juez que falló, quien examina si el caso es de aquellos que la ley permite discutir dos veces. Se dice entonces que la parte ha interpuesto un recurso (de apelación o de nulidad, o ambos), y que el juez lo ha otor-

(1) La organización de los tribunales superiores ha variado en nuestro país con los cambios de gobiernos y con el tiempo. (Sobre la real audiencia y el consulado Manual, t. 1, p. 39, s.; 73 y 78; t. 3, p. 273).

El reglamento de 23 de enero de 1812 estableció que el tribunal supremo de justicia, designado hasta entonces con el nombre de real audiencia, se llamaría en adelante cámara de apelaciones, quedando, por consiguiente, disuelto y extinguido aquel tribunal. La nueva cámara se formaría con cinco individuos, tres de ellos letrados y dos vecinos sin esta calidad, pero con las precisas de buen juicio, costumbres y opiniones, y todos cinco empeñados en sostener la libertad de su patria. Correspondíale al tribunal conocer de las instancias de apelación, de los recursos ordinarios y extraordinarios por injusticia o nulidad notorias, fuerzas eclesiásticas y demás recursos que por las leyes y ordenanzas correspondían a las cancellerías de América.

El reglamento de administración de justicia de 6 de septiembre de 1813, no introdujo modificación apreciable en la forma de funcionar el tribunal. El artículo 17 decía, que todas las facultades y atributos que concedían las leyes españolas a las reales audiencias, quedaban resumidos en la cámara.

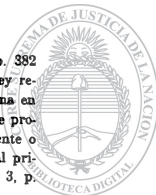
El reglamento provisorio de 1817, exigió que todos los jueces de la cámara fueran letrados. En los recursos de segunda suplicación, nulidad e injusticia notoria creó un tribunal eventual de cinco letrados nombrados por el gobierno, el que debía disolverse después de resuelto el caso para que fué convocado.

La ley (del estado de Buenos Aires), de 30 de septiembre de 1857, creó el superior tribunal de justicia con diez jueces y un fiscal. El tribunal se dividía en dos salas, una de lo civil y otra de lo criminal con igual número de jueces cada una y formando quorum con tres. En las sentencias en que hubiese condenación de muerte se acordaba recurso de una sala a la otra; y lo mismo ocurría en los otros fueros, cuando se revocaba o alteraba las sentencias de los jueces de primera instancia. Correspondía al superior tribunal pleno, que debía funcionar con un quorum de siete jueces, conocer en los recursos de apelación interpuestos de resoluciones del gobierno, en los recursos de fuerza y en los negocios contenciosos pertenecientes al patronato de las iglesias.

La ley (de la provincia de Buenos Aires), de 4 de septiembre de 1871, dividió el tribunal de justicia en tres salas, dos para lo civil y una para lo criminal, con tres vocales cada una. De los recursos contra las sentencias de cada sala o en los casos de consulta, conocían las otras dos salas reunidas presididas por el presidente del tribunal. El tribunal pleno entendía en los asuntos que ya hemos mencionado.

La constitución de 1873 (provincia citada), creó una suprema corte de justicia y cámaras de apelación compuestas de tres jueces.

Tales fueron los tribunales que funcionaron en Buenos Aires hasta su federalización. Después de ese hecho la ley orgánica creó dos cámaras



gado o denegado para ante el superior (Manual, t. 2, p. 382 y 384; t. 3, p. 339, 342 y 346). El superior aplicando la ley resuelve la procedencia o improcedencia del recurso y la forma en que debe tramitarse. Existe, pues la posibilidad de un doble pronunciamiento que establezca si un recurso procede libremente o en relación, con efecto devolutivo o suspensivo, y en el cual prima el que hace el superior (Manual, t. 2, p. 382, 383; t. 3, p. 339, 342, 346).

2.º—En el derecho procesal argentino la doble instancia se encuentra regida por los principios siguientes:

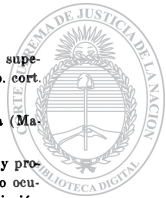
I. No puede ponerse en actividad la jurisdicción superior, si antes no ha recaído resolución sobre el caso ante el juez de primer grado. La avocación es una excepción a ese principio. (Véase más adelante, p. 12).

II. El superior tribunal o cámara de apelación se pronuncia expresa o implícitamente sobre la procedencia de los recursos (sup. cort. nac. t. 63 p. 186; cádm. fed. del Paraná, t. 2, p. 196; cádm. civ. t. 1, p. 386; t. 6, p. 17; t. 106, p. 276). Si las partes reclaman, el pronunciamiento debe ser expreso.

de apelación: una en materia civil y otra en materia criminal, correccional y comercial con un presidente y cuatro vocales cada una. Estas cámaras formarían tribunal con el presidente y dos vocales para la decisión de los recursos interpuestos contra las resoluciones interlocutorias y las definitivas en juicio sumario. En juicio ordinario las cámaras deberían proceder con el número íntegro de sus miembros, pero podían también hacerlo con tres o cuatro en caso de impedimento o de recusación, siempre que las partes no pidiesen integración o el tribunal no la ordenase.

El congreso, como legislatura local, modificó ese estado de cosas por la ley núm. 7075, para que funcionasen en la capital de la república dos cámaras de apelación en lo civil, con cinco miembros, un fiscal y demás personal que fija la ley de presupuesto, cada una; una cámara para los asuntos comerciales y una en lo criminal y correccional, todas con el mismo personal. La ley número 8918 reorganizó la cámara de apelación en lo criminal y correccional con siete miembros, agregando que actuaría con todos ellos en las causas por delitos a que correspondía pena de muerte y con cinco (el presidente y cuatro vocales sorteados en cada caso de entre los que forman el tribunal) para la resolución de las demás causas. Las salas tendrán un presidente común.

De la exposición que acabamos de hacer se desprende que nuestros tribunales de segunda instancia no han modificado substancialmente su composición, y funcionan como funcionaba la real audiencia. El verdadero progreso en esta institución consiste en que se han limitado las instancias reduciéndolas de tres a dos y suprimiendo los recursos ordinarios de injusticia notoria. (Manual, t. 1, p. 89).



III. Sólo pueden poner en ejercicio la jurisdicción del superior los que han figurado como parte ante el inferior (sup. cort. nac. t. 48, p. 606; t. 85, p. 137; cárn. civ. t. 3, p. 342).

IV. La teoría de la preclusión rige en segunda instancia (Manual, t. 1, p. 249; t. 3, p. 235, 263, n. 4, 323).

V. En primera instancia las partes discuten su derecho y producen prueba sobre los hechos; en segunda esto último sólo ocurre en casos excepcionales (Manual, t. 3, p. 18). Tal restricción constituye una desviación de los principios vigentes en la mayoría de los países.

VI. Las facultades del superior para conocer de los hechos sufre una doble limitación: la que resulta de la relación procesal, tal cual aparece de la demanda y contestación, y que sirvió de medida al juez de primera instancia y la que el apelante haya querido imponerle. Las partes tienen derecho para apelar sólo de algunos puntos de la sentencia, pero no para ampliar los que fueron materia de la controversia (Manual, t. 1, p. 217, t. 3, p. 93, 306).

VII. En la aplicación del derecho los jueces de primera y segunda instancia pueden y deben investigar libremente, para aplicarla, cual es la regla que rige el caso, *iura curia novi*; no los ata la voluntad de las partes, (Manual, t. 1, p. 217; t. 3, p. 93).

VIII. La sentencia emitida por el superior hace desaparecer la del inferior. Sin embargo, por comodidad de lenguaje o por economía de tiempo, se suele hacer referencia a la sentencia de primera instancia que queda incorporada a aquella. (Chiovenda, op. cit. p. 394; en contra Cañada. «Juicios civiles», t. 1, p. 451, núm. 32, edic. de 1845; De Palo op. cit. p. 130).

3.º—El tribunal que conoce de los recursos extraordinarios, (corte de la nación en los casos del art. 14 de la ley núm. 48; corte de la provincia de Buenos Aires en el caso del art. 157, inc. 6 de su constitución local), se gobierna por reglas especiales:

I. Sólo se pronuncia sobre uno de los dos aspectos que presenta toda contienda judicial, hecho y derecho. El primero escapa a su poder de control. En cuanto al derecho su campo de acción está igualmente restringido y sólo se extiende a decidir si



es o no aplicable la norma discutida en la anterior instancia (Manual, t. 1, p. 131, 151).

II. En ningún caso se abre la causa a prueba, ni se permite agregación de documentos, ni absolución de posiciones.

III. La interposición del recurso no abre una nueva instancia. De ahí que no pueda oponerse la prescripción.

4.º—El paso del expediente, causa, juicio o pleito (que todos estos nombres se dan a una misma cosa) de primera a segunda instancia, se produce mediante la deducción de recursos ordinarios, de apelación o nulidad (Manual, t. 3, p. 341). Si los recursos proceden el expediente se remite al superior por intermedio del secretario del juez, quien lo pone en manos del secretario del tribunal superior para que a su vez lo entregue al presidente del mismo.

5.º—La substanciación ante el superior varía según que el recurso o recursos procedan en relación o libremente.

a) Si el recurso se ha otorgado en relación (Manual, t. 3, p. 344) el expediente, elevado en la forma indicada, debe ser proveído por el presidente de la cámara, quien llama "autos" y en la misma providencia señala dos días a la semana para que comparezcan las partes a notificarse en la oficina, siendo entendido que si no lo hacen la ley presume que conocen las resoluciones que más adelante se dicten, con excepción de las enumeradas por la ley (Manual, t. 1, p. 254). La providencia de autos debe ser notificada personalmente o por cédula (Manual, t. 1, p. 253, 255; t. 2, p. 45).

En la cámara criminal se hace saber, en la providencia en que se llama autos el nombre de los jueces que constituirán la sala que va a conocer y fallar en la causa, lo que se explica por la composición del tribunal, que es distinto de los del fuero civil o comercial (Manual, t. 1, p. 89).

La providencia de autos tiene por objeto:

I Fijar un límite a las partes para la recusación de los jueces del tribunal: en el fuero civil o comercial se puede recusar sin causa a uno de los miembros de la cámara dentro de las 24 horas del llamamiento de autos (art. 367, cód. de proc. civ.). La recusación con causa debe deducirse dentro de los tres días contados del mismo modo.

II Facilitar la tramitación del juicio por medio de la notificación por nota (Manual, t. 1, p. 255).

III Abrir y limitar el período de controversia ante el superior. En la justicia ordinaria de la capital (civil o comercial) dentro de los tres días las partes pueden presentar un escrito, atacando o defendiendo la resolución de primera instancia (art. 24,





ley núm. 4128); en lo penal dentro del mismo término se puede solicitar señalamiento de día para informar *in voce* con análogo objeto, (art. 538, cód. de proc. crim.). En lo federal se observa este último procedimiento, cualquiera que sea la naturaleza de la causa (art. 6 de la ley núm. 3375).

b) Si el recurso ha sido concedido libremente recibe una tramitación distinta a la que dejamos descripta.

I. Una vez que han llegado los autos al tribunal, su presidente manda que el apelante exprese agravios dentro de nueve días, es decir que impugne el fallo apelado, y señalará días de notificación, como en el recurso concedido en relación (Manual t. 1, p. 255). Presentado el escrito de agravios se corre traslado por igual término al apelado, para que sostenga el fallo del inferior, (art. 241 del cód. de proc. civ.; y 519 y 522 del cód. de proc. crim.) En lo federal el término para el apelado es de seis días, en el fuero civil y comercial (art. 215 ley núm. 50).

La falta de la evacuación de estos trámites tiene consecuencias diversas según se trate del apelante o del apelado: si aquél incurre en rebeldía, la sentencia de primera instancia pasa en autoridad de cosa juzgada, en materia civil o comercial (art. 242 cód. de proc. civ.); en lo criminal sigue su curso la instancia (art. 523 cód. de proc. crim.); si el rebelde es el apelado, el juicio sigue adelante, cualquiera que sea el fuero de la causa (art. 223 cód. de proc. civ. y 524 del crim.).

II. Cumplido el trámite a que se refiere el punto anterior se procede a llamar autos, con lo que se cierra la discusión (art. 224, cód. de proc. civ.).

Hasta antes de la notificación de dicha providencia las partes pueden presentar los documentos de que juren no haber tenido hasta entonces conocimiento o no haber podido proporcionárselos en tiempo oportuno. De esos documentos debe correrse traslado a la parte contraria (art. 245 cód. cit.; Manual, t. 3, ps. 18 y 119).

La prueba en segunda instancia sólo procede en casos excepcionales (Manual, t. 3, p. 18, 119 y 130 y fallos citados en el t. 3, p. 130 en nota). En cuanto al término, medios de que pueda usarse, formalidades con que ha de producirse, alegatos y conclu-



sión de la causa, rigen las mismas disposiciones establecidas para la primera instancia.

En lo actos de prueba que hubieran de practicarse en segunda instancia, llevará la palabra el presidente, pero los demás vocales, con su venia, podrán hacer las preguntas que estimen oportunas; cuando hubieran de practicarse fuera de la sala del tribunal, si éste no considerase necesario asistir a ella en cuerpo, podrá comisionar al efecto a uno de sus miembros. Si fuese fuera de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal, la comisión podrá ser conferida a la autoridad judicial de la localidad (art. 248, 249 y 250 cód. de proc. civ.).

Recibidas que sean las pruebas se procede a llamar autos (art. 251 cód. cit.) y dentro de tercero día de la notificación de tal providencia las partes manifestarán si van a hacer uso del derecho de informar *in voce*. (art. 252 cód. cit. y 14 de la ley núm 4128).

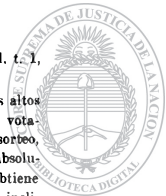
Este es el único caso en que procede el informe en la justicia ordinaria civil o comercial de la capital.

6.º—La causa queda en condiciones de ser resuelta en 2.ª instancia, en los dos casos siguientes: a) en el recurso concedido en relación después de consentida la providencia de autos; b) en el recurso concedido libremente en el mismo caso, sea que se haya o no producido prueba.

7.º—Los tribunales de segundo grado fallan observando las formas que hemos indicado anteriormente (Manual, t. 3, p. 268 y s.) y por mayoría absoluta de votos de los miembros del mismo.

8.º—Para formar la mayoría en un tribunal colegiado debe coincidir la opinión de la mitad más uno de sus jueces. Tres sistemas típicos existen al respecto: el argentino, el francés y el italiano:

a) En el sistema argentino las resoluciones de las cámaras deben pronunciarse a mayoría absoluta de votos (art. 263 cód. cit.). Esa mayoría puede faltar por recusación o impedimento de los jueces o por tener estos diversas opiniones sobre el caso, sin que se obtenga mayoría lo que se denomina *discordia* (Manual, t. 3, p. 277). En todas esas hipótesis hay que llamar nuevos jueces, lo que dificulta y retarda la solución de las causas.



(Sobre el sistema de la provincia de Buenos Aires Manual. t. 1, p. 120).

b) Francia sigue un sistema distinto. Los jueces de los altos tribunales funcionan generalmente en número impar y la votación empieza por los magistrados menos antiguos (no por sorteo, como ocurre entre nosotros). Si no se consigue la mayoría absoluta, se hace una segunda votación; y si tampoco en esta se obtiene mayoría, los jueces que tienen menos partidarios deben inclinarse ante los otros. Por ejemplo: dos jueces votan por la confirmación de la sentencia, dos por la revocación y un tercero por su reforma parcial. En la tercera votación este se encuentra obligado a plegarse a la opinión de cualquiera de sus colegas. Cuando no se consigue la mayoría de votos se integra el tribunal por un sistema parecido al nuestro. (Chiovenda op. cit. p. 805).

c) Los italianos poseen un mecanismo superior a los dos anteriores. Las sentencias se dictan por mayoría de votos. Cuando no se obtiene la mayoría absoluta, por existir diversidad de opiniones, dos de estas, cualquiera que sean, son puestas a votación para excluir una de ellas. La no excluida se vota nuevamente con una de las opiniones restantes, para saber cual de ellas debe eliminarse y así se sigue hasta que no queden sino dos opiniones respecto de las cuales se vota definitivamente (art. 359 cód. de proc. italiano). «El ejemplo más claro, sino único es el que resulta cuando se trata de fijar el monto de una cantidad. En este caso la cuestión se plantea necesariamente sobre ese monto que cada juez sostiene que debe pagarse en justicia y puede ocurrir que un juez sostenga que se debe por daños 200, otro 150, otro 100, etc.» (Chiovenda, op. cit. p. 805, nota 2).

9.º—La avocación consiste en el hecho de atraer o llamar a sí un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa que se estaba litigando o debía litigarse ante otro inferior. (Conf. Glasson, op. cit. t. 2, p. 117). La institución la tomó Francia del derecho canónico (introducida en 1213 por el concilio de Letrán); pertenece a todos los tribunales de apelación. (Glasson, op. cit. t. 2, p. 115).

La autoridad real y los tribunales patrios durante la colonia

ejercieron ampliamente el poder de avocación, atrayendo a sí las causas para tramitarlas y fallarlas. (1).

La avocación, de carácter excepcional entre nosotros, se encuentra autorizada por el art. 223 ley núm. 50 y es ajena a la justicia ordinaria. La suprema corte nacional puede, a petición de todas las partes, resolver lo principal, aun cuando la apelación hubiere recaído sobre un incidente de la causa (Manuel, t. 3, p. 98). Sólo conocemos dos casos de avocación. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 723).

10.—La sentencia definitiva del superior puede resolver: 1.º la revocatoria, reforma o la confirmación de la del inferior; 2.º la nulidad de la misma; 3.º la nulidad de los procedimientos.

(1) Véase, Tomás Jofré, «Causas instruidas en Buenos Aires durante los siglos XVII y XVIII» p. XLIX y 19. La institución del juez especial constituía muchas veces un caso de avocación. Rosas, gobernador de Buenos Aires, se avocó la causa de los asesinatos de Quiroga y la falló en definitiva.

Los jueces en comisión o especiales, no existen actualmente; pero funcionaron desde muy antiguo en España. Félix Dahn, en su «Historia primitiva de los pueblos germano y romano», dice lo siguiente: «El rey como tribunal de última instancia y magistrado supremo velaba por la buena administración de la justicia, castigando a los jueces indolentes, prevaricadores y parciales; él determinaba los días feriados en que debían estar cerrados los tribunales, los domingos y las grandes fiestas de la iglesia. En época de la cosecha, la vendimia y cuando había plaga de las langostas, que exigía el concurso de todos para su exterminio, quedaban los habitantes rurales, dispensados de presentarse ante el juez si estaban citados».

Fuera de esta marcha regular era frecuente la intervención directa y arbitraria del rey en las causas pendientes y, por otra parte, no era raro que los querellantes saltasen por encima de los jueces e instancias inferiores y acudiesen de una vez al rey que luego decidía a su albedrío personalmente, o por delegado, expresamente nombrado al efecto. Esto sin contar con que, según el derecho romano, debían ser sometidas al rey todas las causas criminales importantes contra personas de mucha categoría para que él determinara el castigo. En estas causas, en las cuales el rey estaba a menudo interesado, era muy común que nombrara comisiones extraordinarias para entender y sentenciar en ellas, comisiones que se conducían generalmente con tanta arbitrariedad que no solamente se apoderaban a veces de causas pendientes sino que anulaban sentencias y fallos legales cuando el rey quería proteger a la parte que apelaba del tribunal a él. En muchas ocasiones se acudía también al rey para que autorizara actos privados, como contratos y testamentos, en su calidad de representante y protector supremo de la ley. Las disposiciones de las comisiones y comisionados extraordinarios tenían fuerza ejecutiva, como lo prueba el ejemplo del gobernador de Artes y Aram, que encargado de castigar a cierto sacerdote católico, mandó a sus criados que fuesen a prenderle y llevarle a su presencia atado de pies y manos «a fin de que viese que él era dueño o señor del país».



En el primer caso el juicio queda terminado regularmente; en el segundo desaparece la sentencia de primera instancia para ser reemplazada por la de segunda (1); en el tercero queda sin efecto lo hecho después del acto nulo (art. 240 del cód. de proc. civ. y 25 de la ley 4128; Manual, t. 3, p. 347). Resuelta definitivamente la causa por el tribunal de segundo grado se remite a primera instancia para que se cumpla la sentencia. (Véase más adelante, p. 15).



---

(1) El principio de la sustitución del fallo nulo por otro válido de segunda instancia que incorporó la ley 4128 existía desde hace siglos en el derecho extranjero. (Fertile, op. cit. t. 6, 2.ª parte, p. 323 y 325).

## EJECUCION PROCESAL FORZADA (a)



1.º Principios generales. — 2.º La relación procesal en el juicio de ejecución — 3.º El patrimonio del deudor y su afectación. — 4.º Bienes exceptuados. — 5.º Sólo el congreso puede establecer cuales bienes son inembargables. — 6.º Limitación de la acción del acreedor por contrato. — 7.º Personas ejecutables. — 8.º Influencia de la obligación sobre los medios de ejecución: a) condena a cantidad líquida; b) id al pago de cantidad líquida procedente de frutos; c) id a resarcir daños y perjuicios; d) id o dar cosa cierta; e) id a hacer; f) id a no hacer. — 9.º Medios coercitivos contra el deudor. — 10. Cumplimiento de sentencias extranjeras.

1.º.—El goce pacífico de los bienes se encuentra asegurado en la sociedad, unas veces por el mutuo respeto y acatamiento

(a) Sobre ejecución procesal forzada véase **Berrier**, «Des astreintes» Paris, 1903; **Bonnier**, «Procédure civile» p. 438; **Cañada**, «Juicios civiles», **Caravantes**, «Procedimientos judiciales», t. 4, p. 279 **Chiovenda**, «Nuovi saggi», etc., p. 183 y ps. 18 a 21; **Ohloveda**, «Principii», p. 236 y sigs.; **Croissant**, «Des astreintes», Paris, 1898; **Crome**, «Parte general del derecho privado francés», Milano 1906, p. 454; **Colmet-Deage**, «Procédure civile» t. 2, p. 150; **Cuzzari**, «Codice italiano di procedura civile» t. 11, p. 274 y t. 8, p. 5; **Dallos**, 1849, 2, 126. «Journal de Palais», 1850, 1, 337; 1876, 1, 407; y 1876, 1, 465; 1878, 2, 1; 1878, 1, 201; 1878, 2, 68; 1883, 1, 243; 1889, 1, 259; 1896, 2, 376; 1897, 2, 177; 1908, 1, 23. **D'Antonio**, en la Rivista di diritto e procedura penale, 1912, p. 672; **De la Colina**, «Derecho y legislación procesal», 2.ª edición, 1915, t. 2, p. 302 y 308; **De la Eda.**, «Enjuiciamiento civil», Madrid, 1856 t. 4, p. 96; **Demaria**, «Lecciones de procedimiento civil», Montevideo, 1920, t. 2, p. 234; **Damolombe**, «Cours de code civil», Bruselas, 1854, 24, núms. 494 y sigs.; **De Palo**, «Teoría del ti-



voluntario; otras por medios directos o indirectos que funcionan sin que participe la autoridad pública; y, finalmente por la intervención de ésta (t. 3, p. 6, 221). El poder judicial está encargado, en determinadas circunstancias, de declarar los derechos y de llevarlos a debido cumplimiento. Es bajo este último

tolio ejecutivo», t. 1, ps. 10 y sigs. p. 86 y sigs; Nápoles 1901, **Esmein**, «L'origine et la logique de la jurisprudence en matière d'astreintes», París 1903; **Ferrara Luis**, «L'esecuzione processuale indiretta»; **Galante Vicente**, «Diritto processuale civile» Napoli, 1909, p. 286; **Giorgi**, «Obbligazioni» t. 2, núm. 151, p. 210; **Glaeson**, «Traité de procédure civile», 2.ª edición, t. 2, p. 215; **Gómez de la Serna**, «Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil», p. 166, Madrid, 1857; **Gonzales Joaquín V.**, «Diario de sesiones» del senado de la nación, de 7 de agosto de 1909; **Japlot**, «Procédure civile e commerciale», p. 395; **Jurisprudencia Argentina**, t. 1, p. 75; t. 2, ps. 73 y 250; t. 3, p. 1020; t. 4, ps. 404, 424, 502 y 513; t. 5, p. 665; t. 6, p. 205; texto y nota de **Tomás Jofré**, 451 y 668; t. 7, p. 526; t. 8, p. 25; **Laurent**, «Droit civil», t. 16, p. 198, núm. 198; **Leroux**, «Les astreintes» París 1902; **Locré**, «Code de procédure civile», t. 12, p. 329; **Mancini Pisanelli y Scialoja**, «Commentario del codice de procédure civile per gli stati Sardi», Torino 1863, t. 1, part. 2.ª p. 251; id id. «Formulario degli atti di procedura civile», Torino 1855, (Mensaje del ministro de justicia sobre el proyecto de código italiano, p. 170); **Manresa y Reus**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 167, Madrid, 1861; **Manresa José María**, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 169, Madrid, 1889; **Ernest Massin**, «Du caractère pécuniaire de» condamnations», p. 423, París, 1893; **Mattirolo**, «Trattato di diritto giudiziario civile italiano», t. 6, ps. 766 sgs y 807, 5.ª edición, Torino 1902; **Mortara**, «Commentario del codice e delle leggi di procedura civile», t. 5, p. 2, 4 y sigs. Milano; **Mortara**, «Manuale della procedura civile», t. 2, p. 191, 8.ª edición, Torino 1916; **Mortara**, «Principii di procedura civile», p. 280, año 1904; **Mortara**, «Istituzioni di ordinamento giudiziario», ps. 161 y sgs. 3.ª edición; **Pertile**, «Storia del diritto italiano», t. 6, par. 2.ª p. 327, Torino 1892; **Pescatore**, «Procedura civile e criminale» t. 1, p. 305, 1.ª parte, Torino 1864; **Pianol**, «Traité élémentaire de droit civil» t. 2, p. 72, París, 1920; **Polacco**, «Obbligazioni», 2.ª edición, p. 79; **E. Reus**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 2, p. 376, t. 5, p. 486, (formularios); **Rodríguez A. M.**, «Comentarios al código de procedimientos», t. 3, p. 7, 2.ª edición, Barcelona 1914; **Romero**, «Estudios de legislación procesal», t. 3, p. 528, Lima, 1917; **Saint Piz**, «Cours de procédure civile», p. 348, 8.ª edición, Bruselas, 1837; **Scarfatti**, «Il processo civile inglese, nella giurisprudenza italiana», edición 1914, t. 4, p. 129 y s. y especialmente p. 165; **Seligman**, «Quelles sont au point de vue philosophique les réformes dont notre procédure civile est susceptible», p. 249, edición Reim; **Sirey**, 1863, t. 2, p. 197, 1863, t. 2, p. 161, 1879, t. 1, p. 76, 1891, t. 1, ps. 349 y 466; **Tissier**, «Code de procédure civile», t. 2, p. 402, París, 1901; **Tissier**, «Effet des jugements portant condamnation a des dommages intérêts a fixer par états», en Revue critique, 1888, p. 537 y sigs; **Vidal**, «Consolidacao dos dispositivos referentes ao processo civile commercial de justicia local do Districto Federal», p. 312; **Windscheid**, «Diritto delle pandette» **Zanzuechl**, «L'azione in opposizione del terzo nel processo esecutivo», 792; 78, nota 7 y 169 y s.



aspecto que se habla de ejecución procesal forzada. (Chiovenda op. cit. p. 235). (1).

La ejecución dentro de juicio se aplica de ordinario con relación a la sentencia que condena a obligaciones de dar, de hacer o de no hacer.

La sentencia que absuelve al demandado termina el pleito y generalmente no es necesario ejecutarla: se cumple cuando el vencido pretende violar el derecho del vencedor. Este queda armado de la excepción de cosa juzgada que lo ampara en todo momento. Otras veces la sentencia que reconoce un derecho no recibe la ejecución con relación al adversario, a que se refiere el cód. de proc. civ. (art. 535, s.), sino con relación a un tercero: si declara la nulidad de un título, se cumple por medio de oficio al registro de la propiedad, para la respectiva anotación (art. 228, 256, etc. ley orgánica de los tribunales de la capital); si reconoce el estado de una persona, se hace la anotación en el registro civil, y así en otros casos análogos (ley del registro civil de las personas, núm. 1565, art. 30, inc. 5.º, 53 y 89).

Para que la sentencia se ejecute, con carácter definitivo, es necesario que haya pasado en autoridad de cosa juzgada. No debe existir contra la misma recurso alguno ordinario o extraordinario mediante el cual se la pueda atacar. La ejecución provisoria sólo procede excepcionalmente. (Manual, t. 3, p. 297).

En la legislación española que nos rigió anteriormente, como en la actual de los pueblos de Europa, el recurso extraordinario no forma obstáculo para que las sentencias se ejecuten. (Ley 15, tit. 20, libro 4 de la nueva Recopilación; Glasson, op. cit. t. 2, p. 191; Manual, t. 3, p. 301).

2.º—El proceso se desarrolla en dos períodos bien definidos: el uno informativo, de conocimiento, que se cierra con la sentencia que declara o reconoce derechos; el otro de ejecución de lo resuelto. Ambos están vinculados íntimamente: y este no es sino la continuación y complemento de aquel. Windscheidl, op. cit. t. 1, p. 1197; en contra de Paló, op. cit. t. 1, p. 48; Mortara.

(1) La mujer está obligada a habitar con su marido donde quiera que éste fije su residencia. Si faltase a esa obligación, el marido tendrá derecho de negarle alimentos, art. 210, ley de matrimonio civil. Esto no constituye ejecución procesal forzada aunque sea ejecución de la ley.





*Manual*, t. 1, p. 28. De acuerdo con esta doctrina el juicio de ejecución de sentencia reconoce **presupuestos procesales** (1) que el juez está en el deber de estudiar de oficio, pues de lo contrario la relación procesal no podría existir válidamente.

I.—Para promover ejecución forzada es necesario que exista una sentencia o un título equiparado a la misma.

El juez está en el deber de examinar si existe o no sentencia emanada de los tribunales ordinarios, de árbitros o de amigables componedores, (art. 325 cód. de proc. civ.). La facultad que le atribuimos surge del texto del artículo 313 de la ley (2) núm. 50 que establece: «que en presencia del título ejecutivo de su crédito pedirá el acreedor el apremio, y **hallando el juez que procede de derecho** despachará mandamiento cometido a los oficiales de justicia». Sus poderes deben detenerse allí pues no podría estudiar si se han observado o nó las reglas procesales en la tramitación del juicio. La cosa juzgada cubre todos los vicios anteriores a su formación (*Manual*, t. 3, p. 308).

Hemos dicho que hay títulos equiparados a las sentencias, porque ellos se ejecutan (en la justicia federal), en la misma forma fijada para estas.

El procedimiento de apremio procede (en lo federal), no solamente para la ejecución de las sentencias de los tribunales, o de las arbitrales que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada o de los laudos de amigables componedores, sino también: a) contra los consignatarios a quienes sean entregadas las mercaderías que les viniesen consignadas, o cualquiera otra persona que las hubiera recibido con título legítimo, por los fletes en los transportes marítimos y los portes en las conducciones terrestres, con tal que no hayan transcurrido treinta días desde

(1) La palabra subrayada significa requisito y en ese sentido la hemos empleado (*Manual*, t. 3, p. 21), sin embargo ella ha entrado en el uso de los prácticos españoles, como puede verse en la traducción de la obra de Obliovenda del profesor José Cassais y Santaló, t. 1, p. 339. Además en el Diccionario enciclopédico de Zerolo se dice, que presupuesto equivale a supuesto o suposición, definiéndose esto como objeto y materia que no se expresa en la proposición; pero es aquello de que depende, o en que consista o se funda la verdad de ella. Consúltase también a *De la Eda.*, op. cit. t. 4, p. 148 y 149.

(2) La ley federal citada se refiere a la ejecución de sentencia y de los títulos que se lo equiparan.



la entrega; b) contra los capitanes de las naves por las vituallas suministradas para la provisión de éstas, y los consignatarios o cargadores de las mismas, cuando se haya hecho de su orden este suministro; c) contra los dueños o capitanes de las naves, por el pago de los salarios vencidos de la tripulación (art. 308 ley núm. 50).

El apremio no podrá decretarse si los acreedores que lo piden no justifican su derecho en la forma siguiente: Los créditos por fletes o portes con la carta de fletamento o conocimiento original y el recibo de las mercaderías contenidas en este documento; los suministros hechos para la provisión del buque, por las facturas valoradas de los efectos suministrados aprobados por el capitán, consignatario o cargador, de cuya orden las haya entregado el acreedor; los salarios de la tripulación, por las copias de las contratas extendidas en el libro de cuenta y razón del buque, de que el capitán debe facilitar copia a cada interesada con la nota de los alcances que le resulten, conforme al artículo 986 del cód. de com. En el caso de que aquel rehusare dar este documento, se le obligará a exhibir el libro, y se sacará testimonio de lo que resultare de sus asientos con respecto al crédito reclamado, equivaliendo este a certificación que el capitán hubiera debido dar.

II.—Debe también comprobar, el juez que va a conocer de la ejecución de la sentencia, quien es el que tuvo competencia para lo principal. La ejecución corresponde al juez de primer grado que la dictó, (Manual, t. 1, p. 327).

En los títulos equiparados a la sentencia recobran su imperio los principios generales, y el juez debe examinar a fondo el caso para decidir sobre su competencia, sobre la capacidad, derecho, etc.

III.—La personalidad de las partes o de los sustitutos procesales, (Manual, t. 3, p. 99, 102) tal cual se reconoció en el juicio principal permanece inalterable en la ejecución de la sentencia. Los casos de sucesión deben justificarse, (Manual, t. 3, p. 20, 22, s. 99).

IV.—Los derechos reconocidos en la sentencia cuya ejecución se solicita, no pueden discutirse porque se opone a ello la cosa juzgada, (Manual, t. 3, p. 298).

3.º—La sentencia sólo puede ejecutarse sobre el patrimonio y respecto de determinadas personas; para mejor comprensión conviene fijar el concepto del patrimonio.

El campo donde se mueven las actividades del hombre es bien amplio: posee derechos políticos que le permiten participar en la vida pública de su país de origen o de adopción: es títu-



lar de derechos civiles que le aseguran, por lo menos la vida, la libertad y el honor; ejercita potestades sobre su mujer e hijos menores o incapaces; puede finalmente ser propietario o poseedor de objetos corporales o incorporeales susceptibles de valor. En este último concepto ha querido nuestro código civil comprender la teoría del patrimonio (art. 2311 y 2312). El patrimonio es lo único que pasa a los herederos (art. 3263, 3591, 3342 etc. del cód. civ.); y que está al alcance de los acreedores: no pueden estos trabar el ejercicio de los derechos políticos; ni encarcelar a su deudor, como en otros tiempos; ni ejercer en su nombre la patria potestad, la curatela o el poder marital; pero sí les está permitido hacerse pagar con el patrimonio de su deudor. (1).

Háse llegado a decir que todo hombre posee un patrimonio dejando de lado el texto del código, y confundiendo el patrimonio con la capacidad de adquirirlo. Windscheid op. cit. nota de Fadda y Bensa, t. 1, p. 631; Ferrara *Diritto civile italiano*, t. 1, p. 870, Roma 1921; en contra Aubry et Rau, t. 6 párr. 573 s.; Planiol op. cit. t. 1, p. 647, 8.ª edición; Colin y Capitan, *Droit civ. franc.*, t. 1, p. 106, 3.ª edic.

Tampoco es exacto que en el patrimonio se comprenda el pasivo (Planiol, op. cit. t. 1, p. 646). Nuestro código habla solamente de bienes y sólo por excepción comprende las deudas (aceptación de la herencia con beneficio de inventario, quiebra, con-

---

(1) La doctrina francesa sobre el patrimonio ha surgido de un concepto erróneo de las fuentes romanas, y es contradicha por nuestro código (art. 2312). Puede consultarse en contra Salvat «Tratado de derecho civil argentino» núm. 1067.

Con exactitud afirma Segovia en su «Código civil», que la teoría del patrimonio desenvuelta por el doctor Vélez en la nota al art. 2312, ha sido formulada por transcripciones del t. 9, núms. 10 y 17 de Demolombe y de los párrafos 258 notas 8 a 12, y 264 de Zachariae. Los arts. 2311 y 2312 de nuestro cód. civ. establecen respectivamente que: «son cosas los objetos corporales susceptibles de tener un valor. Y estas cosas, así como los objetos inmateriales susceptibles, también, de tener un valor, son los bienes, cuyo conjunto forma el patrimonio».

Los objetos no materiales, dice Freitas, que siendo necesarios o útiles, no fuesen susceptibles de una medida de valor, como las facultades individuales, su ejercicio y todos los derechos de las relaciones de familia no concernientes a bienes, no forman parte del patrimonio de las personas», art. 321. A. T. Freitas, cód. civ. trad. Cartellán, t. 1, p. 183; id Esbozo, art. 320, edic. de 1860.



curso civil de acreedores). (Conf. Windscheid y Ferrara, loc. cit.).

El patrimonio es alienable, (1) porque tal carácter revisten sus componentes, (art. 2311 y 2312 citados) que tienen un valor económico apreciable en dinero, un valor de cambio. (2).

El patrimonio es divisible, desde que una persona puede gozar de dos o más patrimonios separados. Tal ocurre con la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, (art. 3357 cód. civ.) que limita las responsabilidades del heredero, (art.

(1) Se pretende que toda persona, y hasta el niño que acaba de nacer, tiene un patrimonio. Si no hereda... ¿Quién ha visto vender el patrimonio del que nada tiene?

(2) «En el patrimonio entran el dominio y los otros derechos reales, la posesión, los créditos y las acciones que tienen por objeto un bien económico o económicamente valorable. Aún más: los derechos sobre cosas incorporables, derechos de autor, de inventor, sobre marcas de fábrica y nombres de comercio (pero los derechos de personas conexos con tales derechos quedan fuera del patrimonio). Aún derechos en expectativa pueden tener carácter patrimonial».

«Por otra parte no importa como nazca el derecho, sea por un acto de naturaleza personal (creación de una obra de la inteligencia), sea por un acto ilícito, ni que el derecho provenga *ex lege* de relaciones de familia (obligación de alimentos, usufructo legal de los padres, pensión legítima), porque aunque el derecho surge de relaciones que están fuera de la esfera del patrimonio, tienen empero, contenido de dicha índole».

«Forman parte del patrimonio los derechos reales o de crédito, no los objetos mismos de tales derechos (cosas o prestaciones). El patrimonio por eso es el conjunto de derechos con valor económico».

«Esta rigurosa delimitación del patrimonio excluye del mismo muchos hechos o relaciones de la vida económica, que aunque redunden en beneficios del sujeto, no son por sí mismo elementos de aquel. Tales hechos o relaciones valen como intereses, porque o elevan el valor de determinados derechos patrimoniales o abren al sujeto la posibilidad de nuevas adquisiciones. Así la situación local de un inmueble (por ejemplo: proximidad a un ferrocarril, a una corriente de agua, a una ciudad), puede ser un coeficiente precioso para su mayor valor, pero constituye una *qualitas fundi* y no un elemento patrimonial independiente. Lo mismo se aplica a la clientela de un negocio o establecimiento comercial. Aún la capacidad de trabajo de una persona es ciertamente fuente de bienes, pero es una cualidad del sujeto y no una parte de su patrimonio sometida a su señorío. La actividad del trabajo es una faz de la personalidad, si bien de gran importancia patrimonial, y por lo mismo fuera de la acción de los acreedores. Y lo mismo rige para otras actividades individuales: habilidad en un arte, capacidad, experiencia, etc». «No es tampoco un elemento del patrimonio, en sentido jurídico, el crédito de la persona, el que si bien puede servir para la adquisición de nuevos bienes, no es por sí mismo un bien jurídicamente apreciable y capaz de ser alcanzado por los acreedores. Finalmente en el patrimonio no se comprenden simples provisiones o esperanzas de adquisiciones, probabilidad fluctuante de bienes futuros, que aún no se han realizado o convertido en un derecho. Referirse en este caso de un patrimonio embrionario o potencial es mera ficción» Ferrara, *op. cit.* p. 867.



3371 cód. cit.); con la posesión provisoria que se acuerda al heredero del ausente con presunción de fallecimiento, (art. 118 cód. cit.; Windscheid, op. cit. t. 1, p. 672).

Por excepción el patrimonio existe como universalidad jurídica, con un objeto determinado y sólo entonces puede decirse que es indivisible y que comprende el activo y el pasivo, (quiebra, concurso). Nota de Velez al art. 3283, cód. civ. Conf. Windscheid y Ferrara loc. cit.

El patrimonio del deudor escapa a veces a la acción de los acreedores por motivos de orden público, de humanidad, de conveniencia social, etc. El deudor ha ido mejorando de condición con el progreso de los tiempos: no es posible ya que se convierta en esclavo para pagar sus deudas, como ocurría entre los griegos (1), ni que se le azote como en la Rusia del siglo

(1) Maasin, op. cit. p. 251.

La doctrina del patrimonio tal cual resulta de nuestro código civil, limita el campo de acción del acreedor y dignifica al deudor permitiéndole desarrollar libremente sus actividades futuras. Los sueldos y salarios no devengados, es decir futuros, ni pueden ser cedidos en el concurso de acreedores ni forman parte del mismo, ni son embargables. Cuando el art. 476 inc. 6.º del cód. de proc. autoriza el embargo de los sueldos y salarios se ha referido, indudablemente, a los sueldos y salarios devengados porque se encuentran incorporados al patrimonio del deudor.

La tesis que sustentamos ha sido escasamente discutida, que sepamos, entre nosotros, donde por falta de respeto a la personalidad humana suelen trabarse embargos sobre sueldos y salarios futuros.

En la única forma que se legitima el embargo de sueldos futuros se concediendo la legalidad de sentencias condicionales.

«La cesión de bienes—se ha dicho—comprende todos aquellos que se poseen en la época en que esta se hace y con respecto a los que se adquieran en lo futuro. El cód. de com. al tratar de las quiebras, cuya legislación es más severa que la ley civil, no va hasta privar al fallido del producto de su trabajo, porque supone muy juiciosamente que esa persona tiene necesidades en la vida que es necesario llenar.

«Si lo que gana con su trabajo tuviera que entregarlo a sus acreedores ¿con qué mantendría a su familia? Por otra parte, si un deudor tuviera que trabajar para el solo provecho de sus acreedores, bien pronto se abandonaría, desde que su trabajo no le dejaba los medios de subsistencia. Si a un concursado le conviene trabajar para adquirir bienes, a sus acreedores les conviene también que los adquiera, porque así podría pagarlos. Estas son las razones que ha tenido en vista la ley para dejar al fallido el producto de su trabajo personal, y si la ley comercial (a) tan exigente procede así ¿con cuánta mayor razón no lo hará la ley

(a) El art. 144 de la ley de quiebra establece, que el fallido culpable que hubiese cumplido la condena, puede ocuparse en operaciones de comercio por cuenta ajena ganando para sí el sueldo, emolumentos o parte de bienes que se le den por ese servicio, etc.



XVI; ni que venda una libra de carne como en el Pecorone de Juan Florentino, del siglo XV, o del mercader de Venecia del inmortal poeta inglés.

La prisión por deudas, último vestigio de esas costumbres ha desaparecido casi por completo, de los pueblos cultos. La ley núm. 50 (14 de septiembre de 1863), estableció, que si el deudor en el juicio ejecutivo, no daba bienes a embargo ni fianza de saneamiento debía asegurarse en prisión. La ley núm. 263 hizo desaparecer tal medio compulsorio. (Junio 26 de 1872).

4.º—Los acreedores sólo pueden perseguir el patrimonio del deudor (1) y aún con relación a este hay cosas o bienes que no pueden embargar, tales son:

I. El lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos; las ropas y muebles de su indispensable uso ni los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza (art. 480 cód. cit.). No hace distinción la ley si los muebles son o no de escaso valor o lujosos, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 856 nota 472; t. 2, p. 267). El principio del art. 480 cit. surge del cód. civ.

---

civil, que concede al deudor que hace cesión de bienes ciertas franquicias. El art. 766 del cód. de proc. concede al deudor que hace cesión de bienes el goce del beneficio de competencia en los términos y bajo las condiciones establecidas en el título «Del pago del cód. civ.

«El inc. 6.º del art. 800 del cód. civ. concede este beneficio al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en los que después ha adquirido. Según el art. 799 del cód. civ., el beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores (inc. 6.º art. 800) para no obligarles a pagar más de lo que buenamente pueden, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejore de fortuna» (cód. civ. t. 75, p. 72 y t. 133, p. 201; Gaceta del foro marzo y abril de 1919 p. 150; id. enero y febrero de 1919 p. 272, 303; id. septiembre y octubre de 1920, p. 139).

(1) Para el código francés, (art. 1092) los bienes del deudor constituyen la prenda común de los acreedores, salvo las causas legítimas de preferencia.

La doctrina es poco científica y nuestro codificador no la ha seguido. La prenda supone un vínculo entre la persona y la cosa que no existe respecto de los acreedores. La prenda impide al deudor disponer de la cosa, mientras que el deudor común es libre de disminuir o de aumentar su patrimonio. Lo único que le está prohibido son las enajenaciones fraudulentas, y, en tal caso, el acreedor puede atacarla por medio de las acciones que la ley le acuerda.

(Conf. de Palo, «Teoría del título ejecutivo», t. 1, p. 18; consúltese Menestrina, «L'accessione nell' escusazione», p. 26).



Por aplicación de estos principios se ha declarado inembargable: los bienes indispensables del deudor, si corresponden a su posición social, aun cuando sean de gran mérito artístico, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 856; t. 2, p. 267); el sofá, sillones, escritorio y biblioteca que se usan en ejercicio de una profesión liberal. (id., t. 6, p. 664); el piano cuando está destinado a desarrollar la mayor cultura de una persona, (id., t. 1, p. 909, 952; t. 6, p. 335); las máquinas e instalaciones de un establecimiento de óptica del demandado cuando son elementos de trabajo del mismo, (id. t. 6, p. 335).

II.—Los bienes públicos de las provincias o municipios, porque están fuera del comercio. (art. 2337 y 2340 del cód. civil).

En cuanto a las rentas de dichas personas jurídicas deben considerarse excluidas de embargo si están afectadas a un servicio público determinado, que se interrumpiría si los recursos destinados a costearlos fuesen susceptibles de otra aplicación. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 4, p. 236, texto y nota; t. 8 p. 428).

Los bienes de la nación en ningún caso se pueden embargar, (véase más adelante, p. 28).

III.—Los lotes de hogar que son de propiedad de la familia argentina y no pueden ser embargados, (art. 2 de la ley número 10284).

IV.—Las sumas depositadas en la caja nacional de ahorro postal. No pueden embargarse ni transferirse ni las libretas darse en prenda, sin que se admita reclamación alguna a este respecto. (art. 18 de la ley núm. 9527).

V.—Los sepulcros salvo que se reclame su precio de compra o construcción, (art. 12 de la ley 4128).

VI.—El seguro de vida constituido en favor de un tercero, es un bien de la exclusiva propiedad de éste, y no responde en ningún caso al pago de las obligaciones que adeudase el constituyente a la época de su fallecimiento, salvo por lo que respecta a las cantidades recibidas por el asegurador, las que quedarán sujetas a las disposiciones del código civil, relacionadas con la colación y la legítima de los herederos forzosos y a la revocación de los actos celebrados en perjuicio o fraude de los



derechos de los acreedores (art. 1 de la ley núm. 3942).

VII.—Los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones que no excedan de 100 \$ mensuales. Los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones que excedan de 100 \$, sólo podrán embargarse en la proporción que establece la siguiente escala, aun en el caso de que se compruebe transferencia y constitución de derechos de su valor íntegro. a) de 101 a 150 \$ hasta el 5 % del importe mensual; b) de 151 a 200 \$ hasta el 10 % del importe mensual; c) de 201 a 300 \$ hasta el 15 % del importe mensual; d) de 301 a 500 \$ hasta el 20 % del importe mensual; e) de más de 500 \$ hasta el 25 % del importe mensual (art. 1 y 2 de la ley núm. 9511).

En la discusión de ésta ley se hizo constar que ella respondía «a consagrar el principio de la embargabilidad de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, haciéndolo efectivo mediante la observación de reglas precisas, que garantizan el derecho del acreedor velando a la vez por los intereses de los deudores, y, basándose en preceptos de orden público de moralidad individual y hasta de conveniencia social» (Diario de sesiones del senado, año 1914, p. 585. (1))

VIII.—Los bienes que corresponden a la ley de jubilación de empleados ferroviarios, (art. 14 de la ley núm. 10650).

IX.—Los muebles, ropas y útiles domésticos del agricultor. un arado, una rastra, una máquina sembradora, una cortadora. un sulky con los arneses correspondientes, un carro-chata con los arneses para siete caballos. quince caballos o tres yuntas de bueyes y los arneses indispensables para atarlos al arado, dos vacas y sus crías, tres cerdos, los animales menores y aves para el consumo de la familia durante un año y la semilla de la cosecha anual próxima en una cantidad que no exceda de lo necesario para el cultivo de la chacra que arrienda y hasta un máximo de ochenta hectáreas. Estos beneficios no pueden invocarse contra el vendedor en sus reclamaciones del precio de las cosas inembargables. (art. 10 de la ley núm. 11170).

(1) La sup. cort. nac. ha resuelto, que la ley citada, es aplicable a los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones, sean ellos civiles o militares, y derogatoria, a ese respecto de la ley núm. 4707. *Jurisprudencia Argentina*, t. 2, p. 567.





X.—Las indemnizaciones acordadas por accidentes del trabajo, pues gozan del beneficio de las pensiones alimenticias, (art. 13 ley núm. 9688)

XI.—La pensión alimenticia que se acuerda a ciertos parientes, (art. 347 cód. civ.).

5.º—La facultad para determinar cuales bienes son inembargables pertenece al congreso y no a las legislaturas locales y de ahí que la sup. cort. nac. haya declarado inconstitucionales: a) el art. 494 del cód. de proc. civil de la prov. de Buenos Aires, en cuanto establece, que no podrán embargarse las rentas públicas ni los bienes públicos, y sí solamente los que constituyen el patrimonio privado de las personas públicas (1) con sujeción a lo dispuesto en el cód. civ.; b) el art. 37 de la ley de presupuesto de la provincia citada, vigente en 1916 que substraía al embargo judicial los sueldos mayores de 100 pesos a no ser por voluntad propia del empleado (2); c) el art. 132 de la constitución de la provincia de Santa Fé, según el cual, “en ningún caso podía hacerse ejecución o embargo en las rentas o bienes municipales”, (3) y el art. 14 de la ley orgánica municipal que contiene idéntico precepto, (Manual, t. 4, p. 23).

6.º—El patrimonio del deudor puede también estar limitado en su afectación al acreedor por la convención, que es ley de

---

(1) Dijo la corte que las rentas generales de las provincias y de sus municipios no figuran entre los bienes públicos, (art. 2340, 2342 inc. 3.º y 2344 cód. civ.) de las que sólo pueden disponer como poderes y no como personas jurídicas, pues, están destinadas a gastos administrativos de toda clase, muchos de carácter eventual o que no son indispensables y urgentes, y al cumplimiento de obligaciones regidas por el derecho común. En tal concepto, el dinero proveniente de los impuestos se encuentra en lo que hace al pago de los acreedores de las municipalidades y a las medidas de seguridad pedidas por aquellas, en distintas condiciones que los inmuebles puestos fuera del comercio por su consagración especial a un servicio público, (sup cort. nac. t. 121, p. 250).

(2) La disposición legal así entendida, dijo la corte, es contraria al art. 505 del cód. civ., por cuanto subordina los derechos del acreedor al arbitrio del deudor en la porción de sueldo disponible, que puede cederse en embargo, según la citada ley provincial, (sup. cort. nac. t. 124, p. 70).

(3) Las razones invocadas fueron análogas a las establecidas para declarar inconstitucional el art. 494 del cód. de proc. civ. de la provincia de Buenos Aires, (sup. cort. nac. t. 103, p. 373).



las partes, (art. 1197 del cód. civ.), o por qué esté destinado a satisfacer deberes impuestos por otros motivos:

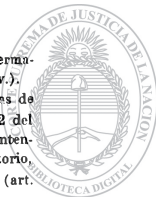
I.—El acreedor hipotecario sólo puede embargar y hacer vender la cosa que le está afectada, a menos qué, de la tasación de la misma, resulte que su valor no alcanza a cubrir el crédito reclamado, (art. 518 cód. de proc. civ y JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 889). Principios análogos rigen para la prenda.

II.—Las cargas del usufructo legal son cargas reales. A los padres por hechos o por deudas no se les puede embargar el goce del usufructo, sino dejándoles lo que fuese necesario para llenar aquellas (art. 292 cód. civ.) .

III.—En algunas sociedades el socio sólo responde limitadamente de las obligaciones de las mismas. La masa social, compuesta del fondo social y de los beneficios acumulados, es solamente, responsable, en las compañías anónimas, de las obligaciones contraídas en su manejo y administración por persona legítima y bajo la forma prescrita en sus reglamentos, salvo los derechos de los terceros contra los administradores. Los socios no responden tampoco de las obligaciones de la compañía anónima, sino hasta el valor de las acciones o del interés que tengan en la sociedad, (arts. 315 y 316 del cód. de com.). El socio comanditario es simple suministrador de capital y no responde sino por los fondos declarados en el contrato, (art. 362 cód. cit.).

IV.—En las sociedades civiles los acreedores particulares de los socios sólo tienen derecho para cobrar sus deudas de los bienes de la prestación del socio, su deudor, cuando la sociedad no hubiese adquirido el dominio de tales bienes, u otro derecho real sobre ellos. — Si la sociedad hubiese adquirido el dominio de los bienes, los acreedores del socio podrán cobrar las deudas de éste, de las ganancias que los balances anuales o intermedios demostrasen en favor del socio su deudor, si éste tenía derecho para retirarlas de la sociedad, (art. 1754 y 1755 cód. civ.).

Alguna vez los bienes que no forman el patrimonio del deudor pueden ser alcanzados por su acreedor. — Los créditos por alquileres de fincas urbanas o rurales gozan de privilegio sobre todos los muebles que se encuentran en la casa, o que sirven para la explotación de la hacienda rural aunque no per-



tenezcan al locatario, introducidos allí de una manera permanente o para ser vendidos o consumidos, (art. 3883 cód. civ.).

7.º—Se puede ejecutar las sentencias contra las personas de existencia visible, y contra las personas jurídicas, (art. 42 del cód. civ.). Sin embargo la nación no es ejecutable y las sentencias que contra ella se dictan sólo tienen carácter declaratorio, limitándose al simple reconocimiento que se pretende, (art. 7 de la ley núm. 3952). Es bien entendido que ha de llevarse adelante la ejecución de la sentencia hasta fijar la cantidad líquida que la nación debe abonar y que sólo se detiene el trámite cuando se trata de reducir a dinero los bienes de aquella. En la expropiación por causa de utilidad pública, no rigen estos principios, porque la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, y previamente indemnizada, (art. 17 de la constitución de la nación).

8.º—Los medios de ejecución varían según la naturaleza de la obligación de que se trata, como varían las sanciones escogidas por el legislador. Existen medidas de instrucción como la comparecencia de un testigo por la fuerza pública, la exhibición de libros cuando a ella se recurre como medio probatorio, etc. etc. (Manual, t. 3, p. 8, 40 y 112).

La ejecución de las sentencias definitivas tiene reglas que se aplican a las siguientes clases de condenaciones: 1.ª de dar cantidad líquida y determinada; 2.ª de dar cantidad ilíquida procedente de frutos; 3.ª de dar cantidad ilíquida procedente de perjuicios; 4.ª de dar cosas ciertas; 5.ª de dar una cantidad líquida y otra ilíquida; 6.ª de hacer alguna cosa; 7.ª de no hacer alguna cosa.

a — Si la sentencia condena al pago de cantidad líquida y de terminada, debe procederse a instancia de parte al embargo de bienes en la forma y orden prevenidos para el juicio ejecutivo, sin que sea necesario el previo requerimiento al deudor. (Ortiz de Zúñiga, t. 2, p. 68; cádm. civ., t. 43 p. 83).

Hay condenación al pago de cantidad líquida, siempre que de la sentencia misma se infiere el monto de la liquidación



aunque no esté expresado numéricamente. Por ejemplo: se condena a abonar intereses corrientes a contar desde el día de la demanda; a reembolsar lo que el actor hubiere pagado durante determinado período en concepto de contribución directa, etc. (cám. civ. t. 121, p. 414).

Practicado el embargo debe citarse al deudor para la venta de los bienes embargados, si dentro de tercero día no opusiere y probare excepción legítima contra la ejecución, (art. 538, cód. de proc. civ.).

Sólo se consideran legítimas las siguientes excepciones: falsedad de la ejecutoria; prescripción de la misma; pago; quita, espera o remisión. La prueba de las excepciones (salvo la de falsedad), debe hacerse precisamente por documentos que se acompañarán al oponerlas, con exclusión de todo otro medio probatorio. Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin más recurso, (art. 539 cód. de proc. civ.).

Se explica la salvedad que se hace sobre la excepción de falsedad porque refiriéndose ella a la adulteración material de la sentencia no podría acompañarse la prueba, sino que debe acreditarse dentro del juicio y por peritos calígrafos u otros medios análogos. (1).

Téngase presente que las excepciones han de referirse a hechos posteriores a la sentencia, pues lo contrario importaría desconocer la autoridad de la cosa juzgada.

I.—Hemos dicho que la excepción de falsedad sólo se refiere a la adulteración material del instrumento con el que se deduce la ejecución y al decidir lo contrario la jurisprudencia ha confundido los requisitos de la acción, (*legitimatio ad causam* activa o pasiva) con la excepción que nos ocupa. Así la cám. civ. (t. 159, p. 267), ha resuelto: que es doctrina que la falsedad de la ejecutoria no está circunscripta a las alteraciones materiales o a las falsificaciones en las sentencias, sino que comprende todos los defectos u omisiones porque se anula o no merece fé el título que se presenta.

---

(1) Véase lo que decimos más adelante sobre la excepción de falsedad, p. 63.

Véase en contra mismo tribunal t. 164 p. 75, y fallo de la cámara comercial de marzo 14 de 1922.

Quando se ejecuta una sentencia contra una persona que no es la que fué condenada no solamente falta el requisito de la acción que ya hemos enunciado, sino que se viola el principio de la unidad del juicio, (véase p. 17) reconocido por la misma cámara civil (t. 52 p. 185). Los procedimientos que se incoan para obtener el cumplimiento de una sentencia, ha dicho el tribunal, no importan un nuevo juicio, y la personería del mandatario subsiste mientras no haya terminado el negocio para el que le fué conferido el mandato.

II.—La ejecutoria se prescribe a los diez años, de acuerdo con la doctrina que hemos expuesto sobre la unidad del juicio, (Manual, t. 4, p. 7, t. 3, p. 295).

III.—La excepción de pago como todas las que proceden en la ejecución de la sentencia tiene que fundarse en un hecho posterior a la misma (cámara civil t. 150, p. 607).

Para saber si existe o no pago debe estarse a los principios del derecho civil. Recordaremos de paso un fallo de la cám. com. (diciembre 13 de 1922), donde se resolvió que si la ejecución se inició a base de un documento a moneda extranjera, pero reducido a su equivalente en moneda nacional y esto fué lo que se demandó y la sentencia condenó, el deudor no cumple su obligación depositando la moneda extranjera, sino que el pago debe hacerse por la suma de moneda nacional a que fué condenado.

No obstante que la ley, (art. 539 cód. de proc. civ.) habla solamente de pago, las cámaras en pleno han declarado que en dicha palabra se comprende también la compensación pues, al definir esta, el art. 818 del cód. civ. prescribe que «ella extingue con fuerza de pago las dos deudas», esto es, la equipara en sus efectos al pago y le atribuye el mismo valor. Y se explica que así sea, ya que no se concibe que cuando dos personas son acreedores y deudores reciprocamente por deudas legalmente válidas, exigibles, líquidas y de plazo vencido se las condene a recibir y pagar las sumas por las que son acreedores, cuando basta y simplifica la operación, que se abone solamen-



te el saldo descontando la deuda menor de la mayor, liquidando así los negocios pendientes.

«Estas elementales nociones de conveniencia y equidad están autorizadas por la ley al dar a la compensación la fuerza del pago, y deben ser aplicadas por los jueces para evitar el abuso y la injusticia de que el acreedor ejecute a un deudor a quien debe una suma mayor, exigiendo previamente el pago, sin haber por su parte satisfecho las obligaciones que a la vez le corresponde como deudor por mayor cantidad». (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 5, p. 79).

La solución enunciada es justa, pero no por los motivos que se invocan, pues una cosa es el pago y otra la compensación. Lo que faltaba en el caso resuelto era uno de los requisitos de la acción: una regla de derecho que garanta un bien. (Manual, t. 3, p. 29).

IV.—Las excepciones de quita, espera o remisión se rigen por análogos principios a los expuestos.

Parecerá raro que un acreedor pueda deducir acción de cumplimiento de sentencia cuando ha recibido el pago o ha concedido quita, espera o remisión de la deuda: pero es que esas excepciones pueden ser el resultado de actos en que no ha intervenido, lo que ocurre en el caso de convocatoria de acreedores, (art. 20 ley de quiebras).

Si el deudor no opone excepciones dentro del término que ya hemos indicado, debe mandarse continuar la ejecución, sin recurso de ningún género. Si las opone, una vez agregada la prueba, el juez debe mandar continuar la ejecución o no hacer lugar a ella (art. 540, cód. de proc. civ.).

La resolución que acepta o rechaza la ejecución, es recurrible en la misma forma que la sentencia de remate en el juicio ejecutivo. Consentida o ejecutoriada que sea la providencia que manda llevar adelante la ejecución, debe procederse en todo según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor (art. 540 y 541 cód. civ.).

La disposición últimamente recordada agrega que puede



exigirse fianza al acreedor para las resultas del juicio ordinario, que en tales casos puede promover el deudor.

Jamás en nuestros tribunales se ha promovido juicio ordinario después de una ejecución de sentencia, ni es posible que se promueva. El error proviene, seguramente, de que en la vieja legislación española no se oía al ejecutado y éste, después de enajenados sus bienes, podía reclamar en juicio ordinario cuando con fecha posterior a la sentencia se hubiere extinguido la obligación total o parcialmente, en alguna de las formas legales, (art. 541 cód. de proc. civ.).

b.—Si la sentencia condenase al pago de cantidad líquida procedente de frutos, se intimará al deudor que dentro de un término que señale el juez, según las circunstancias del caso, presente liquidación con arreglo a las bases que en la misma sentencia se hubiesen fijado; bajo apercibimiento de que, no haciéndolo, estará y pasará por la que presente la otra parte en todo lo que él no pruebe ser inexacto (art. 542 cód. de proc. civ.).

La disposición legal precedente tiene íntima analogía con la contenida en el art. 219 del mismo cód., que preceptúa: que cuando la sentencia contenga condenación de frutos, intereses, daños o perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre las que deberá de hacerse la liquidación; y que si por no haber las partes hecho la estimación recordada, no fuese posible lo uno ni lo otro se reservarán sus derechos para que en otro juicio se fije su importancia. Cabe entonces preguntar ¿cuándo procede el juicio de cumplimiento de sentencia y cuándo el juicio ordinario?

El criterio que debe observarse varía según se trate de la justicia ordinaria o de la justicia federal:

I.—En la justicia ordinaria para que proceda el juicio de ejecución de sentencia es necesario que en la misma, como lo dice la ley, se hayan fijado las bases para la liquidación de los frutos. Por ejemplo: se pagarán los frutos percibidos o dejados de percibir durante tal número de años. En ese caso el vencido al presentar la liquidación manifestará cual era el arrendamiento corriente del inmueble que indebidamente poseyó, o los

procreos de las haciendas que retuvo y corresponderá al vencedor demostrar que las cantidades fijadas no son exactas.

Existirá un hecho que el vencido no puede poner en duda ni discurrir: la obligación de abonar frutos percibidos o dejados de percibir.

II.—En lo federal la sentencia que contenga condenación de frutos, créditos o daños, fijará o bien la cantidad de la condenación, si resultara líquida, o al menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación; y cuando no haya mérito para lo uno ni para lo otro, se reservará para el juicio correspondiente la acción sobre los frutos, réditos o daños, (art. 15 ley núm. 50).

En el fuero citado pueden presentarse, entonces, varias situaciones:

a) el actor ha hecho estimación de los frutos y la ha probado; debe el juez fijar la cantidad de la condenación o al menos las bases sobre que ha de hacerse la misma; si no se prueba el monto de los frutos la demanda debe rechazarse;

b) el actor ha reclamado daños y perjuicios, pero no ha fijado su monto que debe dejarse para otro juicio ordinario.

Y es natural que así suceda, desde que la ley núm. 50 establece que el crédito sobre el que se pide el apremio, (cumplimiento de sentencia) ha de resultar líquido del título que se presente, pues de lo contrario no tendrá lugar, hasta que se haga la liquidación por acuerdo común de las partes, por sentencia judicial o por árbitros, (art. 311 ley núm. 50 y sup. cort. nac. t. 7, p. 424; t. 17, p. 251; t. 62, p. 465; t. 86, p. 384; t. 89, p. 17; t. 92, p. 78).

Al presentar la liquidación el vencido puede oponer las excepciones de falsedad de la ejecutoria por haber sido esta adulterada materialmente; la prescripción de la misma por haber transcurrido diez años desde que pasó la sentencia en cosa juzgada. (1) o las de pago, quita, espera o remisión concedida por el vencedor o en juicio de convocatoria.

(1) En lo federal la vía de apremio debe intentarse dentro de los tres meses de pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia, (art. 309 de la ley núm. 50).





Presentada la liquidación por el vencido, el juez debe dar vista al acreedor por seis días, y si manifiesta conformidad, se procederá a hacer efectiva la suma que resulte para los casos en que se ejecuta una cantidad líquida, (art. 543 y 544 del cód. de proc. civ.).

Si el vencedor no está conforme con la liquidación presentada por el vencido, la causa debe recibirse a prueba por un término que no exceda de treinta días (art. 545 cód. de proc. civ.). Durante ese término puede demostrarse cualesquiera de las causas extintivas de la obligación, posteriores a la sentencia, y el monto como hemos dicho de los frutos percibidos o dejados de percibir, (art. 545 cód. cit.) .

Puede ocurrir que el deudor no presente la liquidación, en cuyo caso debe hacerlo el acreedor, quedando invertido el peso de la prueba, que será a cargo del vencido. Se tendrá por cierta la liquidación en todo cuanto éste no pruebe ser inexacta, (art. 548 y 551 cód. cit.).

Si hay conformidad de partes sobre la liquidación se aprueba sin ulterior recurso (art. 550 cód. civ.). Si falta esa conformidad el juez aprueba o desaprueba la liquidación según las probanzas presentadas.

c)—El deudor es quien ha percibido los frutos y por consiguiente se encuentra en mejor condición para valorar su importe, a lo que se agrega que en la liquidación que está obligado a presentar, se fijan las bases para la discusión. En cambio cuando se trata de condena al pago de cantidad ilíquida procedente de perjuicios el vencedor, que es quien los ha sufrido, debe presentar la relación de ellos, al pedir el cumplimiento de la ejecutoria. Presentada que sea se observarán los trámites que hemos indicado en la letra anterior.

d)—Cuando la condena sea de entregar una cosa cierta se librará mandamiento para desapoderar de ella al obligado; y caso de que esto no pudiese verificarse, se le obligará a la entrega del precio, previa la evaluación necesaria con los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

e)—En caso de que la sentencia contuviese condena de ha-



per alguna cosa. si el condenado no cumplierse con lo que se le ordena, dentro del plazo que el juez le señale, se hará a su costa, o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inexecución, a elección del acreedor. Para hacer efectiva la indemnización, se aplicarán las reglas establecidas, según que la sentencia haya fijado o no los perjuicios para el caso de inexecución.

f)—Si la sentencia condenase a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible y a costa del deudor, o que se le indemnicen los daños y perjuicios, conforme a las reglas establecidas para las obligaciones de hacer, (art. 555, cód. de proc. civ.; 633 y 634 cód. civ.).

Tanto en las obligaciones de hacer como en las de no hacer siempre que las liquidaciones o cuentas a que haya de procederse sean muy complicadas y de lenta y difícil justificación, o requieran conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos amigables componedores. (art. 557, cód. de proc. civ.).

9.—Es principio recibido en los pueblos modernos, que el acreedor tiene derecho para emplear contra su deudor los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se obligó, (art. 505, cód. civ.). Cuando el deudor se rehusa a cumplir su obligación interviene la justicia, para asegurar los derechos del acreedor y subrogarse a la voluntad de aquel. (1) Sólo

(1) Leroux, op. cit., p. 12; Massin, op. cit., p. 237.

Carvantes op. cit. t. 4, p. 293, discurriendo sobre esta cuestión dice: «Si se condenase a un artesano a hacer un artefacto común que no requiera el arte o habilidad especial de su persona, mandará el juez que se ejecute por otro artesano con la inteligencia necesaria para ello, pagando el vencido en el juicio el valor del artefacto, y entregándose éste al vencedor. Pero si por ser personalísimo el derecho, por depender de los conocimientos especiales del condenado a hacerlo o consistir en actos que solo él puede ejecutar, no pudiera verificarse en esta forma, esto es, haciéndolo otra persona a costa de aquél, se entenderá que opta por el resarcimiento de perjuicios». No se trata en este caso de una obligación alternativa, (cám. com. en Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 956).

Puede consultarse también sobre obligaciones de hacer en el juicio de cumplimiento de sentencia la vacilante y errónea orientación de nuestros tribunales, cám. civ. t. 54, p. 306; t. 61, p. 179; t. 69, p. 100; t. 122, p. 367.

Recordaremos al pasar dos especies: La empresa constructora del



en los casos en que hay imposibilidad material o moral puede acordarse al acreedor una compensación en dinero, que se juzgue equivalente de la prestación prometida. (Manual, t. 3, p. 40).

La imposibilidad material existe cuando la cosa se ha perdido, o el deudor ha dispuesto de ella a favor de un tercero, contra el cual no es posible dirigir la acción. Pero si la cosa existe en poder del acreedor, es claro que los jueces deben desahogar de ella al deudor para entregarla al acreedor.

Surge en cambio la imposibilidad moral en los casos en que es necesario para el cumplimiento de la obligación emplear la fuerza sobre la persona misma del deudor. (1)

No existe en nuestro derecho positivo la regla general sentada por el cód. francés, (art. 1142), de que toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en el pago de daños y perjuicios en caso de inexecución por parte del deudor, por más que se la suponga existente en algún caso aislado, (Manual, t. 3, p. 40).

Los civilistas franceses después de estudiar los antecedentes de aquella regla han concluido por establecer que solamente cuando hay imposibilidad material o moral para que se cumpla la obligación puede esta resolverse en el pago de daños y perjuicios. (2)

Existen determinados derechos que pueden ejecutarse

---

ferrocarril de Córdoba a Tucumán fué condenada al pago de perjuicios relativos al importe de dos pasos a nivel y al nuevo arreglo de unas acequias; pedida la ejecución de la sentencia los peritos valoraron el importe de los dos pasos a nivel, pero no lo que se refería al arreglo de las acequias, que la empresa se obligó a ejecutar por su cuenta. El tribunal aprobó la tasación y declaró, que la referida empresa debía practicar en el término que el inferior le señalase, las obras necesarias para el arreglo de dichas acequias (sup. cort. nac. t. 23, p. 361). Se condenó a la Bolsa de comercio de Buenos Aires a recibir en su seno a dos socios, que habían sido excluidos sin derecho de la misma y el fallo se cumplió. (Jurisprudencia Argentina, t. 6, p. 229).

(1) Para Maasin, op. cit. p. 249, el empleo de violencia sobre los bienes es legítimo, lo que no ocurre con las personas, porque la turbación social que produciría es superior a la utilidad obtenida.

(2) Maasin, op. cit. p. 278, 284, *passim*, y autores ahí citados. Laurent sostiene que la ejecución directa de la obligación es la regla para toda clase de obligaciones. La regla no sufre excepciones, sino cuando existe imposibilidad de obtener la ejecución directa, etc. Op. cit. t. 16, p. 258.

*manu militari*, contra ciertas personas y que constituyen excepciones a las reglas ya sentadas. Los padres pueden exigir a las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para hacer entrar a sus hijos menores bajo su autoridad, cuando dejen la casa paterna, o aquella en que los hubiesen colocado, (art. 276 del cód. civ.); el administrador de una sociedad a quien se le imposibilita el ejercicio de su cargo, debe ser mantenido en el mismo por la fuerza pública (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 4, p. 424); debe procederse en análoga forma para que el tenedor de libros designado por cláusula del contrato social cumpla con su cometido, (op. cit., t. 4, p. 512-Manual, t. 3, p. 8, 211).

En el código penal cierta clase de delitos están reprimidos con pena de multa, es decir, con una cantidad de dinero que el culpable debe pagar, y en caso de no hacerlo, su obligación se convierte en privación de la libertad, que puede llegar hasta año y medio de prisión. (art. 21 cód. pen.). Los capitanes de buques están facultados para imponer a bordo las penas correccionales establecidas por la ley o los reglamentos, a los que se rehúsen u omitan el servicio que les corresponda. (art. 906, inc. 2 del cód. de com.). Es lícito en determinadas circunstancias, impedir el viaje del capitán y de los otros individuos de la tripulación por falta de cumplimiento a las deudas contraídas, (art. 922 cód. cit.). Por principios análogos se encuentran regidos los oficiales de los barcos y los comerciantes declarados en quiebra, (art. 990 del cód. com. y 44 y 59 de la ley de quiebras).

En las obligaciones de hacer, lo que se ha querido evitar es la concepción sobre la *persona* del obligado, como lo decía Bigot Preameneu al disentir el art. 1142 del cód. Napoleón, y de ello resulta que es criticable la doctrina de nuestros tribunales que sólo acuerda daños y perjuicios al acreedor, negándole lo que libremente se le concedió de acuerdo con la ley. (V. Locré, t. 12, p. 329; Demolombe, t. 24, núm. 494; Duranton, t. 10, p. 476; Laurent, t. 14, núms. 297 y 298; etc.; Massin. op. cit. p. 284).

La jurisprudencia ha declarado que se puede emplear la





fuerza pública, a fin de cumplir determinadas decisiones, principalmente en materia de sociedades. En cambio, otras veces, ha decidido que si la mujer casada, menor de edad, está depositada en casa de sus padres y se fuga, es improcedente librar oficio al jefe de policía para que sea buscada, pues, la ley no autoriza medidas de coacción, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 5, p. 655).

Los medios indirectos son más frecuentes en la ley y la jurisprudencia, a objeto de conseguir que una persona cumpla con sus obligaciones. Un ejemplo bien notorio lo tenemos en las obligaciones con cláusula penal. La cláusula penal (art. 652 cód. civ.) es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.

La mujer está obligada a habitar con el marido, donde quiera que éste fije su domicilio, (art. 53 de la ley de matrimonio civil). Para obtener el cumplimiento de tal deber, el marido sólo posee medios indirectos: negarle alimentos, solicitar el divorcio, etc. En Francia, la mayoría de los autores y la jurisprudencia sostienen que el marido puede obligar a su mujer aun *manu militari* a reintegrarse en el domicilio conyugal, no con el objeto de encerrarla en él, sino para afirmar su autoridad y buscar una reconciliación, (Garsonnet, *Traité de procédure*, t. 4, p. 70, 2.<sup>a</sup> edic. y autores allí citados).

Los tribunales franceses han creado la teoría de las *astreintes* dándole un amplio desenvolvimiento, a pesar de las críticas de que ha sido objeto. Las multas o *astreintes* han sido definidas: «como una condenación pecuniaria de carácter provisorio, destinada a obtener indirectamente la ejecución en natura de una obligación, bajo la amenaza de una pena capaz de vencer la resistencia del deudor», (Berryer, op. cit. p. 20).

Se ha sostenido que ahí donde no es posible el empleo de la fuerza material para el cumplimiento específico, es posible el empleo de la fuerza pecuniaria y psicológica mediante una progresiva condenación. A la *manu militari* no practicable, se sustituye la *astreinte*.

«La razón determinante de esta forma de coacción indirecta.

es sencilla. No puede y no debe el acreedor resignarse a recibir una suma de dinero, en lugar de la prestación que le es debida, por la sola razón de faltar la posibilidad de una coacción directa sobre el obligado a la concreta prestación debida. Pero es necesario, antes de la ejecución por subrogación del equivalente pecuniario, tentar por caminos indirectos, mediante la amenaza de un cumplimiento más gravoso de la condena de indemnización, el cumplimiento del objeto mismo de la obligación», (Ferrara, op. cit. p. 85).

Entre los ejemplos clásicos se encuentra el juicio de divorcio del príncipe Beaufremont, en que se condenó a la esposa a entregar las dos hijas al marido con la obligación de colocarlas en un convento. No se pudo obtener el cumplimiento de la sentencia, ni con la intervención de la policía, ni con el secuestro de las rentas que correspondían a la princesa y entonces se recurrió a la teoría de las *astreintes*.

Decidiendo el caso, la corte de apelación de París, (Dalloz, año 1878, segunda parte, p. 78), dijo: «Es un derecho y un deber de la justicia en presencia de la inejecución o retardo en el cumplimiento de lo que ella ordena, adoptar, desde luego, las disposiciones que la ley autoriza, sea para vencer la resistencia de la princesa, sea para indemnizar al marido, en cuanto sea posible, el perjuicio que le ha ocasionado. El príncipe demanda el embargo de las rentas de su mujer con el objeto de que se le adjudiquen a título de sanción y de pena como daños y perjuicios. La obligación impuesta a la princesa de Beaufremont, de entregar a su marido sus hijas menores, constituye una obligación de hacer que se resuelve, según el art. 1142, en daños e intereses.»

«Reduciendo a simples daños e intereses la sanción demandada — agregó la corte — conviene proporcionarla a la resistencia que se trata de vencer y a los daños a reparar, así como a la importancia de las rentas, cuyo embargo se ha reclamado.»

En el mismo asunto, y en vista de la resistencia opuesta por la esposa, la corte fijó como sanción para la falta de cumplimiento de la misma, en su fallo, la pena de mil francos por día





de retardo, lo que trajo como consecuencia de que l'*astreinte* de que nos ocupamos llegase a un millón de francos.

Otro asunto donde se hizo aplicación de las doctrinas expuestas fué el que siguió cierto señor Abadie contra la Compañía de electricidad de París, que se había negado a suministrar la corriente eléctrica a que aquel tenía derecho. La corte fijó como medio compulsorio la suma de diez mil francos por cada día de retardo.

Los tribunales ingleses tienen la institución de la *contempt of court* para aplicar a los que desobedecen sus mandatos. Refiere Franqueville, que visitando una cárcel inglesa le llamó la atención la presencia de personas que se encontraban presas por deudas. Preguntó si el parlamento inglés no había suprimido la prisión por deudas y se le contestó afirmativamente. —¿Y entonces?... — Esos señores se encuentran detenidos porque los tribunales los han condenado a pagar sumas de dinero y como no las han satisfecho fueron castigados por desacato.

Otros países como Austria y Alemania admiten medidas de coacción para el cumplimiento de las sentencias que se traducen, en ciertos casos, en la privación de la libertad, que casi nunca pasa de meses de arresto.

10. — Las sentencias pronunciadas en países extranjeros (a) tienen en la República la fuerza que establezcan los tratados celebrados por la misma (1). (art. 558 cod. de proc. civ.).

(a) Sobre ejecución de sentencia extranjera véase: **Bellet**, «Procédure civile du canton de Genève», p. 136, 4.ª edic.; **Caravantes**, «Procedimientos judiciales según la nueva ley de enjuiciamiento», t. 4, p. 296 y s., Madrid 1858; **Chiovenda G.**, «Principii di diritto processuale civile», p. 930, 3.ª edic., Nápoles 1913 y bibliografía ahí citada; **De la Colina**, «Derecho y legislación procesal», t. 2, p. 306, 2.ª edic.; **De la Eda**, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 124 y s., Madrid 1856; **Glasson**, «Traité de procédure civile», t. 2, p. 241, 2.ª edic.; **Manresa y Navarro**, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 215 y s., Madrid 1880; **Manresa y Bous**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 202 y s., Madrid 1881; **Rodríguez A. M.**, «Comentarios al código de procedimientos», t. 3, p. 35, 2.ª edic.; **Tissier A. y Darras A.**, «Code de procédure civile», t. 2, p. 43 y bibliografía ahí citada.

(1) La República ha celebrado sobre cumplimiento de sentencias, «hortos», etc., dos tratados:

1.ª Con Italia, para la recíproca ejecución de las cartas rogatorias y de las sentencias; aprobado por la ley núm. 3983 y vigente desde el 5 de noviembre de 1901, (fecha del canje, en Roma).

En defecto de tratados las sentencias extranjera tienen fuerza en nuestro país si reúnen las condiciones siguientes:

2.º De derecho procesal, firmado en Montevideo el 11 de enero de 1889 y aprobado por ley núm. 3192, de diciembre 11 de 1894, entre la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú.

Transcribimos el texto de esos instrumentos interacionales:

**a) Tratado con Italia:**

Art. 1.º — Las competentes autoridades judiciales de cada uno de los dos países darán ejecución a las cartas rogatorias que les fuesen dirigidas por las del otro, tanto en materia civil y comercial, cuanto en materia penal no política.

Art. 2.º — Las cartas rogatorias en materia penal podrán tener por objeto la citación, juramento, interrogatorio y deposición de testigos, el examen, la copia o traducción, verificación o entrega de documentos, el secuestro y remisión de objetos y cualquiera otra cosa que se refiera al delito por el cual se procede, al objeto de indagar o de esclarecer mejor la verdad de los hechos alegados por la acusación o la defensa, salvo bien entendido, los derechos de terceros que deban hacerse valer ante el magistrado competente.

Art. 3.º — Las cartas rogatorias en materia civil y comercial, podrán comprender, a más de cuanto se determina en el artículo precedente la inspección y examen de libros, su exhibición y todas las demás prácticas que sirvan para la decisión de las causas.

Art. 4.º — Las cartas rogatorias serán escritas en el idioma del estado requiriente, y transmitidas por vía diplomática.

Elas contendrán, en cuanto sea posible, la indicación del domicilio de las personas que deban citarse.

Art. 5.º — En la ejecución de las cartas rogatorias se admitirán siempre las excepciones deducidas por las partes y se tramitarán convenientemente a fin de que sean juzgadas como sea de derecho.

Art. 6.º — Los particulares interesados en la ejecución de las cartas rogatorias en materia civil y comercial podrán constituir procuradores para promover la respectiva ejecución de aquellas.

Art. 7.º — Los gastos ocasionados en las cartas rogatorias en materia civil y comercial serán a cargo del interesado.

Los gastos ocasionados para diligenciar las cartas rogatorias en materia penal, no serán reembolsados, sino que quedarán a cargo del gobierno del país en el cual deban ser ejecutadas.

Art. 8.º — Las sentencias definitivas en materia civil y comercial, pronunciadas por las autoridades judiciales de cada una de las partes contratantes tendrán completa y recíproca ejecución en los estados de la otra parte, como las de sus propios tribunales.

Torna el efecto será sin embargo, necesario que los tribunales competentes de la circunscripción, en que debe ejercitarse la sentencia según las respectivas leyes de procedimiento, la declaren ejecutiva después de haber citado los interesados a un juicio sumario en el cual se examinará solamente:

1.º — Si la sentencia cuya ejecución se demanda ha sido pronunciada por autoridad judicial competente;

2.º — Si las partes debidamente citadas han asistido al juicio personalmente o por medio de mandatario legal, o sin han sido declara-





I — Que se presente una ejecutoria que reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como tal, y los que las leyes argentinas requieran para que haga fé en la república, (art. 559 inc. 4 cód. cit.).

das contumaces de conformidad con los códigos vigentes de procedimiento;

3.° — Si la sentencia procede del ejercicio de una acción personal y la obligación u obligaciones a cumplirse no son prohibidas por las leyes del estado requerido.

4.° — Si la sentencia no contiene disposiciones contrarias al orden público, o al derecho público del mismo estado. La ejecución de la sentencia podrá ser requerida por vía diplomática o directamente por la parte interesada; advirtiéndose que cuando ella sea demandada por vía diplomática, si la parte interesada no ha constituido procurador, éste será nombrado de oficio por el magistrado que debe decidir sobre el punto y deberá satisfacer al procurador el pago de los gastos legítimos de su cargo.

La autenticación de la sentencia se hará de conformidad con las leyes de cada país, agregándose la legalización final del ministerio de negocios extranjeros.

b) **Tratado de Montevideo:**

En dicho tratado, celebrado entre las Repúblicas Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay (firmado en Montevideo en 1839) se estipuló:

Art. 5.° — Las sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales, en uno de los estados signatarios, tendrán en los territorios de los demás, la misma fuerza que en el país en que se han pronunciado, si reúnen los requisitos siguientes:

a) Que la sentencia o fallo haya sido expedido por tribunal competente en la esfera internacional; (1)

b) Que tenga el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en el estado en que se ha expedido;

c) Que la parte contra quien se ha dictado, haya sido legalmente citada y representada o declarada rebelde, conforme a la ley del país en donde se ha seguido el juicio;

d) Que no se oponga a las leyes de orden público del país de su ejecución;

Art. 6.° — Los documentos indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias y fallos arbitrales, son los siguientes:

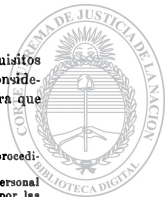
a) Copia íntegra de la sentencia o fallo arbitral;

b) Copias de las piezas necesarias para acreditar que las partes han sido citadas; (Véase Gaceta del foro mayo de 1913, p. 19).

c) Copia auténtica del auto en que se declare que la sentencia o laudo tiene el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada, y de las leyes en que dicho auto se funda.

Art. 7.° — El carácter ejecutivo o de apremio de las sentencias o fallos arbitrales, y el juicio a que su cumplimiento dé lugar, serán los que

(1) Las acciones personales deben deducirse, de acuerdo al derecho de gentes, ante el juez del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico, materia del juicio, es decir, de aquel en que debe cumplirse, o igualmente al del domicilio del demandado, sup. cort. nra., t. 98, p. 482.





El juez argentino debe investigar, en consecuencia, si la sentencia cuyo cumplimiento se le pide ha pasado en autoridad de cosa juzgada, si es ejecutable, con arreglo a las leyes del país donde se pronunció. (1) y si el instrumento donde consta ha sido legalizado de acuerdo con nuestras leyes (2). Más allá no

determine la ley de procedimientos del estado en donde se pide la ejecución.

Art. 8.º — Los actos de jurisdicción voluntaria, como son los inventarios, apertura de testamentos, tasaciones u otros semejantes, practicados en un estado, tendrán en los demás estados el mismo valor que si se hubiesen realizado en su propio territorio, con tal de que reunan los requisitos establecidos en los artículos anteriores.

Art. 9.º — Los exhortos y cartas rogatorias que tengan por objeto hacer notificaciones, recibir declaraciones o practicar cualquiera otra diligencia de carácter judicial, se cumplirán en los estados signatarios, siempre que dichos exhortos o cartas rogatorias reunan las condiciones establecidas en este tratado.

Art. 10. — Cuando los exhortos o cartas rogatorias, se refieren a embargos, tasaciones, inventarios o diligencias preventivas, el juez exhortado proveerá lo que fuere necesario respecto al nombramiento de peritos, tasadores, depositarios, y en general a todo aquello que sea conducente al mejor cumplimiento de la comisión.

Art. 11. — Los exhortos y cartas rogatorias se diligenciarán con arreglo a las leyes del país en donde se pide la ejecución.

Art. 12. — Los interesados en la ejecución de los exhortos y cartas rogatorias, podrán constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos que estos apoderados y las diligencias ocasionen.

(1) Sobre el efecto de las sentencias dictadas en una provincia que deben ejecutarse en otra, véase Manual, t. 1, p. 15, 19, 299 n. (a) 349, 352, 362; t. 3, p. 131.

“El respeto mutuo que se deben las naciones entre sí para acatar los actos emanados de su administración judicial, no llega hasta la tolerancia consiente de las omisiones inocentes o culpables de los requisitos y condiciones necesarias para que sus fallos sean legítimos y justos.

“En este sentido, cada nación ejerce la vigilancia y el control que son inherentes a su soberanía e independencia.

“Los tribunales del país que deben conocer de la ejecución de la sentencia de otro país extranjero, son los encargados de apreciar el mérito de la ejecutoria, comparando la legislación de uno y de otro al efecto de que su concordancia o discordancia afecte o no los derechos y garantías de sus habitantes, protegiendo a estos mediante el fallo ajustado a la ley que está en oposición al de otro país.

“La ejecutoria no es un derecho que en abstracto pueda ejercerse, fundado solamente en la presunción de su verdad por emanar de una nación independiente, porque en contraposición está otra nación, contra cuyos habitantes se libra y a quienes puede sin razón perjudicar, hiriendo y comprometiendo a la vez la soberanía.” Cám. crim. cap. t. 3, p. 309.

(2) La legalización de documentos extranjeros, que deban tener valor en la República, se rige por el decreto del P. E. de julio 24 de 1918, que dice así:

Art. 1. — Todo documento emanado o pasado por una autoridad ex-



puede ir, porque importaría reabrir una discusión terminada. Para comprobar tal extremo la parte que pide el cumplimiento de la sentencia debe acompañar copia de la ejecutoria y un certificado donde conste su carácter de tal, todo debidamente legalizado por autoridad competente.

II — Que el juez de quien emanen tenga competencia en la esfera internacional, (arg. del art. 559 inc. 1 cód. cit.; tratado de derecho procesal de Montevideo, art. 5 letra a); Chiovenda, op. cit. p. 931). (1)

tranjera, que deba hacer fé en el territorio de la República, deberá ser legalizado en primer término, por el agente consular argentino acreditado en la jurisdicción de la autoridad extranjera de que el documento proviene o que lo ha certificado.

Art. 2. — En el caso de falta o ausencia de agente consular argentino, el documento deberá ser legalizado por la legación, y a falta de ésta, por el agente diplomático o consular de una nación amiga.

Art. 3. — La legalización consular o diplomática en la forma dispuesta en los artículos anteriores no podrá en ningún caso ser suplida por la del agente consular o diplomático acreditado en la República por la nación de que el documento emana.

Art. 4. — La firma del agente consular o en su caso diplomático que legalice el documento extranjero, deberá a su vez ser legalizada en la República por el ministerio de relaciones exteriores y culto.

Art. 5. — El presente decreto empezará a regir desde el 1.º de noviembre del presente año, y a partir de esa fecha, el ministerio de relaciones exteriores y culto, así como las demás autoridades públicas argentinas no legalizarán ningún documento extranjero, que no llene las condiciones impuestas en los artículos anteriores, salvo aquellos documentos que por disposiciones expresas de convenios internacionales vigentes estén exentos de esas formalidades.

(1) La suprema corte nacional ha declarado, aplicando el tratado entre la República Argentina e Italia que: «La competencia no puede considerarse exclusivamente subordinada a las disposiciones procesales de orden interno de uno u otro estado contratante, en cuanto la ejecución en un país, de sentencias dictadas en otro, afecta derechos correspondientes a diversas soberanías, derechos que no pueden estar sometidos a la legislación de cada estado sino a la ley internacional que rige a todos.

«La competencia judicial que la convención vigente autoriza a examinar, antes de declarar ejecutiva una sentencia, es aquella que surge de la coexistencia de dos soberanías judiciales que descan ser mutuamente respetadas en su respectiva acción jurisdiccional. Así puede notarse que, bajo la vigencia de la convención celebrada con Francia por el reino de Cerdeña, en 1860, sobre cumplimiento de sentencias, previo examen de la competencia de jurisdicción y la conformidad de la decisión con los principios de orden público y constitucional, los tribunales de Italia se han negado a declarar ejecutivas las pronunciadas por los jueces de aquella nación, a mérito de la competencia excepcional que, respecto a los extranjeros les atribuye el art. 14 del código civil francés, (Olvro «Le droit internationale», pág. 364). Todo cuanto al orden judicial interno se refiere, como la jerarquía de los tribunales y sus respectivas atribu-

El juez argentino no puede entrar a discutir a cual de los jueces de otro país corresponde el conocimiento de la causa, porque esa es una cuestión de derecho interno, en la que no le es dado inmiscuirse.

Le bastará, pues, al juez argentino investigar si se trata de una acción personal y si, en este caso, es competente el juez extranjero para conocer de la misma y entonces deberá acordar el executatur a la sentencia.

III — Que la sentencia no se haya dictado en rebeldía del condenado, cuando éste haya tenido domicilio en la república, (art. cit. inc. 2.).

Las dificultades que puede ofrecer esta regla son visibles. Primus fija como domicilio especial la ciudad de París, donde debe ser demandado por cumplimiento de sus obligaciones; entablada la acción no comparece ante los jueces que libremente eligió. Si se le condena en rebeldía la sentencia no es ejecutable en nuestro país. Demandado ante los jueces de éste, opone excepción de incompetencia. Pensamos que no podría hacerlo y que la negativa a cumplir el fallo extranjero implica la renuncia a lo convenido sobre el fuero y el sometimiento y a nuestros jueces. Entendida en otra forma nuestra ley, se prestaría a una iniquidad.

IV — Que la obligación que haya dado lugar a la ejecutoria sea válida según nuestras leyes, (art. 559 cit. inc. 3) Es aplicable lo dispuesto por el art. 14 cód. civ. (Manual t. 1, p. 217 (1).

ciones según la naturaleza de las causas o la importancia del valor litigado, es decir, la organización judicial de cada país, depende exclusivamente de sus leyes locales y cuando una sentencia es llevada a ejecutarse en otra nación, ésta verifica la competencia con que fué dictada, en cuanto puede estar afectada la propia, en las relaciones de estado a estado.

«De estas consideraciones se infiere que la competencia judicial requerida por la convención vigente entre esta república y el reino de Italia, en su artículo 8, inc. 1.º, es la competencia y reglas de jurisdicción admitidas en la esfera internacional».

(1) La jurisprudencia de nuestros tribunales ha incurrido en error al fundarse en la opinión de autores extranjeros que interpretan leyes distintas a las nuestras.

El cód. de proc. de Italia exige que el juez examine si la parte vencida «ha sido citada regularmente; si ha estado debidamente representada; si ha sido legalmente declarada rebelde», art. 941.

En Francia cuando el caso no se encuentra regido por tratados, la



En síntesis, el juez debe limitarse a comprobar: si se acompaña testimonio legalizado de una sentencia condenatoria; si la misma es ejecutable según la ley donde se dictó, (por no existir recursos suspensivos (1) pendientes); si el demandado domiciliado en la república no fué declarado rebelde; si la obligación, que dió lugar a la ejecutoria, es válida según nuestras leyes(2).

No es admisible en la ejecución la excepción de arraigo, como lo ha declarado la cám. civ. 2.ª. (Gaceta del foro, mayo de 1922, p. 133).

Es juez competente para conocer en la ejecutoria de la sentencia dictada en país extranjero el de primera instancia que corresponde de acuerdo con las reglas generales, (art. 560 cód. cit.).

---

sentencia de un tribunal extranjero no tiene autoridad de cosa juzgada. Los tribunales de dicho país examinan el fondo mismo de la cuestión. Dalloz, «Nouveau code de procedure civile» comentario al art. 546.

Por su parte España, ha regulado más liberalmente lo referente al punto que los ocupa. En ella se aplica «a primer término, los tratados; en segundo el principio de la reciprocidad, y en tercero (cuando no se trata de un caso regido por las dos reglas precedentes), los siguientes principios: que la ejecutoria se haya dictado a consecuencia de una acción personal; que no haya sido dictada en rebeldía; que la obligación sea lícita, según las leyes de España; que reúna los requisitos necesarios, en la nación que se haya dictado, para ser considerada auténtica, las que las leyes españolas requieran para que haga fe en España, art. 591 a 594 de la ley de enjuiciamiento de 1881.

Respecto a las leyes de otros países véase José María Manresa, op. cit. t. 4, p. 205.

La cam. com. t. 3, p. 314 ha desconocido los principios que informan el art. 559 de nuestro cód. de proc. civ. al decidir que los tribunales argentinos pueden investigar si en la sentencia cuyo cumplimiento se pide, se han guardado las formas de las leyes argentinas y extranjeras.

La cita de Bellot, op. cit. p. 136, 4.ª edic. es impertinente porque el art. 376 del cód. ginebrino, establece diversos principios a los que nos rigen.

En cuanto al fallo de la sup. cort. nac. t. 7, p. 282, debe tenerse en cuenta que cuando se dictó (junio 10 de 1869) no regía aún el cód. de proc. civ.

(1) En la mayoría de los países el recurso de casación no forma obstáculo a la ejecución de la sentencia, Manual, t. 3, p. 343.

(2) Véase Manual, t. 1, p. 217. En los casos en que es aplicable la ley extranjera de acuerdo con el art. 14 del cód. civ., la sentencia que ha reconocido una obligación será ejecutable. Nuestro país sólo tiene interés en que no se violen principios que ha considerado indispensables para el mantenimiento de su orden público.

La justicia federal es competente en materia de extradición solicitada por jueces extranjeros y por excepción en las causas civiles (Manual t. 1, p. 384 y 385).

Presentada la ejecutoria el juez debe mandarla traducir, si no estuviera redactada en español, y después de oír (1) a la parte contra quien se dirige y al agente fiscal, declarar si procede o no su cumplimiento, (art. 560 cit.).

La resolución recordada es apelable en relación y una vez consentida o confirmada, se procede de acuerdo con lo ya establecido para la ejecución de las sentencias argentinas, (art. 561, 562, cód. cit.).

Si no se hiciera lugar a la ejecución la ejecutoria se devolverá al que la presentó, (art. 562 cit.).

---

(1) Al fiscal y a la parte sólo se les oye para que expongan lo que crea conveniente sobre si la sentencia reúne o no las condiciones requeridas para ser ejecutada en el país, (cám. civ. t. 2, p. 374). Si se da curso a la sentencia recién habrá llegado la oportunidad de oponer las excepciones a que se refiere el art. 539 cód. de proc. civ.; Gaceta del foro, julio de 1917, p. 41.

Se oye a las partes no solamente dándoles la oportunidad para que formulen sus defensas sino también para que presenten las pruebas que hagan a su derecho, cám. com. sep. 20 de 1917 en Gaceta del foro, mismo mes y año, p. 189.

En esta oportunidad el vencido puede alegar y probar su domicilio en la República, si fué condenado en rebeldía.



## JUICIO EJECUTIVO (a)



1.º *Derecho comparado y principios generales.* — 2.º *Requisitos de la relación jurídica procesal:* a) obligación de dar cantidad líquida de dinero; b) título hábil; c) concurrencia de las condiciones de la acción; d) limitación de la materia a decidir. — 3.º *Títulos que traen aparejada ejecución:* a) instrumentos públicos; b) documentos privados; c) actos judiciales. — 4.º *Mandamiento y embargo.* — 5.º *Bienes embargables.* — 6.º *Discusión.* — 7.º *Excepciones articulables:* a) incompetencia de jurisdicción; b) falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus procuradores o apoderados; c) litispendencia en otro juzgado o tribunal competente; d) falsedad e inhabilidad del título con que se pide la ejecución; e) prescripción; f) fuerza o mero de los que, con arreglo a la ley hacen nulo el consentimiento; g) pago; h) compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución; i) quita; j) espera o remisión; k) novación; l) transacción; ll) compromiso; m) nulidad. — 8.º *Tramitación de las excepciones y prueba de las mismas.* — 9.º *Sentencia de remate.* — 10. *Recursos procedentes en el juicio ejecutivo.* — 11. *La sentencia en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada?* — 12. *Cumplimiento de la sentencia de remate:* a) bienes muebles; b) bienes inmuebles. — 13. *Liquidación del crédito ejecutado.*

1.º—Unas veces las obligaciones aparecen dudosas, sea por la prueba que es necesario producir para demostrar su existen-

(a) Véase sobre juicio ejecutivo: Caravantes, op. cit. t. 3, p. 264; Cuzzi, op. cit. t. 7, p. 5; De la Colla, op. cit. t. 2, p. 266; De la Bda.



cia, sea por el diverso alcance que les atribuyen los interesados; mientras otras resultan claras y se imponen sea por su naturaleza, sea por la forma instrumental o judicial en que han sido constatadas. Las primeras necesitan, en caso de controversia, una tramitación solemne y larga antes de su cumplimiento; las segundas son exigibles por medios rápidos y sumarios, que varían en el derecho positivo de cada pueblo y se denominan generalmente procedimientos ejecutivos.

Tales procedimientos suponen en Francia, un acreedor que pretende hacerse pagar una cantidad líquida de dinero, que se le ha reconocido por sentencia o por escritura pública (art. 551 cód. de proc. civ.) y algo análogo ocurre en Italia (art. 553, 554 codice di procedura civile).

En el último de los países citados se admite también el juicio, a base de una sentencia, para obtener la entrega de cosas muebles o inmuebles (art. 741 cód. cit.).

Los acreedores obran individualmente contra los bienes del deudor común, mediante ciertas restricciones dictadas por razones procesales, y sólo discuten juntos el orden de los privilegios o el dividendo que les corresponde a los que accionaron en juicio. Falta, en consecuencia, el procedimiento colectivo del concurso civil que tenemos nosotros y la preferencia del primer embargante, (Manual, t. 3, p. 290 y 291).

En la república del Uruguay existe bien disciplinado el ju-

---

op. cit., t. 4, p. 145; Demaria, op. cit. t. 3, p. 166; De Palo: «Título ejecutivo»; Garsonnet e Bru: «Traité de procédure», t. 4, 2.<sup>a</sup> ed. p. 89, n. 22; Glisson, op. cit. t. 2, p. 284; Gómez de la Serna. «Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil», p. 176, Madrid, 1857; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 43, nota 31; p. 66, nota 40; p. 89, nota 54; p. 198, nota 113; p. 334, nota 178; p. 475, nota 209; t. 2, p. 2, p. 163, nota 114; p. 352, nota 206 bis; t. 8, p. 164; Lattes Alessandro, «Il diritto consuetudinario delle città lombarde», p. 124; Manresa y Navarro y Reus, op. cit. t. 4, p. 265; Manresa y Navarro, op. cit. t. 5, p. 440; Mortara, «Manuale», etc. t. 2, p. 245; Ortiz de Zuñiga, «Práctica general forense», t. 1, p. 678, 2.<sup>a</sup> ed.; Pateri, «Della esecuzione forzata immobiliare»; Reus, op. cit. t. 3, p. 361; Ricci, «Comentario al código de procedura civile italiano», t. 3, p. 1, 8.<sup>a</sup> ed.; Rodríguez, «Comentarios al cód. de proc.» t. 2, p. 205; Buenos Aires, 1906; Bobles y Pozo, «Derecho procesal de España», t. 3, p. 203, Madrid, 188; Saint-Prix op. cit. p. 370; Tissier, «Code» etc. t. 2, p. 606.





cio ejecutivo en las obligaciones de dar cosa cierta, (art. 1309 s.).

El juicio ejecutivo por las leyes chilenas tiene por objeto el cumplimiento de las obligaciones de dar cantidades de dinero o de un género determinado (tantas fanegas de trigo), o cosa cierta (mueble o inmueble) (art. 455 y 459 cód. de proc. chileno).

Nuestras leyes han establecido medios distintos. (1) según que

(1) Además del juicio ejecutivo, reglamentado por el cód. de proc. civ. existen otros, que presentan singularidades que conviene deslindar:

I. Las letras de cambio producen acción ejecutiva para exigir en sus casos respectivos del librador, aceptantes, o endosantes el pago, reembolso, depósito o afianzamiento de su importe, (art. 673 cód. de com.). La ejecución se despacha en vista de la letra y protesto, (art. 1 de la ley núm. 9689).

Contra esta ejecución sólo pueden oponerse las excepciones de falsedad, pago, compensación de crédito líquido y exigible, prescripción y caducidad de la letra y espera o quita concedida por el demandante que se pruebe por escritura pública o por documentos privados, judicialmente reconocidos. Cualquiera otra excepción, sea de la naturaleza que fuese, no obstará al progreso del juicio ejecutivo, (art. 676 cód. de com.).

Sólo por desconocimiento de la teoría de las acciones y de los presupuestos procesales de que tantas veces nos hemos ocupado, pudo afirmarse que son admisibles en esta clase de juicios todas las excepciones de forma enumeradas por el cód. de proc. civ. (Véase Segovia nota 2269 de sus «Comentarios al cód. de com.»; Juan Carlos Hébora, op. cit. p. 277).

La contraprueba de nuestra afirmación se encuentra en el hecho de que, los autores citados, aceptan que es admisible la excepción que se funda en no ser el acreedor el titular del derecho reclamado ¿Dónde enumera tal defensa el cód. de proc.? Léanse las 16 excepciones a que éste se refiere (y no 12 como lo cree Hébora) y se verá que no se encuentra entre ellas. Es que lo que faltaría, en tal caso es uno de los requisitos de la acción. Consúltase lo que decimos en el texto Manual t. 3, p. 30.

II. La acción ejecutiva puede ser reglamentada por las partes al celebrar el contrato de mutuo, Manual, t. 3, p. 86, 96, etc.

III. La acción ejecutiva del certificado de prenda agraria y la venta de los bienes dados en prenda o embargados será sumarisima, verbal y actuada, no admitiéndose otra excepción que la de pago comprobado por escrito y no se suspenderá por quiebra, muerte o incapacidad del deudor, ni por otra causa que no sea orden escrita del juez competente, dictada previa consignación del valor del certificado, sus intereses y costas calculados.

En los casos de muerte, incapacidad, ausencia o concurso del deudor la acción se iniciará o continuará con los respectivos representantes legales, y si estos no se presentaren en el juicio, después de 8 días de citados, el juez procederá sin más trámite a designar un defensor ad-hoc, art. 22 de la ley núm. 9644.

IV. El cobro judicial de las patentes, en la capital y territorios nacionales, se hace por el procedimiento establecido por el art. 308 y s. de la ley núm. 50, y sólo pueden oponerse las excepciones de falta de personería; falsedad de título o boleta con que se ejecuta; prescripción; y pago.



se trate de cobrar cantidades de dinero comprobadas en documentos públicos o privados (único caso en que procede juicio ejecutivo), o de ejecutar las sentencias que contengan condena- ción a una prestación de cualquier naturaleza que sea. Se reco- noce preferencia al primer embargante y el derecho al acreedor, de entenderse exclusivamente con su deudor, sin intervención de los otros acreedores (Manual, t. 3, p. 291). Producida la insol- vencia se autoriza un procedimiento colectivo o de concurso, (véase más adelante, cap. XLI), donde cada uno cobra según la preferencia establecida por la ley. Los acreedores con privile- gio especial son los únicos que pueden discutir sus derechos fue- ra de concurso (véase más adelante, cap. XXXVIII, ter.).

2.º—La relación procesal en el juicio ejecutivo supone en- tre nosotros:

a) La existencia de una obligación de dar una cantidad de dinero (1). Puede ser ésta en moneda nacional, en oro o en mo-

---

La excepción de falsedad del título no se entenderá de la causa a origen de dicho título. La personería de los cobradores fiscales será acreditada ante los jueces, acompañando certificado de su nombramiento, expedido por la administración general, art. 41 de la ley núm. 10366.

V. Existen, además, en nuestras leyes otros procedimientos que tienden a satisfacer eficazmente los derechos del acreedor: el Banco hipotecario nacional puede proceder a la venta del bien afectado, en conjunto o di- vidido en lotes; tomar posesión del mismo; representar al deudor en el juicio que se le promueva contra la propiedad, etc., art. 71 de la ley núm. 30676; el Banco municipal de préstamos puede vender por medio de sus martilleros los bienes muebles sobre que prestó dinero, art. 23 de la ley núm. 4531; el acreedor del warrant puede pedir ante el administrador del depósito, la venta en público remate de la mercadería afectada, art. 16 s. de la ley núm. 9643; derechos parecidos amparan al acreedor en la pren- da comercial art. 585 del cód. de com.

(1) Nos parece defectuosa la reglamentación del juicio ejecutivo, por lo que, a pedido del Colegio de abogados de Buenos Aires, propusimos que se reformara la parte pertinente del código en la forma siguiente:

I

a) Se procederá ejecutivamente en las obligaciones de dar, siempre que se demande una cantidad de dinero en virtud de un título que traiga aparejada ejecución.

b) Sólo podrá despacharse ejecución: por cantidad líquida en dinero efectivo; por cantidad líquida en especie, computándola entonces en mo- neda nacional. En ambos casos, será preciso que la obligación sea ac- tualmente exigible.

c) Si la cosa debida fuere de especies que se cuentan, pesan o miden, se hará la computación en moneda nacional por el precio pactado en la obligación; y si el precio no hubiese sido pactado, se computará el medio

neda extranjera que tenga curso legal en la república. Si la obligación es en moneda que no tiene curso legal en la república, la obligación se considera como de dar cantidades de cosas

que tuviera la especie en el mercado el día en que venció la obligación, acreditándolo con certificación de la bolsa de comercio. El actor deberá presentar dicha certificación acompañándola a la demanda.

d) Cuando la deuda consista en efectos de comercio, se liquidará su equivalencia en dinero, según los precios de su cotización en plaza, en la forma establecida en la letra c).

e) Si la deuda fuera de efectos públicos o de cualesquiera otros valores admitidos a negociación en bolsa, se computará su valor efectivo en moneda nacional por el precio de cotización en el día del vencimiento, de la obligación que podrá establecerse acompañando la publicación oficial que la contenga.

## II

El juicio ejecutivo en las obligaciones de entregar cosas determinadas se tramitará de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª Cuando el deudor se hubiese obligado a dar cosa determinada mueble o inmueble y el acreedor presentase un título que trajere aparejada ejecución, el juez mandará que se le intime su entrega, dentro del tercero día, bajo apercibimiento de apremio. Si el acreedor lo pidiere, el juez podrá ordenar que se libre mandamiento de embargo contra la cosa materia de la obligación, la cual podrá quedar en poder del demandado en calidad de depósito, en la misma forma y con las mismas responsabilidades establecidas en el art. 459 cód. de proc. civ. Podrá librarse a la vez embargo sobre otros bienes del deudor suficientes para hacer efectivas las prestaciones a su cargo.

2.ª Si el demandado no hubiese opuesto excepción, vencidos los tres días, señalados en la intimación, el actor podrá pedir mandamiento de apremio, el cual será decretado por el juzgado y se cumplirá por la efectiva entrega de la cosa reclamada, sin admitirse recurso alguno.

3.ª Si el demandado opusiera excepción, el procedimiento del juicio se ajustará a las disposiciones contenidas en esta ley y en el cód. de proc.

4.ª Si el deudor hubiese enajenado u ocultado los bienes a quo se refiere la obligación, el actor podrá reclamar su importe en la forma establecida en esta ley y en el cód. de proc.

## III

En las obligaciones de hacer o de no hacer, el juicio ejecutivo se tramitará de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª Hay acción ejecutiva en las obligaciones de hacer, siempre que, siendo éstas determinadas y actualmente exigibles, se haga valer para acreditarlas alguno de los títulos enumerados en el art. 465 cód. de proc.

2.ª Las reglas de esta ley y del cód. cit. tendrán cabida en este procedimiento en cuanto sean aplicables y no aparezcan modificadas por las reglas que siguen.

3.ª Si la deuda consistiere en la constitución de una obligación por parte del deudor, el juez podrá proceder a nombre de éste si, requerido, no cumpliese dentro del plazo que le fuera señalado al efecto.

4.ª Si la obligación consistiere en la ejecución de una obra material el juez mandará intimar al deudor el cumplimiento de ella, señalándole un plazo prudencial para que dé principio al trabajo.

5.ª Si vencido el término legal, el deudor no opusiese excepción, el acreedor podrá usar de su derecho, sin otro trámite.

y no puede hacerse efectiva por los trámites del juicio que nos ocupa.

b) La existencia de un *título hábil*. Tales son: los instru-

6.º Si se tratase de un hecho que pueda ser ejecutado por tercero, se autorizará al acreedor para que en caso de falta de cumplimiento, y a su instancia, haga ejecutar la obligación a expensas del deudor. El acreedor puede pedir, al propio tiempo, que se embargue bienes del deudor suficientes para abonar los gastos que ocasione la ejecución.

7.º Siempre que hubiere de procederse de conformidad con la regla anterior, el demandante presentará, junto con su solicitud, un presupuesto de lo que importa la ejecución de las obligaciones que reclama. Una vez notificado del presupuesto, el demandado tendrá tres días de plazo para examinarlo. El silencio dentro de dicho plazo, comportará aceptación; pero si se dedujere objeciones, dicho presupuesto será practicado por peritos, de acuerdo con las reglas del cód. de proc. civ.

8.º Determinado el valor del presupuesto en la forma que lo establece la regla anterior, el deudor estará obligado a consignar su importe, dentro de tercero día a la orden del juzgado, para que los fondos necesarios sean entregados al ejecutante a medida que el trabajo lo requiera.

9.º Agotados los fondos consignados, el acreedor podrá solicitar aumento, justificando en forma sumaria y con audiencia de la contraparte, que ha habido error en el presupuesto o que han sobrevenido circunstancias imprevistas aumentadoras del costo de la obra.

10. Concluida la obra, el acreedor deberá rendir cuenta de la inversión de los fondos suministrados por el deudor.

11. Si el deudor no consignara a la orden del juez los fondos decretados, se procederá a realizar los bienes embargados en la forma establecida para el cumplimiento de la sentencia de remate en el cód. de proc. civ.

12. Si el acreedor no pudiere o no quisiere hacerse cargo de la ejecución de la obra debida, de conformidad con las disposiciones que preceden, podrá compeler al deudor al pago de daños y perjuicios.

13. Si el hecho fuere de tal naturaleza que no pueda ser ejecutado por tercero y dependa únicamente de la voluntad del deudor, el acreedor podrá pedir que se compela al deudor al cumplimiento de la obligación por medio de multas que el juez fijará prudencialmente dentro del máximo de tres mil pesos moneda nacional.

14. En caso de contravención por parte del deudor a la obligación de no hacer alguna cosa, el acreedor podrá pedir que a costa de aquél se repongan las cosas, dentro de lo posible, al estado en que se hallaban. El deudor será condenado al pago de una multa por cada contravención hasta llegar al máximo de tres mil pesos moneda nacional. La disposición contenida en el apartado anterior es aplicable al caso en que el deudor, estando obligado a tolerar la ejecución de un hecho, se resista a ello.

15. El importe de las multas impuestas, en los casos que examinan las reglas anteriores, será entregado al acreedor para compensar, hasta donde sea posible, los daños y perjuicios que le irroge la demora en el cumplimiento de la obligación de que se trata.

#### IV

En las ejecuciones hipotecarias se observarán las reglas siguientes:

1.º El procedimiento será público, oral y contradictorio.

2.º El acreedor que desee hacer efectivo su crédito, se presentará al juez que corresponda con la escritura hipotecaria registrada, con la



mentos públicos presentados en forma; los documentos privados, suscriptos por el obligado, que sean reconocidos en juicio; la confesión de deuda líquida y exigible hecha ante juez compe-

copia de la escritura de propiedad del bien que le esté afectado, la boleta de contribución directa, el certificado de dominio y demás gravámenes que afecten al inmueble o interdicciones que pesen sobre el propietario. Acompañará, también, si lo cree necesario, un certificado del juez de paz del lugar de la situación del inmueble, donde conste quién está en posesión o tenencia del mismo. Esos antecedentes se suministrarán por las oficinas respectivas, directamente al acreedor, a quien le bastará exhibir la escritura hipotecaria a ese efecto.

3.º El acreedor afirmará bajo juramento que el crédito no le ha sido pagado, ni ha concedido esperas, y denunciará el domicilio del deudor, de los otros acreedores hipotecarios, de los locatarios, embargantes o acreedores que hubiesen obtenido inhibiciones siempre que lo supiere.

4.º El juez, en presencia de estos antecedentes, ordenará la venta del bien hipotecado con la base de la hipoteca mayor, dando el plazo de cuarenta días para que se celebre la subasta, y mandará publicar edictos por quince días en El boletín judicial. En esos edictos se citará, además, designándolos por sus nombres, a las partes e interesados, para el juicio oral que se celebrará dentro de los quince días de la presentación del escrito. La citación se hará bajo apercibimiento de celebrarse el juicio con los interesados que concurran y de que los inasistentes serán notificados en adelante exclusivamente por nota que se asentará en los autos. Si se tratase de personas desconocidas, o cuyo domicilio se ignore, la citación se hará en el mismo edicto y bajo el apercibimiento que queda establecido. Los que tengan domicilio conocido, serán, además, notificados en la forma ordinaria establecida por el cód. de proc. civ. Si hubiere menores o incapaces, se notificará al asesor de menores; para que concurra a las audiencias. Su inasistencia no será obstáculo para que la causa siga adelante, pero el funcionario remiso será multado en el acto con cien pesos, y la reincidencia constituirá falta grave. A los interesados que no concurran al llamado judicial no es necesario nombrarles defensor.

5.º A la audiencia citada concurrirán las partes o interesados con toda la prueba que tuvieren, la que deberán manifestar por escrito, con tres días de anticipación a la celebración del juicio oral. El escrito estará a disposición de los interesados en secretaría, sin necesidad de orden judicial, bastando la simple nota del actuario. Las pruebas que no se puedan traer a la audiencia, se solicitarán con quince días de anticipación; y el juez ordenará se hagan las citaciones o libramientos de oficio con noticia de las partes, o bien que se practiquen fuera del asiento del juzgado con el mismo requisito. Si no fuera posible recibir la prueba antes del día fijado para la audiencia, cuando aquélla no haya de practicarse en ésta, se deferirá el término de la misma por un plazo que no podrá exceder de veinte días.

6.º El juez, en el juicio oral, examinará la prueba, oírás las alegaciones de las partes, debiendo el procedimiento desarrollarse en audiencias consecutivas, que no podrán durar menos de tres horas, si hubiere prueba testimonial a recibirse o alegatos de las partes. La infracción a las reglas de continuidad y oralidad del procedimiento, así como la duración de las audiencias, importa falta grave para el juez.

7.º La sentencia se dictará indefectiblemente después de los alegatos de las partes, a cuyo afecto se hará saber a éstas que no pueden retirar-



tente; las cuentas aprobadas o reconocidas en juicio; el juramento decisorio; las letras de cambio, vales o pagarés protegidos con arreglo a las prescripciones del cód. de com. o, en

se de la sala de audiencia o de la casa de los tribunales, bajo apercibimiento de tenérselas por notificadas.

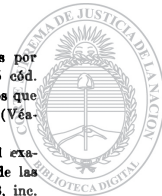
8.ª La sentencia resolverá sobre los siguientes puntos: ratificación de la orden de venta del bien hipotecado, si no se justifican las excepciones de pago o espera por prueba escrita o de confesión; levantamiento de los embargos y gravámenes que pesen sobre el bien hipotecado o la afectación de su precio a los mismos; rechazo de las tercerías de dominio si no se presentase instrumento público que haga verosímil *prima facie* el derecho que se invoca.

9.ª Si el juez encuentra atendible la tercería, ordenará la suspensión del remate y mandará tramitarla por la vía ordinaria. La venta se llevará a cabo, no obstante, cuando así lo pida el acreedor.

10. Se resolverá también: el rechazo de los derechos invocados por los locatarios del bien afectado, si el contrato en que se funda no hubiere sido registrado en el registro de la propiedad con anterioridad a la hipoteca; el orden en que se pagará a los distintos acreedores con privilegio especial; lo relativo a las costas, las que se regularán en la misma sentencia, determinándose la persona o personas que hayan de abonarlas y en qué proporción.

11. La sentencia es inapelable y sólo podrá recurrirse por inaplicabilidad de ley o de doctrina, o por el monto de las regulaciones para ante la cámara respectiva, en el acto de dictarse o al día siguiente. El recurso puede interponerse por escrito, y se concederá al solo efecto devolutivo. La cámara resolverá dentro de cinco días de recibidos los autos, pudiendo las partes presentar una memoria sobre el derecho o doctrina aplicados. Las otras resoluciones que se dicten en estos juicios son inapelables. Se exceptúa el auto del juez en que no haga lugar a la ejecución en la oportunidad a que se refiere la regla 4 de este cap. A las partes les queda, sin embargo, expedito el juicio ordinario para hacer valer sus derechos desechados en el juicio ejecutivo. Verificado el remate, el juez no lo aprobará hasta que la cámara haya resuelto el recurso a que se refiere el parr. anterior. Si se dedujere oposición por alguna de las partes sobre la operación, que deberá ponerse a la oficina por veinticuatro horas con la sola nota de secretaría el juez procederá a citar a los interesados a juicio oral, debiendo comparecer con las pruebas y justificativos que tuvieran. El martillero, deberá dar cuenta de la operación dentro del tercero día de practicada, bajo pena de quinientos pesos de multa. El auto aprobatorio del remate hará constar que al comprador se le ha dado posesión de la cosa vendida, y juntamente con el boleto la venta se mandará inscribir en el registro de la propiedad, para que sirva de suficiente título al dominio. Los certificados que sean necesarios se presentarán por el acreedor hipotecario en la forma que se determina en regla 2.ª de este cap. El comprador puede optar porque el juez le otorgue la escritura por medio de un escribano público, siendo el honorario de éste a cargo de aquél.

12. El juez que entendiere en las ejecuciones hipotecarias, si no compareciere a cualquiera de las audiencias que hubiere fijado, o las postergase por cualquier causa que no fuera enfermedad o fuerza mayor, será pasible de una multa de quinientos pesos a favor del ejecutante. El secretario, cuando el juez no comparezca a la hora de la audiencia, llevará



defecto de protesto, reconocidos en juicio y los créditos por arrendamientos de predios rústicos o urbanos (art. 465 cód. de proc. civ.). Téngase en cuenta que la sentencia y títulos que se le equiparan se ejecutan por un procedimiento especial. (Véase más atrás, p. 18).

c) La concurrencia de los requisitos de la acción. El examen se reduce a lo que consta del título, sin perjuicio de las causas extintivas y del vicio de consentimiento (art. 488, inc. 6.º cód. de proc. civ.).

La ejecución sólo puede iniciarse por el titular del derecho que se trata de hacer efectiva (*legitimatío ad causam activa*) y contra el que está obligado a satisfacerlo (*legitimatío ad causam pasiva*) (Manual, t. 3, p. 30) (1) y siempre que ampare al primero una regla de derecho que le garanta el bien reclamado (2) (loc. cit. p. 31). Es claro que si se pretende ejecutar a quien no aparece en el título como deudor, faltará uno de los requisitos enunciados de la acción, y que lo mismo ocurriría si en el título ejecutivo se expresa que la deuda proviene de pérdidas al juego de los prohibidos o de otra causa torpe.

el expediente al subrogante legal de éste, quien estará obligado a presidir dicha audiencia.

13. Al presentar el primer escrito, en el acto de la notificación personal o dentro de las veinticuatro horas para las que se hagan en otra forma, o de vencidos los quince días de la publicación de edictos, las partes o interesados deberán fijar domicilio legal dentro de dos kilómetros del asiento del juzgado. Si no lo hicieran, las notificaciones se harán fijando copia de la providencia o de su parte dispositiva en lugar visible del juzgado. Toda providencia quedará notificada al segundo día de ser fijada.

14. En esta clase de juicio no es admisible ningún género de recusación. El juez, si se considera impedido para entender en una causa, podrá, sin embargo, excusarse en el acto de recibir el escrito a que se refiere la regla 2.ª de este cap., sin que pueda hacerlo más adelante, salvo que se trate de causa sobrevenida. Las dificultades que se presenten con ese motivo, o el reemplazo de los jueces, serán resueltas sin substanciación por la cámara.

15. En caso de concurso de acreedores, el juicio ejecutivo continuará su marcha ante el juez ante quien se inició; pero su resultado final se pondrá en conocimiento del que entiende de aquél, a cuya orden se depositará el remanente de los fondos, después de pagados los acreedores hipotecarios y las costas.

(1) Véase Manual, t. 3, p. 21.

(2) El desconocimiento de doctrina tan clara ha llevado al caos a las decisiones de nuestros tribunales.



El juez tiene el deber de examinar cuidadosamente el instrumento con que se deduce la acción (art. 471 cód. de proc. civ.) y en ese examen no debe limitarse a verificar si se trata de uno de los títulos enumerados por la ley, sino que debe investigar si concurren o no los requisitos de que nos estamos ocupando. La experiencia diaria nos demuestra que no se da curso a la demanda, si quien la deduce no aparece en el título como acreedor, si la deuda no está vencida, si el ejecutado no es la persona que se obligó a pagarla (condiciones de la acción). Lo mismo ocurre cuando el juez se considera incompetente, o si el que comparece a juicio carece de capacidad, o si el que se dice su representante, no tiene poderes (presupuestos procesales).

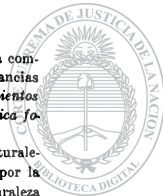
Los procesalistas españoles tuvieron la intuición de estas cosas; pero no supieron formular una construcción jurídica, como lo han hecho los autores modernos: «Se ha distinguido en general entre las acciones ordinarias y las ejecutivas, y esto no es una verdad; no puede reconocerse tal división de las acciones; esa calificación hecha por medio de los adjetivos no es exacta. La índole, la esencia de la acción no cambia por causa del orden de procedur debido a los accidentes, que constituyen simples comprobantes de la acción. En efecto, una misma acción se ejercita ya en juicio ordinario, ya en el ejecutivo, según la clase de documento que la acredita»... «En nuestro sentir, la calidad ejecutiva del título no puede hacer eficaz la acción que no lo sea; el título *presupone* (1) la acción legal, necesita de la existencia de ésta para producir el efecto que conceden las leyes a las cualidades que le adornan y le elevan a cierta categoría» (de la Rúa, op. cit. t. 4, p. 148 y 149). Manresa, en sus *Comentarios* (t. 5, p. 447) dice: «Para que ésta (la escritura pública) sea título ejecutivo es necesario que reúna ciertas condiciones especiales en su fondo y en su forma.

«En el fondo, que contenga la obligación de una persona o entidad jurídica a favor de otra de pagarle en cierto plazo una

---

(1) Como se ve los escritores españoles aceptan la palabra *presupuestos* procesales de que ya nos hemos ocupado.





cantidad líquida en dinero efectivo, o en especie que pueda computarse a metálico, pues sólo concurriendo estas circunstancias puede despacharse ejecución» (Conf. E. Sagüi, *Procedimientos civiles en el foro de Buenos Aires*, p. 655; Castro, *Práctica forense*, p. 212, 2.ª edic.).

d) Es un juicio de conocimiento limitado, por la naturaleza de las excepciones oponibles (art. 488 cód. de proc.); por la restricción en la prueba (art. 493 cód. cit.); y por la naturaleza de la sentencia (art. 500 cód. cit.).

3.º—Los títulos que traen aparejada ejecución son los instrumentos públicos y privados y ciertos actos judiciales:

a) Los instrumentos públicos para constituir título ejecutivo, deben revestir condiciones de fondo y forma: es menester que constaten una obligación exigible de dar una cantidad de dinero, y que se presenten legalizados en su caso, (Manual, t. 1, p. 351). (Sobre el concepto de instrumentos públicos y documentos privados véase op. cit. t. 3, p. 183 y s.).

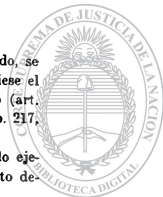
b) Los documentos que, mediante ciertos requisitos previos, constituyen título ejecutivo, son: los documentos privados, suscriptos por el obligado, que sean reconocidos en juicio y las letras de cambio, vales o pagarés protestados con arreglo a las prescripciones del cód. de com. o en defecto de protesto, reconocidos en juicio (1).

Si se trata de documentos privados antes de despachar el mandamiento, es necesario que sean reconocidos, a cuyo efecto debe citarse al obligado en forma (art. 77 s., cód. de proc. civ.), y bajo apercibimiento de tener por reconocido el documento (art. 465 y 468 cód. cit.). Si la persona a quien se atribuye el documento no lo reconociese, éste carece de fuerza ejecutiva (art. 469 cód. cit.).

Puede ocurrir que se trate de documentos firmados por autorización del que aparece obligado, o de documentos suscriptos a ruego del mismo. En el primer caso se debe acompañar el instrumento probatorio con que ha procedido el mandatario,

---

(1) Consultese el excelente libro de Juan Carlos Bórra, «Letras de cambio» p. 267, 2.ª edición.



o indicarse el registro en que se encuentre; en el segundo, se hará la citación y sólo cuando voluntariamente compareciese el obligado a reconocer la deuda, surgirá el título ejecutivo (art. 465, inc. 3.º cód. cit.). En contra: Rodríguez op. cit. t. 2, p. 217, 2.ª edic.

c) Los actos judiciales que pueden constituir un título ejecutivo son la confesión de deuda líquida (1), el juramento decisorio y las cuentas aprobadas o reconocidas en juicio.

La palabra juicio ha sido empleada por el legislador en un sentido restringido (como lo demuestra el art. 465 cód. cit. incs. 2.º y 6.º). No es por los trámites del juicio ordinario que se forma el título, sino por una simple citación para que el presunto deudor comparezca ante el juez a hacer la manifestación que se le exige (art. 466 cód. cit.); en contra, Rodríguez, op. cit. t. 2, p. 206.

Si la confesión de deuda líquida se hace en el período de prueba de una controversia ante los tribunales, no puede servir de base al juicio ejecutivo, porque es recién en la sentencia cuando el juez puede apreciar su valor y entonces ya no se tratará de juicio ejecutivo, sino de cumplimiento de sentencia (art. 130, 209, etc. cód. cit.); lo mismo decimos de las cuentas aprobadas o reconocidas en juicio y del juramento decisorio.

Para que la confesión produzca acción ejecutiva, es necesario que sea simple, pues si fuese calificada no podría dividirse (Manual, t. 3, p. 137).

En la ejecución por alquileres, debe pedirse previamente que el demandado manifieste si es locatario, y en caso afirmativo, que exhiba el último recibo.

Procede la acción ejecutiva con prescindencia de la permanencia del deudor en la cosa arrendada (2).

---

(1) Los créditos por arrendamientos de predios rústicos o urbanos deben resultar de confesión de deuda líquida hecha ante juez competente.

(2) La acción ejecutiva, tratándose del cobro de alquileres, es acordada en razón solo de la naturaleza del crédito y por consiguiente, ella no depende de la permanencia del deudor en el local arrendado, o sea de la subsistencia de la locación.

«Lo contrario importaría desnaturalizar dicha acción, desde que se la subordinaría a la voluntad exclusiva del deudor, privando al propie-



4.º—Una vez que el juez se encuentra en presencia de un título que trae aparejada ejecución *per se* o que ha adquirido ese carácter mediante los trámites enunciados. (Véase más atrás, p. 53), debe examinarlo cuidadosamente para cerciorarse de la procedencia o improcedencia de la acción y librar mandamiento, a fin de que se requiera al deudor el pago en el acto, y se trabé embargo de bienes en caso omiso (art. 471 cód. de proc. civ.).

Nuestros prácticos fijaban las reglas que el juez debía tener presente al despachar el mandamiento. Esas reglas las conocían los autores del código en vigor, y las dieron por supuestas; no son otras que las que hemos citado en la p. 56 (E. Sagüi, op. cit. p. 655. Conf. Castro, op. cit. p. 212 2.ª ed.).

Tampoco debe despacharse el mandamiento si el ejecutado en el acto del reconocimiento de la deuda o en tiempo hábil, sostiene con fundamento, que la obligación está prescrita, pues para la procedencia de la acción ejecutiva es necesario que la existencia del crédito no se halle destruida, *prima facie* por excepciones que resulten acreditadas por el mérito del instrumento mismo de crédito con que se deduce la acción (sup. cort. nac. t. 9, p. 577; t. 68, p. 16).

El oficial de justicia, o alguacil encargado de cumplir el mandamiento, debe requerir al deudor para que pague la suma

---

tario, por un hecho que no le es imputable, de las ventajas que el juicio ejecutivo le ofrece para hacer efectivos sus derechos en una forma rápida y sumaria.

«Corrobora esta conclusión la disposición del art. 1578 cód. civ., que acuerda al locador en términos generales, acción ejecutiva para el cobro de los alquileres o rentas sobre los bienes sujetos al privilegio concedido a su crédito y lo confirma igualmente el art. 3885, al acordarle también derecho para hacer embargar dichos bienes y cobrarse con su importe, aunque hubiese sido substraídos de la cosa alquilada y el poseedor de ellos, fuese de buena fé.

«No obsta la disposición del art. 466 cód. de proc. al ordenar que en la ejecución por alquileres, el demandado manifieste previamente, si es locatario, y en caso afirmativo, exhiba el último recibo, porque esta disposición no tiene otro objeto que el de comprobar la existencia de la locación cuando ella no resulte acreditada de escritura pública y determinar, en su caso, el número de mensualidades adeudadas''. Fallo de las cámaras en pleno de la capital, publicado en *Jurisprudencia Argentina*, t. 5, p. 19.»



reclamada y no haciéndolo, procederá a embargar bienes suficientes para cubrir la cantidad que ha determinado el juez. El embargo se practicará aún cuando el deudor no se halle presente, en cuyo caso, debe hacérsele saber dentro de los tres días siguientes al de la traba (art. 471 cód. cit.).

Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en bienes inmuebles, bastará su anotación en el registro de la propiedad. Si lo fuese de bienes que se hallen en poder de un tercero, se notificará a éste en el día, en persona o por cédula. No conociéndole bienes al deudor podrá solicitarse contra él inhibición general de venderlos o gravarlos, la que quedará sin efecto tan luego como presentare bienes a embargo o diere caución bastante (art. 474 cód. cit.).

El embargo de bienes se hará en el orden siguiente: 1.º dinero efectivo; 2.º alhajas, piedras o metales preciosos; 3.º bienes muebles o semovientes; 4.º bienes raíces; 5.º créditos o acciones; 6.º sueldos, salarios y pensiones. El orden prefijado se entiende establecido en favor del acreedor. Sin embargo, si los muebles constituyen un establecimiento comercial o industrial, o fueran del uso de la casa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo, presentando otros bienes de entre los enunciados, que estén libres, o que aun cuando estuviesen gravados bastasen manifestamente a cubrir el crédito reclamado. Si el mandamiento de ejecución no designase bienes para el embargo, este se trabará en los que ofrezca el deudor, estando conforme el ejecutante, y si no los que éste señale, si estuviese en posesión de ellos el deudor (con las salvedades ya indicadas, p. 23 respecto del orden de los bienes a embargarse). Si hubiese bienes dados en prenda o hipoteca, se procederá contra ellos antes que contra ningunos otros (art. 476, 477, 478 y 479 cód. de proc. civ.).

5.º — Los bienes exceptuados del embargo son los que ya hemos enunciado (Véase más atrás, p. 23).

6.º — En el período preliminar del juicio ejecutivo, (que va desde la preparación del título hasta el embargo de bienes), el deudor no es parte, pero puede intervenir en casos excepcionales: para invocar la prescripción, a objeto de hacer notar al juez su incompetencia, etc.



Trabado el embargo, se cita de remate al deudor, haciéndole saber por cédula, que si dentro de tres días perentorios no opone excepción legítima se llevará la ejecución adelante.

Las únicas excepciones admisibles son las siguientes: a) incompetencia de jurisdicción; b) falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus procuradores o apoderados; c) litis pendencia en otro juzgado o tribunal competente; d) falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución; e) prescripción; f) fuerza o miedo de los que con arreglo a la ley, hacen nulo el consentimiento; g) pago; h) compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución; i) quita, espera o remisión; j) novación; k) transacción o compromiso; l) nulidad, (art. 488, 489 cód. proc. civ.).

Opuestas las excepciones se corre traslado de ellas al ejecutante quien deberá contestar dentro de tres días, (art. 490 cód. cit.).

7.º — Las excepciones articulables en el juicio ejecutivo se encuentran taxativamente enumeradas en la ley. Téngase en cuenta lo que hemos dicho sobre las excepciones articulables en la ejecución de sentencia, (p. 29).

a) La primera por su orden es la de incompetencia de jurisdicción, que constituye uno de los presupuestos procesales del juicio.

El juez puede declarar de oficio su incompetencia, cuando se recurre a él para preparar la ejecución: al examinar el título para despachar el mandamiento, o al dictar sentencia de remate. En cuanto al ejecutado debe oponer esa defensa como excepción dentro de los tres días perentorios de la citación de remate. (1).

---

(1) Sobre las reglas que rigen la competencia, véase lo que decimos en el Manual, t. 1, p. 308, (acciones personales); p. 311 y 313, (competencia por cantidad); p. 372, (justicia federal); p. 336 y 337, (cobro de impuestos); p. 326 y 328, (juez de lo principal y obligaciones accesorias); p. 341 (acciones contra la masa fallida); p. 326, (cobro de honorarios); p. 328, (acciones contra la sucesión); p. 313, (cobro de alquileres); p. 291 n. 2, (jurisdicción comercial); p. 309, (deudores no domiciliados en la república); p. 313, (obligación a oro); p. 368, (acción hipotecaria), etc.

Téngase presente que cuando en la letra de cambio no se fija lugar



b) Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus procuradores o apoderados, (art. 488, inc. 2.º cód. cit.). Es aplicable a esta excepción lo que hemos ya dicho, (Manual t. 3, p. 51), pues, los arts. 84 inc. 2.º y el 488 inc. 2.º tienen el mismo alcance.

Suele confundirse esta excepción *legitimatío ad processum*, que es de forma, con la *legitimatío ad causam* activa o pasiva, que es uno de los requisitos de la acción, (Manual, t. 3, p. 30; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 266; t. 3, p. 267, 635, 662 y 967; t. 4, p. 361 y t. 7, p. 270).

c) La excepción de litis pendencia en el juicio ordinario es más amplia que en el juicio ejecutivo, (Manual, t. 1, p. 322). En el último sólo procede cuando se siguen dos juicios ejecutivos fundados en el mismo título y entre las mismas partes (1).

d) Falsedad o inhabilidad de título con se se pide la ejecución. ¿Se trata de dos excepciones? Caso afirmativo, ¿cuál es el alcance de cada una de ellas?

Para el pago, es competente para conocer de la acción ejecutiva, emergente de la misma, el juez del lugar donde aquella se firmó, (art. 606, cód. de com. y cám. com. octubre 16 de 1916); y que la circunstancia de haberse extendido un pagaré en blanco no implica que una vez llenado proceda la competencia comercial para su cobro, (cám. cit., noviembre 14 de 1916).

(1) Es exacto, ha dicho la cám. civ., t. 1, p. 513, que la excepción de litis pendencia tiene por objeto evitar la concurrencia de dos sentencias sobre una misma cosa, aunque no es el único; pero es preciso que esas sentencias sean de tal naturaleza, que produzcan los mismos efectos.

La razón es porque si ambas sentencias son iguales, esto es, si ambas concluyen la cuestión del mismo modo, una de ella sería inútil, y si son contrarias o podía oponerse la dictada primero como excepción de cosa juzgada en el segundo juicio; o su ejecución sería imposible, por oponerse a ambas dicha excepción de cosa juzgada.

«Estos inconvenientes no existen cuando se trata de juicio ejecutivo y ordinario, porque la sentencia pronunciada en el primero no hace cosa juzgada en el segundo (art. 500 cód. de proc. civ.) y la que se dicta en el juicio ejecutivo siempre se habría cumplido, pues, tiene por objeto que el acreedor sea pagado sin las dilaciones del juicio ordinario.

«La ley, al permitir al ejecutado y al ejecutado indistintamente, instaurar juicio ordinario, sobre lo mismo que fué materia del ejecutivo, según que la sentencia recaída en éste sea adversa al uno o al otro, presupone que la sentencia que se pronuncie en el juicio ordinario sea diversa de aquella, pues, de otro modo, no tendría objeto tal previsión.

«Según los arts. 500 y 525 del cód. cit., cuando la sentencia de remate es adversa al ejecutado, puede hacer valer su derecho en juicio ordi-



Las excepciones son dos: (1) la falsedad existe cuando se hace en todo o en parte un documento falso o se adultera uno verdadero. Si concurre alguno de esos extremos procederá la excepción del mismo nombre. La inhabilidad proviene de no reunir el documento los requisitos exigidos por la ley para que pro-

duzca y exigir fianza al ejecutante, a las resultas de este juicio.

«Tal es el derecho que la ley acuerda al ejecutado, quien no puede mejorarlo por el hecho de iniciar el juicio ordinario antes de que se sustancie el ejecutivo.

«El juicio ejecutivo no puede iniciarse sino cuando la obligación es exigible, puesto que el único objeto es obtener el pago de la obligación.

«Si el deudor pudiera enervar la acción ejecutiva o detener su curso, con solo iniciar juicio ordinario sobre novación o nulidad de la obligación, antes de que el acreedor pueda instaurar el juicio ejecutivo, resultaría que estaría en la mano de aquel suspender la ejecución hasta la terminación del juicio ordinario.

«El deudor no puede, por un acto exclusivamente suyo, modificar la obligación, y la modificarla si siendo esta ejecutiva, le hiciera perder ese carácter por entablar juicio ordinario.

«Además, la litis pendencia produce la acumulación de autos (Escriche, Goyena, t. 4, p. 45), y no es posible la acumulación de autos ordinarios y ejecutivos, porque, teniendo diversa sustanciación, su acumulación produciría un desorden y confusión que haría muy difícil, si no imposible, su prosecución.

«La excepción de litis pendencia que puede oponerse en el juicio ejecutivo, según el art. 488 del cód. de proc., es la que surge cuando estando pendiente un juicio ejecutivo, se instaure sobre la misma cosa otro juicio ejecutivo, debiendo notarse que aun a este respecto no es uniforme la opinión de los autores como puede verse en Escriche; cáñ. civ., t. 9, p. 257; t. 12, p. 367 y 382; t. 36, p. 41; t. 74, p. 219).»

(1) Cosa distinta sostiene nuestro procesalista de la Colina, op. cit., t. 2, p. 284, 2.ª edic. La ley de enjuiciamiento española de 1855 permitía como excepción la de falsedad del título ejecutivo (art. 963) y la ley de 1881 admitió la falsedad del título ejecutivo o del acto que le hubiere dado fuerza de tal (art. 1464). El doctor Domínguez en su proyecto de ley de enjuiciamiento civil para la provincia de Buenos Aires siguió las enseñanzas de la primera de las citadas leyes.

Fué recién en la ley de octubre 27 de 1860, dictada por la legislatura de la provincia que se aceptó como excepción admisible en el juicio ejecutivo la «de falsedad e inhabilidad de título» (art. 22). Probablemente esta disposición fué tomada de la ley chilena de 1837 que hablaba «de la falsedad de título o no ser bastante para la ejecución».

La ley sobre enjuiciamiento civil y comercial de la citada provincia, sancionada en octubre 30 de 1878 sólo admitió la excepción de falsedad del título con que se pide la ejecución (art. 506), pero al mismo tiempo establecía la apelabilidad del auto de solvendo por parte del ejecutado. El recurso debía fundarse en que el documento «no era de los que traían aparejada ejecución» (art. 490). Al reformarse la última de las leyes citadas, no se innovó en el fondo de las cosas, pues lo único que se hizo fué autorizar como excepción de inhabilidad de título el derecho que antes correspondía al ejecutado para apelar del auto de solvendo.



ceda la ejecución. (1) La falsedad enerva la acción contra cualquier persona, mientras que la inhabilidad puede ser absoluta o relativa: si el título no está comprendido entre los que enumera la ley, (art. 465 cód. de proc. civ.) es claro que no podría iniciarse juicio ejecutivo contra nadie, pero si un título es inhábil contra *Primus* por falta de vínculo jurídico, (*legitimatío ad causam* pasiva) puede ser hábil contra *Secundus*. (2)

Los extremos a probar en la excepción de falsedad se refieren a la adulteración material del título ejecutivo. No puede discutirse en ella la simulación o falsedad de la causa, o la inexistencia de la obligación (cám. civ., t. 63, p. 83; t. 80, p. 183; t. 102, p. 39 y 45; t. 124, p. 250; t. 134, p. 173). La razón es porque se trata de un juicio de conocimiento limitado, (véase p. 58).

Los antecedentes expuestos demuestran que la excepción de inhabilidad de título con que se deduce la ejecución y de la falsedad, son cosas distintas.

En el código de procedimiento chileno en vigor, son admisibles las excepciones de «falsedad del título», de «nulidad de la obligación» y de «falta de alguno de los requisitos o condiciones para que dicho título tenga fuerza ejecutiva», sea absolutamente, sea relación al demandado (art. 485, inc. 6.º, 7.º y 14).

(1) Es decir en que la forma externa del título es irregular o en que no está comprendido entre los títulos que traen aparejada ejecución, (cám. civ., t. 3, p. 212; t. 15, p. 245; t. 25, p. 226; t. 37, p. 305; t. 55, p. 92; t. 135, p. 219, t. 166, p. 157; cám. fed. de La Plata, noviembre de 1911, p. 86; cám. civ. primera, noviembre de 1911, p. 135; diciembre de 1922, p. 169; junio de 1914, p. 230); *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 798; t. 2, p. 180; t. 6, p. 353; t. 7, p. 96. Errónea nos parece la doctrina que admite la excepción que se funda en la falta de causa de la obligación. *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 205, 492, 950; t. 2, p. 898; t. 5, p. 139; t. 6, p. 534; t. 7, p. 279.

(2) Son numerosas las decisiones de nuestros tribunales en las cuales se ha rechazado la ejecución por falta de vínculo jurídico entre actor y demandado; pero no se ha hecho una construcción jurídica que aclare las ideas y fije reglas apropiadas para resolver las dificultades que a cada momento surgen en la vida práctica. V. cám. civ., t. 3, p. 220; t. 5, p. 83; t. 6, p. 65; y 178; t. 37, p. 292; t. 59, p. 100; t. 41, p. 288; t. 44, p. 224; t. 45, p. 24; t. 47, p. 289; t. 48, p. 398 y 404; t. 56, p. 5, 81, 235 y 311; t. 57, p. 43; t. 61, p. 19 y 65; t. 62, p. 289; t. 66, p. 163; t. 68, p. 59; t. 69, p. 114 y 287; t. 70, p. 270; t. 72, p. 402; t. 74, p. 191 y 288; t. 76, p. 332 y 383; t. 79, p. 304; t. 82, p. 416, 422 y 433; t. 86, p. 384; t. 87, p. 413; t. 88, p. 26 y 239; t. 98, p. 170, 283 y 298; t. 100, p. 5; t. 102, p. 39; t. 109, p. 35, 73 y 83; t. 111, p. 382; t. 112, p. 80; t. 116, p. 84; t. 119, p. 366 y 371; t. 122, p. 38; t. 127, p. 5 y 359; t. 131, p. 408; t. 133, p. 412; t. 134, p. 192; t. 135, p. 220 y 228; t. 136, p. 341; cám. civ. 1.º, octubre de 1911, p. 161.





e) La excepción de prescripción procede cuando se ha dejado transcurrir antes de deducir la demanda, el lapso de tiempo que la ley fija para la extinción del derecho que se ejercita (arg. del. art. 3949 del cód. civ.). Debe oponerse dentro de los tres días de la citación de remate no obstante lo dispuesto por las leyes de fondo, porque se trata de una cuestión procesal (art. 3952 cód. civ.).

f) Fuerza o miedo de los que con arreglo a derecho hacen nulo el consentimiento. Esta es la única defensa que se refiere al origen de la obligación y como caso excepcional confirma la regla ya expuesta.

g) Pago. La excepción contempla una causa de extinción de la obligación posterior a la formación de la misma. Su procedencia se resuelve por los principios del derecho común.

h) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución. Lo dicho en la letra anterior, con la salvedad de que el crédito que se opone en compensación puede ser anterior al nacimiento de la deuda que se ejecuta.

i), j), k), l) Sobre las excepciones de quita, espera, remisión novación, transacción y compromiso, véase lo que decimos precedentemente, bajo la letra g).

m) La nulidad de la ejecución procede por violación de las formas establecidas para el primer período del juicio ejecutivo, (art. 489 cód. de proc. civ.) La nulidad de procedimiento no puede alegarse como acción, pero sí en forma de excepción o de recurso, (Manual, t. 3, p. 346, texto y nota). Para la procedencia de la excepción es necesario contemplar dos casos: 1.º cuando se opone por el ejecutado dentro de los tres días de la citación de remate; 2.º cuando se opone antes de dictarse sentencia de remate, en los casos en que esto es posible.

En el primer caso, la única causal que puede alegarse es la falta de reconocimiento del documento privado o de la deuda, siempre que se niegue su autenticidad, (art. 466, 467 cód. cit.).

Pero puede ocurrir que no se haya citado de remate en forma al ejecutado, a pesar de lo cual se continúa la tramitación, y entonces le es permitido, al presentarse a juicio oponer la nu-



lidad dentro de los tres días. Este es el segundo caso a que nos hemos referido.

Mas, si se dicta sentencia de remate, sin que se haya oído al ejecutado, éste no puede ya hacer valer sus derechos por medio de una excepción, sino por recursos para que el superior deje sin efecto lo actuado sin su audiencia, (Manual, t. 3, p. 350, en nota).

8.º— El juez, en presencia del escrito oponiendo excepciones, puede resolver su rechazo, por no ser de las enumeradas en la ley o por haberse deducido fuera de término; o su tramitación si concurren dichas circunstancias. De aquella resolución procede recurso en relación (art. 491 cód. cit.).

Si las excepciones se oponen en términos hábiles y son de las que la ley admite debe darse traslado al ejecutado por tres días. Antes de contestar, puede exigir que el demandado especifique detalladamente, si no lo hubiese hecho, las excepciones opuestas y los hechos en que se funden, lo que deberá verificarse dentro de segundo día. En seguida se recibirá la causa a prueba por diez días si las excepciones fuesen admisibles (art. 490 cód. cit.).

La prueba en el juicio ejecutivo se rige por los principios siguientes:

I.—El término de prueba es común y puede usarse en él de los mismos medios probatorios, y en la misma forma que en el juicio ordinario, y no puede suspenderse, ni prorrogarse sino de conformidad de partes (art. 492 y 493 cód. cit.).

De lo expuesto se deduce que no procede el término extraordinario. (cám. civ. t. 24, p. 233; t. 37, p. 354; t. 82, p. 39; t. 87, p. 163).

La prueba de testigos debe ofrecerse en tiempo para que pueda recibirse dentro de los diez días, que fija la ley, pero no rige para ella la regla que fija el art. 11 de la ley 4128. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 692).

II.—Todas las notificaciones durante dicho término, se harán en el día (art. 494 cód. cit. y Manual, t. 1, p. 255).

III.—Vencido el término probatorio, las pruebas producidas se pondrán de manifiesto en la escribanía durante dos días,



para que las partes puedan imponerse de ellas. Enteradas de las pruebas o vencido el término sin haberse producido, de lo que dará cuenta el actuario, el juez llamará autos para sentencia, pudiendo, para mejor proveer, correr un nuevo traslado, que será evacuado dentro de seis días comunes a las partes (art. 495 y 496 cód. cit.).

IV. — La prueba de las excepciones corresponde al demandado porque el actor ha justificado ya su derecho con el título que sirve de base a la acción (Cám. civ. t. 1, p. 15, 65, 98 y 129.).

9.ª— La sentencia debe pronunciarse dentro de los seis días contados desde la expiración del traslado para mejor proveer, a que nos hemos referido, o desde la providencia de autos, en su caso (art. 497 cód. cit.) La sentencia de remate sólo podrá determinar una de estas dos cosas: llevar la ejecución adelante; no hacer lugar a la ejecución (art. 498 cód. cit.).

Esta sentencia se rige por principios propios y no requiere que se haga relación de antecedentes; basta que contenga la fecha, el nombre de las partes, la firma del juez y del secretario (1) y que diga claramente si se concede o niega la ejecución (cám. civ. t. 2, p. 522; t. 45, p. 41).

Las costas del juicio ejecutivo serán todas a cargo de la parte que sea vencida en último grado, con excepción de las correspondientes a cualquiera pretensión de la otra parte que haya sido desestimada (art. 507 cód. cit.).

La notificación de la sentencia se hace personalmente o por cédula, y por edictos, si el deudor no ha comparecido al juicio y se ignora su domicilio (art. 499 cód. cit.; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 88, 254, 68; t. 3, p. 184).

10.—La sentencia de remate es apelable, cuando se han opuesto excepciones e intentado probarlas. La apelación se concede sólo en el efecto devolutivo, si en caso de ser condenatoria, el ejecutante diese fianza de responder de lo que perciba, si la sentencia fuese revocada por el superior. Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce el derecho, con tal que

(1) En lo federal no se requiere que el secretario autorice la firma del juez.



baste para su objeto, y la clasificará el juez exclusivamente (art. 501 cód. cit. y Manual t. 3, p. 297). (1).

Si no se presentase la fianza dentro de los seis días siguientes a la concesión del recurso, se elevarán los autos al superior, con citación de las partes. Si se diese fianza, se remitirán también los autos, dejando testimonio de lo necesario para que se prosiga la ejecución. Esta fianza sólo será extensiva al resultado del juicio ordinario, cuando así lo solicite el ejecutado, (art. 501, 502 y 503 cód. de proc. civ.) En los demás casos quedará de derecho cancelada, confirmada que sea la sentencia por el superior. Fuera de la sentencia de remate, sólo son apelables en el juicio ejecutivo los autos que se declaren tales. El término para apelar será en todos los casos de tres días perentorios; y el recurso se otorgará siempre en relación, procediéndose con arreglo a lo dispuesto para esta clase de recursos en el juicio ordinario (art. 502, 503, 504 y 505 cód. cit.).

Ante el superior no se admite alegato, ni se permite presentar otras pruebas que las que consten en instrumentos públicos (art. 506 cód. cit. y Manual, t. 3, p. 339, 340, 345).

11.—¿Produce cosa juzgada la sentencia de trance y remate?

Nuestra ley preceptúa que cualquiera que sea la sentencia en el juicio ejecutivo, quedará, tanto al actor como al ejecutado, su derecho a salvo para promover el juicio ordinario, (art. 500 cód. de proc. civ.).

Esto no significa que en el juicio ordinario se permita discutir todas las cuestiones resueltas en el ejecutivo. En la legislación española fué este reglado por la ley 2, tít. 21, libro 4, de la recopilación castellana, bajo las bases siguientes:

1.ª Traían aparejada ejecución «las cartas, contratos públicos y recaudos ciertos» que constatasen deudas exigibles.

2.ª Sólo se admitía contra la ejecución las excepciones que pudiesen probarse dentro de diez días.

3.ª La sentencia de trance y remate era inapelable.

4.ª Sobre la prueba de testigos de las excepciones, la ley de-

---

(1) Es decir el juez de primer grado ó el de segundo.



cía: «Es nuestra merced, que el deudor nombre luego los testigos, quien son, y donde viven, y jure que no trae malicia: y si nombrare los testigos aquen de los puertos fuera del arzobispado o obispado, haya plazo de un mes para traer sus dichos; y si allende los puertos por todo el reyno, que haya plazo de dos meses; y si los nombrare en Roma, o en París, o en Jerusalem fuera del reyno, que haya plazo de seis meses; pero es nuestra merced, que el deudor que alegare la tal paga o excepción, no la probando dentro de los dichos diez días en la manera que dicha es, y dixere, que los testigos que tiene están fuera del arzobispado o obispado, como dicho es, que pague luego al mercader o al acreedor, dando el tal mercader o acreedor luego fianzas, que si el deudor probare la paga, o otra excepción que le pueda excusar, que le tornará lo que así pagare, con el doble por pena en nombre de intereses».

No existía pues, en la Recopilación un juicio doble, como es el ejecutivo y el ordinario actual, sino un procedimiento único que tenía por base títulos auténticos de obligación, y en el cual a los diez días de citado de remate el deudor, el juez debía dictar sentencia interlocutoria, que podía ser modificada por el fallo final en que se tomaban en cuenta más amplias defensas y pruebas.

Es natural, entonces, que la interlocutoria que no había examinado «todas» la cuestión litigiosa; que había «reservado» la prueba ofrecida para más amplios trámites, no produjere cosa juzgada.

Bajo esta impresión se interpretó la ley española de 1855 por sus comentadores, que carecen de ciencia y espíritu crítico, y de ahí sus traspiés y conclusiones falsas.

Los prácticos españoles antiguos y los nuestros, como Castro y Estevez Sagui, bien podían hablar de los términos premiosos del juicio ejecutivo, y de las formas solemnes del ordinario, máxime si se tiene en cuenta que el primero se desenvolvía como lo hemos dicho, en instancia única, mientras el segundo admitía el recurso de apelación, de segunda suplicación y hasta el famoso remedio de las mil y quinientas, desesperación de litigantes.



No es posible, por otra parte, que dentro del juicio ejecutivo puedan resolverse cuestiones como la relativa a la embargabilidad de los bienes municipales o las pensiones militares, etc., en forma final, y definitiva y que la sentencia de trance y remate, no resuelva en esa forma ninguna cuestión. ¿Cómo puede afirmarse que la sentencia de trance y remate produzca cosa juzgada en ningún caso?

El cód. de la capital admite casi la mayoría de las excepciones que sirven para extinguir las obligaciones; reconoce una amplitud de prueba que, con la facilidad de comunicaciones, ferrocarriles, telégrafo, teléfono, etc., aumenta de día en día; establece la doble instancia, como en los juicios ordinarios. En tales condiciones resulta que el juicio ejecutivo y el juicio ordinario se desenvuelven en igualdad de trámites, y es evidente que en esos casos, lo que se resuelva en el primero, francamente tiene que producir cosa juzgada en el segundo.

La ley española de 1881, para evitar esa conclusión, dijo expresamente lo contrario. El cód. de la capital permite el juicio ordinario después del ejecutivo, pero natural es que en aquél sólo han de discutirse las cuestiones que no hayan sido juzgadas en éste, por expresa disposición legal, como por ejemplo, en las hipótesis de la compensación, o de las letras de cambio con referencia a las excepciones no articulables.

Así cuando una defensa no puede discutirse ni resolverse en el juicio ejecutivo, por haberlo prohibido la ley, ella queda «reservada» para el ordinario; lo mismo ocurre si los medios de defensa han sido limitados, como en la compensación: o si en el juicio ejecutivo el deudor hubiere invocado una prueba que no ha podido practicar porque se le negó el término extraordinario por ejemplo. Las cuestiones no comprendidas en los supuestos precedentes, una vez decididas en el juicio ejecutivo, no pueden volverse a discutir en juicio ordinario. Lo contrario sería un escándalo jurídico contrario a la razón y a la verdad, como dice el doctor Vélez en la nota a los arts. 1102 y 1103 del cód. civ. (1).

---

(1) Véase *Jurisprudencia Argentina*, t. 2, p. 352; t. 3, p. 19, 58.



Si la primera ejecución fué rechazada por error de procedimiento no habiéndose impugnado el título ejecutivo, dicho rechazo no hace cosa juzgada en el juicio de la misma naturaleza que se promueve. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 751; t. 4, p. 23).

12.—La acción ejecutiva tiende a procurar al acreedor una suma de dinero y la sentencia debe cumplirse con ese propósito y no otro. Sin embargo, en casos excepcionales, el acreedor recibe bienes inmuebles en pago, pero sólo solamente con su consentimiento, (art. 516 cód. cit.).

La sentencia puede ejecutarse: 1.º, cuando no se han opuesto excepciones, (art. 511 cód. cit.); 2.º, cuando opuestas, no se ha intentado probarlas, (art. cit.); 3.º, cuando ha sido consentida por no haberse deducido recurso dentro de los tres días de su notificación, (art. 505, cód. cit.); 4.º, cuando es confirmada por el superior y no se ha interpuesto y concedido contra la misma recurso extraordinario, (art. 508 cód. cit.); 5.º, cuando no obstante los recursos ordinarios o extraordinarios, el ejecutante diere fianza de responder de lo que perciba, (art. 501, 508 cód. cit.; Manual, t. 3, p. 344).

El procedimiento de ejecución varía según la naturaleza de los bienes embargados al deudor, y rigen en él los principios de unidad del juicio de la ejecución forzada. (Véase p. 17).

a) Cuando lo embargado es dinero, se hace pago inmediatamente al acreedor si así lo pidiere, y en cuanto la cantidad que debe percibir sea líquida. (Véase más adelante, p. 74).

Hay cosas que fácilmente se reducen a dinero como las cédulas hipotecarias u otros papeles de comercio cotizables los que deben venderse en la bolsa de comercio por medio de corredor. Si los bienes embargados fuesen muebles o alhajas, se procederá a su venta en remate, por un martillero público, sin necesidad de tasación. El remate se anunciará en la forma de costumbre por tres a ocho días a discreción del juez, según la importancia de los bienes, y durante la publicación se expondrán a examen del público las alhajas y objetos de plata u oro, en el lugar que en los anuncios se designe, (art. 509 cód. cit.).

El martillero debe ser propuesto por las partes, pero si no



se ponen de acuerdo, corresponde que el juez haga de oficio la designación. El ejecutante no está autorizado para proponer martillero y pedir que se notifique al ejecutado a fin de que manifieste su conformidad bajo apercibimiento de que su silencio se interprete en ese sentido, (arg. art. 512 cód. cit. y sentencia de las cámaras en pleno en JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 5, p. 43).

b) Cuando el embargo consiste en bienes inmuebles es necesario proceder a su venta de acuerdo con las siguientes reglas:

I.—Debe hacerse la tasación, a fin de fijar la base de la venta que es la de dos tercios de la misma, (art. 510 y 515 cód. cit.).

La tasación se hace por peritos, nombrados uno para cada parte y en caso de discordia de los mismos la dirige un tercero nombrado por el juez, (art. 510 cód. cit.; y cámaras en pleno, en JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 5, p. 54).

Practicada la tasación se hará saber a las partes, para que dentro del término de cuatro días perentorios y comunes a ambas manifiesten su conformidad o disconformidad, no pudiendo fundarse ésta en el importe de la valuación. Durante dicho término, los autos premanecerán en la oficina a disposición de los interesados y una vez vencido, el juez resolverá sin más trámites, aprobando o desaprobanda la tasación, (art. 511 cód. cit.).

Aprobada la tasación se ordenará la venta de los bienes por un martillero público, designado en la forma indicada. (Véase página 72).

El remate se anunciará por un término que no baje de quince días ni exceda de treinta, fijándose edictos a la puertas de la secretaría y en los demás sitios públicos de costumbre. Se anunciará igualmente en dos diarios por diez veces a lo menos, (art. 513 cód. cit.). Todo sin perjuicio de cualesquiera otro medio de publicidad que los interesados quieran emplear de su cuenta, a cuyo efecto el actuario les dará copia de los edictos, si la pidieren, (art. 514 cód. cit.).

No habiendo posturas quedará al arbitrio del actor pedir: o un nuevo remate previa reducción de la tasación en un 25 o/o; o que se le adjudiquen los bienes por las dos terceras partes de la tasación, (art. 516 cód. cit.).





Si no obstante la reducción no se presentasen postores se ordenará la venta sin limitación de precio, (art. 517 cód. cit.).

Si por culpa del postor a quien se hubiese adjudicado los bienes, dejase de tener efecto la venta, se procederá a un nuevo remate en la forma que queda establecida, siendo el mismo postor responsable de la disminución del precio del segundo remate, de los intereses acrecidos y las costas causadas con este motivo, al pago de todo lo cual será compelido ejecutivamente, a petición de parte, (art. 519 cód. cit.).

Aprobado el remate (con audiencia de las partes) , si los bienes fuesen muebles o alhajas serán entregados al comprador, previa consignación y depósito del precio en el establecimiento público destinado al efecto; si fuesen raíces se otorgará la escritura por el ejecutado y en su defecto por el juez, debiendo también consignarse previamente el precio, (art. 520 cód. cit.). Si los títulos adoleciesen de algún defecto que no pueda subsanarse en breve tiempo, el comprador deberá optar entre el desistimiento de la compra, sin responsabilidad alguna, o la realización de ella con los defectos de que adolezcan, (art. 522 cód. cit.).

13.—La sentencia de remate que manda llevar adelante la ejecución contiene diversas condenaciones que debe satisfacer el ejecutado: pago del capital, de intereses, de los gastos hechos en el juicio, etc. Para conocer el monto total es necesario proceder a operaciones preliminares que permitan hacer una liquidación exacta.

I.—Los intereses deben computarse de acuerdo a la convención y a falta de ella de acuerdo con el interés ordinario que cobra el banco de la nación argentina.

II.— Los honorarios se regulan previamente por el juez y son a cargo del deudor, con excepción de los que corresponden a pretensiones desestimadas (art. 507 cód. cit.). Sin embargo, los gastos causados por el deudor para su defensa, no tendrán en ningún caso prelación, a menos que haya sido hecha por un defensor nombrado de oficio, (art. 528 del cód. cit.).

III.—Los gastos hechos en el juicio (vgr. papel sellado, sumas pagadas al oficial de justicia, diligenciamiento de exhortos, etc.) que el ejecutante adelantó, son también de abono.



Hecha la liquidación por la parte, o por el secretario de orden del juez, se hará saber a los interesados, quienes en el acto de la notificación deberán expresar su conformidad o disconformidad, indicando en el último caso las razones en que la funden (art. 523 cód. cit.). En seguida, el juez, sin más trámite, aprobará o mandará reformar la liquidación (art. 524, cód. cit.).

Aprobada la liquidación, se hará el pago de su importe, prestando fianza el ejecutante, si el ejecutado lo pidiere a las resultas del juicio ordinario que puede promover el último. A esta fianza es aplicable lo dispuesto en el art. 525 cód. cit. Si dentro de treinta días el ejecutado no promoviese el juicio ordinario, la fianza quedará *ipso iure* cancelada (art. 526 cód. cit.)

Sin estar reintegrado completamente el ejecutante, no podrán aplicarse las sumas realizadas a otro objeto, a menos que sea para las costas de la ejecución o para pago de otro acreedor que haya sido declarado preferente por ejecutoria (art. 527 cód. cit. y Manual, t. 3, p. 291 en texto y nota).

## EMBARGOS PREVENTIVOS (a).



1.º Principios generales. — 2.º Juez competente. — 3.º Casos en que procede el embargo: a) Crédito justificado con documento público ó privado; b) Contrato bilateral; c) Libros de comercio; d) Acreedor privilegiado; e) Acción reivindicatoria; f) Confesión en juicio; g) Sentencia favorable; h) Propiedad literaria y artística; i) Acción de separación de bienes; j) Locación; k) Rebelión; l) Otros casos. — 4.º Forma de justificar el crédito. — 5.º No es necesario que exista cantidad líquida para decretar el embargo. — 6.º Obligaciones de hacer. — 7.º Formalidades de la traba del embargo. — 8.º Responsabilidad del embargante. — 9.º Inhibición. — 10. Extinción del embargo preventivo: a) Por falta de deducción de la acción; b) Por prescripción; c) Por haberse hecho la traba en bienes de terceros.

1.—Antes de que exista pronunciamiento judicial a favor del acreedor, se encuentran en conflicto dos intereses que el le-

(a) Véase Carvantes, «Procedimientos judiciales», t. 3, p. 372, Madrid, 1858; De la Collina, «Derecho y legislación procesal», t. 2, p. 221; De la Búa, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 131, Madrid, 1856; Gómez de la Serna, «Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos, la ley de enjuiciamiento civil», p. 172, Madrid, 1857; Jurisprudencia Argentina t. 1, p. 15, 208, 231, 636; t. 2, p. 248, 263, 379, 639, 739; t. 3, p. 48, 183, 185, 389, 986, 1023, t. 4, p. 30, 284, 353; t. 5, p. 35, 44, 439; t. 6, p. 108, 150, 657; t. 7, p. 499; t. 8, p. 50, y 152; Manresa y Navarro, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 5, p. 382; Madrid 1891; Manresa y Bous, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 257, Madrid, 1861; Ortiz de Zúñiga, «Práctica general forense», t. 1, p. 676, 6.ª edic., Padilla y Antoni, «Anotaciones al nuevo código de procedimientos en lo civil», p. 9, 79, Tucumán, 1923.



gislador ha tratado de conciliar: el supuesto acreedor desearía asegurar sus derechos, para que no resulten ilusorios si son reconocidos por la justicia; el deudor, a su vez considerará arbitraria cualquier restricción que se imponga a su patrimonio, si no ha sido vencido en una contienda regular. De ahí entonces que sea necesario garantizar los derechos del acreedor cuando sus pretensiones resulten verosímiles *prima facie*, (1) sin descuidar los derechos del deudor para el caso en que el primero ultrapase los límites que la ley demarca (art. 444 cód. de proc. civ.). En consecuencia, las disposiciones sobre embargo preventivo deben interpretarse restrictivamente, desde que son de carácter excepcional (cám. civ. t. 83, p. 123; t. 84, p. 95; t. 127, p. 376).

Dada la índole provisional del embargo preventivo no causa instancia y puede promoverse nuevo artículo sobre lo mismo, siempre que el acreedor lo instruya con otros adminículos o lo motive en nuevas razones legales, (cám. civ. t. 43, p. 293).

Los bienes embargados no pueden enajenarse por el propietario porque, mientras subsista ese gravámen, el acreedor tiene derecho a que se le pague con el producto de aquellos, o a que se le entreguen las cosas, según la naturaleza de la obligación. Es por eso que si la deuda está embargada judicialmente el pago hecho al acreedor no es válido (art. 736 cód. civ.).

El deudor no puede vender ni ceder los bienes embargados, desde que no es capaz de disponer de ellos (art. 1357, 1435, 1441 cód. civ.; cám. civ. t. 129, p. 198).

Estas reglas son aplicables a todas clases de embargos y a la inhibición, que es aún más enérgica que los primeros en extensión.

Las citadas medidas se sustancian sin noticia, ni intervención de la parte afectada por el mismo, salvo la intimación de pago. (Cám. fed. de la cap., septiembre de 1910, p. 1224).— Ellas no interrumpen la prescripción. (Cám. com. de la cap., julio de 1911, p. 358).—

2.—Es juez competente, para decretar el embargo preventivo

(1) *Jurisprudencia Argentina* t. 1, p. 636.



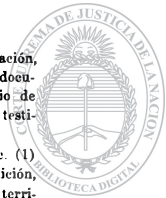
vo, el que lo sea para conocer en la acción principal; pero en caso de que un juez incompetente lo haya ordenado será válido, siempre que en el mismo se hayan aplicado las formas legales, y sin que esto importe prórroga de jurisdicción para entender en el juicio que debe iniciarse en adelante (art. 463 cód. cit.).

El embargo preventivo puede también ser dictado por los jueces de paz, en asuntos que por su cuantía corresponda conocer a los jueces de primera instancia, en los partidos que disten más de diez leguas del punto donde se hallen situados los tribunales competentes, y en tal caso el juez de paz remitirá las actuaciones al de primera instancia, inmediatamente después de trabado el embargo. La apelación de los embargos trabados por los jueces de paz en estos casos, debe deducirse ante él, y para ante la cámara respectiva (art. 462, cód. cit.). La regla precedente solo tiene aplicación en los embargos que se decretan en asuntos de competencia federal en las provincias, o en los que corresponde a los jueces letrados de los territorios nacionales (ley núm. 3375).

Es juez competente para ordenar el levantamiento de los embargos e inhibiciones el que decretó esas medidas; salvo que el bien, o bienes sobre que recayeron, hubiera sido vendido por mandato de otro juez, en cuyo caso éste será el competente (cám. civ. t. 44, p. 79; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 5, p. 44). Para poder escriturar, el juez que ordenó la venta, debe dirigirse a los que decretaron embargos haciéndoles saber que ha ordenado su levantamiento, al solo objeto de escriturar; el mejor derecho de los distintos acreedores se hace efectivo, de acuerdo con los principios generales, sobre el precio.

3.—El embargo preventivo solo puede decretarse si concurren determinadas circunstancias:

a) Cuando la existencia del crédito esté justificada con instrumento público o privado atribuido al deudor, abonada la firma (en este último caso) por información sumaria de testigos, si se trata de una cantidad mayor de doscientos pesos, y por simple información, cuando la deuda fuere inferior (art. 443, inc. 2, cód. cit.).



La ley al hablar de información y de simple información, se ha referido en el primer caso a la existencia de un documento privado, cuya firma ha de autenticarse por medio de testigos; y en el segundo, a la comprobación por prueba testimonial de la obligación.

En el caso que nos ocupa el crédito debe ser exigible. (1) No obstante, procede el embargo, aun faltande esa condición, si el deudor no tiene domicilio en la capital, provincia o territorio nacional donde aquel se solicita, o si se justifica sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, o que ha disminuído notablemente su responsabilidad después de contraída la obligación (arg. del art. 443, inc. 5.º, cód. cit.; de la ley 3375; cádm. civ. t. 67, p. 190; t. 83, p. 411).

b) Cuando se funde la acción en un contrato bilateral y se justifique la existencia de éste por prueba testimonial, si no pasa de doscientos pesos, y por simple información si excede a esa cantidad, debiendo, además, comprobarse sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor o si éste ofreciere cumplirlo o su obligación fuere a plazo (art. 443, inc. 3.º cód. cit.).

c) Cuando la deuda esté justificada por los libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resultase de boleto de corredor conforme con sus libros, y en los casos en que éstos puedan servir de prueba (art. 443, inc. 4.º cód. cit.). Nuestros tribunales han declarado a veces, que para que los libros puedan fundar un embargo, es necesario que el deudor sea comerciante (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 185 en texto y nota). Nosotros pensamos que las palabras «en los casos que éstos puedan servir de prueba» se refieren exclusivamente a los libros de corredor y que, por consiguiente, es errónea la jurisprudencia citada. (Cádm. civ., t. 12, p. 536).

(1) Un crédito es exigible si no está pendiente de plazo, suspensión o condición, y, en tal caso, para la procedencia del embargo, basta demostrar su autenticidad (art. 443, inc. 2.º cód. proc. civ.); mas si hay plazo o condición, es necesario que concorra alguna de las circunstancias enumeradas en el inc. 5.º del artículo citado. (conf. Jurisprudencia Argentina, t. 3, p. 389; en contra: cádm. civ. t. 67, p. 190).



d) Cuando el acreedor tiene privilegio sobre ciertos bienes muebles o inmuebles (art. 446 cód. cit.). El instrumento que justifique el privilegio debe ser público o privado, y si se trata de una suma inferior a doscientos pesos, justificarse con prueba testimonial.

e) Cuando se haya entablado acción reivindicatoria (1) de una cosa mueble o inmueble. El embargo debe recaer sobre la cosa litigiosa (2) (art. 447 cód. cit.), y el que lo pide debe acompañar los documentos de donde resulte la verosimilitud del derecho invocado (cám. civ. t. 29, p. 71; t. 77, p. 360 y 393; t. 88, p. 300; t. 93, p. 57; t. 112, p. 91; t. 117, p. 426).

El embargo subsiste hasta que pase en autoridad de cosa juzgada la sentencia que rechaza la demanda, (cám. civ. t. 120, p. 41; t. 123, p. 316).

f) Cuando en un juicio ordinario, por confesión expresa o ficta, resulten probados hechos que hagan presumir verosimilmente el derecho alegado (3) (art. 448, cód. cit.; cám. civ. t. 44, p. 92; t. 107, p. 308).

El reconocimiento condicional de la obligación, al contestar la demanda, no basta para decretar el embargo preventivo (cám. civ. t. 73, p. 72; t. 100, p. 313).

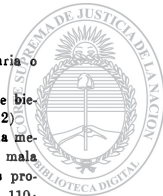
g) Cuando el solicitante del embargo hubiere obtenido sentencia favorable (art. 448, cód. cit.).

(1) No basta el simple anuncio de que va a iniciarse la acción; *Jurisprudencia Argentina*, t. 6, p. 108. Tampoco procede embargo en las acciones posesorias, (cám. civ. t. 127, p. 376, en contra *Llerena*, op. cit. t. 7, p. 251).

(2) Los tribunales de la provincia de Buenos Aires, han declarado, que las disposiciones de las leyes locales, que autorizan el embargo de los frutos de la cosa reivindicada, son repugnantes a la constitución, *Jurisprudencia Argentina*, t. 3, p. 986. No sabemos qué tiene que hacer la constitución con el embargo preventivo.

De acuerdo con el cód. de la cap., es improcedente el embargo de los frutos, pero es por que tal medida no está autorizada por la ley, (cám. civ. t. 3, p. 581; t. 92, p. 347).

(3) El embargo debe limitarse a la cantidad reconocida y no a la que se reclama, *Jurisprudencia Argentina*, t. 6, p. 657. La confesión contenida en la absolución de posiciones no basta, porque solo puede apreciarse en la sentencia cám. civ. t. 39, p. 25.



h) Cuando se trate de asegurar la propiedad literaria o artística (1).

i) Cuando la mujer entable acción de separación de bienes, y aun antes de ella, si hubiere peligro en la demora. (2)

En el primer caso, basta la demanda para justificar la medida precautoria; en el segundo, hay que demostrar la mala administración del marido, que haga peligrar los bienes propios de la esposa (art. 1294, cód. civ.; cá. civ., t. 5, p. 110; t. 67, p. 264; t. 97, p. 197; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 6, p. 150).

j) Cuando el locador (3) desee asegurar sus derechos sobre predios rústicos o urbanos en contra del locatario o sublocatario (art. 445 cód. de proc. civ.; cá. civ., t. 69, p. 92; id. octubre de 1910, p. 1530; id agosto de 1911, p. 131).

k) Cuando una de las partes ha sido declarada rebelde (Manual, t. 1, p. 267; cá. civ., t. 14, p. 288; t. 80, p. 271; t. 84, p. 7).

l) Cuando las leyes autoricen tal medida, expresa o implícitamente. Tal ocurre, por ejemplo, en los casos en que se trate de acciones análogas a la reivindicatoria, como la de petición de herencia, de colación, de nulidad de testamento, etc. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 248; t. 6, p. 108; cá. civ., t. 1, p. 243; t. 11, p. 394; t. 13, p. 461; t. 18, p. 190; t. 79, p. 95; t. 122, p. 219).

(1) El art. 9, de la ley núm. 7092 establece que: «La publicación ilícita en el texto original o en traducción de una obra literaria; la representación de una obra dramática o lírica; la ejecución pública de una composición musical, así como la reproducción de cualquier obra artística, sin el consentimiento de sus autores, dará lugar a la acción civil por daños y perjuicios que el damnificado puede intentar ante la justicia ordinaria. Además, a solicitud del autor o derecho-habientes, y bajo su responsabilidad, el juez podrá ordenar el secuestro de la edición o de los elementos de la reproducción fraudulenta, y en caso de una obra teatral, la suspensión de su representación ilícita».

(2) El art. 1295 cód. civ. establece que entablada la acción de separación de bienes, y aun antes de ella, si hubiera peligro en la demora, la mujer puede pedir embargo de sus bienes muebles que estén en poder del marido, y la no enajenación de los bienes de éste, o de la sociedad.

(3) El locador para obtener embargo debe naturalmente demostrar su carácter de tal en la forma que ya hemos indicado, cá. civ., t. 43, p. 240; t. 52, p. 213; t. 117, p. 333.



Es menester en estos casos, como en la reivindicación, que se compruebe la verosimilitud del derecho alegado, (cám. civ. t. 122, p. 149).

El embargo debe limitarse en la acción de petición de herencia y análogas, a cubrir la parte alicuota que pueda corresponder al que ha deducido la acción (cám. civ., t. 10, p. 394).

Como puede ocurrir que la acción de petición de herencia la deduzca un presunto hijo, fundado en su filiación natural, es menester para la procedencia del embargo, que se compruebe la verosimilitud del derecho invocado (cám. civ., t. 132, p. 69; el tribunal decidió cosa distinta de la que se expresa en el sumario oficial del fallo).

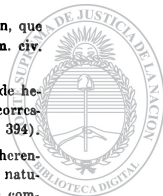
En los casos enumerados debe decretarse el embargo preventivo bajo la responsabilidad de la parte que lo solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar en caso de haberlo pedido sin derecho. Si el actor fuese reconocidamente abonado, el juez podrá decretar el embargo bajo su responsabilidad, (art. 444 cód. de proc. civ.).

Por excepción procede el embargo bajo la responsabilidad y caución juratoria del solicitante (art. 444 a 449 cód. cit.).

El apoderado con facultad para pedir embargo preventivo está virtualmente facultado para prestar caución (cám. civ., t. 80, p. 265).

4.—Para demostrar la verosimilitud del derecho que se trata de hacer valer en el embargo preventivo, se admite simple información, la que puede ofrecerse firmando los testigos el escrito en que se solicite y ratificándose en su firma. (art. 450, cód. cit.).

5.—No es necesario, en nuestra opinión, que el título con que se pide el embargo demuestre la existencia de una obligación por cantidad líquida, pues, aparte de que la ley no lo exige, supone casos en que ello no es posible. En cada especie el juez examinará la verosimilitud del derecho del acreedor y fijará, si ello es posible, el monto del embargo, de acuerdo con





los elementos de juicio que existan en los autos, (*Jurisprudencia Argentina*, t. 2, p. 263; t. 4, p. 284). (1)

6.—Con un criterio erróneo en nuestro concepto, han decidido nuestros tribunales que tampoco procede el embargo preventivo para asegurar el cumplimiento de obligaciones de hacer. La circunstancia de que en dichas obligaciones sea a veces difícil determinar la cantidad por la cual se trabará embargo, no implica su improcedencia, cuando esa determinación es posible. (2) Se trata de una cuestión de prueba apreciable *prima facie* (3) y en la cual debe ejercitarse libremente el criterio judicial. No alcanzamos la razón, *putá*, por la cual no pueda pedirse el embargo de la cosa, materia del contrato preliminar de compra-venta, que es justamente lo que debe entregar el deudor. (Véase en contra, *cám. civ.*, t. 33, p. 372; t. 88, p. 226; *etc.*.)

7.—El juez tiene el deber de examinar cuidadosamente el

(1) En el fallo de las cámaras en pleno, (diciembre 29 de 1914), el doctor Zapata, votando con la mayoría del tribunal, dijo: «El art. 448 del cód. de proc. dispone clara y terminantemente, que tiene derecho de pedir embargo preventivo el litigante que hubiera obtenido una sentencia favorable.

«No haciendo distinción alguna dicha disposición legal, debe entenderse que tal derecho corresponde a todo el que obtenga una sentencia favorable y cualquiera que sea la condenación que esta contenga.

«La disposición del art. 471, aplicable en general, a mérito de lo dispuesto por el art. 451, no lo es respecto de la sentencia que condene, no a pagar una suma de dinero, único caso en que es posible librar mandamiento, sino a entregar una cosa o a hacer o a prestar algún servicio o a pagar una cantidad ilíquida.

«Si así fuera, quedaría frustrado el derecho que al litigante vencedor en primera instancia le acuerda el citado art. 448 ya que no sería posible librar mandamiento en los términos del art. 471, tratándose de sentencias como las indicadas en la última parte del considerando anterior.

«No pudiendo concebirse que el legislador haya acordado un derecho para dejarlo en seguida sin efecto por medio de una formalidad imposible de cumplir, debe interpretarse el citado art. 451, en el sentido de que él se refiere únicamente a los casos que por su naturaleza permitan librar mandamiento por cantidad líquida, de acuerdo con la disposición combinada de los arts. 471 y 475 del cód. de procedimiento.» *Jurisprudencia Argentina*, t. 5, p. 35.

(2) En estos últimos tiempos se está operando una evolución en la jurisprudencia, la que se inclina a la teoría sustentada por nosotros en el texto. *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 208; t. 3, p. 48 y 1023; t. 5, p. 35.

(3) *Cám. com.* en Gaceta del foro, octubre de 1916, p. 364.



título con que se pide el embargo, procediendo con el criterio que le marca la ley para despachar el mandamiento en el juicio ejecutivo, (véase Manual, t. 4, p. 56). Para trabar el embargo ha de intimarse al deudor la entrega de la cantidad que se le reclama o anotarse el gravámen en el Registro de la propiedad, o notificarse a tercero, según los casos. (1)

En el mandamiento siempre se incluirá la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia. (art. 457, 456, 455, cód. cit.).

Sí los bienes embargados fuesen muebles, serán siempre depositados a la orden judicial; (2) pero si fueran los muebles de la habitación del embargado, podrá él mismo ser constituido en depositario. (art. 458 cód. cit.). El depositario de objetos embargados a la orden judicial, estará obligado a presentarlos dentro de veinte y cuatro horas de cualquier intimación judicial, pudiendo ser compelido a ello con arresto personal, (art. 459 cód. cit.); pero si da explicaciones satisfactorias sobre la desaparición de la cosa, los medios de coacción son improcedentes (cám. civ., t. 64, p. 277; t. 119, p. 422).

El depositario no tiene derecho de retención por razón de los honorarios o gastos que se le adeuden (cám. civ. t. 84, p. 6; t. 104, p. 315).

La resolución que deniega o acuerda el embargo preventivo puede recurrirse por las partes. En el primer caso el acreedor debe interponer recurso de apelación dentro de los tres días, el que le será concedido en relación, (art. 452 cód. cit.); en el segundo, el deudor puede apelar dentro del mismo término, que se cuenta desde que se le hizo saber el embargo (3), (art. 452, cit.) y el recurso se concede en relación, al solo efecto devolutivo.

---

(1) Sin embargo, la intimación de pago no es requisito indispensable, *Jurisprudencia Argentina*, t. 2, p. 639; en contra cám. civ. marzo de 1910, p. 174; cám. fed. de La Plata, marzo de 1913, p. 41.

(2) Véase ley núm. 4531 que pone a cargo del Banco Municipal de Préstamos la custodia de los bienes muebles embargados judicialmente en la capital de la República.

(3) Puede ocurrir que por negligencia se omita poner en conocimiento del deudor la traba del embargo, en el término que marca la ley



Siempre que el embargo preventivo no recaiga sobre cosas afectadas a un privilegio reconocido por las leyes, podrá el demandado pedir que se deje sin efecto, depositando a la orden del juez una cantidad suficiente, o dando caución para responder de las sumas que se reclamen y de las costas, (art. 453 cód. cit.). La caución podrá ser de cualquier de las clases reconocida en derecho. El juez la calificará (1), por si solo y encontrándola bastante, mandará que se extienda la escritura correspondiente, quedando terminado el incidente, (art. 454, cód. cit.).

8.—El embargo de bienes cuando se pide sin derecho hace responsable al que lo obtuvo por el pago de daños y perjuicios (2) de acuerdo con las reglas del derecho común, (arg. de los arts. 444, 449 cód. cit. y 1068 cód. civ.; cádm. civ.; t. 9, p. 32; t. 20, p. 381; t. 48, p. 51).

9.—En todos los casos en que proceda embargo preventivo y este no pueda hacerse efectivo, por no conocerse bienes al deudor, podrá solicitarse contra él la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se deberá dejar sin efecto tan luego como presentase bienes a embargo, (3) o diere caución bastante, (art. 461, cód. proc. civ.).

10.—El embargo puede levantarse por varias causas, a saber:

a) si la demanda no se deduce en el preciso término de ocho días; b) si se hace lugar a la prescripción cuando se ha operado. **prima facie**, sin perjuicio de que las partes deduzcan sus acciones en juicio ordinario, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA,

---

(art. 452 cód. cit.) y en tal caso nada obsta para que apele, desde que los derechos del acreedor se encuentran ya asegurados.

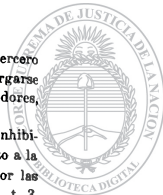
(1) Sea de primero o segundo grado.

(2) A veces sin razón se ha exigido por nuestra jurisprudencia la justificación del dolo o por lo menos de la culpa o imprudencia por parte del embargante, cádm. civ., t. 79, p. 268.

(3) Cádm. civ. t. 18, p. 206; t. 61, p. 137 y 187. En un fallo de la cádm. civ. 2.<sup>a</sup> se afirma con razón que la inhibición equivale al embargo del que es un substituyente con mayor amplitud, dado que abarca toda especie de bienes, paralizando la capacidad dispositiva de aquél contra quien ha sido decretado. Si no tuviese esta significación, resultaría inútil, lo que no cabe admitir, ya que de otro modo no estaría reglamentada en la ley. Gaceta del foro, octubre de 1917, p. 341.

t. 1, p. 231) ; c) por haberse hecho la traba en bienes de tercero (véase más adelante, p. 89). Es claro que sólo pueden embargarse los bienes que forman el patrimonio afectado a los acreedores, (Manual, t. 4, p. 23).

El juez, antes de mandar levantar el embargo o la inhibición, debe oír al acreedor (cám. civ. t. 41, p. 268). En cuanto a la responsabilidad del adquirente de una casa de comercio por las deudas de su causante, véase JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 182, (texto y nota).



**TERCERIAS (a)**

1.º *Principios generales en materia de tercerías. — 2.º Distintas clases de tercerías: a) de dominio; b) de mejor derecho. — 3.º Reglas comunes a las dos clases de tercerías.*

1.º — Las actuaciones judiciales pueden desenvolverse entre actor y demandado, que es lo que ordinariamente sucede; entre varios demandantes contra uno o varios demandados, cuando procede la litis consorcio (Manual, t. 3, p. 104). Los terceros alguna

(a) Sobre tercerías, véase Calvento, «El Código de procedimientos, civil y comercial explicado y anotado con la jurisprudencia de las cámaras de apelaciones», p. 245, 2.ª edic.; Cañada, «Juicios civiles», t. 1, p. 359, 2.ª edic.; Caravantes José de Vicente, «Procedimientos judiciales sobre la nueva ley de enjuiciamiento civil», t. 3, p. 361 y 363, edic. 1858; Castro M. A., «Prontuario de práctica forense», p. 245, s. 2.ª edic. 1865; De la Colina Salvador, «Derecho y legislación procesal», t. 2, p. 219, 2.ª edic.; De la Rúa, Vicente Hernández, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 202, ed. 1856; Estévez Sagú, «Procedimientos civiles en el foro de Buenos Aires», p. 681; Fernández Darío, «El código de procedimientos civiles y comerciales según las exmas. cámaras de apelación en lo civil y comercial de la capital federal», t. 2, p. 65; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 24, 249, 481, 604, 623, 917; t. 2, p. 9, 151, 164, 241, 333, 448, 701, 819; t. 3, p. 65, 84, 285, 298, 392, 731, 908; t. 4, p. 419; t. 5, p. 485; t. 6, p. 490; t. 7, p. 29, 310; t. 8, p. 258; Manresa y Beus, «Ley de enjuiciamiento civil comentada y explicada», t. 4, p. 328, edic. de 1861; Parody Alberto (hijo), «Comentarios al código de procedimientos en lo civil y comercial de la provincia de Santa Fe», t. 3, p. 201; Beus Emilio, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 3, p. 487, edic. 1882; Rodríguez Alberto M., «Comentarios al código de procedimientos en materia civil y comercial de la capital de la República Argentina», t. 2, p. 316, 2.ª edic.; Vázquez Acevedo Alfredo, «Concordancias y anotaciones del código de procedimiento civil del Uruguay», p. 114.





vez desearían intervenir en los juicios cuando temen que la sentencia pueda perjudicarlos y las leyes extranjeras les confieren tal derecho aunque no las nuestras (Manual t. 3, p. 104, 338, 360).

Situación distinta a las anteriores es la que surge cuando el acreedor embarga bienes de su deudor y un tercero pretende que esos bienes le pertenecen o que tiene derecho preferente a hacerse pagar con el producto de los mismos. Surge entonces el juicio de tercería (1).

Las tercerías que se deduzcan en los juicios, deben fundarse en el dominio de los bienes embargados (tercería de dominio) o en el derecho que el tercero tenga de ser pagado con preferencia al ejecutante (tercería de mejor derecho). (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 4, p. 419; sup. cort. nac. t. 80, p. 49; t. 89, p. 106). Ambas deben substanciar-se en expediente por separado y en juicio ordinario.

Las tercerías suponen varias condiciones, de forma y de fondo:

I. — Es competente para conocer de ellas el juez de lo principal, es decir, el del juicio ejecutivo o el de aquel en que se ordenó el embargo sobre los bienes. (sup. cort. nac. t. 17, p. 178; t. 19, p. 81; t. 29, p. 38; t. 92, p. 165).

II. — El tercerista que viene a juicio debe aceptar la constitución del proceso principal, en el cual no le es dado intervenir.

Lo único que puede discutir el tercerista es su derecho a los bienes embargados o su derecho a ser pagado antes que el acreedor de los autos principales (2).

III. — Para la procedencia de las tercerías deben concurrir las condiciones de la acción, es decir, una regla de derecho que garantice un bien, la calidad de obrar y el interés (Manual, t. 3,

---

(1) Las llamadas tercerías conadyuvantes no existen en el derecho procesal argentino, Vázquez Acevedo, op. cit. p. 118.

(2) Con relación a los bienes muebles puede tratarse de demostrar la posesión que se confunde con el dominio, y para ello hay que recurrir a los principios generales del derecho. Los documentos privados padados entre deudor y tercerista no pueden oponerse al ejecutante, si no tienen fecha cierta. Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 389; t. 2, p. 20; Gaceta del foro, enero-febrero 1922, p. 10, 135, 208, 326; mayo-junio, id. id., p. 28, 123, 252; julio-agosto, id. id., p. 10, 379; septiembre-octubre, id. id., p. 255, 280, 360; noviembre-diciembre, id. id., p. 103; enero-febrero, 1923, p. 18; marzo-abril, id. id., p. 61; mayo-junio, id. id., p. 175, 332.

p. 29). Sobre los requisitos procesales, téngase presente que son propios de esta acción los que se refieren a la audiencia de las partes, a las formas de la demanda, a la capacidad del tercerista y a la personería de su representante (Manual, t. 3, p. 21).

IV. — Para que exista tercería es necesario que se haya trabado embargo preventivo o definitivo en bienes de un extraño, en juicio ejecutivo, de apremio, de ejecución de sentencia, ordinario, etc., (cám. civ., t. 35, p. 32; Reus, op. cit. t. 3, p. 487). Si no se ha llegado al embargo, el tercero que se encuentre en el goce pacífico de sus bienes no tiene interés en deducir acciones, aun cuando otros estén disputando sobre los mismos, pues la sentencia que se dicte no podrá oponérsele por haber sido ageno a la *litis*. Si a pesar de eso es despojado de sus derechos, puede emplear otros recursos legales, (Manual, t. 3, p. 360; t. 4, p. 130).

Algunas veces no es necesario tampoco llegar a los trámites largos y solemnes del juicio de tercería, porque el propietario de los bienes puede obtener satisfacción de sus derechos en forma breve y sumaria, pidiendo y obteniendo que se levante el embargo sin más trámite.

En efecto, para que se pueda trabar embargo es necesario que el deudor esté en posesión de los bienes, (arg. de los art. 478 y 451 cód. de proc. civ.), y es por eso que la jurisprudencia ha declarado que «no sería justo ni equitativo obligar al que ha probado ser dueño y poseedor de la cosa embargada a seguir un juicio para obtener el alzamiento de un embargo que no puede mantenerse desde que falta la condición que la ley requiere para que pueda tener efecto, cual es la que el deudor se halle en posesión de los bienes embargados». (Cám. civ. t. 3, p. 582; t. 10, p. 21; t. 42, p. 77; t. 122, p. 233; t. IX, p. 414, serie 7.ª; Castro, op. cit. p. 246; Vásquez Acevedo, op. cit. p. 114: Gaceta del foro, marzo y abril de 1922, p. 281).

V. — Presentada la demanda de tercería, debe correrse traslado al ejecutante y ejecutado (1) con quienes continuará la tra-

---

(1) Los mandatarios en el juicio principal no pueden excusarse de intervenir en la tercería, arg. de la ley 17, tit. 48, lib. 11, nov. recop. En cuanto al domicilio de las partes se considera subsistente, Gaceta del foro, octubre de 1922, p. 70.







mitación del juicio hasta su terminación, (art. 532 cód. proc. civ.; Manual, t. 3, p. 65). Si bien el tercerista no puede poner en tela de juicio la capacidad de las partes, ni las formas como se ha constituido formal y materialmente la *litis* principal, las otras partes están facultadas para oponerle las excepciones previas de falta de personalidad en lo que a él se refiere, o en sus procuradores o apoderados y la de defecto legal en el modo de proponer la demanda, (art. 84 inc. 2.º y 4.º cód. de proc. civ.).

No procede la excepción de incompetencia porque la jurisdicción del juez ha quedado definitivamente fijada en los autos principales; ni la de *litis pendencia*, porque también atañe exclusivamente a éstos; ni la de arraigo del juicio porque el tercerista ha sido obligado a deducir su acción y no hace más que resistir a las persecuciones de que es objeto, (Manual t. 3, p. 53).

VI. — La ley ha fijado una limitación en el tiempo para deducir las tercerías: en la de dominio, desde la traba del embargo hasta la transmisión de los bienes; y en la de mejor derecho, hasta el pago que se haga al acreedor. (Conf. Reus, op. cit., t. 3, p. 489; sup. cort. nac., t. 13, p. 269).

Es claro que el dueño de los bienes embargados que no dedujo tercería, podrá reclamarlos del adquirente en juicio ordinario y de acuerdo con los principios generales.

2.º—Si la tercería fuese de mejor derecho, el juicio ejecutivo seguirá hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta que se decida quien tiene mejor derecho (art. 531 cód. cit., y sup. cort. nac., t. 99, p. 214).

Cuando se trata de tercería de dominio, consentida o ejecutoriada que sea la sentencia de remate, se suspenderán los procedimientos del juicio ejecutivo hasta que se decida aquella.

a) En la tercería de dominio, el tercerista en su calidad de actor, está obligado a probar que los bienes embargados pertenecen a su patrimonio, o se hallaba en posesión de ellos, (sup. cort. nac., t. 71, p. 260; t. 74, p. 316).

b) En la tercería de mejor derecho sólo puede discutirse un privilegio especial, (hipoteca o prenda, por ejemplo), pues la acción del tercerista tiende a obtener que se declare que debe pagársele a él ante que a otro u otros acreedores. Los privilegios ge-

nerales no pueden hacerse valer en el juicio de tercería, y en cuanto a los acreedores quirografarios, tampoco tienen derecho a deducir tercerías, desde que el primer embargante debe ser pagado con preferencia, salvo el caso de concurso, (Manual t. 3, p. 281; Vázquez Acevedo, op. cit. p. 118) (1).

3.º — Además de lo que ya hemos dicho, debe tenerse presente que cualquiera que sea la clase de tercería deducida, debe substanciar con el ejecutante y ejecutado; que su deducción constituye fundamento bastante para que se amplie y mejore el embargo si el actor lo solicitase; que cuando resulte probada la connivencia del tercer opositor, con el ejecutado, el juez podrá aplicar la pena de detención por el término de tres a seis meses, sin perjuicio de las acciones criminales a que hubiere lugar, (art. 532, 533 y 534 cód. de proc. civ.).



## DESALOJO (a)

1.º *Cosas que pueden ser materia del juicio.* — 2.º *Personas a quienes se acuerda la acción de desalojo.* — 3.º *Juez competente para conocer en la misma.* — 4.º *Procedimiento.*

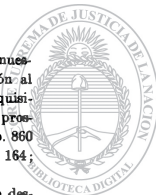
1.º No obstante que la locación puede tener por objeto cosas muebles no fungibles y las raíces sin excepción, (art. 1480 cód. civ.) nuestras leyes acuerdan la acción de desalojo solamente en lo que se refiere a éstas últimas (arg. de los art. 588, 589 cód. proc. civ.).

2.º — La acción de desalojo se acuerda: 1.º al locador; 2.º al locatario que a su vez ha dado en arrendamiento el todo o parte de la cosa. (1)

(a) Sobre desalojo véase **Caravantes**, «Procedimientos judiciales», t. 3, p. 209, edic. Madrid de 1858; **De la Collina**, «Derecho y legislación procesal», t. 2, p. 242, 2.º edic.; **De la Eña**, «Enjuiciamiento civil», t. 3, p. 377; **H. Gómez de la Serna**, «Motivos de las variaciones principales introducidas en los procedimientos de la ley de enjuiciamiento civil», p. 137, edic. de Madrid, de 1857; **Jurisprudencia Argentina**, t. 1, p. 49, 75, 145; t. 2, p. 75, 161; t. 3, p. 577, 646, 776, 784, 800, 1088; t. 4, p. 15, 259, 475, 476, 503; t. 5, p. 227, 368, 493, 527; t. 6, p. 292, 305, 674; t. 7, p. 288, 461; t. 8, p. 29, 153, 303; **Manresa y Navarro**, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 6, p. 5; **Manresa y Bou**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 514, Madrid 1861; **Rodríguez**, «Comentario al código de procedimientos», t. 3, p. 65; edic. de Barcelona, 1915.

(1) El cód. de proc. civ. en su art. 586, dice: «Interpuesta la demanda por el propietario...»; y luego agrega: «no existiendo contrato, etc.» Se ve claro en el lenguaje empleado por el código, la influencia de la ley de la provincia de Buenos Aires, de agosto 28 de 1825, en la cual se establecía «que en todos los inquilinatos de casas, cuartos, tiendas, etc., si no fueran contratados por escrito, el inquilino no tendría derecho a resistir el desalojo del propietario, o, cualquiera que fuere la causa que alegase para pedirle la finca». **Prado y Rojas**, «Leyes, etc.» t.





Para la procedencia de la acción es menester que se demuestre por quien la deduce el carácter de locador con relación al demandado, es decir, al locatario, el interés y los demás requisitos de la acción. Si falta alguno de ellos, la acción no puede prosperar (Manual t. 3, p. 29; JURISPRUDENCIA ARGENTINA t. 3, p. 860 sup. cort. nac. t. 108, p. 85; cárm. civ. t. 77, p. 364; t. 141, p. 164; Gaceta del foro, mayo y junio de 1922, p. 268).

El locatario que ha contratado con el locador no puede desconocer los derechos de éste, pretendiendo que no es propietario de la cosa sobre que versó la convención.

Cuando la demanda se funda en la falta de pago (1) del alquiler procede la aplicación de las reglas del juicio sumario de desalojo, haya o no cláusula resolutoria en el contrato de término no vencido, sin que sea necesaria la rescisión previa en el juicio ordinario. (Véase voto del doctor Salvat, en JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 6, p. 674, sentencia de las cámaras en pleno).

Existen contratos que no son de locación, por más que se le parezcan y en los cuales, en nuestro concepto, no procede el juicio de desalojo (nota del doctor Vélez al art. 1493 cód. civ.). Uno de ellos tiene mucha semejanza con el de locación y ha llegado a confundirse con éste: nos referimos a la aparcería o colonato parciario. El contrato por el cual una de las partes entrega a la otra un campo destinado a la agricultura bajo la condición de que ésta le dé el tanto por ciento de la cosecha, es de aparcería y no de locación (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 137; sup. cort. nac. t. 43, p. 198).

«El propietario pone en común por su parte el goce de sus tierras y suministra ordinariamente el ganado; el colono aporta por la suya su trabajo, su industria y sus cuidados»... «El colonato parciario es sobre todo una sociedad y pienso que ese carác-

3, p. 87. Como se ve, el legislador protegía desmedidamente al propietario y dejaba en desamparo al inquilino que careciere de contrato escrito.

(1) Una vez vencido el término del contrato de locación, puede el locador negarse a recibir el precio del mismo y solicitar el desalojo no obstante la consignación hecha por el locatario (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 6, p. 292). Puede además el locador reclamar en juicio ordinario los daños y perjuicios que le haya ocasionado la ocupación de la cosa, fuera de los términos del contrato.



ter resulta para quien pese con imparcialidad los elementos del contrato» (*Troplong, Du louage*, art. 637).

En tales casos no procede el juicio de desalojo. La cám. civ. 1.<sup>a</sup> ha resuelto lo contrario sosteniendo que el juicio de desalojo no está limitado en su aplicación al contrato perfecto que define el art. 1594 del cód. civ. y procede contra el mero tenedor que se niega a devolverla a su legítimo propietario o poseedor una vez vencido el plazo fijado como término de duración de la convención en cuya virtud le fué entregada. De no ser así, agrega la cámara, el código no habría empleado las palabras propietario y renta, etc (Gaceta del foro, julio y agosto de 1922, p. 221).

La cámara ha sido inducida en error por el desconocimiento de la ley de 1825 que hemos citado con anterioridad y que explica el alcance de las disposiciones de nuestro cód. de proc.

3.º — Sobre competencia en el juicio de desalojo, véase Manual, t. 3. p. 334, 402. Agregaremos que una vez vencido el contrato de locación, si éste ha continuado bajo las mismas condiciones, debe considerarse como un contrato sin plazo que no es de la competencia de la justicia de paz. (Gaceta del foro, enero y febrero de 1923, p. 178).

4.º — Interpuesta la demanda de desalojo, el juez debe decretar un comparendo para oír (1) a las partes sobre lo que expongan respecto de la existencia o inexistencia del contrato y otras circunstancias, levantándose de todo un acta detallada (art. 586 cód. proc. civ.). Si el demandado no asistiere al comparendo mencionado se decretará éste por segunda vez, previniéndole que tendrá lugar con la presencia del compareciente y que se pasará por lo que él exponga; prevención que se hará efectiva llegado el caso (art. 587 cód. cit.; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 6, p. 305).

No existiendo contrato (escrito) se dará para el desalojo el

---

(1) En la audiencia las partes deben oponer todas las excepciones de fondo y forma que les asistan, para que sean resueltas en un fallo único. La excepción de incompetencia de jurisdicción no constituye excepción a la regla. En la misma audiencia o en las sucesivas debe recibirse la prueba si ella es pertinente, cám. civ., t. 118, p. 44. No procede sin embargo, el término extraordinario por tratarse de un juicio sumario que quedaría desnaturalizado si se admitiere dicho trámite, Gaceta del foro, marzo y abril de 1922, p. 161.



término que acuerda el cód. civ. (1) teniendo en consideración la naturaleza del predio arrendado. Vencido ese término, se decretará el lanzamiento inmediato por intermedio de la fuerza pública (art. 588 cód. proc. civ.). La consignación no paraliza el juicio de desalojo, ni procede que se acumulen ambos (Gaceta del foro, marzo y abril de 1922, p. 42; id. julio y agosto del mismo año, p. 109).

Si existe contrato pero de término ya vencido, se decretará el lanzamiento en la misma forma, pudiendo el juez en este caso según las circunstancias, acordar un plazo que nunca podrá exceder de 10 días (art. 589 cód. cit.). ¿Desde cuándo corre el término de 10 días? La jurisprudencia ha declarado, erróneamente en nuestro concepto, que desde la fecha de la sentencia de primera instancia que lo fijó y no desde aquella en que fué confirmada por el superior (Gaceta del foro, noviembre y diciembre de 1916, p. 182).

---

(1) La ley núm. 11.122 de 11 de mayo de 1921 introdujo importantes modificaciones con relación al juicio de desalojo y la núm. 11.156 de 19 de septiembre del mismo año, modificó los plazos fijados en el cód. civ. y otras disposiciones del mismo.

La ley modificatoria de la ley de justicia de paz y del cód. de proc. de la capital núm. 11.122 estatuyó en su art. 1.º: «En los juicios de desalojamiento, el actor y el demandado deberán manifestar si en la casa, pieza o departamento locado, existen o no subinquilinos. En el primer supuesto, el juez de oficio, dará a estos conocimientos de la demanda entablada al inquilino principal, dentro del término de 48 horas de interpuesta, sin que ello importe tenerlos por parte en el juicio. La sentencia de desalojamiento se hará conocer a los subinquilinos por cédula y el término acordado para el desalojamiento al inquilino principal, empezará a contarse para todos desde el día siguiente de la notificación a los subinquilinos».

Por su parte la ley núm. 11.156 modificó los arts. 1504, 1509, 1583, y 1610, cód. civ. que deben tenerse en cuenta en los juicios de desalojo y estatuyó en su art. 4.º: «Los locatarios que no hagan constar en los contratos de subarriendo, o en su defecto, en los recibos que otorguen a los sublocatarios el nombre del locador y el precio del arriendo originario, o que cobren más del 20 por ciento sobre este precio, sufrirán una multa igual al décuplo del exceso de alquiler indebidamente percibido. El producido de estas multas ingresará al consejo nacional o a los consejos provinciales de educación, quienes tendrán personería para exigir su aplicación y cobros».

Interpretando esta ley la cárm. civ. 1.ª ha declarado que cuando surge en el juicio de desalojo una cuestión sobre cambio de destino de la casa o subarriendo prohibido, debe ventilarse en juicio ordinario (Gaceta del foro, julio y agosto de 1922, p. 151).

Si en el comparendo el demandado exhibiese contrato que fuese tachado de falso por el propietario, se recibirá la causa a prueba en juicio ordinario. Probada la falsedad del contrato, el juez, al sentenciar, pondrá la persona del condenado a disposición del juez de instrucción, enviándole los antecedentes necesarios para la formación de la causa (art. 590 cód. cit.). (1)

Pedido el desalojo por falta de pago de dos o más períodos consecutivos de rentas, se procederá en la forma ya indicada y el lanzamiento se decretará concediendo un plazo que nunca puede exceder de 10 días (art. 591 cód. cit.).

Pueden presentarse varias situaciones que conviene aclarar: 1.º el juicio se ha seguido contra el locador principal, no obstante que existan sublocatarios. La sentencia puede oponerse a éstos, siempre que se hayan cumplido las condiciones de la ley núm. 11.122. Sobre el estado de la cuestión antes de esa ley, véase Manual, t. 3, p. 102, 104. 2.º El ocupante de la tierra es un tercero que no tiene nada que hacer con el locatario. La sentencia dictada contra éste no puede oponérsele y si se le quiere desalojar, puede hacer valer sus derechos por medio de un interdicto o en otra forma legal (Gaceta del foro, enero y febrero de 1922, p. 216; id. mayo y junio del mismo año, p. 71 y 173). Los denunciados como subinquilinos que pretenden ser inquilinos principales y que, como tales, han hecho juicio de consignación en pago, tienen personería para solicitar la suspensión de los efectos de la sentencia de desalojo hasta tanto se resuelva el carácter que invisten (Gaceta del foro, septiembre y octubre de 1922, p. 276).

Sólo es apelable en el juicio de desalojo la resolución que se

---

(1) Presupone el juicio de desalojo la existencia de un contrato de locación. Sin embargo, a veces nuestros tribunales han decidido que la negativa de la existencia de la locación no basta para ordenar el juicio, cárn. civ. t. 118, p. 44; y, en contra: mismo tribunal, t. 77, p. 364; t. 141, p. 164. Nos parece más arreglada la doctrina de que el desalojamiento no puede prosperar, cuando el demandado niega la calidad de locatario y el demandante mismo no pretende que exista contrato (escrito o no escrito, naturalmente) sup. cort. nac. t. 108, p. 85.

Algo análogo ocurre en el juicio ejecutivo por cobro de alquileres. El art. 466 cód. proc. civ. establece que para la preparación de la acción ejecutiva, se pedirá que el demandado manifieste previamente si es locatario y, en caso afirmativo, que exhiba el último recibo. Si el demandado niega el carácter de inquilino, la acción no puede prosperar, Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 867 y t. 2, p. 426.



dicte cuando se tacha de falso el contrato (art. 592 cód. cit.).

Esta restricción no contraría el principio constitucional de la defensa en juicio, que no depende del número de instancias que se acuerda a los litigantes (JUBISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 145).





### JUICIO DE JACTANCIA (a)

1.º Principios generales. — 2.º Requisitos de la acción: a) alabanza fuera de juicio; b) cosas sobre que recae la acción; c) capacidad del autor del hecho; d) término para deducir la acción. — 3.º Competencia. — 4.º Requisitos formales de la demanda. — 5.º Procedimiento. — 6.º Acciones excluidas.

1.º — Hay acciones que tienen por objeto el mero reconocimiento sin que haya interés actual en obtener la sentencia condenatoria. Tal ocurre, por ejemplo, en la filiación, (art. 325 del cód. civ.); en la información *ad perpetuam*; en la jactancia y en otros casos análogos, (art. 68, 425 cód. proc. civ.).

La acción de jactancia se acuerda contra cualquier persona capaz de ser demandada y que fuera de juicio se hubiera atribuido derechos propios a bienes que constituyen el patrimonio de otro, (art. 425 cit.).

Por extensión de un texto romano, (ley 5, cód. de *ingenuis et manumiss*) los glosadores y post-glosadores llegaron a la creación de la acción de jactancia, que garantiza no sólo derechos actuales sino también derechos eventuales y futuros, (Mancini, op. cit., vol. 2, p. 100).

(a) Chiovenda, «Principii di diritto processuale civile» p. 165, 167, 168, 174.; Escribá, «Diccionario de legislación y jurisprudencia»; verbo Jactancia; Galante, «Diritto processuale civile», t. 1, p. 227; Jurisprudencia Argentina, t. 8, p. 44, 441; Mancini, Pisanelli y Scialoja, «Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi», volumen 2, parte 2.ª p. 97; Merlin, «Repertoire», verbo Diffamare; Mortara, «Commentario», t. 2, p. 567; Pérez y López, «Teatro de la legislación», t. 10, p. 222; Windscheid, «Dritto delle Pandette», t. 1, p. 1177.





La institución es de origen germánico, bajo disfraz romano, (Chiovenda, op. cit. p. 168).

2.º — Para la procedencia de la acción de jactancia es necesario que concurren varios requisitos:

a) Que alguien se haya atribuido fuera de juicio, derechos propios que constituyen el patrimonio de otro, (art. 425 cód. cit.).

Es claro que no originan la acción de jactancia los actos materiales que tiendan a turbar la posesión o a despojar de ella a una persona, porque entonces podrá ésta recurrir a otros medios legales para proteger su derecho.

Los bienes del patrimonio sobre los cuales recae la jactancia deben ser claramente determinados, (cám. civ., t. 42, p. 295), pues, de otra manera no sería posible que el jactancioso dedujese la acción correspondiente, (art. 428 cód. cit.).

Las afirmaciones que se hacen en los pleitos no pueden motivar la acción de jactancia, pues, la ley quiere que sean hechas fuera de los mismos.

«Juicio es un acto legítimo que se ejerce por dos o más personas ante un juez sobre una cosa; o mas bien, la discusión legítima entre actor y reo ante un juez competente para determinar o sobre un derecho o castigar un delito». (1) Aquello que se dice ante los tribunales se propone la defensa de los derechos litigiosos que dirimirá el magistrado en el fallo, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA: t. 2, p. 59; cám. civ., t. 13, p. 49; t. 59, p. 323; t. 64, p. 299).

b) Las cosas sobre las cuales debe recaer la pretensión del jactancioso son aquellas que pertenecen al patrimonio de otro. Del concepto que hemos dado al patrimonio (Manual, t. 4, p. 19) se deduce que si alguien se atribuye un estado civil que no le corresponde no procede acción de jactancia, aunque pueda surgir acción penal o civil por indemnización de daños y perjuicios, (cám. civ., t. 119, p. 437; Galante, op. cit., t. 1, p. 232; Mancini, op. cit. vol. 2, p. 111; Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*, t. 1, núm. 61 y sigs.).

Se equivoca la jurisprudencia al decir: que la acción de jactancia sólo se refiere a derechos reales, que son los únicos que

(1) Febrero, t. 3, p. 537; Castro, núm. 1, p. 1, *passim*; *Escriche*, verbo «Juicio», cám. civ. t. 9, p. 176.



pueden sufrir trastornos o perjuicios a mérito de las pretensiones formuladas sobre los mismos, (cám. civ., t. 152, p. 284; t. 156, p. 392). Si *Primus* se pretende acreedor de *Ticio* es claro que se atribuye derechos sobre el patrimonio de éste, (sup. cort. nac. t. 64, p. 89; cám. civ., t. 104, p. 349; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 894). Y eso es justamente lo que la ley exige.

La jactancia es necesario que verse sobre el patrimonio ajeno. Alguien se pretende acreedor y en tal caso bastará que exprese que es cierto el hecho para que se le imponga la obligación de accionar. Otras veces las cosas aparecen más complicadas: sostengo que soy poseedor de un inmueble; si se me demanda por jactancia el actor debe probar que mi afirmación es falsa es decir que no soy poseedor para que yo pueda ser obligado a entablar la acción correspondiente, (cám. civ., t. 23, p. 269).

La prueba del dominio que pretendiese hacer el demandado por jactancia sería impertinente. La cám. civ., (t. 40, p. 368) ha podido decir con verdad, «que el juicio de jactancia, a la manera de las acciones posesorias o de los interdictos, se propone salvaguardar los derechos inherentes a la posesión, no permitiendo que nadie se haga justicia por sí mismo, y pueda hacer perder al poseedor las ventajas de su situación de derecho por medio de ardis, que lo coloquen en la posición desfavorable de demandante, cuando como poseedor tiene derecho de ampararse en su posesión y exigir que el que intenta alguna acción contra él haya de asumir forzosamente el carácter de actor. Por eso dispone el art. 428 del cód. de proc. civil que si aquel contra quien se dirige la jactancia reconociese la verdad de lo expuesto o se negare a hacer manifestación, o la hiciere ambigualmente, el juez le ordenará que dentro de diez días entable la acción que surge de los hechos expuestos. Se comprende que sería obligar al poseedor a asumir el rol de actor si se le exigiera desde luego la prueba de su dominio cuando esa exigencia no tuviera más fundamentos que el de atribuirse cualesquiera, fuera de juicio, derechos a la misma propiedad de que aquel disfruta. Si el que ha perdido la posesión sólo puede recuperarla por medio de la reivindicación, y si el que goza de posesión tiene interdictos para conservarse ante todo en ella, cualquiera que sea el derecho de dominio del que



pretende turbarla, el que por actos extrajudiciales se ve molestado en su derecho, puede obligar al perturbador, por medio de una acción de jactancia, a retractarse o a deducir las acciones que le competan sobre los bienes que pretende suyos, para que la justicia se pronuncie sobre esas pretensiones. Y basta poner de manifiesto este propósito de la acción de jactancia, para no insistir en la demostración de la verdadera anomalía en que se incurriría si para hacer uso del derecho de no ser molestado en la posesión de que se goza, fuera necesario empezar por probar el dominio. Lo contrario nos llevaría al absurdo de que en manos de cualquiera estuviera obligar a los poseedores, por medio del procedimiento antes invocado, a descubrir el origen y el título de su posesión sin estar sometidos a una necesidad jurídica de hacerlo, y contra el precepto del art. 2363 del cód. civ.» (Véase además cám. civ., t. 23, p. 262, cons. tercero). Solamente por un desconocimiento de las reglas que gobiernan esta acción ha podido negarse la prueba sobre la posesión, (cám. civ., t. 145, p. 107).

c) Es menester para la procedencia de la acción, que el jactancioso sea persona capaz de estar en juicio personalmente. (Manual, t. 3, p. 100). Es en este sentido que deben entenderse las palabras, «capaz de ser demandado», pues, un loco o un menor, no pueden válidamente atribuirse derechos sobre el ajeno patrimonio; pero pueden ser demandados.

d) La acción debe deducirse dentro de los seis meses a contar desde los hechos o dichos que le sirven de base, (art. 432. cód. proc. civ.).

Se trata de un requisito de la acción que debe probar el demandante.

3.º — Ni en la acción de jactancia, ni en la que se deduzca por el jactancioso cuando se hace lugar a aquella, encontramos motivo atendible para que sufran modificaciones los principios generales que rigen en materia de competencia. (1).

(1) La opinión de los antiguos prácticos no fué uniforme sobre esta cuestión. Querían unos que fuese juez competente el del fuero del demandante; otros que se pusiese a elección de éste elegir su domicilio o el del jactancioso; aquellos que se respetasen las reglas generales, desde que el actor es siempre el que instaura el juicio y no el que es llamado al mismo. Finalmente, una última opinión consideraba que hay dos juicios



En el juicio que nos ocupa existen dos acciones: la una fundada en la jactancia; la otra cuando el jactancioso es obligado a demandar. En la primera el actor debe seguir el fuero del reo, por tratarse de una acción personal, en la segunda se observarán las reglas que correspondan, según la naturaleza de la acción que puede ser real o personal. (1)

Los argumentos en contra deducidos por la jurisprudencia y por el doctor Gerónimo Cortés, no son admisibles, pues, se fundan principalmente en el hecho de tratarse de una acción penal, carácter que le negamos, (cám. civ., t. 11, p. 453). Cualquiera que sea la opinión de los autores que se citan en el dictamen recordado, carecen de valor ante los textos expresos de nuestra ley. Es claro que en ambas acciones actor es el que introduce la demanda respectiva, y que a él le incumbe el peso de la prueba. Demandado es en el primer juicio el jactancioso y en el segundo el poseedor de los bienes. (Conf. Chiovenda, op. cit., p. 174).

4.º— La demanda de jactancia debe contener: el nombre y domicilio del actor; el nombre y domicilio de aquel contra quien se dirige; la enunciación de la jactancia, con expresión indispensable de su época y lugar, como de los medios, por los que ha llegado a conocimiento del actor; la petición para que el jactancioso manifieste o niegue la exactitud del hecho imputado, (art. 426, cód. proc. civ.).

5.º— El procedimiento es claro y breve.

El juez competente que reciba el pedido, ordenará que aquel contra quien se dirige, manifieste si es o no cierta la exposición, aceptando la verdad de lo expuesto en sus puntos principales, o bien negando, bajo juramento, la versión que se le atribuye.

---

distintos en el procedimiento de jactancia: el uno fundado sobre el hecho de la jactancia y que se propone hacer declarar la obligación del difamador de deducir la acción de que se había alabado, bajo pena de perpetuo silencio; y el otro en el que esta acción realmente se deduce. Y como en los dos juicios cambian, por completo, su papel el actor y el reo, los partidarios de esta opinión pensaban que en el juicio de jactancia correspondía conocer a dos tribunales distintos, siempre que no fuere el mismo el fuero de ambas partes, (V. Mancini, op. cit., vol. 2, p. 103 y nota de la pág. 104). Esta es la doctrina que más se ajusta a nuestros textos legales.

(1) Véase Mancini, op. cit., vol. 2, p. 104 y sentencia del senado de Turin de marzo 10 de 1824, citado por aquel.



buje. El secretario que reciba esa manifestación sentará por escrito la diligencia, firmándola con el que la hace o dos testigos si no lo supiere o pudiere hacer, y autorizándola indistintamente, (art. 427, cód. cit.).

Si aquel contra quien se dirige la jactancia se negare a hacer la manifestación, la hiciere ambiguamente o reconociere la verdad de lo expuesto, el juez ordenará que dentro de diez días contable la acción que surge de los hechos expuestos, bajo apercibimiento que de no hacerlo, caducará todo el derecho pretendido y será condenado en las costas. Vencidos los diez días sin haberse deducido la acción, la parte podrá pedir la efectividad del apercibimiento, (art. 428, cód. cit.).

Si se hubiere negado bajo juramento la jactancia atribuida, se mandará entregar las actuaciones al que las ha iniciado, sin otra tramitación, (art. 429, cód. cit.).

6.º— Las declaraciones sobre jactancia no comprenden ni los hechos que no han sido materia del procedimiento, ni los que posteriormente hubiesen llegado a conocimiento del que ha sufrido la acción, (art. 430 cód. cit.).

La acción de jactancia no enerva ni afecta las acciones legítimas que se tuvieren, por perjuicios, u otras análogas, (art. 431 cód. cit.).

**ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS (a)**

1.° Principios generales. — 2.° Competencia. — 3.° Requisitos de la acción. — 4.° Sentencia y recursos. — 5.° Juicio ordinario para reverter lo decidido en el sumario. — 6.° Litis expensas.

1.° Los parientes dentro de cierto grado se deben mutuamente alimentos y en el orden establecido por la ley, (art. 367, 368, 369 y 373 del cód. civ.).

(a) **Baldi**, «Manuale pratico di diritto civile», t. 1, p. 127, Torino, 1918; **Bevilacqua**, «Código Civil dos Estados Unidos do Brazil (comentado)», t. 2, p. 583, Río de Janeiro, 1917; id., «Direito da familia», p. 520, párr. 78; 3.ª edic., id., «Direito da familia», p. 493, edic. Recife, 1896; **Bianchi**, «Corso di codice civile italiano», t. 5, 2.ª parte, p. 408, n.279; 2.ª edic. Torino; **Bonel y Sánchez**, «Código civil español comentado y concordados», t. 1, p. 140, 214, 232, 251, 266, 296, 423; t. 3, p. 470, 480, 509, 697; t. 4, p. 144, 817 y 837, Barcelona, 1691; **Cabrerotto**, en el «Digesto Italiano», t. 2, p. 2, verb. alimenti, Torino, 1863; **Caravantes**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 5, p. 209; Madrid, 1858; **Chironi**, «Elementi di diritto civile», p. 289, Milano, 1914; id., «Istituzioni di diritto civile italiano», t. 2, p. 331, párr. 435, Torino, 1889; **Colmo**, «De las obligaciones en general», p. 556, núm. 804, p. 660, núm. 955, p. 697, núm. 1029, Buenos Aires, 1920; **Collin et Capitani**, «Cours élémentaire de droit civil français», t. 2, p. 69 y 119, París, 1915; **Collet**, «De l'obligation alimentaire entre époux» (thèse), París 1919; **De la Collina**, «Derecho y legislación procesal», t. 2, p. 248, 2.ª edic.; **De la Húa**, «Comentario a la ley de enjuiciamiento civil», t. 3, p. 374, Madrid, 1856; **Fornari**, «Dell'obbligo degli alimenti», Napoli, 1902; **Gómez de la Serna**, «Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil», p. 216, Madrid, 1857; **Hurtado**, «Derechos y obligaciones de los parientes. Deuda alimenticia», tesis, Buenos Aires, 1874; **Jurisprudencia Argentina**, t. 1, ps. 51, 173, 460, 661, 674, 714, 721; t. 2, ps. 265, 387, 442, 444, 460, 755; t. 3, ps. 143, 226, 229, 391, 530, 674, 721, 735, 832, 943, 969, 990, 1102; t. 4, ps. 164, 184, 260, 273, 283, 355, 358, 486, 501 y 505; t. 5, ps. 59, 247, 361, 536, 618; t. 6, ps. 91, 147, 225, 296, 299, 427, 470, 604, 620, 642; t. 7, ps. 22, 28, 142, 151, 444, 462, 528;





La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades, (art. 372, cód. civ.; JURISPRUDENCIA ARGENTINA t. 2, p. 265).

La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada con obligación alguna, ni ser objeto de transacción; ni el derecho a los alimentos puede renunciarse ni transferirse por acto entre vivos o muerte del acreedor o deudor de alimentos, ni constituir a terceros derecho alguno sobre la suma que se destine a los alimentos, ni ser esta embargada por deuda alguna, (art. 374 cód. civ.).

2.º La acción para la prestación de alimentos se encuentra sometida a las reglas generales que gobiernan las acciones personales y en consecuencia, es juez competente para conocer de ella, generalmente, el del domicilio del demandado. (1) Solamente por excepción se pueden aplicar reglas distintas, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA t. 2, p. 387; sup. corte nacional, t. 102, p. 425; t. 124, p. 195; cám. civ., t. 7, p. 589). En cuanto a la acción ordinaria debe tramitarse ante el mismo juez que conoció del juicio sumario, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA t. 1, p. 460; t. 3, ps. 735, 943).

3.º Son requisitos para la procedencia de la acción:

I. Las justificación del título en cuya virtud se pide alimentos, (art. 602, inc. 1.º cód. proc. civ.) Quiere decir entonces,

---

t. 8, p. 151; **Moreno, J. M.** «Puede ser compelido el alimentado a recibir alimentos en la casa habitación del que se los debe suministrar» (Rev. de legislación y Jurisprudencia, t. 4, p. 361; **Ortiz de Zubiga**, «Práctica general forense», t. 1, p. 760, 6.ª edic.; **Flanhol**, «Traité élémentaire de droit civil», t. 1, p. 229, núm. 658 y s.; p. 293, núm. 904, p. 394, núm. 1258; p. 413, núm. 1336; p. 418, núm. 1361; p. 464, núm. 1499; p. 516, núm. 1680; t. 2, p. 119, núm. 344; p. 186, núm. 578; t. 941, núm. 3135; t. 3, p. 154, núm. 1152, París, 1918, 7.ª edic.; **Reus**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 3, p. 553, Madrid, 1881; **Rodríguez**, «Comentarios al cód. de proc.», t. 3, p. 93; **Roesel y Mentha**, «Manual du droit civil suisse», t. 1, p. 221, 381, 387; t. 3, p. 164, Lausanna; **Simoncelli**, «Istituzioni di diritto privato italiano», p. 500, Roma, 1917; **Zachario-Crome**, trad. **Barassi**, «Manuale di diritto civile francese», t. 2, p. 221 y 494, Milano, 1907.

(1) Véase sobre los hijos de familia ausentes de la casa de sus padres, Manual, t. 1, p. 332; sobre la mujer casada, id. t. 1, p. 329, 332.





que el que los solicita ha de comprobar el vínculo de parentesco con el alimentario. (1)

II. La comprobación, aproximada por lo menos, del caudal del que debe darlos, (art. 602, inc. 2.º cód. cit.).

III. La prueba de que al solicitante le faltan los medios para alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuere la causa que lo hubiera reducido a tal estado, (art. 370 cód. civ.).

«La situación legal de la esposa, después de dictada la sentencia que declara el divorcio por su culpa, no es la misma que existía ante de ese momento. Su derecho a solicitar alimentos no emerge ya del principio general que rige la materia, sino del art. 80 de la ley de matrimonio civil, el cual sólo confiere al cónyuge culpable el derecho de reclamarle alimentos al esposo inocente cuando le fueren de toda necesidad. Y esta circunstancia es un extremo cuya prueba incumbe a quien los solicita». (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 5, p. 361).

La prueba de estos extremos puede hacerse por medio de documentos, de información sumaria de testigos, sin citación ni otra solemnidad o por posiciones que se pongan al que debe dar los alimentos, (art. 603, cód. de proc. civ.). Aún la paternidad puede probarse en tal forma, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 4, p. 355).

No se admitirá en el juicio sumario sobre alimentos, discusión alguna sobre el derecho a percibirlos, ni sobre su entidad. Cualquier reclamación sobre el particular deberá ventilarse en juicio ordinario, debiendo entre tanto suministrarse los alimentos provisorios señalados, (art. 607, cód. de proc. civ.).

4.º— Si en vista de dichas pruebas estimase el juez que la solicitud es procedente, debe acceder a ella, señalando la cantidad que crea justa y equitativa atendiendo a las circunstancias del caso, mandándola abonar siempre por meses anticipados, (art.

---

(1) La mujer que demanda por alimentos a su marido, debe probar en forma sumaria que éste falta a sus obligaciones legales, (Jurisprudencia Argentina, t. 4, p. 260). Si en un juicio contradictorio preexistente se ha negado en forma absoluta el vínculo de parentesco, no procede la información sumaria para justificarlo a los efectos del derecho alimenticio, (id., t. 6, p. 642).



604 cód. cit.). (1) De la sentencia que decreta la prestación de alimentos, no se admitirá recurso alguno con efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos podrá ser obligado a prestar fianza o caución alguna de volver lo recibido, si la sentencia fuese revocada, (art. 376 cód. civ.).

Si el juez niega la prestación de alimentos. (2), procederá la apelación en ambos efectos, e interpuesta, se remitirá el expediente al superior, con citación sólo del que lo haya promovido; pero, si por el contrario, se conceden los alimentos, no se admitirá dicho recurso más que en un solo efecto e interpuesto, se sacará testimonio de la sentencia, reservándose en el juzgado para su ejecución y remitiéndose en seguida los autos al tribunal con citación de ambas partes, (art. 605 cód. proc. civ.).

5.º — Terminado el juicio de alimentos puede reverse lo que en el se ha decidido, iniciando el juicio ordinario, donde ambas partes discutirán sus derechos, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 7, p. 142). Sin embargo, en este corresponde la prueba al actor. La razón es porque pretende innovar una situación creada, (cám. civ., t. 4, p. 326).

La sentencia del juicio ordinario rige para lo futuro y produce sus efectos sólo desde que se dicta, sin que tenga influencia sobre las cuotas adeudadas en el juicio sumario de alimento, ni en las percibidas, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 143).

6.º — Las mismas personas que tienen derecho a ser alimentadas, pueden pedir litis-expensas a fin de poder seguir los juicios que entre ellas se originen, (art. 376, 1295 cód. civ. y 68 ley de matr. civ.). Los trámites de este juicio son los indicados para la acción sobre alimentos. Sin embargo, debe tenerse presente que

(1) La pensión alimenticia debe abonarse desde el día de la demanda. (Jurisprudencia Argentina, t. 3, p. 229). Es la buena doctrina no sólo por el efecto de la sentencia, sino por la naturaleza del juicio. Véase en contra, cám. civ., t. 107, p. 385, donde se dijo, que «la pensión alimenticia es obligatoria desde la fecha del auto que la concede»; en el tomo 148, p. 201 se adoptó idéntica decisión. En los tomos 163, p. 129 y t. 176, p. 322 se resolvió que si la sentencia no determina desde qué fecha debe regir el aumento de la pensión alimenticia, se entiende desde el pronunciamiento.

(2) La negativa puede fundarse en que la mujer no ha querido habitar en el mismo lugar que su marido. (Jurisprudencia Argentina, t. 3, p. 226).

en el juicio de alimentos no procede fijar cantidades para litis-expensas, por cuanto estas las soporta el marido o la sociedad conyugal o el padre, etc. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 173, con nota del profesor Prayones donde se citan varias decisiones de nuestros tribunales; id. t. 3, p. 721).

La fijación de una cantidad para litis expensas tiene carácter provisional y si las costas del juicio exceden a aquella debe abonarse el resto. En el juicio de alimentos carece de razón de ser la fijación de una cantidad en concepto de litis expensas del mismo juicio, siendo de rigor la imposición de costas al demandado, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 721).



(Conclusión)

## INTERDIOCIÓN (a)

1.º *Reglas a aplicar.*— 2.º *Juez competente.*— 3.º *Personas que puedan solicitar la declaración de demencia.*— 4.º *Curador provisorio.*— 5.º *Examen del denunciado como insano.*— 6.º *Sentencia.*

1.º— Nuestra ley de forma ha omitido sentar reglas sobre el procedimiento a seguirse para declarar la insania de una persona, quizá porque en las leyes de fondo se ha legislado el caso.

(1) Las reglas que deben aplicarse, aun respecto de la prueba pe-

---

(a) **Ayerza**, «Del juicio de ensanía». *Rev. jurídica*, 1917, p. 48; **Baldi**, «Manuale pratico di diritto civile», t. 1, p. 899; **Chemot A.**, «Etude juridique et critique sur la condition civile des aliénés»; **Collin et Capitant**, «Droit civil français», t. 1, p. 572, 3.ª edic.; **De la Colla**, «Derecho y legislación procesal», t. 2, p. 364, 2.ª edic.; **Ferrara Luigi**, «Saggi di diritto processuale civile», p. 199; *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 455, 868; t. 3, p. 242; t. 4, p. 488, 502; t. 5, p. 237, 525; t. 7, p. 128; **Manresa y Navarro**, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 6, p. 107, Madrid, 1889; **Salvat**, «Tratado de derecho civil argentino, (parte general)», p. 229, a., 236, 248, 1.ª edic., Buenos Aires, 1917.

(1) El código de proc. civil de la provincia de Buenos Aires establece las siguientes reglas:

«Art. 784: Las personas designadas en el art. 144 del cód. civ. que promuevan el juicio de insanía, deberán presentarse por escrito ante el juez competente, exponiendo los hechos en que se funde la demanda, los medios de prueba en que se apoye y acompañando un certificado médico que constata una opinión facultativa sobre el estado mental del pretendido insano.

«Art. 785: Cuando esto se asistiere en un hospicio público o particu-



ricial, son, pues, las que consigna el código civil. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 4, p. 502).

2.º El juez competente para conocer en el juicio es el del domicilio del insano, (Manual, t. 1, p. 339; Salvat, op. cit. p. 248).

3.º La declaración judicial de demencia no podrá hacerse

---

por dicho certificado deberá emanar de uno de los médicos del establecimiento.

«Art. 786: Los jueces no darán curso alguno a las demandas que no reúnan los requisitos establecidos en los arts. anteriores.

«Art. 787: Interpuesta la solicitud de demencia, previa vista del ministerio de menores, el juez nombrará, para el demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el pleito hasta que se pronuncie la sentencia definitiva.

«Art. 788: Por el mismo auto que se nombra curador, se designarán de oficio dos facultativos para que informen, dentro del plazo que el juez fijará, acerca del estado actual de las facultades mentales del demandado. Dicho plazo no será menor de veinte días ni mayor de treinta.

«Art. 789: Si la demencia fuera efectiva deberá ser calificada, en el informe, en su respectivo carácter; y, si fuera manía, deberá decirse si es total o parcial.

«Art. 790: Cuando los facultativos reputen insuficiente el plazo ordinario fijado, deberán así manifestarlo al juez, solicitando una prudente ampliación. Si juzgaren necesario verificar el examen en distintas épocas, también lo manifestarán con especificación de las causas.

«Art. 791: El auto a que se refieren los arts. 787 y 788 deberá ser notificado al demandado dentro de tres días, personalmente o por cédula, entregándosele en el mismo acto, copia del escrito de demanda.

Cuando el demandado se encuentre en la misma localidad donde el juzgado tiene su asiento, el juez deberá examinarlo personalmente, citándolo al efecto para una audiencia o trasladándose a su domicilio cuando aquel no pudiere concurrir.

«Art. 792: El demandado podrá indicar al juez, sin valerse de procurador o abogado, y por intermedio del ministerio de menores, los medios de prueba de que quiera usar; y, si estos fueran conducentes el juez los decretará.

Podrá igualmente pedir que el examen facultativo se realice en presencia del juez o del asesor de menores, y el juez accederá a este pedido siempre que fuera posible la traslación del interesado al asiento del juzgado.

«Art. 793: Cuando los bienes del demandado fueren reducidos y sólo alcanzaren para la existencia de aquel, el nombramiento de curador provisorio deberá recaer en los defensores oficiales de ausentes, y, en su defecto en los de pobres, quienes desempeñarán gratuitamente esas funciones.

En igual caso, el nombramiento de facultativos deberá recaer en profesores de los hospicios y demás institutos públicos de medicina de la provincia, quienes tendrán la obligación de expedirle gratuitamente.

«Art. 794: A los efectos del artículo anterior, podrá justificarse sumariamente el caudal de que disfrute el demandado.

«Art. 795: Cuando el actor o el demandado ofrecieren pruebas testi-



sino a solicitud de parte y después de un exámen de facultativos (art. 142 cód. civ.). Son parte a este objeto: el esposo o la esposa no divorciados; los parientes del demandante; el ministerio de menores; el cónsul respectivo, si el demente fuese extranjero;



monial u otra que no sea la pericial se recibirá en la forma prescripta en el título III y durante el término fijado a los facultativos.

«Art. 796: Si los facultativos se expediesen en disconformidad, el juez nombrará un tercero, cuyo nombramiento recaerá, si fuera posible, en un médico alienista.

«Art. 797: Cuando del certificado médico a que alude el art. 784 o de otras circunstancias especiales, la demencia aparezca notoria e indudable, el juez decretará y mandará anotar inhibición general de bienes contra el demente y ordenará la recaudación de sus bienes, los que se entregarán, bajo inventario, a un curador provisorio para que los administre. Podrán también, limitarse las medidas de seguridad al nombramiento de un interventor para los negocios del demandado.

«Art. 798: El inventario se practicará con sujeción a las reglas establecidas en la sección segunda del título XX de éste código.

«Art. 799: Si se tratare de un demente furioso que ofrezca peligros, al vecindario o a su familia, el juez puede ordenar su reclusión en un hospicio público, a no ser que sus parientes prefiriesen o indicasen uno particular.

«Art. 800: Presentado el informe de los facultativos, y, en su caso, recibidas las otras pruebas, se agregará aquel y demás actuaciones producidas, corriéndose traslado al curador por nueve días; y, evacuado este, se dará vista al ministerio de menores.

«Art. 801: Cumplido lo dispuesto en el art. anterior, el juez llamará los autos para sentencia y esta deberá dictarse dentro de veinte días de notificada aquella providencia.

«Art. 802: La sentencia deberá contener resolución terminante sobre la capacidad o incapacidad del demandado y en este último caso, proveer al nombramiento de curador definitivo con arreglo a la ley.

«Art. 803: De la dicha sentencia, podrán interponer los recursos de apelación y nulidad, el actor, el curador, el ministerio de menores y el demandado. Aquellos deberán concederse libremente.

«Art. 804: Si la sentencia fuese desfavorable a la capacidad del demandado como demente, deberá también notificarse al agente fiscal, quien estará obligado a interponer los mismos recursos cuando los interesados no los dedujeran en oportunidad. En este caso, los recursos se concederán en relación, y la cámara debe fallar sin substanciación alguna y dentro de veinte días.

«Art. 805: Los honorarios del curador provisorio y de los facultativos serán fijados por el juez, de oficio en la sentencia definitiva, y estarán sujetos al recurso de apelación.

Estos honorarios y todas las demás costas que en el juicio se producan, serán a cargo del demandante siempre que la sentencia no declare la incapacidad del demandado.

«Art. 806: La solicitud o demanda de levantamiento de la interdicción se substanciará por los mismos trámites que quedan establecidos en el presente título.



cualquiera persona del pueblo cuando el demente sea furioso o incomode a sus vecinos, (art. 144 cód. civil).

Una vez formulada la denuncia sólo siguen interviniendo en el juicio, el curador y el asesor de menores, (Salvat, op. cit., p. 249).

4.ª Interpuesta la solicitud de denuncia, debe nombrarse para el demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el pleito hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. En el juicio es parte esencial el ministerio de menores, (art. 147 cód. cit.). Si el denunciado como demente fuese menor de edad, el padre o tutor desempeñará las funciones de curador provisorio, (art. 149 cód. cit.).

El demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer que, usando de ella, se dañe a sí mismo o daño a otros. No podrá tampoco ser trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial, (art. 482, cód. cit.).

La designación del curador es facultativa y debe recaer en persona ajena a la familia del insano, salvo el caso de que el denunciado como demente fuese menor de edad en que ejercerá las funciones recordadas su padre o curador, (art. 149 cód. cit.; el demente puede intervenir en el juicio, (1) Salvat, op. cit. p. 253; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 5, p. 237).

5.ª Presentada la demanda, el juez debe designar de oficio dos o más facultativos para que examinen al presunto insano. (art. 142 cód. cit.).

La ley habla de los facultativos; y los jueces se atienen exclusivamente a la letra, sin contar que en realidad no todos los facultativos tienen idoneidad suficiente para dictaminar sobre tan delicado asunto. De ahí que sean los parteros, los médicos de niños, o los cirujanos los encargados generalmente de informar al juez; pues como éste no hace cuestión científica sino de amistad, es claro que ninguna le incumba tener con los psiquiatras.

Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la denuncia, deberá ser calificada en su respectivo carácter, y si fuese manía deberá decirse si es total o parcial, (art. 143 cód. cit.).

(1) Véase en contra Salvat, op. cit., p. 253; y jurisprudencia allí citada.



Cuando la demencia aparece notoria e indudable, el juez mandará inmediatamente recaudar los bienes del demente denunciado, y entregarlos bajo inventario, a un curador provisorio para que los administre, (art. 148 cód. cit.). El juez, durante el juicio, puede, si lo considerare oportuno, nombrar un curador interino a los bienes, o un interventor en la administración del mandado por incapaz, (art. 471 cód. cit.).

Si el demente fuese menor de catorce años no podrá pedirse la declaración de demencia, (art. 145 cód. cit.). Tampoco podrá solicitarse la declaración de demencia cuando una solicitud igual se hubiese declarado ya improbadamente, aunque sea otro el que la solicite, salvo si expusiese hechos de demencia sobrevinientes a la declaración judicial, (art. 146 cód. cit.).

6.º La sentencia sobre demencia y su cesación, sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil para los efectos indicados, mas no en juicio criminal, para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones, (art. 151 cód. cit.).

Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos de que se trata, cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado o que lo hubiese condenado como si no fuese demente el procesado (art. 151 cód. cit.).



## ACCIONES POSESORIAS E INTERDICTOS (a)

1.º Principios generales.— 2.º Acciones posesorias: a) de *manutención*; b) de *restitución*.— 3.º *Acción de despojo*.— 4.º *Acción de obra nueva*: a) en inmuebles que no sean del poseedor; b) en inmuebles del poseedor.— 5.º Competencia.— 6.º Capacidad para ejercer las acciones.— 7.º Personas contra quien se *acuerda*.— 8.º Cosas susceptibles de las acciones posesorias.— 9.º *Procedimiento*.— 10. *Relaciones entre el juicio posesorio y el petitorio*: a) prohibición de acumular el petitorio al posesorio; b) no puede iniciarse el petitorio pendiente el posesorio; c) condenaciones del posesorio. — 11. Acciones que pueden deducirse después de las posesorias, y de despojo. — 12. La acción de despojo contra las resoluciones judiciales. — 13. *Interdicto de adquirir*. — 14. *Interdicto de obra vieja*. — 15. Acciones personales y penales.

1.º— Nuestras leyes reglamentan las acciones posesorias, (art. 2487, 2876, 2950, 3034, 3418, etc., *cód. civ.*) ; la de despojo.

(a) Sobre interdictos y acciones posesorias, véase **Acevedo Pedro** «Acciones posesorias» (tesis), Buenos Aires, 1889; **Alcorta y Zeballos** «Proyecto de código de procedimientos», etc. art. 2440 y sigs.; **Arancibia Rodríguez Alberto**, «Acciones posesorias» (tesis), Buenos Aires, 1902; **Archambault Charles et Senly René**, «Dictionnaire pratique des actions possessoires et du bornage», París 1890; **Aubry et Rau**, «Cours de droit civil français», t. 2, ps. 120, 163, 166, 4.ª edic.; **Bellme W.**, «Traité du droit de possession et des actions possessoires», París, 1842; **Bruso Bartolomé**, «Acciones posesorias», (tesis), Buenos Aires, 1890; **Bourcart Gabriel**, «Des interdits et possidetis et utrobi en droit romain, et des actions possessoires en droit français» (thèse), París, 1880; **Caravantes**, «Procedimientos judiciales», t. 3, ps. 246 y sigs.; *Cód. civ. de Prusia* (año 1794), art. 141; *Cód. civ. austriaco* (año 1811), art. 339; **Gonsolo Giovanni Cesaro**, «Trattato teorico e pratico del possesso e delle azioni possessorie», 2.ª edic.; **Curasson**,





(art. 2490 cód. cit.) ; la de obra nueva, (art. 2498 y 2499 cód. cit.) y, finalmente los interdictos, (art. 563 cód. de proc. civ.) por lo que es necesario para mayor claridad precisar el valor de cada uno de esos conceptos.

El cód. civ. no emplea la palabra interdicto ni el de procedimiento habla de acciones posesorias, a no ser incidentalmente, y esto nos llevaría a pensar que se trata de cosas distintas. No es así sin embargo. Toda acción posesoria es un interdicto, pero la inversa no es siempre exacta, como lo veremos más adelante.

«Traité des actions possessoires, du bornage et autres droits de voisinage relatifs aux plantations, aux constructions, a l'alagage des arbres et des haies, au curage de fossés et canaux». Dijou, 1842; **Chiovenda**, «Principii di diritto processuale civile», ps. 51, 59, 299, 622, 3.ª edic.; **De la Colina Salvador**, «Derecho y legislación procesal», t. 2, p. 309; **De la Bua F.** «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 3, p. 445; **Escriche**, «Diccionario de legislación y jurisprudencia», verbo: Acciones posesorias; **Ferrara L.** «Saggi di diritto processuale civile», p. 229; **Furnus Castulo**, «Acciones posesorias», p. 187; **Gallano**, «De las cosas, la posesión y acciones posesorias», p. 154 y sig.; **Gambler A. B.**, «Acción de despojo» (tesis), La Plata, 1902; **Garnier F. A.**, «Traité de la possession et des actions possessoires et pétitoires», 3.ª edic.; **G. A.**, «Interdictos» (manuscrito), Buenos Aires, 1831; **Garsonnet**, «Traité de procédures», t. 1, p. 577; **Glasson**, «Traité de procédure civile», t. 1, p. 251 s. 2.ª edic.; **Goyena Pedro**, «De las acciones posesorias», Rev. Argentina, t. 4; **Goyena Pedro**, «De la posesión», (tesis) Buenos Aires, 1869; **Ibarguren**, «Acciones posesorias», p. 51; **Jofré Ricardo**, «El título III del Libro III del código civil», (tesis), Buenos Aires, 1899; **Jurisprudencia Argentina**; t. 1, ps. 434 y 635; t. 2, ps. 190, 217, 361 y 725; t. 3, ps. 10, 387, 580, 637 y 1002; t. 4, p. 4, 8, 406, 452; t. 5, p. 544; t. 6, p. 297, 299, 307, 336, 348; t. 7, p. 12, 172, 257; t. 8, p. 14, 20, 31, 284, 309, 330, 437; **Lafaille**, «Curso de derechos reales», ps. 260 y 290, Buenos Aires, 1922; **Leyes** 10 y 14, tit. 14, tit. 10, part. 7; **Lina**, «Efeitos jurídicos da posesão interdictos», p. 139. Revista da Facultad Livre de Direito. Estado de Minas Gerais, volume IX, Bello Horizonte, 1914; **Luco Valentin**, «Código de procedimiento civil de San Luis», arts. 833 y sig.; **Llerena Baldomero**, «Concordancias y comentarios del código civil argentino», t. 7, p. 267; **Llerena Baldomero**, «Acción posesoria», en Revista jurídica, 1896; **Machado Olegario**, «Código civil comentado», t. 6, p. 397; **Manresa José María**, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil reformada», t. 6, p. 131; **Manresa José María**, **Ignacio Miquel** y **José Bens**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 3, p. 604; **O. M.**, «Acciones posesorias» en Revista jurídica, 1891; **Paz Jesús H.**, «La reconstrucción de muros de cerramiento forzoso y el interdicto de obra nueva», en Revista del centro facultades de derecho, t. 5; id. Conferencias (manuscrito), dictadas en la facultad de derecho de Buenos Aires; **Pizarro Angel S.**, «La posesión y las acciones posesorias en el código civil argentino», en Revista jurídica, 1897; **Planio**, «Traité élémentaire de droit civil français», t. 1, p. 706; **Pothier**, «Oeuvres», t. 5, p. 323, ed. de 1830; **Baviart Emile**, «Traité theorique et pratique des actions possessoires», 2.ª ed.; **Bens**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 3, p. 604.



Las acciones posesorias legisladas en el cód. civ. no son otra cosa que los interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva reglamentados en la ley de forma, (art. 574, 581 y 585 del cód. de proc. civ.). En esos casos interdictos y acciones posesorias son palabras que expresan la misma idea. (Escríbe. Diccionario verb. Interdicto núm. II; Vélez Sársfield, nota a los arts. 2499, 2501, etc.; Segovia, nota 1 al art. 2470; nota 95 al art. 2503 de su edición del cód. civ.; Amancio Alcorta y Estanislao S. Zeballos, Proyecto de código de procedimientos, art. 2440 s.; Valentín Luco, Cód. de proc. de San Luis, art. 833 s.) (1).

¿De dónde proviene el nombre de interdictos dado a las acciones posesorias? Los escritores españoles lo tomaron del dere-

chamiento civil», t. 3, p. 593; **Begonie Astolpho**, «As accões posesorias e a jurisprudência dos tribunales», Rio de Janeiro, 1914; **Ribas Antonio Joaquín**, «Da posse y das accões possessórias segundo o direito patrio comparado com o romano e canónico», Sao Paulo, 1901; **Rodríguez Alberto M.**, «Comentarios al código de procedimientos en materia civil y comercial», t. 3, v. 56, 2.ª ed.; **Salettes Raymond**, «La controverisia possessionis et la vis ex conventu a propos de l'interdit uti possidetis», Revue historique, t. XVI, p. 245; **S. Martín Z.**, «Acciones posesorias», (tesis) Buenos Aires, 1873; **Segovia Lisandro**, «Código civil argentino anotado»; **Segovia Lisandro**, «Código civil argentino»; **Segovia Lisandro**, «Proyecto de código de procedimiento de Corrientes»; **Silveti, Luis F.**, «Acciones posesorias», (tesis) Buenos Aires, 1905; Sup. cort. nac. t. 29, p. 54; t. 34, p. 350; t. 37, p. 81; t. 42, p. 295; t. 45, p. 130; t. 73, p. 14; t. 75, p. 67; t. 90, p. 260; **Tezanos Pintos Manuel (h)**, «Acciones posesorias y de despojo» (tesis), Buenos Aires, 1900; **Tissier, Darras et Louche Desfontaines**, «Code de procédure civile», t. 1, p. 106; **Troplong**, «Le droit civil expliqué: De la prescription», t. 1, p. 403, núm. 281, 3.ª edic.; **Uriburu Francisco**, «Algunas consideraciones sobre las teorías de von Ihering y Savigny respecto a los interdictos posesorios» (tesis), Buenos Aires, 1906; **Wodon León**, «Traité théorique et pratique de la possession et des actions possessoires», 3.ª edic.; **Zacharias**, «Cours de droit civil français», t. 1, p. 389, 2.ª edic.

(1) **Garsonnet**, op. cit., t. 1, p. 577, dice que las acciones posesorias existían en el derecho romano bajo el nombre de interdictos; **Glasson**, op. cit., t. 1, p. 261, agrega que: «entre los romanos las acciones posesorias existían bajo la forma de interdictos creados por el pretor y se distinguían la posesión del petitio tanto para los muebles como para los inmuebles».

La prueba más evidente de que las acciones posesorias son equivalentes a los interdictos, (exceptuando el interdicto de adquirir) la encontramos en el art. 585 del cód. de proc. civ. que establece que en el interdicto de obra nueva el juez procederá según lo dispuesto por los arts. 2498 y 2499 del cód. civ. Las dos disposiciones que se citan se refieren, la una a la acción posesoria de manutención y la otra a la de despojo. Consulte **Pothier**, op. cit., t. 5, p. 344, y el texto de **Ulpiano** ahí transcripto.



cho romano y nuestros legisladores y juristas siguieron su ejemplo. La ley núm. 50, fué sancionada antes de que se proyectase el cód. civil y el cód. de procedimiento de la capital también se proyectó antes de que aquel entrara en vigor. (Manual, t. 1, p. 85).

El doctor Vélez o su modelo, dejó de lado la tradición romana y española para seguir las huellas del derecho francés e italiano y muy principalmente las enseñanzas de Zachariæ, Aubry et Rau, Troplong y otros. (1)

Sólo el congreso puede en nuestro país, legislar sobre posesión y derechos reales, de donde se sigue que las disposiciones que se dictan por las legislaturas locales no pueden modificar las reglas sentadas por aquel, (art. 31 y 67, inc. 11 de la constitución

---

(1) «Nuestras acciones posesorias—dice **Pianol**— no se relacionan con los antiguos interdictos romanos: su filiación histórica es desconocida aun cuando se pretende sin resultado establecerla con la ayuda de un pretendido *interdictum* general que habría reemplazado a los antiguos interdictos especiales», (op. cit., t. 1, p. 706).

Muchos escritores franceses sostienen que solo existe una acción posesoria, la de manutención, que se acuerda cuando existe turbación, desposesión u obra nueva, **Glasson** op. cit., t. 1, p. 265.

«En tiempos de **Beaumenot**, y bajo la influencia de éste jurista consulto existían (en Francia), tres acciones posesorias: la de manutención, a efecto de hacerse mantener en la posesión; la de recuperar, para hacerse reintegrar; y la acción de fuerza, que a diferencia de la precedente, suponía necesariamente una desposesión violenta», **Glasson** op. cit., t. 1, p. 262.

En cuanto a la acción de despojo (reintegrante), las opiniones han variado en dicho país, existiendo tres doctrinas al respecto:

1.ª Para su procedencia se requieren las mismas condiciones que para la acción de manutención, es decir posesión anual, pública, pacífica, no interrumpida, continua y a título de propietario, **Glasson**, op. cit., t. 1, p. 271. Así pues la acción de manutención y de despojo serían la misma cosa, lo que no es admisible.

2.ª En este sistema se acuerda la acción al que ha sido desposeído por violencia, por aplicación del principio *spoliatus ante omnia, restituitur*; la tiene el simple detentador, como el locatario, o el que no pasase de acuerdo al art. 2229 del cód. Napoleón, **Glasson**, op. cit., p. 272, **passim**.

3.ª La acción se acuerda al poseedor, aunque no sea anual, bajo condición que concurren a su favor las condiciones de que su posesión sea continua, no interrumpida, inequívoca y a título de propietario, **Glasson**, op. cit., t. 1, p. 273, 262.

Basta leer lo que dice el art. 2490 de nuestro cód. civ. para convencerse de que se ha inspirado en la segunda de las doctrinas que dejamos enumeradas.

No olvidemos tampoco que nuestro cód. de proc. civ. ha seguido a la ley de enjuiciamiento española de 1855, que no tuvo en cuenta el Dr. Vélez.



nacional). Si las acciones posesorias y los interdictos enumerados son una misma cosa, claro es que deben aplicárseles las disposiciones de la ley de fondo, (1) y no las de la ley de forma. Las acciones posesorias deben juzgarse sumariamente y en la forma que prescriben los códigos de procedimientos judiciales (art. 2501 del cód. civ.). Todo aquello en que las leyes procesales vayan más allá de las formas es repugnante a la constitución del estado (2). Cuando más, como lo sostiene Ibarguren, podrían invocar por vía de doctrina, (op. cit., p. 56).

2.º—Las acciones posesorias (3) que nuestro cód. civ. acuerda son las de manutención de la posesión (interdicto de retener

(1) La lógica ha impuesto análoga solución aún en los países centralistas, como se hizo notar en el monaje del gobierno al enviarse a las cámaras el código Sardo. «En presencia de lo dispuesto por el cód. civ. no correspondía tratar en el de proc. sobre el fondo de las acciones posesorias y por consiguiente las pocas disposiciones del segundo se proponen únicamente, lo que es propio de las leyes de forma, regular el ejercicio de la acción que deriva de los textos del derecho civil, facilitando así su aplicación sin mudar o alterar su verdadero concepto». «Formulario degli atti di procedura civile preceduto dal testo del codice con le sorgenti di ciascun articolo e la relazione ufficiali, p. 145, edic. 1855.

(2) Para el cód. de proc. civ. de la capital el interdicto de retener la posesión procede cuando concurren estos dos requisitos; 1.º que el que las intente se halle en actual posesión, 2.º que se haya tratado de inquietar por actos materiales que se expresarán en la demanda, (art. 574).

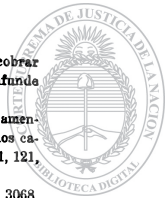
Debe entenderse que la posesión a que se refiere la disposición citada es aquella que reúne las condiciones necesarias para la procedencia de las acciones de manutención y de recuperar, pues, de lo contrario resultaría que el cód. de proc. es repugnante al cód. civil, que en nuestro sistema de gobierno tiene prelación sobre aquél.

Exige la ley de forma para que tenga lugar el interdicto de recobrar o de despojo, que concurren las siguientes condiciones: 1.º que el que lo intente o su causante haya estado en posesión o tenencia de la cosa demandada; 2.º que haya sido despojado con violencia o clandestinamente, art. 581 cód. cit.

En nuestro concepto, se ha confundido la acción de restitución con la acción de despojo, las que como lo hemos demostrado en el texto tienen fisonomía propia que las distinguen y caracterizan. Para la procedencia de la acción de despojo se ha admitido la clandestinidad que el cód. civil no reconoce; procede en tal caso la acción de restitución.

(3) Para nosotros es indiferente que la posesión sea un hecho, como lo sostienen Pothier, op. cit. t. 5, p. 323, 341; Glanville, op. cit., t. 1, p. 249, y lo dice el art. 2470 de nuestro cód. civ., o que sea un derecho, como lo afirman otros, (nota al art. 2351 del cód. civ.), desde que en ambos casos existe la acción.

El concepto que hemos dado de la acción resta importancia a la enuneriada cuestión, Manual, t. 3, p. 5, s.; Paz, conferencias cit.



y conservar le llaman las leyes procesales) (1) y de recobrar (en las leyes citadas se le da el mismo nombre y se la confunde con la acción de despojo).

Por medio de las acciones posesorias se protege, no solamente la posesión, sino también la cuasi posesión que revista los caracteres que la ley exige (Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 191, 121, *passim*).

Las servidumbres de tránsito y las de acueducto, (art. 3068, 3082) son las que ofrecen con más frecuencia casos prácticos de ejercicio de las acciones posesorias y de despojo. La primera es discontinua y no aparente cuando no hay signo exterior permanente del tránsito, (art. 3078 cód. cit.); la segunda es continua y aparente. El título de aquella puede resultar del destino del padre de familia, (art. 2978 cód. cit.) y de los otros casos previstos por la ley, (art. 3073 cód. cit.); en estas basta la cuasi posesión, (art. 3083 cód. cit.).

No sería pues lícito el cierre de un camino si existen signos visibles de la servidumbre y aquel se ha transitado por más de un año, (sup. cort. nac., t. 125, p. 358).

El mismo tribunal ha declarado: «Que no basta para justificar lo hecho por la autoridad que sea un camino público, el interceptado o clausurado, porque cualquiera que sea la naturaleza de la posesión, nadie puede turbarla arbitrariamente, (art. 2469 cód. civ.) siendo de observarse que si el demandado no ha invocado otro título al camino que pretende, que el de haber el actor permitido voluntariamente el tránsito dejando un espacio entre sus propiedades, permiso que ha podido en cualquier momento retractarse puesto que no se ha alegado ningún acto formal que demuestre que se desprendiera de la propiedad o constituyera otro derecho a favor del gobierno y para un uso público, no pudiendo en consecuencia decirse que la posesión del demandante sea la de un bien del dominio público inalienable y fuera del comercio.

«En el supuesto de que las autoridades de la provincia demandada hayan usado de facultades conferidas por sus leyes lo

---

(1) La ley protege al poseedor porque éste en la mayoría de los casos es el propietario del inmueble, *Glasson*, op. cit., t. 1, p. 251 y 260.



cales, no pueden estas entenderse ni ejecutarse con detrimento de las garantías consagradas por la constitución y las leyes comunes respecto de la propiedad privadas, (sup. cort. nac., t. 95, cit.; t. 114, p. 418; t. 118, p. 331, 402; t. 119, p. 288).

En lo que se refiere a las servidumbres de acueducto si el actor ha estado años atrás en posesión del uso en común del agua de una acequia y resulta de presunciones graves y precisas el carácter de dicha posesión como tenida *animo domini*, la obstrucción de la acequia llevada a cabo por el demandado con el propósito de alzar el agua en su totalidad, autoriza el interdicto restitutorio, (sup. cort. nac., t. 46, p. 181; Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 132).

El goce de las aguas puede mantenerse aún cuando los trabajos se hayan hecho sin permiso de la autoridad, si la acción posesoria se deduce contra el que procede sin tener a su vez concesión de la misma. Es sabido que el poder administrador es quien hace la distribución de las aguas del dominio público. (Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 134, 156).

Las aguas pluviales que corren por la vía pública son *res nullius* y no habiéndolas sometido la ley a ningún derecho de uso en provecho exclusivo de los ribereños, pertenecen al primer ocupante y no pueden ser objeto de una posesión útil, mientras conserven su carácter de *res nullius*, salvo convención en contrario, (Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 135).

\*, a) La acción de manutención de la posesión procede cuando contra la voluntad del poseedor, alguien ejerciere con intención de poseedor, actos de posesión de los que no resulte una exclusión absoluta del acreedor, (art. 2487, 2496 del cód. civ.; Troplong, op. cit., t. 1, núm. 283, p. 406). Para la procedencia de la acción se requiere:

I. Que el que la deduzca sea poseedor anual (1), (art. 2473 del cód. civ.). Este requisito no es necesario cuando la posesión ha sido turbada por el que no es un poseedor

---

(1) El poseedor que ha dejado pasar un año después de sufrir la turbación en la posesión pierde la posesión y sólo puede entablar la acción petitoria. Sobre la manera de contar el año, véase Aubry et Rau, op. cit. t. 2, p. 139. El término corre contra los incapaces.



anual y no tiene sobre la cosa ningún derecho de posesión, (art. 2477 cód. cit.). (1)

II. Que la posesión sea pública, (art. 2479 cód. cit.).

III. Que sea a título de propiedad, (art. 2480 cód. cit.). (2)

IV. Que sea continua, (art. 2481 cód. cit.).

V. Que no sea interrumpida, (art. cit.).

VI. Que sea pacífica, (art. 2482 cód. cit.). (3)

b) la acción de restitución se acuerda cuando se ha perdido la posesión por medios no violentos y existe una posesión que reúne los requisitos que hemos indicado en la letra precedente.

Si las acciones de manutención y restitución son una sola o dos distintas es cuestión que carece de interés práctico. (4) Basta saber que en ambas se exigen análogos requisitos y que su única diferencia radica en la extensión de la lesión sufrida; en una hay turbación, en la otra desposesión absoluta.

3.º — Para la procedencia de la acción de despojo (5) deben concurrir las condiciones siguientes:

(1) El hecho de la posesión difiere del derecho de poseer, que no debe confundirse con el mejor derecho de poseer, art. 2472 cód. civ. «Cuando una persona está en posesión, conforme a la ley, tiene a la vez el hecho y el derecho de posesión; si ha sido privada de la posesión carece del hecho de la posesión, pero conserva el derecho que sigue protegido por medio de una acción; si alguien posee sin reunir los requisitos de la ley no tiene sino el hecho de la posesión, sin el derecho y no goza, en principio, de las acciones posesorias.» *Glasson*, op. cit., t. 1, p. 251.

(2) El poseedor legal puede conceder al locatario, o poseedor precario, la posesión de que goza poniéndolo en condiciones de ejercer acciones posesorias, *Glasson*, op. cit., t. 2, p. 253.

(3) Los vicios de violencia, clandestinidad y precariedad son puramente relativos, *Glasson*, op. cit., t. 1, p. 252. Las características de cada una de las condiciones necesarias para que la posesión dé lugar a las acciones posesorias pertenece al derecho civil, por lo cual nos excusamos de estudiarlas.

(4) En la actual legislación procesal española la acción de manutención y de recuperar son una misma cosa, art. 1651 s. Lo propio sostienen muchos escritores franceses, *Glasson*, op. cit., t. 1, p. 271, *passim*.

En uno de los mejores trabajos que existen sobre acciones posesorias se sostiene que las acciones posesorias son dos, *Ibarguren*, op. cit., p. 24.

(5) La acción de despojo no es una acción posesoria, ni funciona como acción de restitución. «Ahí donde no alcanza la acción posesoria de restitución, alcanza la acción de despojo. De modo que la función recuperatoria de la una, no hace superflua la acción recuperatoria de la otra, porque miran dos aspectos distintos de la protección posesoria: la una el hecho de la posesión, la otra la posesión jurídica, *Ibarguren*, op. cit., p. 55.





I. Que haya desapoderamiento de un inmueble por medio de la violencia (1), por alguien que intente hacerse poseedor (Tropiong, op. cit. núm. 296, p. 418).

II. Que el que la deduce haya estado en *posesión* del inmueble, aunque su posesión sea viciosa, (art. 2490 cód. cit.). «Ea decir, aunque se tuviese por violencia, por título precario (2) y aunque el vicio sea con relación al adversario». (Segovia, nota al

---

(1) El cód. de proc. civ. habla de violencia o clandestinidad porque confunde la acción posesoria de restitución con la acción de despojo, art. 581 cód. de proc. civ.; *Zacharias*, op. cit., t. 1, p. 389 dice que la reintegrada es la acción posesoria introducida como consecuencia de una desposesión acompañada de violencia o vías de hecho, *Conf. Pothier*, op. cit., t. 5, p. 345 y 347. Los señores *Aubry et Rau*, op. cit., t. 2, p. 120, sostienen la misma doctrina, pero hacen notar que el *remedium spoliis* era acordado también en derecho canónico cuando existía clandestinidad; *Pothier* se refiere al que impide con violencia entrar en su heredad, de la que se posesionó otro en la ausencia del poseedor, op. cit., p. 346.

El cód. civil argentino sólo menciona la violencia, arg. del art. 2492.

(2) El cód. civ. habla de posesión en este caso, como equivalente de tenencia o posesión natural, *Pothier*, op. cit., t. 5, p. 325, 347; *Aubry et Rau*, op. cit., t. 2, p. 166; *Tropiong*, op. cit., t. 1, p. 418; *Glasson*, op. cit., t. 1, p. 249, 250.

Las leyes de forma y las de fondo están de acuerdo en que el mero tenedor tiene la acción de despojo. «Para evitar en lo posible la violencia en tiempos tan turbulentos como los de la edad media, el derecho canónico creó el principio *spoliatus ante omnia restituendus*. El que era víctima de un despojo debía obtener la restitución, antes de que se tratase ninguna otra cuestión, sea que la violencia hubiese recaído sobre una persona o sobre un bien mueble o inmueble y sea que el despojado fuera poseedor o simple detentador, *Glasson*, t. 1, p. 262 y 272; *Pothier*, op. cit., t. 5, p. 347; *Saleilles*, op. cit., p. 249; *Caravantes*, op. cit., t. 3, p. 253; *Lafaille*, op. cit., p. 260, 290.

«La acción de despojo sancionada por el art. 2490 del cód. civ. sólo tiene por objeto restituir la posesión de bienes raíces, al que la ha perdido violentamente o por vías de hecho, sin prejuzgar nada sobre las acciones posesorias que correspondan, las cuales podrán intentarse por una u otra parte, luego que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban; por cuya razón, se concede esta acción al despojado y sus herederos, aunque su posesión sea viciosa, es decir, aunque la haya adquirido por fuerza, a ocultas de su dueño, por ruego o encargo del mismo o por no haberla poseído bastante tiempo, y sin necesidad de producir título alguno contra el despoiante, sus herederos y cómplices, aunque sea el dueño del inmueble».

«Esta acción no es una acción posesoria propiamente dicha, para cuyo ejercicio se exija la posesión anual, ni una acción real fundada en una presunción de propiedad; sino una disposición de orden público, con objeto de prevenir la violencia y el atentado de hacerse justicia por sí mismos, sup. cort. nac., t. 15, p. 274; *Conf. Llerena*, p. 267 del t. 7, 2.ª edic.; *Machado*, t. 6, p. 435, edic. 1922.



art. citado, Troplong, op. cit. núm. 296, p. 420). Tampoco la posesión del despojado necesita ser anual (Segovia, nota 61 al art. 2492 de su edic. del cód. civil; Galiano, op. cit., p. 154. 157).

La ley se ha colocado en dos situaciones definidas: ha exigido la posesión anual en las acciones posesorias, (art. 2473 cód. cit.); pero en la de despojo, solo ha sentado que ella dura un año, (art. 2493 cód. cit.). Si ambos conceptos no expresaran una idea distinta existiría una repetición o una contradicción que no hay derecho para atribuir al codificador, máxime si se tiene en cuenta la claridad con que se ha expresado.

Es que la acción de despojo (1) difiere substancialmente de las acciones posesorias; aquella puede deducirse por el arrendatario que es poseedor precario, si existe la violencia, mientras que estas necesitan una posesión que reúna los seis requisitos que hemos enunciado.

4.º— La denuncia de obra nueva ha sido equiparada unas veces a la acción posesoria de manutención y otras a la de despojo. (Art. 585 cód. de proc. civ.).

a) Si la obra nueva se comenzare a hacer en inmuebles que no sean del poseedor y por la cual este sufre un menoscabo que cedere en beneficio del que ejecuta la obra, la acción tiene por objeto la suspensión de la misma durante el juicio y que a su terminación se mande deshacer lo hecho, (art. 2499, 2500 cód. civ.; Glasson, op. cit., p. 261, 276. *passim*).

La acción de manutención y la de obra nueva, en el caso que nos ocupa, se diferencian en que en aquella es menester que alguien ejerceite, con intención de poseer, contra la voluntad del poseedor del inmueble, actos de posesión, (art. 2496 cód. cit.) y en esta falta ese elemento desde que el demandado no pretende poseer el inmueble del demandante. Para la procedencia de la acción de obra nueva tampoco se exige una turbación actual sino eventual, es más bien una medida preventiva (Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 163. nota 2).

Es así mismo característico de la acción de obra nueva que

(1) «Esta acción se relaciona a la que es conocida en el derecho romano bajo el nombre de *interdictum unde vi*, que forma la materia del título del Digesto, de *vi et de vi armata*», Pothier, op. cit., t. 5. p. 345.



sólo procede mientras la obra no ha terminado; en este caso procedería la acción de manutención, (Glasson, op. cit., t. 1, p. 277).

b) Si la turbación en la posesión consistiere en obra nueva que se comenzare a hacer en inmuebles del poseedor, o en destrucción de las obras existentes, la acción será juzgada como acción de despojo. (art. 2498 cód. cit.) En realidad lo que hay en esta hipótesis es el despojo total o parcial de un inmueble y de ahí la solución que se le da, bien lógica, por cierto.

No nos parece exacta la afirmación de los que sostienen que esta no es una acción de despojo, pues la ley le da ese carácter. (Ibarguren, op. cit., p. 53).

5.º — Para conocer en las acciones de despojo y en las posesorias es juez competente el del lugar de los actos de turbación, desposesión o despojo, (Manual, t. 1, p. 333 y en contra cámb. civ., t. 78, p. 192; t. 124, p. 264).

6.º — Puede intentar las acciones posesorias, el poseedor, el condómino, (art. 2487, 2489 cód. cit.), su mandatario general, el marido en nombre de la mujer, el tutor o curador en nombre del pupilo o incapaz, (art. 411, 1276 cód. cit.). El menor emancipado no puede estar en juicio en pleito civil y por consiguiente carece de capacidad para deducir acciones posesorias sin autorización judicial (art. 135, 136 cód. cit.) Se conceden también las acciones posesorias y de despojo al usufructuario para proteger el derecho de que goza como tal, (art. 3036 del cód. civ.): al usuario, (art. 2950 cód. cit.) y al dueño de la heredad dominante en las servidumbres (art. 3034 cód. cit.; Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 124).

Téngase en cuenta que las servidumbres continuas y aparentes se rigen por diversos principios de las discontinuas aparentes o no aparentes: en las primeras basta la posesión en los términos exigidos por la ley, para la procedencia de la acción posesoria; en las segundas se necesita título y cuasi posesión, (art. 3017 cód. cit.; Pothier, op. cit., t. 5, p. 343; Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 128; Glasson, op. cit., t. 1, p. 256, 258).

La servidumbre puede ser establecida por destino del padre de familia, (art. 2978 cód. cit.), y en tal caso ese sería el título a que nos hemos referido, (Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 129).

7.º — Las acciones de manutención y de recuperar se conce-



den contra el poseedor porque participan del carácter de las acciones reales. La de despojo, eminentemente personal, sólo alcanza al despojante, a sus herederos y cómplices, (art. 2490 cód. cit.).

En cuanto al interdicto de adquirir sólo puede deducirlo el que presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho contra el que retenga la cosa, (art. 564, inc. 1 del cód. de proc. civ.).

8.º — Solamente las cosas inmuebles (susceptibles de posesión o cuasi posesión), pueden ser objeto de las acciones posesorias, (1), porque en materia de muebles la posesión vale título, (Conf. Glasson, op. cit., t. 1, p. 253). Es necesario que los inmuebles estén en el comercio y de ahí que no se pueda deducir las acciones citadas sobre plazas de guerra, riberas de mar o ríos navegables, iglesias, cementerios, etc. (Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 122; sup. cort. nac., t. 128, p. 296). En los terrenos fiscales regidos por las leyes locales de tierra pública, los actos del gobierno dictados, y ejecutados en virtud de lo dispuesto por dichas leyes no pueden dar lugar a las acciones que estamos tratando, (sup. cort. nac., t. 30, p. 266; t. 78, p. 159).

Lo mismo debe decirse, en general, de los inmuebles del dominio público de la nación, de la provincia o de los municipios. (Pothier, op. cit., t. 5, p. 343). Decimos en general porque el tenedor de esos inmuebles puede accionar contra otros que no sean la nación, etc. (Glasson, op. cit., t. 1, p. 254; Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 123; sup. cort. nac., t. 128, p. 296).

9.º — En las acciones posesorias, de despojo y obra nueva, el procedimiento es sumario y presentada que sea la demanda el juez debe convocar a las partes a juicio verbal con intervalo de tres días, (art. 275, cód. de proc. civ.) en el que se observarán las reglas siguientes:

I. — El demandante se limita a reproducir su demanda y a ofrecer la prueba de que intenta valerse, (art. 576, 582, 585 cód. cit.).

II. — El demandado formula sus defensas; expone si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen y ofrece la prueba que

---

(1) La acción de despojo es una acción posesoria *sensu latissimo* según Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 166.



crea pertinente; los testigos no pueden ser más de cinco por cada parte, (art. 571, 577, 582, 585 cód. cit.).

Las excepciones de forma y fondo tienen que alegarse al mismo tiempo, para que sean resueltas en una sentencia única, (sup. cort. nac., t. 35, p. 109; t. 80, p. 54; cárn. civ., t. 29, p. 83; t. 105, p. 258).

Es posible que el juicio verbal dure varios días y a veces meses, porque las partes si bien ofrecen su prueba en la primera audiencia en que se les oye, la producción de la misma puede demorar por causas que no les son imputables, sea por que los testigos no comparezcan, sea porque haya que cometerla a jueces de otra localidad, etc., (sup. cort. nac., t. 89, p. 415; cárn. civ. t. 32, p. 116; t. 48, p. 202; t. 79, p. 89; t. 112, p. 12; t. 117 p. 46; t. 133, p. 241). (1).

III. — La prueba tiene que circunscribirse a la cuestión controvertida: en la acción de manutención y recuperar hay que demostrar la posesión y los actos de perturbación; (2) en la acción

(1) La corte dijo en el fallo citado: «Son numerosos los casos de juicios sumarios de posesión, promovidos originariamente ante esta suprema corte, en que se ha decretado por ella la admisión de la prueba testifical ofrecida por las partes en el juicio verbal a que se refiere el art. 332 de la ley núm. 50 ordenando que se reciban en otro u otros días posteriores al designado para la audiencia verbal, las declaraciones de testigos que no han podido ser presentados en el primer día de ella, sea por encontrarse a considerable distancia del tribunal, o por otra causa ajena a la voluntad de las partes.

«Esta práctica que viene observándose desde largo tiempo por la sup. cort., consulta mejor, sin duda, los sagrados derechos de la defensa de partes, facilitando la producción de la prueba testifical, tan necesaria e importante en esta clase de juicio y constituye una jurisprudencia que ha prevalecido sobre lo resuelto en contrario en muy pocos casos, que se registran en la colección de fallos de este tribunal, sin que ella pueda ni deba considerarse opuesta al texto del art. 333 de la ley cit. en cuanto por él se prescribe que en este juicio se oiga a las partes y se admitan las pruebas que adujeren, extendiéndose acta en que se consignen los alegatos, las pruebas producidas y las manifestaciones de los testigos; porque esta disposición no implica prohibición de prorrogar la audiencia para días ulteriores, siempre que lo haga necesario la mejor sustentación de la causa ni que en ella deje de labrarse la correspondiente acta, donde se consigne lo que expresa el artículo citado». Sup. cort. nac., t. 89, p. 415.

(2) Los juristas franceses hablan de turbaciones de derecho. *Pothier*, op. cit., t. 5, p. 345. Entre nosotros las simples amenazas de turbación no son bastantes para legitimar la acción posesoria, (art. 2496 cód. civ.) y así en la hipótesis de que pudiera considerarse como acto turbatorio de la posesión una orden de desalojo emanada de la autoridad pública, no puede



de despojo la tenencia el desapoderamiento violento de la cosa y que la acción se redujo en tiempo hábil; en la de obra nueva rigen análogos principios, según los casos.

IV. — Las partes, una vez producida la prueba alegan sobre la misma. De lo que ocurra en el juicio verbal se levanta un acta donde con claridad y precisión se consignan los alegatos y la prueba, (art. 571, 576, etc. cód. cit.).

La sentencia debe dictarse dentro de tres días de concluido el juicio verbal y en ella se resolverá la cuestión o cuestiones propuestas, (art. 576, 578, 583, 585, cód. cit.). Las costas son a cargo del vencido. La sentencia es apelable en relación y ambos efectos, y el superior tiene quince días para fallar desde el llamamiento de autos, (art. 573, 580, 584, 585 cód. cit.).

10. — Entre las acciones reales y las posesorias existen ciertas relaciones que es necesario puntualizar:

a) La posesión nada tiene de común con el derecho de poseer y es inútil la prueba en las acciones posesorias del derecho de poseer por parte del demandante o del demandado, (art. 2472 cód. civ.; sup. cort. nac., t. 56, p. 168).

Tal es el principio general que rige para las partes y para el juez. Sin embargo, siendo dudoso el último estado de la posesión, entre el que se dice poseedor y el que pretende despojarlo o turbarlo en la posesión, se juzga que la tiene el que pruebe una posesión más antigua, o en su defecto el que tenga derecho de poseer o mejor derecho de poseer, (art. 2471 cód. civ.). Esto puede comprobarse por el título de dominio, (sup. cort. nac., t. 45, p. 276). El principio adquiere gran importancia en las servidumbres discontinuas, (Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 144).

Se equivoca Llerena al sostener que si ninguno prueba este mejor derecho o si es dudoso el estado de la posesión, el juez puede negarse a fallar y ordinarizar el juicio, (op. cit., t. 7, p. 217).

---

caso por acreditados legalmente esos extremos con la declaración de testigos que afirman que oyeron a un inspector transmitir verbalmente a los demandantes dicha orden. Sólo se entiende haber turbación en la posesión cuando contra la voluntad del poseedor alguien ejerciera, con intención de poseer, actos de posesión de los que no resultase una exclusión absoluta de aquel, sup. cort. nac., t. 119, p. 479; t. 111, p. 50, t. 129, p. 75.



La ley no autoriza esa solución. En la duda debe rechazarse la demanda.

Solamente el desconocimiento de la organización judicial francesa ha podido llevar a nuestros juristas a seguir la opinión de Aubry et Rau, (op. cit., t. 2, p. 161). Se explica que el juez de paz francés, envíe a las partes ante el juez del petitorio, porque debe resolverse una cuestión de derecho que escapa a su competencia; pero en nuestro país el mismo magistrado conoce de la acción posesoria y de la acción real.

Sin violar la citada regla hay casos en que el título que justifique el derecho de las partes puede ser examinado para decidir sobre la suerte de la acción, sin reconocer o desconocer el hecho material de la posesión, por ejemplo: cuando hay dudas si el poseedor poseía a título de propietario en la acción promovida por el usufructuario, usuario, o titular de una servidumbre, etc. (Glasson, op. cit., t. 1, p. 286; Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 142).

b) Entablado el juicio posesorio, el petitorio ni otro posesorio no puede tener lugar, antes que aquel haya terminado, (art. 2484 cód. cit.; sup. cort. nac., t. 35, p. 7). Por su parte, el demandante en el juicio petitorio no puede usar de acciones posesorias por turbaciones en la posesión anteriores a la introducción de la demanda, pero el demandado puede usar de acciones por perturbaciones en la posesión anteriores a la demanda, (art. 2486 cód. cit.).

c) El demandado vencido en el posesorio no puede comenzar el juicio petitorio sino después de haber satisfecho plenamente las condenaciones contenidas en la sentencia, contra él, (art. 2486 cód. civ.; Glasson, op. cit., t. 1, p. 281).

Sin embargo, como no sería justo que el vencedor permaneciera inactivo e impidiera por ese medio la acción del vencido, este puede pedir se le fije un plazo para que haga liquidar lo que se le ha reconocido en la sentencia, (Glasson, op. cit., t. 1, p. 282).

11. — Se ha sostenido que después de la sentencia en las acciones posesorias (1) pueden deducirse otras para discutir la

(1) El profesor de derecho civil de la facultad de Buenos Aires doctor Héctor Lafaille, op. cit. p. 128, 263, sostiene que después del interdicto de la ley procesal puede iniciarse la acción posesoria del código civil, y, finalmente, la acción real. No compartimos la opinión del ilustrado civilista, por las razones esbozadas en el texto.



posesión y se cita en apoyo de esta tesis el art. 579 del cód. de proc. civil. Se agrega que tales acciones han de deducirse en juicio ordinario o plenario.

La ley de forma no ha podido establecer tal cosa porque se opone a ello el cód. civ. que sólo acepta que después de las acciones posesorias se promueva la acción petitoria donde se discute el derecho real, (art. 2482 y 2486 cód. civ.). Es claro que terminado el juicio de despojo puede deducirse la acción posesoria, (que debe tramitarse sumariamente y no en juicio ordinario), porque son distintos los requisitos exigidos en el primero y en la segunda. Se discute en aquel el hecho de la posesión y el despojo violento, se discute en esta, el derecho de la posesión, la turbación o la desposesión.

¿De dónde ha podido surgir el error del art. 579 del cód. de proc. civ.? Pensamos que de la diferencia de fuentes y de tiempo en que se preparó ese cuerpo de leyes, con relación al cód. civil, (Manual, t. 1, p. 83). El autor de aquel, fué influenciado por las doctrinas corrientes en España, cuyos exponentes más caracterizados eran Escriche y Caravantes (1).

(1) «Puede litigarse, pues — dice Escriche, verbo Interdicto — sobre la posesión en juicio sumario o en juicio plenario: se litiga en juicio sumario cuando se trata sólo de la posesión actual o momentánea, ésto es, de la posesión que uno tiene o debe tener en el acto o momento, no por cierto de la posesión natural o de hecho, cual es la del arrendatario, colono o comodatario, sino de la civil o de derecho, cual es la del que posee la cosa con justo título, como advierte Heineccio, y se litiga en juicio plenario cuando se disputa sobre la posesión permanente y perpetua que uno tiene o debe tener en virtud de la ley aunque en el acto no la tenga. Ambos juicios se dicen juicios posesorios; y las acciones que en ambas se ejercen se llaman también acciones posesorias, con la diferencia de que la acción que se deduce en el plenario no tiene nombre particular, y la que se propone en el sumario es la que se denomina interdicto, cuyo nombre se da también al juicio mismo. Pero el juicio sumario se substancia brevemente sin las solemnidades del ordinario, no admitiéndose apelación de la sentencia o providencia sino a lo más en el efecto devolutivo; y el juicio plenario se sustancia por el método y términos del juicio ordinario. En el plenario se procede con pleno conocimiento de causa y se requiere por lo tanto una prueba completa de la posesión y de sus calidades, al paso que en el sumario basta una justificación semiplena. En el plenario se confiere o declara la posesión definitivamente y en el sumario sólo interinamente sin perjuicio del que tenga mejor derecho. Así es que después de la decisión del interdicto, o sea, después de la terminación del sumario puede entrarse en el plenario sobre la posesión o la propiedad. Todo ésto es ajeno a nuestro derecho.





No es raro tampoco que el legislador emplee palabras inútiles en esta materia. Así la ley francesa de mayo 25 de 1838, después de enumerar las acciones posesorias de manutención, (*complainte*) de recuperar, (*reintegrante*) y de obra nueva agregó que las otras acciones posesorias son también de la competencia de la justicia de paz, disposición absolutamente inútil, porque tales acciones no existen. (Glasson, op. cit., t. 1, p. 265).

La ley española de 1881 ha aclarado, aunque no en forma satisfactoria, lo que se refiere a la acción que ha de reservarse (art. 1658).

En conclusión, después de sancionado el cód. civ. no es posible litigar dos veces sobre la posesión, una en juicio sumario y otra en juicio plenario. Al vencido sólo le queda la acción petitoria. (Véase en contra Furnus, op. cit.; Llerena, op. cit., t. 7, p. 219, 222; cám. civ. t. 28, p. 348; y, en favor Iburguren, op. cit. p. 67). En cuanto a la acción de despojo es claro que no rije lo que dejamos expuesto.

La acción de despojo como lo hemos visto difiere de las acciones posesorias y de ahí que el vencido en ella pueda valerse de estas para probar que goza de una posesión que reúne los requisitos de la ley y obtener la restitución de la cosa de que fué privado. «En materia de despojo, (*reintegrante*) los efectos de la sentencia sea que se haya hecho lugar, sea que haya rechazado la demanda, no son sino provisorios aún bajo el punto de vista de la posesión, de tal suerte que el vencido puede, siempre que se encuentre en las condiciones legales, interponer la acción posesoria contra su vencedor en la acción de despojo». (Aubry et Rau, op. cit., t. 2, p. 139).

12. — La cuestión de saber si la acción de despojo puede hacerse valer contra resoluciones judiciales dictadas sin oír al que la deduce ha sido vivamente controvertida dentro y fuera del país.

Pensamos que el condenado en juicio a desalojar un inmueble no puede deducir acción de despojo, por más injusta que sea aquella resolución. (cám. civ., t. 8, p. 205; t. 78, p. 427; t. 166, p. 168; sup. cort. nac., t. 54, p. 408). Mas, si el despojo ha sido decretado sin oírlo la acción debe prosperar por violación de la ga-



ranía constitucional de la defensa en juicio, (cam civ, t. 124, p. 140; sup. cort. nac., t. 15, p. 307, 335; t. 121, p. 281; t. 123, p. 253, 388, 394). Esta conclusión nos parece tanto más justa cuanto no se acepta en nuestra jurisprudencia la oposición del tercero en los juicios (*terce oposicion*). Manual, t. 3, p. 360 (1).

x 13.—Para que proceda el interdicto de adquirir, (2) son requisitos indispensables:

I. — Que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho, entendiéndose por tal, todo documento o prueba, sino completa, para acreditar el dominio, por lo menos suficiente para acreditar la presunción de que la cosa que se intenta poseer es del que solicita la posesión. Corresponde entonces en caso de oposición que el actor justifique la mera detentación de la cosa por el demandado, sin ánimo de tenerla como dueño o usufructuario, (art. 564 cód. proc. civ. y cám. civ. t. 7. p. 265; t. 18, p. 408; t. 123, p. 422; t. II, p. 16, 7.ª serie). (3)

Nuestros tribunales han declarado que el interdicto se acuerda no al que tiene la posesión, ni al que la ha perdido, sino al que nunca la gozó, y que se ha introducido precisamente en beneficio del que con un título de dominio tiene derecho a la posesión como el comprador, (cód. civ. art. 2468), y no la posesión misma a fin de que la adquiera brevemente y sin las dilaciones de un juicio ordinario, cuando nada se oponga a ello.

«La generalidad de los términos del art. 564 del cód. de proc. civ. y las disposiciones subsiguientes, demuestran sin dejar lugar a dudas que nuestro legislador ha entendido conceder el interdicto

(1) Ferrara, op. cit., p. 229 examina la cuestión ampliamente y llega a nuestra misma conclusión: en igual sentido Ibaguren, op. cit., p. 42,

(2) Es un complemento del art. 2468 del cód. civ. Lafaille, op. cit., t. 1, p. 261.

(3) La sup. cort. nac., t. 30, p. 169, ha dicho: «La acción sumaria para adquirir la posesión, no corresponde a los que tengan un título de compra u otro análogo, sino a los hijos o parientes más próximos que tienen derecho de heredar por testamento o abintestato, o al que presenta un testamento en debida forma, que lo instituye por heredero; cám. civ., t. 24, p. 180.

La cám. civ., t. 100, p. 38 ha dicho que procede el interdicto de adquirir la posesión del local, muebles y útiles de una sociedad de socorros mutuos, si los reclamantes justifican representar la voluntad de una asamblea válidamente constituida.

a todo tenedor de título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho, a diferencia de otras legislaciones que, como la actual de enjuiciamiento civil de España, lo limitan al título hereditario.

«Y es forzoso también tener en cuenta, que nuestra ley adjetiva contiene también otra diferencia de la española, que le ha servido de fuente, cual es la de que para que el interdicto proceda no es necesario que la propiedad se encuentre sin detentador.

«Todo lo contrario resulta del art. 570 que preceptúa el procedimiento a observarse, cuando el interdicto se dirige contra el detentador de los bienes etc.» (cám. civ. t. 18, p. 408).

Se acuerda también el interdicto de adquirir en favor del heredero que exhibe el testamento sin vicio alguno en que fuera instituido y justifica la muerte del causante, (art. 3413 y 3411 cód. civ.; en contra cám. civ. t. 4, p. 30).

En presencia de la demanda, el juez debe examinar el título en que se funda, y si no lo hallara suficiente la rechazará de plano, sin perjuicio de la revocatoria o apelación en subsidio que podrá interponerse dentro de tercero día (art. 563 y 567 cód. de proc. civ.).

Si el juez hallase suficiente el título y la demanda se ha dirigido contra el detentador de los bienes, se le citará a juicio verbal, con intervalo de tres días, entregándole copia de la misma y de los documentos con que ésta se hubiese instruido, (art. 570 cód. de proc. civ.).

En el mismo caso, pero cuando no se conoce el nombre del detentador, se cita por el término de treinta días a los que se consideren con derecho a la posesión. La citación ha de hacerse por edictos que se publicarán en dos diarios durante quince días, designando claramente los bienes y la acción intentada (art. 568 cód. cit.). Si en virtud de los edictos compareciere alguna persona, se procederá en la forma ya indicada es decir se le citará a juicio verbal. En este juicio verbal, se procede como lo hemos indicado respecto a las acciones de mantener y de recuperar la posesión.

14.—Sobre interdicto de obra vieja, véase Manual, t. 1, p. 276.

15.—La posesión y la tenencia se encuentran además protegidas en la ley, por acciones civiles y penales.





Si el acto de turbación no tiene por objeto hacerse poseedor el que lo ejecuta, la acción del poseedor será de indemnización de daño, (art. 1497 cód. civ.).

Puede deducirse acción penal, contra el que por violencia, engaño o abuso de confianza despojare a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble; contra el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble destruyere o alterare los términos o límites del mismo; contra el que con violencia o amenazas turbare (1) la posesión de un inmueble (art. 181 cód. pen.).

Reprime también la ley al que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; al que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas; al que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represare, desviare, o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas, (art. 182 cód. cit.).

La acción penal se acuerda también contra el que destruya, inutilice o dañe una cosa inmueble, (art. 183 cód. penal). (2)

---

(1) Véase sobre la acción penal, Aguirre, «Código penal de la República Argentina»: p. 273; *Blanche*, «Etudes pratiques sur le code penal», t. 6, p. 656; *Chauveau*, «Théorie du code penal», t. 6, p. 206; *Orvelliari*, «Il codice penale per il regno d'Italia», t. 8, p. 294, 295, 307, 308; *Crivellari*, «Concetti fondamentali di diritto penale», p. 1198, 1201, 1203; *Garraud*, «Traité théorique du droit penal français», t. 6, p. 396; *Grolzard*, «El código penal de 1870», t. 6, p. 381, 389; *Hidalgo García*, «El código penal conforme a la doctrina establecida por el tribunal supremo», Madrid 1908, t. 2, p. 730, 732; *Lucchini*, «Il codice penale italiano, e codice di procedura penale», Torino 1897, p. 463, 465; *Pacheco*, «El código penal, concordado y comentado», 6.ª edic., Madrid 1888, t. 3, p. 328, 330, 332; *Tejedor*, «Curso de derecho criminal», t. 1, p. 316; *Viada*, «Código penal reformado de 1870», t. 3, p. 459, 461.

(2) Sobre daño en materia penal, véase, Código francés, art. 444 y s.; 479; Cód. ital., art. 424 primera parte; 429, 430; *Aguirre*, op. cit. p. 301 203; *Blanche*, op. cit., t. 6, p. 629 y s.; t. 7, p. 513; *Chauveau*, op. cit., t. 6, p. 166 y s.; 463; *Crivellari*, op. cit., t. 8, p. 313, 314, 334, 341, 342; *Garraud*, op. cit., t. 6, p. 369, 492; *Grolzard*, op. cit., t. 8, p. 194, 264, 466, 468, 469, 474, 477, 478, 480; *Hidalgo García*, op. cit., t. 2, p. 913, 919, 1046, 1053 y s.; *Lucchini*, op. cit., p. 466, 472, 473; *Pacheco*, op. cit., t. 3, p. 408, 418, 446, 490; *Viada*, op. cit., t. 3, p. 614, 621, 775, 776, 794, 796, 800.

Se caracteriza el delito de daño por el movíl que guía al agente: se propone éste perjudicar por odio o por venganza hacia el dueño de la cosa objeto del delito, sin perseguir ningún provecho de lucro o posesión.

El inquilino que rompe los papeles de la casa de donde ha sido desalojado, o que destroza una chimenea, comete el delito de daño, si ha obrado por el movíl indicado; si se apodera de esos objetos, se hará responsable de hurto. Existen ciertos daños de una naturaleza especial, que la ley califica en otra categoría, *putá*: el incendio, (art. 186 cód. cit.).

La acción civil de daño dura un año, como la posesoria, (art. 4037 cód. civ.); mientras que la acción penal puede durar de uno a cuatro años, según los casos, (art. 62, inc. 2, 181, 182, 183, 184, cód. pen.).



## CONCURSO CIVIL DE ACREEDORES (a)



1.º *Principios generales.* — 2.º *Personas que pueden ser concursadas.* — 3.º *Competencia.* — 4.º *Efecto del concurso:* a) *capacidad del concursado;* b) *relación de los acreedores con el concursado;* c) *intereses de los créditos;* d) *exigibilidad de las obligaciones;* e) *embargos anteriores.* — 5.º *Notificación a las partes.* — 6.º *Designación de síndico.* — 7.º *Llamamiento a los acreedores y ocupación de los bienes.* — 8.º *Verificación de créditos.* — 9.º *Realización del activo.* 10. — *Graduación de créditos.* — 11. *Solución del concurso:* a) *perención de instancia;* b) *desistimiento;* c) *distribución del activo;* d) *adjudicación de bienes;* e) *prescripción.* — 12. *Administración de los bienes de la masa.* — 13. *Beneficio de competencia y pensión alimenticia.*

1.º — El concurso civil se abre cuando el patrimonio del deudor no comerciante, es entregado a un síndico, para que, con el

(a) Véase sobre concurso civil de acreedores **Bevilacqua Clovis**, «Código civil dos Estados Unidos do Brazil», t. 5, p. 317; Rio de Janeiro, 1916; **Bonel y Sánchez**, «Código civil español», t. 4, p. 902, Barcelona, 1891; **Caravantes**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 3, p. 139, edic. Madrid 1858; **Castro M. A.** «Práctica forense», ps. 249, 253, 2.ª edic. Buenos Aires 1863; **Chiovenda**, «Principii di diritto processuale civile», 3.ª edic., p. 246; **De la Colina**, «Derecho y legislación procesal», 2.ª edic., t. 2, p. 337; **De la Eda**, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», edic. 1856, t. 3, p. 222; **Esteves Sagul**, «Procedimientos civiles en el foro de Buenos Aires», p. 505; **Gómez de la Serna**, «Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil», edic. 1857, p. 112; **Ibañez**, «Derecho procesal español», p. 288; **Jurisprudencia Argentina**, t. 1, ps. 110, 399, 661, 701, 702, 715, 851, 885; t. 2, ps. 136, 451, 547, 569, 927; t. 3, ps. 48, 139, 353, 1004; t. 4, ps. 165, 655; t. 5, ps. 116, 188, 322; t. 6, ps. 72, 98, 119, 151, 153, 211, 308, 436,

contralor de los interesados y de la justicia, se pague a los acreedores de acuerdo con las prescripciones legales (1).



464, 603, 626; t. 7, p. 66, 136, 266, 293, 361, 362, 445, 447, 521; t. 8, p. 269, 318, 396, 399; **La Serna y Montalban**, «Procedimientos judiciales», t. 2, p. 172; **Lastres**, «Procedimiento civil», t. 2, p. 172; **Manrosa y Navarro**, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», edic. 1889, t. 5, p. 5; **Padilla F. E.**, «Anotaciones al nuevo código de procedimiento en lo civil», p. 175; **Parry E.**, «El concurso civil de acreedores»; **Bous**, «Ley de enjuiciamiento civil», edic. 1881, t. 3, p. 7; **Robles Pozo J.**, «Derecho procesal de España», t. 2, p. 17; **Rodríguez**, «Comentarios al código de procedimientos», t. 3, p. 185.

(1) El concurso civil de acreedores no existe en Francia ni en Italia; fué tomado por nosotros de la legislación española, que al adoptarlo siguió las enseñanzas del derecho romano.

Al finalizar la edad media el derecho común italiano y español, había elaborado totalmente el instituto que nos ocupa, modelándolo sobre bases muy semejantes. En el primero la cesión de bienes constituía un beneficio a favor del deudor de buena fe comerciante o no comerciante que por ese medio se libraba de la prisión, aunque incurría en otras incapacidades y vejaciones: debía comparecer ante el tribunal desnudo o cuasi desnudo, y sentarse en la piedra del vituperio; otras veces era obligado a tocarse con una gorra amarilla, verde ó azul, le estaba prohibido usar armas, era condenado a perder la nobleza y la capacidad para determinadas funciones públicas. En cuanto al procedimiento del juicio era análogo al nuestro.

El juicio se abría por decreto del juez (citatio editale); esto o los acreedores designaban uno o más síndicos encargados de administrar los bienes, de enagenarlos y de deducir las acciones de la masa; los acreedores tenían la obligación de exponer ante el mismo sus pretensiones. El deudor debía manifestar sus bienes, con excepción de su lecho cotidiano, y se autorizaba hasta el empleo de la tortura para investigar la exactitud de su exposición; los arreglos entre deudor y acreedor se celebraban en asambleas o juntas. (Pertile, «Historia del derecho italiano», t. 6, p. 384, 2.ª parte, 2.ª edic.).

En el derecho común español regían análogos principios: la cesión de bienes constituía un beneficio del deudor de buena fe, y se imponía después de transcurridos seis meses de privación de la libertad por falta de pago de las deudas; el concursado era entregado al acreedor para que le pague con su oficio o con su servicio, trayendo una argolla al cuello. «Desde que se admitía la cesión de bienes del deudor y se formaba solemnemente el concurso, quedaba aquel como muerto, sin voluntad, sus contratos posteriores eran inaneablemente nulos: padecían igual vicio las confesiones ulteriores que hacía de otros débitos fuera de los incluidos en la relación de acreedores, porque no estaba en su arbitrio perjudicar a los legítimos, ni contraer deudas supervinientes». (Castro, op. cit., p. 253).

El juicio de quitas y esperas se encontraba autorizado por las leyes españolas. Sin embargo en el Río de La Plata el art. 14 de las ordenanzas para la Real audiencia establecía: «Que los Oidores, no alean destierros, ni den cartas de esperas por deudas, pero si que por término de seis meses, puedan librar cartas de esperas a personas particulares y no en general, constando primero que la tal persona por causa legítima

El concurso puede ser voluntario o necesario. Es voluntario cuando el deudor abandona sus bienes (1) a sus acreedores presentándose al juez competente; y es necesario cuando el deudor es compelido a ello por instancia de acreedor legítimo (art. 718 y 719, cód. de proc. civ.).

Los bienes deben ser administrados por un síndico que obra como mandatario común del deudor y de los acreedores con facultades limitadas por la ley (art. 731, 737, 739, etc. cód. cit.; Parry, op. cit., p. 190, s.).

Se abre el concurso voluntario por medio de un escrito en que el deudor se presenta al juez competente pidiendo se le declare en tal estado. Debe acompañar al mismo una relación de su activo y pasivo, con expresión del nombre y domicilio de sus acreedores y deudores y con las explicaciones necesarias sobre sus negocios (art. 718 y 726 cód. cit.).

El concurso necesario lo decreta el juez, a pedido de acreedor quirografario legítimo (2) que demuestre que todos o la mayor parte de los bienes del deudor se hallan embargados a consecuencia de ejecuciones seguidas también a virtud de créditos quirografarios (art. 719 cód. cit., cá. civ. t. 43, p. 208). (3)

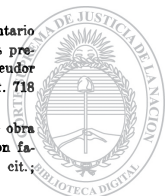
---

que han subsecido no pueden pagar, y dando fianzas legas llanas, y abonadas que pasados los seis meses pagará, y en este término no se pueda dar por una misma deuda más de una vez». Véase Castro, op. cit., p. 253; Esteves Sagui, op. cit., p. 505, quienes no citan la ley precedente.

(1) Sostiene Parry, que «Esta facultad, puesta por la ley en manos del deudor, puede constituirse en una arma contra los acreedores demandados exigentes. Basta recordar, para apreciar la magnitud de la amenaza, que el deudor puede hacer desaparecer en cualquier momento el derecho de preferencia adquirido por el primer embargante, pues, la sola declaración de concurso determina la aplicabilidad de las disposiciones del cód. civil sobre concurrencia de créditos, lo que equivale a prescindir, en absoluto, del orden en que han sido trabados los embargos». (Parry, op. cit., p. 99). La afirmación es exacta en cuanto a la desaparición del privilegio, pero no en lo que se refiere a la aplicabilidad del cód. civil que precede en ambos casos. V. Manual, t. 3, p. 291 y 292.

(2) La legitimidad del crédito no es indispensable que resulte de sentencia; basta, por ejemplo, un documento reconocido o debidamente protestado (Jurisprudencia Argentina, t. 3, p. 353; Cá. civ. t. 3, p. 420).

(3) Estos requisitos no rigen para el concurso voluntario (Jurisprudencia Argentina, t. 3, p. 48). El no comerciante debe ser considerado insolvente, cuando hay apariencia notoria de que sus bienes no bastaran







Sólo en el caso de que se trate de concurso necesario, puede el deudor deducir oposición al mismo, dentro de los tres días siguientes a esa declaración, (Manual, t. 3, p. 538) la que deberá fundar en el hecho de faltar alguno de los requisitos exigidos por la ley, para su procedencia (1). Las partes deben, en tal caso, unificar representación (Manual, t. 3, p. 104).

La oposición deducida por el deudor no suspende las medidas tendientes a asegurar los bienes y papeles del mismo (art. 723 cód. cit.), y se substancia de acuerdo a los trámites establecidos para el juicio ordinario, con las siguientes modificaciones: 1.ª Los traslados serán por tres días improrrogables; 2.ª Sólo habrá prueba por conformidad de los interesados, o, en su defecto, cuando el juez lo considere necesario; 3.ª El término de prueba será de diez días improrrogables; 4.ª Pasado el término probatorio, se dictará sentencia sin alegatos ni vista pública; 5.ª Si se interpusiere apelación, se concederá en ambos efectos y sólo en relación (art. 724 cód. cit.). Cuando se hace lugar a la oposición, las cosas se reponen al estado anterior y el síndico debe rendir cuentas de su administración (art. 725 cód. cit.).

2.º — El deudor no comerciante goza del beneficio del concurso civil: (2) los comerciantes, los consignatarios, comisionistas, etc., pueden ser declarados en quiebra, pero no en concurso civil, si cesan en sus pagos (art. 718 cód. de proc. civ.; cám. civ. t. 10, p. 386; t. 124, p. 359; t. 153, p. 275). Las personas jurídicas de existencia posible serán declaradas en quiebra o concursadas civilmente, según tengan o no el carácter de comerciantes.

Es posible, asimismo, el concurso de una sucesión (3) y en

---

para el pago de sus deudas (Thaller, «Des faillites», t. 1, núm. 123: *Jurisprudencia Argentina*, t. 5, p. 188).

La ley supone, como se ve, que en el concurso civil existe más de un acreedor. (Confr. Parry, op. cit., p. 119).

(1) Los acreedores no pueden deducir oposición al concurso de un deudor, (cám. civ. t. 123, p. 22).

(2) El comerciante que ha perdido su estado de tal puede ser concursado civilmente, (cám. civ., t. 75, p. 275; Parry, op. cit., p. 105).

(3) Confr. Parry, op. cit., p. 125. «El concurso de la sucesión no importa el de cada uno de los herederos, ni la confusión de patrimonios que resulta de la aceptación pura y simple de la herencia (art. 3342 y 3345, cód. civ.), puede producir tal efecto, primero porque no hay precepto que



tal caso, el síndico ejercerá las funciones de curador de la misma, (arg. del art. 3377 cód. civ.) (1). La aceptación pura y simple de la herencia impide la declaración del concurso, en tanto no se justifique la insolvencia de aquélla y la del heredero (cám. civ. t. 67, p. 295). La razón es porque el heredero que ha aceptado la herencia está obligado al pago de las deudas y cargas de la sucesión (2). (Art. 3343 cód. civ.).

El mandatario necesita poder especial para ceder los bienes de su mandante y de ahí que el esposo tampoco puede hacer lo mismo con los bienes de la esposa (cám. civ., t. 138, p. 434). Se trata de un acto de disposición y por consiguiente no basta la facultad de administrar (art. 1880 cód. civ.; Parry, op. cit., p. 110).

3.º — Es competente para conocer del concurso el juez del domicilio del deudor (Manual, t. 1, p. 341; Parry, op. cit., p. 106).

Si se trata del concurso de una sucesión, el juez que conoce en esta es el que debe declarar si procede o no el concurso y entender en él, (Manual, t. 1, p. 340; Parry, op. cit., p. 133). El concurso ejerce fuero de atracción sobre las acciones deducidas contra el deudor o la masa; pero no sobre las deducidas por ella, (Manual, t. 1, p. 341; Parry, op. cit., p. 152). Las causas falladas en primera instancia sólo deben acumularse después de ser resueltas por el superior que corresponda, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 136; Parry, op. cit., p. 156). Se ha sostenido que no procede la agregación al concurso de las ejecuciones hipotecarias, que tramitan antes otros jueces, aunque estos sean de distinta jurisdicción territorial. (cám. civ., t. 135, p. 158; Parry, op. cit., p. 158). No es aceptable tal doctrina porque el art. 3938 del cód. civil, según el cual, los acreedores hipotecarios no están obligados a esperar los resultados del concurso general para proceder a

---

así lo disponga, y segundo porque aunque el heredero responda en tal caso con sus bienes propios de las deudas del causante y de la sucesión, su responsabilidad está limitada a su parte viril en la herencia» (art. 3490, 3492, y 3495 cód. civ.); *Jurisprudencia Argentina*, t. 3, p. 965.

(1) El concurso de la sucesión no hace desaparecer el privilegio del acreedor que pidió y obtuvo la separación del patrimonio, (cám. civ., t. 197, p. 363).

(2) Véase la doctrina contraria en Parry, op. cit., p. 127 y 132 y *Jurisprudencia* ahí citada.



ejercer sus acciones contra los bienes gravados con hipoteca, aunque la acumulación de esas acciones al concurso general, dado que sólo ante el juez de este podría cumplirse la disposición final de dicho artículo, o sea, la determinación de la cantidad que se juzgare suficiente para el pago de los créditos que sean privilegiados, la que debe ser consignada o afianzada o la caución de acreedores de mejor derecho a que aluden las leyes procesales.

«Los motivos de conveniencia que abonan los principios antes sentados son evidentes porque la coexistencia dentro de la república de diversos concursos formados a una misma persona ante distintos tribunales, o de un concurso y de juicios independientes promovidos contra el deudor común, haría, de una parte difícil, si no imposible, la distribución de los bienes de dicho deudor en la forma establecida por la sección 2.ª, libro 4.º del cód. civ., y de otra parte impediría la economía de gastos, simplicidad de procedimientos y eliminación de conflictos entre las autoridades judiciales llamadas a tomar medidas inmediatas o por exhorto sobre los mismos objetos, resultados todos de conveniencia recíproca para acreedores y deudor a que responden los juicios universales». (Sup. cort. nac., t. 97, p. 154; t. 121, p. 388; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 569).

4.º — La declaración de concurso produce efectos sobre los bienes y sobre la persona del deudor:

a) El concursado no es un incapaz de hecho. Sólo se encuentra sometido a ciertas restricciones: no puede deducir acciones, ni contestarlas si ellas versan sobre su patrimonio (1); no le es permitido disponer de sus bienes, porque se decreta en su contra inhibición para hacerlo. En cambio, está facultado para estar en juicio por los derechos que no se refieren a su patrimonio; para adquirir toda clase de bienes; para intervenir en su concurso en la forma determinada por la ley y para practicar otros actos de la vida civil. (Sobre el concepto del patrimonio véase Manual, t. 4, p. 19).

No puede, asimismo, gravar sus bienes por obligaciones posteriores a la cesión de bienes, principio que rige tanto para las

(1) Dicha restricción rige aun cuando esté pendiente el incidente de oposición formulado por el concursado, (Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 702).



obligaciones contractuales, como para las *ex delicto*. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 139 con nota de Leonidas Anastasi, donde se examinan interesantes problemas relativos a la capacidad del concursado, a los derechos inherentes a su persona y a las adquisiciones por herencia, donación o legado; id. op. cit., t. 4, p. 939).

Tampoco puede obligar con sus declaraciones al concurso (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 715, 885; t. 4, p. 655).

b) Los acreedores son terceros con respecto al concursado. Ellos se lee en un fallo—no son sucesores a título universal del deudor, pues no reúnen los caracteres que para reconocerle como tales establece la primera parte del art. 3263 del cód. civ. En caso de concurso no reciben los acreedores todo ni parte del patrimonio del deudor; se limitan a una ejecución colectiva de los bienes para dividirse el producto; no cambia su carácter que un acreedor accione sólo o reunido con los otros, y el fin es el mismo aunque distinto el procedimiento. Los acreedores en concurso o aisladamente, podrían ser considerados como causa habientes del deudor cuando, subrogándose en los derechos de éste, ejercitan las acciones que le corresponden para aumentar su patrimonio y tiene así bienes en que hacer efectivo su crédito. Pero cuando demandan al deudor para que se les pague lo debido, son terceros respecto a aquél y ejercen un derecho que les es propio y que se funda en el contrato u obligación cuyo cumplimiento pide. (Machado, nota al art. 3263 del cód. civ.; Segovia, nota 120 al 1200, 111 al 1196, y nota 7.<sup>a</sup> al art. 3265). Terceros son los que no han figurado en la convención y por lo tanto en esa calificación están comprendidos los acreedores. (Machado, nota al art. 3263; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 451)

c) Desde el momento en que se decreta el concurso, los créditos contra el mismo dejan de devengar intereses, pues de lo contrario no habría base para hacer una distribución igual de todos los créditos quirografarios (arg. del art. 82, ley de quiebras; cám. civ., t. 149, p. 382; t. 176, p. 446). En cuanto al acreedor hipotecario, tiene derecho a cobrar intereses. (1) También pue-

---

(1) Durante dos años y los devengados mientras dura el juicio de ejecución hasta el efectivo pago, (art. 3936 cód. civ.).



den cobrar los acreedores con privilegio especial o con garantía prendaria (art. 82, ley de quiebras: cárn. civ. t. 94, p. 296; JURISPRUDENCIA ARGENTINA t. 3, p. 1004 con nota de L. Anastasi).

d) Las obligaciones del deudor se hacen exigibles desde el momento en que se declara el concurso, aunque no estuviera vencido el plazo de las mismas, (art. 572, cód. civ.).

e) Los embargos decretados sobre los bienes del deudor se levantan, para ser sustituidos con la ocupación de los mismos y con la inhibición que se decreta por el juez del concurso, (Perry, op. cit., p. 162).

5.° — Para regularizar el procedimiento en un juicio donde tienen interés tantas personas (concurrido, síndico, acreedores), la ley ha adoptado formas especiales de llevar a su conocimiento las resoluciones que se dicten en el mismo.

El síndico figura como parte en el juicio y debe hacerse saber las resoluciones que se dicten, personalmente o por nota de acuerdo con las reglas ordinarias (Manual, t. 1, p. 253, 255, 258, etc.).

Debe notificarse al deudor: 1.° el auto en que se le declara en concurso. (art. 720 cód. de proc. civ.); 2.° todas las resoluciones que se pronuncien en el incidente de oposición (en la forma ordinaria, es decir, personalmente o por nota) (art. 724 cód. cit.); 3.° la rendición general de cuentas presentada por el síndico, una vez terminada su administración (art. 739 cód. cit.); 4.° la convocatoria a todas las juntas que hayan de celebrarse (art. 751 cód. cit.).

En cuanto a los acreedores, se les notifica por edictos o por cédula determinadas resoluciones. Debe notificárseles por edicto: el auto que ordene la formación del concurso (1) y la citación de los acreedores (art. 728 cód. cit.); el decreto que manda poner a la oficina la rendición mensual de las cuentas del síndico (art. 731 y 732 cód. cit.); la solicitud para deducir demandas a nombre del concurso (art. 737, cód. cit.); la cuenta general que debe rendir el síndico, terminada su administración (art. 739 cód. cit.); la resolución que convoca a junta, sea para verificar los créditos.

(1) Que se publicará en dos periódicos que designará el juez y en el lugar donde tenga residencia el deudor, art. 728 cód. cit.



sea para observar la graduación, sea con cualquier otro objeto, (art. 748, 758 cód. cit.).

El resultado definitivo del concurso se notificará a los acreedores reconocidos, por medio de cédula e insertará en los periódicos en que se haya publicado la declaración del concurso (art. 744 cód. cit.).

En los casos en que surge un juicio ordinario con motivo del concurso recuperan su imperio las reglas comunes sobre notificaciones (Manual, t. 1, p. 252, s.). Tal ocurre: con las acciones que deduzca el síndico a nombre de la masa contra terceros (art. 735 cód. cit.); con el incidente de oposición (art. 724 cód. cit.); con la acción de desconocimiento de un crédito admitido por la mayoría de los acreedores (art. 755 cód. cit.), o con el juicio de verificación del crédito desconocido, (art. 756 cód. cit.). etc.

6.º — Sea el concurso voluntario, sea necesario, el juez designa un síndico encargado de incautarse del patrimonio del deudor y de representar a la masa (art. 726, 730 cód. cit.). El síndico obra en interés del deudor y de los acreedores, bajo la vigilancia y control del juez. Su intervención perdura hasta que se produzca la rehabilitación del fallido (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 547). La intervención en el juicio del deudor y de los acreedores sólo se produce en los casos taxativamente enumerados en la ley (art. 718, 719, 721, 722, 733, 737, 738, 739, 740 741, 742, 748, 751, 753, 760, 765, 766, cód. de proc. civ.; ley núm. 11.077, art. 1; cárn. civ., t. 1, p. 550; t. 42, p. 102; t. 47, p. 109; t. 132, p. 15; t. 188, p. 269).

El síndico no podrá deducir demandas a nombre del concurso, sin la autorización de la mayoría de acreedores verificados. Si contra la voluntad de la mayoría algún acreedor quisiera seguir o iniciar alguna demanda podrá hacerlo a su costa, debiendo indemnizarse de los gastos, hasta la concurrencia de la suma con que hubiere beneficiado al concurso. (art. 737 cód. cit.). En este último caso el acreedor, con la salvedad apuntada, representa a la masa, como podría haberlo hecho el síndico (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 4, p. 165).

El síndico, como todo mandatario, es responsable de sus gestiones y puede ser removido con justa causa por el juez, (art. 733



cód. cit.; cádm. civ., t. 44, p. 274; t. 47, p. 75). Es decir por faltas graves plenamente justificadas, (cádm. civ., t. 5, p. 204).

7.º — En el auto declarando concursada a una persona, el juez, además del nombramiento indicado, ordenará la ocupación de las pertenencias del deudor y de los libros y papeles de sus negocios (1); fijará un término no menor de quince días, ni mayor de sesenta, para que los acreedores presenten (2) al síndico los títulos justificativos de sus créditos, (art. 727 cód. cit.). Al ocupar los bienes, cuando hay dudas sobre la posesión de los mismos, deben seguirse las reglas que rigen la traba del embargo en el juicio ejecutivo (Manual, t. 4, p. 89).

Con el nombramiento de síndico, el deudor queda separado de la administración de sus bienes e inhabilitado para ejercer acciones activas o pasivas con relación a los mismos. Es al síndico a quien corresponde intervenir en los juicios relativos al patrimonio como actor o demandado (art. 727, cód. cit.).

8.º — Toda persona que se pretenda acreedora de un concursado, tiene que presentar al síndico, dentro del término fijado por el juez, los documentos que justifiquen su carácter de tal y asistir a la junta de verificación, donde se discutirá y decidirá la justicia de sus pretensiones, (art. 749 cód. cit.).

Los acreedores que siguen juicio contra el deudor a la época de su concursamiento donde consta la deuda no están obligados

---

(1) La ocupación se hace previo inventario ante el escribano que propone el síndico. Ella no puede extenderse a los bienes dados en prenda por el deudor, (cádm. civ., t. 101, p. 32; Parry, op. cit., p. 178).

(2) En la edad media se abría el juicio de concurso con edicto del juez (de ahí tomaba también el nombre de *processo editale* o *processus cridaie*) invitando a los acreedores del deudor a presentar en su tiempo más o menos breve, según las circunstancias del caso sus reclamaciones, bajo pena de perder sus derechos con relación a los comparecientes. Esto tenía lugar, no sólo en el concurso voluntario sino también cuando varios acreedores habían pedido la posesión de los bienes de su deudor y aún podía hacerse de oficio por el juez (Perille, op. cit., volumen 6, p. 392, parte 2.ª). En nuestra legislación todo el que se pretende con derecho a los bienes del concurso tiene que hacer verificar sus créditos sea este común o privilegiado. Sólo excepta a esta regla el acreedor hipotecario que puede solicitar formación de concurso particular para que se le pague inmediatamente con la finca gravada, (art. 3937 cód. civ.; cádm. civ., 1.ª, junio 14 de 1914, p. 228 y nota de L. Anastasi en *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 399). Ni siquiera están obligados estos acreedores a preparar los resultados del concurso general para ejercer sus acciones.



a presentar los títulos citados (arg. del art. 720 cód. cit. y cádm. civ. t. 91, p. 115).

El síndico presentará al tribunal un estado general de los créditos a cargo del concurso que se le hayan presentado refiriéndose en cada artículo por orden de números a los documentos presentados por los respectivos interesados (art. 747 cód. cit.). Presentado ese estado, el juez convocará a junta de acreedores para que procedan a discutir sus derechos.

No será admitida en la junta persona alguna en representación ajena, a no ser que se halle autorizada con poder bastante, que exhibirá en el acto al juzgado. Nadie podrá ser apoderado de más de un acreedor, ni el poder podrá ser tampoco conferido a un acreedor del concurso (art. 750 cód. cit.).

La junta se constituye bajo la presidencia del juez acompañado del secretario, con el síndico, el concursado, si asistiere, y los acreedores. (1) Para que estos últimos puedan intervenir y votar es necesario que sus créditos resulten del balance y libros del deudor o de los documentos que hubieren presentado al síndico con anterioridad a la celebración de la junta, (art. 726, 729, 748, 749, 751, cód. cit.). En ella los acreedores que la formaron son quienes resuelven por mayoría de votos los créditos que deben admitirse y los que deben rechazarse.

La mayoría se forma en este caso, y en las otras juntas a que sean convocados los acreedores, por la mitad más uno de los acreedores que concurran. Los ausentes, se entenderá que adhieren a las resoluciones que dicte la mayoría. No se tiene en cuenta, en estos casos, el monto de los créditos, (arg. de los arts. 748, 750 cód. cit. y JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 110).

En la junta se dará lectura del estado general de los créditos, de los documentos respectivos de comprobación, y del informe del síndico sobre cada uno de ellos (art. 752, cód. cit.).

Los acreedores serán sucesivamente llamados leyéndose la partida respectiva y los documentos e informes de su referencia.

---

(1) Si los acreedores no concurren a la junta de verificación, no obstante habérseles citado bajo apercibimiento, corresponde que se declaren legítimos los créditos que se reconozcan en el informe del síndico, (cádm. civ., t. 98, p. 408).





Todos los acreedores presentes y el deudor por sí, o por medio de apoderado, podrán hacer sobre cada partida las observaciones que juzguen conveniente. El interesado en el crédito o quien lo represente, responderá lo que creyere oportuno (art. 753 cód. cit.) (1).

La suerte de los acreedores varía según la voluntad de la junta: a) si un crédito no es objetado por el síndico, el concursado o algún acreedor presente queda definitivamente reconocido; b) si es observado por alguna de las nombradas personas, pero lo acepta la mayoría de los acreedores que tienen derecho a votar, queda verificado provisionalmente; c) cuando no hay mayoría a favor de la legitimidad de un crédito este debe rechazarse también con carácter provisional.

En los casos b) y c), la resolución de la junta puede ser modificada en juicio ordinario. El acreedor o acreedores disconformes con la verificación provisoria pueden deducir acción, a su costa, contra el titular del crédito. (2) Si resultaran vencedores deben ser indemnizados por la masa hasta la concurrencia de la suma en que se hubiere enriquecido al concurso, (art. 755 cód. cit.). El acreedor rechazado en la junta puede, a su vez, accionar contra el síndico para que se reconozca la legitimidad de sus pretensiones. Si el rechazo de la junta se fundara en no haber presentado los documentos justificativos de su crédito las costas serán a su cargo, aunque resulte vencedor en el juicio ordinario, (art. 756 cód. cit.). La prueba incumbe al que interviene como actor. (cám. civ., t. 134, p. 242).

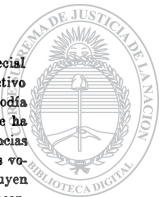
Los créditos posteriores al concurso no pueden verificarse por la junta, ni en juicio ordinario, porque no gravitan sobre la masa. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 139, con una jugosa nota de Leonidas Anastasi; cám. civ., t. 107, p. 301).

Es que como lo han resuelto nuestros tribunales: «Ninguna

---

(1) Téngase en cuenta que el balance presentado por el concursado, si bien está sometido a la aprobación o desaprobación de los acreedores, autoriza para votar y constituye un principio de prueba por escrito, que permite la prueba testimonial en el juicio respectivo si el crédito no fué verificado, (cám. civ., t. 158, p. 48; t. 157, p. 282).

(2) En el incidente no pueden intervenir los demás acreedores, que están representados por el síndico, cám. civ., t. 55, p. 39.



disposición legal autoriza la formación de un concurso especial para que el acreedor posterior del concurso pueda hacer efectivo su crédito sobre bienes determinados. Y es obvio que la ley no podía consignar tan extraño y arbitrario privilegio. La persona que ha contratado con un concursado debe atenerse a las consecuencias de su propio hecho. El efecto necesario de la cesión de bienes voluntaria o forzosa, es la afectación de todos los que constituyen el patrimonio del deudor y de todos los que en lo sucesivo se incorporen al mismo, hasta el íntegro pago de todos los créditos, que dieron lugar al concurso. Hay un verdadero desapoderamiento, que no puede ser menoscabado por obra del propio deudor y que no reconoce más excepciones que la que autoriza el art. 800 del cód. civ. al acordar en limitadísimos casos el beneficio de competencia al deudor, y la que pudiera resultar de trabajos realizados en beneficio de la masa», (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 142).

9.º — El concurso no es otra cosa que la ejecución colectiva de los bienes del deudor común, y de ahí que el síndico esté en el deber de reducir a dinero los bienes del mismo, a menos que la mayoría de los acreedores no resolviese lo contrario (art. 735 cód. proc. civ., JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 6, p. 211).

Para el remate de los bienes del concurso, su aprobación y otorgamiento de las escrituras de venta, se observarán las formalidades prescritas para el juicio ejecutivo (art. 736 cód. cit.).

La adjudicación a los compradores se hará por las dos terceras partes del último avalúo, a no convenir otra cosa los acreedores y el deudor (art. 738 cód. cit.).

10.— La graduación de créditos tiene por objeto conocer la forma en que han de distribuirse los fondos provenientes de la enajenación de los bienes del deudor y de preparar la adjudicación de los bienes (art. 761, 765 cód. cit.).

Dentro de los quince días siguientes a la verificación, el síndico forma el estado de la graduación de créditos, con arreglo al derecho común, (art. 757 cód. cit.). Dicho estado y antecedentes del mismo deben mandarse poner a la oficina por quince días para que puedan inspeccionarlo los acreedores (art. 758 cód. cit.).



No mediando oposición en el término recordado el estado de graduación será definitivamente cerrado por el juez, y no podrá ser objeto de oposición alguna ulterior. Si mediase oposición, ésta debe deducirse por escrito ante el juez del concurso y con expresión de las causas que la motiven, y se suspenderá la clausura del estado de graduación, hasta que haya pasado en autoridad de cosa juzgada la sentencia que se pronuncie sobre las dificultades suscitadas (art. 759 cód. cit.).

Si el juzgado no lograrse avenir a los interesados en audiencia verbal, llamaré autos para dictar la sentencia que corresponda. Todos los acreedores cuyos créditos hayan sido verificados, tienen derecho a presentarse, a su costa, para ser oídos sobre las dificultades suscitadas. Esas dificultades, en cuanto sea posible, serán resueltas en una sola sentencia, oído el dictamen del síndico y precediendo las conclusiones del ministerio público. Las costas no serán pagadas por la masa, sino por el acreedor que resultase vencido (art. 760 cód. cit.).

11. — El concurso civil puede terminar por perención de instancia, por desistimiento, por distribución de fondos, por adjudicación y por prescripción.

a) El concurso civil de acreedores es una ejecución colectiva de los bienes del deudor, y por consiguiente, un juicio donde procede la perención de instancia. (1)

b) La declaración de concurso no implica en manera alguna que los bienes del deudor pasen al dominio de los acreedores; (2) esto sólo ocurre en caso de adjudicación. De ahí, entonces, que el deudor pueda desistirse de su concurso y retomar los bienes, siempre que pague a sus acreedores, antes de que se produzca la venta de los bienes o la adjudicación.

Aun más: la cesión de bienes voluntaria puede ser retractada, si con ello no se causa perjuicio o lesiona el derecho de terceros, porque al hacerlo el deudor ejerce una facultad acordada por la ley y no el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo,

(1) Después de escribir el t. 3. de este **Manual** hemos reflexionado con más detenimiento y hoy pensamos de acuerdo con las enseñanzas de **Farré**, op. cit., p. 253. a., que la perención procede en el concurso civil de acreedores (véase **Manual**, t. 3, p. 250).

(2) Conf. **Farré**, op. cit., p. 232.



antes de que produzca sus efectos, por no haberse presentado acreedor alguno (cám. civ. t. 44, p. 365; t. 55, p. 396).

c) El producto de los bienes del concurso se distribuirá a prorrata entre los acreedores, a no ser que haya causas legítimas de preferencia. Las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas. Si al hacerse la distribución de los fondos hubiesen acreedores verificados provisoriamente, sus dividendos quedarán depositados en el Banco de la Nación Argentina, hasta la resolución definitiva, sin que en ningún caso estos fondos puedan destinarse al pago de otras obligaciones que a aquéllas a que hubiese dado lugar la verificación provisoria. Lo mismo se procederá respecto a los acreedores que hubieran sido objetados por el síndico, por el deudor o por algún acreedor, para el caso en que el fallo les fuese favorable. Los acreedores hipotecarios y los que tengan privilegio especial respecto de los cuales no haya habido oposición, o que hayan obtenido sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, (1) no estarán obligados a esperar los resultados del concurso general, y serán pagados con el producto de los bienes afectados al privilegio o hipoteca, sin perjuicio de obligarles a dar caución de acreedores de mejor derecho. El sobrante, si lo hubiere, entrará a la masa, y por lo que faltare del capital concurrirán a prorrata con los acreedores personales (2). Si antes de liquidado definitivamente el derecho de preferencia de algún acreedor privilegiado o hipotecario, llega la ocasión de dar un dividendo, se le considerará en la calidad de acreedor personal, y la cuota que le tocase quedará en reserva para recibir el destino que le corresponda, según la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (art. 761, 762, 763, 764, cód. cit.).

En beneficio de los acreedores la ley permite que durante la

(1) Nuestros tribunales han declarado unas veces que el derecho de estos acreedores puede ejercerse aún antes de que se aprueben los estados de verificación y graduación, *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 661; t. 2, p. 927), mientras otras han exigido este requisito, (op. cit., t. 1, p. 221). Nos parece que la última solución es la que corresponde, porque hasta entonces no puede afirmarse que el crédito sea privilegiado, (cám. civ., t. 188, p. 198).

(2) Estos acreedores pueden pedir, en el juicio de concurso, la venta de los bienes afectados a su crédito, (cám. civ., t. 102, p. 174; *Parry*, op. cit.).



tramitación del juicio se les reparta dividendos, a cuenta de lo que se le debe. Los acreedores que no presentasen los documentos justificativos de sus créditos o no hubiesen hecho verificar los mismos, no recibirán los dividendos, ni tendrán derecho a reclamarlos (art. 756 cód. cit.; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 6, p. 151).

d) La venta de los bienes es solo facultativa para los acreedores y de ahí que en cualquier estado del juicio, los acreedores quirografarios pueden, previo pago de las costas causídicas y de los créditos privilegiados, pedir la adjudicación de los bienes del deudor, y en tal caso los bienes le serán adjudicados en condominio, pudiendo conservarlos o dividirlos en la forma que determina el código civil, en el título «del condominio» (art. 765 cód. cit.).

Para la adjudicación de bienes rige el principio de que para resolver las dificultades suscitadas durante el concurso, prima la voluntad de la mayoría de acreedores (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 7, p. 362).

En esta adjudicación no se requiere ni la conformidad del deudor, ni la tasación de los bienes; estos se suponen, sin admitir prueba en contra, que representan el valor de las deudas (cám. civ. t. 100, p. 70; t. 127, voto del doctor Saavedra). (1)

Obsérvese que cuando no hay adjudicación, si el producido de los bienes es superior al pasivo debe devolverse al deudor el excedente.

e) Las obligaciones del deudor se extinguen cuando han transcurrido tres años desde la iniciación (2) del concurso. Si hubiese dolo o fraude, se necesita el transcurso de cinco años, después

---

(1) Aun cuando se trate de bienes inmuebles, no es necesaria la escritura pública, pues el concursamiento de una persona o su fallimiento son hechos generadores de derechos cuya adquisición se opera por ministerio de la ley. La transmisión del dominio en los casos que esos hechos producen ese efecto, surge de pleno derecho, y no está sometida, por consiguiente, a las solemnidades de forma exigidas para dar existencia legal a los actos jurídicos en que interviene la voluntad del hombre (art. 944 y 951 del cód. civ.). En los concursos como en las sucesiones, los acreedores, como los herederos, hacen valer sus derechos, y el reconocimiento de esos derechos, prestado por juez competente, no es un acto jurídico, sino judicial, que se extiende en el expediente y no en el protocolo de un escribano público, cám. civ. t. 149, p. 29, voto del juez Gelly.

(2) Y no desde su declaración, JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 7, p. 292, pero no hay concurso sin notificación del mismo, op. cit. t. 7, p. 447.



de cumplida la sentencia condenatoria (1). Como consecuencia de la extinción de las obligaciones debe mandarse levantar la inhibición de disponer de sus bienes y darse carta de pago al deudor, (art. 1 y 2 de la ley núm. 11077). (2)

Nuestros tribunales han declarado que las sumas depositadas como pertenecientes al concurso con anterioridad a la rehabilitación y carta de pago, no deben entregarse al ex concursado, y que si éste considera prescriptos los derechos de sus acreedores a esa suma, debe proceder por la vía que corresponda para obtener declaración en ese sentido y la entrega del dinero (Jurisprudencia Argentina, t. 6, p. 153).

No obstante se ha reconocido que debe mandarse levantar el embargo sobre los sueldos del deudor, devengados con posterioridad a la declaración del concurso, (op. cit. t. 6, pág. 308; t. 7, p. 445 y n. 1, misma página).

Así, pues los bienes cedidos por el concursado se destinan a satisfacer los créditos del mismo, siendo indiferente que no alcanzen a cubrirlos en su totalidad; en cuanto a las adquisiciones posteriores a la carta de pago las coloca fuera de la acción de los

(1) Es decir, debe existir delito, pues sin ello es imposible la condenación de que habla la ley, *Jurisprudencia Argentina*, t. 6, p. 464, n. 1.

(2) La sup. cort. nac. desechando la impugnación de inconstitucionalidad de esta ley ha dicho: «La ley expresada establece en lo pertinente que en los concursos civiles se extinguen todas las acciones del deudor siempre que no mediasen causas que le sometan al fuero criminal, tres años después de iniciado el concurso. Si bien dicho precepto lleva aparejada una limitación al derecho de los acreedores en los casos de concurso, ella no es sin embargo, inconsistente con las garantías relativas a la propiedad consagrada por los arts. 14 y 17 de la constitución, desde que esta última faculta al congreso para dictar leyes sobre bancarrotas, lo que implica necesariamente el poder de reglamentar el ejercicio de las acciones contra los fallidos y de autorizar su rehabilitación con el consiguiente descargo de obligaciones en los casos y en las condiciones que el legislador nacional juzgue convenientes (art. 67, inc. 11). La facultad de legislar sobre bancarrotas no puede considerarse limitada a las quiebras, de los comerciantes. Por el contrario, la amplitud de los términos del poder conferido al congreso, la analogía de las situaciones y los antecedentes de doctrina y de jurisprudencia de que se hace mérito en el fallo de la suprema corte de los Estados Unidos, recordado en el dictamen precedente (186 U.S. 181), demuestran que el propósito de los autores de la constitución ha sido autorizar la sanción de reglas destinadas a resolver la situación excepcional que se presenta en todos los casos de quiebras o de insolvencia, sean o no comerciantes, los deudores», *Jurisprudencia Argentina*, t. 7, p. 266).



acreedores del concurso, (Conf. Parry, op. cit. p. 245, 438 *passim*).

12. — Mientras se procede a la verificación y graduación de créditos o a la adjudicación de los bienes, etc, es necesario que alguien se encargue de la administración de los mismos, tarea que la ley ha encomendado al síndico, bajo el contrator de los interesados y del juez. Con ese fin, suele formarse uno o más incidentes (art. 746 cód. cit.) en los que debe procederse:

I. — A actuar, todo lo relativo a la enajenación de los bienes del concurso, a la cual se procederá inmediatamente, si la mayoría de acreedores no acordase lo contrario (art. 735 cód. cit.).

El producido de los bienes debe depositarse en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del juez del concurso. El juez podrá dejar en poder del síndico la suma que se juzgue necesaria para los gastos del concurso, mandando en caso necesario extrerlas del depósito (art. 734 cód. cit.).

II. — El síndico rendirá cuenta mensualmente del estado de la administración, previo depósito en la forma establecida, de las cantidades de dinero que recibiese por cuenta del concurso, acompañando los recibos que acrediten ese depósito. El expediente permanecerá en la escribanía a disposición de los acreedores que quieran examinarlo (art. 731, 732 cód. cit.).

III. — Terminada su administración, el síndico rendirá una cuenta general, que estará de manifiesto en la oficina actuaria durante quince días, a disposición del deudor y de todos los acreedores. Transcurridos los quince días sin hacerse oposición, el juez aprobará la cuenta. Las reclamaciones que se hicieren contra la cuenta se substanciarán en vía ordinaria con el síndico. En este juicio, los que sostengan la misma causa litigarán unidos y bajo la misma dirección (art. 739, 740, 741 cód. cit.).

13. — Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores, para no obligárselos a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna. El acreedor está obligado a conceder este beneficio (entre otros casos), al deu-



dor de buena fe que hizo cesión de bienes, (1) y es perseguido en los que después ha adquirido, para el pago completo de la deuda anterior a la cesión, pero sólo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo (art. 799 y 800, inc. 6.º, cód. civ.).

La concesión de este beneficio no se encuentra sometida a limitaciones de tiempo y perdura mientras existan bienes en las condiciones determinadas por la ley (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 5, p. 322). Nuestros tribunales han decidido que el sueldo del deudor, devengado con posterioridad a la declaración de concurso entró a formar parte de éste y no puede invocarse a su respecto el beneficio de competencia, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 701). La doctrina es errónea, no solamente porque así lo demuestra lo que hemos dicho sobre el patrimonio, (Manual, t. 4, p. 19 y 22), sino también porque han pasado los tiempos en que el deudor era entregado al acreedor para que trabajara en su beneficio, (ley 5.ª, tít. 6.º, libro 5.º del Fuero Juzgo. (2).

No hay que confundir el beneficio de competencia con la pensión alimenticia. Se acuerda ésta, por aplicación anológica del art. 59 de la ley de quiebras, al deudor de buena fe y no puede pasar de tres meses, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 851); en ella para nada juega la época en que los bienes ingresaron en la masa.

Sólo por desconocimiento de principios tan claros ha podido resolverse: que la pensión alimenticia debe pagarse hasta que se levante el concurso, (cám. civ., t. 131, p. 240; t. 138, p. 49) y que para su concesión es menester que existan bienes adquiridos después de la cesión, (cám. civ., t. 138, p. 92). (3)

---

(1) Erróneamente, a nuestro juicio, se ha resuelto que si el beneficio de competencia se invoca dentro del concurso, debe citarse a junta a los acreedores para que resuelvan lo que corresponda, (Jurisprudencia Argentina, t. 5, p. 116). La ley no autoriza tal procedimiento, a lo que se agrega que corresponde al juez exclusivamente decidir en este caso, la aplicabilidad de aquella.

Si el deudor es ejecutado, después de la cesión de bienes, el beneficio de competencia se opone como excepción de espera, (cám. com., t. II, p. 168).

(2) Parry, op. cit., p. 261 conforme.

(3) Por seguir la jurisprudencia de los tribunales se ha extraviado el claro criterio de Parry al estudiar la pensión alimenticia, (op. cit., p. 191).



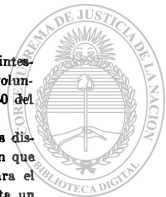
## SUCESIONES (a)



1.º Principios generales.— 2.º Comprobación del fallecimiento.— 3.º Personería para iniciar el juicio y continuarlo.— 4.º Competencia para conocer en el mismo y fuero de atracción.— 5.º Aseguramiento de los bienes.— 6.º Forma de citar a los herederos en el juicio testamentario.— 7.º Id. en el abintestato.— 8.º Justificación del carácter hereditario.— 9.º Vacancia de la sucesión.— 10. Administración del caudal.— 11. Inventario y tasación de los bienes.— 12. Liquidación y partición.— 13. Ejecución de la partición.

1.º—La sucesión es la transmisoria de la herencia y esta es el conjunto de los bienes, obligaciones y cargas del difunto

(a) Véase sobre sucesiones Aubry et Rau, «Cours de droit civil français», t. 6, p. 261, 4.ª edic.; Bevilacqua Clovia «Código civil dos Estados Unidos do Brasil», t. 4, p. 5, Rio Janeiro 1916; Bonel y Sánchez, «Código civil español», t. 3, p. 165, Barcelona, 1890; Caravantes, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 5, p. 5, Madrid, 1858; Chironi, «Elementi di diritto civile», p. 313, Torino, 1914; Collin et Capitant, «Cours élémentaire de droit civil français», t. 3, p. 361, Paris, 1916; De la Collina, «Derecho y legislación procesal», t. 2, p. 315, 2.ª edic., 1916; De la Rúa, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 3, p. 112; Gómez de la Serna, «Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil», p. 50 y 101, 256, Madrid, 1857; Gómez de la Serna y Montalbán, «Procedimientos judiciales», t. 2, p. 63; Ibañez, «Derecho procesal de España», p. 272; Jurisprudencia Argentina, t. 1, p. 144, 177, 319, 451, 660, 692, 701, 702, 726, 807, 814, 866, 882, 884, 900, 949, 950; t. 2, p. 41, 42, 52, 54, 57, 106, 163, 242, 265, 365, 465, 504, 698, 728, 732, 764, 787, 811, 813; t. 3, p. 46, 104, 123, 153, 163, 210, 222, 285, 291, 351, 375, 377, 383, 385, 529, 579, 601, 630, 641, 645, 717, 722, 725, 729, 736, 810, 987, 1003, 1005, 1019, 1022, 1083, 1105, 1134; t. 4, p. 112, 114, 188, 259, 270, 273, 320, 324, 222, 342, 349, 357, 395, 453, 488, 490, 494, 504; t. 5, p. 24, 29, 122, 184, 219,



(Segovia nota 1 al art. 3281 de su edición). Puede ser abintestada o testamentaria: según sea deferida por la ley o por voluntad del hombre manifestada en testamento válido, (art. 3280 del cód. civ.; véase, además Prayones, op. cit. p. 8).

Las leyes procesales argentinas han establecido trámites distintos para la adjudicación y partición de la herencia según que exista o no testamento; y han fijado reglas especiales para el caso que los bienes correspondan al fisco. De ahí que exista un juicio que se llama de testamentaria, otro de abintestato y finalmente el de herencia vacante (art. 626, 685 y 688, del cód. de proc. civ.).

Lo expuesto es sin perjuicio de la división de los bienes del causante, que puede hacerse de acuerdo por los herederos de la partición por aquél o con autorización del mismo, (art. 3462, 3514 s.; Prayones, op cit. p. 314).

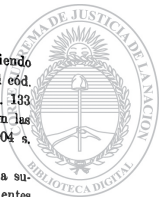
Es entendido que la herencia vacante puede existir con o sin testamento, según que falten los herederos capaces de recibir la herencia o que esta haya sido repudiada.

Lo más frecuente es que no haya testamento y que existan herederos, así como la excepción la constituye la herencia vacante.

2.º—Para que exista sucesión (1) es necesario que una perso-

234, 238, 247, 248, 252, 276, 362, 423, 437, 494, 530, 543, 643, 667, 680; t. 6, p. 24, 31, 34, 73, 77, 78, 86, 149, 107, 214, 297, 305, 312, 322, 601, 603, 611, 639, 641, 644; t. 7, p. 18, 38, 71, 123, 129, 130, 131, 141, 142, 143, 145, 149, 151, 152, 178, 181, 186, 282, 283, 294, 358, 378, 445, 447, 449, 521, 526; t. 8, p. 25, 92, 107, 124, 155, 160, 166, 167, 337, 339, 349, 358, 360, 433; Lastres, «Procedimientos civiles», p. 387; Manresa y Navarro, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 433; Madrid, 1889; Prayones E., «Nociones de derecho civil» 2.ª edic.; Euz, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 2, p. 524; Madrid, 1881; Robles, Pozo, «Derecho procesal de España», t. 1, p. 684; Rodríguez, «Comentarios al cód. de procedimientos», t. 3, p. 117, Buenos Aires, 1906.

(1) El naufragio del «Príncipe de Asturias», ocurrido en las costas del Brasil, motivó interesantes casos judiciales. Nuestros tribunales se negaron sistemáticamente a la apertura de la sucesión de las personas que se suponía habían perecido en la catástrofe. Los herederos recurrieron entonces a los tribunales españoles, los que sin inconveniente otorgaron la partida de defunción, válida en nuestro país. No se sabe que admirar más, si las tragaderas de los que sueñan en islas perdidas donde pudieron refugiarse los naufragos o el amplio criterio de los magistrados peninsulares, que sonreían como los auguros de la vieja Roma, porque conocían el secreto...



na haya muerto o que la ley presuma que ha muerto, (1) siendo ese un requisito que debe justificarse ante todo, (art. 3279 del cód. civ. y 636 del cód. de proc. civ.; cámu. civ. t. 50, p. 93; t. 133 p. 247). La prueba del fallecimiento se hace de acuerdo con las prescripciones del primero de los códigos citados, (art. 104 s. y 110 s. de dicho cód.).

3.º—La capacidad para intervenir en la apertura de la sucesión y en la tramitación total de la misma o en los incidentes varía según el interés de las partes contemplado por la ley. (1) Prácticamente se forma un expediente principal donde se actúa, todo lo referente a la comprobación del fallecimiento del causante, a la justificación del carácter de sus herederos, a la adopción de las medidas de seguridad y administración de los bienes, y al inventario, tasación y posesión de los mismos para entregarlos a los herederos u otros interesados. Eso es lo que se denomina juicio sucesorio. En incidente por separado se ventilan y deciden las cuestiones promovidas por los terceros contra la sucesión o por ésta contra aquellos, las reclamaciones de los que se pretenden herederos si otros han sido declarados en tal carácter etc. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 7, p. 178).

Pueden solicitar la apertura del juicio sucesorio los herederos, (2) sus acreedores o los del causante, el representante del consejo nacional de educación, el cónsul extranjero respectivo (en los casos previstos por la ley núm. 163), los legatarios, el albacea y todos los que tengan algún derecho declarado por las leyes, (art. 627 cód. de proc. civ.; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 6, p. 78).

El avance de los trámites o las modificaciones en la capacidad de los interesados hace desaparecer la intervención de los

(1) Los herederos son los únicos que tienen capacidad para abrir la sucesión y para continuar interviniendo en la misma hasta su terminación. Entre ellos se excluyen según el orden de las sucesiones: así los hermanos no pueden concurrir si hay descendientes, ascendientes o cónyuges, etc., *Jurisprudencia Argentina*, t. 7, p. 153.

(2) Por el solo hecho de tomar el título de heredero la herencia se considera aceptada, pura y simplemente, art. 3319 cód. civ.; cámu. civ., t. 66, p. 22. El heredero que desee aceptar la herencia bajo beneficio de inventario debe declararlo al juez que conoce de la sucesión dentro de diez días del fallecimiento del *de cuius* y hacer el inventario, Drago, «Autos y sentencias»; Prayones, op. cit., p. 97; *Jurisprudencia Argentina*, t. 2, p. 241.



funcionarios y de algunas de las partes en el juicio sucesorio. Los acreedores en cuanto se presenta un heredero o se nombra curador a la misma, (cám. civ. t. 78, p. 83; t. 124, p. 282) (1); el fiscal con la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento; el asesor de menores cuando éstos llegasen a la mayoría de edad; el representante del Consejo nacional de educación, en los mismos casos que el fiscal, si además se ha satisfecho el impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

Los acreedores y legatarios (y así los demás terceros) una vez que tienen contra quien dirigir sus acciones, sea por existir herederos, sea por haberse proveído de curador a la sucesión, deben formular sus reclamaciones en expediente por separado, (art. 3767, cód. civ.).

Las reglas sentadas para los acreedores rigen para los que tienen acciones que deducir contra la sucesión: rendición de cuentas de una administración ejercida por el causante, liquidación de una sociedad de que este formaba parte, reivindicación de un bien, acción de filiación natural, etc.

Cuando aun no se sabe si la herencia se reputará vacante, pueden intervenir conjuntamente el fiscal, el representante del consejo nacional de educación y el agente consular respectivo. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 764). Los dos primeros son parte necesaria, en el caso supuesto; el último interviene en las sucesiones abintestato de sus connacionales que no han dejado herederos en nuestro país y su intervención se halla reducida a gestionar medidas meramente conservatorias del patrimonio del de *cujus*, como son las de concurrir con las autoridades locales a sellar los bienes muebles y papeles del difunto y la de designar la persona que ha de desempeñar el cargo de albacea dativo, (art. 3, 4 y 5 ley núm. 163, JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 1083).

En cuanto al albacea, si bien interviene en el juicio sucesorio para sostener la validez del testamento y hacer que se ejecuten sus disposiciones, no es parte en los pleitos que promue-

(1) El heredero que tenga acciones contra la sucesión debe dirigirla contra sus coherederos, en el juicio que corresponda, y si no hay herederos pedir el nombramiento de un curador, arg. del art. 3363, cód. civ.: *Prayones*, op. cit., p. 107.



van los acreedores de la sucesión, ni otros terceros, ni interviene en la administración de los bienes (art. 3862 cód. ett.; Prayones, op. cit. p. 501).

El albacea puede hacerse representar por procurador y patrocinar por abogado, cuyos honorarios son a cargo de la sucesión (Prayones, op. cit., p. 506).

Mas en los casos en que se presentan herederos solicitando la apertura de la sucesión, exista o no testamento, los acreedores, el cónsul extranjero y demás interesados carecen de derecho para hacer lo mismo y deben esperar que siga la marcha regular del juicio, que se desenvuelve bajo el contralor d los funcionarios que hemos indicado.

Los tutores y curadores de menores e incapaces interesados en la sucesión, los padres por sus hijos, el marido por la mujer y la mujer casada con autorización de su marido o del juez, pueden pedir la apertura de la sucesión y admitir la participación (1) pedida por otros (art. 623 cód. proc. civ.). Si el curador o tutor lo es de varios incapaces, que tuvieren intereses opuestos en la participación, se les debe dar a cada uno de ellos un tutor o curador especial que los represente. Lo mismo se hará si los intereses del tutor o curador estuviesen en oposición con los del menor o incapacitado. A los menores emancipados (2) se les nombrará un curador, sea para promover la demanda de partición, sea para responder a la que se entable contra ellos. Si hay coherederos ausentes con presunción de fallecimiento, la acción de partición corresponde a los parientes a quien se ha dado la posesión de los bienes del ausente. Si la ausencia no fuese sino presunta, no habiendo el ausente constituido un representante, cuando no fuese posible citarlo personalmente, el juez le nombrará un defensor que lo represente.

(1) La solicitud de apertura de la sucesión por los herederos es un pedido de partición de los bienes del causante.

(2) Si se trata de mujer casada, menor de edad, no hay inconveniente en que se nombre curador al marido capaz. Prayones, op. cit. p. 286.

Puede ocurrir que entre los intereses del padre y los de hijos menores exista una manifiesta oposición de intereses y en tal caso debe darse a éstos un tutor especial, (cán. civ. t. 35, p. 92, 367; t. 37, p. 351, 366; t. 46, p. 155; t. 73, p. 27; t. 80, p. 148; Jurisprudencia Argentina, t. 6, p. 81).



te. Los herederos bajo condición, no pueden pedir la partición de la herencia hasta que la condición se cumpla; pero pueden pedirla dos otros coherederos, asegurando el derecho del heredero condicional. Hasta no saber si ha faltado o no la condición, la partición se entenderá condicional. Si antes de hacerse la partición muere uno de los coherederos, dejando varios herederos, bastará que uno de estos pida la partición; pero si todos ellos lo hicieren o quisieren intervenir en la división de la herencia, deberán obrar bajo una sola representación, (art. 628 a 633 del cód. cit.).

4.º—El juez competente para conocer en los juicios sucesorios es el del último domicilio del difunto en la República, (Manual, t. 1, p. 333, 338).

Antes de la vigencia de la ley número 927, ocurría con frecuencia que se tramitaran varias sucesiones de una misma persona, cuando ella dejaba bienes en distintas provincias, pues faltaba el tribunal superior para dirimir los conflictos de competencia que se suscitaban con tal motivo. Hoy eso ya no puede ocurrir, (Manual, t. 1, p. 149).

La sucesión ejerce fuero de atracción (art. 3284 cód. civ.; Manual, t. 1, p. 338). Las acciones reales, la del acreedor que ejecuta la prenda agraria y las que de luzcan la sucesión escapan a dicha regla (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 291, ley núm. 9644, art. 18, 22).

Hay casos también en que debe abrirse la sucesión de una persona que no ha tenido domicilio en la república a la época de su fallecimiento, (Manual, t. 1, p. 339). Es que los bienes raíces situados en la república son exclusivamente regidos por las leyes del país respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad para adquirirlos, a los modos de transferirlos y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser transferido o perdido, de conformidad con las leyes de la república, (art. 10 del cód. civ. y nota a los arts. 3283 y 3598 del mismo).

Se ha dicho con razón que en virtud de tales principios la transmisión por sucesión de inmuebles situados en la república,



aun correspondientes a un extranjero no domiciliado ni fallecido en ella, debe entenderse regida exclusivamente por las leyes nacionales, no sólo en cuanto a su trasmisión en sí misma, sino también muy especialmente en cuanto a la capacidad del causante para disponer de dichos bienes en la medida y porción en que puede hacerlo y a los derechos de los parientes y del cónyuge supérstite para concurrir a la sucesión cualesquiera que sean las convenciones celebradas o las leyes existentes en el lugar del domicilio de aquél. Y que a mérito de estas mismas reglas, corresponde a los jueces del país abrir el juicio sucesorio en cuanto a los bienes existentes en él y proceder a su liquidación y adjudicación, conforme a las leyes locales, con entera independencia del que se haya abierto o pueda abrirse en el extranjero respecto a los bienes allí existentes. (Cám. civ. 3 de agosto 1912 *in re vital versus Jacomet* y JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 2, p. 52). En contra de la doctrina expuesta véase nota del Dr. Estanislao S. Zeballos, en JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 549) (1).

5.—El fallecimiento de una persona hace que algunas veces sus bienes queden expuestos a perderse o a deteriorarse, de ahí que el juez, cuando alguno de los interesados lo pida, o si hubiese herederos menores o incapacitados, esté facultado para dictar las medidas de seguridad sobre los mismos y sobre los papeles del difunto, (art. 642, cód. de proc. civ.; art. 3451, cód. civ.).

Para adoptar tales medidas de seguridad debe el juez convocar a junta a todos los interesados, a fin de que se pongan de acuerdo sobre la custodia y administración del caudal y en defecto de ese acuerdo determinen lo que corresponda, con sujeción a las reglas siguientes: 1.º el dinero efectivo se depositará en el establecimiento público destinado al efecto; 2.º se nombrará administrador al cónyuge sobreviviente o al heredero que, en concepto del juez, sea más apto para el ejercicio del cargo; sólo habiendo motivos especiales que hagan inconveniente el nombramiento de estas personas o cuando ellas no existan podrá el juez nombrar un extraño. (art. 642, 643 y 700 del cód. cit.).

6.º — En el juicio testamentario desde el primer momento se co-

(1) Téngase en cuenta que el tratado de derecho civil de Montevideo ha establecido que habrá tantas sucesiones como lugares en que existan bienes, Prayones, op. cit. p. 41.

procede el nombre de todos los herederos (1) y de ahí que deban ser citados personalmente y cuando ello no pueda hacerse dárles un defensor para que los represente (art. 631 cód. cit.). Es que la relación jurídica procesal no se integra en tales juicios sino figuran en los mismos la totalidad de los que tienen condiciones de ser parte, (Manual, t. 1, p. 217, 323, y t. 3, p. 93).

Las diferencias establecidas entre el juicio sucesorio, donde hay testamento instituyendo herederos y aquel en que no lo hay son varias: En el primero, no es necesaria la publicación de edictos; la justificación del parentesco de los herederos reconocidos y la declaratoria judicial de herederos. En el segundo todos esos trámites son indispensables (cám. civ. t. 63, p. 357; t. 74, p. 40; t. 107, p. 268; t. 128, p. 274).

7.º—En el juicio ab intestato la citación a los herederos y acreedores se hace por edictos y sólo intervienen en el mismo los interesados que concurren voluntariamente. Sin embargo cuando se conoce el nombre y domicilio de los herederos debe citárseles especialmente (art. 686 cód. de proc. civ.; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 3, p. 210).

8.º—El juicio sucesorio ab intestato se propone en primer término la investigación de las personas que revistan el carácter de herederos. Dicho juicio puede promoverse de oficio o a petición de parte: procede en la primera forma cuando el finado no ha dejado descendientes, ascendientes, cónyuge o parientes colaterales dentro del sexto grado y en la segunda cuando alguna de las personas que tiene facultad para abrir el juicio testamentario, lo solicita.

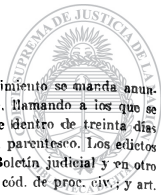
Lo que ocurre ordinariamente es que el juicio sucesorio se declara abierto a petición de los que tienen capacidad para ello y

---

(1) Los legatarios no son parte en el juicio testamentario y por consiguiente es innecesario citarlos para que concurren a la demanda de partición: la ley sólo habla de herederos, art. 631 cód. de proc. civ. Aquellos sólo tienen acción para pedir la entrega de la cosa o para reivindicarla de poder de terceros, con citación del heredero.

La cuestión sobre si el legatario es parte en la testamentaria ha sido vivamente controvertida. Véase *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 866, nota 474; *Revista Jurídica*, año 1908, p. 180; id. 1917, n. 598, 637; y en contra, *cám. civ. t. 60, p. 263*, y sentencia de la *cám. civ. 2.ª* publicada en *Jurisprudencia Argentina*, t. 2, p. 906, con una bella y vigorosa impugnación de Leonidas Anastasi.





en tal caso una vez justificado el fallecimiento se manda anunciar por edictos la muerte del causante, llamando a los que se crean con derecho a heredarlo, para que dentro de treinta días comparezcan con los justificativos de su parentesco. Los edictos se publican bajo pena de nulidad en el Boletín judicial y en otro diario que designe el juez, (art. 687 del cód. de proc. civ. y art. 323 ley núm. 1893).

Presentados los que se consideren con derecho a recibir todo o parte de la herencia, es necesario que justifiquen su carácter lo que se hace con audiencia de todos los interesados, del agente fiscal, del asesor de menores en su caso y del representante del consejo nacional de educación, (art. 695 cód. cit. y leyes núm. 1420, art. 44 inc. 10 y núm. 8890, art. 20). Si no hay oposición y se ha justificado el carácter hereditario debe hacerse la declaratoria de herederos (1). La falta de esa justificación hace procedente la vacancia de la herencia, porque los acreedores no pueden estar supeditados a la mala voluntad de los presuntos herederos. (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 1, p. 701).

Si el agente fiscal se opusiere a la declaratoria de herederos, se sustanciará en juicio ordinario el pleito a que la oposición diere lugar. «Sin embargo, los jueces han de atender al fundamento de la oposición que formule el agente fiscal (2) para, según sea ella, mandar o no que se sustancie en juicio ordinario.— Si esa oposición fuese motivada por la ausencia de un justificativo o por una deficiencia en los documentos que se hubiesen presentado, que el pretendiente advertido pueda traer o pueda subsanar, no podría lógicamente dar lugar a la tramitación de un juicio ordinario, que sería tan innecesario como perjudicial para la buena administración de justicia. El juicio ordinario procedería cuando la

---

(1) La declaratoria de herederos hace innecesario pedir la posesión hereditaria. *Jurisprudencia Argentina*, t. 5, p. 530. Véase *Prayones*, op. cit. p. 143, donde se inserta un formulario de escrito solicitando la posesión hereditaria, en que se estudian las disposiciones del cód. civ. sobre la materia.

(2) La intervención fiscal perdura como supervivencia de un derecho muerto: se explicaba cuando los bienes del difunto a falta de herederos pasaban al fisco nacional o provincial, pero hoy que pertenecen al consejo nacional de educación, basta y sobra un representante de éste para que la sucesión se declare vacante, si ello procede.

oposición fuera fundamental, como cuando se desconociera en absoluto por el ministerio público el carácter hereditario que se pretende.

«El representante del consejo nacional de educación podrá también formular oposición, dada la facultad que tiene de intervenir en el juicio, el interés que también tiene en el mismo y esa oposición dará lugar, como la del agente fiscal, a la substanciación del juicio ordinario, según fuere el fundamento de tal oposición», (Rodríguez A. M., op. cit. t. 3, p. 174).

Terminada la intervención fiscal las cuestiones pendientes o que se promuevan se entenderán y se substanciarán con el declarado heredero, con el asesor de menores en su caso y con el representante del consejo nacional de educación, hasta que sea satisfecho el impuesto respectivo. Los que pretenden derechos como herederos a la sucesión, una vez hecha la declaratoria, deben deducir sus acciones en juicio ordinario y en incidente por separado si los herederos reconocidos les desconocen tal calidad, (art. 699 cód. cit.). Concluídos esos pleitos se aplican las reglas establecidas para el juicio testamentario, (art. 698, cód. cit.).

9.º—Cuando, después de citados por edictos durante treinta días a los que se crean con derecho a la sucesión, si esta es ab intestato o después de pasado el término para hacer inventario y deliberar cualquiera que sea la naturaleza de la sucesión o cuando habiendo repudiado la herencia el heredero, ningún pretendiente se hubiese presentado, la sucesión se reputará vacante, (argumento de los arts. 688 del cód. de proc. civ. y 3539 del cód. civ.). En tal caso los que tengan reclamos que formular contra la sucesión pueden solicitar se nombre un curador de la herencia. (1) El juez puede también nombrarlo de oficio o a solicitud fiscal debiendo recaer la designación en el representante del consejo na-

(1) Nos parece inadmisibles la doctrina de la cám. civ. 2.ª, en cuanto ha decidido, que debe darse la oportunidad a los presuntos herederos para que justifiquen su carácter de tales, y que no procede entretanto declarar vacante la herencia, *Jurisprudencia Argentina*, t. 3, p. 383. La oportunidad se la otorga la ley a los herederos y si durante ella no han podido comprobar su carácter no es justo que los terceros carezcan de medios para accionar contra la sucesión y que los jueces les concedan un nuevo plazo sin ley que lo autorice. Véase op. cit. nota 1 donde se recuerda la doctrina contraria que consideramos más acertada, t. 4, p. 349; t. 6, p. 603; t. 7, p. 437.



cional de educación (art. 689 del cód. proc. civ. y 3540 del cód. civ.; y ley núm. 4124). Dicho curador está encargado de ejercer activa y pasivamente los derechos hereditarios (1) y sus facultades y deberes son los del heredero que ha aceptado la herencia bajo beneficio de inventario; pero no podrá recibir pagos ni el precio de las cosas que se vendiesen. Los dineros correspondientes a la herencia deben depositarse a la orden del juez en el Banco de la Nación Argentina. Los que tengan reclamaciones que hacer contra la sucesión están obligados a tomar las cosas en el estado en que ellas se encuentren por efecto de las operaciones regulares del curador (art. 691 y 692 del cód. de proc. civ. y 3542 del cód. civ.).

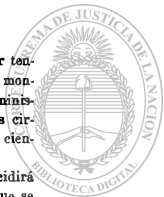
Si no hubiese acreedores a la herencia y se hubiesen vendido los bienes hereditarios, el juez de la sucesión, de oficio o a solicitud fiscal debe declarar vacante la herencia y satisfechas todas las costas y el honorario del curador, pasar la suma de dinero depositada al consejo nacional de educación (arg. del art. 3544 cód. civ. y ley núm. 4124).

10.—Cualquiera que sea el carácter del juicio sucesorio, debe existir alguien encargado de la administración del caudal (2). Por razones de método debe formarse expediente por separado con todo lo relativo a la administración de los bienes. (art. 680 cód. de proc. civ.).

El administrador estará obligado a rendir cuentas siempre que se le exija. Estas cuentas se unirán a los autos y se pondrán de manifiesto en la secretaría, a disposición de todos los que sean partes en el juicio sucesorio, durante el término de diez días. Vencido este término no será admisible reclamación alguna. Si se hiciere en oportunidad, el juez la oír y determinará en juicio verbal, mandando depositar el saldo que resultare. (Art. 682

(1) Las funciones del curador terminan si se presentan herederos que justifiquen su carácter, véase en contra sobre esta última exigencia, cádm. civ. t. 35, p. 379.

(2) La administración de los bienes de la sucesión aceptada bajo beneficio de inventario se rige por reglas especiales. «El heredero beneficiario es dueño y como tal administra cosa propia, con la sola diferencia de que a su calidad de sucesor del propietario ha puesto la restricción de que no responderá sino con los bienes de la herencia y nada más». Frayones, op. cit., p. 107.



cód. de proc. civ.). Por toda remuneración, el administrador tendrá derecho a un tanto por ciento de comisión (1) sobre el monto de los valores percibidos o realizados, en razón de la administración. Dicha comisión será fijada por el juez, según las circunstancias de cada caso, no pudiendo exceder del cinco por ciento. (Art. 683 del cód. cit.).

Si hubiere reclamaciones a este respecto, el juez las decidirá oyendo a los interesados en juicio verbal. La resolución que se dicte será apelable en relación. (Art. 684, del cód. cit.).

11.—Tanto en el juicio testamentario como en el ab intestato y en el de herencia vacante existen procedimientos comunes que se refieren al inventario y tasación de los bienes. El inventario (2) debe hacerse por peritos nombrados por las partes (3) en los dos primeros casos y por el juez, en el último, a cuyo efecto se dará comisión al escribano actuario, u otro en su lugar con asistencia de dos testigos y sin perjuicio de que el juez pueda concurrir, (art. 648 del cód. proc. civ.; 3466 del cód. civ.). Deben ser citados para la formación del inventario el cónyuge, los herederos y los acreedores y legatarios que se hubiesen presentado y se procederá a su facción con los que concurren, (art. 649 y 650 del cód. de proc. civ.). Los bienes deben de especificarse con claridad y precisión y lo mismo se hará con las escrituras, documentos y papeles de importancia, que se encuentren. (4) En el caso de que existieran bienes fuera del lugar del juicio, se dará comisión para inventariarlos al juez de la localidad en que se encuentren. El inventario debe ser firmado por todos los concurrentes y en él se precisará cualquier disconformidad que se manifieste, desig-

(1) El heredero beneficiario no puede cobrar comisión, aunque la sucesión sea abandonada a los acreedores y legatarios, art. 3385 cód. civ. Si el heredero beneficiario vende los bienes se convierte en heredero puro y simple. *Frayones*, op. cit., p. 218.

(2) No pueden inventariarse los bienes que estén poseídos por terceros, *Jurisprudencia Argentina*, t. 4, p. 453.

(3) Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la persona del escribano que ha de hacer el inventario, el juez lo nombra de oficio, *Frayones*, op. cit., p. 102.

(4) Sólo pueden inventariarse los bienes cuya posesión tenga la sucesión, *cám. civ.* t. 55, p. 303.



nando los bienes sobre cuya inclusión o exclusión recayere, (arts. 650 al 653 del cód. cit.). El juez puede ordenar una retasa particular o general, cuando alguno de los herederos demuestre que la tasación no es conforme al valor que tienen los bienes, (art. 3466 del cód. civ.; art. 690 y 698 del cód. de proc. civ.).

El avalúo de los bienes inventariados es de rigor en las sucesiones testamentarias, en las ab intestato y en las vacantes, (art. 654, 698 y 690 del cód. cit.).

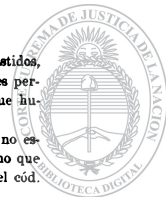
Deben valuarse todos los bienes inventariados y ello debe hacerse por peritos que nombrarán todos los interesados en la junta que al efecto debe convocarlos el juzgado, (art. 654, 655 y 642 del cód. cit.). Si los interesados no se pusiesen de acuerdo para la elección de los peritos, el nombramiento será hecho por el juez, debiendo limitar su número a los indispensables, (art. 656, cód. cit.). (Sobre la recusación de los peritos véase artículo 657 del cód. cit. y Manual, t. 3, p. 217). Es natural que el inventario y el avalúo en las sucesiones vacantes debe hacerse por peritos que designará el juez de oficio, pues no es posible que los interesados los nombren, (art. 690, cód. de proc. civ.).

Practicado el avalúo, se mandará unir a los autos y se pondrá de manifiesto en la secretaría, juntamente con el inventario, por un término de tres a diez días, para que los interesados puedan examinarlo. Si transcurriese dicho término sin haberse hecho oposición, se pondrán los autos al despacho, y el juez aprobará sin más trámites dichas operaciones, mandando proceder a la división, salvo que se trate de sucesiones vacantes en que debe ordenarse la venta de los bienes, (art. 658, 659 y 693 cód. cit.).

Cuando se dedujera reclamación sobre el inventario, se substanciará en pieza separada y en el juicio contradictorio que correspondiera, (art. 660, cód. cit.).

Si la reclamación versare sobre la tasación se aplicarán las reglas siguientes:

I.—Debe el juez convocar a junta a los interesados y a los peritos que hubieren practicado la tasación para que discutan la cuestión promovida. Esta junta se verificará con los interesados que concurran y en el acta que de ella se extienda se expresarán con precisión las objeciones formuladas. Si los que hicieron



la oposición no asistieran a la junta, se les tendrá por desistidos, con costas. En caso de que fueren los peritos los inasistentes perderán su derecho a cobrar honorarios, por los trabajos que hubieren practicado, (arts. 661 y 662, cód. cit.).

11.—Si se alegaran hechos sobre los cuales las partes no estén de acuerdo, se recibirá la causa a prueba por un término que no exceda de veinte días, (arts. 663, 403, 408, 89 y 111 del cód. cit.).

III.—Sea que el incidente se reciba a prueba, sea que haya sido innecesario ese trámite, el juez llamará los autos a la vista y dictará sentencia aprobando o desaprobando las valuaciones o alguna de ellas; en el segundo caso se aplicarán las costas al vencido. Esta resolución es apelable en relación, (art. 663, 664, cód. cit.). Cuando apareciere motivo fundado de que ha habido cohecho o fraude de parte de los peritos, el juez los remitirá inmediatamente a disposición del juez de instrucción con testimonio de lo que contra ellos resulte.

12.—En el juicio de testamentaria y en el ab-intestato, aprobado que sea el inventario y avalúo de los bienes y terminados los pleitos a que uno y otro hayan dado lugar, se procederá a la liquidación y división de la herencia. Puede ocurrir que hubiese pleitos pendientes sobre inclusión o exclusión de algunos de los bienes del inventario, y en tal caso, la división sólo se hará sobre los bienes no litigiosos a menos de que los interesados no resuelvan otra cosa.

En las sucesiones vacantes una vez vendidos (1) los bienes hereditarios, satisfechos los acreedores, las costas y el honorario del curador, debe mandarse pasar la cantidad de dinero que resulte a la orden del consejo nacional de educación, (art. 3544, cód. civ. y ley núm. 1420, art. 44, inc. 10).

Por el mismo auto que se mande proceder a la liquidación y distribución (en las sucesiones testamentarias y ab-intestato), serán convocadas las partes a junta, con el objeto de nombrar contador. En caso de conformidad el nombramiento puede hacerse por todos los interesados por medio de un escrito sin es-

(1) Los avisos de remate judiciales, deben publicarse bajo pena de nulidad en el «Boletín Judicial», art. 323 ley núm. 1893.



perar al día de la junta. Si en ésta no pudiesen ponerse de acuerdo (1) o no asistieren al juicio, el nombramiento será hecho por el juez, (art. 668, cód. de proc. civ.). El nombramiento de contador puede recaer en cualquiera persona de la confianza de los que lo elijan, (art. 669, del cód. cit.).

«Estableciendo el código civil, en el art. 3502, que la división debe ser hecha por peritos, y refiriéndose este código, (el de pro. civ.), tanto en el artículo anterior como en el que tratamos, a «contador», es indudable que el propuesto debe tener título de tal para que sea nombrado, porqué únicamente con tal título es considerado perito, siendo de advertir que los abogados han sido y son considerados como tales contadores, y con aptitudes suficientes para practicar las cuentas de división y adjudicación en las testamentarias. Siempre que el propuesto sea perito, puede ser nombrado; el hecho de ser elegido por los interesados, hace suponer que merece la confianza de éstos. La ley deja amplia libertad para la elección, sin que las vinculaciones que el elegido tenga con la testamentaria o con alguno de los interesados, pueda constituir un impedimento para esa elección. La profesión referida se encuentra reglamentada, a pesar de lo cual, si en el lugar del juicio no hubiera persona con título, puede ser elegida cualquiera persona entendida aunque carezca de él». (arts. 657 y 165, cód. cit.; Rodríguez, op. cit., t. 3, p. 154; art. 3468 del cód. civ.)

Elegido el contador y aceptado el cargo ante el actuario, deben entregársele los autos y bajo inventario, los papeles y documentos relativos al caudal para que proceda a formular la liquidación (2) o sea la cuenta particionaria, (art. 670 del cód. cit.).

(1) El contador lo designa la mayoría de los herederos, *Jurisprudencia Argentina*, t. 5, p. 680; t. 7, p. 38. Si se trata de dividir pequeñas cantidades de dinero no es necesario nombrar contador, op. cit., t. 6, p. 611. El testador puede en el testamento designar el partidor, op. cit., t. 7, p. 123.

(2) Los herederos no están obligados a vender los bienes de la herencia, salvo que sean indivisibles, art. 1324, inc. 3, cód. civ.; *Prayones*, op. cit., p. 296; *Jurisprudencia Argentina*, t. 3, p. 729. Si se decide la venta de los bienes debe verificarse ésta por el martillero designado por la mayoría de los herederos, *Jurisprudencia Argentina*, t. 4, p. 272; t. 7, p. 149. La misma regla se aplica para decidir si debe enajenarse en un solo lote o en fracciones, op. cit., t. 5, p. 437.



Para hacer las adjudicaciones, el contador cuidará de oír a los interesados, a fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que estén de acuerdo, o de conciliar en lo posible sus pretensiones, (art. 671, céd. cit.). Debe el partidor formar la masa de los bienes hereditarios, reuniendo las cosas existentes, los créditos, tanto de extraños como de los mismos herederos, a favor de la sucesión, y lo que cada uno de estos deba colacionar a la herencia y separar los bienes suficientes para el pago de las deudas y cargas de la sucesión, (art. 3469 y 3474, céd. civ.). (1) Las deudas a favor de la sucesión, pueden adjudicarse a cada uno de los herederos, entregándoles los títulos de los créditos, (art. 3471 del céd. civ.).

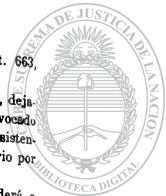
Concluida la liquidación y división el contador la presentará al juez, quien la mandará poner de manifiesto en la secretaría por cinco a quince días, para que la examinen los interesados. Pueden también éstos pedir se les entreguen los autos con el mismo objeto, (art. 672 y 27 inc. 2.º céd. proc. civ.).

Puede ocurrir que no se haga oposición o que se formule esta. En el primer caso se aprobará la cuenta particionaria: en el segundo se convocará a junta a los interesados y al contador para que discutan y acuerden lo que mas convenga, (art. 673 y 674, céd. cit.).

Si todos los interesados están de acuerdo respecto a las cuestiones promovidas, se ejecutará lo acordado y el contador hará en la cuenta las reformas convenidas. Si faltase esa conformidad, se consignarán en el acta las razones que se aduzcan y las explicaciones del contador y se substanciará la oposición considerándola como una demanda, por los trámites del juicio que corres-

(1) En el juicio sucesorio intervienen, como hemos visto, personas que tienen intereses comunes diversos, ahora personalmente, ahora representados por procurador, ahora patrocinados por abogados y surge, entonces la cuestión de saber quien debe pagar los respectivos honorarios. Son de cargo de la masa aquellos escritos que hayan beneficiado a la totalidad de los herederos y de abono particular los que se presentan en el sólo interés del representado, como así mismo todo escrito o gestión al que hayan concurrido conjuntamente todos los herederos, en cuyo caso debe entenderse que cada uno lo hace en su propio beneficio. *Jurisprudencia Argentina*, t. 6, p. 296. El hecho de que un heredero se adelante a solicitar una medida común no hace que el honorario de los que lo representan <sup>o</sup> patrocinan sea a cargo de la masa.





ponda que no son otros que los de los incidentes, (art. 663, 403, 408, 89 y 111, cód. cit.).

Si los que hubiesen impugnado la cuenta particionaria, dejaren de concurrir a la primera junta a que los hubiere convocado el juzgado, se les dará por desistidos, con costas. Si los inasistentes fueren los peritos perderán el derecho a cobrar honorario por su trabajo, (art. 677 y 674, cód. cit.).

13.—Aprobada definitivamente la partición se procederá a ejecutarla bajo las reglas siguientes:

I.—Se entregará a cada interesado lo que le haya sido adjudicado (art. 678, cód. cit.).

II.—Los títulos de adquisición serán entregados al coheredero adjudicatario de los objetos a que se refieran. Cuando en un mismo título estén comprendidos objetos adjudicados a varios herederos o uno sólo dividido entre varios herederos, el título hereditario quedará en poder del que tenga mayor interés en el objeto a que el título se refiere; pero se darán a los otros, copias fehacientes a costa de los bienes de la herencia, (art. 3472, cód. civ.).

III.—En los títulos de propiedad de inmuebles el contador pondrá nota marginal haciendo constar la adjudicación, (art. 678, cód. proc. civ.).

IV.—Los títulos o cosas comunes a toda la herencia, deben quedar depositados en poder del heredero o herederos que los interesados elijan. Si no se aviniesen entre ellos, el juez designará al heredero o herederos que deba guardarlos. (art. 3473, cód. civ.). El depósito es en beneficio común y con la obligación de exhibir las cosas o títulos cuando fuese requerido por un coheredero, (Segovia, nota 74 al art. 3475 de su edic.).

JUICIO DE MENSURA Y DESLINDE (a)

1.º Principios generales. — 2.º La acción de deslinde no se da para dividir predios urbanos. — 3.º Juez Competente. — 4.º Formas de solicitar y reglas a que debe someterse el agrimensor. — 5.º Las partes y la forma en que se las debe citar. — 6.º Procedimiento de la operación. — 7.º Reglas a observar después de hecha la mensura.

1.—El juicio de mensura puede tener distintos objetos: conocer la ubicación ó extensión de un inmueble; preparar la

(a) Accollas, «Manual de droit civil», t. 1, p. 677, 2.ª edic.; Alarcón, «Estudios sobre el código civil», t. 1, p. 236, ed. Mercier, 1885 1900; Aubry et Rau, t. 2, p. 222, 4.ª edic.; Basilio José A., «El juicio de mensura» en Rev. del Centro Estudiantes de Derecho, t. 10; Bonel y Sanchez, «Código civil español», t. 2, p. 200, art. 384, ed. Barcelona, 1890; Caravantes, «Procedimientos judiciales», t. 4, p. 382; Castro M. A., «Prontuario de prácticas forenses», p. 311, 2.ª edic.; Ourutchet Salvador, «Ensayo sobre los juicios de mensura, deslinde y reivindicación»; De la Collina, «Derecho y legislación precesal», t. 2, p. 352; de la Rúa, «Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil», edic. Madrid, 1856; t. 5, p. 519; Demolombe, «Cours de code Napoléon», t. 11, p. 277, París 1855; Duranton, «Cours de droit civil français», t. 5, núm. 245, 2.ª edic.; Estevez Sagui, «Tratado elemental de procedimiento civil en el foro de Buenos Aires», p. 713, edic. 1850; L. Ferraz, en el Filangieri año 82, p. 721; Gómez de la Serna, «Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil», p. 231, Madrid, 1857; Jurisprudencia Argentina, t. 4, p. 177; t. 5, p. 488; t. 6, p. 623; Laurent, «Droit civil français», t. 4, núm. 436; Llerena, comentarios a los arts. 2746, 2753 y 2755 del cód. civ.; Malato Félix, «Juicio de mensura»; Machado, «Comentario al art. 2746 del cód. civ.»; Manresa y Navarro, «Comentario a la ley de enjuiciamiento civil», edic. Madrid, 1895, t. 6, p. 485 y 491; Manresa y Rous, «Ley de enjuiciamiento civil», edic. Madrid, 1861, t. 5, p. 274; Marín A. G. «Principes de borragne», París, 1860; Mayna, «Curso de derecho romano», párr. 268, 2.ª edic.; Millet, «Traité du bornage», 3.ª edic.; Moreno, «Obras

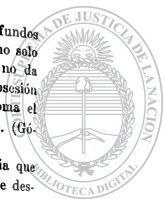


división entre los comuneros; o regular los límites de dos fundos que no son comunes, etc. En realidad no es un juicio sino solo una operación, un acto de jurisdicción voluntaria, que no da ni quita derechos, que deja intactas las cuestiones de posesión y de propiedad, etc. Sólo cuando hay contradicción, toma el carácter contencioso, y degenera en un juicio verdadero. (Gómez de la Serna, op. cit., p. 241). (1)

2.—La jurisprudencia ha resuelto que: «La diferencia que establece el art. 2748 del cód. civ., al acordar la acción de deslinde para los predios rurales y al negarla (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 6, p. 623), para los urbanos, se refiere a predios edificadas y no edificadas, sin consideración a su ubicación dentro o fuera del radio de la ciudad». Un jurista nuestro interpretaba el artículo en el mismo sentido, fundándose en la ley 4, párr. 10, tit. 1, libro X, Dig., que en su parte final dice: «et in urbe hortorum latitudo contingere potest, ut etiam finium regundorum agi possit» (y en la ciudad puede ser contigua la latitud de los huertos, de suerte que también pueda ejercitarse la acción de deslinde). Puede consultarse, Aubry y Rau, núm. 199, nota 6; Demolombe, t. 11, núm. 264, quien expresa que «aun en la ciudad la acción es admisible en lo que concierne a los terrenos no edificadas, tales como patios y jardines, aunque fueren anexos a los edificios.» (Millet, op. cit., p. 157; en contra cádm. civ. t. 9, p. 222; t. 108, p. 221; t. 97, p. 411). Sobre la acción, «finium regundorum» ver Gluch, Pandectas núm. 717; párr. 229, edic. it. de 1907; Valgeron, 658; Dern-

Juridicas», t. 1, p. 307; Partidas, leyes 46 y 47, tit. 2.º, part. 3.º; Planol. «Traité élémentaire de droit civ. fran.», t. 1, p. 734, 8.ª edic; **Prak Enrique B.** «Sobre mensuras»; **Prado y Rojas**, «Leyes y decretos de la provincia de Buenos Aires desde 1810 hasta 1876», edic. 1876; t. 3, p. 33; **Revista de Buenos Aires**, t. 16, p. 478; **Rodríguez**, «Comentarios al cód. de proc. civil», 2.ª edic., t. 3, p. 103; **Segovia**, «Código civil anotado», notas 2113 y 2114; **Serafini, F.** «Instituzioni di diritto romano», t. 1, p. 302, 420; t. 2, p. 179; **Solar T.** «Agrimensura legal», Buenos Aires 1917; **Toullier**; «Le droit civil français»; 6.ª edic., t. 3, núm. 169.

(1) La mensura presupone ordinariamente dos predios contiguos; pero ello no impide que pueda extenderse a propiedades que no reúnen tal condición cuando hay superposiciones. **Demolombe**, op. cit., p. 293; **Aubry et Rau**, op. cit. p. 222.





bury, párr. 229, edic. cit. de 1907; Windscheid, párr. 450, nota 1).

3.—En el juicio de mensura, deslinde y amojonamiento de los terrenos pertenecientes al dominio privado es competente el juez de lo civil, del lugar donde la cosa está situada, (art. 609, cód. de proc. civ. y 2750 cód. civ.). Los bienes del dominio público deben ser mensurados y deslindados ante la jurisdicción administrativa, (art. 2750 cód. civ.).

Los juicios universales de concurso de acreedores, quiebra y sucesión, no ejercen fuero de atracción sobre el de mensura, porque este tiene carácter eminentemente territorial, (cám. civ., t. 98, p. 243; t. 104, p. 333; JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 4, p. 177 y fallos ahí citados).

Se trata de un juicio de jurisdicción voluntaria ajeno a la competencia de los tribunales federales, (Manual, t. 1, p. 335). Sólo cuando se promueve una contienda, por la introducción de acciones posesorias o petitorias surge el fuero federal por razón de las personas, (JURISPRUDENCIA ARGENTINA, t. 5, p. 488 y fallos ahí citados; Gómez de la Serna, op. cit. p. 241).

4.—El que promueva el juicio de deslinde y amojonamiento deberá presentar los títulos auténticos que acrediten su dominio, (1) y expresar los linderos actuales del terreno en todos sus rumbos. No presentando títulos en forma, el juez repelerá de oficio la solicitud, (art. 610 cód. de proc. civ.).

Deducida la pretensión con los requisitos necesarios. el juez mandará practicar la operación de deslinde por el perito que el interesado proponga, que será ingeniero civil o agrimensor, debiendo dicho perito citar para ella a todos los propietarios de los terrenos colindantes, (art. 611 cód. cit.).

El perito debe observar, al practicar la operación, en primer término las reglas fijadas por las leyes y en segundo los.

---

(1) La mensura puede pedirla el que tenga derecho real sobre la cosa o la posesión de la misma. Véase Sogolia nota 136 al art. 2750 de su edic. del cód. civ.; Aubry et Rau, op. cit. p. 224.

En cuanto a los gastos deben repartirse proporcionalmente entre los colindantes, según la extensión del terreno de cada uno, art. 2752 cód. civ.; Aubry et Rau, op. cit., p. 227.



que determinen las instrucciones del Departamento topográfico, (hoy división de geodesia). (1)

5.—En el juicio de mensura, si no existe otro propósito inmediato que la averiguación de la extensión de la heredad.

(1) Por decreto de abril 9 de 1824, subscripto por Rivadavia se resolvió nombrar una comisión que proyectara un método para mensurar las tierras de la provincia de Buenos Aires, (Prado y Rojas, «Leyes y decretos» de la provincia de Buenos Aires desde 1810 hasta 1876, t. 3, p. 16, núm. 745).

En las instrucciones para los agrimensores expedidas por el Dep. topográfico y aprobadas por decreto de octubre 3 de 1861, se fijaron reglas minuciosas para los agrimensores de la citada provincia.

En cuanto al orden nacional rigen las instrucciones que pasamos a transcribir:

Art. 1.º — Para ser nombrado para practicar mensuras administrativas en terrenos de jurisdicción nacional, se requiere ser diplomado como ingeniero o agrimensor por una facultad nacional, o ser revalizado por ella.

Art. 2.º — Ningún ingeniero o agrimensor podrá ejecutar mensura administrativa o judicial en la que tenga interés él mismo, sus socios o sus parientes hasta el cuarto grado civil.

Art. 3.º — Comisionado un ingeniero o agrimensor para practicar una mensura administrativa, concurrirá al departamento de obras públicas de la nación y comunicará su comisión a la inspección de geodesia, donde se le darán, en cada caso, instrucciones especiales para la operación técnica, además de las generales.

Art. 4.º — Para mensuras judiciales comunicará el ingeniero o agrimensor por nota al Departamento de obras públicas la comisión recibida, no siendo necesarias en estos casos instrucciones especiales, salvo que a pedido del ingeniero o agrimensor, al que debe acompañar el expediente, resolviera el Departamento dar instrucciones especiales por tener conocimiento pleno del asunto de que se trata.

Art. 5.º — Tanto para mensuras administrativas como para judiciales los ingenieros o agrimensores deberán sujetarse a estas instrucciones, leyes y decretos vigentes, y a los antecedentes relativos a la ubicación del terreno a medir.

Art. 6.º — En un libro de antecedentes, en la Inspección de Geodesia del Departamento de Obras Públicas de la Nación, los ingenieros o agrimensores deberán dejar bajo su firma, una copia de las instrucciones, especiales que reciban para sus mensuras administrativas, y respecto de las mensuras judiciales será suficiente constancia una nota del ingeniero o agrimensor al departamento de obras públicas de la Nación, en la que deberán manifestar que se los han puesto de manifiesto los antecedentes que ha requerido de los existentes en su archivo.

Esta nota será agregada al duplicado de la diligencia de mensura cuando sea ésta presentada a examen al Departamento de Obras Públicas.

Art. 7.º — En la citación a los linderos a que se refiere el artículo 614 del código de procedimientos se mencionará el día en que se dará principio a la mensura y el mojón de donde se ha de arrancar.

Art. 8.º — Las mismas formalidades, respecto de citación de linderos y publicaciones de avisos, regirán para las mensuras administrativas.

Art. 9.º — En las mensuras administrativas, los ingenieros o agri-



la citación a los colindantes se hace en forma doble: 1.ª: por edictos publicados durante tres días en dos diarios; 2.ª: por circular en que el agrimensor hará saber a los linderos, la situación del terreno que se va a deslindar, la persona que solicita el deslinde, y el juez y el secretario de la causa. La circu-

mensores deberán pasar una comunicación al gobernador del territorio en que se encuentre el terreno que van a medir, con las mismas enumeraciones contenidas en la citación a los linderos.

Art. 10. — La citación de linderos, publicaciones de avisos y comunicación al gobernador del territorio, deben hacerse con la anticipación necesaria para que, dados los medios de transporte existentes en el tiempo que se va a hacer la mensura, puedan concurrir, por sí o por sus representantes, a presenciarias.

Art. 11. — No se ejecutará la mensura sin haberse llenado antes las formalidades prescritas en los artículos anteriores.

Art. 12. — En las mensuras judiciales, el ingeniero o agrimensor procurará averiguar, siempre que sea posible, cuál fué el punto que sirvió de arranque para la mensura primitiva, y hacer partir de él su operación.

Art. 13. — Resuelto por el agrimensor cuál ha de ser el punto de arranque, o indicando éste por instrucciones especiales dadas por el Departamento de Obras Públicas, el agrimensor determinará la dirección del meridiano que pasa por este punto y referirá esta dirección a una de las líneas del terreno a medir.

También determinará cuál es la variación de la aguja en ese mismo punto.

Art. 14. — En la capital federal y terrenos dentro de ejidos no es necesaria esta operación; bastará referir una de las líneas del terreno a medir a edificios existentes, cuando los haya inmediatos, tratando de hacerlo con los de más reciente construcción.

Art. 15. — Cuando hubiere duda sobre la situación legítima del mojón que debe servir de arranque, el agrimensor procederá a hacer el reconocimiento de las propiedades linderas en la extensión que juzgue necesaria, para dejar comprobada la verdadera colocación que le corresponde.

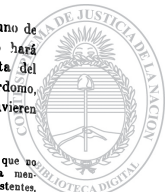
Art. 16. — Aunque el objeto de la mensura fuera únicamente subdividir un terreno, el agrimensor estará obligado a medir y deslindar el todo antes de hacer la división.

Art. 17. — Cuando un ingeniero o agrimensor debe medir una fracción de terreno comprendida dentro de un área mayor de la que haya mensura aprobada, podrá limitarse a ubicar la fracción, demostrando que se halla comprendida dentro de los límites del terreno total.

Art. 18. — En los casos de los artículos 16 y 17, cuando hubiere oposición de parte de algún lindero a la mensura, y que la ubicación de las fracciones en que debe dividirse el terreno dependa del resultado de esta oposición, quedará a juicio del ingeniero o agrimensor proceder a hacer la división o ubicación de la fracción a medir, o dar cuenta antes de la mensura general al Departamento de Obras Públicas para que, previo examen de esta repartición, se resuelva esa oposición por quien corresponda.

Art. 19. — Cuando dentro de los mojones establecidos por mensuras que sirven de antecedentes a un título, no pudiera integrarse este

lar debe ser devuelta con la firma de los citados. Si alguno de estos se negare a firmar la circular el agrimensor lo hará constar ante dos testigos, que firmarán con él. A falta del dueño del terreno la citación debe hacerse a su mayordomo, capataz, locatario u otro ocupante cualquiera, si estuvieren autorizados por aquel al efecto, (art. 614 cód. cit.).



título en la forma designada en él, y hubiera terrenos linderos que no pertenecieran a otros títulos, el agrimensor no practicará la mensura definitiva, sino que levantará un plano de los hechos existentes, proyectando en él la integración que pueda hacerse, y con una diligencia de mensura la someterá a examen del Departamento de Obras Públicas para que se resuelva, por quien corresponda, si hay lugar a ella.

Art. 20. — Cuando un ingeniero o agrimensor, encuentre amojonamientos regularmente establecidos, aunque con error, proveniente de mal arribamiento, pero común a las propiedades circunvecinas, en tal caso no intentará alteración alguna de ellos; lo mismo observará con las distancias cuando encuentre diferencias tan pequeñas que desaparecieran, talvez, con la repetición de la misma operación.

Art. 21. — Ningún ingeniero o agrimensor podrá, por su orden, bajo pretexto alguno, remover mojones que encuentre establecidos en el terreno que mide, aunque los halle mal colocados. Cuando encuentre uno a más mojones notoriamente mal puestos, y los interesados conviniere en su remoción; ésta se llevará a efecto en presencia de la autoridad si estuviese presente, o sin ella en caso contrario, levantándose de ello un acta, que será firmada por los interesados, el agrimensor y dos testigos, la que se acompañará original al expediente de mensura, y una copia, bajo la firma del agrimensor, al duplicado.

Art. 22. — Si a pesar de estar mal colocados los mojones, los interesados no arribasen al acuerdo de que habla el artículo anterior no serán removidos, sino que el agrimensor dará cuenta de ello en su diligencia de mensura, sin perjuicio de establecer la verdadera línea. La remoción del mojón o mojones mal situados, se hará después, previa orden del juez competente o del Poder Ejecutivo, según el carácter de las mensuras de que se trate y en la forma que se determine.

Art. 23. — En cuanto a la ubicación peculiar de un terreno que se trate de medir, los agrimensores no son árbitros para hacer lo que no pueden comprobar con los títulos y los antecedentes relativos o que no sean autorizados por estas instrucciones generales, o por las especiales que hubiesen recibido. Cuando el terreno a medir perteneciendo a un sólo propietario comprenda varios títulos, el ingeniero o agrimensor deberá determinar cuál es la ubicación que corresponde a cada título, de acuerdo con sus antecedentes.

Art. 24. — El relevamiento de las riberas de los ríos, arroyos y lagunas, se practicará por una línea poligonal y sobre esta línea se trazarán ordenadas hasta la ribera, de manera a determinar puntos de ella que no disten unos de otros más de 300 metros.

Art. 25. — Cuando por dificultades del terreno no se pueda emplear el sistema anterior, podrá hacerse el relevamiento por triangulación, procurando siempre determinar puntos de la ribera que no disten uno de otro, más de 300 metros.

La los terrenos dentro de los ejidos, el relevamiento de los ríos.



En el juicio de mensura por confusión de límites la citación a los colindantes debe hacerse, también, en la forma indicada; pero los condóminos deben ser llamados a juicio personalmente, para que se pongan de acuerdo sobre la designación del ingeniero

arroyos o lagunas, debe hacerse determinando puntos de su ribera, que no disten más de 50 metros uno de otro.

Art. 26. — Cuando a un ingeniero o agrimensor se le presentaran dificultades o dudas que no creyese salvadas en las instrucciones, y juzgara no estar suficientemente autorizado por los antecedentes de que dispone para proceder de tal o cual modo, su deber es, en tal caso, levantar un plano de los hechos existentes, sin hacer ubicación determinada y con tal plano y una diligencia de mensura, en la que deberá relacionar todos los antecedentes del asunto, manifestando su opinión, se presentará al Departamento de Obras Públicas para que éste le indique cuál ha de ser su proceder en el caso consultado.

Art. 27. — La superficie de los ríos, arroyos o lagunas que limitan o que están comprendidos en un terreno de propiedad particular, será incluida o no en el área que corresponda al título, según lo establezcan sus antecedentes.

Art. 28. — El agrimensor deberá tomar nota de todos los accidentes topográficos en las líneas del terreno que mide para consignarlo en el plano y diligencia de mensura; y relacionará a las líneas del terreno que mide para consignarlo en el plano y diligencia de mensura; y relacionará a las líneas del terreno que mide los mojones que encuentra establecido por mensuras anteriores.

Art. 29. — Cuando dentro del terreno que se mide o fuera de él, hubiera algún accidente topográfico notable y visible desde las líneas del perímetro, deberá determinarse, ya sea directamente o por visuales de dos puntos, por lo menos, del perímetro.

Art. 30. — En las mensuras de terrenos fiscal y en toda otra que expresamente se requiera, el ingeniero o agrimensor estará obligado a averiguar si hay ocupantes en el terreno que mide y con qué derecho, desde qué tiempo y qué clase de industria, ganados, cultivos, etc.

Art. 31. — Del resultado de esta investigación dará cuenta en su diligencia de mensura, y acompañará además a ella una nota por duplicado, en la que esté relacionada esa investigación, cuya nota será pasada por el Departamento de Obras Públicas a la Dirección de Tierras y Colonias, para los fines que correspondan.

Art. 32. — La ubicación de los sobrantes hallados dentro de los mojones, quedará determinada por la ubicación del título de propiedad en la forma expresada en estas instrucciones, y mientras no se dicte una ley de sobrantes que legisle sobre ellos, ningún ingeniero o agrimensor podrá proceder de distinta manera que la establecida en este artículo, salvo que por manifestación escrita del propietario del terreno que se mide, consintiera en ubicarlo en forma continua sobre una de las líneas y que se haya comprobado que ese sobrante no pertenece a los terrenos linderos.

Art. 33. — En los terrenos de propiedad particular, los mojones deberán ser colocados, cuando menos, a cada 1.250 metros, y serán columnas de hierro, material, piedra o madera dura, clavadas fuertemente. Se procederá de la misma manera en los terrenos de propiedad fiscal que se midan por orden del superior gobierno, con el objeto de determinar su ubicación para otorgar un título por derechos ya reconocidos.





o agrimensor que practicará la operación o para que cada uno proponga el suyo, (art. 2746 del cód. civ. y 612 y 613 del cód. de proc. civ.).

En este caso si los que solicitan la mensura son varios y tienen el carácter de parte en el juicio la relación jurídica

Art. 34. — En los demás terrenos que se midan por orden del superior gobierno los mojones se colocarán a cada 2.500 metros, y serán de hierro, material, piedras o maderas, según lo indique el Departamento de Obras Públicas en cada caso.

Art. 35. — Medidas todas las líneas de un terreno en las que tengan intereses los linderos, el ingeniero o agrimensor levantará un acta en la que constará que linderos la han presenciado, expresando si han estado conforme o no con la mensura practicada y en este último caso, en qué razones han fundado su disconformidad. Esta acta deberá ser firmada por los interesados, el agrimensor y dos testigos.

Art. 36. Si en el momento de levantarse el acta no se encuentra presente ningún linderero, aun los que hubieran manifestado disconformidad, ésta se levantará, así mismo, firmando dos testigos y el agrimensor.

El ingeniero o agrimensor deberá hacer constar en el acta de que habla el artículo anterior, si le han sido entregadas protestas con motivo de su operación y agregar estos originales a la diligencia de mensura y en copia al duplicado.

Art. 37. — Cuando la mensura tenga por principal objeto hacer la división del terreno por partición de herencia u otro motivo y el ingeniero o agrimensor no tenga su procedimiento indicado para esa división, por resolución superior, sólo practicará la división cuando hubiere conformidad entre todos los interesados en la partición, debiendo previamente levantar un acta, en la que se especificará la manera de hacer la división. Esta acta será firmada por los interesados, el agrimensor y dos testigos y se acompañará el original al expediente y una copia firmada por el agrimensor al duplicado.

Art. 38. Terminada una mensura u otra operación facultativa en el terreno, practicada por mandato del superior gobierno o judicial, el ingeniero o agrimensor dará cuenta de ella al Departamento de Obras Públicas de la Nación, con una diligencia escrita de su operación y el plano correspondiente.

Art. 39. — La diligencia de mensura debe extenderse con precisión y claridad en papel sellado de actuación, con el margen de costumbre, escribiéndose en ella íntegramente en letras, sin abreviaturas y sin apices y todas las distancias, cantidades lineales y superficies expresadas en medidas métricas.

Art. 40. — Toda diligencia de mensura contendrá:

- 1.ª Instrucciones especiales, si las ha recibido.
- 2.ª Circular de citación a los linderos.
- 3.ª Un ejemplar de cada diario en que se hayan publicado los avisos o edictos.
- 4.ª Una copia de la nota pasada al gobernador del territorio en que se encuentre el terreno medido.
- 5.ª Una noticia circunstanciada de los títulos que aseguran la propiedad respecto del terreno medido, de las mensuras en él ejecutadas, desmembraciones, acumulaciones o transferencias ocurridas hasta la

procesal sólo puede formarse válidamente por la concurrencia de todos ellos, (Manual, t. 1, p. 93 y 217; t. 3, p. 93; sup. cort. de la provincia de Buenos Aires, t. 4, p. 165, serie 3.ª; Segovia nota 136 al art. 2750 de su edic. del cód. civ.).

6.—El día señalado para la operación se procede a la men-

fecha de la diligencia, indicándose al mismo tiempo el punto de arranque que corresponde, los linderos, superficies y demás datos fundamentales que sean pertinentes para dejar justificado el proceder del ingeniero o agrimensor respecto de la ubicación del terreno medido. Tratándose de mensura de terreno fiscal, este extracto se hará del expediente que ha originado la mensura en la parte pertinente a ella. Esta memoria debe contener todos aquellos datos sobre los títulos, expedientes y otros documentos que permitan, en todo tiempo, saber en dónde se hallan los originales.

6.ª Una descripción completa y exacta de las operaciones que se hayan ejecutado, consignándose en ella la fecha en que se practica, superficie del terreno medido y sus linderos, a que operaciones anteriores debían ser existencia los mojones que ha encontrado establecidos, siempre que sea posible averiguarlo, y todos los incidentes que pueden ser de utilidad conocer y apreciar para juzgar la mensura, qué linderos existieron a la operación, personalmente o representados y, en este caso, con qué título hacían esta representación, si se conformaron o no con la mensura, y si la objetaron con qué fundamento.

7.ª Actas, convenios o transacciones, protestas, si las hubiere, todas originales y aquellos otros documentos que se hubieran labrado con intervención del ingeniero o agrimensor durante la ejecución de la mensura y con motivo de ella.

8.ª Cálculos de superficie por el método de coordenadas referidas a una línea del polígono medido y de acuerdo con la planilla tipo existente en el departamento de obras públicas de la nación.

Planilla de cálculo para obtener la superficie extra-polygonal en caso que se hubiera medido por líneas auxiliares, y cálculo de las divisiones practicadas.

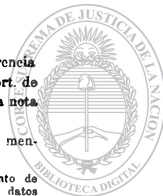
9.ª Cálculo para obtener el azimut de una de las líneas del terreno medido en el mojón de arranque.

10.ª Un plano figurativo del terreno medido, con los detalles de la operación practicada, en papel de hilo forrado en tela o tela transparente, construido en escala métrica, en el que deberán estar escritos en el sentido en que se haya hecho la operación de un modo claro, sobre las líneas, sus rumbos y distancias, la superficie y todos los accidentes topográficos del terreno medido.

La línea meridiana del lugar en que se han hecho las observaciones para determinar el azimut de una de las líneas del terreno medido, será trazada en el plano, y debiendo quedar siempre el Norte hacia la parte superior de él. Sobre la línea meridiana se escribirá la variación de la aguja que se hubiese hallado.

En la parte inferior del plano se colocará la escala métrica que ha servido para construirlo.

Art. 41.—La noticia circunstanciada de los títulos y demás antecedentes, la relación de la operación de mensura, planillas de cálculo y planos, deberán ser firmados por el agrimensor con firma entera, por





sura, con asistencia de los interesados que concurren o de sus apoderados. Los colindantes pueden ir acompañados de agrimensor o de ingeniero de su elección, (art. 616 cód. de proc. civ.). Tienen el deber de exhibir los títulos de propiedad y el derecho de hacer las reclamaciones que crean procedentes. La falta de

diendo hacerlo también su ayudante; y todos los demás documentos a que se refiere el artículo anterior se agregarán originales.

Art. 42.—El agrimensor nombrado no podrá transferir a otro su comisión; sólo él puede autorizar con su firma las operaciones que practique, siendo personalmente responsable de sus ayudantes.

Art. 43.—Al dar cuenta de una mensura, un ingeniero o agrimensor, acompañará al expediente un duplicado bajo su firma de todo lo que, según el artículo 40, debe de contener una diligencia de mensura. Este duplicado se hará en papel simple de hilo de marca común, sin recortar.

Art. 44.—El plano a agregarse en el duplicado, será construido en papel de hilo forrado en tela.

Art. 45.—No será admitida a examen mensura alguna, no acompañándose al mismo tiempo el duplicado.

Art. 46.—El Departamento de Obras Públicas, por medio de la inspección de geodesia, será la oficina encargada de hacer el estudio de las operaciones de mensura administrativas o judiciales, las que deben serle presentadas en la forma expresada en los artículos anteriores e informará al juez o al superior gobierno, según sea ella judicial o administrativa, sobre el mérito facultativo de la operación, remitiendo el expediente original.

El examen facultativo comprenderá el estudio de todos los antecedentes que han originado la mensura, la aplicación que se haga de estos antecedentes y de otros relacionados con ellos para la operación, revisión de cálculos y si se ha cumplido con todos los requisitos a que está obligado el ingeniero o agrimensor por leyes, decretos e instrucciones anteriores a la práctica de la mensura.

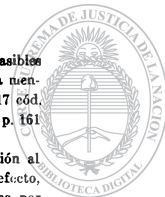
Art. 47.—El duplicado de la diligencia de mensura quedará en el departamento de obras públicas y se archivará, agregándose primeramente a él una copia del informe producido.

Art. 48.—El departamento de obras públicas podrá requerir la presencia de un ingeniero o agrimensor para dar explicaciones sobre la mensura que haya sometido a examen y el ingeniero o agrimensor estará obligado a concurrir a dar las explicaciones que se le pidan, haciendo ampliaciones escritas por duplicado a su diligencias de mensura, si le son requeridas, y otras diligencias que fueran necesarias para el mejor estudio y más rápido despacho de la mensura.

Art. 49.—Será considerada mal ejecutada una mensura cuando, después de rectificada, dé por resultado un error que pase de 1 ojo en superficie.

En la capital federal y terrenos de ejidos este error se limitará a dos por mil de la superficie.

Art. 50.—Para los casos en que haya disconformidad notable en las medidas de dos ingenieros o agrimensores, o sobre la existencia y verdadera situación de mojones o límites, de distinto modo colocados por ellos, y no sea posible resolver esa diferencia con la concurrencia de esos dos ingenieros o agrimensores al Departamento de Obras Públicas, con



exhibición de los títulos sin causa justificada, los hace pasibles de las costas del juicio que llegaren a promover contra la mensura, cualquiera que fuere el resultado del juicio, (art. 617 cód. proc. civ.; sup. cort. de la provincia de Buenos Aires, t. 2, p. 161 serie 3.ª).

Si por alguno de los colindantes se dedujera oposición al tiempo de practicarse la diligencia, ésta se llevará a efecto, sin embargo, expresando en el acta las razones alegadas por los opositores y agregando las protestas escritas que presentaren. El agrimensor deberá además consignar en la diligencia

los antecedentes existentes, deberán los ingenieros o agrimensores cuyas operaciones defieren de tal modo, hacer la rectificación de ellas conjuntamente en un término prudencial que les fijará el Departamento de Obras Públicas. Esta rectificación se hará con los instrumentos propios de cada agrimensor, midiendo el uno en presencia del otro, pasándose en seguida, mutuamente firmados, los datos que hubiesen recogido. Estos datos deben abrazar:

- 1.º El ángulo que forma una línea del polígono medido con el meridiano.
- 2.º El ángulo que forma la línea o líneas cuestionadas con otra del mismo polígono.
- 3.º Las distancias lineales medidas en la parte en que sus operaciones son disconformes.
- 4.º Todos los demás conocimientos que fuesen necesarios para dejar esclarecida la verdad.

El costo que esta nueva operación demande, será satisfecho por el agrimensor que hubiese errado en su operación, así como el honorario del otro agrimensor, y por ambos si los errores fuesen comunes.

Art. 51.—Como podría suceder que a pesar de la concurrencia de los dos agrimensores no desapareciese la dificultad por no reconocerse el error u otras causas, o bien se negase alguno de ellos a ir a practicar la rectificación ordenada, en estos casos el Departamento de Obras Públicas propondrá al juzgado de 1.ª instancia o al superior gobierno, según sea el terreno medido de propiedad particular o pública, el nombramiento de un tercer agrimensor que haga la rectificación.

El pago del honorario del tercero y los gastos de la nueva operación, se harán como está dispuesto en el artículo anterior.

Art. 52.—El Departamento de Obras Públicas, hará la regulación de los honorarios que correspondan a los ingenieros o agrimensores por operaciones de mensura que hayan practicado, cuando no hubiese convenio anterior al respecto.

Art. 53.—Los infractores a las presentes instrucciones serán penados con correcciones disciplinarias, las aplicará el Departamento de Obras Públicas, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en cada caso; las resoluciones sobre correcciones penales, son apelables ante el superior gobierno.

Art. 54.—Las penalidades disciplinarias, serán: el apercibimiento, la suspensión del ejercicio de la profesión, la que no podrá exceder de tres meses, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores en que incurran los ingenieros o agrimensores, de acuerdo con las leyes vigentes.



de mensura los fundamentos de su proceder, (art. 621 cód. de proc. civ.).

Es sólo con relación a esta parte de la operación que puede afirmarse que la mensura no quita ni da derechos. Una mensura aprobada sin oposición de los colindantes constituye título de propiedad, (arg. del art. 2753 del cód. civ.); lo mismo ocurre si la aprobación se hace después de terminados los pleitos a que dió lugar la oposición.

El perito tiene las siguientes obligaciones: 1.ª debe poner su firma al margen de los títulos que le sean presentados, (art. 617 cód. proc. civ.); 2.ª debe en caso de que todos estén conformes extender un acta en que hará constar esa circunstancia, que firmará con los interesados, (art. 618 cód. cit.); 3.ª debe levantar otra acta donde detallará la operación, (art. cit.); 4.ª: debe levantar un plano figurativo de la mensura, con arreglo a las instrucciones generales a que debe sujetarse, (art. cit.); 5.ª debe presentar las actas y plano al Departamento de ingenieros antes de vencido un año desde la fecha en que recibió el expediente. La falta de cumplimiento de esta obligación anula su operación y lo hace pasible de los perjuicios causados, salvo el caso de fuerza mayor, (art. 619 cód. cit.).

El Departamento de ingenieros (1) está obligado a estudiar el mérito facultativo de la operación y a pasarlo al juez de la causa, con los antecedentes recibidos dentro de los treinta días hábiles, (art. 619 cód. cit.).

Con todo a la vista y no resultando inconveniente, el juez dará su auto aprobatorio (2) y mandará archivar el expediente, si hay en él más de un interesado o se ha deducido oposi-

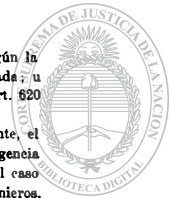
(1) Director general de la división de geodesia.

(2) La mensura es una operación técnica que no quita ni dá derecho y es por eso que una vez decretada debe llevarse a efecto a pesar de la oposición de los colindantes (art. 621 cód. de proc. civ.).

Presentada la mensura ante el juez pueden surgir varias situaciones:

1.ª No han sido citados los colindantes o condóminos, en su caso. La mensura puede aprobarse si así lo pide el solicitante, sin perjuicio de tercero o quicnas jamás se les puede oponer.

2.ª Hay conformidad en la diligencia, (art. 618 cód. cit.), el juez aprobará la mensura que servirá en adelante como título de propiedad,



ción por alguno de los linderos, que resulte fundada según la sentencia definitiva, pasada en autoridad de cosa juzgada; u ordenándose su entrega a la parte en caso contrario, (art. 620 cód. cit.).

Si se hubiere deducido oposición por algún colindante, el juez oír á los interesados. Puede ocurrir que la divergencia verse sobre errores de medida, de superficie, etc. y en tal caso el juez debe pedir informes al Departamento de ingenieros, (art. 624 cód. cit.). La forma de oír a los interesados varía según la naturaleza de la controversia.

I. El oponente alega que es propietario o poseedor de todo o parte del terreno mensurado. Corresponde que el solicitante de la mensura deduzca la acción petitoria, posesoria, o el interdicto respectivo. Si resulta vencedor se aprobará la operación.

II. El lindero se pretende poseedor sin serlo. El que pidió la mensura puede deducir la acción de jactancia (Manual t. 4, p. 101). Esto sin perjuicio de las acciones posesorias o petitorias que puede deducir el oponente, lo que deberá hacer antes de que se apruebe la mensura. (1)

arg. del art. 2753 cód. civ. **Demolombe**, op. cit. p. 310; **Aubry et Rau** op. cit. p. 228.

3.ª Ha mediado oposición a la mensura. En tal caso no puede aprobarse hasta que terminen los pleitos suscitados.

(1) Un jurista argentino sostiene que la obligación de fundar la protesta en el juicio de mensura, no altera en manera alguna el rol que debieran asumir los interesados en el juicio, porque una vez conocidos los fundamentos de la protesta, toca siempre al que solicitó la mensura introducir la acción que corresponde a su derecho. Será una reivindicación, si de los fundamentos de la protesta resulta que la oposición se funda en pretensiones de dominio que no debe reconocer; será una acción de remoción de mojones o de límites, si ella se apoya en una línea mal establecida por error de cálculo o de apreciación de los títulos que no debieran subsistir. Será cualquier acción, en fin, según la que corresponda al ejercicio de los derechos que la protesta conculque; pero siempre que la parte solicitó la mensura al evacuar el traslado que se le confiere del escrito en que se fundó la protesta, asumiendo el rol de demandante, introduce en el juicio la acción que corresponda; y el resultado de la causa corresponde también a estos antecedentes, porque, o bien se aprueba la mensura tal como se la practicó reconociéndose en toda su plenitud los derechos del demandante, es decir, del que solicitó la operación o bien se desaprueba y se manda modificar haciendo justicia a las excepciones o pretensiones del demandante, es decir, del que protestó la mensura. (**Moreno**, op. cit. t. 1, p. 334).



Los principios que dejamos fijados han sido desconocidos más de una vez por nuestros tribunales. La sup. cort. de la provincia de Buenos Aires, interpretando textos análogos al del código de procedimiento civil de la capital, ha llegado a decir, que «una mensura no es sino la consignación gráfica sobre el terreno de los datos contenidos en el título escrito y antecedentes, con arreglo al cual se practica la operación. Si se padece error en la consignación gráfica trazando líneas sobre el terreno en desconformidad con los antecedentes, el error en cualquier tiempo que se descubra puede remediar-se. Por eso, una mensura se aprueba con la cláusula, «en cuanto hubiere lugar por derecho», lo mismo que una información sumaria, lo mismo que una cuenta particionaria. Si en ésta por error de suma se dice, «diez y cinco son veinte», y la cuenta quedase así aprobada, no por eso el error se convertirá en cosa juzgada. Diez y cinco siempre serán quince y no hay juez ni sentencia que pueda ordenar que quince sean veinte. (t. 1, p. 95, serie 1.ª). El mismo tribunal ha sentado que el auto que aprueba o desaprueba una mensura no es una resolución que importe propiedad, es simplemente una declaratoria de que, sobre los títulos o linderos dados, la operación científica de demarcación es exacta. (1)

(1) El mismo código rigió en la capital y en la provincia de Buenos Aires hasta 1906, en que esta última modificó el suyo, (Manual, t. 1, p. 82), en el cual se trastocan todos los principios. El art. 775 establece que: «El juez en seguida, procederá a oír a los interesados, debiendo el opositor deducir la acción ordinaria que creyere tener, ya se funde en el dominio o la posesión o en los defectos de la mensura. Al efecto se conferirá traslado de la mensura al protestante de ella, y el escrito, que se presente fundándola, servirá de demanda, aplicándose en seguida las reglas que correspondan al expresado juicio. La sentencia que se dicto comprenderá todos los puntos sometidos y ordenará la reforma que corresponda de la mensura impugnada. Antes de fallar, se oír al departamento de ingenieros, fijándose por el juez los puntos sobre que ha de recaer el informe».

Para demostrar lo absurdo de tal disposición basta poner el siguiente ejemplo: *Primus* pide la mensura de un campo y este se extiende al fundo que posee *Secundus*, quien como es natural se opone a que se apruebe la operación. ¿Con qué derecho se le va a exigir que deduzca acción ordinaria? ¿Acaso *Secundus* no posee porque posee? (Art. 2305 del cód. civ.); un título válido no da sino un derecho a la posesión de la cosa, y no la posesión misma y el que no tiene sino un derecho a la posesión, no puede, en caso de oposición, tomar la posesión de la cosa: debe de

Los requisitos que fuera de ese punto se exigen en el acta. no son sino circunstancias para apreciar mejor la medición.» (t. 1, p. 196, serie 3.ª, t. 2, p. 244, t. 8, p. 433 serie 2.ª).

Esas decisiones han sido repetidas con posterioridad sin

mandarla por las vías legales, (art. 2868 céd. civ.) El regimen de la propiedad tal cual se encuentra reglamentado por el céd. civil en la tierra en presencia del art. 775 de la ley procesal de la provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, no es posible su aplicación, (art. 67, inc. 11 de la constitución nacional).

Qué acción va a deducir el propietario que ve desconocida su propiedad? Lo basta a él dar como razón de oposición el dominio o la posesión y correspondo al solicitante de la mensura deducir la acción que quiere convenirle. Esto es lo único legal y lógico.

La mensura aprobada con citación de los interesados cuando estos no deducen oposición, o después de terminados los pleitos a que de lugar, hace cosa juzgada. Se equivoca fundamentalmente la corte de la provincia en las decisiones dictadas en contrario a lo expuesto, (t. 10, p. 417, serie 1.ª; t. 7, p. 176, serie 3.ª).

El juicio de mensura, deslinde y amojonamiento, ha sido reglamentado por el céd. de San Luis en mejor forma como se verá por las siguientes disposiciones:

Art. 1093.—Si hubiere habido protestas, o si los interesados no hubieran manifestado expresamente y por escrito su conformidad con la mensura, el Juez a solicitud de parte, los emplazará en la forma debida, para que en un término prudencial comparezcan a estar en derecho sobre la operación practicada.—

Art. 1094.—Vencido el término del emplazamiento, sin que los emplazados hubieren comparecido, se les declarará rebeldes y se dictará el auto que corresponda según el mérito de la operación.—

Art. 1095.—Este auto obligará solamente al que solicitó la mensura y al colindante con cuya citación se hubiere seguido el juicio.—

Art. 1096.—El colindante en cuya rebeldía se hubiere dictado el auto sobre la operación de mensura, tendrá el recurso de rescisión en los mismos casos y términos en que se acuerda al rebelde en juicio ordinario.—

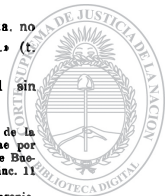
Art. 1097.—Si los emplazados comparecieren, se les pasará sucesivamente el expediente, para que en el término de nueve días formalicen su protesta, exponiendo las razones en que se funda, o manifiesten su conformidad con la operación.—

Art. 1098.—Si la parte no formalizase su protesta ni manifestase conformidad con la mensura, acusada la correspondiente rebeldía y sacado el expediente por apremio, el juez, dictará el auto que corresponda según el mérito de la operación.

Art. 1099.—Formalizada la oposición, se dará vista de ella por el término de nueve días, al que solicitó la mensura, para que deduzca la acción que le corresponda, so pena de dársele por desistido y declararse perdida dicha acción, con costas.

Art. 1100.—Dentro del mismo plazo podrá el mensurante, presentar escritos sosteniendo estar en posesión del terreno disputado, en cuyo caso no le corresponde introducir la acción.

Ocurrido esto, se dará vista por tres días al opositor al solo objeto





percibirse que la oposición da lugar a un juicio que se cierra con una sentencia definitiva, susceptible de pasar en autoridad de cosa juzgada (art. 624 cód. de proc. civ.).



---

de que manifieste si está conforme con que el mensurante goce de la posesión antes referida.

Si expresa conformidad o no contestare en el término indicado, se dictará auto ordenando que corresponde al opositor introducir la acción lo que deberá hacer en el plazo de nueve días, bajo pena de tenerse por desistido, y aprobarse la mensura con costas.—

Art. 1101.—Cuando haya contradicción sobre el hecho de la posesión, tramitará y resolverá el incidente como una excepción.

Art. 1102.—Terminado el incidente se entablará la acción dentro de seis días por el que resulte no estar en posesión del terreno litigioso.—

Art. 1103.—En este caso, como cuando no se haya promovido incidente, el juicio iniciado será ordinario.—

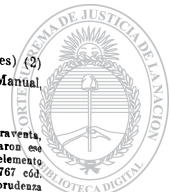
## JUICIO ARBITRAL (a)



1.º Principios *generales*. — 2.º Nombramientos de los árbitros. — 3.º Reglas comunes y especiales al juicio de árbitros y de amigables componedores. — 4.º Cláusula compromisoria. — 5.º Arbitraje forzoso. — 6.º Compromiso. — 7.º Aceptación de los árbitros. — 8.º Recusación y excusación de los mismos. — 9.º Procedimiento en el juicio arbitral, según sea su naturaleza. — 10. Término para laudar y formas del mismo. 11. — Recursos y acciones contra el laudo.

1.—En controversias determinadas no conoce el poder judicial, cuando las partes, voluntaria o forzosamente, las entregan a

(a) Consúltense **Caravantes**, «Procedimientos judiciales», t. 4, p. 469; **Chiovenda**, «Principii di diritto processuale civile», t. 1, p. 105, 1001; **Cognetti de Martius**, «Il compromesso», Torino, 1908; **Esteves Sagui**, «Procedimientos civiles en el foro de Buenos Aires», p. 5; **De la Colla**, «Derecho y legislación procesal», t. 1, p. 334; **De la Rúa**, «Comentario a la ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 3. **Fedozzi**, «L'arbitrato nel diritto processuale civile internazionale»; **Galante**, «Sentenze arbitrali» en el Digesto Italiano; id. «Diritto processuale civile», t. 1, p. 35; **Garsonnet**, «Traité de procédure», t. 8, p. 347; **Glasson**, «Traité de procédure civiles», t. 2, p. 915, 2.ª ed.; **Goubeau**, «De l'arbitrage», Paris 1829; **Jamot**, «Traité élémentaire de procédure civile et commerciale», p. 604; **Joffé**, «Justicia provinciales», p. LXXV, en texto y nota; **Mancini**, **Pisanelli** y **Scialoja**, «Comentario del codice di procedura civile per gli stati sardi», vol. 5, 2.ª parte p. 225 a, edic. de 1863; **Manresa** y **Navarro**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 83; **Mattirolo**, «Trattato di diritto giudiziario civile italiano», t. 1, p. 654, 5.ª edic.; **Miranda**, «El juicio arbitral», Montevideo, 1917; id. «Naturaleza jurídica del juicio arbitral y sus diferencias con las instituciones» en Rev. del Centro Estudiantes de Derecho, t. 10, p. 119; **Mortara**, «Manuale di procedura civile», t. 2, p. 545, 8.ª edic.; id. «Comentario», t. 1, p. 595; **Rivatta**, «I giudizi d'arbitrio», Bologna, 1885; **Bons**, «Ley de enjuiciamiento civil», t. 4, p. 1; **Bocco**, «La sentenza civile», p. 38 y s.; **Windscheld**, «Diritto delle pandette», párr. 415 a 417.



jueces (1) de su elección (árbitros o amigables componedores) (2) fijándoles reglas a las cuales deben ajustar su conducta, (Manual t. 3, p. 96).

(1) Decimos jueces porque la fijación del precio en la compraventa, por una persona determinada, a quien los contratantes le confían ese encargo, no constituye juicio arbitral (art. 1349 cód. civ.). Es elemento esencial del juicio arbitral una contestación entre partes, (art. 767 cód. de proc. civ.), requisito que falta en el caso recordado, (Giurisprudenza Italiana, t. 22, p. 709).

El carácter jurisdiccional de los árbitros negado por Chiovetta, (op. cit., p. 108), afirmado por Fedozzi, (op. cit., p. 21) no puede desconocerse entre nosotros, donde está consagrado por textos legales. La ley 23, tit. 4, part. 3 les llama jueces; el cód. de proc. civ., repite el concepto, (art. 767) y permite la ejecución de la sentencia arbitral en los mismos términos de la emanada de los jueces ordinarios, (art. 535 cód. cit.).

El cód. de proc. italiano exige, en cambio, que la sentencia original y el compromiso se depositen en la cancellería de la pretura del distrito en que se pronunció aquella, para que sea aprobada, (art. 24); que de esa aprobación proceden reclamos ante el tribunal civil a que pertenece el pretor, (art. 25). Análogas formas exige el cód. de proc. francés, (art. 1021, 1022).

La cuestión enunciada precedentemente cobra importancia principalmente en lo que atañe a la ejecución de las sentencias arbitrales, emanadas de tribunales extranjeros, amplias y magistralmente tratada por Fedozzi, en su obra citada.

No huelga hacer presente que en la legislación extranjera por falta de espíritu liberal, el juicio de árbitros se encuentra mucho más controlado por el poder judicial que entre nosotros.

(2) Arbitro es el juez avenidor que es escogido o puesto de las partes para librar la contienda que es entrelas; Ley 23, tit. 4, part. 3.\*

En un sentido más técnico, los árbitros proceden y fallan con arreglo a las leyes, como los jueces ordinarios; y los arbitradores, en cualquier manera que ellos tengan por bien, con tal que sea de buena fe y sin engaño » (sup. cort. nac. t. 22, p. 371; Jurisprudencia Argentina, t. 3, p. 348).

Las críticas que se han hecho al juicio de árbitros han confundido la institución con su reglamentación defectuosa. Véase Sagovia, comentario al art. 448 cód. de com. y Mariani, verbo «Compromesso», en el Digesto italiano; Miranda, op. cit., p. 103 y Mattiolo, op. cit. p. 657.

El arbitraje forzoso se ha implantado principalmente cuando juegan intereses colectivos o gremiales y en esa dirección son numerosas las leyes dictadas en los últimos tiempos, Fedozzi, op. cit., p. 47; puede también consultarse Adolfo Dickmann, «Conciliación y arbitraje entre los conflictos entre obreros y patrones», Buenos Aires, 1916.

«La facultad de preferir la justicia ordinaria, establecida por la ley a la justicia privada de los árbitros, tiene su origen en el sentido común y en una consecuencia natural del derecho de obligarse y de disponer de lo propio. Si se puede renunciar graciosamente a un derecho, con mayor razón puede subordinar la conservación del mismo al examen y fallo de personas privadas que le merezcan confianza. Negar a las partes ese medio de dirimir sus controversias, importa violar el derecho que tienen de dárles la solución que consideren más apropiada. Y esa violación resultará



Esos jueces (1) tienen competencia limitada en la materia y el tiempo: sólo conocen del asunto que se les ha sometido; no poseen autoridad para hacer ejecutar su sentencia

injusta si se tiene en cuenta que ellas se hallan forzosamente sometidas a los gastos, a la morosidad inherentes al procedimiento judicial y algunas veces a los inconvenientes que resultan de la publicidad de los mismos». (Pisanelli, «Relazione sul progetto del cod. di proc. civ.». Véase en contra Mortara, «Manuale», t. 2, p. 546, 8.ª edic.).

Sobre el poder contractual de las partes, dentro o fuera del juicio, véase Manual, t. 3, p. 86 y Chiovenda, op. cit., p. 105, donde se hace una síntesis jugosa del tema.

La administración de justicia corresponde por definición al estado moderno; pero se permite bajo ciertas condiciones que los particulares elijan los jueces que conocerán en sus contiendas.

El estado se encarga de vigilar el mantenimiento del orden público y de ahí que prohíba el sometimiento a árbitros de ciertas cuestiones; que determine la capacidad de los contrayentes y de los que han de juzgarlos, y que se reserve un poder de control, ejercitado por medio de recursos a los jueces permanentes o en la ejecución del fallo y que no delegue las facultades coercitivas, propias de la jurisdicción plena; Mortara, «Manuale», t. 2, p. 545; Fedozzi, op. cit., p. 24, 118 en nota.

(1) El juicio arbitral ha fracasado entre nosotros por varios motivos: para formar el tribunal las partes nombran personas que se inclinan a defender sus intereses antes que a administrar justicia con imparcialidad; el procedimiento participa de todas las deficiencias de la justicia ordinaria y de otras que le son propias.

Es necesario, entonces, que el tribunal se constituya con garantías que aseguren su rectitud y la efectividad de la responsabilidad de quienes lo componen. La ley puede establecer que las cámaras de apelaciones nombren un tribunal arbitral designado de la lista de abogados y comerciantes que anualmente presentarán dichos gremios. En cuanto al procedimiento, si se lo quiere eficaz, ha de ser público, oral y contradictorio, terminando en una sola instancia. Cuando más podrán acordarse recursos de casación de la sentencia final.

Para salvar estos inconvenientes presentamos, en la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires el siguiente proyecto:

1.º Para constituir el tribunal arbitral y de amigable componentes, se observarán las siguientes reglas:

a) El presidente de la cámara civil de cada departamento judicial con quince días de anticipación al 1.º de diciembre de cada año, pasará a los abogados matriculados y a los comerciantes que paguen una patente superior a 200 pesos, una circular, pidiéndoles envíen a la cámara dentro de diez días, en sobre cerrado, una boleta firmada con el nombre de un abogado y de un comerciante respectivamente. En esa circular deberá especificarse las condiciones que deben reunir el candidato por quien se vote, acompañándose copia de la presente ley.

Las pautas por conceptos de venta de alcoholes no se computarán en los efectos que preceden.

b) Para ser electo miembro del tribunal arbitral se requiere:

1.º Tener 25 años de edad.

2.º Ser argentino, nativo o naturalizado.

3.º Pertenecer en el partido.



y sus funciones concluyen con la emisión del fallo, al vencer el plazo que, se les fijó y cuando las partes de común acuerdo lo quieren.

4.° Ser abogado matriculado o comerciante que pague la patente citada.

5.° No desempeñar el cargo de juez u otro empleo a sueldo de la nación o de la provincia.

6.° No ser concursado o fallido, ni haber sido condenado a pena corporal, y no tener auto de prisión preventiva pendiente en su contra.

c) El primer lunes de diciembre de cada año o el día siguiente hábil, si aquél fuere feriado, y previo aviso que se fijará con diez días de anticipación en lugar visible de la cámara, se reunirán en audiencia pública, en el local de la cámara civil departamental, bajo la presidencia del presidente de la misma, los comerciantes y abogados que deseen concurrir al acto, a fin de practicar el escrutinio de los sufragios enviados. El presidente de la cámara, designará una comisión escrutadora, compuesta de tres abogados y tres comerciantes, quienes en común harán el escrutinio de los votos. Si no concurriese número suficiente de abogados o comerciantes, el presidente de la cámara queda facultado para nombrar los que crea conveniente, y en último caso para hacer por sí mismo el escrutinio, con asistencia del secretario de la cámara, y aun para formar o completar la lista si faltasen electores.

d) En la misma audiencia la comisión escrutadora procederá a llenar su cometido, confeccionando una lista de los quince abogados y de los diez comerciantes que hayan obtenido mayor número de votos. En el mismo acto el presidente de la cámara procederá a un sorteo, entre los candidatos que hayan obtenido igual número de votos.

e) La lista de los diez comerciantes y los quince abogados de que habla el inciso anterior, se colocará en lugar visible del tribunal, durante una semana, a fin de que cualquiera del pueblo pueda aducir tachas, las que se fundarán exclusivamente en la falta de alguno de los requisitos de que habla el inciso b) de este artículo. Deducida una tacha, el presidente de la cámara se informará oralmente de su fundamento, y resolverá sin recurso alguno dentro de tercero día.

f) La cámara respectiva, una vez depurada la lista, procederá a designar los miembros del tribunal de arbitraje, en número de tres abogados y dos comerciantes, con igual número de suplentes. La composición del tribunal de arbitraje debe ser comunicada a la suprema corte dentro del plazo de quince días, por la cámara que lo haya constituido.

g) El presidente del tribunal de arbitraje lo nombrará la cámara al constituirlo, y será reemplazado por los que le sigan en el orden de lista del tribunal.

h) El tribunal de arbitraje funcionará en el local que lo fije el presidente de la cámara que lo constituyó.

i) Los miembros del tribunal prestarán juramento ante el presidente de la cámara respectiva.

2.° Cada cámara civil deberá llevar un libro, donde se asienten las actas de los escrutinios, las tachas que contra los candidatos se hayan aducido, la resolución que se dicte y el juramento de los jueces del tribunal.

3.° En la capital de la provincia, las funciones que esta ley encomienda a las cámaras de apelación, serán desempeñadas por la cámara segunda.

Si el fallo es nulo hay que firmar un nuevo compromiso, porque la cláusula compromisoria subsiste.

Los árbitros deciden, dictan sentencia obligatoria para las

4.° Los miembros del tribunal de arbitraje durarán dos años en el desempeño de sus funciones que empiezan el primero de enero siguiente al año de su nombramiento y continuarán vencido ese plazo, conociendo hasta su terminación de los asuntos que se hayan iniciado durante su mandato.

5.° Los jueces suplentes reemplazarán a los titulares por sorteo, y a falta de éstos, serán llamados en la misma forma los demás miembros de la lista que no hubieren sido designados para formar el tribunal.

6.° Los miembros del tribunal de arbitraje pueden ser recusados y excusarse por las mismas causas que los jueces letrados. De la recusación, conocerá en juicio oral, breve y sumariamente, el juez de lo civil en turno, sin recurso alguno. El juez del tribunal que deba excusarse, lo hará en el primer acto en que sea llamado a conocer del asunto.

De su excusación conocerá el miembro o miembros del tribunal que quedase hábil. Si no quedase ninguno hábil entenderá el presidente de la cámara que lo constituyó, breve y sumariamente, y sin recurso alguno.

7.° Cada parte puede recusar sin causa hasta dos miembros del tribunal, lo que se hará indefectiblemente en el primer acto en que intervegan el recusante. Si no compareciere a la citación que se le haga en el caso del artículo 13, pierde el derecho de recusar.

8.° El tribunal de arbitraje formará quórum con tres de sus miembros, y las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos conformes.

10. Serán resueltas por el tribunal arbitral las siguientes cuestiones:

a) Las que los interesados hubieren convenido someter a arbitraje por escritura pública o privada.

b) Las que versen sobre cuentas, siempre que ellas sean complicadas, a juicio del juez, de cuya resolución no se otorgará recurso.

c) Las de división de condominio sobre inmuebles, si los comuneros fueren más de cinco.

d) Las que determinen expresamente las leyes.

11. No pueden comprometerse en árbitros las cuestiones siguientes:

a) Las que versen sobre el estado civil y capacidad de las personas.

b) Las referentes a bienes públicos o municipales salvo el caso de ley especial.

c) Las que tengan por objeto la validez o nulidad de los testamentos.

d) Y en general todas aquellas respecto de las cuales exista una prohibición especial, o en las que estén interesadas la moral y buenas costumbres.

12. Las personas que no tienen capacidad legal para obligarse, no pueden comprometer en árbitros.

13. La parte que desee recurrir al arbitraje, se presentará ante el juez de lo civil competente con el escrito de demanda acompañando tantas copias como sean los demandados. El juez mandará entregar esas copias a los interesados y convocará a las partes a juicio verbal para fijar los puntos o cuestiones que se someten al fallo arbitral, con expresión de sus circunstancias. Si hubiere disconformidad resolverá la incidencia el juez sin recurso alguno. Si no comparece una de las partes el juez fijará esas cuestiones. En la misma forma y procediendo oral y brevemente se resolverán las demás cuestiones que promuevan los interesados.





partes, y en ello se diferencia el juicio arbitral del dictamen del perito que se limita a opinar; tampoco los árbitros son mandatarios de las partes.

En la misma audiencia las partes indicarán toda la prueba de que intenten valerse.

14. Fijada las cuestiones que se someten al arbitraje y resueltas las recusaciones e incidentes, el secretario remitirá las actuaciones al presidente del tribunal arbitral en los casos en que las partes no hayan resuelto constituir un tribunal especial, ya sea en la cláusula compromisoria, ya sea con posterioridad.

El demandado presentará, dentro de nueve días de celebrada la audiencia a que se refiere el artículo 13, un escrito donde haga apreciaciones sobre las cuestiones a decidir. En esa misma oportunidad podrá poner posiciones a la parte contraria acompañando el pliego de preguntas cerrado o abierto. Ese escrito se mandará agregar por el presidente del tribunal. El actor propondrá esa prueba dentro de los tres días siguientes a la agregación de dicho escrito.

15. El presidente del tribunal una vez que se le presenten las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, o la escritura pública o privada donde las partes hayan convenido someter a su decisión sus diferencias, observará las reglas siguientes:

a) Citará a los miembros del tribunal y a las partes para una audiencia a la cual deben comparecer éstas con toda su prueba.

b) Les hará saber a las partes que deben comparecer personalmente o por medio de sus representantes a absolver posiciones y que si no lo hacen puede tenérseles por confesos al sentenciar. El mandatario para absolver posiciones a nombre de sus mandantes no necesita poder especial, ni cláusula autoritativa.

16. En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se procederá:

a) A recibir las posiciones que absolverán las partes o sus mandatarios. El tribunal puede preguntar de oficio.

b) A determinarse por las partes las cuestiones de hecho y de derecho que debe resolver el tribunal al sentenciar. Si no lo hacen pierden el derecho de deducir recurso de casación por mal planteamiento de cuestiones.

c) A ofrecer prueba de tachas.

d) A escuchar la exposición oral que hagan las partes, no pudiendo cada una de ellas hablar por más de dos horas.

17. El tribunal en la misma audiencia abrirá un término de veinte días para que se practique la prueba que haya de recibirse fuera del asiento del tribunal, fijando las audiencias en que ha de practicarse.

18. Recibida toda la prueba escrita o de testigos a que se refiere el artículo anterior se fijará una audiencia para oír oralmente a los testigos y peritos, que hayan de deponer o presentar su informe ante el tribunal.

Esa audiencia será pública, debiendo levantarse acta de lo substancial, sin que sea necesario consignar las declaraciones de los testigos ni los informes de los peritos, bastando con que se haga mención de la edad, nombre, profesión y domicilio de los mismos, y de que se les tomó el juramento de ley.

En análoga forma se procederá respecto a las demás pruebas.

Podrá, no obstante, consignarse alguna circunstancia especial a pr-



En cuanto a las facultades compulsorias durante la instrucción, los árbitros pueden aplicar multas que jugarán un papel

dicho del demandante o demandado, siempre que el presidente lo considere procedente.

El acta será suscrita por el presidente y el secretario del tribunal.

19. La audiencia a que se refiere el artículo anterior continuará durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias para su terminación.

Cada sesión, cuando hubiere diligencia que evacuar, no podrá durar menos de cuatro horas, y sólo podrá suspenderse cuando fuese necesario practicar alguna diligencia fuera del lugar de las sesiones o no compareciere algún testigo, cuya declaración se considere necesaria, o por indisposición comprobada de alguna de las partes.

20. Terminado el examen de las pruebas orales, el presidente concederá la palabra por su orden al demandante, y al demandado, para que aleguen lo que estimen por conveniente.

Después de esto el tribunal se retirará a deliberar para dictar sentencia.

Desde el momento en que se vaya a conceder la palabra al demandante el presidente hará saber a éste, al demandado y a los miembros del tribunal que no pueden retirarse de la sala hasta que se dicte la sentencia.

21. Los miembros del tribunal inmediatamente con asistencia de tres de sus vocales cuando menos, procederán fuera de la presencia de las partes y del público a pronunciarse sobre las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a su decisión.

22. La mayoría absoluta de votos formará sentencia.

23. Para la apreciación de la prueba no se impone a los miembros del tribunal regla alguna. Sólo se exige que recogidos en lo íntimo de su conciencia expresen su convicción sobre la verdad de los hechos juzgados.

La sentencia será leída por secretaria a las partes. Si éstas se hubieren retirado de la sala del tribunal quedarán notificadas por la simple constancia asentada en los autos.

24. El tribunal puede limitar su pronunciamiento a las cuestiones de hecho y fijar audiencia dentro de un término que no exceda de cinco días, que se hará saber a las partes en la oportunidad que determina el artículo 23 para que comparezcan a oír la sentencia de derecho. En este caso ambas sentencias se considerará que forman un solo todo, y dentro de diez días procederá contra las mismas el recurso de casación para ante la cámara del departamento; el que solo deberá fundarse:

a) En haberla dado sobre un punto no sometido a la decisión del tribunal.

b) En haberse formado éste con violación de las reglas establecidas por esta ley. Para la admisión de este motivo es indispensable que la causal haya sido invocada por el recurrente en la audiencia a que se refiere el artículo 16.

c) En haber omitido alguna de las cuestiones de hecho o de derecho convenidas por las partes en la oportunidad a que se refiere el artículo 16, inciso b).

d) En la circunstancia de haber concurrido a suscribir el fallo un



análogo al de las astringentes creadas por la jurisprudencia francesa, (art. 771, inc. 4, cód. de proc. civ.).



juez que no ha estado presente mientras se recibía la prueba en juicio oral.

e) En la errónea aplicación del derecho.

25. El recurso se concederá en relación. Llegados los autos a la cámara, y una vez que hayan sido estudiados por sus jueces se fijará audiencia para que las partes comparezcan a informar in voca. El tribunal dictará su sentencia en el mismo acto, incurriendo en falta grave los jueces que no cumplieran con esta disposición legal.

26. La sentencia de la cámara de apelación, en los casos del artículo 24, incisos a), b), c) y d), se limitará a declarar nulas las actuaciones o la sentencia, definiendo a otro tribunal arbitral el conocimiento del juicio. En la misma sentencia la cámara constituirá ese tribunal de acuerdo con las reglas establecidas en esta ley.

En el caso del inciso e), la cámara aplicará el derecho según ella lo entienda a los hechos declarados probados por el tribunal.

27. El demandante al presentarse al juez de lo civil, solicitando que una cuestión se someta al tribunal arbitral, deberá acompañar un recibo del Banco de la provincia, equivalente al tres por ciento del valor litigioso y a la orden del presidente del mismo. Igual depósito deberá hacer el demandado al deducir la primera gestión. El depósito no puede ser nunca menor de doscientos cincuenta pesos ni superior a tres mil.

28. Los honorarios de los abogados, procuradores, peritos y secretarios devengados en la tramitación del juicio, serán regulados por el tribunal, y el de éste por el juez de lo civil.

El honorario de los jueces del tribunal se pagará preferentemente con el depósito a que se refiere el artículo 27.

29. El tribunal arbitral solamente tendrá jurisdicción en los casos en que las partes no hayan convenido el nombre de los árbitros y el procedimiento que han de observar los mismos.

30. Las reglas del procedimiento ordinario en todo lo que no estén modificadas en esta ley son aplicables al tribunal arbitral con las siguientes salvedades:

a) El tribunal arbitral posee jurisdicción para ordenar la citación de las partes, testigos y peritos, y para mandar se agreguen documentos originales o en copia, pudiendo aplicar a los que desobedezcan sus mandatos multas de diez a cien pesos. Ordena el cumplimiento directo de sus resoluciones o sentencias.

Puede también el vencedor solicitar que el laudo se cumpla por el juez ordinario, por los trámites establecidos para la ejecución de sentencias.

b) Sólo se notificará a las partes en su domicilio el traslado de la demanda y el día que se fije para que tengan lugar las audiencias a que se refieren los artículos 15 y 18. Las demás notificaciones se harán por nota.

Las citaciones para absolver posiciones o reconocer documentos se harán por una sola vez, y bajo el apercibimiento de tener por absueltas dichas posiciones o por reconocidos los documentos.

c) Las notificaciones pueden hacerse también por medio de actos notariales en que interviendrá cualquier escribano público que tenga registro de contratos, a elección de la parte que las haya solicitado.

d) El tribunal puede comisionar para la recepción de las pruebas o de diligencias que hayan de practicarse fuera del asiento de sus sesiones



El arbitraje es de dos clases: de árbitros y de amigables componedores. El primero se denomina también juicio de árbitros de derecho (iures) y el segundo juicio de arbitradores o amigables componedores (1).

Lo que caracteriza el juicio de árbitros es que, en su instrucción, sentencia y recursos se observan procedimientos análogos a los de los pleitos ordinarios de la justicia permanente, salvo convención en contrario (arts. 784, 783, 787, 788 y 789 cód. de proc. civ.) mientras que en el juicio de arbitradores se obra en forma sencilla, siendo solo indispensable la audiencia de las partes y la recepción de antecedentes, (2) sin que procedan recursos contra el fallo, sino una acción sobre puntos limitados (art. 802 y 808 cód. cit.).

Pero todo esto, que resulta «a posteriori» no aparece claro a veces en la oportunidad de formular el compromiso. Supongamos que las partes han establecido que las contiendas que surjan en determinados negocios serán sustanciadas y resueltas por peritos jueces o por peritos árbitros arbitradores, iures, etc. ¿Se trata de jueces árbitros o de amigables componedores? La cuestión reviste importancia bajo muchos aspectos: forma de proceder, de fallar, admisibilidad de recursos, etc.

En un escribano público que reúna las condiciones del inciso anterior o al juez de paz respectivo.

31. Los miembros del tribunal que falten a las audiencias a que se refieren los artículos 16 y 18 o que no fallen inmediatamente de terminada la recepción de la prueba en juicio oral, serán pasibles de una multa de doscientos a dos mil pesos, que aplicará el juez del crimen en turno a solicitud de cualquiera de las partes, y en beneficio de las mismas, sin más requisito que oír al acusado e informarse oralmente de la verdad de los hechos. Si se tratare de abogados, puede además, imponerles suspensión del ejercicio de la profesión hasta por tres meses. La sentencia no será susceptible de recurso alguno.

32. Si en un juicio no fuere posible constituir el tribunal por impedimento de los que figuran en la lista, a que se refiere esta ley, la cámara respectiva procederá a integrarlos por elección, que practicará.

33. La circular a que se refiere el artículo 1.º, inciso a), deberá enviarse o llevar personalmente, en cuyo caso se recabará recibo que se archivará en la cámara respectiva, o por carta certificada con aviso de retorno.

(1) Conf. *Miranda*, op. cit. p. 85. El juicio arbitral, para la ley 23, tit. 4.º, parte 3.º, podía revestir dos formas: la una cuando los hombres ponen sus pleitos y contiendas en manos de jueces de su elección para que los decidan según derecho; la otra, de jueces de avenimiento, encargados de resolver como lo tuvieran a bien.

(2) Conf. *Garsonnet*, op. cit. t. 8, p. 347; *Fedozzi*, op. cit. p. 119.



Pensamos que en la duda hay que inclinarse al juicio de árbitros iures, desde que las renunciaciones no se presumen. (1) Si se diese a la cuestión una solución contraria las partes resultarían abdicando a las solemnidades del juicio de árbitros y a los más amplios recursos que se acuerdan en el mismo contra el fallo. (Conf. Malaver, *Curso de procedimientos judiciales* p. 53; Dalloz, *Rep. v. Arbitre*, núm. 37; Pisanelli, *Relazione cit.*; Mattiolo, op. cit. t. 1, p. 655, 4.ª edic. En contra Bellot: *Loi sur la procédure civile du canton de Genève*, p. 147, edic. 1870).

Cuando las partes nombran jueces para decidir un caso llamándolos árbitros y arbitradores, pueden éstos elegir la forma en que procederán y aún pueden hacerlo en parte como árbitros y en parte como arbitradores. (*Curia Filípica*, lib. 2, cap. 14, núm. 14, p. 454, 2.ª ed.).

El arbitraje es voluntario cuando los interesados se someten a él sin que lo imponga la ley; forzoso, cuando ésta ha determinado que por tal medio debe instruirse y resolverse una controversia patrimonial. (2).

La ley ha dejado a las partes el derecho de nombrar los árbitros o arbitradores, pero el nombramiento no puede recaer sino en personas mayores de edad, y que estén en pleno ejercicio de los derechos civiles (arts. 775 y 799, inc. 2, cód. cit.) En el juicio de árbitros, tampoco pueden ser nombrados los jueces ante quienes penda el pleito (art. 797 cód. cit.), ni ningún miembro

---

(1) La sup. cort. nac. ha decidido que debe presumirse que las partes han querido someterse a juicio de amigables componedores, si se señaló una forma de tramitación distinta a la de los juicios ordinarios, t. 102, p. 67, cons. 9.ª. En el caso era posible inducir la intención de los comprometidos, lo que no siempre sucede, como lo suponemos en el texto.

(2) Se ha dicho que el arbitraje forzoso repugna a la institución que nos ocupa: «Los ciudadanos harán uso de la facultad que se les ha concedido cuando lo juzguen oportuno; pero el poder social no puede rehusarse a administrar justicia a quienes recurren a ellas. *Ibid.*, «Comentario al código de procedura civile italiano», t. 1, p. 2. En el mismo sentido *Segovia*, Comentario al art. 448 cód. de com. Nuestro jurista parece, sin embargo, ignorar que en Inglaterra y Estados Unidos los asuntos civiles los resuelve el jurado, que al fin y al cabo no es otra cosa que un tribunal arbitral, donde se sientan generalmente personas entendidas en el caso litigado, y que el arbitraje tiene un amplio desenvolvimiento en dichos países.



del poder judicial (Manual, t. 1, p. 179). Nos parece también que los que no saben leer y escribir no pueden ser jueces árbitros o arbitadores, desde que los árbitros tienen que firmar la aceptación del cargo, y la sentencia ser autorizada por el secretario en la forma establecida para el juicio ordinario (art. 776, 804, cód. cit.; Miranda, op. cit., p. 192; en contra Cuzzi, comentario al art. 10, cód. de proc. italiano y Mattiolo, op. cit. t. 1, p. 676).

Los compromitentes no pueden ser designados árbitros ni arbitadores, porque «no sería guisada cosa de ser ome julgador de su pleyto mismo» (Ley 24, tít. 1.º part. 3.º).

La incapacidad de las mujeres, en ejercicios de sus derechos civiles que establecían las leyes españolas han desaparecido. (Conf. Malaver, op. cit. p. 15). (1)

Entre nosotros, no existe la cuestión sobre si las personas jurídicas u otras corporaciones pueden ser designadas árbitros o arbitadores, desde que la ley habla de personas mayores, es decir, de personas físicas (arts. 775, 799, inc. 2.º cód. cit.; Mattiolo op. cit., t. 1, p. 677). (2)

Los árbitros o amigables componedores pueden ser uno o más (art. 774, cód. cit.). Como es posible el empate, en la decisión que dicten cuando hay más de uno, debe designarse otro para que la dirima. Es cierto que la ley habla de tercero, pero es porque se ha colocado en el caso más común, en que cada interesado designa un árbitro. El tercero se designa por las partes, o por los mismos árbitros si han sido facultados para ello, y en último caso por el juez o tribunal competente, es decir, por aquél a quien le habría correspondido el conocimiento de la causa a no mediar el compromiso (art. 774, cód. cit.).

El sistema de otros países nos parece superior al nuestro, en cuanto establece que los árbitros deben designarse en número

---

(1) Esta incapacidad no existía en el derecho canónico, como lo recuerda Rivalta, op. cit., p. 195.

(2) La ley reprime con multa de mil a cuatro mil pesos e inhabilitación perpetua al árbitro o amigable componedor que dicten resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo, o dicten para fundarlas hechos o resoluciones falsas, (art. 269 cód. penal). No es posible responsabilizar criminalmente a las personas jurídicas.

impar (cód. de proc. italiano, código del cantón de Ginebra, Bellot, op. cit.).

3.—Hay reglas comunes al juicio de árbitros y al de amigables componedores y otras especiales para cada uno de ellos. Son reglas comunes a ambos juicios:

I.—Toda cuestión entre partes, (1) antes o después de deducido el juicio, y cualquiera que sea el estado de éste, puede someterse a árbitros o arbitradores (arts. 767 y 798 cód. de proc. civ.).

Sin embargo, por excepción, no puede decidirse en juicio arbitral: 1.º las cuestiones que versen sobre el estado civil y capacidad de las personas; (2); 2.º las referentes a bienes públicos o municipales; (3); 3.º las que, por cualquier causa requieran la intervención fiscal; (4); 4.º las que tengan por objeto la validez o nulidad de las disposiciones de última voluntad; 5.º y, en general, todas aquéllas, respecto de las cuales exista una prohibición especial (5), o en las que estén interesadas la moral y las buenas costumbres. (arts. 768 y 798 cód. cit.).

II.—Las personas que no tienen capacidad para obligarse no pueden comprometerse en árbitros (arts. 769 y 799, inc. 1.º cód. cit.). La capacidad ha de juzgarse naturalmente con relación a la cosa o cosas que se someten a esta clase de juicios.

---

(1) No se puede admitir que la cláusula compromisoria esté permitida para controversia futura que pueda surgir entre dos personas cualesquiera que sea la causa que la genere. Desconocería la ley principios elementales si permitiere renunciar en general o determinadamente a un derecho, cuando, aun no es siquiera posible prever cuáles serán las cuestiones que podrían surgir con el tiempo. La cláusula compromisoria es permitida cuando se trata de someter a arbitraje las controversias que pudiesen surgir en lo porvenir en la ejecución de un contrato. Chiovenda, op. cit., p. 114; Mattiolo, op. cit. t. 1, p. 666, núm. 743; Mariani, op. cit. núm. 122.

(2) Se trata de derechos inalienables.

(3) Esos bienes pertenecen al mançante, que es el soberano y éste no ha creído conveniente conferir a sus mandatarios tal facultad que podría dar lugar a abusos. Sin embargo, por medio de una ley del congreso o de la legislatura local, en su caso, se podría concertar el juicio de árbitros, aun sobre bienes públicos o municipales.

(4) Véase Manual, t. 1, p. 122.

(5) Por ejemplo, sobre la obligación de prestar alimentos en virtud del parentesco (art. 374 cód. civ.).

Los laudos que estatuyan en el extranjero sobre una cuestión que no puede ser sometida a árbitros por nuestras leyes no podrán ejecutarse en la república, Conf. Fedozzi, op. cit. p., 233.

De cierta similitud existente entre la transacción y el sometimiento a juicio arbitral, se ha concluido por algunos que las partes para comprometer en árbitros deben tener, cuando menos, capacidad para transar: (arts. 833, 839, 840 y 841, cód. civ.; Legge, t. 25, p. 659, part. 1.ª, Triani, «Studi ed appunti di diritto giudiziario civile» parte 3.ª, Del compromesso, Bologna, 1883).

Tanto para transigir como para comprometer en árbitros a nombre de otro, se necesita poder especial (1) (art. 1881, inc. 3.º cód. civ.). El tutor ha menester de autorización del juez para someter a arbitraje los derechos de los menores (art. 443, inc. 5.º cód. civ.); el heredero beneficiario no puede transar los asuntos en que la sucesión tenga interés (art. 3383 cód. cit.), etc.

Los menores emancipados no pueden, sin expresa autorización del juez y bajo pena de nulidad sujetar un negocio a juicio de árbitro, (art. 135 cód. civil).

III.—Para que pueda existir el juicio de árbitros o arbitradores, es necesario que lo imponga la ley o que las partes lo hayan convenido. (2) Esa convención está sometida a solemnidades, que luego indicaremos. Es necesario no confundir el compromiso con la cláusula compromisoria.

4.—Ocurre a veces que las partes en sus contratos establecen que sus diferencias futuras serán resueltas por jueces árbitros o arbitradores, sin explicarse más sobre el punto, y entonces se dice que existe contrato preliminar o cláusula compromisoria (3), pues quienes lo subscribieron están obligados a concurrir a la

---

(1) Bastará, sin embargo, el poder general si el mandante concertó la cláusula compromisoria.

(2) Véase *Jurisprudencia Argentina*, t. 3, p. 348.

(3) La cláusula compromisoria es un accesorio de los contratos, que contempla cuestiones posibles y futuras y de ahí que no precise cuáles sean ellas, ni designe generalmente el nombre de los árbitros, ni se establezcan las demás condiciones que debe contener el compromiso. Tal cláusula se encuentra permitida por las leyes alemanas, austriacas, italianas, etc.

En vista del silencio del cód. de proc. francés la jurisprudencia se ha pronunciado por la nulidad de la cláusula compromisoria, solución que critica *Glasson*, op. cit., t. 2, p. 911. Véase también, un estudio sobre dicha cláusula en la sentencia de la cám. fed. de la capital de julio 21 de 1920.

formación solenne del tribunal y a los demás actos requeridos para el funcionamiento del mismo.

5.—La ley, también puede imponer a las partes, que sus diferencias sean sometidas a juicio arbitral. (1).

Así, por ejemplo: el que hiciese algún trabajo, o prestase algún servicio a otro, puede demandar el precio, aunque ninguno se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir. En tal caso, entiéndese que ajustaron el precio de costumbre para ser determinado por árbitros (2) (art. 1627, cód. civ.). Todas las cuestiones sociales que se suscitaren entre los socios durante la existencia de la sociedad, su liquidación o partición serán decididas por jueces arbitradores, a no ser que se haya estipulado lo contrario en el contrato de sociedad (3) (art. 448, cód. de com.).

(1) Véase el art. 12 cód. de proc. italiano.

(2) La ley emplea en este caso la palabra árbitros en contraposición a tribunales ordinarios, y sin el propósito de establecer distingos entre árbitros y arbitradores. Es claro, por otra parte, que el precio del servicio debe ser resuelto por arbitradores pues éstos están llamados a pronunciarse sobre una simple cuestión de hecho y después del reconocimiento que hace la sentencia, o la parte de los servicios prestados. *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 213. Las leyes de fondo se extralimitan en nuestro país al establecer en qué casos procede el juicio de árbitros como lo hemos demostrado, (Manual, t. 3, p. 230, Conf. *Segovia*, nota 534 al art. 156 cód. de com.).

(3) El cód. de com. habla unas veces de peritos, otras de peritos arbitradores, de declaración de peritos, de juicio de peritos, etc. No es ese el juicio de árbitros o amigables compondores a que se refiere el cód. de proc. civ.

1.—En todos los casos en que los barraqueros o administradores de depósitos fuesen obligados a pagar a las partes faltas de efectos u otros cualesquiera perjuicios, la tasación se hará por peritos arbitradores (art. 128).

2.—Si en el servicio que presta al principal, aconteciera al factor o dependiente algún daño o pérdida extraordinaria, será de cargo del principal la indemnización del referido daño o pérdida, a juicio de arbitradores (art. 156).

3.—Al ocuparse la ley de las relaciones entre patrón y factores o dependientes, establece que si existe plazo estipulado sobre la prestación de los servicios, «no pueden arbitrariamente las partes separarse de su cumplimiento. El que lo hiciere estará obligado a indemnizar al otro, a juicio de arbitradores, de los perjuicios que por ello le sobrevengan» (art. 158).

4.—Cuando el comisionista además de la comisión ordinaria, recibe otra llamada de garantía, corren de su cuenta los riesgos de la cobranza, quedando en la obligación directa de satisfacer al comitente el saldo que

6.—Sea, pues, que las parte hayan convenido que sus diferencias se decidan por jueces árbitros o arbitradores, sea que lo resulte a su favor a los mismos plazos estipulados, como si el propio comisionista hubiese sido el comprador. Si la comisión de garantía no se hubiese determinado por escrito, y sin embargo el comitente la hubiese aceptado o consentido, pero impugnare la cantidad, se entenderá la que fuese de estilo en el lugar donde residiere el comisionista, y en defecto de estilo, la que fuere determinada por arbitradores (art. 256).

5.—El precio de la venta puede ser dejado al arbitrio de un tercero. Si éste no pudiere o no quisiere hacer la determinación, quedará sin efecto el contrato, salvo pacto en contrario (art. 459).

6.—El vendedor que, después de perfeccionada la venta, enajenase, consumiese o deteriorase la cosa vendida, será obligado a dar al comprador otra equivalente en especie, calidad y cantidad, o en su defecto, el valor que a juicio de árbitros se atribuyese al objeto vendido, con relación al uso que el comprador pretendía hacer de él, y al lucro que le podía proporcionar, rebajando el precio de la venta, si el comprador no lo hubiese pagado todavía (art. 471).

7.—Los vicios o defectos que se atribuyan a las cosas vendidas, así como la diferencia en las calidades, serán siempre determinadas por peritos arbitradores, no mediando estipulación contraria (art. 476).

8.—Las dificultades que se susciten sobre la inteligencia de las cartas de crédito o de recomendación, y de las obligaciones que ella comporte, serán siempre decididas por arbitradores (art. 491).

9.—Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas del asegurado, aun hecha de buena fe, que a juicio de peritos hubiesen impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado de la cosa, hace nulo el seguro (art. 498).

10.—Cuando durante el viaje, el capitán se halle sin fondos pertenecientes al buque, o sus propietarios, no hallándose presente alguno de éstos, sus mandatarios o consignatarios, en su defecto, algún interesado en la carga, o, si, aunque se hallasen presentes, no le facilitasen los fondos necesarios, podrá contraer deudas, tomar dinero a la gruesa sobre el casco, quilla y aparejos, y hasta en falta absoluta de otro recurso, vender mercaderías de la carga, declarando en los documentos de las obligaciones que firmare, la causa de que proceden. Las mercaderías que en tales casos se vendieran serán pagadas a los cargadores por el precio que las otras de igual calidad obtuvieren en el puerto de la descarga, en la época de la llegada del buque, o por el que señalaren peritos arbitradores, en el caso que la venta hubiere comprendido todas las mercaderías de la misma calidad (art. 947).

11.—En defecto de convenciones particulares, compete al sobrecargo el derecho, en cuanto a los comitentes, a ser mantenido durante el viaje, y a una comisión que se determinará por arbitradores; y en cuanto al capitán, el derecho a ser embarcado con todo su equipaje (art. 982).

12.—La ganancia esperada se comprueba por los precios corrientes reconocidos, o en su defecto, por declaración de peritos que determinen la ganancia que razonablemente se hubiera podido obtener, si los efectos asegurados hubiesen llegado al lugar de su destino, después de un viaje ordinario (art. 1194).

13.—Todos los daños causados por choques o abordajes serán valuados por arbitradores. Así en el caso del art. 1264, como en todos los de-





imponga la ley, están obligadas a contribuir a formar el compromiso.

más que ocurrieren, relativamente a abordajes, las diferencias serán sometidas al juicio de peritos arbitradores, que determinará, con la menor dilación posible, cuál de los buques ha sido causante del daño, sujetándose a las disposiciones de los reglamentos del puerto, y a los usos y prácticas del lugar (art. 1289).

14.—En caso de contestación, la tasación de los salarios de asistencia o salvamento, así como el nombramiento de los peritos arbitradores, serán hechos por el tribunal competente (art. 1307).

15.—Si un buque y los efectos salvados y entregados al dueño o mediante fianza, se perdiese entre el lugar del salvamento y el puerto del destino, sin haber precedido estimación de su valor, los peritos arbitradores darán al buque y efectos salvados el valor que probablemente habrían tenido en el lugar donde se entregaron los efectos (art. 1309).

16.—El reconocimiento y liquidación de la avería y su importe, se verificará por peritos arbitradores que a propuesta de los interesados o sus representantes, o bien de oficio, si éstos no lo hicieren, nombrará el tribunal de comercio. Si se hiciere en país extranjero, competirá el nombramiento al cónsul de la república, y en su defecto, a la autoridad que conozca de los negocios mercantiles (art. 1336).

El doctor Segovia, dice, refiriéndose a la palabra arbitradores: «Esta palabra no pertenece a la tecnología del derecho hispano-americano y constituye un verdadero portuguesismo. «Estudiando los arts. 122, 152, 165, 167, 171, 227, 337, 373, 380, 385, 476, 491, 573, 884, 892, 947, 982, 1073, 1104, 1166, 1194, 1195, 1208, etc. 1264, 1269, bis, 1291, 1306, 1325, 1327, 1330 y 1336 del presente cód. se ve que su terminología se resiente como de costumbre, de la variedad de modelos, y se llega a la conclusión de que, salvo disposiciones especiales, los arbitradores o peritos arbitradores no son árbitros arbitradores, sino peritos, si bien su dictamen sería en principio obligatorio para el juez (véase la nota 446 y los arts. 1264 y 1269 citados); y que, finalmente, la misma inteligencia dan sus comentaristas al art. 133 brasileiro que, como el 203 del cód. anterior, quería que las cuestiones de hecho se determinaran siempre por arbitradores. Así, Orlando nos dice (p. 575) que es nula la sentencia, que, confundiendo el arbitramento con el juicio arbitral homologa aquél, en vez de tomar los laudos de los arbitradores, como informaciones para mayor esclarecimiento y decidir la causa absolviendo o condenando. Y Barroso agrega: es un medio seguro de ilustrar la conciencia del juez, y los arbitradores, que deben tener los conocimientos profesionales y la experiencia necesaria para apreciar esas cuestiones de hecho, ofrecen perfecta garantía para el descubrimiento de la verdad y la buena aplicación del derecho. Véase a Sampaio, bajo el 750 portugués. En fin, las leyes brasileras jamás confunden los arbitradores (peritos) con los árbitros o jueces árbitros. En todos los casos en que se requieren conocimientos especiales, el auxilio supletorio de comerciantes peritos, es indicado como un recurso precioso para ilustrar la conciencia del juez; porque el comercio tiene sus secretos, prácticas y astucias de muchos ignoradas y que nadie conoce mejor que el propio comerciante de cada ramo. Véase el art. 249 español. De lo dicho resulta, que la frase de nuestro art. a juicio de arbitradores, tomada del art. brasileiro, se refiere no a los jueces árbitros (como el 169 portugués) sino a peritos arbitradores, que deben designarse entre los comerciantes del ramo respectivo. Comp. con mi Proy del cód. 229». («Explicación y crítica



El compromiso ha de contener precisamente: 1.º el nombre de los otorgantes; 2.º el nombre de los árbitros o arbitrajes; 3.º la cuestión o cuestiones que se someten al fallo arbitral, con expresión de sus circunstancias (1); 4.º la estipulación de una multa que deberá pagar la parte que deja de cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso; 5.º la fecha del otorgamiento (art. 771 y 801, cód. de proc. civ.). (2).

Si se trata de juicio de árbitros el compromiso ha de formalizarse en escritura pública o si hubiese juicio pendiente en acta extendida ante el juez y el secretario. Será nulo en cualquier otra forma que se contraiga (art. 770 y 772, cód. cit.). En el juicio de arbitrajes puede hacerse también en instrumento privado (3) y sus defectos quedan subsanados, si las partes lo ponen en

---

(1) El compromiso se hace por escrito y las formas establecidas lo han sido *ad solemnitatem*. **Mattiolo**, op. cit. t. 1, p. 679; **Cuzzi** «Il codice italiano di procedura civile», comentarios a los arts. 11 y 12 principalmente, t. 1, p. 40; **Mortara**, *Manuale*, t. 2, p. 555. Cosa distinta ocurre con la cláusula compromisoria, que se prueba por todos los medios admitidos para los contratos. Conf. **Mattiolo**, op. cit., t. 1, p. 678.

(2) El compromiso produce los mismos efectos que la demanda y contestación en el juicio ordinario, **Mariani**, op. cit. núm. 142, 157 y 172.

(3) Ocorre a veces que las partes no están de acuerdo sobre las cuestiones que deben someterse a los árbitros y en tal caso, cada una propondrá las que considere pertinentes. Es el tribunal arbitral quien puede tomarlas o no en cuenta, sin que los jueces ordinarios tengan derecho para excluir o incluir una cuestión. **Miranda**, op. cit., p. 168. Pero una vez pronunciado el fallo por los árbitros o por los arbitrajes, los jueces permanentes, encargados de conocer del recurso o de la acción de nulidad, están habilitados para decidir que un determinado punto no fué comprometido en el contrato preliminar; ni pudo, en consecuencia, incluirse en el compromiso (art. 792, 789 y 808 cód. cit.). Si la autoridad judicial se negase a incluir en el compromiso una o varias cuestiones propuestas por las partes, por tener criterio diverso sobre el litigio, invadiría la competencia arbitral, que en su plenitud comprende la facultad de conocer por sí misma sobre su propia jurisdicción. *Giurisprudenza italiana*, t. 23, p. 426. En contra, véase **Mortara**, «*Manuale*», t. 2, p. 526, teniendo presente que el poder de los árbitros se encuentra más limitado en las leyes italianas que en las de la república. Al consultar el fallo de nuestra *cám. com.*, t. 10, p. 285 no debe olvidarse que en el caso resuelto una de las partes negaba la existencia de la sociedad y por consiguiente resistía el sometimiento a juicio de árbitros de cuestiones que no «» habían producido.

En cambio, cuando se sostiene la nulidad del contrato en que se convino el arbitraje debe pronunciarse al respecto la justicia ordinaria. Conf. **Mattiolo**, op. cit., p. 703; **Miranda**, op. cit., p. 163. Esa nulidad puede ser



ejecución, sin atacarlo antes de la sentencia (art. 801, cód. de proc. civ.).

Quando sólo existe cláusula compromisoria, el interesado debe deducir demanda en juicio ordinario, para que se obligue a la otra parte a constituir el tribunal arbitral y una vez dictada sentencia, haciendo lugar a sus pretensiones, pedir que se le cite a juicio verbal a fin de firmar el compromiso (1). Puede ocurrir que una de las partes no concurra al juicio verbal, y entonces la otra fijará la cuestión o cuestiones a decidirse y nombrará su árbitro o arbitrador; el juez designará el que corresponda a la parte ausente o renuente y el tercero, en su caso (art. 774, cód. cit., cám. com. t. 75, p. 127; t. 93, p. 273).

Sin embargo, no procede la fijación de cuestiones a resolver, si el tribunal arbitral es el resultado de una sentencia ejecutoriada, desde que en ella constan las cuestiones pertinentes. (Cám. civ. t. 82, p. 69; t. 133, p. 280).

¿Quién debe determinar la multa que deberá pagar la parte que deje de cumplir con los actos indispensables para la realización del compromiso? Pensamos que en la citación a juicio verbal debe hacerse saber a las partes que si alguna de ellas no com-

---

decidida por los árbitros si la divergencia no llega al desconocimiento del contrato; sup. cort. nac., t. 128, p. 402.

La cám. fed. de la cap. ha decidido que si se convino en el contrato someter a la jurisdicción arbitral toda y cualquier controversia que pudiera ocurrir entre las partes, con motivo del mismo, no puede substraerse a esa jurisdicción la que se promueve sobre la validez del contrato, Gaceta del Foro, marzo y abril de 1922, p. 45.

Esa resolución no contraría nuestra doctrina, porque se trataba, en la especie de interpretar cláusulas de un contrato cuya existencia se reconocía. Pretendía el asegurador que la cosa asegurada había perecido antes que los riesgos empezaran a correr por cuenta de aquel. (art. 522 cód. de com.).

Si se hubiera alegado la nulidad del contrato, invocando, por ejemplo, los vicios de violencia, error, etc., es claro que la cuestión hubiera correspondido que se decidiera por la justicia ordinaria, desde que sin cláusula compromisoria válida no hay tribunal arbitral.

(1) Presentada la demanda sobre constitución del juicio arbitral, el juez, debe citar a las partes a juicio verbal (art. 64 cód. de proc.) para averiguar y conseguir que firmen el compromiso y si no lo consiguen, deben correr traslado de la demanda.



rece el juez fijará de oficio la multa recordada (arg. del art. 809, cód. cit.).

7.—Orogado el compromiso se presentará a los árbitros para su aceptación bajo juramento. De la aceptación o de la negativa se extenderá a continuación diligencia que firmarán los árbitros y el secretario o escribanos (art. 776, cód. cit.). Si alguno de los árbitros no aceptase, se procederá a reemplazarlo con sujeción a lo dispuesto para el nombramiento (art. 777, cód. cit.). La aceptación de los árbitros da derecho a las partes para compelerlos a que cumplan con su encargo bajo pena de responder por daños y perjuicios (art. 778, cód. cit. y cá. civ. t. 90, p. 75. ley 29, tit. 4.º part. 3.º)

8.—La recusación debe deducirse ante los mismos árbitros y éstos la pasarán al juez de lo civil o al tribunal superior donde tramitaba la causa, cuando se firmó el compromiso, quienes obrarán en la forma ordinaria, (art. 780, 369 y s. cód. cit.). No procede contra los árbitros la recusación sin causa.

Principios análogos rigen respecto de los amigables componedores, (art. 807, cód. de proc. civ.). Sin embargo, los amigables componedores no pueden ser recusados sino por causas que hayan sobrevenido después del nombramiento, o que no fueren emocidas al hacerlo (art. 805, cód. cit.). Sólo son causas legales de recusación: 1.º tener interés directo o indirecto en el asunto; 2.º parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad; 3.º enemistad manifiesta por hechos determinados (art. 806, cód. cit.).

Como el cargo de árbitro o amigable componedor no es obligatorio la ley guarda silencio sobre las causas de excusación; pero, dado que pueden ellas nacer con posterioridad pensamos que en tal caso, se admitirán las que legitiman la recusación. En el caso supuesto se aplicaría como derecho supletorio (1) la ley 30, tit. 4.º part. 3.º que dice así: «Razones ciertas pusieron los sabios antiguos, que excusan derechamente a los auctores, de non librar los pleytos que rescibieron en su mano, si non quissieren.

(1) Sobre el carácter supletorio de las leyes españolas, anteriores a 1810 véase el Manual, t. 1, p. 213, 216.



Es son estas: si los contendores, después que ouiesesen metido el pleyto en mano dellos, comencassen aquel mismo pleyto ante el juez ordinario, por demanda e por respuesta... si después que el pleyto ouiesesen metido en mano de unos auenidores... cuando alguno de los auenidores ouiesse de yr en romería o mandadería del Rey, o de su Concejo; o si ouiesse de ver alguna cosa de su fazienda que non pudiesse escusarlo; o si le acaesciere enfermedad o otro gran embargo.» (1)

9.—Hemos llegado a la constitución del tribunal arbitral; los árbitros o los arbitradores deben empezar a cumplir las funciones para que fueron nombrados. ¿Cuál es el procedimiento que deben observar en la instrucción de la causa y para acordar el fallo? ¿Cuáles son los recursos acordados contra el mismo?

Toda la substanciación del juicio arbitral, se hará ante escribano público, debiendo ser éste nombrado por los árbitros (art. 782, cód. de proc. civ.) Si el compromiso no contuviere disposiciones especiales sobre el procedimiento, se observará el del juicio ordinario (art. 784, cód. cit.). En el juicio de amigables componedores solo la sentencia debe ser autorizada por escribano público (art. 804, cód. cit.).

En cuanto a los arbitradores, procederán sin sujeción a fórmulas legales, limitándose a recibir los antecedentes o documentos que las partes les presentasen, a pedirles las explicaciones oportunas y a dictar sentencia según su saber y entender (art. 802, cód. cit.).

10.—Las partes pueden determinar la forma de acordar y dictar el fallo (art. 783 y 799, cód. cit.).

(1) Miranda, dice a este respecto: «No se puede pretender que el árbitro que se siente violentado moralmente para cumplir la misión que se le ha deferido, esté obligado a continuarla, puesto que la conciencia no admite imposiciones, como con exactitud lo dice Amar, (p. 203), y del mismo modo que la ley concede a los magistrados ordinarios el derecho de abstenerse, en idénticas circunstancias, la misma facultad deben tener los árbitros puestos que también son jueces.

«Tampoco es posible exigir que el árbitro descuide su salud, sus propios asuntos o los intereses públicos, para dedicarse a las cuestiones de los comprometidos: y debe ser excusado cuando renuncia el cargo en virtud de requerirlo así una imprevista emergencia, sobrevenida que le crea serias dificultades para seguir ocupándose del arbitraje», (op. cit. p. 417).



Si nada se ha estipulado al respecto en el compromiso, tanto los árbitros como los amigables componedores, deben tener en cuenta:

I.—Que solo pueden fallar en tiempo hábil (art. 785, cód. cit.). Cuando en el compromiso se hubiese fijado el término dentro del cual deben hacerlo sin determinar desde cuando ha de empezar a correr ese término, se contará desde la última aceptación (art. 785, cit.). Los incidentes que deben resolver los jueces ordinarios interrumpen (1) el término para laudar (cám. civ. t. 114, p. 450); y aquellos, en circunstancias determinadas están facultadas para suspender dicho término (cám. civ. t. 7, p. 217).

Si no hubiese señalado plazo el fallo se pronunciará dentro de un mes, a contar desde la última aceptación, si el negocio comprometido fuese de los que corresponde a la jurisdicción de los jueces de paz, y dentro de tres meses si fuese de mayor cuantía (art. 786, cód. cit.) (2).

II.—Si las partes no hubiesen prefijado término, los amigables componedores deberán fallar dentro de tres meses. Las

---

(1) Por ejemplo el que se refiere a la recusación de los árbitros, *Jurisprudencia Argentina*, t. 1, p. 834; sup. cort. nac. t. 59, p. 125).

(2) Sólo deben computarse, en estos términos, los días hábiles. En la causa de *Elkin v. Galli*, se resolvió que el plazo fijado en el compromiso es de días hábiles, como son todos los señalados por las partes en los actos jurídicos, salvo cuando se establece expresamente en ellos lo contrario (cám. civ. 2.ª, dic. 22, 1919 y *Jurisprudencia Argentina*, t. 3, p. 834).

Los autores españoles tratan la cuestión: «Según la ley 27. tit. 4, part. 3.ª, podían también las partes señalar a los árbitros el plazo dentro del cual habían de pronunciar su fallo, y si nada habían establecido sobre ello, se entendía fijado el de tres años como maximum. La nueva ley lo ha dejado exclusivamente a la voluntad de los interesados y por eso exige como circunstancia esencial para la validez del compromiso el que se fije dicho plazo en la escritura».

«Téngase presente que el art. 782 fija el día en que han de principiar a correr estos términos, a los que no pueden negarse el carácter de judiciales, puesto que han sido establecidos para el juicio de que tratamos: de consiguiente, con arreglo al art. 26 no se contarán los días feriados, a no ser que aparezca expresa o tácitamente ser otra la voluntad de las partes, como, por ej., si hubiesen señalado el plazo por meses o por año o fijando el día hasta el cual hayan de poder pronunciarse. Pero en todo caso no podrán practicarse actuaciones judiciales en los días y horas inhábiles con arreglo a los arts. 8.ª, 9.ª y 10.ª. *Manresa y Reus*, op. cit.

sentencias serán autorizadas por el escribano, en la forma establecida para el juicio ordinario (art. 804, cód. cit.).

III.—Para acordar el fallo los árbitros deben proceder en análoga forma a la de los tribunales colegiales, (Manual, t. 4, p. 11). Vale decir que si los árbitros son dos y no están de acuerdo se procederá a la designación de un tercero para que todos juntos (1) discutan y resuelvan (2). (Véase en contra, cúm. civ. t. 92, p. 192).

En todo caso sería de rigor el principio sentado por nuestro derecho supletorio: «...dezimos que en aquella manera que les fué otorgado (a los auenidores) de las partes, el poder de librar pleyto, que así deven vsar dello e non en otra manera. Más si a la sazón que el pleyto metieron en su mano non lo disceren; dezimos que todos los auenidores deuen y ser quando ouieren a dar el juyzio...» (ley 32, tít. 4.º part. 3.º) (3). (Manual, t. 1, p. 213, 216: sup. cort. nac., t. 123, p. 114).

IV.—La sentencia de los árbitros debe ser conforme a derecho y a lo alegado y probado (art. 787, cód. cit.). Si hubiese disconformidad entre ellos el voto de la mayoría hará sentencia. Los disidentes pueden salvar su voto, consignándolo a continuación. Cuando no pudiese formarse esa mayoría por discordia de opiniones, se procederá al nombramiento de otro árbitro para que la

---

En cuanto a la suerte del fallo dictado fuera de término y notificado a las partes pasará en autoridad de cosa juzgada si no es atacado por medio de recurso o de acción (Manual, t. 3, p. 309). En contra: *Mattirolo*, op. cit. t. 1, p. 807, nota 4.

(1) Estas reglas pueden modificarse por las partes en el compromiso, estableciendo que el tercero vendrá después que los árbitros hayan pronunciado el laudo en desacuerdo, sup. cort. nac. t. 96, p. 97; el mismo tribunal «Gaceta del foro», set. y oct. 1922, p. 33.

(2) El árbitro tercero tiene que plegarse a la opinión de alguno de los que disienten, pues, debe limitarse a dirimir la controversia, (art. 785 cód. de proc. civ. y sup. cort. nac. t. 110, p. 185). Así un árbitro condena a pagar ciento y el otro doscientos, el tercero sólo puede laudar entre estas dos cantidades.

(3) Con la autoridad de *Dalloz*, *Fuzier Herman*, etc. sostiene *Miranda* que «el tribunal sólo tiene facultad para sentenciar cuando está integral cual fué constituido. Si falta algún árbitro el colegio queda inexistente y despojado de toda jurisdicción, porque el poder de juzgar se otorga a todos conjuntamente, y, por tanto, no puede dividirse sin que deje de existir por enteros. (op. cit., p. 347).





dirima. Este nombramiento lo harán las partes y en caso de no ponerse de acuerdo, el juez o tribunal competente (art. 788, cód. cit.).

V.—La imposición de costas se rige por el derecho común sin que influya la decisión de la sentencia que ordenó la formación del tribunal arbitral.

11.—Contra la sentencia arbitral se darán los mismos recursos que contra la sentencia de los jueces ordinarios, si no hubiesen sido renunciados en el compromiso. (art. 789, cód. cit.). Los recursos se interpondrán ante los mismos árbitros en el término de cinco días (art. 790, cód. cit.). Si los recursos ordinarios hubiesen sido renunciados se denegarán irremisiblemente quedando ejecutoriada la sentencia (art. 791, cód. cit.). Cuando se haya estipulado una multa para el que se alee del laudo, no se admitirá recurso alguno sin que el que lo interponga haya satisfecho su importe. (art. 773, inc. 2.º cód. de proc. civ.).

La renuncia de los recursos, sin embargo, no obsta a la interposición del recurso extraordinario de nulidad, fundado en haber fallado los árbitros fuera de término, o sobre puntos no comprometidos (1) o por falta esencial (2) en el procedimiento (art. 792, cód. cit.; Manual, t. 3, p. 349). Ese recurso se resolverá sin alegatos ni pruebas de ningún género con la sola vista de los autos. En caso de duda, se reputará comprometido todo punto que haya sido objeto de discusión durante el juicio (art. 793, cód. cit.).

Los recursos o la acción de nulidad en el juicio de árbitros y de amigables componedores suspenden el cumplimiento del laudo, (3) porque no está ejecutoriado (arg. del art. 535, cód. cit.), y

(1) Expresa o implícitamente, pues hay cuestiones ineludiblemente necesarias para la resolución de las que fueron materia del compromiso (Cód. com., t. 19, p. 216). El recurso de nulidad que se acuerda en estos casos (art. 789, 791 y 792 cód. cit.) es más bien un recurso de casación, y por consiguiente, extraordinario.

(2) Los árbitros no pueden jamás ultrapasarse el límite de sus poderes. (Rivault, op. cit., p. 196; sup. cort. nac., t. 107, p. 126).

(3) Como por ejemplo falta de audiencia de las partes, (Jurisprudencia Argentina, t. 2, p. 954).

(4) La c.ºm. civ. ha resuelto que el laudo arbitral es ejecutable, no obstante la acción de nulidad, porque se trata de un acto jurídico cuya nul-